La democracia cristiana en América Latina

Conflictos y competencia electoral

Scott Mainwaring
Timothy R. Scully
editores

POLÍTICA Y DERECHO



LA DEMOCRACIA CRISTIANA EN AMÉRICA LATINA

Conflictos y competencia electoral

SCOTT MAINWARING
TIMOTHY R. SCULLY
(editores)



Primera edición en inglés, 2003
Primera edición en español, 2010
Primera edición electrónica, 2012

Traducción de
ROBERTO REYES MAZZONI

Título original: *Christian Democracy in Latin America. Electoral Competition and Regime Conflicts*

Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 México, D. F.
Empresa certificada ISO 9001:2008



Comentarios:
editorial@fondodeculturaeconomica.com
Tel. (55)5227-4672
Fax (55)5227-4694

ISBN 978-607-16-1145-1

Hecho en México - *Made in Mexico*

Dedicamos este libro a ROD y DOROTHY ELFIN y a BETTE ANN SCULLY,
que han dado inspiración a nuestras vidas

ÍNDICE

Índice analítico

AGRADECIMIENTOS

La idea de este libro surgió en conversaciones con Joe Buttigieg, Tom Kselman y Robert Wegs acerca de nuestro interés común en una conferencia sobre la democracia cristiana en Europa y en Latinoamérica. La conferencia se llevó a cabo en Notre Dame, del 9 al 11 de abril de 1999. Este libro sólo tiene un lejano parecido con la conferencia, pero ella generó la idea del libro. Agradecemos al Instituto Kellog de Estudios Internacionales y al Instituto Nanovic de Estudios Europeos por haber financiado la conferencia, y a los tres colegas antes mencionados por reforzar nuestro interés en este tema. Andrés Mejía y Gabriela Mossi desempeñaron papeles clave en la organización de la conferencia. Andrés Mejía y Elizabeth Rankin nos ayudaron a organizar el libro.

También damos las gracias a varias personas que participaron en la parte latinoamericana de la conferencia sobre la democracia cristiana en abril de 1999. Además de los participantes cuyos capítulos se han incluido en este libro, a la conferencia contribuyeron también Ricardo Arias Calderón, Mariana Aylwin, Ernest Bartell, CSC, Ricardo Combellas, Osvaldo Hurtado, Andrés Mejía, Claudio Orrego y Samuel Valenzuela.

Nos agrada tener esta oportunidad de publicar otro libro [la edición en inglés] con la Stanford University Press. Damos las gracias a nuestros editores, Amanda Morán, Anna Eberhard Friedlander y Karen Hellekson por apoyar nuestro proyecto y por darnos valiosos consejos y ánimo.

ACERCA DE LOS AUTORES

BRIAN F. CRISP obtuvo su doctorado en ciencias políticas en la Universidad de Michigan en 1992 y en la actualidad es profesor asociado y director de estudios de posgrado en el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Arizona. Su obra ha sido publicada en diversos libros y en *International Studies Quarterly, Legislative Studies Quarterly, Studies in Comparative International Development, Journal of Interamerican Studies and World Affairs* y *Latin American Research Review*. Su libro *Democratic Institutional Design: The Powers and Incentives of Venezuelan Politicians and Interest Groups* fue publicado por la Stanford University Press en el 2000.

KIRK A. HAWKINS es postulante al doctorado en ciencias políticas en la Universidad Duke. Estudia las políticas de los partidos en Latinoamérica, con especial interés en la organización de los mismos. Además de su investigación sobre los partidos democratacristianos en Latinoamérica, actualmente está estudiando la desintegración de los partidos tradicionales y de los sistemas de partido en la América Latina, el papel de los partidos políticos en la liberalización económica y la cohesión de los partidos.

CARLOS HUNEEUS obtuvo su doctorado de la Universidad de Heidelberg. Es profesor de ciencias políticas en la Pontificia Universidad Católica de Santiago, Chile, y director ejecutivo de la corporación CERC, un conocido instituto de encuestas públicas en Chile. Su más reciente libro es *El régimen de Pinochet*, Santiago, 2001. También es autor de *Los chilenos y la política: cambio y continuidad en el autoritarismo*.

DANIEL H. LEVINE es profesor y catedrático de ciencias políticas en la Universidad de Michigan. Tiene muchas publicaciones sobre temas relacionados con la democracia, la religión y la política, así como sobre la política venezolana. Sus libros incluyen *Popular Voices in Latin American Catholicism*, Princeton University Press, 1992; *Religion and Politics in Latin America: The Catholic Church in Venezuela and Colombia*, Princeton University Press, 1981, y *Conflict and Political Change in Venezuela*, Princeton University Press, 1973.

SOLEDAD LOAEZA es profesora de ciencias políticas en el Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México de la ciudad de México. Fue directora de dicho centro de 1990 a 1994. Ha impartido la cátedra Tinker de estudios latinoamericanos en la Universidad de Columbia, la cátedra Hewlett de estudios latinoamericanos en el Colorado College y la cátedra Alfred Grosser d'Etudes Internationales en la EIP de París. Ha dado clases como profesora visitante en el St. Antony's College, de la Universidad de Oxford; en el Instituto Universitario Ortega y Gasset en Madrid, y en la Universidad de Salamanca. En el año 2000 fue académica visitante en la Escuela de Economía de Londres. Es autora de *Clases medias y política en México: la querella escolar 1959-1963*, El Colegio de México, 1988; *El llamado de las urnas*, Cal y Arena, 1989, y *El*

Partido Acción Nacional: la larga marcha, 1939-1994, Fondo de Cultura Económica, 1999. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Sistema Nacional de Investigadores.

BEATRIZ MAGALONI es profesora asistente de ciencias políticas en la Universidad de Stanford. Sus principales áreas de interés incluyen instituciones, partidos y conducta de los electores. Fue directora de ciencias políticas en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) de 1997 a 1999. Su tesis "La dinámica de la decadencia del partido dominante: la transición de México al multipartidismo" obtuvo el Premio Gabriel Almond de la American Political Science Association en 1997 como la mejor tesis de política comparada.

SCOTT MAINWARING ocupa la cátedra Eugene Conley de ciencias políticas en la Universidad de Notre Dame. Entre sus libros están *The Third Wave of Democratization in Latin America: Advances and Setbacks*, Cambridge University Press (coedición); *Democratic Accountability in Latin America*, Oxford University Press, 2003 (coedición); *Rethinking Party Systems in the Third Wave of Democratization: The Case of Brazil*, Stanford University Press, 1999; *Presidentialism and Democracy in Latin America*, Cambridge University Press, 1997 (coedición); *Building Democratic Institutions: Party Systems in Latin America*, Stanford University Press, 1995 (coedición); *The Catholic Church and Politics in Brazil, 1916-1985*, Stanford University Press, 1986, y *Democratic Governance in Latin America*, Stanford University Press, 2009 (en coautoría con Scully).

JOSÉ E. MOLINA es profesor en el Instituto de Estudios Políticos y Derecho Público de la Universidad de Zulia, Venezuela. Recibió su título de doctor en la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres. Tiene muchas publicaciones sobre los sistemas electorales y la conducta política en Latinoamérica, especialmente en Venezuela.

ALEJANDRO MORENO recibió su doctorado en ciencias políticas en la Universidad de Michigan y es profesor de ciencia política en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Es autor de *Political Cleavages: Issues, Parties, and the Consolidation of Democracy* (1999) y coautor, con Miguel Basáñez y Ronald F. Inglehart, de *Human Values and Beliefs: A Cross-Cultural Source-book—Political, Religious, Sexual and Economic Norms in 43 Societies*, University of Michigan Press, 1998.

GREGORY D. SCHMIDT es profesor asociado de ciencia política en la Universidad de Northern Illinois. Desde que recibió su doctorado en la Universidad de Cornell, en 1984, ha publicado extensamente sobre la política y las instituciones peruanas. Es autor de *Donors and Decentralization in Developing Countries*, Westview, 1989, y de artículos en *Comparative Politics, Studies in Comparative International Development* y *The Journal of Interamerican Studies and World Affairs*. Se hallaba preparando un libro sobre elecciones y política en Perú durante el gobierno de Fujimori.

TIMOTHY R. SCULLY es profesor de ciencia política en la Universidad de Notre Dame. Se graduó *summa cum laude* de dicha universidad en 1976 y retornó en 1979 para una maestría en teología, antes de ir a la Universidad de California en Berkeley en 1985 y 1989 para una maestría y un doctorado en ciencia política. Sus libros anteriores son *Rethinking the Center: Party Politics in Nineteenth and Twentieth Century Chile*, Stanford University Press, 1992; *Building Democratic Institutions: Party Systems in Latin America*, Stanford University Press, 1995, en coedición, y *Democratic Governance in Latin America*, Stanford University Press, 2009 (en coautoría con Mainwaring). Scully fue ordenado sacerdote en la Congregación de la Santa Cruz en 1981.

GUILLERMINA SERI tiene una maestría en ciencia política de la Flacso en Argentina y actualmente prepara su doctorado en ciencia política en la Universidad de Florida. Ha impartido clases en las universidades de Buenos Aires, Entre Ríos y Catamarca. Sus principales áreas de investigación son el efecto de la violencia política sobre la ciudadanía y las políticas alternativas de seguridad pública en Latinoamérica.

PAUL E. SIGMUND es profesor de política en la Universidad de Princeton. También ha impartido clases en Bryn Mawr, la Universidad Católica de Chile y la Universidad de Chile. Ha publicado 19 libros y 200 artículos sobre teoría política y política latinoamericana. Entre sus libros están *The Overthrow of Allende and the Politics of Chile*, Pittsburgh, 1977; *Liberation Theology at the Crossroads*, Oxford, 1990; *The United States and Democracy in Chile*, Johns Hopkins, 1993, y *Religious Freedom and Evangelization in Latin America*, Orbis, 1999.

IGNACIO WALKER se graduó en derecho en la Universidad de Chile e hizo su doctorado en política en la Universidad de Princeton. De 1978 a 1982 trabajó como abogado en derechos humanos en la Vicaría de la Solidaridad de la Iglesia católica. Fue profesor de ciencia política en la Universidad Católica de Chile e investigador en CIEPLAN de 1985 a 1990. Trabajó como consejero del presidente Patricio Aylwin de 1990 a 1993 y como diputado federal de 1994 a 2002. Es autor de *Socialismo y democracia*, Hachettte-CIEPLAN, 1990, y *El futuro de la democracia cristiana*, Ediciones B, Grupo Zeta, 1999; además ha escrito numerosos artículos.

PHILIP J. WILLIAMS es profesor de ciencia política y estudios latinoamericanos en la Universidad de Florida. Su investigación se dirige a la religión y la política, la democratización y la relación entre los civiles y los militares en Latinoamérica. Es autor o coautor de dos libros: *The Catholic Church and Politics in Nicaragua and Costa Rica*, Macmillan Press, 1989, y *Militarization and Demilitarization in El Salvador's Transition to Democracy* con Knut Walter, University of Pittsburgh Press, 1997. Es coeditor de *Christianity, Social Change, and Globalization in the Americas*, Rutgers University Press, 2001. También ha publicado numerosos artículos en revistas académicas, entre ellas *Comparative Politics, Conflict, Journal of Church and State,*

Journal of Interamerican Studies and World Affairs, Journal of Latin American Studies y *Latin American Research Review;* además, ha contribuido con capítulos en varios libros.

PRIMERA PARTE
TEMAS GENERALES

I. OBJETIVOS DE PARTIDO EN REGÍMENES AUTORITARIOS CON ELECCIONES O EN DEMOCRACIAS FRÁGILES: UN DOBLE JUEGO

SCOTT MAINWARING*

ESPERAMOS que este libro haga dos aportaciones importantes a los escritos académicos sobre la democracia cristiana, la política latinoamericana y los partidos políticos. Primero, hace colaboraciones empíricas a un tema poco comprendido pero importante de la política y la historia latinoamericanas. La democracia cristiana ha sido una importante fuerza política en varios países de la región. Es imposible entender la vida política de las décadas recientes en Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México y Venezuela sin analizar los partidos democra-tacristianos de esos países. Estos seis partidos democra-tacristianos desempeñaron papeles prominentes en el combate a regímenes autoritarios y en la construcción de la democracia, contribuyendo al éxito de la democracia en algunos casos, o a sus defectos en otros, e incluso contribuyeron en dos de esos casos (Chile en 1973 y Venezuela en 1948) a la caída de la democracia. La democracia cristiana inspiró grandes pasiones, esperanzas y entusiasmo.

En esos seis países y en República Dominicana y Ecuador los partidos democra-tacristianos eligieron presidentes. En Chile (desde mediados de los setenta hasta 1989), El Salvador (desde los sesenta hasta 1984), Guatemala (desde los sesenta hasta 1986), México (de los ochenta a los noventa), Perú (en los noventa) y Venezuela (de 1948 a 1958) los líderes democra-tacristianos estuvieron al frente de la lucha contra regímenes autoritarios. En todos esos países, excepto Perú y Venezuela, los primeros presidentes que sirvieron bajo regímenes democráticos o semidemocráticos fueron democratacristianos. Los partidos democra-tacristianos en El Salvador y Guatemala pronto se debilitaron, pero al encabezar la lucha contra las dictaduras dejaron su huella. Aunque la democracia cristiana en la actualidad está declinando o ha desaparecido en muchos países, dejó una importante impronta sobre la política latinoamericana.

Debido a que la democracia cristiana fue o es un actor importante en muchos países latinoamericanos, aclara muchos puntos clave de los procesos políticos. Por ejemplo, el partido democratacristiano de Venezuela, el Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI), desapareció a finales de los años noventa a medida que se evaporaba su apoyo electoral, que en alguna ocasión fue muy considerable. No obstante, junto con el otro partido principal, Acción Democrática (AD), el COPEI fue uno de los dos actores políticos siempre importantes desde el tiempo de su creación en 1945 hasta 1998. Dirigió la lucha contra el gobierno izquierdista de AD de 1945 a 1948, que culminó en un golpe de Estado en el último año. De 1948 a 1958 fue uno de los dos principales partidos que combatieron la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. En 1958 ayudó a conducir la transición hacia una democracia. Desde ese año hasta 1998 participó en forma

importante en la construcción y mantenimiento de la democracia, aunque también fue responsable de algunos de los problemas que la afectaron y erosionaron a finales de los ochenta y en los noventa. Por lo tanto, como lo demuestran Brian F. Crisp, Daniel H. Levine y José E. Molina en su capítulo, sin el COPEI no es posible comprender una larga historia de cambios de régimen, consolidación y decadencia; en cambio, esa historia es provechosamente ilustrada por ese partido.

A pesar de la importancia que la democracia cristiana tuvo en Latinoamérica, desde el punto de vista de las ciencias sociales no ha sido bien estudiada. En los años sesenta se presentaron muchos escritos sobre la democracia cristiana en Latinoamérica. Sin embargo, gran parte de esas obras eran verdaderas apologías. Fueron escritas por simpatizantes de la democracia cristiana que no habían tomado suficiente distancia crítica con respecto a su tema. Aunque se han publicado varias valiosas monografías específicas de un país sobre la democracia cristiana (Chand, 2001; Fleet, 1985; Herman, 1980; Loaeza, 1999; Lujambio, s. f.; Mabry, 1973; Palma, 2003; Webre, 1979),[1] virtualmente el único estudio comparativo sobre la democracia cristiana desde los años sesenta ha sido el de Lynch (1993). Como consecuencia, existen grandes vacíos en el análisis comparativo de la democracia cristiana en Latinoamérica. Carecemos de información sobre temas tan fundamentales como lo que representan estos partidos programáticamente, dónde se ubican en el espectro político izquierda-derecha, cómo ha evolucionado su relación con la Iglesia católica en el transcurso del tiempo, la razón por la que varios de esos partidos se han desplomado, y por qué otros dos, el Partido Acción Nacional (PAN) mexicano y el costarricense Partido de Unidad Social Cristiana (PUSC), recientemente han experimentado triunfos electorales sin precedentes. Con este libro aspiramos a colmar algunas de esas lagunas.

El más grave malentendido, consecuencia de esa falta de sólidos análisis comparativos de los partidos democratacristianos, es una idea errónea de que son similares en casi todos sus aspectos. En este libro se insiste en que esa idea es errónea, y en cambio se hace énfasis en la diversidad de los partidos democratacristianos en la región. Para anticipar sólo una dimensión de esta diversidad, a finales de los años sesenta y en los setenta los partidos democratacristianos en Argentina, Perú y Uruguay favorecían el socialismo, en tanto que los partidos democratacristianos de Costa Rica y México favorecían al sector privado en los años ochenta y noventa. Los investigadores pueden suponer, con base en su conocimiento de la democracia cristiana en Italia o Alemania, que los partidos democratacristianos en Latinoamérica eran organizaciones de centro-izquierda que captaban el voto religioso de sus países. Esa percepción es razonablemente precisa para varios partidos en ciertos momentos, pero resultaría completamente desorientadora para otros en otras fechas.

El segundo propósito de este libro es ofrecer nuevos análisis teóricos sobre los objetivos y la estrategia del partido en el contexto de autoritarismo con elecciones y de democracia frágil. Este capítulo ofrece una estructura teórica que resulta esencial para entender los partidos democratacristianos en Latinoamérica, y más generalmente para entender la conducta del partido bajo regímenes autoritarios con elecciones competitivas

o bajo democracias frágiles. En estos contextos de incertidumbre sobre el régimen, la conducta de los partidos está condicionada por la posibilidad de un cambio de gobierno. La posibilidad de este cambio puede ser en ambas direcciones: primero, hay un régimen democrático o semidemocrático en el que algunos actores piensan que los militares, u otro participante, pueden conspirar con éxito contra la democracia, produciendo su desplome; o, segundo, hay un régimen autoritario que podría promover elecciones razonablemente imparciales en un futuro próximo, llevando a la posibilidad de una transición en el régimen.[2] Éstas son situaciones de incertidumbre sobre el régimen, que no se refieren a las incertidumbres menores que afectan a todos los regímenes políticos, sino más bien al hecho de que quienes actúan en política creen que existe una verdadera posibilidad de un cambio de régimen, y no sólo de un cambio dentro del régimen.

Los contextos de autoritarismo con elecciones competitivas y democracias frágiles modifican drásticamente la conducta y la estrategia de un partido. Como esos contextos son comunes, los politólogos necesitan construir instrumentos teóricos para entender la forma en que los objetivos y estrategias del partido son modificados por estas condiciones. En estos contextos, los partidos participan en dos juegos: un juego electoral, cuyo objetivo es ganar votos o escaños, y un juego de régimen, en el cual su objetivo es influir en el resultado de conflictos sobre los regímenes políticos. Por consiguiente, la intención de este capítulo no es sólo servir de introducción a este libro, sino también la de ser una discusión general sobre los objetivos y la estrategia de partido, que supera los confines de la democracia cristiana en Latinoamérica.

Aunque los argumentos de este capítulo introductorio van más allá de los partidos democratacristianos en Latinoamérica, este capítulo teórico también enmarca el análisis empírico siguiente. Todos los partidos democratacristianos latinoamericanos se han enfrentado al doble juego descrito (la única excepción es el PUSC costarricense). En algún momento decisivo de su historia, y durante periodos prolongados en la historia de algunos de los partidos, los juegos de regímenes han figurado de manera prominente en su conducta. Han intentado conservar un régimen democrático que está en riesgo, o alentar un cambio de régimen del autoritarismo a una democracia, o viceversa. Denomino doble juego a esta situación de simultáneamente competir contra otros partidos y participar en un juego de régimen. Un doble juego ha conformado decisivamente a todo partido democratacristiano analizado en este libro.

Los capítulos de la obra cubren una vasta gama de temas; el más significativo se refiere a la comprensión de la conducta de los partidos democratacristianos en relación con este doble juego. Los objetivos más importantes de todo partido democratacristiano en Latinoamérica tienen que ver con alguna combinación de triunfo electoral, objetivos programáticos y cambio o conservación del régimen.[3] El equilibrio entre estos tres objetivos se desplaza con el transcurso del tiempo y en los diferentes casos. Para unos pocos partidos democratacristianos en Latinoamérica, en algunos momentos históricos, el juego de régimen no tuvo importancia, pues la democracia parecía asegurada en el futuro previsible. Los partidos se concentraron principalmente en el juego electoral: obtener cargos políticos. Por ejemplo, desde su fundación en 1983, el PUSC costarricense se ha

concentrado casi exclusivamente en el juego electoral, y lo mismo pudo decirse de la Falange Nacional chilena y de su sucesor, el Partido Demócrata Cristiano (PDC), desde 1938 hasta cerca de 1970. Para algunos de los otros partidos democratacristianos, como el Partido Acción Nacional (PAN) de México, el juego de régimen fue dominante durante décadas, ya que el partido no tenía ninguna posibilidad de ganar el juego electoral a causa del fraude y de la hegemonía de un régimen bien institucionalizado de partido de Estado.

Un argumento clave del libro es que resulta imposible comprender estos partidos sin tener en cuenta tanto los objetivos (ganar las elecciones y ganar los conflictos de régimen) como ambos juegos (el juego electoral y el juego de régimen). Esta observación se aplica a los partidos de muchos regímenes políticos en todo el mundo. En vista de ello, ya es tiempo de que se haga una nueva evaluación teórica de las metas del partido en situaciones de incertidumbre de régimen. El enfoque teórico y empírico sobre las dobles metas de los partidos y los dobles juegos en situación de incertidumbre de régimen explican el subtítulo de este libro.

OBJETIVOS DE PARTIDO EN MODELOS DEL ESPACIO DE DOWNS

En vista de que los partidos políticos son actores importantes en la política democrática, la comprensión de los objetivos y la estrategia de un partido es una empresa teórica con importantes consecuencias. En la ciencia política contemporánea hay algunos enfoques teóricos diferentes para entender los objetivos y la estrategia de un partido. Uno de los más importantes es el análisis del espacio de competencia electoral de los partidos, en especial los análisis inspirados por el seminal libro de Anthony Downs (1957). Los modelos del espacio electoral (esto es, los inspirados por la aplicación del enfoque de proximidad a los modelos del espacio de competencia electoral) permiten comprender la conducta del partido en relación con el mercado electoral. Más específicamente, estos modelos consideran que la conducta del partido es un esfuerzo por obtener el máximo de votos o de escaños haciendo un llamado a los votantes sobre la base de posiciones políticas o ideológicas (Downs, 1957; Enelow y Hinich, 1984, 1990). Desde este punto de vista, que característicamente trata a los partidos como actores unitarios y presta poca atención a los políticos individuales, el único objetivo del partido es obtener votos o escaños.

El libro de Downs combinó una teoría de la conducta del votante y una teoría de la competencia de partidos. En la versión abreviada de su teoría que se presenta en la primera parte de este libro, el único objetivo de los partidos es obtener votos. Incluso en la versión más compleja de su teoría presentada en la segunda y tercera partes, que permiten hacer supuestos más reales sobre los votantes y los partidos, la mayoría de los partidos sólo están interesados en obtener el máximo posible de votos, aunque Downs (1957, pp. 127-132) reconoció que algunos partidos están más interesados en obtener influencia que en los votos. Los partidos que se esfuerzan por influir en la política a costa de la maximización de votos son participantes marginales que no alteran profundamente

la lógica de la competencia de partidos.

La parte de la obra de Downs que más nos interesa aquí, lo que supone sobre los objetivos (maximización de los votos) y la estrategia (adoptar una posición ideológica que atraiga el máximo de votos) de los partidos, no se basa necesariamente en el análisis del espacio de la competencia electoral, pero su presentación más fluida es la que se hace dentro de ese análisis. Muchas obras posteriores han modificado los supuestos y las conclusiones originales de Downs sobre los objetivos y las estrategias de los partidos.[4] Algunos de los escritos que se inspiran en Downs continuaron suponiendo que los partidos (o los candidatos) estaban orientados fundamental o exclusivamente a la obtención de votos, si bien ampliaron su análisis de varias maneras (Enelow y Hinich, 1984; Palfrey, 1984; Schlesinger, 1984). Por ejemplo, Iversen (1994) presentó los partidos como organizaciones que buscaban votos pero que también ejercían un liderazgo para conformar las opiniones de los electores, en vez de simplemente responder a las opiniones de éstos. Otros investigadores pusieron en duda muchos aspectos de la obra de Downs, aunque conservando el supuesto de que los partidos intentan conseguir el máximo de votos (Merrill y Grofman, 1999; Rabinowitz *et al.*, 1991).

Los autores que han puesto en duda el supuesto de que los partidos procuran obtener el máximo de votos han seguido tres direcciones principales. Algunos (Chappell y Keech, 1986; Wittman, 1973, 1983, 1990) supusieron que los partidos, en vez de simplemente maximizar los votos, tienen preferencias políticas. Wittman invirtió el supuesto de Downs de que las políticas eran un medio para obtener votos y postuló que, por el contrario, los votos eran un medio de llevar a cabo preferencias políticas sinceras. Esta modificación pone en duda directamente los supuestos de Downs sobre objetivos y estrategias de los partidos. Kitschelt (1989) argumentó que algunos activistas y líderes de los partidos se preocupan mucho por la política y/o la ideología, en tanto que otros se parecen a los que buscan maxi-mizar los votos. En su argumento, la existencia de individuos orientados ideológica y políticamente influye en la medida en que los partidos se dedican a procurar el máximo de votos (véase también Aldrich, 1983). En un trabajo posterior, Kitschelt (1994, pp. 254-279) argumentó que las tradiciones ideológicas limitan la medida en que los partidos buscan el máximo de votos o escaños. Przeworski y Sprague (1986) sostuvieron que los partidos desarrollan grupos base de partidarios acérrimos y que las relaciones entre los partidos y sus seguidores frecuentemente hacen que los partidos socialde-mócratas adopten estrategias electorales que protegen esas relaciones, en vez de maximizar los votos. Strom (1990) y Strom y Müller (1999) han afirmado que los partidos tienen tres objetivos: la búsqueda de votos, la búsqueda de cargos y la influencia política.

Una segunda serie de dudas ha afirmado que los objetivos de un partido dependen del contexto institucional y que por lo general los partidos procuran obtener la máxima gama de escaños en vez del máximo número de votos. Greenberg y Shepsle (1987) y Shepsle y Cohen (1990, pp. 31-33) argumentan que procurar el máximo de votos podría no ser un instrumento racional para conseguir sus fines. En algunos contextos, lo decisivo es obtener el máximo rango (es decir, terminar en el *n* mayor), y quizás la maximización de

votos no sea importante. Aunque esto pone en duda la opinión de que los partidos son buscadores del máximo de votos, esta línea de análisis acepta el punto de vista de Downs de que los partidos son buscadores del máximo de cargos y poder posibles.

La tercera línea, que se aleja de los supuestos de Downs acerca de los objetivos de los partidos y de su conducta, se ha concentrado en el juego interno de los partidos: la lucha de facciones en competencia por el poder dentro del partido. Para mejorar sus propias perspectivas dentro del partido o para favorecer sus posiciones políticas, algunos líderes y facciones defienden estrategias que no buscan maximizar los votos (Kitschelt, 1989, 1994, pp. 207-253; Mainwaring, 1999, pp. 167-173; Panebianco, 1988).

A pesar de que estas tres líneas de crítica a los supuestos iniciales de Downs sobre los objetivos de un partido tienen cierta validez, muchos analistas continúan suponiendo que los partidos (o candidatos) están interesados exclusivamente en ganar votos o escaños. Nadie sostendría que ésta es una descripción completa de los objetivos de los partidos, pero por razones de brevedad y de elaboración de teorías puede considerársele como una simplificación razonable con la cual se puede comparar la conducta real de los partidos. Éstos están interesados en alguna combinación de búsqueda de cargos y planes de acción. Sus preferencias políticas limitan las formas en que procuran obtener escaños, pero necesitan ganarlos para establecer una política. Los partidos tienen divisiones internas que con frecuencia les impiden adoptar un conjunto de estrategias *maximizadoras* de escaños, pero estas divisiones no deben ocultar el hecho de que las facciones tienen incentivos para preocuparse mucho por el desempeño electoral del partido.

Empiezo con una versión bastante flexible de los supuestos de Downs, esto es, que la mayoría de los partidos están profundamente interesados en obtener escaños. Este punto de partida hace más flexibles los supuestos de Downs reconociendo las tres líneas de objeciones que se mencionaron antes: *1*) La mayoría de los partidos están interesados tanto en las políticas como en los escaños; *2)* los partidos se concentran en la obtención del máximo de escaños, más que del máximo de votos, y *3)* las luchas internas en el partido pueden conducir a estrategias electorales que estén lejos de ser óptimas. De la estructura de Downs conserva el supuesto de que ganar escaños es el objetivo supremo de la mayoría de los partidos en *muchos regímenes políticos*.

Pero yo trato el supuesto de Downs de que ganar escaños es el objetivo más importante de los partidos como sujeto a una restricción de aplicabilidad; es decir, lo considero un supuesto que se aplica en algunos regímenes políticos, pero no en todos. En particular, acepto la utilidad del punto de vista de Downs de que el objetivo supremo de la mayoría de los partidos en las democracias bien establecidas (“consolidadas”) es ganar escaños. Los contextos de regímenes autoritarios con elecciones competitivas o democracias frágiles, sin embargo, a menudo cambian de manera impresionante los objetivos y las estrategias de los partidos para alcanzar esos objetivos. El desafío que presento a los supuestos de Downs sobre los objetivos de los partidos difiere de los tres conjuntos de divergencias ya presentados. Tal desafío es importante para entender los objetivos y la conducta de los partidos en una gran variedad de contextos, pero hasta

ahora no se le ha analizado de manera sistemática.

JUEGOS DE RÉGIMEN EN CONTEXTOS DE AUTORITARISMO Y DEMOCRACIA FRÁGIL

En contextos de incertidumbre de régimen, en vez de jugar un solo juego, como ocurre el caso en las democracias, donde los actores no necesitan tener en cuenta la posibilidad de un golpe de Estado, los partidos juegan dos juegos.[5] En un juego compiten contra otros partidos por los votos; a éste lo llamo *juego electoral*. Éste es el juego conocido que se describe en los modelos de Downs del espacio electoral de la competencia de partidos. Es *el* juego al que los partidos *deben* jugar cuando la democracia es el único juego que existe; pueden jugar otros juegos (por ejemplo, procurar objetivos programáticos), pero su propia existencia depende de que jueguen al juego electoral. Cuando el juego electoral es el dominante, los partidos y los electores son los únicos participantes.

En el otro juego, la conducta de los partidos se orienta no a la obtención de votos, sino a la conservación o al cambio del régimen político que ya existe. A éste lo llamo *juego de régimen*. En juegos de régimen los partidos son actores fundamentalmente racionales (esto es, instrumentales), pero actúan para asegurarse beneficios diferentes de los votos, escaños o influencia política.

En este libro son cuatro los juegos de régimen que importan: dos se juegan según regímenes autoritarios y dos según la democracia. El primer juego, la transición democrática, es jugado por partidos opositores bajo un gobierno autoritario. Muchos regímenes autoritarios permiten que existan algunos partidos de oposición. Casi siempre, en esas condiciones, un juego de régimen es básico para entender los objetivos y las estrategias de los partidos de oposición.

En el juego de transición democrática éstos orientan gran parte de sus acciones a promover un cambio de régimen. Si se "portan bien", es decir, si no parecen amenazar a los militares atrincherados en el poder o a los intereses de grupos de élite, podrían aumentar la posibilidad de una transición hacia un régimen político competitivo (democracia o semidemocracia). Otros partidos de oposición podrían centrar sus esperanzas de un cambio de régimen promoviendo una amplia movilización contra el régimen autoritario. En el juego de la transición democrática hay un jugador con poder de veto fuera del sistema de partidos: con frecuencia los militares, pero a veces un régimen civil atrincherado en el poder y que controla a las fuerzas armadas.

El juego de deslegitimación es una posibilidad para los partidos de oposición en regímenes autoritarios que les permiten a esos partidos existir, pero en los que la oposición no tiene posibilidades de ganar las elecciones. En este juego los partidos de oposición reconocen que no pueden influir en la posibilidad de una transición a la democracia, que a corto plazo es nula, pero pueden ser capaces de afectar la legitimidad del régimen. En vez de intentar obtener el máximo de escaños o votos, como lo hacen en el juego electoral, podrían considerar retirarse de elecciones "arregladas" para quitarle

legitimidad al régimen autoritario. En tanto que el juego de la transición democrática implica una posibilidad de transferencia del poder, el juego de la deslegitimación se refiere a los esfuerzos de los partidos de oposición por deslegitimar a regímenes autoritarios atrincherados en el poder y que no dan señales de abandonarlo en el corto plazo. En el término medio, el juego de deslegitimación puede abrir la puerta al juego de transición de régimen.

Los otros dos juegos se juegan bajo la democracia o la semidemocracia. En un juego de desplome de la democracia, por lo menos un partido conspira contra ella. En vez de moderar su mensaje en un esfuerzo por obtener más votos, lo polariza esforzándose por desestabilizar al régimen. El partido puede tratar de ampliar su atractivo entre las bases populares; no abandona el juego electoral, pero el juego del desplome del régimen puede llegar a predominar sobre el juego electoral. La estrategia de los otros partidos se puede ver afectada por el hecho de que un partido esté conspirando contra la democracia.

Un partido que juega al juego del desplome de la democracia corre el riesgo de desacreditarse, ya sea que logre o no promover un cambio de régimen. Si el régimen que ya existe se mantiene, los adversarios del partido pueden tildarlo de antidemocrático, dañando potencialmente su atractivo electoral. Si el régimen cae, incluso los partidos que apoyaron el cambio de régimen pueden no tener oportunidad de competir nuevamente en elecciones durante un largo periodo; peor aún, se les podría prohibir. Por estas razones, es común que los partidos no extremistas sólo ingresen al juego del colapso democrático si confían en que los beneficios del cambio de régimen serán considerables porque estén alarmados por las actuales políticas del gobierno.

El juego de la conservación de la democracia también puede jugarse bajo la democracia o la semidemocracia. En este juego un partido está consciente de la posibilidad de un desplome de la democracia. En vez de desarrollar una estrategia para aumentar al máximo el número de votos o de escaños tomando posiciones programáticas o ideológicas, el partido también toma en consideración la importancia de mantener la democracia. Generalmente, el juego de la defensa de la democracia implica moderación política incluso si esta estrategia perjudica a corto o a medio plazo la situación electoral del partido. Es lo contrario del juego del desplome democrático, que por lo común implica adoptar posiciones políticas polarizadas, incluso si el partido pudiera obtener mejores resultados electorales absteniéndose de seguir este camino.

DOBLES JUEGOS

Por lo común, cuando los partidos juegan a un juego de régimen, también están participando en el juego electoral, y los partidos (y los políticos individuales dentro de ellos) siguen una estrategia para obtener beneficios en ambos juegos. Los partidos pueden simultáneamente jugar al juego electoral y a un juego de régimen, y esto es a lo que llamo *doble juego*.

En la democracia, los partidos que participan en un juego de régimen casi siempre

están en este doble juego. No pueden darse el lujo de concentrarse exclusivamente en un juego de régimen, excluyendo totalmente su desempeño electoral. Por lo tanto, en situaciones democráticas los dobles juegos están presentes siempre y cuando por lo menos un partido juegue al juego de la conservación o al del desplome de la democracia. Antes del fin de la Guerra Fría estos juegos eran comunes en las frágiles democracias de América Latina. Por ejemplo, los partidos derechistas con frecuencia jugaron al juego del desplome cuando en el poder estaban partidos reformistas o izquierdistas.

En situaciones de autoritarismo, un doble juego es prominente cuando adquiere importancia la política electoral, lo que ocurre en dos condiciones. Primero, el régimen autoritario puede empezar a erosionarse, haciendo comprender que es probable una transición de régimen. Una vez que existe una percepción razonable de unas elecciones que conducirán a una transición de régimen, los partidos pueden empezar a tomar posiciones para las elecciones incluso si el régimen autoritario no ha promovido elecciones en el pasado. Segundo, algunos regímenes autoritarios promueven elecciones que, aun cuando no son libres ni imparciales, tienen consecuencias significativas. Éstos son regímenes autoritarios a los que Sartori (1976, pp. 230-238) llamó sistemas de partido hegemónico. En un sistema de partido hegemónico el partido oficial siempre gana las elecciones importantes, pero el partido o partidos de oposición pueden ganar algunas contiendas locales y elegir miembros para la Asamblea Nacional o para las subnacionales. A los partidos de oposición no se les permite competir en condiciones iguales, y si ganan "demasiado" a pesar de una contienda desigual, podría recurrirse al fraude, la represión y la intimidación como represalias. Ejemplos de partido hegemónico incluyen a Brasil de 1965 a 1982 (Kinzo, 1988), México de 1930 a 1988 (Loaeza, en este libro), el Paraguay de Stroessner (1954-1989), Corea del Sur antes de la transición democrática de 1987 y Taiwán de 1986 a 1996.

En los regímenes autoritarios, cuando el juego electoral se torna significativo para los partidos de oposición, estos últimos juegan dos juegos simultáneamente: el juego electoral para aumentar su participación en los escaños de la Asamblea, y el juego de la transición democrática para aumentar la probabilidad de que se lleven a cabo elecciones libres e imparciales y de que se respeten sus resultados. En un doble juego, los juegos electorales y de régimen no son independientes sino más bien simultáneos y dependiente el uno del otro. En el juego de transición democrática el esfuerzo por derrotar al régimen autoritario afecta fuertemente la estrategia y la conducta del partido en la arena electoral. En el juego de deslegitimación un partido de oposición puede decidir retirarse de las elecciones; su objetivo primordial no es obtener el máximo de votos o escaños, sino ganar más espacio dentro del contexto de un régimen autoritario. En el juego del desplome de la democracia el esfuerzo por desestabilizarla afecta la estrategia del partido en el juego electoral. En el juego de la preservación de la democracia el deseo de un partido por conservar una democracia que está en peligro puede afectar profundamente la forma en que busque obtener más votos.

Los dobles juegos implican la existencia de una gama de jugadores más numerosos que la encontrada cuando el juego electoral es el único juego. En las democracias bien

establecidas los participantes en el juego electoral son los partidos (o candidatos) y los votantes. En los dobles juegos los partidos siguen una estrategia formada no sólo en relación con otros partidos que compiten o con los electores, sino además con otros actores autoritarios: por ejemplo, los militares o el régimen de partido del Estado.

De un modo fundamental, para los partidos de oposición bajo un régimen autoritario el juego de régimen precede al juego electoral. Los partidos electorales no pueden competir con la intención de gobernar si no hay juego electoral limpio. Este último podría no ocurrir, o sus resultados podrían no ser respetados si no lo permiten poderosos actores antidemocráticos (los militares en algunos casos, un régimen de partido de Estado en otros). Los partidos de oposición no necesariamente le dan prioridad al juego de régimen por encima del juego electoral, pero la competencia electoral limpia sólo puede ocurrir si cambia el régimen político existente.

Entonces, el argumento no es que los modelos espaciales de competencia de partidos siempre están equivocados al afirmar que los partidos se ubican a lo largo de un espacio izquierda-derecha o en algún espacio político para obtener el máximo de votos y escaños. Donde la democracia puede darse por sentada, estos modelos proporcionan una forma simplificada de entender los objetivos y la conducta de los partidos. Pero en los regímenes autoritarios o en las democracias en que la supervivencia del régimen está en juego, los líderes de los partidos juegan dos juegos importantes en vez de uno. No sólo compiten contra otros partidos para obtener votos y escaños, sino que también compiten contra fuerzas autoritarias para construir, conservar o restaurar la democracia. No es posible entender la lógica, estrategias y ubicación izquierda-derecha de los partidos sin hacer referencia a este segundo juego, el cual precede al juego de la política electoral; realizar elecciones razonablemente equitativas es una condición necesaria para el juego en que se trata de ganar poder político obteniendo el máximo de votos o escaños.

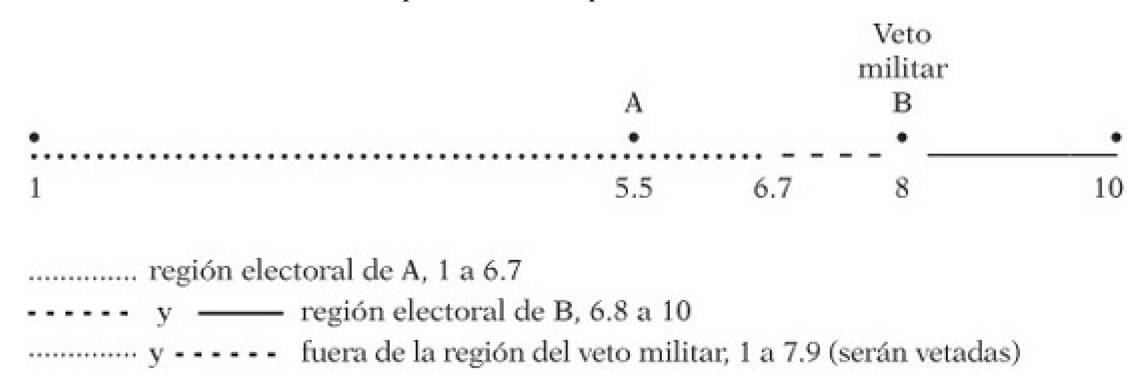
DOBLES JUEGOS BAJO EL AUTORITARISMO: TRES EJEMPLOS

Para ejemplificar la forma en que los juegos de régimen influyen en la estrategia electoral, véase la gráfica I.1, que presenta un juego de transición democrática en cierta medida semejante a lo que los partidos democratacristianos de El Salvador y Guatemala enfrentaron desde la década de 1960 y hasta los años ochenta. La gráfica muestra las diferentes posiciones en una escala ideológica de 1 (izquierda) a 10 (derecha).[6] En el primer escenario hay tres actores: un gobierno militar, el partido A, de oposición, y el B, que apoya al gobierno. Al gobierno militar le interesa obtener un resultado significativo que proteja el *statu quo*. Está dispuesto a aceptar las elecciones sólo con la garantía de que el resultado no estará a la izquierda del punto 8 en la escala de 10. Los militares vetarán por medio de un golpe de Estado o del fraude electoral cualquier gobierno situado a la izquierda de 8. Una vasta gama de opciones políticas se cierra de antemano porque los militares no las tolerarán.

Los dos partidos están interesados en ganar las elecciones y en llevar a cabo sus

políticas preferidas. El juego empieza con una campaña electoral. Por medio de su selección de candidatos, sus plataformas y sus negociaciones con los otros actores, los partidos toman posiciones a lo largo de la escala izquierda-derecha. No es necesario que tomen sus posiciones "sinceramente":

GRÁFICA I.1. *Competencia en el espacio electoral con veto militar, I*



esto es, se les permite tomar posiciones que no son su ubicación preferida en la escala izquierda-derecha, si al tomar su posición preferida disminuyen sus posibilidades de ganar las elecciones (llegar al poder). Más bien, pueden tomar sus posiciones estratégicamente para aumentar las posibilidades de ganar la elección y llegar al poder. La estipulación de que los partidos están interesados en resultados significativos implica que su deseo de ocupar posiciones estratégicas para aumentar sus oportunidades de ganar está limitado por sus preferencias programáticas. En cierto punto de este juego, los partidos preferirán mantener sus posiciones que realizar cambios radicales para ganar.

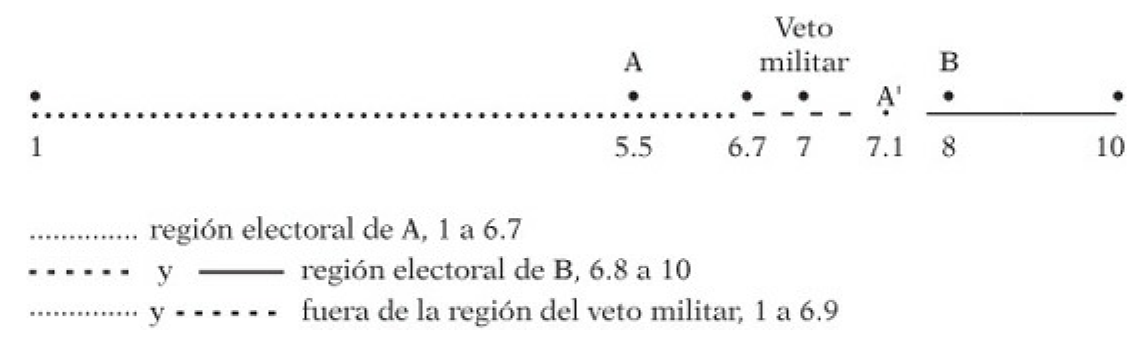
Los militares tienen cuatro puntos de decisión: *1*) decidir si permiten que la campaña continúe (sólo lo harán en caso de que consideren que las probabilidades de un resultado negativo son razonablemente bajas); *2)* decidir si permitirán elecciones *limpias* una vez que han decidido realizar elecciones; *3)* decidir si permitirán que el gobierno elegido tome el poder una vez que se terminen de contar los votos, y *4)* decidir si permiten que el gobierno elegido aplique su política, en vez de subvertirlo por medio de una variedad de presiones y práctica o dando un golpe de Estado poselectoral. Para simplificar el juego, supóngase que los costos de una intervención militar son bajos para las fuerzas armadas. Este supuesto no siempre es exacto, pero unos supuestos más complejos acerca de los costos de la intervención militar para las fuerzas armadas no cambiarían fundamentalmente los dilemas estratégicos que enfrenta el partido al jugar un doble juego… y ése es el tema principal de este capítulo.

La posición preferida por el partido A es 5.5, justo en medio de la escala de 10 puntos. La posición preferida por el partido B es 8, exactamente la de los militares. En estas circunstancias, el partido A no puede ganar el juego electoral. En 8, posiblemente podría empatar con el partido B, pero es muy probable que enfrente problemas de credibilidad electoral si intenta un cambio tan radical.[7] En condiciones de información imperfecta, A podría cambiar un poco hacia la derecha con la ilusión de que el punto del veto militar está un poco a la izquierda de 8 y con la vana esperanza de que podrá jugar al juego electoral si hace ese cambio. Un incentivo adicional para cambiar hacia la derecha es reducir la exposición a la represión; cuanto más a la izquierda estén los líderes del partido del punto preferido por los militares, tanto más probable es que se les reprima. Alternativamente, el partido A puede mantenerse en su posición 5.5 por cuestión

de principios. Independientemente de lo que haga A, en realidad tiene pocas opciones. En estas circunstancias, A tiene incentivos más fuertes que B para hacer ajustes estratégicos sustanciales de su resultado preferido. El partido A podría estar convencido de que puede ganar si se desplaza hacia la derecha. Incluso si B tiene también información imperfecta sobre el punto de veto de los militares, la necesidad para B de adoptar una posición distinta de su resultado preferido disminuye considerablemente por la seguridad de que los militares vetarán una gran gama de políticas a las que B se opone. Si bien B tendría un incentivo para desplazarse hacia el centro de no ser por el veto militar, éste le permite mantener una posición de extrema derecha.

Ahora supóngase el juego ligeramente distinto que se muestra en la gráfica I.2. En este caso, la posición preferida por B es de nuevo 8, y ahora el punto de veto de los militares es 7. Los militares están dispuestos a tolerar el juego electoral en condiciones un poco más liberales. Mientras que antes darían un golpe de Estado contra cualquier propuesta a la izquierda de 8, ahora están dispuestos a aceptar las reglas democráticas en la arena electoral para cualquier propuesta a la derecha de 7. En este caso la oposición enfrenta un dilema distinto. Si se desplaza al punto 7.1 en la escala, puede evitar un golpe de Estado, y posiblemente obtener votos de un gran número de ciudadanos, de 1 a 7.5, suponiendo que los ciudadanos ejerzan un voto sincero (esto es, por el partido que está más cerca de ellos en la escala izquierda-derecha) y que la abstención no es una opción.

GRÁFICA I.2. *Competencia en el espacio electoral con veto militar, II*

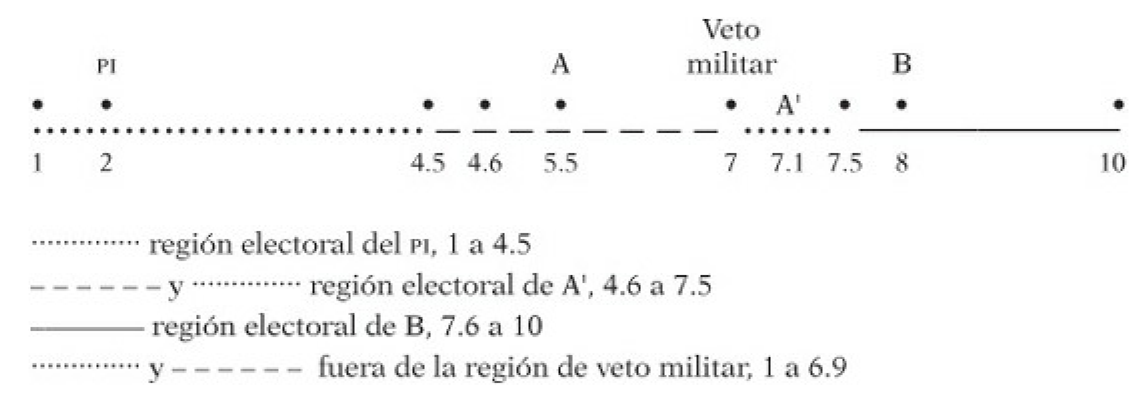


En los juegos electorales espaciales de proximidad sin el jugador que ejerce el veto militar, en la gráfica I.2 se esperaría que ambos partidos converjan hacia el votante situado en el centro, en ciertas condiciones específicas.[8] Casi en cualquier circunstancia en que no se trate de un juego de régimen, la competencia electoral entre dos partidos no será dominada por dos organizaciones que estén muy a la derecha del centro.[9] Por lo tanto, la necesidad de jugar al juego de régimen además del juego electoral altera profundamente las estrategias de ambos partidos con respecto a lo que podría esperarse por la formulación original de Downs, a menos que el votante medio estuviera muy a la derecha del centro. Todo el juego muestra un sesgo a la derecha de la posición en que estarían si no existiera el veto militar. Ahora A puede ganar si no hay abstenciones, pero para que esto suceda debe convertirse en un partido de tendencia derechista. Si se desplaza justo un poco más allá del punto del veto militar a 7.1, la posición (A'), abre un vasto territorio electoral en el centro y en la izquierda. Sin embargo, disminuyen las posibilidades de que el partido A' gane en 7.1, si los votantes se abstienen, si les es indiferente cuál partido gane, o si sólo están interesados tan marginalmente que no vale la pena el esfuerzo de votar. Mi suposición es que (como parece razonable) hay mayor probabilidad de que a los votantes les sea indiferente cuál partido gana si, primero, todos los partidos están lejos de sus posiciones preferidas, y, segundo, los partidos están cerca uno del otro, con el resultado de que la preferencia de un votante por un partido sobre su competidor es pequeña. Así, con abstenciones, el partido A debe tomar medidas para reducir al mínimo la deserción y abstención de los votantes. Debe ser una alternativa lo bastante creíble para que los votantes estén dispuestos a ejercer el sufragio con el fin de apoyarlo. Esta lógica electoral, que hace que A responda a los electores de centro e izquierda, se contrapone a la lógica del modelo de transición democrática, que hace que A se desplace a la derecha del punto del veto militar.

Ahora considérese una modificación adicional al juego. La gráfica I.3 es igual a la gráfica I.2, salvo por una modificación. En vez de la competencia entre dos partidos, hay un tercero, el Partido de la Izquierda (PI), que está ubicado bastante hacia la izquierda, en 2. Al igual que A y B, el PI está interesado tanto en la política como en ganar las elecciones, pero el PI está más orientado a la política que A y B, y por lo tanto menos dispuesto a sacrificar sus preferencias políticas. Con la posición original del partido A en el punto 5.5, si los electores eligen el partido que está más cerca de ellos, todos los

votantes de 1 a 3.7 preferirán al PI; todos los votantes entre 3.8 y 6.9 preferirán a A, y todos los votantes de 7.1 a 10 preferirán a B (a los electores que están en 7 les será indiferente votar por B o por A). Dependiendo de la distribución de los votantes en la escala de izquierda a derecha, en el punto 5.5, A puede ser el partido dominante en las preferencias de los ciudadanos, pero los militares se opondrán a unas elecciones imparciales si ese resultado parece posible.

GRÁFICA I.3. *Competencia en el espacio electoral con veto militar, III*



En la figura I.3, si A se desplaza justo a la derecha del punto del veto militar (A'), en 7.1, a menos que el PI tenga una oportunidad razonable de ganar, puede evitar un golpe de Estado, y se le permitiría gobernar si ganara la presidencia. Pero considérese lo que le ha ocurrido al juego electoral. Ahora, los votantes de 1 a 4.5 prefieren al PI; los de 4.6 a 7 prefieren a A, y los de 7.6 a 10 prefieren a B, el partido derechista. El espacio para el PI se ha incrementado, aumentando la probabilidad de un golpe de Estado o de un fraude. El espacio para el partido B, que apoya al gobierno, ha disminuido, y lo mismo sucedió con el espacio de A.

Este escenario es favorable para A, siempre que no sean muchos los votantes que estén a la izquierda (lo que conduciría a un golpe de Estado) y que el PI no esté dispuesto a cambiar su posición en 2. (El PI puede estar tan firmemente comprometido con sus ideales izquierdistas que tal vez está dispuesto a perder los votos del centro para mantener sus principios.) En estas condiciones, el PI no atrae suficientes electores para ganar las elecciones o le causa a la derecha suficiente temor para inducir un golpe de Estado. Con una simple pluralidad, A ganará y gobernará si el número de votantes entre 4.6 y 7.5 excede al número de los posicionados entre 7.6 y 10 y al número situado de 1 a 4.5. Ésta es una aproximación razonable a la forma en que los democratacristianos ganaron la presidencia en El Salvador en 1984 y en Guatemala en 1985. Negociaron con los militares, para evitar golpes de Estado y para superar un pasado de elecciones fraudulentas. Estas negociaciones implicaron amplias concesiones a los militares y fue necesario desplazarse hacia la derecha en importantes áreas de la política. La izquierda era fuerte desde el punto de vista militar, pero débil electoralmente, en parte debido a la represión y a la intimidación. Los democratacristianos ganaron las elecciones y llegaron al poder desplazándose a la derecha. Sin este desplazamiento, temían que los militares los vetaran, como lo habían hecho siempre desde los años sesenta y hasta 1984.

El ejemplo final que incluye al PI introduce los dilemas de coordinación estratégica que enfrentan los partidos de oposición bajo un gobierno autoritario. A los partidos de oposición les es más difícil el juego de la transición a la democracia cuando se ven obligados a competir electoralmente no sólo con el partido que defiende al régimen sino también con otros partidos de oposición. El gobierno puede ser capaz de desarrollar estrategias planeadas para aumentar las dificultades de coordinación que enfrentan los

partidos de oposición. México, a partir de 1988 y hasta 1997, ofrece un ejemplo: los partidos de oposición a veces trabajaban el uno contra el otro tanto como contra el régimen (Palma, 2003).

El punto central de las tres figuras no es sólo que A necesita jugar simultáneamente al juego electoral y al juego de la transición, sino además que la estructura del juego de la transición es afectada decisivamente por la conducta de A en el juego electoral. Es imposible comprender la estrategia de los partidos de oposición bajo regímenes autoritarios que promueven elecciones sin tener en cuenta ambos juegos. De manera similar, es imposible comprender la conducta electoral de los partidos en los juegos de desplome democrático y de conservación sin tener en cuenta a la vez los juegos electoral y de régimen.

Los dobles juegos afectan no sólo los objetivos del partido, sino también sus estrategias. En los modelos del espacio de competencia entre partidos, los objetivos del partido conforman directamente la estrategia. Por ejemplo, para Downs, como el objetivo exclusivo de la mayoría de los partidos es obtener el máximo de votos, su estrategia se orienta exclusivamente a la búsqueda de posiciones ideológicas que maximicen sus votos, dentro de los límites establecidos por la necesidad de tener en cuenta la coherencia y estabilidad ideológicas. En forma parecida, la existencia de juegos de régimen afecta no sólo los objetivos del partido, sino también su estrategia. En los dobles juegos, los partidos a veces adoptan estrategias que electoralmente son poco óptimas, ya sea porque piensan que *deben* hacerlo así por razón del juego de régimen (una posibilidad especialmente en los juegos de transición democrática y de deslegitimación) o porque a un resultado en el juego de régimen le dan la suficiente prioridad para divergir de una estrategia electoral óptima.

Este análisis tiene dos implicaciones para el uso de modelos del espacio de competencia electoral con el fin de entender la conducta de los partidos en contextos de incertidumbre de régimen y autoritarismo. Primero, aunque los modelos del espacio de competencia electoral siguen siendo útiles para entender la competencia entre los partidos,[10] no captan el hecho de que los partidos participan tanto en juegos de régimen como en los juegos electorales. Los modelos espaciales pueden captar un conflicto entre los valores autoritarios y los democráticos en una competencia electoral, pero no perciben que los partidos pueden estar participando en un juego que eclipsa o modifica de manera impresionante el modo en que participan en el juego electoral. Los partidos podrían abstenerse de procurar obtener el máximo de votos o escaños porque también están interesados en los resultados de un juego de régimen. Segundo, puesto que no toman en cuenta los juegos de régimen, los modelos del espacio de competencia electoral pueden omitir la razón por la que algunos partidos seguirán estrategias que no son óptimas desde el punto de vista electoral.

El doble juego requiere un replanteamiento de los objetivos y las estrategias del partido, no sólo como los entienden los modelos del espacio de la competencia electoral de Downs, sino considerando básicamente la forma en que se les interpreta en lo que se ha escrito sobre los partidos. Por ejemplo, en sus importantes trabajos sobre los objetivos

de partido, Strom (1990), y Strom y Müller (1999) supusieron el contexto de unos regímenes democráticos bien institucionalizados y generalizaron, a partir de este contexto, lo dicho sobre los objetivos de los partidos en *todos* los regímenes competitivos. Los escritos sobre el tema no han reconocido que los partidos tienen diferentes objetivos relacionados con los juegos de régimen en contextos de democracias frágiles o de regímenes autoritarios.

Aunque el análisis efectuado en esta sección se ha concentrado en los juegos electorales y de régimen, éstos se cruzan con las luchas internas de partido. Como se muestra en varios capítulos de este libro, algunas de las luchas más intensas de los partidos democratacristianos han girado en torno a cuál de los dobles juegos se debe dar prioridad y cuál será la estrategia a seguir para alcanzar los objetivos en ambos juegos. Por ejemplo, algunas de las más importantes luchas dentro del PAN fueron resultado de diferentes concepciones sobre el grado en que el partido debía concentrarse en los juegos de deslegitimación, electoral y de transición democrática.

LOS PARTIDOS DEMOCRATACRISTIANOS LATINOAMERICANOS Y LOS DOBLES JUEGOS

Los partidos democratacristianos en Latinoamérica son ideales para ejemplificar tanto la importancia de la existencia de estos juegos simultáneos y a menudo contradictorios —el juego electoral y el juego de régimen— como los dilemas que crea el jugarlos. Todo partido analizado en este libro ha jugado simultáneamente a este doble juego y, en cada caso, esto ha conformado profundamente la identidad, conducta y trayectoria del partido. Cuando pasamos del contexto de las democracias estables, en que el golpe de Estado y el fraude electoral están ausentes, para la mayoría de los regímenes políticos que están fuera de las democracias avanzadas los objetivos y las estrategias de partido deben interpretarse en relación con el juego de régimen y el juego electoral. Todos los capítulos de este libro subrayan lo importante que ha sido la existencia de estos dobles juegos para la estrategia de partido en el juego electoral.

Aunque los dobles juegos han sido importantes para todos los partidos democratacristianos analizados en este libro, la naturaleza de los juegos varió en los diferentes casos. En El Salvador y Guatemala, como Philip J. Williams y Guillermina Seri lo dejan en claro en su capítulo, los dobles juegos afectaron a esos dos partidos democratacristianos mientras existieron. Ambos partidos fueron creados bajo regímenes autoritarios que ocasionalmente promovían elecciones. Por lo tanto, ambos trabajaron para atraer apoyo popular, a la vez que intentaban asegurar que se realizaran elecciones libres y limpias. Frecuentemente, estos dos objetivos entraban en conflicto.

Desde el momento de la creación de los partidos hasta mediados de la década de los ochenta, los democratacristianos en ambos países jugaron a una combinación de juegos de transición democrática y deslegitimación. Tenían que tomar posiciones no sólo en el ámbito electoral para competir contra otros partidos, sino también en otro campo

diferente —las relaciones con los militares y con la oligarquía— para aumentar la probabilidad de que se llevaran a cabo elecciones limpias y se respetaran sus resultados. Estos dos juegos (por una parte competir contra otros partidos en el campo de la opinión pública y por otra negociar con los militares y la oligarquía a puerta cerrada o por medio de señales públicas de tranquilidad) a menudo implicaban lógicas contradictorias. Si los democratacristianos sólo hubieran tenido que preocuparse por tomar posiciones frente a otros partidos en lo electoral, como los modelos de Downs suponen que es el caso, podrían haber adoptado una estrategia diferente y prometer y procurar con más energía la democracia y las reformas. Con frecuencia, el otro juego, el de convencer a los militares y a la oligarquía de que las elecciones libres e imparciales no socavarían radicalmente el orden establecido, tomó precedencia sobre el juego electoral. Para los democratacristianos, competir contra otros partidos en el juego electoral era posterior y dependiente del juego de régimen, es decir, de convencer a los militares y a la oligarquía de que se podía llevar a cabo el juego electoral. Los líderes de partido inteligentes no harán de la obtención del máximo de votos su mayor prioridad si los votos no son el tema primario de la política.

En los ochenta, con el fin de asegurar el derecho a competir incluso en elecciones con un mínimo de libertad y equidad, y asegurarse de que después gobernarían sin golpes de Estado, los democratacristianos hicieron concesiones muy importantes a las fuerzas autoritarias derechistas. A la postre ganaron el poder ejecutivo, pero entonces se vieron obligados a jugar al juego de la conservación de la democracia. Los militares recalcitrantes retuvieron mucho poder y los presidentes democratacristianos no pudieron contenerlos. Tuvieron que andar cautelosamente sobre terreno peligroso, temiendo un golpe de Estado o alguna otra forma de represalia militar.

En la política democrática, los juegos electoral y de régimen son juegos iterativos en que los partidos y los votantes pueden, por igual, cambiar sus posiciones. Por ejemplo, aunque los partidos democratacristianos en El Salvador y Guatemala pudieron llegar al poder, los acuerdos que habían concertado para tranquilizar a los militares y a las fuerzas armadas implicaban renunciar a vastos sectores de la política que quedaron bajo el control militar. Así, los militares no sólo afectaron la estrategia del partido cuando los partidos estaban fuera del gobierno y jugaban a la transición, sino que además afectaron la conducta y el desempeño del partido al llegar éste al gobierno. Cuando los gobiernos democratacristianos no cumplieron lo prometido —paz y reconstrucción económica—, muchos electores se fueron a la derecha, por creer que los partidos derechistas estaban en mejor posición de lograr esas metas. A la vez, los antiguos partidos derechistas se desplazaron hacia el centro-derecha. Programáticamente, a los ojos de los votantes, disminuyó la diferencia entre los democratacristianos y la derecha, excepto por el hecho de que los democratacristianos no habían podido cumplir lo prometido.

En México, la conducta del PAN durante largos periodos no puede interpretarse exclusivamente como una conducta maximizadora de los votos y/o los escaños. También en este caso el régimen autoritario es crucial para entender los objetivos de un partido de oposición. Hasta 1988, los panistas no tomaron como posición principal la de derrotar al

Partido Revolucionario Institucional (PRI). Reconocieron que las reglas del juego no permitían derrotas del PRI, e incluso en algunas ocasiones ni siquiera presentaron candidatos. Para las élites del partido, el juego del posicionamiento en el espacio de competencia electoral para obtener el máximo de votos estaba subordinado al juego de la supervivencia y de la obtención de legitimidad en el contexto de un régimen autoritario.

En este país, el doble juego al que los democratacristianos jugaron fue muy diferente del jugado en El Salvador y Guatemala, a pesar de que en los tres países los partidos democratacristianos luchaban por desplazar del poder a regímenes autoritarios por medio de una combinación de juegos de transición democrática y deslegitimación. En México, el jugador con el poder de veto no eran los militares, sino más bien el régimen del PRI/Estado; en El Salvador y Guatemala los militares eran el principal jugador con poder de veto. Tal como ocurría en El Salvador y Guatemala, las armas del veto en México incluían el fraude, la intimidación y la represión, pero en contraste con ellos en México no incluían golpes de Estado militares o el dominio de áreas políticas no militares. Además, en México el espacio ideológico vetado, esto es, el espacio en la escala izquierda-derecha en el que no se permitiría que los resultados electorales se mantuvieran, era prácticamente total hasta 1988. El régimen del PRI/Estado promovía elecciones, pero no permitía que los partidos de oposición ganaran, sin que importara lo cerca o lo lejos que estuvieran del PRI en lo ideológico. En contraste, entre los años sesenta y los ochenta, los regímenes reaccionarios de El Salvador y Guatemala vetaron y de hecho literalmente asesinaron al centro civil y a la izquierda, aunque aceptaran de buen grado (y gobernaran con) la derecha civil.

Como en su capítulo argumenta detalladamente Soledad Loaeza, durante décadas el juego de régimen fue más importante para el PAN que el juego electoral. El régimen autoritario mexicano promovía elecciones regularmente, pero el PAN sabía que no se le permitiría ganar. Después de décadas en las cuales el juego de deslegitimación fue el más importante para el PAN, en la década de 1980 empezó a enfocarse en la transición democrática y en ganar las elecciones (Palma, 2003).

Desde 1988 y hasta 1997, el caso mexicano ejemplificó otra forma de interactuar de los juegos de transición democrática y los electorales. En 1988, los dos principales partidos de oposición, el PAN y el Frente Democrático Nacional (FDN), precursor del Partido de la Revolución Democrática (PRD), empezaron a considerar seriamente la posibilidad de derrotar al PRI en las elecciones. Como competían el uno contra el otro en el juego electoral, los partidos de oposición tuvieron dificultades para coordinar una estrategia común en el juego de transición democrática. La competencia en el juego electoral probablemente produjo un resultado subóptimo en el juego de régimen; una oposición unida probablemente pudo haber derrotado antes al PRI.

En Venezuela y en Chile, los partidos democratacristianos jugaron a diferentes dobles juegos en distintos momentos. Hasta los golpes de 1948 y 1973, respectivamente, los partidos compitieron de un modo muy polarizado (Levine, 1973; Scully, 1992; Valenzuela, 1978), impulsando el desplome del régimen. Antes de esos golpes de Estado, los partidos democratacristianos en ambos países jugaron a un doble juego diferente del

de los democratacristianos en El Salvador y Guatemala. Aunque estos partidos todavía prestaban atención a las estrategias y los resultados electorales, conspiraron contra la democracia. El doble juego en el que participaron los partidos democratacristianos implicaba cultivar el apoyo popular (esto es, el juego electoral) y enviar señales a los militares de su deseo de apoyar un golpe de Estado (el juego del desplome democrático).

En estas dos situaciones de aguda polarización, si los partidos democratacristianos hubieran estado interesados únicamente en el juego electoral, acaso habrían seguido estrategias diferentes de las que en realidad siguieron. En Venezuela, el COPEI adoptó una estrategia conservadora intransigente entre 1945 y 1948. En vista de que el gobierno de Acción Democrática (AD) estaba aplicando políticas que se inclinaban hacia la izquierda (especialmente la política de educación), quedó sin ocupar un espacio electoral centrista potencialmente grande. El COPEI pudo haberse desplazado hacia el centro, reteniendo sus votos de la derecha y captando más votos del centro. Pero el COPEI subordinó el juego electoral al juego del desplome democrático y polarizó la situación política. Su objetivo primordial era contener a AD y estaba dispuesto a terminar con el juego electoral en favor de un golpe de Estado en el juego de régimen.

En Chile, el PDC le entró exclusivamente al juego electoral desde su fundación como la Falange Nacional en 1938 hasta 1970, cuando el candidato Salvador Allende del Partido Socialista fue elegido presidente. Sin embargo, después de la elección de Allende, desde 1970 hasta 1973, el PDC jugó tanto al juego electoral como al juego del desplome democrático. Si el PDC se hubiera preocupado exclusivamente por los votos, tal vez habría mantenido la posición de centro-izquierda que adoptó en la segunda mitad de la década de 1960. La izquierda iba en aumento y la derecha se estaba erosionando a su atracción electoral, de modo que si los partidos adoptaban simplemente posiciones políticas e ideológicas sobre la base de la proximidad de la mayoría de los electores, presumiblemente al PDC le habría ido mejor si se hubiera mantenido en el centro-izquierda.

Después de los golpes de Estado militares, tanto el COPEI como el PDC chileno a la postre participaron en juegos que combinaban la deslegitimación, la transición democrática y los juegos electorales. La principal diferencia con las situaciones salvadoreña y guatemalteca descritas antes es que los regímenes militares de 1948-1958 en Venezuela y 1973-1990 en Chile abolieron formalmente la arena electoral. Por esta razón, los esfuerzos democra-tacristianos por alentar una transición democrática tuvieron precedencia clara sobre el juego electoral. Sólo hasta que fue claro que había una auténtica posibilidad de elecciones abiertas e imparciales los partidos se preocuparon activamente por tomar posiciones para el juego electoral.

El desplazamiento del COPEI de la derecha hacia el centro después del golpe de Estado de 1948 puede entenderse mejor, no como un esfuerzo principalmente por tomar posiciones para ganar las elecciones, sino más bien como una reacción a la dictadura de Pérez Jiménez (1948-1958) en el juego de régimen. El COPEI se desplazó hacia el centro durante la dictadura cuando el esfuerzo de combatir a un enemigo común acercó al COPEI y a la AD (Coppedge, 2000, pp. 111-115; Levine, 1973, pp. 41-48, 94-144). Los líderes

del partido tenían que competir en dos arenas diferentes: en una, contra AD en el campo del sistema de partidos, y en la otra, contra Pérez Jiménez en el campo de los conflictos acerca del régimen político. Mientras que la lucha contra AD en el periodo 1945-1948 impulsó a los líderes del partido a enfocar temas que le dieron al COPEI un perfil derechista, la lucha contra Pérez Jiménez de 1948 a 1958 lo acercó a la AD y al centro político. Cuando el campo de la política electoral fue abolido en 1948, la lucha en una arena diferente se hizo más importante para definir el perfil y la agenda del partido. El desplazamiento del COPEI hacia el centro entre 1948 y 1958 cambió la identidad del partido; nunca retornó a su imagen derechista del periodo 1945-1948.

La existencia previa de regímenes autoritarios afectó la estrategia democratacristiana tanto en Venezuela como en Chile, una vez que volvió el juego electoral. En ambos países los partidos democratacristianos inicialmente construyeron estrategias que se basaban en la idea de que era esencial construir y conservar la democracia. Con este fin, ambos partidos democratacristianos establecieron puentes que los acercaron a sus antiguos adversarios. El COPEI formó una alianza con su anterior archienemigo, AD, en Venezuela, en la forma del Pacto del Punto Fijo, diseñado para promover la estabilidad democrática y disminuir la polarización (Levine, 1973). Con el fin de derrotar a la dictadura de Pinochet y luego apoyar la gobernabilidad democrática, los democratacristianos chilenos formaron una coalición electoral y luego una alianza de gobierno con los socialistas, sus enconados rivales del periodo 1970-1973 (que desde 1989 se habían dividido en dos partidos diferentes). Para aumentar la probabilidad de una transición a la democracia, tanto el COPEI como el PDC chileno sufrieron significativas transformaciones que afectaron la forma en que se presentaron en el juego electoral. El COPEI se transformó en un partido más moderado y aceptó cogobernar con AD de 1958 a 1963. El PDC chileno abandonó su posición previa de gobernar sin socios de alguna coalición.

En su capítulo sobre Perú en este libro, Gregory D. Schmidt describe una variante distinta de un doble juego que implica la combinación de la conservación democrática y de los objetivos electorales. En Perú, desde 1980 hasta 1985, después de 12 años de gobierno militar (1968-1980), llegó al poder un gobierno civil. El partido democratacristiano peruano, el Partido Popular Cristiano (PPC), apoyó a este gobierno. Si se hubiera interesado sólo en el juego electoral, el PPC probablemente habría estado mejor distanciándose de un gobierno impopular enfrentado a una amenaza terrorista en aumento y una economía en descenso. Sin embargo, según Schmidt, el PPC conscientemente dio prioridad al juego de conservación del régimen manteniendo la alianza con un gobierno impopular y procurando proteger la democracia por encima del juego electoral. Los líderes del PPC estaban preocupados porque creían que si abandonaban su apoyo al gobierno esto conduciría al desplome del gobierno y quizás del régimen.

El cuadro I.1 presenta un resumen de los principales juegos a los que han jugado los partidos democratacristianos analizados en este libro.

Los partidos democratacristianos no han sido los únicos que se han enfrentado a

dobles juegos. Muchos partidos en todo el mundo deben jugar a un doble juego —lo que subraya la razón de la importancia de que los politólogos empiecen a examinar su lógica y sus implicaciones—. Aunque se podrían tratar estos puntos en otros partidos de otras partes del mundo, los partidos democratacristianos de Latinoamérica proporcionan casos ejemplares de dobles juegos. En realidad, es imposible entender muchos puntos clave de los capítulos siguientes sin reconocer que los partidos democratacristianos frecuentemente han participado en este doble juego.

CONTRIBUCIONES EMPÍRICAS DE ESTE LIBRO

En este capítulo se ha subrayado la principal contribución teórica de este libro a la bibliografía sobre la política de los partidos. Además, esperamos que este libro haga contribuciones empíricas al estudio de la democracia cristiana y de la relación entre la religión y la política de partidos, y que con ello aclare más generalmente diversos puntos clave de la política latinoamericana.

Uno de los principales temas de este libro es la gran diversidad ideológica y programática de los partidos democratacristianos en Latinoamérica. Como estudiosos del campo de la política de partidos en América Latina, cada uno durante casi 15 años antes de empezar este proyecto estábamos conscientes, como coeditores, de las diferencias programáticas e ideológicas entre los partidos democratacristianos de mayor importancia electoral en la región. A pesar de esto, no conocíamos la gama de diversidad programática e ideológica tanto como lo llegamos a conocer durante este proceso. Estábamos menos conscientes de que algunos partidos democratacristianos menores, como los de Argentina, Perú (el Partido Demócrata Cristiano [PDC] después de 1966) y Uruguay (el Partido Demócrata Cristiano [PDC] a principios de la década de 1970), habían adoptado posiciones en la izquierda del espectro político. En los escritos académicos no se ha prestado atención a la magnitud de esta diversidad ideológica y programática, que es mucho más grande que la diversidad de la democracia cristiana en Europa occidental.

CUADRO I.1. *Principales juegos de los partidos democratacristianos en este libro*

Partido	*Periodo*	*Principales juegos*
Falange Nacional /PDC, Chile	1938-1970	Electoral
	1970-1973	Electoral, desplome democrático
	1975-1987	Transición democrática, deslegitimar
	1988-1990	Electoral, transición democrática
	1990-1994	Electoral, preservación democrática
	1994-	Electoral
PAN, México	1939-1982	Deslegitimar
	1982-1988	Transición democrática, deslegitimar
	1988-2000	Transición democrática, electoral
	2000-	Electoral
COPEI, Venezuela	1946-1948	Electoral, desplome democrático
	1948-1958	Transición democrática
	1958-1963	Electoral, preservación democrática
	1963-1998	Electoral
PDC, El Salvador	1960-1984	Transición democrática, electoral
	1984-1989	Preservación democrática, electoral
	1989-	Electoral
DCG, Guatemala	1955-1985	Transición democrática, electoral
	1985-1990	Preservación democrática, electoral
	1990-	Electoral
PDC/PPC, Perú	1956-1968	Electoral
	1968-1980	Transición democrática
	1980-1992	Electoral, preservación democrática

Nuestra conciencia cada vez mayor de la diversidad ideológica y programática de la democracia cristiana sugiere algunas preguntas que no eran evidentes al inicio de este proyecto. ¿Por qué y cuándo partidos que se originaron con algunos principios doctrinales comunes y que pertenecen a la misma organización internacional partidista (la Internacional Demócrata Cristiana) terminaron adoptando posiciones tan radicalmente distintas?

Otro de los temas básicos de este libro es que aunque los partidos democratacristianos han tenido menos éxito en la región que en Europa occidental y que si bien muchos de ellos no cumplieron las grandes expectativas que generaron, no deja de ser cierto que la democracia cristiana tuvo una importante influencia en Latinoamérica. Este punto no ha

sido apreciado plenamente en los escritos sobre el tema; una segunda contribución empírica del libro es que hace resaltar este punto. Subrayando el éxito electoral de la democracia cristiana en Latinoamérica, como lo hacemos aquí, con plena conciencia de que su triunfo electoral no igualó sus aspiraciones, vamos contra la tendencia común a considerar que la democracia cristiana fue un fracaso electoral en la región. En el que quizás sea el libro más reciente en inglés sobre la democracia cristiana en gran parte de Latinoamérica, *Latin America's Christian Democratic Parties*, Lynch (1993) sostuvo que ha sido un fracaso electoral y analiza la razón de que haya sido así. El libro de Fleet (1985), el estudio más extenso del PDC chileno, fue intitulado *The Rise and Fall of Chilean Christian Democracy [El ascenso y la caída de la democracia cristiana chilena]* e indica que el partido estaba decayendo. No obstante, sólo unos pocos años después de la publicación del libro de Fleet, el PDC encabezó la transición a la democracia, y posteriormente los candidatos presidenciales del partido (apoyados por coaliciones de varios partidos) obtuvieron victorias claras en 1989 y 1993. En Latinoamérica, la democracia cristiana ha sido una fuerza electoral más importante de lo que se ha reconocido en los escritos sobre el tema.

Un tercer tema empírico clave del libro es que la democracia cristiana ha hecho contribuciones muy valiosas, aunque no suficientemente apreciadas, en favor de la democracia en Latinoamérica. Los democratacristianos participaron en forma importante en la oposición a regímenes autoritarios y en el fortalecimiento de las transiciones a regímenes políticos competitivos en Chile (1973-1990), El Salvador (desde los años sesenta y hasta 1985), Guatemala (de los sesenta a 1986), México (aproximadamente desde 1982 hasta el 2000), Perú (de 1968 a 1978) y Venezuela (de 1948 a 1958). En muchos otros países, partidos democratacristianos más pequeños participaron activamente en la oposición al gobierno autoritario y en el apoyo a las transiciones hacia la democracia. Además, los partidos democratacristianos ayudaron a construir la democracia en muchos países. Los autores que escribieron ensayos para este libro tienen divergentes opiniones personales sobre la democracia cristiana, pero concuerdan en que estos partidos contribuyeron a la democracia en la región, nuevamente, más de lo que habían reconocido los escritos previos. Los autores también reconocen que los líderes democratacristianos cometieron errores que en algunos casos hicieron más vulnerable a la democracia. Así, sería insensato afirmar que la democracia cristiana en todos los tiempos y en todos los lugares ha sido positiva para los regímenes democráticos.

El reconocimiento de las contribuciones de la democracia cristiana a la democracia no sólo ha sido insuficiente, sino que algunos autores incluso han presentado opiniones explícitamente críticas del efecto de la democracia cristiana sobre la democracia. Por ejemplo, en su excelente estudio, Valenzuela (1978) hace recaer sobre el PDC buena parte de la responsabilidad por el colapso de la democracia en Chile en 1973. En este libro, Carlos Huneeus pone en duda esa afirmación y pide una revaluación más favorable del efecto del PDC sobre la democracia chilena.

Un cuarto tema clave del que se trata en varios de los capítulos de este libro es que la democracia cristiana está declinando en varios países de la región. Otros autores han

presentado argumentos similares. Fleet (1985) anunció prematuramente la declinación del PDC chileno, y Lynch (1993) anticipó correctamente hace una década que la democracia cristiana estaba declinando en la región. Varios autores en este libro analizan el desplome de la democracia cristiana en países específicos, y en el capítulo final yo mismo analizo su declinación electoral en toda la región. Sin embargo, nuestras explicaciones del descenso de la democracia cristiana divergen de la de Lynch, quien argumentó que estos partidos han declinado en la medida en que no han promovido políticas económicas orientadas al mercado. Este libro presenta nueva evidencia y explicaciones sobre el descenso electoral de la democracia cristiana.

LOS CAPÍTULOS QUE SIGUEN

Los capítulos restantes de la primera parte ofrecen tres reflexiones generales o comparativas sobre la democracia cristiana en Latinoamérica. El capítulo del autor de estas líneas y Timothy R. Scully ofrece un vasto panorama de la democracia cristiana en Latinoamérica. Virtualmente todas las anteriores obras sobre la democracia cristiana han subrayado explícita o implícitamente su homogeneidad. En contraste, Mainwaring y Scully muestran que la democracia cristiana en Latinoamérica, aunque surge de fuentes doctrinales comunes, evolucionó no obstante en forma muy distinta en diversos países.

En "La transformación de la ideología democratacristiana: trascendiendo a la izquierda y a la derecha o ¿qué le ocurrió a la Tercera Vía?", Paul E. Sigmund rastrea los orígenes ideológicos y la evolución de los partidos democratacristianos en Latinoamérica y Europa. Analiza la inspiración inicial que los partidos democratacristianos ofrecieron —un singular formato católico para el mundo moderno— y examina el agotamiento ideológico que subyace en la decadencia de los partidos democratacristianos en Europa y Latinoamérica.

En "Sembrando ideas: explicación de los orígenes de los partidos democratacristianos en Latinoamérica", Kirk A. Hawkins argumenta que el momento en que se fundaron los partidos, en relación con la obtención del derecho a votar, es un factor clave para explicar cuáles partidos triunfaron y cuáles fracasaron en sus respectivos países. Sostiene que el éxito del partido se explica ante todo por la diseminación de la doctrina socialcristiana en un determinado país. La Iglesia católica desempeñó un papel central en la creación del partido cuando propagó sus enseñanzas sociales y estableció una infraestructura institucional, como los grupos de estudio y las asociaciones de estudiantes, para difundir la doctrina.

En la segunda parte se examinan dos de tres organizaciones demo-cratacristianas que hoy en día son partidos importantes: los de Chile y México.[11] En la tercera parte se analiza el desplome de importantes partidos democratacristianos en El Salvador y Guatemala, Perú y Venezuela. Los estudios de países en la segunda y la tercera partes ejemplifican lo importante que es la combinación de los juegos de régimen y electoral para entender la democracia cristiana en Latinoamérica.

En la segunda y la tercera partes utilizamos dos criterios para la selección de los casos.

Primero, los capítulos cubren a los partidos democratacristianos de mayor importancia políticamente hablando: los que en algún momento tuvieron suficiente éxito electoral para gobernar. Nuestros colaboradores estudian cinco de los siete partidos democratacristianos que han ocupado la presidencia en Latinoamérica. Las excepciones son Costa Rica y Ecuador. Entre los partidos democratacristianos que han ganado la presidencia, la Democracia Popular ecuatoriana es la que tiene la menor proporción del voto para el Congreso o de escaños en este último (20% de las diputaciones en 1998). Por esta razón, era menos esencial incluir Ecuador que los otros partidos democratacristianos que accedieron a la presidencia. Lamentamos que por razones de espacio no haya sido posible incluir al PUSC costarricense en este libro. Si bien el PUSC es uno de dos, o de tres (si el PDC chileno se recupera del fracaso de 2001), de los restantes partidos democratacristianos importantes en la región, no tiene una autoidentificación particular con la democracia cristiana. Segundo, estábamos interesados específicamente en casos que ejemplifican los dilemas del doble juego descrito en esta introducción. Este criterio incluye a todos los partidos democratacristianos de Latinoamérica, excepto el PUSC de Costa Rica.

Además de cubrir los cinco partidos democratacristianos que han llegado a la presidencia, este libro también incluye un capítulo sobre la democracia cristiana peruana. Aunque es uno de los partidos democratacristianos más pequeños de la región, el PPC peruano sobresale como uno que ha estado a punto de convertirse en un partido importante, sin haberlo logrado nunca. A pesar del modesto éxito electoral de la democracia cristiana en Perú, el partido fue un factor importante desde 1980 hasta el desplome del sistema de partidos en la década de 1990.

La segunda parte del libro analiza dos de los partidos democratacristianos contemporáneos de más éxito en Latinoamérica. Huneeus analiza el desarrollo del PDC chileno, que fue el partido democratacristiano latinoamericano de más éxito desde los años sesenta hasta 1999. En contraste con gran parte de las obras con que contamos sobre la política chilena, que han criticado al PDC, Huneeus hace notar sus éxitos. Ignacio Walker escribió su ensayo mientras era miembro destacado del PDC en el Congreso nacional, y su finalidad era tanto política como académica. Trata de los desafíos políticos y culturales que enfrenta en la actualidad el partido y señala la necesidad de una renovación.

El PAN de México también ha obtenido un triunfo en los últimos años, pero éste es reciente si se le compara con el PDC chileno. La participación del PAN como factor importante en la política mexicana ha sido una historia de ascenso gradual. En su capítulo, basado en su magistral libro (1999), Loaeza trata de la evolución histórica del PAN. Beatriz Magaloni y Alejandro Moreno también estudian el papel del PAN en la política mexicana. En vez de inquirir sobre toda la historia del partido, su análisis se concentra en las actitudes contemporáneas de los miembros del partido y su relación con las ideas democratacristianas.

En la tercera parte se analizan los partidos democratacristianos que en alguna ocasión fueron importantes y que sufrieron un colapso en la década de 1990. En su ensayo sobre

Venezuela, Crisp, Levine y Molina describen el crecimiento y la posterior decadencia del COPEI. Bajo el liderazgo fundador de Rafael Caldera, el "partido socialcristiano COPEI" forjó su imagen como el principal partido de oposición al gobierno de Acción Democrática de 1945-1948, y luego ayudó a encabezar la oposición a la dictadura de Pérez Jiménez en 1948-1958. Los autores detallan la institucionalización del partido como la segunda fuerza en importancia en el sistema de dos partidos y medio que dominó la política venezolana entre 1973 y 1988. Después analizan la caída del COPEI en los años noventa.

La democracia cristiana en El Salvador y Guatemala también se derrumbó a finales de esa década. Los partidos de esos dos países no supieron galvanizar un apoyo popular duradero en la época postautoritaria. Williams y Seri estudian el ascenso y la caída de la democracia cristiana en esos dos países. "La gran minoría: la democracia cristiana en Perú" describe la variada historia del partido democratacristiano de ese país. Schmidt argumenta que, a pesar de haber obtenido sólo un éxito electoral moderado, los democratacristianos peruanos influyeron significativamente en el curso de la historia. Sostiene que, al precio de alguna desventaja electoral, el PPC se concentró en el juego de la preservación democrática en los años ochenta.

En la conclusión, me ocupo del problemático futuro de la democracia cristiana en Latinoamérica. Argumento que la democracia cristiana se enfrenta a perspectivas desfavorables, no a causa de debilidades intrínsecas o errores, sino más bien porque hay muy poco interés en crear nuevos partidos democratacristianos.

REFERENCIAS

Aldrich, John H., 1983, "A Downsian Spatial Model with Party Activism", *American Political Science Review*, 77, núm. 4, diciembre, pp. 974-990.

Chand, Vikram K., 2001, *Shaping Institutions: Mexico's Political Awakening*, Notre Dame, University of Notre Dame Press.

Chappell, Henry W., Jr., y William R. Keech, 1986, "Policy Motivation and Party Differences in a Dynamic Spatial Model of Party Competition", *American Political Science Review*, 80, núm. 3, septiembre, pp. 881-899.

Coppedge, Michael, 2000, "Venezuelan Parties and the Representation of Elite Interests", en Kevin J. Middlebrook (ed.), *Conservative Parties. The Right and Democracy in Latin America*, pp. 110-136, Baltimore, Johns Hopkins University Press.

Downs, Anthony, 1957, *An Economic Theory of Democracy*, Nueva York, Harper and Row.

Enelow, James M., y Melvin J. Hinich, 1984, *The Spatial Theory of Voting: An Introduction*, Cambridge, Cambridge University Press.

——— (eds.), 1990, *Advances in the Spatial Theory of Voting*, Cambridge, Cambridge University Press.

Fleet, Michael, 1985, *The Rise and Fall of Chilean Christian Democracy*, Princeton, Princeton University Press.

Greenberg, Joseph, y Kenneth Shepsle, 1987, "The Effect of Electoral Rewards in Multiparty Competition with Entry", *American Political Science Review*, 81, núm. 2, junio, pp. 525-537.

Herman, Donald L., 1980, *Christian Democracy in Venezuela*, Chapel Hill, University of North Carolina Press.

Hinich, Melvin J., 1997, "Equilibrium in Spatial Voting: The Median Voter is an Artifact", *Journal of Economic Theory*, 16, pp. 208-219.

Iversen, Torben, 1994, "The Logics of Electoral Politics: Spatial, Directional, and Mobilizational Effects", *Comparative Political Studies*, 27, núm. 2, julio, pp. 155-189.

Kinzo, Maria D'Alva Gil, 1988, *Legal Opposition Politics under Authoritarian Rule in Brazil. The Case of the MDB, 1966-1979*, Nueva York, St. Martin's Press.

Kitschelt, Herbert, 1989, *The Logics of Party Formation: Ecological Politics in Belgium and West Germany*, Ithaca, Cornell University Press.

———, 1994, *The Transformation of European Social Democracy*, Cambridge, Cambridge University Press.

Kitschelt, Herbert, 2000, "Linkages between Citizens and Politicians in Democratic Politics", *Comparative Political Studies*, 33, núms. 6/7, agosto/septiembre, pp. 845-879.

Levine, Daniel H., 1973, *Conflict and Political Change in Venezuela*, Princeton, Princeton University Press.

Loaeza, Soledad, 1999, *El Partido Acción Nacional: la larga marcha, 1939-1994. Oposición leal y partido de protesta*, México, Fondo de Cultura Económica.

Lujambio, Alonso, s. f., "Democratization through Federalism? Mexico's Partido Acción Nacional, 1939-1995: The History of a Difficult Strategy", inédito.

Lynch, Edward A., 1993, *Latin America's Christian Democratic Parties: A Political Economy*, Westport, Conn., Praeger.

Mabry, Donald J., 1973, *Mexico's Acción Nacional: A Catholic Alternative to Revolution*, Syracuse, Syracuse University Press.

Mainwaring, Scott P., 1999, *Rethinking Party Systems in the Third Wave of Democratization: The Case of Brazil*, Stanford, Stanford University Press.

Merrill, Samuel, III, y Bernard Grofman, 1999, *A Unified Theory of Voting: Directional and Proximity Spatial Models*, Cambridge, Cambridge University Press.

Palfrey, Thomas R., 1984, "Spatial Equilibrium with Entry", *Review of Economic Studies*, 51, núm. 1, enero, pp. 139-156.

Palma, Esperanza, 2003, *Partidos de oposición y democratización en México: un estudio del PAN y el PRD, 1988-1997*, México, Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco.

Panebianco, Angelo, 1988, *Political Parties: Organization and Power*, Cambridge,

Cambridge University Press.
Przeworski, Adam, y John Sprague, 1986, *Paper Stones: A History of Electoral Socialism*, Chicago, University of Chicago Press.
Putnam, Robert D., 1988, "Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games", *International Organization*, 42, núm. 3, verano, pp. 427-460.
Rabinowitz, George, Stuart Elaine MacDonald y Ola Listhaug, 1991, "New Players in an Old Game: Party Strategy in Multiparty Systems", *Comparative Political Studies*, 24, núm. 2, julio, pp. 147-185.
Sartori, Giovanni, 1976, *Parties and Party Systems: A Framework for Analysis*, Cambridge, Cambridge University Press.
Schlesinger, Joseph A., 1984, "On the Theory of Party Organization", *Journal of Politics*, 46, núm. 2, mayo, pp. 369-400.
Scully, Timothy R., 1992, *Rethinking the Center: Cleavages, Critical Junctures, and Party Evolution in Chile*, Stanford, Stanford University Press.
Shepsle, Kenneth A., y Ronald N. Cohen, 1990, "Multiparty Competition, Entry, and Entry Deterence in Spatial Models of Election", en James M. Enelow y Melvin J. Hinich (eds.), *Advances in the Spatial Theory of Voting*, pp. 12-45, Cambridge, Cambridge University Press.
Smith, Brian H., 1982, *The Church and Politics in Chile: Challenges to Modern Catholicism*, Princeton, Princeton University Press.
Strom, Kaare, 1990, "A Behavioral Theory of Competitive Political Parties", *American Journal of Political Science*, 34, núm. 2, mayo, pp. 565-598.
———, y Wolfgang C. Müller, 1999, "Political Parties and Hard Choices", en Wolfgang C. Müller y Kaare Strom (eds.), *Policy, Office, or Votes? How Political Parties in Western Europe Make Hard Decisions*, pp. 1-35, Cambridge, Cambridge University Press.
Tsebelis, George, 1990, *Nested Games: Rational Choice in Comparative Politics*, Berkeley, California, University of California Press.
Valenzuela, Arturo, 1978, *The Breakdown of Democratic Regimes: Chile*, vol. 4, en Juan J. Linz y Alfred Stepan (eds.), *The Breakdown of Democratic Regimes*, Baltimore, Johns Hopkins University Press.
Webre, Stephen, 1979, *José Napoleón Duarte and the Christian Democratic Party in Salvadoran Politics, 1960-1972*, Baton-Rouge, Louisiana State University.
Wittman, Donald A., 1973, "Parties as Utility Maximizers", *American Political Science Review*, 63, núm. 2, junio, pp. 490-498.
———, 1983, "Candidate Motivation: A Synthesis of Alternative Theories", *American Political Science Review*, 77, pp. 142-157.
———, 1990, "Spatial Strategies when Candidates Have Policy Preferences", en James M. Enelow y Melvin J. Hinich (eds.), *Advances in the Spatial Theory of Voting*, pp. 66-98, Cambridge, Cambridge University Press.

* Agradezco a Andy Gould, Gretchen Helmke, Mel Hinich, Tony Messina, Mariano Torcal y Kurt Weyland sus valiosos comentarios.

[1] Aunque sus libros no tratan específicamente la democracia cristiana, Scully (1992, pp. 144-170) y Smith (1982, pp. 126-161) también ofrecen un amplio análisis del PDC chileno.

[2] La diferencia entre esta situación y la primera, un régimen autoritario que promueve elecciones, es que en este segundo escenario el régimen autoritario no ha realizado hasta entonces elecciones.

[3] Aunque los objetivos programáticos son importantes para los partidos democratacristianos, en favor de la sencillez de la exposición me concentro en la interacción entre los juegos electoral y de régimen. Los conflictos entre los juegos programáticos y los electorales han sido tratados previamente con detalle por muchos investigadores (Strom, 1990; Strom y Müeller, 1999; Wittman, 1973, 1983, 1990), por lo que hay menos recompensa intelectual en el desarrollo de este punto.

[4] Gran parte de lo escrito sobre este tema se ha concentrado en la teoría de la votación de Downs (que no es de importancia para este capítulo), en vez de la forma en que él entiende los objetivos y la estrategia de los partidos, que es de lo que tratamos aquí.

[5] Mi análisis se basa en obras anteriores que estudian a los actores políticos que juegan a dos juegos. Véanse especialmente Putnam (1988) y Tsebelis (1990).

[6] Por sencillez y brevedad, supongo un espacio unidimensional, pero el razonamiento puede ampliarse a espacios de dos dimensiones.

[7] Los partidos se arriesgan a perder credibilidad electoral si intentan realizar cambios profundos. Los cambios radicales en posiciones programáticas o ideológicas podrán también representar un alto costo desde el punto de vista del apoyo de los activistas.

[8] Hinich (1977), Aldrich (1983) y otros han demostrado que este resultado depende de condiciones que son difíciles de satisfacer, pero este argumento fue parte de la formulación de Downs, en particular en la primera parte de su libro.

[9] La excepción se presentaría si el sentimiento del votante medio estuviera muy a la derecha del centro político, lo que es una situación poco común.

[10] La utilidad de los modelos espaciales se fundamenta en la competencia programática y/o ideológica (Kitschelt, 2000). Si la competencia no es programática o ideológica, los modelos espaciales son menos útiles. En la mayoría de los sistemas de partido débilmente institucionalizados, la competencia es menos programática e ideológica y más personal que en las democracias de los países más industrializados.

[11] El partido democratacristiano de Costa Rica, PUSC, es también un contendiente electoral importante. Incluimos a Chile entre los tres partidos democratacristianos contemporáneos que han tenido éxito, a pesar del fuerte golpe electoral que sufrió el partido en las elecciones para el Congreso en diciembre de 2001. El PDC chileno quizás no pueda recuperarse de sus derrotas electorales de los últimos años, pero, tal como argumentan Huneeus y Walker en sus capítulos en este libro, no se le puede dejar de tener en cuenta.

II. LA DIVERSIDAD DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA EN LATINOAMÉRICA

SCOTT MAINWARING Y TIMOTHY R. SCULLY*

CUANDO empezamos este libro, creíamos saber lo suficiente sobre la democracia cristiana en Latinoamérica para no encontrarnos con sorpresas importantes. Nuestro trabajo previo (especialmente Mainwaring y Scully, 1995, y Scully, 1992) nos había dado una razonable base de conocimiento de la democracia cristiana. No obstante, la notable diversidad de los partidos democratacristianos en Latinoamérica nos sorprendió. Los partidos democratacristianos de la región han abarcado desde la izquierda (favorables al socialismo revolucionario) hasta la derecha del espectro político. La diversidad es mucho mayor que la que puede encontrarse en Europa occidental y mucho más grande que la reconocida por los escritos sobre la democracia cristiana. Esta diversidad es el principal tema de este capítulo.

En él se proporciona una introducción empírica a este libro y más ampliamente al estudio de la democracia cristiana en Latinoamérica. Empezamos presentando todos los partidos democratacristianos de la región y ofreciendo información sobre su desempeño electoral. Analizamos el surgimiento de la democracia cristiana en la región y su relación con la Iglesia católica. Finalmente, tratamos de la ideología, las posiciones programáticas y la ubicación en la escala izquierda-derecha de los partidos democratacristianos haciendo resaltar su diversidad.

PARTIDOS DEMOCRATACRISTIANOS EN LATINOAMÉRICA Y SUS RESULTADOS ELECTORALES

Tenemos una norma sencilla para identificar a los partidos democratacristianos: incluimos a todos los partidos, después de 1930, que se consideran a sí mismos democratacristianos tal como se manifiesta en el nombre del partido, en su afiliación internacional y en sus documentos. Varios partidos democratacristianos en Latinoamérica (los de Argentina, Brasil, Chile, El Salvador y Guatemala, por ejemplo) se han dado a sí mismos ese nombre, pero otros no lo han hecho así, entre ellos el Partido de Unidad Social Cristiana (PUSC) costarricense, la Democracia Popular (DP) ecuatoriana, el Partido Acción Nacional (PAN) de México y el Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI) venezolano. Aunque un partido no se llame a sí mismo democratacristiano, seguimos considerando que lo es si pertenece a la Internacional Demócrata Cristiana y si su programa y sus documentos subrayan su naturaleza democratacristiana. El PAN, la DP y el PUSC pertenecen a la Internacional Demócrata Cristiana y los tres tienen algunos orígenes en esta doctrina. Aunque el Partido Conservador colombiano pertenece formalmente a la Internacional Demócrata Cristiana,

nunca ha enfatizado una identidad como partido democratacristiano; por lo tanto, no lo consideramos como tal. De manera similar, el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) dominicano tiene débiles vínculos con la democracia cristiana a pesar de pertenecer a la organización internacional. Por esta razón no lo estudiamos en este libro. Al incluir sólo a los partidos que han existido después de 1930, excluimos a los precursores tempranos de la democracia cristiana.

Mucho antes de 1930 hubo partidos católicos en Latinoamérica, pero no se identificaron a sí mismos como democratacristianos, y no se les analiza en este libro. En su excelente obra sobre la democracia cristiana en Europa occidental, Kalyvas (1966, p. 1) une los primeros partidos de inspiración católica y los partidos democratacristianos, pero hacerlo así oscurece muchas diferencias. Aunque los primeros partidos católicos compartían algunas raíces en común con los partidos democratacristianos, no los consideramos como tales. Por lo general eran más conservadores políticamente que las organizaciones democratacristianas. A menudo estaban vinculados con el orden oligárquico (Freidenberg, 2001, p. 277), que fue criticado por los partidos democratacristianos surgidos después de 1945. Por ejemplo, en Brasil se creó un partido católico en 1876 para defender los intereses católicos contra lo que los líderes del partido veían como una élite política excesivamente secularizada. El partido quería que el Estado defendiera los intereses católicos ortodoxos e impusiera un monopolio católico sobre la educación (Chacón, 1981, pp. 41-45). En ese tiempo, la mayoría de los partidos católicos apoyaban las posiciones del papa Pío IX (1846-1871), archiconservador, que era hostil al liberalismo moderno. Algunos partidos católicos del siglo XIX desconfiaban incluso, por principio, de la democracia. Por el contrario, los democratacristianos a partir de la década de 1930 aceptaron la democracia en principio y casi siempre en la práctica, y también aceptaron el liberalismo.

También había organizaciones sociales que adoptaron el nombre *democracia cristiana* antes de 1930, pero no eran partidos políticos, por lo que no las incluimos en nuestro análisis. Por ejemplo, en Argentina se creó una efímera liga democratacristiana en 1902, y en 1911 se fundó un sindicato demo-cratacristiano, pero ninguno de los dos era un partido (Cerro, 1983, p. 10).

Aunque existieron algunas continuidades entre los primeros partidos católicos y los partidos democratacristianos (Valenzuela y Valenzuela, 2000), estos últimos se inspiraban en diferentes perspectivas teológicas, eclesiásticas y políticas. El contraste es particularmente notorio entre los partidos fundados antes de la encíclica papal *Rerum Novarum* en 1891 y los partidos democratacristianos fundados en las décadas de 1950 y 1960. La *Rerum Novarum*, emitida por el papa León XIII (1878-1903), fue una de las encíclicas papales más influyentes en la reorientación social de la Iglesia en una dirección reformista. Los partidos católicos creados antes de ella estaban característicamente influidos por la posición conservadora de la Iglesia en numerosos temas, mientras que los partidos democratacristianos fundados en las décadas de 1950 y 1960 nacieron durante un momento más liberal en el desarrollo de la Iglesia católica. En tanto que la mayoría de los partidos católicos creados antes de 1891 favorecía el dominio católico de la política y

desconfiaba de la secularización, los democratacristianos reconocieron la legitimidad y la necesidad de diferentes esferas religiosa y política. Los primeros partidos políticos se consideraban instrumentos para difundir los valores cristianos en órdenes políticos excesivamente secularizados (Salazar Mora y Salazar Mora, 1991, pp. 21-23). Los democratacristianos compartían la preocupación por los valores cristianos pero en la definición de sus partidos no incluían el combate a la secularización.

Algunos partidos democratacristianos surgieron en oposición a los antiguos partidos católicos debido a diferencias políticas y religiosas. Por ejemplo, el Partido Demócrata Cristiano (PDC) ecuatoriano fue creado en 1964 por una escisión en el Movimiento Social Cristiano (MSC), que también era de inspiración católica. Los líderes del PDC consideraban que el MSC era demasiado conservador y que estaba vinculado con el orden oligárquico. De manera similar, el PDC uruguayo fue creado en 1962 como un grupo separado de la mucho más antigua Unión Cívica, que también es un partido católico, pero en términos generales el PDC era más progresista.

El apéndice (p. 90) muestra los partidos democratacristianos más importantes en América Latina después de los treinta, los años de su creación, y sus resultados electorales. Comentamos brevemente las trayectorias electorales de los siete partidos que obtuvieron la presidencia por lo menos una vez.

Hasta hace poco, el PDC chileno tenía la historia de mayor éxito electoral de la democracia cristiana en Latinoamérica. Creado en 1957 mediante la unión de la Falange Nacional (que era un partido democratacristiano anterior) y los partidos socialcristianos conservadores, el PDC se convirtió pronto en el más grande de los partidos chilenos. En las elecciones posteriores a 1932, tres de los cuatro candidatos presidenciales con el mayor porcentaje de votos fueron democratacristianos: Eduardo Frei M. en 1964 con 55.6%, Patricio Aylwin en 1989 con 55.2% y Eduardo Frei R. en 1993 con 58%. En cada elección para el Congreso desde 1965 hasta 1997 el PDC obtuvo más votos y curules que ningún otro partido. En 1965, con 42.3% del voto, obtuvo la mayor proporción del voto para la cámara baja obtenida por cualquier partido durante el siglo XX en Chile. A partir de 1993, el partido ha sufrido una continua y acelerada erosión electoral.

El partido democratacristiano de Venezuela, el COPEI, fue creado en 1946 en respuesta al gobierno izquierdista de Acción Democrática (AD). El COPEI llegó a la presidencia en 1968 y 1978, y sus candidatos obtuvieron el segundo lugar en todas las otras elecciones presidenciales desde 1963 hasta 1993. Además, el COPEI consistentemente obtuvo la segunda representación más grande en el Congreso desde 1963 hasta 1998. Sin embargo, en los años noventa, el COPEI sufrió una caída muy rápida, y es probable que ya haya desaparecido definitivamente como partido importante.

Durante décadas, el PAN de México, creado en 1939, fue el único partido de oposición significativo en un sistema de partido hegemónico dominado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Hasta 1982, en el contexto de un régimen autoritario que no permitía una oposición seria, nunca obtuvo más de 11% de los escaños en la Cámara de Diputados, y nunca tuvo un senador o un gobernador. Después de 1982, a

medida que las reglas del juego político cambiaban, el PAN se convirtió en un participante de importancia cada vez mayor. En 1989, por primera vez ganó varias contiendas por las gobernaciones estatales y, en la década de los noventa, el partido eligió una proporción cada vez mayor de senadores y diputados federales. En el año 2000, el candidato del PAN, Vicente Fox, ganó la elección presidencial, terminando así 71 años de hegemonía del PRI. El PAN no se unió oficialmente a la Internacional Demócrata Cristiana sino hasta 1998, y su identificación con la democracia cristiana a veces ha sido tenue. Desde su fundación, ha reunido entre sus miembros una mezcla de pragmatistas seculares y católicos practicantes que consideran su fe religiosa como la base de su acción política.

Los partidos democratacristianos en El Salvador (creado en 1960) y Guatemala (creado en 1955) disfrutaron de un breve éxito electoral en los años ochenta antes de su desplome en la década de 1990. El PDC salvadoreño disfrutó de algún triunfo electoral en los años sesenta incluso bajo un régimen militar que perpetraba el fraude electoral generalizado y no permitía el juego limpio. El líder del PDC, José Napoleón Duarte, probablemente habría ganado la elección de 1972 de no ser por el fraude. Cuando se tuvieron elecciones más limpias, aunque en el contexto de la guerra civil y de una fuerte represión, el PDC obtuvo la pluralidad de los escaños de la Asamblea en 1982, la presidencia en 1984 y una mayoría de los escaños de la Asamblea en 1985. De 1988 y hasta 1991, el partido siguió siendo un fuerte contendiente por el poder, pero después de 1991 sufrió un importante descenso electoral.

La Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG) tiene una historia paralela a la del PDC salvadoreño. La DCG, creada después del golpe militar de 1954, disfrutó de algún apoyo electoral en las siguientes tres décadas, pero las elecciones estuvieron caracterizadas por un fraude regular y generalizado. El régimen político era autoritario, y gobiernos sucesivos ejercieron una brutal represión. La oportunidad electoral para el partido llegó en 1985 en las elecciones presidenciales, legislativas y municipales, que marcaron el final de tres décadas de dictadura. Sin embargo, el partido demostró ser incapaz de gobernar en un ambiente de plena guerra civil, y a finales de los noventa prácticamente había desaparecido.

El PUSC de Costa Rica fue creado en diciembre de 1983 mediante la unión de cuatro partidos, entre ellos el PDC. El PUSC ha presentado el más importante desafío electoral al Partido de Liberación Nacional (PLN) desde la guerra civil de 1948. Los candidatos del PUSC ganaron las elecciones presidenciales de 1990, 1998 y 2002, y en sus primeras cuatro elecciones (1986-1998) el partido obtuvo más de 40% de los votos para el Congreso.

Hasta 1966, la democracia cristiana nunca tuvo mucho éxito electoral en Ecuador. El partido, llamado PDC hasta 1978 y Democracia Popular-Unión Demócrata Popular (DP-UDC) a partir de ese año, era conocido principalmente por Osvaldo Hurtado, el vicepresidente elegido que ocupó la presidencia de 1981 a 1984, después de que el presidente falleció en un accidente aéreo. En 1996, el partido tuvo su mejor desempeño en las elecciones al Congreso. Luego, en 1998, el candidato Jamil Mahuad de la DP obtuvo la presidencia, y el partido mejoró aún más su éxito electoral con 28% de las

diputaciones. Pero Mahuad renunció bajo presión militar y popular en el 2000, y todavía está por verse si el partido se recuperará de este golpe.

Los otros partidos democratacristianos en la región —y han existido bastantes— han tenido sólo un éxito electoral limitado. El Partido Popular Cristiano (PPC) peruano es entre ellos el único al que se analiza con detalle en este libro. El PPC ganó constantemente cerca de 10% de los votos en las tres elecciones nacionales de 1980 a 1990.

LAS DOS GENERACIONES DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA EN LATINOAMÉRICA

Uno de los factores que contribuyen a la diversidad de los partidos democratacristianos en Latinoamérica es que éstos han tenido dos generaciones. La primera comprendía a la Falange Nacional chilena (1938), al PAN mexicano (1939), al PDC brasileño —Partido Demócrata Cristão (1945)— y al COPEI venezolano (1946). La segunda incluye al PDC argentino (1955), al PDC peruano (1956), al PDC chileno (1957), al PDC salvadoreño (1960), al PDC uruguayo (1962) y al PDC ecuatoriano (1964). Las bases teológicas y las actitudes políticas de los partidos de la segunda generación eran, por lo general, más progresistas, lo que reflejaba los cambios en las doctrinas que prevalecían en la Iglesia.

Los partidos democratacristianos de ambas generaciones fueron influidos por las tendencias de la Iglesia católica y de la política latinoamericana. Los primeros partidos llevaban la marca del catolicismo anterior al Concilio Vaticano II.[1] En política, la Iglesia por lo general se alineaba con las fuerzas políticas conservadoras y hostiles al comunismo y al marxismo. La primera generación de líderes democratacristianos frecuentemente había participado en el movimiento laico de Acción Católica (Luque, 1986), en esa época más conservador y clerical que en décadas posteriores. El propósito de Acción Católica era crear un cuadro de líderes laicos bien educados, que participarían intensamente en la vida de la Iglesia y ayudarían a cristianizar a la sociedad por medio de su compromiso con los principios católicos en la vida pública (Souza, 1984; Poggi, 1967; Vaillancourt, 1980).

Los primeros partidos democratacristianos en México y Venezuela surgieron bajo gobiernos de centro-izquierda. El PAN fue creado en 1939 durante el periodo populista de izquierda de Lázaro Cárdenas (1934-1940), que nacionalizó la industria petrolera y fue el presidente más izquierdista durante el periodo de 71 años (1929-2000) de gobierno ininterrumpido del PRI. Desde el principio el PAN fue un partido heterogéneo, con un ala confesional dirigida por Efraín González Luna y un ala secular dirigida por Manuel Gómez Morin. El COPEI fue creado durante el periodo 1945-1948, cuando un gobierno de centro-izquierda y anticlerical trató de expandir la educación pública e imponer nuevos límites a la educación religiosa.

La segunda generación de partidos democratacristianos nació durante un momento diferente, marcado por la confluencia de cambios en la Iglesia católica y en la política latinoamericana. La década de 1950 se caracterizó por el ascenso de un pensamiento

eclesiástico y social más progresista dentro de sectores de la Iglesia latinoamericana, lo que llevó al Concilio Vaticano II (1962-1965) la convocatoria a Roma de los obispos del orbe para discutir sobre la misión de la Iglesia en el mundo moderno. El creciente énfasis en los aspectos más progresistas de la misión social de la Iglesia fue un pilar del pensamiento de la democracia cristiana.

Además, la Iglesia estaba dando una importancia renovada al patrocinio de grupos católicos laicos, en especial los que tomaban la forma de movimientos de Acción Católica que captaron la imaginación de muchos católicos de clase media en Latinoamérica en los años cincuenta y principios de los sesenta. A finales de la década de los cincuenta, en la mayoría de los países los grupos de Acción Católica se habían vuelto más progresistas que en las décadas anteriores. Acción Católica en los cincuenta y en los sesenta estaba al frente de innovaciones progresistas en la Iglesia latinoamericana (De Kadt, 1970; Lima, 1979; Mainwaring, 1986, pp. 60-75, 116-141; Souza, 1984). Algunos de estos laicos progresistas fueron miembros fundadores de la segunda generación de partidos democratacristianos. Los partidos democratacristianos en Argentina, Chile, Ecuador y Uruguay fueron ejemplos de los partidos de la segunda generación, más progresistas.

En tanto que los primeros partidos democratacristianos precedieron a la Guerra Fría, la segunda generación estuvo fuertemente influida por el en-frentamiento entre el Occidente y la Unión Soviética. Después de 1959, el impacto de la Revolución cubana dio un nuevo elemento a la política latinoamericana que inicialmente fue favorable para la democracia cristiana. La Revolución polarizó la política latinoamericana y convirtió a la región en un punto importante de la Guerra Fría. Según sus admiradores, la Revolución prometía un cambio social radical que pondría fin a siglos de injusticia y desigualdades sociales. Inspiró a muchos jóvenes a luchar por un cambio radical en sus propios países; grupos guerrilleros revolucionarios se esparcieron por el paisaje de la política latinoamericana en las décadas de 1960 y 1970. Para sus detractores, la Revolución cubana amenazaba con eliminar o limitar la propiedad privada, imponer el dominio del Estado y el gobierno autoritario, y restringir la libertad religiosa. Los conservadores y las fuerzas armadas, frecuentemente con el apoyo de los Estados Unidos, respondieron con una dura represión a la amenaza de la movilización popular y de los grupos izquierdistas.

La segunda generación de partidos democratacristianos inicialmente pareció ofrecer una vía intermedia entre la revolución y la reacción. Para sus defensores en Latinoamérica y sus partidarios en los Estados Unidos, la democracia cristiana ofrecía la promesa del futuro: un partido demócrata centrista que serviría como bastión contra el comunismo a la vez que reduciría las desigualdades y la pobreza que muchos analistas temían que sembrarían las semillas de la revolución. El título de un libro de 1967, *The Last, Best Hope: Eduardo Frei and Chilean Democracy* (Gross, 1967), nos sugiere las esperanzas que muchos depositaron en la democracia cristiana.

Los líderes democratacristianos de ambas generaciones de partidos creían que los católicos debían participar en el mundo de la política y actuar como instrumento laico para transformar el mundo político. Siguiendo la opinión de la Iglesia, consideraron que el socialismo revolucionario era anatema. Pero, por lo general, los partidos de la segunda

generación propusieron más enérgicamente las enseñanzas sociales reformistas que la Iglesia adoptó en los años cincuenta.

Las diferencias entre los partidos democratacristianos no siempre siguieron la pauta de que los más antiguos eran los más conservadores y los más recientes los reformistas. Entre los partidos democratacristianos de ambas generaciones se contaban algunos reformistas y algunos conservadores. Dentro de cualquiera de los partidos surgieron y decayeron sectores conservadores y sectores reformistas. Por ejemplo, en Chile prevaleció una orientación de centro-izquierda durante la presidencia de Eduardo Frei (1964-1970), pero en 1971 predominó una orientación más conservadora en respuesta a los temores producidos por el gobierno izquierdista del presidente Salvador Allende (1970-1973). Sin embargo, en general, los partidos más antiguos fueron más conservadores, y más reformistas los más recientes.

LA DEMOCRACIA CRISTIANA, LA IGLESIA CATÓLICA Y EL ESTUDIO DE LA POLÍTICA DE PARTIDO

Los estudiosos de este problema, ¿cómo deben entender el efecto de la religión sobre los partidos políticos que tienen alguna base religiosa? ¿Significan los orígenes religiosos de esos partidos que su comportamiento difiere del de los partidos no religiosos? ¿O es posible analizar los partidos con raíces religiosas de la misma manera que a los otros partidos?

Algunos estudiosos han hecho hincapié en la doctrina social católica como el factor clave para comprender a los partidos democratacristianos (Combellas Lares, 1985; Lynch, 1993, pp. 3-36; Van Kersbergen, 1995, pp. 192-228; Williams, 1967, pp. 36-65). Por lo general consideran importante la dimensión religiosa de los partidos democratacristianos. En otros análisis de los partidos democratacristianos se hacen pocas o ninguna referencia a la Iglesia católica y a su doctrina social. En su libro sobre la democracia cristiana en Europa occidental, Kalyvas (1996) propuso una alternativa intermedia entre estas dos posiciones. Subrayó la secularización y la orientación menos clerical de estos partidos, aunque reconoció las fuertes relaciones iniciales entre la Iglesia y la democracia cristiana. Los líderes democratacristianos "transformaron sus partidos en organizaciones independientes y seculares, con prioridades seculares, relajaron su dependencia de la Iglesia, evitaron la intervención de ésta y se convirtieron en importantes actores en las políticas de sus países, sin verse limitados por la Iglesia" (p. 242). Más adelante observa que "los intereses y las preocupaciones de la Iglesia se volvieron secundarios para estos partidos" (p. 245).

Estas divergencias entre los estudiosos que subrayan la importancia de la doctrina social de la Iglesia y las relaciones organizativas entre la Iglesia y la democracia cristiana y los que les restan importancia nos plantean interesantes preguntas teóricas sobre la forma en que deben estudiarse estos partidos. En la mayor parte estamos de acuerdo con Kalyvas, que consideró la doctrina de la Iglesia y las relaciones organizativas entre ésta y

los partidos como muy importantes en sus primeras fases, pero menos en fases posteriores. La doctrina social católica proporcionó una línea base ideológica indispensable (al menos en la gran mayoría de los casos) para los partidos democratacristianos en el momento de su creación y también generó lealtad a estos partidos entre los líderes y los activistas. No obstante, la gran diversidad programática e ideológica para entender las dinámicas y las estrategias de estos partidos en Latinoamérica muestra que es necesario ir más allá de estos principios doctrinales. Además, como argumenta Mainwaring en la conclusión, los partidos democratacristianos tendieron a volverse más seculares con el transcurso del tiempo. Su dependencia de la Iglesia disminuyó; la Iglesia se distanció públicamente de los partidos democratacristianos, si bien algunos clérigos siguieron mostrándoles simpatía, y los partidos hicieron mayor énfasis en su naturaleza secular. Estos factores indican que por muy importante que haya sido la doctrina social católica como estímulo para la creación de partidos democratacristianos (Hawkins, en este libro), tiene menor importancia para entender la dinámica ulterior del partido.

En Latinoamérica, como en Europa, los partidos democratacristianos buscaron su inspiración en las enseñanzas sociales de la Iglesia católica. Se esforzaron por introducir esas enseñanzas sociales en la política electoral. En Latinoamérica fueron creados por católicos laicos comprometidos con la construcción de un mundo mejor mediando su participación en política. Además, como argumenta Kirk Hawkins en su ensayo en este libro, con frecuencia fueron los clérigos quienes diseminaron la doctrina social de la Iglesia, lo que indirectamente fue la inspiración para crear partidos democratacristianos.

Cualquiera que fuese la inspiración religiosa, los partidos democratacristianos de Latinoamérica no fueron creaciones oficiales de la Iglesia. Por el contrario, así como ocurrió en Europa occidental (Kalyvas, 1996, pp. 232-256), los democratacristianos de Latinoamérica desde muy temprano afirmaron que no estaban relacionados oficialmente con la Iglesia.[2] Un año después de su creación, el PDC salvadoreño emitió una declaración en la que "categóricamente niega estar dirigido en cualquier forma por la Iglesia católica o por cualquier otro cuerpo religioso, pues sostiene que la política y la religión no deben mezclarse" (citado en Williams, 1967, p. 73). Al escribir sobre el PDC salvadoreño, Webre (1979, p. 53) observa que "a pesar de la inspiración y simbolismo religiosos evidentes en el movimiento, no había relaciones formales y sólo muy pocas informales, entre la Iglesia y él. De hecho, en la mayoría de los casos ni los partidos ni la Iglesia estaban dispuestos a aceptar o a propiciar esa relación".

A uno de los dos principales fundadores del PAN de México, Manuel Gómez Morín, se le preguntó en una entrevista en 1964 sobre la relación entre el PAN y el clero, y respondió:

> Relación con el clero, con la jerarquía mexicana, no hay ninguna fuera de la personal que los católicos miembros del partido tienen con sus prelados y con sus párrocos. No; la Iglesia no tiene que ver con la acción política; ni hemos querido, ni habríamos aceptado la intervención de la jerarquía en los trabajos del partido. Por otra parte, con mucha frecuencia en estos 25 años [desde la creación del PAN], miembros de la jerarquía han sido abiertamente hostiles al partido y han criticado [...] sus posiciones políticas [...]. Por otra

parte, como partido político, Acción Nacional no tiene carácter religioso alguno, ni pide a sus miembros declaraciones de fe, ni de sus convicciones religiosas [citado en Loaeza, 1999, pp. 160 y 165].

De manera similar, un académico y activista del COPEI en Venezuela escribió que "aunque la democracia cristiana se considera a sí misma un movimiento de inspiración cristiana, también subraya su carácter no confesional y su independencia con respecto a la Iglesia católica. No les pide a sus militantes que se adhieran a algún credo específico" (Combellas Lares, 1985, p. 45).

En sus posiciones oficiales, aunque no siempre en la práctica, la jerarquía de la Iglesia en la mayoría de los países fue igualmente clara sobre la separación entre la democracia cristiana y la Iglesia.[3] El arzobispo de México, Luis María Martínez, declaró en 1943: "Ni con el Partido Acción Nacional […], ni con ninguna organización de carácter cívico o político, aunque estén formadas por católicos y tengan tendencias católicas, está vinculada la Iglesia católica en México, pues en muchas ocasiones ha afirmado y comprobado, con su conducta, su propósito firme y sincero de mantenerse en el campo espiritual que le corresponde" (citado en Loaeza, 1999, p. 230). En una vena similar, 24 obispos argentinos firmaron una declaración oficial negando cualquier relación con el Partido Demócrata Cristiano cuando fue creado en 1955: "El episcopado argentino no ha aceptado, ni podrá nunca aceptar, cualquier entendimiento con algún partido político para defender las libertades y los derechos de la Iglesia" (citado en Williams, 1967, p. 181).

Aunque católicos activos estaban en la vanguardia que creó los partidos democratacristianos en Latinoamérica, los documentos de los partidos y sus líderes proclamaron que el partido estaba abierto a todos los individuos. En algunos casos, los líderes más religiosos chocaron con los que tenían una visión más secular. En México, católicos devotos y panistas seculares han tenido diferentes visiones de su partido desde el momento de su fundación. A pesar de la fuerte identidad católica de una facción, el PAN no se unió a la Internacional Demócrata Cristiana hasta 1998, cuando irónicamente ya era un partido mucho menos católico de lo que había sido desde 1940 hasta 1982.

La separación institucional entre el partido y la Iglesia católica no debe oscurecer las estrechas relaciones entre los dos durante las décadas fundacionales de la democracia cristiana. En algunos países los conflictos religiosos ayudaron a inspirar la creación de la democracia cristiana. Por ejemplo, en Venezuela, desde 1946, cuando fue creado y hasta el golpe de Estado de 1948, el COPEI defendió los intereses católicos en el conflicto de la Iglesia con el gobierno de Acción Democrática (AD), atacando a esta última por socavar los intereses de la Iglesia (Herman, 1980, pp. 25-36; Levine, 1973, pp. 62-93). El sesgo anticlerical de la Revolución mexicana contribuyó a la creación y supervivencia del PAN. En Venezuela, esta marcada división religiosa inicial se suavizó durante la dictadura de Pérez Jiménez (1948-1958) y después se debilitó aún más. En comparación, en México la división religiosa entre el PAN y el PRI permaneció vigente durante décadas. En Chile, en los sesenta era más probable que los votantes religiosos apoyaran al PDC (Smith, 1982, pp. 105-107).

Con el transcurso del tiempo, al igual que ocurrió en Europa occidental (Kalyvas,

1996), los partidos democratacristianos en Latinoamérica se hicieron más seculares que en el momento de su creación. No obstante, muchos activistas retuvieron la idea de que su partido debía defender los valores inspirados por las enseñanzas sociales de la Iglesia. El capítulo de Ignacio Walker en este libro es emblemático: Walker, uno de los intelectuales más destacados del PDC de Chile, ve a su partido como un partido no confesional y no clerical, cuya inspiración es a la vez humanista y cristiana.

La tendencia a la secularización de *algunos* partidos democratacristianos es sugerida en el cuadro II.1, que presenta datos de encuestas realizadas en cinco cámaras bajas nacionales (o en legislaturas unicamerales).[4] En México y en Chile los democratacristianos expresaron opiniones religiosas más tradicionales que las de otros miembros del Congreso; en Costa Rica y en Ecuador no fue así. (En Venezuela el panorama no es lo bastante completo para formar un juicio definitivo.) El cuadro II.1 también muestra diferencias entre los partidos democratacristianos de diferentes países. Los diputados del PAN formaban la base del polo religioso tradicional entre los partidos democratacristianos en el cuadro II.1, mientras que los diputados de la Democracia Popular ecuatoriana tenían el perfil menos religioso.

El cuadro II.2 ofrece información sobre la práctica religiosa y los valores religiosos y morales de los votantes democratacristianos en Chile, México y Venezuela, de 1995 a 1997.[5] En este análisis de la relación entre dos variables, los votantes del PDC chileno eran más religiosos que los votantes de los dos partidos de centro-izquierda, el PS y el PPD, y también un poco más religiosos que los votantes de uno de los dos partidos conservadores (Renovación Nacional [RN]). En México (tal como informan Magaloni y Moreno, también en este libro), los votantes del PAN fueron en realidad *menos* religiosos que los votantes del PRI, aunque eran un poco más religiosos que los votantes del PRD. En general, los votantes del PAN eran más religiosos que el votante promedio. Había una divergencia entre los políticos del PAN, que eran más religiosos que sus contrapartes de otros partidos, y los votantes del PAN, que no eran más religiosos que el votante promedio. En Venezuela, en estas cuestiones los electores del COPEI se parecían mucho a los votantes de AD y de Causa R, así como al votante promedio.

La similitud de opinión entre los votantes de los diversos partidos sobre estos temas religiosos sugiere un debilitamiento del conflicto entre los partidos por causas religiosas en estos países. En el pasado, en muchos países latinoamericanos el conflicto entre la Iglesia y el Estado produjo una fuerte polarización, que a veces desembocó en guerra civil o en el desplome de los regímenes, o en ambas situaciones (Levine, 1973; Mecham, 1934). El debilitamiento de estas divisiones se reflejó en el perfil de los votantes democratacristianos a mediados de la década de 1990; los votantes del PAN y del COPEI no son distintivamente religiosos.

CUADRO II.1. *Actitudes de los diputados sobre temas religiosos y morales*

Partido y país	Diputados en la encuesta	*Asisten a la iglesia por lo menos una vez al mes (%)*	*Religiosidad*[a] *(media)*	*Favorecen los valores cristianos en política*[b] *(media)*	*Favorecen sin condiciones el divorcio civil (%)*	*Se oponen al aborto en todas las circunstancias (%)*
PDC, Chile	29	61	5.6**	2.3**	63	90*
Otros, Chile	60	53	4.6	3.0	53	73
PAN, México	31	77***	—	—	10***	81***
Otros, México	95	49	—	—	49	22
PUSC, Costa Rica	22	68	6.1	2.4	32	59
Otros, Costa Rica	27	54	5.6	2.8	41	48
COPEI, Venezuela	18	—	—	—	56	22**
Otros, Venezuela	51	—	—	—	73	4
DP, Ecuador	31	13***	5.1	2.3**	36	59
Otros, Ecuador	81	48	5.4	2.8	42	69

NOTA: La información excluye a los diputados que no respondieron o no supieron cómo responder. La falta de respuestas explica algunos porcentajes que no serían posibles si en una determinada categoría hubiera respondido el 100%. La prueba estadística es una prueba *Z* de dos colas (dos regiones de rechazo) para las columnas con proporciones o una prueba *t* de dos colas (para las columnas con promedios) para determinar si los diputados democratacristianos tienen la misma distribución de respuestas que todos los otros diputados en conjunto.

* Significativo en $p \leq .10$. ** Significativo en $p \leq .05$. *** Significativo en $p \leq .01$.

[a] 1 = el menos religioso; 10 = el más religioso. No hay datos disponibles para Venezuela.

[b] 1 = el más favorable a los valores cristianos en política; 5 = el más favorable a los valores seculares en política. No están disponibles los datos para México y Venezuela.

FUENTES: Manuel Alcántara, director. Conjunto de datos del Proyecto de Élites Latinoamericanas (PELA). Universidad de Salamanca (1994-2000). Se emplearon datos de la legislatura de 1998-2000 para Chile (Estudio núm. 3); de la legislatura 1998-2002 para Costa Rica (Estudio núm. 15); de la legislatura 1998-2002 para Ecuador (Estudio núm. 23); de la legislatura 1997-2000 para México (Estudio núm. 1); de la legislatura 1994-1998 para Venezuela (Estudio núm. 36). Preguntas 70, 70a, 70b, 73 y 74, respectivamente.

CUADRO II.2. *Actitudes de los ciudadanos sobre temas religiosos y morales*

País	*Partido*	*Miembros del partido*	*Miembros de la Iglesia (%)*	*Católicos (%)*	*Asisten a la iglesia por lo menos una vez por semana (%)*	*Afirman que Dios es muy importante en sus vidas*[a] *(%)*	*Afirman que el aborto nunca está justificado*[b] *(%)*	*Afirman que el divorcio nunca está justificado*[c] *(%)*
Chile	PS	68	48.6**	63.2**	25.3	55.2*	60.3*	23.9
	PPD	123	48.4**	70.7	19.5*	50.0***	63.1	21.3**
	PDC	215	62.3	77.1	30.0	66.4	71.6	31.3
	RN	63	63.5	85.5	17.4*	54.0*	61.9	35.5
	UDI	63	60.9	85.2	22.2	61.3	76.6	41.9
	Total que respondió	1 000	58.2	71.1	24.3	57.5	67.8	33.8
México	PRD	272	66.9	61.4	43.0	33.8***	48.2**	33.1
	PRI	397	75.3***	71.8***	51.6*	59.2**	64.7**	39.3
	PAN	368	65.7	58.4	45.4	46.7	57.6	35.1
	Total que respondió	1 510	69.6	63.5	46.4	49.1	57.0	36.2
Venezuela	Causa R	87	43.7	83.9	35.6	80.2	61.2	20.5**
	AD	225	43.2	84.0	35.5	78.6	72.1	38.5
	COPEI	97	47.4	78.4	36.1	76.8	64.6	36.8
	Total que respondió	1 200	44.9	82.5	30.9	77.6	68.8	35.7

NOTA: Los partidos democratacristianos están en cursivas. La prueba estadística es una prueba Z de dos colas para determinar si los diputados de un partido en particular tienen una diferente distribución de respuestas en comparación con los diputados democratacristianos. * Significativo en $p \leq .10$. ** Significativo en $p \leq .05$. *** Significativo en $p \leq .01$.

[a] La escala va del 1 (no importante) al 10 (muy importante). El porcentaje que se presenta es el que respondió 10, Dios es muy importante en mi vida.

[b] La escala en esta pregunta va del 1 (el aborto nunca está justificado) al 10. El porcentaje que se presenta se refiere a los que contestaron 1, el aborto nunca está justificado.

[c] La escala de esta pregunta va del 1 (el divorcio nunca está justificado) al 10. El porcentaje que se presenta es el de las personas que respondieron 1, el divorcio nunca está justificado.

FUENTES: Preguntas 28, 179, 181, 190, 199 y 200, respectivamente, de los World Values Surveys de 1995-1996. La pregunta sobre la preferencia de voto por partido es la 210.

Hasta ahora, nuestro argumento sobre la evolución de la relación entre la religión, la Iglesia católica y la política ha sido un reflejo de lo que narra Kalyvas (1996) para Europa occidental. No obstante, aún más de lo que argumenta Kalyvas, la relación entre la fe religiosa, la Iglesia católica y la política sigue siendo importante para entender a la democracia cristiana en Latinoamérica. Hay dos razones por las que condicionamos la perspectiva de Kalyvas y argumentamos que las relaciones entre la Iglesia católica, las creencias religiosas y la democracia cristiana siguen siendo importantes incluso en las décadas recientes, cuando los partidos se han distanciado de la Iglesia. Primero, como se muestra en los cuadros II.1 y II.2, en algunos países los diputados y los votantes democratacristianos son más religiosos que los diputados y votantes de otros partidos. La tendencia hacia la secularización de los partidos democratacristianos no ha borrado uniformemente la inspiración religiosa que los hizo surgir. Incluso aunque estos partidos han dependido menos de la Iglesia católica y de la creencia religiosa en las décadas recientes que en las fases de su fundación, algunos partidos democratacristianos

continúan marcados por sus orígenes religiosos.

Segundo, los cambios teológicos e institucionales en la Iglesia católica continúan influyendo en los debates sobre la religión y sus vínculos con la política, con importantes ramificaciones para los democratacristianos. Por ejemplo, el ascenso de la teología de la liberación y del cristianismo revolucionario en Latinoamérica en la década de 1960 afectó significativamente a la democracia cristiana. En Argentina y Uruguay muchos democratacristianos simpatizaron o de plano aceptaron el socialismo revolucionario. En ambos países las facciones mayoritarias de partidos democratacristianos pequeños tomaron posiciones políticas radicales. En Perú, una facción del PDC adoptó posiciones izquierdistas mientras que una facción disidente se separó y formó otro partido, el PPC. En resumen, los desarrollos que se presentaban en la Iglesia y en la teología católica continuaron influyendo sobre la forma en que muchos democratacristianos veían la relación entre la fe y la acción política.

IDEOLOGÍA Y POSICIONES DEMOCRATACRISTIANAS

La mayoría de los análisis que se han ocupado de la ideología democratacristiana han enfocado (por lo general implícitamente) los aspectos comunes a varios países y partidos.[6] Convenimos en que la base ideológica inicial de la democracia cristiana compartió importantes puntos de referencia. No obstante, al transcurrir el tiempo, los partidos democratacristianos de Latinoamérica evolucionaron en direcciones muy diferentes.

Dado que los ensayos de Paul Sigmund y de Soledad Loaeza tratan con cierto detalle la ideología democratacristiana, aquí nos limitamos a un breve bosquejo (véase también Combellas Lares, 1985, pp. 29-72; Van Kersbergen, 1995, pp. 177-228; Loaeza, 1999; Lynch, 1991, pp. 35-86; Lynch, 1993, pp. 3-22; Webre, 1979, pp. 49-68; Williams, 1967). Como arguye Paul Sigmund en su capítulo de este libro, una de las características definitorias de la ideología democratacristiana desde la década de 1930 hasta las de 1980 o de 1990 fue la búsqueda de una tercera vía entre el socialismo y el capitalismo liberal. Lo que significaba exactamente la tercera vía por lo general era muy nebuloso en los programas y escritos democratacristianos, pero es posible percibir los lineamientos generales. Aunque reconocían un papel para el Estado, la ideología democratacristiana también hacía énfasis en la sociedad civil y las organizaciones autónomas. Condenaba al socialismo por socavar la libertad y los derechos personales, por exaltar al Estado sobre la comunidad, y por sus bases materialistas.

Los democratacristianos criticaban el concepto marxista de que las clases tienen intereses inexorablemente antagónicos. A diferencia de la noción de la inevitable lucha de clases, defendían el concepto de un bien común y afirmaban la posibilidad de la armonía de las clases y de políticas que beneficiaran a todas las clases. A la vez, criticaban el capitalismo de mercado por su énfasis en un desenfrenado individualismo y por generar desigualdades sociales. Mientras que el pensamiento liberal ha hecho hincapié en los

derechos individuales, la ideología democratacristiana ha planteado un equilibrio entre el individuo y el grupo y entre los derechos y las responsabilidades individuales.

En su retórica, los democratacristianos han subrayado la justicia social, aunque sus críticos en la izquierda y en el centro-izquierda con frecuencia han puesto en duda la profundidad de ese compromiso. Una manifestación de las actitudes acerca de los problemas sociales son las opiniones con respecto al gasto del gobierno en programas sociales. Si bien los problemas abstractos sobre la justicia social pueden ser cuestión de valores (es decir, todo mundo está en favor de la justicia social), el gasto público representa un costo real y, por lo tanto, las preguntas sobre las preferencias en el gasto pueden servir como buen barómetro de las preferencias de los políticos. En las encuestas del Proyecto de Élites Latinoamericanas se preguntó a los diputados si estaban en favor de aumentos en el gasto del gobierno para seguros de desempleo, vivienda y pensiones. Los resultados se presentan en el cuadro II.3. En Chile, Costa Rica, Ecuador y México, los diputados democratacristianos tenían preferencias más o menos similares a las de los diputados de los demás partidos en conjunto. Acerca de estos temas sociales, los diputados democratacristianos estaban a la mitad del espectro político: no eran tan favorables al gasto público como los partidos de izquierda, ni tan conservadores como otros partidos derechistas. En estos temas los democratacristianos no eran tan conservadores como a veces se les considera.

CUADRO II.3. *Actitudes de los votantes democratacristianos sobre la igualdad social*

		Porcentaje que favorece aumentar el gasto del Estado para		
Partido y país	*Diputados (número)*	*seguro de desempleo*	*vivienda*	*pensiones*
PDC, Chile	29	93**	59	93
Otros, Chile	60	70	57*	92
PAN, México	31	55	77	71*
Otros, México	95	57	84	85
PUSC, Costa Rica	22	38**	86	68
Otros, Costa Rica	27	68	81	59
DP, Ecuador	31	75	90	81
Otros, Ecuador	81	68	94	80

NOTA: La información excluye a los diputados que no respondieron o que no sabían cómo responder. La prueba estadística es una prueba *Z* de dos colas para determinar si las respuestas de los diputados democratacristianos tienen la misma distribución que las respuestas de todos los otros diputados en conjunto. No había datos disponibles para Venezuela.

* Significativo en $p \leq .10$. ** Significativo en $p \leq .05$. *** Significativo en $p \leq .01$.

FUENTE: La misma que para el cuadro II.2, pregunta 39.

CUADRO II.4. *Actitudes de los votantes democratacristianos sobre la igualdad social*

País	*Partido*	*Posición sobre la distribución del ingreso (V125) (media)*	*Posición sobre la responsabilidad del gobierno contra la individual (V127) (media)*
Chile	PS	4.9	4.9
	PPD	5.6***	4.5
	PDC	4.8	4.5
	RN	5.6***	4.7
	UDI	6.0***	4.7
	Total que respondió	5.2	4.6
México	PRD	5.5	4.9
	PRI	6.1	5.3
	PAN	6.3	4.9
	Total que respondió	6.0	5.0
Venezuela	Causa R	5.6	4.9
	AD	5.4	5.3
	COPEI	5.2	4.7
	Total que respondió	5.6	5.4

NOTA: Los partidos democratacristianos están en cursivas. La prueba estadística es una prueba t de dos colas para determinar si los votantes de partidos específicos tenían la misma media que los partidos democratacristianos (PDC, PAN, COPEI). * Significativo en $p \leq .10$. ** Significativo en $p \leq .05$. ***Significativo en $p \leq .01$.

FUENTES: World Values Survey, preguntas 125, 127 y 210 del cuestionario en inglés. La pregunta 125 es: "¿Cómo se colocaría usted en esta escala? 1 significa que los ingresos deben igualarse más. 10 significa que necesitamos mayores diferencias de ingresos como incentivos para el esfuerzo individual". La pregunta 127 es: "¿Cómo se colocaría usted en esta escala? 1 significa que el gobierno debe tomar más responsabilidad para asegurar que toda persona tenga las cosas necesarias; 10 significa que las personas deben tomar más responsabilidades para proveerse a sí mismas": La pregunta 210 es: "Si hubiera elecciones nacionales mañana, ¿por qué partido de los de esta lista votaría usted? Si no sabe, ¿qué partido le atrae más?"

El cuadro II.4 utiliza información de la "ola" 1995-1997 del World Values Survey para evaluar las actitudes de los votantes democratacristianos en Chile, México y Venezuela con respecto a los temas de justicia social. El hallazgo más notable es la gran convergencia que hay entre los votantes de todos los partidos sobre estas dos preguntas. Es pequeña la distancia entre miembros de partidos en los que las posiciones de sus diputados divergen mucho (por ejemplo, los partidos conservadores chilenos en comparación con el PPD y el Partido Socialista Chileno).

Históricamente, los democratacristianos han argumentado que el capitalismo liberal ha dado por resultado desigualdades y promovido el bien individual sobre el bien común. El capitalismo de mercado, afirmaban, no ofrecía protección a los pobres, y el concepto del

individuo humano en el capitalismo clásico, basado en individuos que promueven su propio interés, era estéril espiritualmente. En la visión comunitaria de los democratacristianos se respetaría la propiedad privada, pero se tendría que prestar atención al cumplimiento de su "función social". Aunque rechazaba el dominio del Estado sobre la persona, la ideología democratacristiana consideraba al Estado un instrumento útil para corregir los abusos del capital privado. Un portavoz intelectual del COPEI, Ricardo Combellas Lares (1985, p. 46), escribió: "El objetivo del Estado es asegurar y promover el bien común […] esto explica el carácter intervencionista del Estado en su ambiente social". Siguiendo las enseñanzas sociales de la Iglesia después de 1891, el discurso democratacristiano hizo énfasis históricamente en la dignidad del trabajo y en la importancia de una remuneración justa.

A pesar de su inspiración doctrinal común, en la práctica los partidos democratacristianos latinoamericanos han adoptado posiciones que varían mucho en el debate entre las políticas económicas dirigidas por el Estado y las orientadas por el mercado. El PAN ha estado históricamente más orientado al mercado que sus contrapartes democratacristianos en la región. Surgió en oposición al PRI gobernante, que promovió el desarrollo dirigido por el Estado desde los años treinta hasta 1982. Hasta la década de 1980, el PAN y el PRI divergían significativamente en el debate Estado/mercado; las posiciones del PAN orientadas al mercado atrajeron el apoyo de la comunidad empresarial. (Esta divergencia disminuyó en los años ochenta y noventa, a medida que el PRI se acercó a posiciones más orientadas al mercado.) El PUSC de Costa Rica ha sido constantemente más favorable al mercado que el PLN (Alfaro Salas, 2001, pp. 72-105). En el extremo favorable al Estado de la gama democratacristiana, el PDC chileno adoptó políticas centradas en el Estado cuando gobernó de 1964 a 1970.

Estas diferencias entre los varios partidos democratacristianos con respecto al papel del Estado en la economía son evidentes en la información de la encuesta que se muestra en el cuadro II.5. En Chile, los diputados democratacristianos tenían posiciones más favorables al Estado que los no democratacristianos en cuatro de las cinco preguntas del cuadro II.5. En México, por el contrario, los diputados del PAN estaban mucho más orientados al mercado que el resto de la Cámara de Diputados. En Costa Rica, los diputados del PUSC estaban más orientados al mercado en dos de las preguntas, pero en las otras tres no diferían estadísticamente de la media en el Congreso. La DP ecuatoriana está muy cerca de la media en el Congreso en la mayoría de estas preguntas con respecto al papel del Estado en el desarrollo económico, aunque está más orientada al mercado en la tercera pregunta.

CUADRO II.5. *Actitudes de los diputados sobre el papel del Estado en el desarrollo económico*

Partido y país	*Porcentaje que está de acuerdo en que* en una sociedad compleja, el Estado no puede resolver eficientemente los problemas de los ciudadanos	la intervención estatal es la única forma de reducir las desigualdades sociales	el Estado debe limitar sus actividades a ciertas áreas (salud, educación, justicia, etc.)	el Estado debe intervenir tan poco como sea posible en la sociedad	*Autoubicación media: ¿favorece usted una economía regulada por el Estado o por el mercado?*[a]
PDC, Chile	14***	79***	62	31***	3.2***
Otros, Chile	55	46	71	63	3.8
PAN, México	52	27***	87***	74***	___[b]
Otros, México	39	71	50	11	___[b]
PUSC, Costa Rica	64	54	62	41*	3.4**
Otros, Costa Rica	59	74	62	19	2.9
DP, Ecuador	77	65	90*	39	3.3
Otros, Ecuador	79	57	75	48	3.3

NOTA: La información excluye a los diputados que no respondieron o que no sabían cómo contestar. No hubo datos disponibles para Venezuela. La prueba estadística es una prueba Z de dos colas (para diferencias en las proporciones) o una prueba t de dos colas (para diferencias en las medias) a fin de determinar si los diputados democratacristianos tenían la misma distribución de respuestas que todos los demás diputados combinados. * Significativo en $p \leq .10$. ** Significativo en $p \leq .05$. *** Significativo en $p \leq .01$.

[a] 1 = los más orientados al Estado; 5 = los más orientados al mercado.

[b] Esto no se preguntó en México.

FUENTE: La misma que para el cuadro II.2, preguntas 34 y 34a.

Si se hace una comparación entre los partidos democratacristianos (en vez de comparar a los diputados democratacristianos con otros de su país, como en el párrafo anterior), se observan notorios contrastes entre los partidos. Excepto en la última pregunta, los diputados democratacristianos chilenos estaban menos orientados al mercado libre que sus contrapartes de cualquier otro país, y el PAN era el que estaba más orientado al mercado libre entre estos cinco partidos. A partir de 1980, el PPC peruano también estuvo entre los partidos más orientados al mercado.

El cuadro II.6 presenta información acerca de las actitudes de los diputados sobre la privatización de las industrias y servicios públicos, dos temas importantes relacionados con el papel del Estado en la economía. Una respuesta afirmativa a estas preguntas expresaba una posición radical favorable al mercado: indicaba apoyo para la privatización de *todas* las industrias o servicios públicos propiedad del Estado. En vista de la forma en que se planteó la pregunta, no es sorprendente que sólo una pequeña minoría de quienes respondieron haya expresado una opinión favorable. Los diputados del PDC chileno eran menos propensos a tener opiniones radicales favorables a la privatización que los diputados de los otros partidos chilenos. Por el contrario, era más probable que los diputados del PAN y el COPEI tuvieran opiniones radicales favorables a la privatización que los otros diputados de sus respectivos países. En estas dos preguntas los diputados del PUSC y de la DP no diferían estadísticamente de los otros diputados de Costa Rica y de

Ecuador, respectivamente. Si ahora se hacen comparaciones entre los partidos democratacristianos, el PAN es el más favorable a las privatizaciones; el PDC chileno, el menos favorable, y el PUSC y la DP ocupan una posición intermedia.

El cuadro II.7 proporciona información adicional con respecto a la posición de los partidos democratacristianos sobre la igualdad social, en este caso desde la perspectiva de los votantes, en lugar de la de los diputados. Usamos quizás las dos mejores preguntas en los World Values Survey para conocer las opiniones sobre el liberalismo económico. En la primera pregunta una mayoría muestra menos apoyo para la propiedad privada en comparación con la pública; en la segunda, por el contrario, un alto porcentaje muestra mayor apoyo para las posiciones de mercado abierto. Lo que nuevamente resalta en la información de la encuesta a los ciudadanos es la convergencia entre todos los partidos, incluso aquellos que tienen fuertes diferencias en el nivel de la élite.

CUADRO II.6. *Actitudes de los diputados sobre la privatización*

Partido y país	*Diputados en la encuesta (número)*	*Porcentaje que está de acuerdo con las siguientes posiciones:*	
		Favorece privatizar todas las industrias estatales	*Favorece privatizar todos los servicios públicos*
PDC, Chile	29	7**	4***
Otros, Chile	60	29	32
PAN, México	31	26***	13**
Otros, México	95	0	3
PUSC, Costa Rica	22	10	14
Otros, Costa Rica	27	4	8
COPEI, Venezuela	18	28***	41
Otros, Venezuela	51	4	21
DP, Ecuador	31	13	10
Otros, Ecuador	81	18	13

NOTA: La información excluye a los diputados que no respondieron o no sabían cómo responder. La prueba estadística es una prueba Z de dos colas para determinar si los diputados democratacristianos tenían la misma distribución de respuestas que todos los otros diputados combinados. * Significativo en $p \leq .10$. ** Significativo en $p \leq .05$. *** Significativo en $p \leq .01$.

FUENTE: La misma que para el cuadro II.2, preguntas 42 y 43.

En la década de 1960 la mayoría de los partidos democratacristianos en Latinoamérica favorecían un importante papel del Estado en el desarrollo. Esta posición fue la prevaleciente desde los años cincuenta hasta los setenta, pero se le empezó a criticar en los ochenta, cuando casi todos los países de la región cambiaron hacia políticas más orientadas al mercado (Edwards, 1995). Después del cambio en la ortodoxia prevaleciente, la mayoría de los partidos democratacristianos se desplazaron hacia políticas más orientadas al mercado en los años ochenta y noventa. El deterioro y colapso eventual de la Unión Soviética, el final del sueño socialista, y la tendencia regional hacia políticas más orientadas al mercado ayudaron a que los partidos democratacristianos se alejaran de las políticas económicas estatales.

CUADRO II.7. *Actitudes de los ciudadanos sobre el liberalismo económico, por preferencia según el voto: Chile, México y Venezuela*

País	Partido	*Posición ante la propiedad privada contra la propiedad del gobierno (V126) (media)*	*Entrevistados que favorecían la liberación de las importaciones (V133) (%)*
Chile	PS	6.2	22.7
	PPD	5.9	24.4
	PDC	5.9	21.8
	RN	6.0	29.5
	UDI	5.0**	29.0
	Total que respondió	5.9	23.1
México	PRD	4.8	14.3
	PRI	4.9	13.9
	PAN	4.7	17.4
	Total que respondió	4.8	15.2
Venezuela	Causa R	4.6	11.0
	AD	4.7	12.3
	COPEI	5.3	15.2
	Total que respondió	4.9	12.1

NOTA: Los partidos democratacristianos están en cursivas. La prueba estadística para V126 es una prueba *t* de dos colas para determinar si los votantes de partidos específicos tienen la misma media que los votantes de los partidos democratacristianos (PDC, PAN, COPEI). La prueba estadística para V133 es una prueba *Z* de dos colas para determinar si los votantes de partidos específicos tienen el mismo porcentaje que quienes contestaron que favorecían la liberalización de las importaciones que los votantes de los partidos democratacristianos (PDC, PAN, COPEI). Ninguna diferencia fue estadísticamente significativa en los niveles convencionales para V133. * Significativo en $p \leq .10$. ** Significativo en $p \leq .05$. *** Significativo en $p \leq .01$.

FUENTES: World Values Survey 1995-1997, preguntas 126 y 133, respectivamente. La pregunta sobre la preferencia en el voto es la 210. La pregunta 126 es: "¿Cómo se ubicaría usted en esta escala? 1 significa que se debe aumentar la propiedad privada de empresas e industrias; 10 significa que se debe aumentar la propiedad gubernamental de empresas e industrias". La pregunta 133 es: "¿Piensa usted que es mejor que *1)* se puedan importar y vender aquí bienes producidos en otros países si la gente quiere comprarlos, o que *2)* deben existir límites estrictos sobre la venta de bienes extranjeros aquí para proteger los empleos de las personas de este país?" La pregunta 210 es: "Si hubiera elecciones nacionales mañana, ¿por qué partido de esta lista votaría? Si no sabe, ¿qué partido le atrae más?"

Aunque sigue siendo el partido que más favorece el intervencionismo estatal entre los más importantes partidos democratacristianos, el PDC de Chile ejemplifica la tendencia hacia las políticas orientadas al mercado, como se menciona en el ensayo de Ignacio Walker. Después de observar la fuerte recuperación de la economía chilena de 1984 a 1989 y el desalentador fracaso en los años ochenta de los planes heterodoxos de estabilización en las vecinas Argentina, Bolivia, Brasil y Perú, los líderes democratacristianos en Chile adoptaron políticas orientadas al mercado. Los dos presidentes más recientes, que procedían del PDC, Patricio Aylwin (1990-1994) y Eduardo Frei (1994-2000), encabezaron el más rápido crecimiento en Latinoamérica en los noventa por medio de esas políticas, a pesar de una recesión a finales de la década. La DP-UDC ecuatoriana favoreció un papel importante del Estado en la economía en los años setenta y a principios de los ochenta, pero en julio de 1993, en la revisión de su declaración de principios, el partido propuso políticas orientadas al mercado. La tendencia conservadora en la política del partido continuó en 1995-1998 con la formación de una alianza con el derechista PSC, del cual se había separado originalmente la democracia cristiana en los años sesenta.

Las más de las veces, los programas y escritos democratacristianos de dirigentes destacados han sido más progresistas que la práctica del partido. En los efervescentes sesenta, caracterizados por el surgimiento de movimientos guerrilleros revolucionarios en muchos países latinoamericanos, los democratacristianos frecuentemente parecían ser la principal alternativa entre el *statu quo* y la revolución. Rechazaron la lucha de clases e insistieron en la conveniencia y posibilidad de unos esfuerzos de reforma que beneficiaran a todas las clases. Uno de los primeros documentos del PDC chileno, de su congreso nacional de 1959, es emblemático de esta fe en la posibilidad de efectuar reformas por medios pacíficos y democráticos. "El Partido Demócrata Cristiano invita a todos los chilenos —hombres, mujeres, jóvenes—, sin importar su clase social o religión, a unírsele para luchar democráticamente por un nuevo orden social basado en la hermandad y la justicia" (citado en Grayson, 1968, p. 336).

En toda Latinoamérica, los partidos democratacristianos han profesado su compromiso con la democracia. Con pocas excepciones, su práctica ha sido congruente con ese discurso. Las excepciones parciales comprenden el apoyo de algunos líderes democratacristianos a los golpes en Venezuela en 1948 y en Chile en 1973, así como una excesiva tolerancia de regímenes patentemente antidemocráticos en El Salvador y Guatemala en los sesenta y setenta. Tanto en Venezuela (1948) como en Chile (1973) los democratacristianos que apoyaron los golpes de Estado creyeron que los gobiernos en el poder representaban una amenaza a la democracia. Creían estar defendiendo, no minando, la democracia; pero el efecto fue el contrario.

UBICACIÓN IZQUIERDA-DERECHA

La diversidad de los partidos democratacristianos de Latinoamérica queda

particularmente en claro cuando examinamos las posiciones izquierda-derecha de los partidos. Estos partidos han cubierto una amplia gama del espectro ideológico, de la izquierda a la derecha.[7] El cuadro II.8 presenta datos acerca de la posición de los diputados democratacristianos de siete de los más importantes partidos democratacristianos de mediados y finales de la década de los noventa en la escala izquierda-derecha, en la que 1 es la posición más izquierdista y 10 la más derechista.[8] Estos siete partidos iban del centro a la derecha.

El cuadro II.8 muestra de nuevo notorias diferencias de un partido democratacristiano al siguiente. En el momento en que se realizaron estas encuestas, se percibía al PDC chileno como ligeramente a la izquierda del centro. A lo largo de su historia ha sido un partido centrista o de centro-izquierda, a veces con inclinaciones hacia la izquierda (1964-1970). Por el contrario, según los diputados de los otros partidos, el COPEI, el PUSC y el PAN estaban bastante a la derecha del centro. Estos tres partidos han representado el centro-derecha o la derecha de sus sistemas partidistas. Los diputados que no eran democratacristianos ubicaban al PUSC y al COPEI más a la derecha de lo que se habría previsto sobre la base de las actitudes democratacristianas examinadas en los cuadros II.1, II.3, II.5 y II.6. La DCG de Guatemala, que en el momento de estas encuestas se había reducido a un partido menor, estaba situada exactamente en el punto medio 5.5 de la escala izquierda-derecha. El PDC salvadoreño, que históricamente fue un partido centrista, se localizaba a la derecha del centro (6.7).

CUADRO II.8. *Posición de los diputados democratacristianos en la escala izquierda-derecha (1 = izquierda; 10 = derecha)*

Partido y país	*Periodo legislativo*	*Democrata-cristianos que respondieron (n)*	*Cómo ubican otros diputados al Partido Demó-crata Cristiano (media)*	*Cómo se ubican a sí mismos los diputados demo-cratacristianos (media)*	*Cómo se ubican a sí mismos los diputados de otros partidos (media)*	*Cómo se ubican a sí mismos los democrata-cristianos de extrema izquierda*	*Cómo se ubican a sí mismos los democrata-cristianos de extrema derecha*	*Desviación estándar del lugar en que se ubican a sí mismos los democrata-cristianos*
PDC, Chile	1998-2002	29	4.6	4.5***	5.8	3	6	0.7
	1994-1998	30	5.0	4.5**	5.2	3	7	0.9
DP, Ecuador	1998-2002	31	7.5	5.5	4.9	2	10	1.7
	1994-1998	NA	4.7	4.2	NA	NA	NA	NA
COPEI, Venezuela	1994-1998	18	7.7	5.4***	4.2	3	8	1.4
PUSC, Costa rica	1998-2002	22	8.2	6.2***	4.8	4	8	1.3
	1994-1998	23	8.1	6.2***	4.4	5	10	1.4
PAN, México	1997-2000	31	8.9	5.9***	4.4	1	9	1.4
	1994-1997	35	8.4	6.2***	4.6	2	9	1.6
DGC, Guatemala	1995-1999	3	5.5	4.7[a]	5.3	3	7	2.1
PPDC, El Salvador	1997-2000	6	6.7	5.8	4.8	5	7	1.1

NOTA: La prueba estadística consiste de una prueba t de doble cola para determinar si el sitio en que se ubican a sí mismos los diputados democratacristianos se encuentra en la misma media sobre la escala de izquierda-derecha que la de los diputados combinados de los demás partidos. * Significativo cuando $p \leq .01$. ** Significativo cuando $p \leq .05$. *** Significativo cuando $p \leq .01$.

FUENTES: Las mismas que para el cuadro 2.2 y las preguntas 17, 67 y 68. También los datos correspondientes al periodo legislativo 1994-1998 para Chile (estudio núm. 04); la legislatura 1994-1998 para Costa Rica (estudio núm. 16); el periodo legislativo 1995-1998 para Guatemala (estudio núm. 19); la legislatura 1994-1997 para México (estudio núm. 02), y el periodo legislativo 1997-2000 para El Salvador (estudio núm. 23).

[a] Para el DGC, el número de quienes respondieron (tres) es tan bajo que los datos no resultan confiables.

Las diferencias ideológicas entre los partidos democratacristianos en Latinoamérica serían mucho mayores si también se consideran algunos de los partidos más pequeños. Tres partidos democratacristianos que son demasiado pequeños para incluirlos en el cuadro II.8, los de Argentina y Uruguay, y el PDC peruano después de la división ocurrida en 1966-1967, se han ubicado en el centro-izquierda o en la izquierda del espectro político. El PDC uruguayo fue fundado en 1962. En 1971 se convirtió en la piedra angular para la formación de lo que poco después sería el Frente Amplio, una coalición izquierdista de varios partidos que es la principal fuerza electoral del centro-izquierda en el Uruguay contemporáneo (Alcántara Sáez y Crespo Martínez, 1992, pp. 59-61). Durante las décadas de 1970 y 1980 una buena parte del Frente Amplio apoyó al socialismo y al cambio revolucionario. En 1999, el Frente Amplio se convirtió en el partido con más representantes en la Asamblea Nacional. Algunos democratacristianos se retiraron del Frente Amplio en 1989 para formar un nuevo partido, el Nuevo Espacio, que también está ubicado en el centro-izquierda. El PDC argentino, fundado en 1955, adoptó un perfil de centro-izquierda en 1960. El partido sufrió un cisma en 1967 y una de las facciones, llamada adecuadamente Partido Revolucionario Cristiano (PRC), fue una expresión del catolicismo revolucionario que estaba surgiendo en ese tiempo (Cerro, 1983; Parera, 1986). La otra facción, el Partido Popular Cristiano (PPC), estaba también en la izquierda del espectro político, pero no promovía el cambio revolucionario. El PDC peruano adoptó posiciones izquierdistas en 1966, lo que hizo que sus miembros centristas

lo dejaran y formaran el PPC (Schmidt, en este libro; Flores Nano, 2000, pp. 52-55).[9]

Héctor Cornejo Chávez, que fue presidente del Partido Demócrata Cristiano peruano, publicó un breve libro en 1967 en el que precisó cuán a la izquierda estaban algunos importantes democratacristianos. Su título, apropiadamente, era *Democracia cristiana y revolución*. Cornejo argumentó que se requería un cambio radical y rápido —de hecho, revolucionario— para enfrentar los problemas de Perú. Empleando la expresión familiar "la tierra debe ser para quien la trabaja" (p. 25), hizo un llamado para una reforma agraria radical. Proponía medidas antiimperialistas, sustituyendo las empresas capitalistas por empresas "comunitarias" en las que habría una "participación real de los trabajadores en la propiedad, dirección y ganancias de la empresa" (p. 27), y propuso una importante ampliación del papel del Estado en la economía. Además, éstas eran sólo las reformas inmediatas que allanarían el camino a una revolución futura. La última parte de su libro analizaba si la violencia es incompatible con la democracia y si es necesaria para lograr la clase de revolución que él consideraba deseable. Sostuvo que la violencia armada era compatible con la democracia liberal y con el cristianismo, justificando así recurrir a ella cuando la revolución no fuera posible sin violencia. De conformidad con algunas obras izquierdistas de esos años, su libro presentaba reflexiones sobre la distinción fundamental entre la coerción legítima del Estado democrático para dar cumplimiento a las leyes y la represión ilegítima. Concluyó argumentando que si otros grupos diferentes de los democratacristianos iniciaban una revolución violenta, los democratacristianos debían unirse a ella. Aunque rechazando al leninismo, Cornejo claramente tomó posición muy a la izquierda del espectro político y apoyó tácitamente alianzas con organizaciones leninistas.

Algunos partidos democratacristianos han cambiado sus posiciones ideológicas considerablemente en el transcurso del tiempo, de modo que la imagen que nos ofrece el cuadro II.8 no sería válida para periodos más tempranos. En realidad, en el breve periodo de pocos años que se presenta en el cuadro II.8, después de su Congreso Ideológico de 1993, la DP ecuatoriana se desplazó notoriamente a la derecha. Los diputados de otros partidos ubicaron a la DP en promedio en el punto 4.7 en 1994-1998, y en 7.5 en 1998-2002. El PAN, al que algunos diputados que no pertenecían a ese partido percibían como muy a la derecha en los años noventa, tuvo algunos breves periodos de ascendencia del centro-izquierda en 1968-1970 y en 1976 (Chand, 2001, pp. 90-94).

Aunque se limita a sólo tres países y un año, la evidencia de la encuesta de ciudadanos (cuadro II.9) refuerza la idea de la diversidad entre los partidos democratacristianos. El PDC está justo en el centro de los cinco principales partidos chilenos, al igual que la forma en que se califican a sí mismos los diputados, casi exactamente en medio de la escala de 1 a 10. Mientras que los diputados del PAN se ubicaban a sí mismos bastante a la derecha de los diputados del PRI, los partidarios del PAN se colocaban a sí mismos a la izquierda de los partidarios del PRI, ligeramente a la derecha del centro. Cuando fueron hechas estas encuestas, era muy pronunciada la discrepancia en la ubicación que se daban a sí mismos los diputados y los simpatizantes del partido. Finalmente, desafiando la idea de que el COPEI era un partido centrista, sus

partidarios tenían una ubicación media izquierda-derecha de 7.6, con una desviación estándar muy alta.

CUADRO II.9. *Ubicación media de izquierda-derecha de los simpatizantes del partido: Chile, México y Venezuela*

País	*Partido*	*Simpatizantes (número)*	*Ubicación izquierda-derecha de los simpatizantes*	*Desviación estándar de la ubicación izquierda-derecha*
Chile	PS	63	3.8***	1.7
	PPD	118	4.5***	1.6
	PDC	195	5.3	1.5
	UDI	58	7.3***	2.1
	RN	54	7.3***	1.8
	Total que respondió	815	5.4	2.0
México	PRD	252	5.0***	2.4
	PAN	318	5.9	2.5
	PRI	351	6.6***	2.5
	Total que respondió	1 267	5.8	2.5
Venezuela	Causa R	75	5.0***	3.1
	COPEI	85	7.6	3.0
	AD	192	7.8	2.8
	Total que respondió	888	6.7	3.0

NOTA: Los partidos democratacristianos están en cursivas. El cuadro incluye datos para todos los partidos que obtuvieron el apoyo por lo menos de 5% de quienes contestaron. El total que respondió incluye sólo a los que respondieron y se ubicaron en la escala izquierda-derecha. La prueba estadística es una prueba *t* de dos colas para determinar si votantes de partidos específicos tenían la misma media que los votantes de los partidos democratacristianos (PDC, PAN, COPEI). * Significativo en $p \leq .10$. ** Significativo en $p \leq .05$. *** Significativo en $p \leq .01$.

FUENTES: World Values Survey 1995-1997, preguntas 123 y 210 del cuestionario en inglés. La pregunta 123 es: "En asuntos políticos, las personas hablan de la izquierda y la derecha. ¿Cómo ubicaría usted sus opiniones en esta escala, hablando en términos generales?" (1 = izquierda; 10 = derecha). La pregunta 210 es: "Si hubiera elecciones nacionales mañana, ¿por cuál partido en esta lista votaría usted? Si no sabe, ¿qué partido le atrae más?"

Las divergencias ideológicas entre los partidos democratacristianos en Latinoamérica son tan profundas que es difícil identificar un núcleo ideológico que los una. Hay una mayor variación entre los partidos democratacristianos latinoamericanos que entre los de Europa occidental, donde la democracia cristiana nunca ha estado ni tan a la derecha como el PAN lo estuvo en ciertos momentos de su historia, ni tan a la izquierda como los PDC argentino y uruguayo. Los partidos democratacristianos en Latinoamérica empezaron con una inspiración doctrinal común, pero desde el principio difirieron en sus puntos de vista ideológico y programático, y continuaron evolucionando en direcciones diferentes. Entonces, no sería correcto hacer muchas inferencias sobre las posiciones de los partidos con base en la doctrina católica que dio origen a la democracia cristiana.

La extraordinaria diversidad ideológica de la democracia cristiana en Latinoamérica surgió en los años sesenta, cuando fueron articuladas nuevas interpretaciones radicales de la relación entre la fe y la política. La radicalización de facciones de la Iglesia católica latinoamericana en los años sesenta y setenta fue mucho más allá de las posiciones adoptadas por los intelectuales católicos progresistas en Europa occidental. En Latinoamérica, los cristianos radicales adoptaron como ideal el socialismo revolucionario (De Kadt, 1970; Souza, 1984; Lima, 1979). El surgimiento del catolicismo radical en Latinoamérica tuvo un efecto profundo en varios de los partidos democratacristianos de la región, incluyendo los de Chile, Uruguay, Argentina y Perú. En esos cuatro países, el surgimiento del catolicismo radical empujó a esos partidos a la izquierda. En Perú produjo un cisma dentro del partido (Schmidt, en este libro). En Argentina y Uruguay los democratacristianos izquierdistas lograron dominar sus partidos.

Después de que surgió el catolicismo radical, los democratacristianos interpretaron de maneras muy divergentes la relación entre la fe y la política. Algunos creían que su fe los llevaba a un activismo político izquierdista, en tanto que otros siguieron sosteniendo el antiguo concepto democratacristiano de una tercera vía entre el socialismo y el capitalismo. Antes de que el catolicismo izquierdista se convirtiera en una fuerza importante, ya existían diferencias ideológicas entre los democratacristianos, pero las variaciones eran menores, del centro-izquierda al centro-derecha.

COHESIÓN Y DISPERSIÓN IDEOLÓGICA

Las columnas seis, siete y ocho del cuadro II.8 proporcionan información sobre la cohesión o dispersión ideológica dentro de los partidos democratacristianos al nivel de élite. De acuerdo con esta información, el PDC chileno era un partido con cohesión ideológica. Todos los diputados del PDC se veían a sí mismos dentro de una gama que iba de 3 a 6 (1998-2002), o de 3 a 7 (1994-1998) en la escala izquierda-derecha de 10 puntos, y la desviación estándar para la autoubicación de los diputados del PDC era la menor entre esos partidos. El PAN y la DP contrastaban mucho con el PDC chileno; ambos partidos tenían algunos diputados que se colocaban en la extrema izquierda y otros en la extrema derecha.

Las desviaciones estándar de los miembros del partido en el cuadro II.9 nos muestran la cohesión y la dispersión ideológicas de los votantes del PDC. De los 11 partidos que se muestran en el cuadro, los partidarios del PDC chileno tuvieron la mayor coherencia en la escala izquierda-derecha, lo que se manifiesta en la pequeña desviación estándar de 1.5. Por el contrario, los votantes del PAN y del COPEI provenían de puntos ideológicos muy divergentes. En el caso del PAN, esta diversidad refleja la capacidad del partido para ganar votos en un espectro ideológico muy vasto sobre la base del atractivo de su posición contraria al PRI (Domínguez y McCann, 1996).

ENTENDIENDO LA DIVERSIDAD DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA EN LATINOAMÉRICA

Su posición entre la izquierda y la derecha no es la única manera en que los partidos democratacristianos de Latinoamérica son notoriamente diversos, pero representa una buena síntesis de esa diversidad. En esta sección de conclusiones ofrecemos cuatro hipótesis que pueden ayudar a explicar la razón de que los diferentes partidos evolucionaran en distintas direcciones en la escala izquierda-derecha. No podemos ofrecer una explicación detallada y, en vista del número relativamente pequeño de casos y de algunas limitaciones en la información, no ofrecemos una exposición rigurosa de estas hipótesis. A pesar de todo, las cuatro hipótesis muestran cierta plausibilidad inicial.

Primero, como se observó antes, los partidos democratacristianos de la primera generación tendían a ser más conservadores que los de la segunda. El más conservador de los partidos democratacristianos que tuvieron más éxito electoral (el PAN) fue de la primera generación. El otro partido que tuvo éxito electoral, el COPEI, estuvo ubicado en el centro o centro-derecha del espectro político en diversos momentos. El PDC brasileño fue un partido entre centro y centro-derecha, de 1945 a 1964, y después de 1985 fue un partido de centro-derecha (Vianna, 1981). Los partidos democratacristianos más izquierdistas (los de Argentina, Perú y Uruguay) eran de la segunda generación.

Nada impuso de antemano que los partidos creados tempranamente siguieran siendo más conservadores tan sólo porque la teología prevaleciente y el sentido de misión de la Iglesia eran por entonces más conservadores. Los partidos pueden, y de hecho así lo hacen, adaptarse programática e ideológicamente. Empero, los partidos obtienen el apoyo de grupos e individuos en parte sobre la base de sus ideas y programas iniciales. Estas relaciones entre partidos, ciudadanos y grupos de interés crean una dependencia en el curso seguido, y eso hace probable que los partidos que empezaron con una ideología y una base de apoyo más conservadoras seguirán siendo más conservadores.

Segundo, el análisis espacial de la competencia entre partidos predice que los partidos buscaran tomar posiciones programáticas o ideológicas que les permitan obtener el máximo de votos o diputaciones. Aunque acepta que los partidos tienden a ser responsables y congruentes ideológicamente la mayor parte del tiempo (Downs, 1957, pp. 105-112), el análisis espacial sugiere que responden a las oportunidades en el mercado electoral. Este modo de análisis puede ayudar a ilustrar la razón de que los partidos democratacristianos adoptaran diferentes posiciones en la escala izquierdaderecha.

Limitaciones de información (la falta de encuestas en los primeros periodos históricos) nos impiden demostrar rigurosamente que los partidos democratacristianos se han adaptado ideológicamente para aprovechar oportunidades en el mercado electoral, pero podemos ofrecer unos pocos ejemplos que señalan en esta dirección. De 1964 a 1973, la mayor competencia electoral para el PDC chileno provenía de la izquierda. Los comunistas y los socialistas se estaban fortaleciendo en las urnas, y el mal resultado para los conservadores en 1964-1965 mostró que en las elecciones el PDC podía preocuparse

menos por la derecha. El PDC se adaptó desplazándose un poco hacia la izquierda, exactamente como podría esperarse sobre la base del análisis espacial. En el poder de 1964 a 1970, el partido llevó a cabo algunas importantes reformas y adoptó el lema "Revolución en Libertad" para indicar su celo reformista (Fleet, 1985, pp. 80-127; Scully, 1992, pp. 154-165). En la campaña electoral de 1970, el candidato del PDC, Radomiro Tomic, presentó algunas propuestas radicales.

De manera similar, en países en que la democracia cristiana fue creada en el contexto de regímenes populistas de izquierda, estos nuevos partidos se inclinaron en cierta medida a la derecha del centro. En México, a finales de los años treinta y principios de los cuarenta, y en Venezuela (1946-1948) el PRI y la AD captaron la izquierda y el centro-izquierda del espectro político. No había posibilidades electorales estratégicas para nuevos partidos, excepto en el centro-derecha. En este contexto, los partidos democratacristianos conservadores se formaron en oposición a gobiernos de tendencias izquierdistas que intentaban promover reformas generalizadas. El PAN se creó en oposición al entonces izquierdista PRI (Loaeza, 1999, pp. 105-181; Mabry, 1973; Von Sauer, 1974), y desde entonces ha seguido siendo un partido predominantemente conservador, aunque con muchas diferencias ideológicas internas.

Las fuertes posiciones contrarias a la AD del COPEI y su orientación derechista le hicieron apoyar el golpe de Estado de noviembre de 1948 que provocó la caída del primer gobierno democrático de Venezuela (Herman, 1980, pp. 23-41; Levine, 1973, pp. 62-93). Después, el COPEI se desplazó hacia el centro o al centro-derecha. Incluso después de estos primeros años de oposición visceral a gobiernos izquierdistas, el PAN y el COPEI continuaron representando alternativas ubicadas a la derecha del centro.

Tercero, en concordancia con la argumentación presentada en el capítulo anterior, los juegos de régimen también han influido en las ubicaciones programática e ideológica de los partidos. Un ejemplo son los partidos democratacristianos de El Salvador y Guatemala. Bajo presión de fuerzas derechistas que habían impedido persistentemente que los democratacristianos llegaran al poder, con el tiempo ambos partidos se desplazaron por fin a la derecha para acceder al poder. Temían que, de no hacerlo así, los militares y la oligarquía continuaran en el poder. El juego de la transición democrática empujó a los dos partidos más a la derecha de donde habían estado.

Finalmente, los partidos prestan continua atención a sus activistas (Kitschelt, 1989) y miembros de base (Przworski y Sprague, 1986), y sus esfuerzos por retener el apoyo de estos activistas y miembros de base limitan el grado en que pueden actuar de manera oportunista en respuesta a las ocasiones estratégicas en el mercado electoral. Esta línea de pensamiento tiene implicaciones para conocer cuáles son los partidos en los que es más probable que ocurra un cambio ideológico significativo. Los partidos que se anotan éxitos electorales tienen más que perder (el mayor grupo de votantes y de activistas) al realizar cambios significativos en los llamamientos programáticos e ideológicos; por lo tanto, es menos probable que hagan grandes cambios. Por el contrario, es más probable que los partidos pequeños de la misma familia ideológica realicen cambios ideológicos importantes. Esta hipótesis podría ayudar a explicar la razón de que tres pequeños

partidos democratacristianos, los de Argentina, Perú y Uruguay, saltaran hacia la izquierda del espectro ideológico en los años sesenta. Los partidos democratacristianos de mayor éxito electoral estaban menos dispuestos a arriesgar el apoyo con que ya contaban llevando a cabo importantes desplazamientos ideológicos porque tenían más que perder. Esta observación está conforme con el hecho de que ningún partido democratacristiano en Latinoamérica ha realizado un profundo cambio ideológico en un momento en que tenía esperanzas de ganar la presidencia en el futuro cercano.

APÉNDICE

Resultados electorales de los partidos democratacristianos en Latinoamérica

País y partido (año en que se creó)	*Año*	*Porcentaje del voto en las elecciones presidenciales*	*Porcentaje del voto en las elecciones para el Senado*	*Porcentaje del voto en la cámara baja o en elecciones unicamerales*
Argentina	1957	Sólo Congreso	0.0 (curules)	4.8
PDC (1955)	1958	3.2	0.0 (curules)	3.8
	1960	Sólo Congreso	0.0 (curules)	3.8
	1962	Sólo Congreso	0.0 (curules)	1.9
	1963	4.7	4.3	4.5
	1965	Sólo Congreso	0.0 (curules)	2.5
	1973	Sin candidato	0.0 (curules)	0.0 (curules)
	1983	0.3	0.0 (curules)	1.0
	1985	Sólo Congreso	0.0 (curules)	0.6
	1986	Sólo Senado	0.0 (curules)	Sólo Senado

FUENTES: Los datos se compilaron de las siguientes fuentes (que en ocasiones se contradecían unas a otras): Dieter Nohlen (ed.), *Enciclopedia electoral de Latinoamérica y del Caribe*, San José, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1993; Scott Mainwaring y Timothy Scully (eds.), *Building Democratic Institutions*, Stanford, Stanford University Press, 1995; Tribunal Calificador de Elecciones, Chile; www.georgetown.edu/pdba/Elecdata; Consejo Nacional Electoral, Venezuela; Instituto Federal Electoral, México (www.PAN.org/mx; www.ipu.org/parline-e/); Inter-Parliamentary Union, *Chronicle of Parliamentary Elections*, Ginebra, Inter-Parliamentary Union, 1967-2000; Peter G. Snow, *Argentine Radicalism*, Iowa City, University of Iowa Press, 1965; Ronald H. McDonald, *Party Systems and Elections in Latin America*, Chicago, Markham Publishing, 1971; *Keesing's Contemporary Archives*, varios volúmenes, Londres, Longman; Tribunal Superior Eleitoral, Brasil (www.tse.gov.br/); Tribunal Supremo Electoral, Guatemala (www.tse.gov.gt); Luigi Manzetti, *Institutions, Parties and Coalitions in Argentine Politics*, Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 1993; Paul Drake y Eduardo Silva (eds.), *Elections and Democratization in Latin America, 1980-1985*, San Diego, Center for Iberian and Latin American Studies, University of California, San Diego, 1986; Ricardo G. Parera, *Los demócratas cristianos argentinos: testimonio de una experiencia política*, vol. 2, Buenos Aires, Editorial Leonardo Buschi, 1986; Jairo Marconi Nicolau (ed.), *Dados Eleitorais do Brazil (1982-1996)*, Río de Janeiro, UCAM-Editora Revan, 1998; Juan León, *Elecciones, votos y partidos*, Quito, Cedime, 1987; Darlic M. Vjekoslav, *Estadísticas electorales del Ecuador, 1978-1989* (Quito, SENAC-ILDIS, 1989; www.frepaso.org.ar/).

País y partido (año en que se creó)	*Año*	*Porcentaje del voto en las elecciones presidenciales*	*Porcentaje del voto en las elecciones para el Senado*	*Porcentaje del voto en la cámara baja o en elecciones unicamerales*
	1987	Sólo diputados	Sólo diputados	1.2 (curules)
	1989	Sin candidato	0.0 (curules)	1.2 (curules)
	1991	Sólo diputados	Sólo diputados	0.4 (curules)
	1992	Sólo Senado	0.0 (curules)	Sólo Senado
	1993	Sólo diputados	Sólo diputados	0.0 (curules)
	1995	Coalición[a]	0.0 (curules)	0.4 (curules)[b]
	1997	Sólo diputados	Sólo diputados	0.0 (curules)[b]
	1998	Sólo Senado	0.0 (curules)	Sólo Senado
	1999	Coalición[c]	Sin elección del Senado	Coalición[b]
Brasil PDC (1945) PSDC (1995)	1945	Sin candidato	0.0 (curules)	0.7 (curules)
	1947	Sólo Senado	0.3 (curules)	Sólo Senado
	1950	Sin candidato	0.0 (curules)	0.7 (curules)
	1954	Sólo Congreso	0.7 (curules)	0.6 (curules)
	1955	Coalición[d]	Sólo presidente	Sólo presidente
	1958	Sólo Congreso	0.0 (curules)	2.1 (curules)
	1960	Coalición[e]	Sólo presidente	Sólo presidente
	1962	Sólo Congreso	1.2 (curules)	4.9 (curules)
	1986	Sólo Congreso	2.8 (curules)	1.2
	1989	0.1[f]	Sólo presidente	Sólo presidente
	1990	Sólo Congreso	6.5 (curules)	3.0
	1994	Sin candidato	0.0 (curules)	0.0 (curules)

[a] El PDC fue parte de la coalición Frepaso, que obtuvo 28.8% de los votos presidenciales.

[b] En 1995, 1997 y 1999, el PDC fue parte de la coalición Frepaso, que ganó 21% de los votos para la Cámara Baja en 1995. En 1997 y 1999, el Frepaso y la UCR formaron la coalición Alianza, que ganó 38.7 y 43.6% de los votos para la Cámara Baja, respectivamente.

[c] El PDC, por medio del Frepaso, fue parte de la coalición Alianza, que ganó la presidencia con 48.5% de los votos.

[d] El PDC fue parte de la coalición que apoyó al candidato de la UDN, Távora, que ganó 30.3% del voto.

[e] El PDC fue parte de una coalición que apoyó a Jânio Quadros, un candidato independiente que ganó la elección con 44.8% de los votos válidos.

[f] Un gran sector del PDC apoyó al candidato del PL Guilherme Afif Domingos, que obtuvo 4.8% de los votos para presidente.

País y partido (año en que se creó)	*Año*	*Porcentaje del voto en las elecciones presidenciales*	*Porcentaje del voto en las elecciones para el Senado*	*Porcentaje del voto en la cámara baja o en elecciones unicamerales*
	1998	0.3	0.0 (curules)	0.0 (curules)
	2002	Sin candidato	0.0 (curules)	0.2 (curules)
Chile	1941	Sólo Congreso	3.3	3.4
Falange	1942	Sin candidato	Sólo presidente	Sólo presidente
Nacional	1945	Sólo Congreso	3.8	2.6
(1938)	1946	Sin candidato	Sólo presidente	Sólo presidente
PDC (1957)	1949	Sólo Congreso	0.8	3.9
	1952	Sin candidato	Sólo presidente	Sólo presidente
	1953	Sólo Congreso	1.0	2.9
	1957	Sólo Congreso	11.8	9.4
	1958	20.5	Sólo presidente	Sólo presidente
	1961	Sólo Congreso	14.7	15.9
	1964	55.6*	Sólo presidente	Sólo presidente
	1965	Sólo Congreso	46.4	43.6
	1969	Sólo Congreso	32.9	31.1
	1970	27.8	Sólo presidente	Sólo presidente
	1973	Sólo Congreso	46.0[g] (curules)	29.1 (curules)
	1989	55,2[h]*	31.9	26.6
	1993	58.0[h]*	20.2	27.1
	1997	Sólo Congreso	29.2	23.0
	1999	Coalición[i]	Sólo presidente	Sólo presidente
	2001	Sólo Congreso	22.8	18.9
Costa Rica	1970	0.9	Unicameral	2.5
PDC (década	1974	0.5	Unicameral	2.1
de 1960)	1986	45.8	Unicameral	41.4
PUSC (1983)	1990	51.4*	Unicameral	46.2

* El asterisco señala al triunfador de la elección presidencial. Los datos se refieren al porcentaje del voto, excepto donde se indica que la cifra se refiere al porcentaje de curules.

[g] El PDC fue parte de la coalición Confederación de la Democracia, que obtuvo 52.6% de los votos para el Senado.

[h] El candidato del PDC fue apoyado por otros socios en la coalición.

[i] El PDC fue parte de una coalición que apoyó al candidato del PS/PPD, Ricardo Lagos, que obtuvo 48% de los votos en la primera vuelta electoral y 51.3% en la segunda.

País y partido (año en que se creó)	*Año*	*Porcentaje del voto en las elecciones presidenciales*	*Porcentaje del voto en las elecciones para el Senado*	*Porcentaje del voto en la cámara baja o en elecciones unicamerales*
	1994	47.7	Unicameral	40.4
	1998	46.9*	Unicameral	47.0
	2002	38.6 (1ª vuelta)	Unicameral	29.8
	2002	58.0* (2ª vuelta)	Sólo presidente	Sólo presidente
Ecuador	1978	Coalición[j]		
PDC (1964)		(1ª vuelta)	Sólo presidente	Sólo presidente
DP (1978)	1979	Coalición[j]		
		(2ª vuelta)	Unicameral	0.0
	1981	Sólo Congreso	Unicameral	10.1 (curules)
	1984	4.7	Unicameral	6.4
	1986	Sólo Congreso	Unicameral	9.4
	1988	11.6	Unicameral	10.6
	1990	Sólo Congreso	Unicameral	10.0
	1992	1.9	Unicameral	6.9 (curules)
	1994	Sólo Congreso	Unicameral	4.6 (curules)
	1996	13.5	Unicameral	9.0
	1998	35.0 (1ª vuelta)	Unicameral	28.6
	1998	51.2* (2ª vuelta)	Sólo presidente	Sólo presidente
	2002	Coalición[k]	Unicameral	4.0 (curules)
El Salvador	1964	Sólo Congreso	Unicameral	26.1
PDC (1960)	1966	Sólo Congreso	Unicameral	31.2
	1967	21.6	Sólo presidente	Sólo presidente
	1968	Sólo Congreso	Unicameral	43.3
	1970	Sólo Congreso	Unicameral	27.0
	1972	42.1[l]	Unicameral	Coalición[m]

[j] Osvaldo Hurtado, del PDC, fue lanzado como vicepresidente en coalición con Jaime Roldós, del CFP, y candidato a la presidencia. Roldós obtuvo 27.7% en la primera vuelta electoral y 68.5% en la segunda.

[k] La DP fue parte de una coalición que apoyó a Jaime Roldós, que obtuvo 15.4% de los votos de la primera vuelta.

[l] Napoleón Duarte, el candidato del PDC, fue apoyado por otros socios en la coalición.

[m] El PDC era el principal partido de la coalición UNO, que obtuvo 22.7% de los votos.

País y partido (año en que se creó)	*Año*	*Porcentaje del voto en las elecciones presidenciales*	*Porcentaje del voto en las elecciones para el Senado*	*Porcentaje del voto en la cámara baja o en elecciones unicamerales*
	1974	Sólo Congreso	Unicameral	Coalición[n]
	1976	Sólo Congreso	Unicameral	Boicot[o]
	1977	Coalición[p]	Sólo presidente	Sólo presidente
	1978	Sólo Congreso	Unicameral	Boicot[o]
	1982	Asamblea Constituyente	Unicameral	40.1
	1984	43.4*	Sólo presidente	Sólo presidente
	1985	Sólo Congreso	Unicameral	52.4
	1988	Sólo Congreso	Unicameral	35.1
	1989	36.0	Sólo presidente	Sólo presidente
	1991	Sólo Congreso	Unicameral	28.0
	1994	16.3	Unicameral	17.9
	1997	Sólo Congreso	Unicameral	8.4
	1999	5.7	Sólo presidente	Sólo presidente
	2000	Sólo Congreso	Unicameral	7.2
Guatemala	1958	Coalición[q]	Unicameral	Coalición[r]
DCG (1955)	1959	Sólo diputados	Unicameral	9.9
	1961	Sólo diputados	Unicameral	7.0
	1966	Sin candidato	Unicameral	Sin candidatos
	1970	21.7	Unicameral	22.0
	1974	Coalición[s]	Unicameral	25.5 (curules)
	1978	Coalición[t]	Unicameral	11.5 (curules)

[n] El PDC fue parte de la coalición UNO, que obtuvo 28.8% de las curules.

[o] El PDC boicoteó las elecciones de 1976 y 1978 para el Congreso, que estuvieron plagadas de fraudes.

[p] El PDC fue parte de la coalición UNO, cuyo candidato, el coronel Ernesto Claramount, obtuvo 32.7% del voto para presidente.

[q] La DCG fue parte de una coalición que apoyó a José Luis Cruz Salazar, que obtuvo 29.6% de los votos.

[r] La DCG fue parte de una coalición que obtuvo 32.6% de los votos.

[s] La DCG fue parte de una coalición que apoyó al general Efraín Ríos Montt, quien obtuvo 34% de los votos para presidente.

[t] La DCG fue parte de una coalición que apoyó al general Ricardo Peralta Méndez, que obtuvo 25.7% de los votos para presidente.

País y partido (año en que se creó)	Año	Porcentaje del voto en las elecciones presidenciales	Porcentaje del voto en las elecciones para el Senado	Porcentaje del voto en la cámara baja o en elecciones unicamerales
	1982	Coalición[u]	Unicameral	Coalición[v]
	1984	Asamblea Constituyente	Unicameral	16.4
	1985	38.6 (1ª vuelta)	Unicameral	34.6
	1985	68.4* (2ª vuelta)	Sólo presidente	Sólo presidente
	1990	17.5	Unicameral	17.2
	1995	12.9	Unicameral	12.8
	1999	Sin candidato	Unicameral	3.6
México	1940	Sin candidato[w]	0.0 (curules)	0.0 (curules)
PAN (1939)	1943	Sólo Congreso	Sólo diputados	5.3
	1946	Sin candidato[x]	0.0 (curules)	2.2
	1949	Sólo Congreso	Sólo diputados	5.6
	1952	7.8	0.0 (curules)	8.3
	1955	Sólo Congreso	Sólo diputados	9.2
	1958	9.4	0.0 (curules)	10.2
	1961	Sólo Congreso	Sólo diputados	7.6
	1964	11.1	11.2	11.5
	1967	Sólo diputados	Sólo diputados	12.4
	1970	13.9	14.3	14.2
	1973	Sólo diputados	Sólo diputados	16.3
	1976	Sin candidato	8.1	9.0
	1979	Sólo diputados	Sólo diputados	11.3
	1982	15.7	Sin datos	17.5
	1985	Sólo diputados	Sólo diputados	16.4
	1988	16.8	18.0	17.3
	1991	Sólo Congreso	17.7	17.7

[u] La DCG fue parte de una coalición que apoyó al civil Alejandro Maldonado, que obtuvo 22.7% de los votos para presidente.

[v] La DCG fue parte de la coalición UNO, que ganó 3.5% de las curules.

[w] El PAN apoyó a un candidato presidencial que obtuvo 6.5% de los votos, pero que no era miembro del PAN.

[x] El PAN apoyó a un candidato presidencial que obtuvo 18.7% de los votos, pero que no era miembro del PAN.

País y partido (año en que se creó)	*Año*	*Porcentaje del voto en las elecciones presidenciales*	*Porcentaje del voto en las elecciones para el Senado*	*Porcentaje del voto en la cámara baja o en elecciones unicamerales*
	1994	25.9	24.9	24.9
	1997	Sólo Congreso	26.1	26.6
	2000	42.5*	38.1	38.2
Perú	1962	2.9	Sin datos	3.4
PDC (1956)	1963	Sin candidato[y]	11.1 (curules)	7.2 (curules)
PPC (1967)	1980	9.6	9.4	9.2
	1985	11.9[z]	11.2	11.2
	1990	Sin candidato	8.3 (curules)	13.3 (curules)
	1995	Sin candidato	Unicameral	3.1
Uruguay	1962	3.1	3.0	3.0
PDC (1962)	1966	3.0	3.0	3.0
	1971	Coalición[aa]	7.1 (curules)	7.1 (curules)
	1984	Coalición[bb]	0.0 (curules)	2.3
	1989	Coalición[cc]	0.0 (curules)	1.6
	1994	Coalición[dd]	0.0 (curules)	1.0
	1999	Coalición[ee]	0.0 (curules)	0.2

[y] El PDC apoyó a Fernando Belaúnde, que ganó la elección presidencial.

[z] En las elecciones de 1985 para la presidencia, el Senado y la Cámara de Diputados, el PPC fue apoyado por el movimiento de Bases Hayistas en una coalición que se conoció como CODE.

[aa] El PDC fue parte de la coalición Frente Amplio, que apoyó al general retirado Líber Seregni para presidente. Seregni, que no era del PDC, obtuvo 18.3% de los votos. El Frente Amplio no existía legalmente, y usó el nombre del PDC para competir en la elección.

[bb] El PDC fue parte de la coalición Frente Amplio, que apoyó a Juan Crottogini para presidente. Éste, que no era del PDC, obtuvo 21.3% de los votos. El Frente Amplio no existía legalmente y usó el nombre del PDC para competir en la elección.

[cc] El PDC fue parte de la coalición Nuevo Espacio, que apoyó a Hugo Batalla para presidente. Batalla, que no era del PDC, obtuvo 9% de los votos.

[dd] El PDC se dividió. Un sector permaneció en la coalición Nuevo Espacio y apoyó a Rafael Michelini, que obtuvo 5% de los votos. El otro sector retornó a la coalición del Frente Amplio, que apoyó a Tabaré Vázquez para presidente. Tabaré Vázquez obtuvo 30% de los votos. Ni Michelini ni Tabaré Vázquez pertenecían al PDC.

[ee] Como parte de la coalición del Frente Amplio, el PDC apoyó a Tabaré Vázquez, que no era miembro del PDC, para presidente. Tabaré Vázquez obtuvo 38.5% de los votos en la primera vuelta y 45.9% en la elección final.

País y partido (año en que se creó)	*Año*	*Porcentaje del voto en las elecciones presidenciales*	*Porcentaje del voto en las elecciones para el Senado*	*Porcentaje del voto en la cámara baja o en elecciones unicamerales*
Venezuela	1947	22.4	8.7 (curules)	17.5
COPEI (1946)	1958	16.2	11.8 (curules)	15.2
	1963	20.2	17.0 (curules)	20.9
	1968	29.1*	30.8 (curules)	24.0
	1973	36.7	27.6 (curules)	30.2
	1978	46.6*	47.7 (curules)	39.8
	1983	33.5	31.8 (curules)	28.7
	1988	40.4	43.5 (curules)	31.1
	1993	22.7	26.4 (curules)	22.6
	1998	Coalición[ff]	12.1	12.3
	2000	Sin candidato	Unicameral	3.0 (curules)

[ff] El COPEI fue parte de una coalición que apoyó a Salas, que obtuvo 40% de los votos para presidente. El COPEI contribuyó con solamente 2.1% del total.

REFERENCIAS

Alcántara Sáez, Manuel, e Ismael Crespo Martínez, 1992, *Partidos políticos y procesos electorales en Uruguay (1971-1990)*, Madrid, Fundación Centro Español de Estudios de América Latina (CEDEAL).

Alfaro Salas, Sergio Iván, 2001, "Costa Rica", en Manuel Alcántara Sáez y Flavia Freidenberg (eds.), *Partidos políticos de América Latina: Centroamérica, México y República Dominicana*, pp. 31-134, Salamanca, España, Ediciones Universidad de Salamanca.

Caldera, Rafael, 1986, *Especificidad de la democracia cristiana*, San José, Costa Rica, Libro Libre.

Cerro, Francisco, 1983, *¿Qué es el Partido Demócrata Cristiano?*, Buenos Aires, Editorial Sudamericana.

Chacón, Vamireh, 1981, *Historia dos partidos brasileiros*, 2ª. ed., Brasilia, Universidade de Brasilia.

Chand, Vikram K., 2001, *Shaping Institutions: Mexico's Political Awakening*, Notre Dame, University of Notre Dame Press.

Combellas Lares, Ricardo, 1985, *COPEI: ideología y liderazgo*, Caracas, Ariel.

Cornejo Chávez, Héctor, 1967, *Democracia cristiana y revolución*, Lima, Centro Andino de Estudios y Capacitación.

Domínguez, Jorge I., y James A. McCann, 1996, *Democratizing Mexico: Public Opinion and Electoral Choices*, Baltimore, Johns Hopkins University Press.

Downs, Anthony, 1957, *An Economic Theory of Democracy*, Nueva York, Harper and Row.

Edwards, Sebastian, 1995, *Crisis and Reform in Latin America: From Despair to Hope*, Oxford, Oxford University Press.

Fleet, Michael, 1985, *The Rise and Fall of Chilean Christian Democracy*, Princeton, Princeton University Press.

Flores Nano, Lourdes, 2000, *El Evangelio y la tierra*, Lima, J. L. Disegraphics, 2 vols.

Freidenberg, Flavia, 2001, "Ecuador", en Manuel Alcántara Sáez y Flavia Freidenberg (eds.), *Partidos Políticos de América Latina: países andinos*, pp. 235-406, Salamanca, España, Ediciones Universidad de Salamanca.

González Dobles, Jaime, 1981, *Democracia cristiana y lucha de clases*, San José, Costa Rica, Ed. Porvenir.

Grayson, George, 1968, *El Partido Demócrata Cristiano chileno*, Buenos Aires, Francisco de Aguirre.

Gross, Leonard, 1967, *The Last, Best Hope: Eduardo Frei and Chilean Democracy*, Nueva York, Random House.

Herman, Donald L., 1980, *Christian Democracy in Venezuela*, Chapel Hill, University of North Carolina Press.

Kadt, Emmanuel de, 1970, *Catholic Radicals in Brazil*, Oxford, Oxford University Press.

Kalyvas, Stathis N., 1996, *The Rise of Christian Democracy in Europe*, Ithaca, Cornell University Press.

Kitschelt, Herbert, 1989, *The Logics of Party Formation: Ecological Politics in Belgium and West Germany*, Ithaca, Cornell University Press.

Levine, Daniel H., 1973, *Conflict and Political Change in Venezuela*, Princeton, Princeton University Press.

Lima, Luiz Gonzaga de Souza, 1979, *Evolução Política dos Católicos e da Igreja no Brasil*, Petrópolis, Vozes.

Loaeza, Soledad, 1999, *El Partido Acción Nacional: la larga marcha, 1939-1994. Oposición leal y partido de protesta*, México, Fondo de Cultura Económica.

Luque, Guillermo, 1986, *De la Acción Católica al Partido COPEI, 1933-1946*, Caracas, Fondo Editorial de Humanidades y Educación, Universidad Central de Venezuela.

Lynch, Edward A., 1991, *Religion and Politics in Latin America: Liberation Theology and Christian Democracy*, Nueva York, Praeger.

———, 1993, *Latin America's Christian Democratic Parties. A Political Economy*, Westport, Conn., Praeger.

Mabry, Donald J., 1973, *Mexico's Acción Nacional: A Catholic Alternative to Revolution*, Syracuse, Syracuse University Press.

Mainwaring, Scott, 1986, *The Catholic Church and Politics in Brazil, 1916-1985*, Stanford, Stanford University Press.

———, y Timothy R. Scully, 1995, "Introduction: Party Systems in Latin America", en Scott Mainwaring y Timothy R. Scully (eds.), *Building Democratic Institutions: Party Systems in Latin America*, pp. 1-34, Stanford, Stanford University Press.

Mecham, J. Lloyd, 1934, *Church and State in Latin America*, Chapel Hill, University of North Carolina Press.

Parera, G. Ricardo, 1986, *Los demócratas cristianos argentinos: testimonio de una experiencia política*, 2 vols., Buenos Aires, ed. Leonardo Buschi.

Poggi, Gianfranco, 1967, *Catholic Action in Italy: The Sociology of a Sponsored Organization*, Stanford, Stanford University Press.

Przeworski, Adam, y John Sprague, 1986, *Paper Stones: A History of Electoral Socialism*, Chicago, University of Chicago Press.

Salazar Mora, Orlando, y Jorge Mario Salazar Mora, 1991, *Los partidos políticos en Costa Rica*, San José, Universidad Estatal a Distancia.

Scully, Timothy R., 1992, *Rethinking the Center: Party Politics in Nineteenth and Twentieth Century Chile*, Stanford, Stanford University Press.

Smith, Brian H., 1982, *The Church and Politics in Chile: Challenges to Modern Catholicism*, Princeton, Princeton University Press.

Souza, Luiz Alberto Gómez de, 1984, *AJUC: Os Estudantes Católicos e a Política*, Petrópolis, Vozes.

Vaillancourt, Jean Guy, 1980, *Papal Power: A Study of Vatican Control over Catholic Lay Groups*, Berkeley, University of California Press.

Valenzuela, J. Samuel, y Érica Maza Valenzuela, 2000, "The Politics of Religion in a Catholic Country. Republican Democracy, Cristianismo Social and the Conservative Party in Chile, 1850-1925", en Austen Ivereigh (ed.), *The Politics of Religion in an Age of Revival: Studies in Nineteenth-Century Europe and Latin America*, pp. 188-223, Londres, Institute of Latin American Studies.

Van Kersbergen, Kees, 1995, *Social Capitalism: A Study of Christian Democracy and the Welfare State*, Londres, Routledge.

Vianna, Luiz Werneck, 1981, "O Sistema Partidário e o Partido Democrata Cristão", en David V. Fleischer (ed.), *Os Partidos Políticos no Brasil*, 1, pp. 131-171, Brasilia, Editora Universidade de Brasilia.

Von Sauer, Franz A., 1974, *The Alienated "Loyal" Opposition: Mexico's Partido Acción Nacional*, Albuquerque, University of New Mexico Press.

Webre, Stephen, 1979, *José Napoleón Duarte and the Christian Democratic Party in Salvadoran Politics, 1960-1972*, Baton Rouge, Louisiana State University.

Williams, Edward J., 1967, *Latin American Christian Democratic Parties*, Knoxville, University of Tennessee Press.

* Agradecemos a Frances Hagopian, Kirk Hawkins, Robert Knight, Fabrice Lehoucq, Andrés Mejía, Ken Roberts y Philip Williams por sus valiosos comentarios; a Manuel Alcántara por los datos del Proyecto de Élites Latinoamericanas, y a Araceli Mateos por ayudar con los datos del Proyecto de Élites Latinoamericanas. David Altman, Andrés Mejía, Juan Esteban Montes y Aníbal Pérez-Liñán proporcionaron valiosa ayuda en la investigación.

[1] El PAN fue una excepción parcial. Era más secular que los otros partidos democratacristianos creados en la primera generación, y la influencia de la teología anterior al Concilio Vaticano II fue menos pronunciada.

[2] El PDC chileno de los sesenta fue una excepción parcial. Las relaciones entre el PDC y los elementos progresistas dentro de la jerarquía católica eran fuertes en ese momento (Scully, 1992, p. 115).

[3] A pesar de la separación oficial entre la Iglesia y la democracia cristiana, algunos obispos y clérigos simpatizaron abiertamente con el partido.

[4] Coordinadas por Manuel Alcántara, estas encuestas fueron realizadas entre 1994 y 2000, en dos fases (que corresponden a dos periodos legislativos diferentes) y un cuestionario ligeramente diferente en la segunda fase. En el cuadro II.1 y en los cuadros subsiguientes proporcionamos la información que proviene principalmente de la segunda fase. Excepto en el cuadro II.8, sólo proporcionamos datos para Chile, Costa Rica, Ecuador, México y Venezuela. Los otros partidos democratacristianos en la región tienen muy pocas respuestas (seis o menos) para que tengamos confianza en los resultados.

[5] Usamos datos de la "ola" de 1995-1997 de los World Values Surveys. Esta serie de los World Values Surveys no se llevó a cabo en Costa Rica ni en Ecuador, por lo que no pudimos incluir a estos dos países en nuestro análisis de las actitudes de los ciudadanos.

[6] Usamos *ideología* para referirnos al conjunto de ideas que la democracia cristiana aceptaba; no es nuestra intención usarla peyorativamente.

[7] En su trabajo en este libro, Ignacio Walker observa que el PDC chileno ha adoptado una identidad como "más allá de la izquierda y la derecha" y rechazó que se le calificara de partido centrista. No obstante, las caracterizaciones derecha-izquierda siguen teniendo sentido.

[8] En contraste con los otros cuadros basados en el Proyecto de Élites Latinoamericanas, para los que sólo usamos datos de la segunda "ola" de entrevistas en cada país, el cuadro II.8 utiliza datos de ambas series porque la forma en que se expresaron las preguntas era exactamente la misma en ambos cuestionarios. El cuadro II.8 también incluye datos para los partidos democratacristianos de El Salvador y Guatemala, que tenían muy pocos diputados (de seis a tres, respectivamente) para incluirlos en los otros cuadros que estaban basados en el Proyecto de Élites Latinoamericanas. El cuadro II.8 incluye datos sobre la forma en que los legisladores de otros partidos percibían a la democracia cristiana; así, el número de personas que respondieron es suficiente para ser significativo.

[9] Para ejemplos del pensamiento democratacristiano de izquierda, véase Cerro (1983) y González Dobles (1981). Cerro fue presidente del PDC argentino y González Dobles fue secretario general del PDC costarricense a principios de la década de 1970.

III. LA TRANSFORMACIÓN DE LA IDEOLOGÍA DEMOCRATACRISTIANA: TRASCENDIENDO A LA IZQUIERDA Y A LA DERECHA, O ¿QUÉ LE OCURRIÓ A LA TERCERA VÍA?

PAUL E. SIGMUND

UNA de las características distintivas del pensamiento social cristiano desde el siglo XIX ha sido su pretensión de ofrecer una posición intermedia entre los extremos del individualismo liberal y el socialismo colectivo. Ahora que la tercera vía se ha convertido en parte de la retórica de Tony Blair, Bill Clinton y Gerhard Schroeder, esta pretensión no parece novedosa. Durante el apogeo de la democracia cristiana en Europa y Latinoamérica, sin embargo, parecía proporcionar un nuevo enfoque para la organización de la economía y de la sociedad. Este capítulo describirá la evolución y la influencia del pensamiento de la tercera vía en el pensamiento social católico y en la ideología y política democratacristiana. Más específicamente, seguirá el desarrollo de la creencia en un plan detallado distintivo para la sociedad moderna ofrecido por la tradición católica y su más reciente decadencia como resultado de cambios habidos en Europa y Latinoamérica que debilitaron su atractivo ideológico y su apoyo electoral. Se sostendrá que poco queda de lo que al principio pareció ser un programa y una ideología distintivas, con los partidos europeos aferrándose a la unificación europea y los latinoamericanos a la "economía social de mercado" como sus características distintivas, mientras que ambos grupos de partidos hacen vagas referencias a la "subsidiaridad" como el principio que orienta su enfoque de la organización de la sociedad.

El ímpetu inicial para el desarrollo de una solución católica de los problemas modernos fue la necesidad de una respuesta católica a las exigencias de separación de la Iglesia y el Estado y de democracia política que presentaron los liberales anticlericales en Italia, España y Francia. La respuesta inicial del Vaticano fue un rechazo general a la democracia y a las libertades liberales. En 1864, la encíclica *Quanta Cura* de Pío IX denunció las ideas de libertad de palabra y de culto como "enajenación mental" y "balbuceo injurioso" y concluyó con una compilación de anteriores declaraciones papales, *El Sillabus de Errores*, de los cuales el más conocido fue la afirmación de que era un error creer que "el Pontífice Romano puede y debe reconciliarse y transigir con el progreso, el liberalismo y la civilización moderna" (Carlen, 1981, pp. 381-385; Bettenson, 1960, p. 382; Sección X del *Sillabus*, "Errores del liberalismo moderno").

El sucesor de Pío IX, León XIII, tomó un punto de vista un poco menos negativo. En su encíclica de 1885, *Inmortale Dei*, reconoció que "en ciertos tiempos y bajo ciertas leyes", la participación popular en el gobierno puede ser útil y, a pesar de una oposición general al liberalismo —al que llamó "el sombrío producto de la pretensión sin límites del hombre por innovar"—, aceptó la tolerancia religiosa en los casos en que es necesario

tolerar “lo que no se aviene a la verdad y la justicia para evitar algún mal o conservar algún bien mayor” (León XIII, 1885, núms. 23, 36). De mayor importancia fue la *Rerum Novarum*, la encíclica de León XIII sobre las condiciones del trabajo, publicada en 1891. Criticaba tanto al liberalismo como al socialismo y reafirmaba la base de la propiedad privada en la ley natural, a la vez que argumentaba la responsabilidad social al usarla. También defendía el derecho del trabajador a un salario que le permitiera vivir dignamente; defendía el derecho a formar sindicatos (de preferencia católicos), y pedía que se apoyara a “sociedades particulares”, grupos intermediarios entre el individuo y el Estado (O’Brien y Shannon, 1992, pp. 14-38).

La encíclica daba el apoyo papal al incipiente movimiento sindical católico en Europa central, y a la vez reflejaba y reforzaba ideas que estaban siendo desarrolladas por los partidos católicos surgidos en Bélgica, Holanda, Alemania y Austria-Hungría. Puede decirse que es el documento fundador del catolicismo social, aunque sus críticas al liberalismo y al socialismo fueron influidas por los precedentes medievales en la teoría (los escritos de santo Tomás de Aquino, que en 1879 habían sido reconocidos por León XIII como la base de la enseñanza filosófica católica) y en la práctica (el “salario justo” de los gremios medievales y otros grupos corporativos).

Stathis Kalyvas (1996, pp. 167-221) analizó el ascenso de los partidos influidos por el catolicismo en la Europa de finales del siglo XIX, como un esfuerzo de los laicos católicos, más que de la jerarquía eclesiástica, por valerse de la organización política para oponerse a las amenazas a las escuelas católicas que representaban el *Kulturkampf* de Bismarck, y los esfuerzos liberales en otros lugares por secularizar la educación. También documentó las dudas que la jerarquía eclesiástica tenía sobre los partidos católicos y las organizaciones laicas que no estaban bajo su control. León XIII reconoció estos movimientos en su encíclica de 1901, *Graves de Communi*, en la que apoyó el uso del término *socialcristiano* para describir a los católicos que habían creado instituciones y organizaciones dedicadas a ayudar a los trabajadores. León XIII se esforzó, sin embargo, por diferenciar la democracia cristiana de la socialdemocracia, criticando a los socialistas por su materialismo, su oposición a la propiedad privada y sus esfuerzos por “dejar todo gobierno en manos de las masas”. Redefinió la democracia cristiana como “una benéfica acción cristiana en favor del pueblo”, pero no apoyó la organización de partidos democratacristianos e insistió en que “no hay nada en común entre la socialdemocracia y la democracia cristiana”, advirtiendo que “las leyes de la naturaleza y el Evangelio son necesariamente independientes de todas las formas particulares de gobierno […] y deben permanecer absolutamente libres de las pasiones y vicisitudes de los partidos” (León XIII, 1901, núms. 5, 7).

León XIII no suspendió la *Non Expedit*, la prohibición de Pío IX (después de la toma de los Estados Pontificios) de que los católicos participaran en la política electoral italiana. En 1908 su sucesor, Pío X, suprimió el movimiento liberal católico en Francia, *le Sillon*, que apoyaba la reconciliación entre los católicos y la Tercera República, la cual había aprobado una serie de leyes que separaban a la Iglesia del Estado. Después de levantada la prohibición *Non Expedit* en 1919, Luigi Sturzo creó el Partito Populare, un

partido democratacristiano que tuvo un éxito considerable hasta que Pío XI lo disolvió en 1924 después de que Mussolini subiera al poder. Con la intención de obtener ventajas para la Iglesia, Pío X también celebró acuerdos malaventurados con Mussolini (el Tratado de Letrán de 1929, que estableció la Ciudad del Vaticano) y Hitler (el Concordato de 1933).

Aunque el Vaticano continuó desconfiando de la política democrática, mantuvo su apoyo al catolicismo social —sobre todo con base en la encíclica *Quadragesimo Anno*, que significó una ruptura con las ideas anteriores, y que fue publicada en 1931, en el cuadragésimo aniversario de la *Rerum Novarum*—. Pío XI reafirmó la condena del liberalismo y el socialismo por León XIII y llamó a una reconstrucción de la sociedad sobre la base de "grupos funcionales" en la industria y las profesiones que trabajarían juntos para promover el bien común sobre la base de la cooperación en vez de la lucha de clases. También reiteró el apoyo de León XIII a los grupos intermedios, apelando al "principio de subsidiaridad", el cual sostiene que "es un gran mal y una perturbación del orden verdadero transferir a la mayor y más alta colectividad funciones que pueden ser realizadas y proporcionadas por órganos menores y subordinados" (O'Brien y Shannon, 1992, pp. 60-61). Algunos ven cierto parecido del pensamiento papal con el corporativismo italiano, portugués, y posteriormente español, pero esos ejemplos implican el control centralizado por parte del Estado, al que se oponía Pío XI. La encíclica argumentaba en favor de una tercera vía entre el individualismo estereotipado de la "contaminada fuente" del liberalismo de libre empresa desbocada de la Escuela de Manchester y el punto de vista igualmente estereotipado del comunismo y socialismo colectivistas y materialistas (O'Brien y Shannon, 1992, pp. 54, 62 y 68). Reconocía los derechos de propiedad dentro de una estructura de regulación social y legal, promovía la cooperación entre el capital y el trabajo, alentaba a los sindicatos y otras asociaciones, y apoyaba la aplicación del principio de subsidiaridad mediante la promoción de grupos intermedios en las relaciones económicas y sociales.

A la tercera vía le dio aplicación política el filósofo francés tomista y converso al catolicismo Jacques Maritain. En *Humanisme Intègral* (Maritain, 1938, 1968), libro basado en conferencias sustentadas en España justo antes de la rebelión de Franco en 1936, abogó por una "democracia integral" que fuera "pluralista", "personalista" y "comunitaria" como la mejor aplicación de los principios cristianos y tomistas. También sostuvo que el teísmo proporciona una mejor base para la democracia que el liberalismo, y expresó la afirmación de que el Estado democrático moderno era resultado del "estímulo de los principios del Evangelio en la historia humana". Siguiendo un camino para entonces ya muy transitado, Maritain diferenció su personalismo basado en la religión del individualismo egoísta del "liberalismo burgués" y del capitalismo, así como del colectivismo marxista. La posición de Maritain se diferenció de la enseñanza papal en su fuerte apoyo a la democracia como la forma de gobierno más acorde con la naturaleza humana y los valores cristianos. Sostuvo que los principios cristianos y la democracia requerían de la libertad religiosa, posición que se alejaba de la renuente aceptación de la tolerancia religiosa por el Vaticano para evitar males mayores. Durante la segunda Guerra

Mundial, que él y su esposa, Raissa, una judía convertida al catolicismo, tuvieron que pasar en Nueva York como consecuencia de la caída de Francia, Maritain desarrolló una teoría de los derechos humanos basada en santo Tomás, que publicó con el título *The Rights of Man and the Natural Law* (1944), que fue traducida a 13 idiomas e influyó en la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que Maritain ayudó activamente a redactar.

Después de la segunda Guerra Mundial, la filosofía política de Maritain, muy ligada a la democracia política, al pluralismo social y a la libertad de culto, fue adoptada por los partidos democratacristianos de Europa y Latinoamérica. Incluso antes de la guerra había influido en los católicos reformistas en Latinoamérica, quienes rechazaban el integralismo autoritario que dominaba el pensamiento católico latinoamericano. Eduardo Frei, que posteriormente fue uno de los fundadores del Partido Demócrata Cristiano de Chile y presidente de su país de 1964 a 1970, escuchó una conferencia de Maritain en el Institut Catholique de París en 1934. Influido profundamente por la filosofía política de Maritain, regresó a Chile para dirigir el éxodo del movimiento juvenil del Partido Conservador para fundar la Falange, un nuevo partido que, como lo sugiere su nombre, al principio fue muy afín a la conservadora y corporativista Falange Española de José Antonio Primo de Rivera (que también afirmaba que representaba una tercera vía entre el capitalismo y el socialismo), pero pronto adoptó la filosofía de Maritain. La influencia de Maritain se dejó sentir más directamente en 1936, cuando se embarcó para Latinoamérica y dio conferencias en Buenos Aires. Una de éstas, la versión en español de su *Lettre sur l'Independence* que argumentaba a favor de una tercera vía que trascendiera la izquierda y la derecha, fue reimpresa en Chile con un profundo efecto sobre el nuevo partido. Su principal ideólogo, Jaime Castillo, escribió sobre Maritain y lo mismo hizo Frei, y reflejando la influencia de Maritain, el partido chileno adoptó su emblema, que todavía aparece en los documentos del partido en Chile, una flecha vertical que atraviesa dos barras horizontales que simbolizan la izquierda y la derecha (Sigmund, 1987). Una traducción en español de *Humanismo integral*, publicada en Madrid y Buenos Aires, también influyó en los líderes del COPEI, el movimiento estudiantil católico venezolano que pedía elecciones libres y que posteriormente se convirtió en el partido democratacristiano de Venezuela.

Después de la segunda Guerra Mundial, el pensamiento de la tercera vía también tuvo influencia en Europa. En Alemania, Konrad Adenauer, el jefe del Partido Demócrata Cristiano no confesional (CDU-CSU) que había sucedido al Partido Católico del Centro, escribió en sus primeros años sobre la bancarrota del capitalismo y la necesidad de un nuevo orden económico y social que no fuera ni capitalista ni socialista (Heidenheimer, 1960). En Francia, los fundadores del Mouvement Republicaine Populaire, que durante los años cuarenta (antes de que De Gaulle reingresara en la política) fue el más grande de los partidos franceses, citaron a Maritain cuando apoyó la creación de un Consejo Económico y Social con representantes de los grupos de interés corporativos, incluyendo a los gerentes y a los trabajadores. En la Quinta República, De Gaulle, que originalmente había sido un católico monarquista, intentó sin éxito convertir el Consejo en la Cámara

Alta de la Asamblea Nacional. En Alemania, Italia, Holanda, Bélgica y Austria, los partidos democratacristianos se convirtieron en las bases de la reconstrucción de posguerra, y junto con los franceses promovieron la integración europea y apoyaron la cooperación franco-alemana. Junto con sus rivales socialdemócratas, crearon el moderno Estado de bienestar europeo, financiado por un reanimado sistema capitalista al que, siguiendo a Ludwig Erhard, el cerebro de la recuperación económica alemana, denominaron "la economía social de mercado". Diferían de los socialdemócratas por su énfasis en la importancia de la familia y de las asociaciones de menor nivel (subsidiarias) y por la promoción de la maternidad como la vocación natural de las mujeres (Van Kersbergen, 1995, pp. 182-185).

Con el éxito del enfoque de mercado libre de Erhard para producir el "milagro económico" *(Wirtschaftswunder)* de la recuperación alemana, pronto quedó en claro que la economía europea sería predominantemente capitalista, pero continuaron haciéndose esfuerzos por reflejar los principios sociales católicos en la política pública, especialmente por medio de programas ampliados de donativos a las familias, y en Alemania por medio de una legislación que establecía la participación de los trabajadores en las juntas directivas de las empresas de mediana y gran escala *(mitbestimmungsrecht)*. En muchos países europeos se tomaban las decisiones sobre política económica mediante consultas con los administradores empresariales y los trabajadores, enfoque corporativista que puede ser relacionado con las primeras ideas sociales católicas, aunque también recibió el apoyo de los socialdemócratas.

Durante la segunda Guerra Mundial, el papa Pío XII, en su mensaje de Navidad de 1944, había establecido vínculos directos entre la democracia, la libertad política y la tradición cristiana, pero fue sólo con la encíclica *Pacem in Terris* (1963) del papa Juan XXIII, cuando la enseñanza oficial de la Iglesia se alineó con el pensamiento democratacristiano sobre la democracia y los derechos humanos. En la primera parte, intitulada, siguiendo la tradición, "Orden entre los hombres", el papa sostuvo que "todo ser humano es una persona, esto es, su naturaleza está dotada de inteligencia y libre albedrío [...] y porque es una persona tiene derechos y obligaciones que emanan de su propia naturaleza. Como estos derechos son universales e inviolables, no puede renunciar a ellos". Entre estos derechos estaba el de "adorar a Dios según los sinceros dictados de su conciencia, y por lo tanto el derecho a practicar su religión pública y privadamente". Además, "la dignidad de la persona humana implica el derecho a participar activamente en los asuntos públicos, y a contribuir con su parte al bien común de los ciudadanos" (O'Brien y Shannon, 1992, pp. 132-135).

En 1965, el Concilio Vaticano II hizo un argumento similar en favor de la libertad religiosa en su Declaración sobre la Libertad Religiosa *(Dignitatis Humanae)*, fundamentándola en la "propia dignidad de la persona humana" (Flannery, 1984, p. 800). En la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el Mundo Actual *(Gaudium et Spes)*, el Concilio también hizo una declaración más explícita a favor de la democracia:

> Está en pleno acuerdo con la naturaleza humana que las estructuras jurídicopolíticas puedan cada vez con

> más éxito y sin ninguna discriminación proporcionar a todos los ciudadanos la oportunidad de participar libre y activamente en el establecimiento de las bases constitucionales de una comunidad política, en el gobierno del Estado, en la determinación de la amplitud y propósito de las varias instituciones, y en la elección de líderes (O'Brien y Shannon, 1992, p. 217).

A partir de 1960 ocurrió una disminución del celo reformista y el atractivo ideológico de los partidos democratacristianos europeos. A medida que los socialdemócratas se despojaban de los últimos vestigios del marxismo y los partidos derechistas aceptaban el Estado benefactor, disminuyeron las diferencias entre los partidos. Al hacerse Europa cada vez más secular, los elementos religiosos de la ideología democratacristiana se volvieron menos convincentes y los elementos claramente católicos de su programa, por ejemplo la oposición al aborto, fueron incorporados también en los programas de partidos más conservadores. La *détente* Occidente-Oriente y el fin de la Guerra Fría socavaron el atractivo del anticomunismo en los programas de los partidos, y el término *subsidiaridad* se hizo de uso común en el vocabulario de la naciente Unión Europea. El apoyo electoral disminuyó y sólo Democrazia Cristiana, el partido italiano, se sostuvo en el poder en el periodo 1960-1990 (hecho que tuvo mucho que ver con su caída en 1992 como consecuencia de una corrupción generalizada). El partido con más éxito, el alemán CDU-CSU, disminuyó de 48.8% de los votos en 1983 a 34% en 1998, y en 1999 sufrió un importante escándalo que implicaba al anterior canciller, Helmut Kohl. En el año 2000 se hizo evidente lo mucho que se había alejado de sus raíces católicas al elegir a una divorciada protestante de Alemania Oriental como su líder. En Holanda, el "Llamado Demócrata Cristiano", que se formó de la fusión de un partido católico y dos protestantes, llegó al poder en la década de 1980, pero en los noventa, "sin sus bases confesionales" y su "insípida política centrista" (Harper y Sherratt, 2002), perdió votos ante la Unión Cristiana, un nuevo partido con un enfoque más específicamente confesional.

La única área en que los partidos democratacristianos continúan siendo importantes es el Parlamento Europeo. En él forman el núcleo del Partido Popular Europeo (PPE), que en el año 2000 estableció un Secretariado Conjunto con la Unión Democrática Europea (UDE), lo que los convirtió en el mayor grupo de partidos en el Parlamento Europeo. Los vínculos con la UDE parecen reconocer el creciente conservadurismo de la democracia cristiana europea, y el propio PPE incluye algunos partidos que por lo general son considerados derechistas, como Forza Italia (que comparte su participación en el PPE con cuatro minipartidos que afirman ser los herederos del difunto Partido Demócrata Cristiano italiano) y el Partido Popular Español, de José María Aznar. Hubo cierta resistencia por parte de algunos puristas a la admisión de estos partidos en el PPE, y más aún a la relación con la Unión Democrática, que incluye a los gaullistas y a los conservadores británicos, partidos que se han mostrado notoriamente fríos en lo que se refiere a la unificación de Europa. El programa más reciente del PPE, un documento de 35 páginas adoptado en enero de 2001, muestra lo mucho que se ha alejado la democracia cristiana europea del anticapitalismo de sus antecesores ideológicos. Menciona la subsidiaridad y la economía social de mercado, pero no hace propuestas de

reforma socioeconómica (Partido Popular Europeo, 2001). A pesar de su extensión, sus propuestas tímidas y convencionales reflejan lo que un estudioso belga de la democracia cristiana europea describió como un proceso de "banalización" de la ideología democratacristiana (Durand, 1995, p. 337).

En Latinoamérica el tercerismo desempeñó un importante papel en la competencia ideológica originada por la Guerra Fría en el hemisferio. Los partidos democratacristianos en Chile y Venezuela se crearon en los años treinta, pero el movimiento democratacristiano sólo adquirió importancia en los años cincuenta. Eduardo Frei, el máximo dirigente del PDC chileno, formado por la unión de la Falange y un sector del Partido Conservador, fue un fuerte contendiente en las elecciones presidenciales chilenas de 1958 y obtuvo una mayoría absoluta (lo que es muy raro en el sistema multipartidista de Chile) en las elecciones presidenciales de 1964. En Venezuela, en 1958, el COPEI democratacristiano trabajó con Acción Democrática (AD), socialdemócrata, para establecer la democracia y promover la reforma después de la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez, y hasta la década de 1990 sus candidatos se alternaron con los de AD en la presidencia. En otras partes de Latinoamérica se formaron partidos democratacristianos y después de que Fidel Castro adoptó el comunismo en 1961 se establecieron institutos docentes que estudiaron los documentos papales y los escritos de Jacques Maritain —frecuentemente con dinero de fundaciones políticas financiadas por los contribuyentes fiscales alemanes, la Konrad Adenauer Stiftung y la Hans Seidel Stiftung, que están relacionadas con la CDU-CSU alemana—. Una investigación realizada en 1976 por el Comité de Actividades de Inteligencia del Senado de Estados Unidos también reveló que los democratacristianos chilenos recibieron 2.6 millones de dólares de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) por canales ocultos para ayudar a financiar, en 1964, la victoria de Eduardo Frei sobre el candidato socialista-comunista Salvador Allende (Sigmund, 1993, p. 22). Los votos de los conservadores y los liberales chilenos que deseaban asegurar la derrota de Allende fueron más importantes que el dinero de la CIA, pero Frei y su partido consideraron que su victoria con 56% de los votos constituía un mandato para llevar a cabo lo que él llamó una "Revolución en Libertad".

Negándose a realizar alianzas con otros partidos, los victoriosos democratacristianos empezaron a llevar a la práctica las teorías del pensamiento social católico. Aprovecharon la idea de subsidiaridad para establecer un programa llamado Promoción Popular que alentaba la organización de mujeres, de habitantes de barriadas pobres, jóvenes y, lo que es más importante, de sindicatos de trabajadores rurales. Con citas de santo Tomás de Aquino y de los papas sobre la función social de la propiedad, adoptaron una ambiciosa ley de reforma agraria que estableció cooperativas rurales y proporcionó compensación en bonos por las tierras expropiadas, bonos que fueron considerados confiscatorios por la derecha. Al igual que en Europa, los democratacristianos apoyaron la integración económica y política de Latinoamérica, pero difirieron de los europeos en su entusiasmo por la distribución de la tierra y su hostilidad a sus oponentes más conservadores. Su principal ideólogo, Jaime Castillo, argumentó, en forma clásica, que el establecimiento de

una sociedad "comunitaria" modelada con base en las ideas de Maritain resolvería los problemas de Chile y de Latinoamérica (Castillo, 1972). La izquierda o facción "rebelde" del partido fue aún más lejos y en 1967 elaboró un programa para una vía no capitalista del desarrollo. Frei se opuso a su programa, pero su radicalismo —junto con la retórica izquierdista de Radomiro Tomic, el candidato presidencial demo-cratacristiano— llevó a que la derecha presentara su propio candidato en la elección presidencial de 1970. El resultado fue una contienda entre tres candidatos en la que Allende ganó por escaso margen el voto popular, produciendo una crisis política antes de que el Congreso decidiera entre Allende y el candidato derechista, que incluyó un esfuerzo de Estados Unidos por promover un golpe de Estado y el asesinato del comandante en jefe constitucionalista del ejército. Esto fue seguido por tres años de desórdenes, que finalmente produjeron un frente común de los democratacristianos y de los conservadores contra Allende, aunque sólo después de que los democratacristianos intentaran competir con Allende alegando que ellos representaban un "socialismo comunitario" que era superior al socialismo marxista de Allende. En 1973, en medio del caos que precedió al golpe de Estado de septiembre de ese año, el Congreso chileno realizó una sesión especial para lamentar el fallecimiento de Jacques Maritain a los 91 años de edad.

El tercerismo democratacristiano contribuyó al desastre chileno de varias maneras. El mesianismo de la "Revolución en Libertad" de Frei les impidió a los democratacristianos formar las alianzas entre varios partidos que habían caracterizado a la política chilena durante décadas, aunque no tuvieran la mayoría en el Congreso. Los restos de elementos anticapitalistas en el tercerismo católico los hicieron particularmente adversos al compromiso con la derecha, produciendo así la división tripartita que hizo que Allende subiera al poder. Esto fue reforzado por las tomas de tierras sólo parcialmente compensadas que, según los democratacristianos, no estaban cumpliendo su "función social", tal como lo mandaba la ley natural. El debate sobre una vía no capitalista hacia el desarrollo finalmente condujo a la facción "rebelde" a dejar el partido y unirse a la coalición Unidad Popular de Allende, pudiéndose argumentar que así le proporcionaron el margen de su victoria.

Una de las propuestas de los "rebeldes" fue el establecimiento de empresas que fueran propiedad y administradas por los trabajadores. Nunca adoptado en Chile, en Perú se convirtió en parte del programa del gobierno militar reformista del general Juan Velasco, que se adueñó del poder en 1968. A diferencia de sus contrapartes militares en otros países latinoame ricanos, el gobierno de Velasco siguió un programa radical de cambio social que incluía la nacionalización de empresas extranjeras y una ampliada reforma agraria. También propuso crear —con apoyo del gobierno— nuevas empresas que fueran propiedad y administradas por los trabajadores, proyecto que fue desarrollado con la asesoría de los pensadores sociales democratacristianos, que vieron a las empresas manejadas por los trabajadores como aplicaciones del pensamiento social cristiano. Además, bajo la influencia del pensamiento social cristiano, el gobierno adoptó una Ley de Comunidades Industriales que ordenaba la transferencia a los trabajadores de un

porcentaje de las ganancias cada año en forma de acciones en la empresa, con el objetivo final de una división 50%-50% de la propiedad entre los trabajadores y los empresarios (Velasco, 1972). Internacionalmente, la adhesión de Perú al tercerismo se manifestó en su liderazgo en el Tercer Mundo, cuando fue anfitrión de la Conferencia de Países No Alineados, así como en su aceptación de ayuda militar soviética y francesa, para contrarrestar la influencia de Estados Unidos.

Las ideas democratacristianas de subsidiaridad y corporativismo también influyeron en los esfuerzos de los militares para organizar a los campesinos, trabajadores y pobladores asentados precariamente en las ciudades en el Sistema Nacional de Movilización Social (Sinamos), esfuerzo que fracasó cuando la oposición popular y los problemas económicos hicieron que se remplazara a Velasco por un general más conservador que prometió el retorno a un gobierno civil. Cuando la política democrática retornó a Perú, el partido que tenía más influencia católica, el Partido Popular Cristiano (PPC), rechazó el anticapitalismo de los asesores católicos más izquierdistas de Velasco, y aceptó el sistema capitalista como la mejor forma de lograr el crecimiento económico y la justicia social.

Los partidos democratacristianos de Latinoamérica desempeñaron otro papel diferente durante las décadas de 1970 y 1980, cuando la mayor parte de los países en Latinoamérica estaban bajo gobiernos militares. Apoyados (excepto en Argentina) por la jerarquía eclesiástica, ayudaron a crear organizaciones de derechos humanos para defender a las víctimas de la represión militar y para documentar las desapariciones, asesinatos y torturas. En esas organizaciones frecuentemente trabajaron con la izquierda, que a su vez estaba pasando por un proceso de revaluación de la democracia “burguesa” a la que se había opuesto en el pasado. Por su parte, los democratacristianos se sentían menos seguros de tener todas las respuestas a los problemas latinoamericanos. En Chile, donde eran más fuertes, tomaron la iniciativa de formar una coalición de varios partidos opuestos al gobierno dictatorial del general Augusto Pinochet, surgiendo, contrariamente a las predicciones de un académico estadunidense (Fleet, 1985), como el partido más grande en la coalición. La Concertación derrotó a Pinochet en el plebiscito de 1988 acerca de su continuación en el poder, y ganó la elección presidencial de 1989, eligiendo a Patricio Aylwin, un democratacristiano, por 55 contra 29% de los votos. El programa de la coalición de Aylwin aceptó las políticas económicas de libre mercado y la apertura a la economía globalizada que habían empezado los economistas conocidos como los “Chicago Boys”, pero prometió combinar esas políticas con programas sociales en las áreas de salud, educación y vivienda para pagar lo que Aylwin llamó la “deuda social” incurrida por los inadecuados programas sociales del gobierno de Pinochet. El hecho de que el programa se llevara a cabo concertadamente con muchos partidos, incluyendo al previamente anticlerical Partido Radical y al antiguo Partido Socialista Marxista, y de que fuera construido básicamente sobre los fundamentos de la economía de mercado, fue una indicación de los cambios ocurridos en el pensamiento de católicos, socialistas y liberales.

El cambio en el pensamiento católico fue evidente en 1991 con la publicación por el papa Juan Pablo II de *Centesimus Annus*, en el centésimo aniversario de la *Rerum*

Novarum. Ya en su encíclica de 1987, *Sollicitudo Rei Socialis*, después de afirmar que "la doctrina social de la Iglesia adopta una actitud crítica tanto hacia el capitalismo liberal como hacia el colectivismo marxista", el papa había negado que la doctrina social católica comprendiera "una tercera vía entre el capitalismo liberal y el colectivismo marxista", afirmando que más bien era "la correcta formulación de los resultados de una cuidadosa reflexión sobre las complejas realidades de la existencia humana, en la sociedad y en el orden internacional a la luz de la fe y de la tradición de la Iglesia" (O'Brien y Shannon, 1992, pp. 407, 425). En *Centesimus Annus*, escrita después de terminada la Guerra Fría, el papa apoyó "el papel positivo de las empresas, del mercado, de la propiedad privada y de la responsabilidad resultante para los medios de producción, así como para la libre creatividad humana en el sector económico" —aunque insistió en que el sistema de mercado debía quedar "circunscrito dentro de una fuerte estructura jurídica"—. Una vez más, sostuvo que la Iglesia no apoyaba ningún programa en particular, sino que más bien proporcionaba "una base y una motivación para la acción" (O'Brien y Shannon, 1992, pp. 471-481). Quedaba claro que el anticapitalismo de las anteriores formulaciones de la enseñanza social católica había sido abandonado, aunque no su compromiso con los esfuerzos nacionales e internacionales por superar la pobreza y los efectos negativos de la comercialización y el consumismo asociados con el sistema de mercado. Aunado al desplome de la alternativa socialista marxista, significaba que casi no tenía sentido la retórica de un *tercerismo* de inspiración cristiana como una alternativa al capitalismo y al socialismo. No obstante, como lo indica la invocación de la tercera vía por los líderes políticos europeos y estadunidenses en los años noventa, todavía era una palabra simbólica de un capitalismo más humano, orientado al bienestar.

En la democratización de Latinoamérica en las décadas de 1980 y 1990, el éxito del Partido Demócrata Cristiano chileno no fue igualado en ningún otro país. En El Salvador, durante los años ochenta, el presidente José Napoleón Duarte, un democratacristiano, sufrió la oposición feroz de la derecha debido a su programa de reforma agraria, y de la guerrilla izquierdista, el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), que después de los acuerdos de paz superó en votos a los divididos democratacristianos y se convirtió en el principal partido de oposición a los presidentes conservadores de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena) que le sucedieron en el poder. En El Salvador, así como en la vecina Guatemala, donde el primer presidente civil después de que el país regresó a la democracia fue un democratacristiano, los democratacristianos cayeron en el descrédito al revelarse una corrupción generalizada, lo que dejó a Costa Rica como el único país de Centroamérica con un partido democratacristiano importante. En Venezuela la corrupción también tuvo mucho que ver con el desplome que amenazó al partido socialcristiano (COPEI) durante los años noventa. (En las elecciones de 2000 el COPEI se vio reducido a siete representantes en la nueva Asamblea Nacional de 165 escaños, y sólo ganó la gobernación de un estado.) En Ecuador, en enero de 2000, también fue mencionada la corrupción en el gobierno por una coalición de militares y de líderes indígenas que derrocó al gobierno de Jamil Mahuad, del Partido Democracia Popular (PDP) (democratacristiano), en el primer golpe militar latinoamericano que hubo en dos

décadas. Al año siguiente, su líder más destacado, el ex presidente Osvaldo Hurtado, renunció para formar el Partido Solidario por considerar que había abandonado sus principios fundadores.

En décadas anteriores, el PDC chileno había sido enfrentado no sólo por la izquierda marxista, sino también por versiones radicales del pensamiento social católico, como la Izquierda Católica, que estaban influidos por la teología de la liberación. Sin embargo, la combinación de críticas del Vaticano, la derrota electoral de los sandinistas en Nicaragua y la crisis de la economía cubana debido a la terminación del subsidio soviético hizo que la izquierda católica ya no pudiera ofrecer un modelo político y social alternativo. El nuevo rival que surgió después de la transición al gobierno civil estaba en la derecha, la Unión Democrática Independiente (UDI), formada por antiguos partidarios de Pinochet y por miembros activos del Opus Dei, un movimiento religioso conservador español que estaba ampliando su influencia en toda Latinoamérica.

Durante la década de 1990, el PDC chileno aportó los dos primeros presidentes elegidos después de Pinochet, Patricio Aylwin y Eduardo Frei Ruiz-Tagle, hijo del anterior presidente. Aliados en la Concertación con los socialistas "renovados", su pretensión de representar los principios sociales católicos fue refutada por la UDI, que reclutó a sus principales líderes, como en alguna ocasión lo hicieron los democratacristianos, en la Universidad Católica de Chile, y trabajó con éxito, como antes lo hicieron también los democratacristianos, para ampliar su apoyo en las zonas de bajo ingreso (el esfuerzo de la UDI por afiliarse a la Internacional Demócrata Cristiana (IDC) fue enfrentado con éxito por el PDC chileno). A partir de 1997, los democratacristianos sufrieron un proceso de erosión electoral, que culminó en diciembre de 2001 con la pérdida de 14 representantes en las elecciones al Congreso y su reemplazo por la UDI como el partido político más grande en Chile. Parte de esas pérdidas se debieron a cambios económicos y sociales: disminución de los miembros de los sindicatos; aumento de una clase media más próspera y conservadora; cambios en la orientación y en la política de la jerarquía eclesiástica chilena (Arriagada, 1997, pp. 54 ss.), y la cada vez mayor secularización de las élites (aunque Chile sigue siendo un país muy católico). Sin embargo, al menos parte del problema fue ideológico, la falta de una voz distintiva. Un congreso del partido a principios de los años noventa trató de poner al día las ideas democratacristianas, pero aparte de una ocasional referencia a Maritain, a la subsidiaridad y a la economía social de mercado, no produjo nada que la distinguiera de los partidos reformistas de inspiración más secular, que comparten su crítica del neoliberalismo en la derecha y del populismo —ya no se habla de marxismo— en la izquierda. Parece que a pesar de los esfuerzos de su liderazgo más joven por modernizar su programa e ideología (Walker, 1999), la *mystique* de la "Revolución en Libertad" ha cedido su lugar a la *politique* de un partido que sufrió un gradual *desgaste* durante los años en que ejerció o compartió el poder.

Un obituario para el tercerismo tendría que reconocer que ha tomado una gran variedad de formas desde su articulación en el siglo XIX como alternativa al capitalismo del *laissez faire* y al socialismo marxista. Inspirado en la ley natural tomista, argumentó

en favor de un salario justo y del derecho del trabajador a formar sindicatos. Yendo más lejos, propuso la visión de una sociedad organizada sobre la base de grupos naturales funcionales que cooperarían más o menos armoniosamente en la promoción del bien común. Esa sociedad habría de ser organizada sobre la base de la subsidiaridad, asignando funciones públicas a grupos intermedios, a la vez que permanecía abierta a estructuras federales, regionales e internacionales más amplias. El pensamiento de la tercera vía inicialmente propendió hacia un corporativismo más o menos autoritario, pero más tarde aceptó la democracia política y el pluralismo religioso, aunque argumentó que, en contraste al menos con el liberalismo continental, debía tener una base teísta y estar orientado socialmente y comprometido con una teoría de derechos humanos basada en la ley natural. También llevó a cabo, sin éxito, esfuerzos por institucionalizar la participación de los trabajadores en la administración y propiedad de las empresas, así como experimentos en la autoadministración y en la propiedad por parte de los trabajadores. En las décadas finales del siglo XX, la retórica tercerista fue abandonada a medida que, tardía y renuentemente, el pensamiento social católico aceptaba el sistema de mercado, a la vez que continuaba haciendo hincapié en las obligaciones sociales del orden económico y político nacional e internacional.

Ya sea que estén aliados con el centro-izquierda como en Chile o con el centro-derecha como en Europa, los partidos democratacristianos en Europa y en Latinoamérica ya no están influidos por una visión utópica de una tercera vía para el desarrollo que no sea ni capitalista ni socialista. Los partidos democratacristianos han caído o declinado en la mayor parte de Europa y Latinoamérica. Los partidos alemán, chileno y costarricense quedan como ejemplos de partidos reformistas centristas inspirados en el cristianismo, que apoyan la "economía social de mercado" —en realidad, el capitalismo del Estado benefactor y programas para aliviar la pobreza— pero que ya no proponen un modelo de sociedad alternativo. No hemos llegado al "fin de la historia", sino al fin, por una variedad de razones, de un enfoque original y creativo para la aplicación de los principios sociales católicos a la política, la economía y la sociedad modernas, que proporcionó los fundamentos ideológicos para el establecimiento y el crecimiento de grandes e importantes partidos en la Europa y la Latinoamérica de la posguerra.

Lo que resta son ciertos principios básicos que tienen un fundamento religioso y humanista. El apoyo a la democracia, a los derechos humanos y a la libertad religiosa se ha fortalecido gracias a la teoría y la práctica de la democracia cristiana. Los principios de solidaridad y subsidiaridad —última versión de las críticas papales clásicas al individualismo y al colectivismo— continúan teniendo vigencia contra el individualismo consumista y materialista, y apoyan las soluciones comunitarias a problemas sociales sobre una base descentralizada o federalista. Sin embargo, como lo demuestran los variados programas y orientaciones de los partidos democratacristianos en Europa y en Latinoamérica, esos principios pueden interpretarse en dirección del centro-derecha —por ejemplo, el capitalismo democrático de Michael Novak (1982)— o en un sentido de centro-izquierda, socialdemócrata.

El estatismo colectivista de la izquierda ha desaparecido, con unas pocas excepciones,

en todos los países, y se reconoce al sistema de mercado como la mejor forma de lograr el crecimiento económico, siempre que esté sujeto a regulaciones nacionales e internacionales cuyo objetivo sea reducir la pobreza y promover la justicia social. La tercera vía ya no existe más que como un apoyo para el "crecimiento con equidad", pero los principios con los que estuvo asociada aún pueden ofrecer guías para la continuación del debate sobre la forma en que se puede alcanzar una buena sociedad.

REFERENCIAS

Arriagada, Genaro, 1977, *¿Hacia un "Big Bang" del sistema de partidos?*, Santiago, Ediciones Los Andes.

Bettenson, Henry (ed.), 1960, *Documents of the Christian Church*, Nueva York, Oxford University Press.

Carlen, Claudia (ed.), 1981, *The Papal Encyclicals: 1740-1878*, Raleigh, N. C., McGrath Publishers.

Castillo, Jaime, 1972, "Property and the Communitarian Society", en Paul Sigmund (ed.), *Ideologies of the Developing Nations*, 2ª ed. revisada, pp. 462-465, Nueva York, Praeger.

Durand, Jean-Dominique, 1995, *L'Europe de la Democratie Chretienne*, Bruselas, Editions Complexe.

Flannery, Austin P. (ed.), 1984, *Documents of Vatican II*, Grand Rapids, Mich., William B. Eerdmans.

Fleet, Michael, 1985, *The Rise and Fall of Christian Democracy*, Princeton, Princeton University Press.

Harper, William A., y Timothy R. Sherratt, 2002, "Whither European Christian Democracy?", *Public Justice Report*, 25, núm. 1, p. 7.

Heidenheimer, Arnold, 1960, *Adenauer and the CDU*, La Haya, M. Nijdhoff.

Kalyvas, Stathis N., 1996, *The Rise of Christian Democracy in Europe*, Ithaca, Cornell University Press.

León XIII, 1885, *Immortale Dei*, puede consultarse en http://www.ewtn.com/library/encyc/113Sta.htm

———, 1901, *Graves de Communi*, puede consultarse en http://www.ewtn.com/library/encyc/113grcom.htm

Maritain, Jacques, 1938, 1968, *True Humanism*, nueva traducción al inglés y nuevo título: *Integral Humanism*, Nueva York, Scribner's.

———, 1944, *The Rights of Man and the Natural Law*, Nueva York, Scribner's.

Mott, W. King, Jr., 1999, *The Third Way: Economic Justice According to John Paul II*, Lanham, Maryland, University Press of America.

Novak, Michael, 1982, *The Spirit of Democratic Capitalism*, Nueva York, Simon and

Schuster.
O'Brien, David J., y Thomas A. Shannon (eds.), 1992, *Catholic Social Thought*, Maryknoll, Nueva York, Orbis Books.
Partido Popular Europeo, 2001, *A Union of Values*, 14 Congreso, 13 de enero de 2001. Puede consultarse en http://eppe.org/archive/Congress2001
Sigmund, Paul, 1987, "Maritain on Politics", en Deal Hudson y Matthew Mancini (eds.), *Understanding Maritain*, pp. 165-166, Macon, Georgia, Mercer University Press.
———, 1993, *The United States and Democracy in Chile*, Baltimore, Johns Hopkins University Press.
Van Kersbergen, Kees, 1995, *Social Capitalism: A Study of Christian Democracy and the Welfare State*, Nueva York, Routledge.
Velasco, Juan, 1972, "The Industrial Law", en Paul Sigmund (ed.), *The Ideologies of the Developing Nations*, 2ª ed. revisada, pp. 407-410, Nueva York, Praeger.
Walker, Ignacio, 1999, *El futuro de la democracia cristiana*, Santiago, Ediciones B.

IV. SEMBRANDO IDEAS: EXPLICACIÓN DE LOS ORÍGENES DE LOS PARTIDOS DEMOCRATACRISTIANOS EN LATINOAMÉRICA

KIRK A. HAWKINS*

EL EJEMPLAR del 27 de julio de 1966 de la revista chilena *Ercilla* publicó una entrevista con el entonces presidente Eduardo Frei, en la que éste dio su versión de los inicios del PDC chileno:

> Justo después de que ingresamos a la Escuela de Leyes, porque de ahí es de donde proviene el grupo que usted ve hoy en día, más grande, enriquecido con amigos. En ese año de 1928 Bernardo Leighton fue el líder estudiantil que se levantó antes que el resto de nosotros contra el gobierno de Ibáñez. Nuestro grupo ya incluía a Manuel Garretón, Ignacio Palma, Jorge Rogers, Manuel Sánchez, Tomic y Bernardo. Pero además de nuestros ataques contra ese prolongado accidente del gobierno del general, siempre tuvimos una actitud crítica hacia los partidos políticos [Larson, 1967, pp. 28-29].

Los inexactos recuerdos de Frei,[1] junto con una variedad de otros tropiezos menores y excesos políticos cometidos por los líderes del PDC, motivaron una pronta y severa respuesta detallada del padre Óscar Larson, jesuita y ex director de la Asociación Nacional de Estudiantes Católicos (ANEC), la cual fue publicada como relato autobiográfico en 1967. En su respuesta, el padre Larson les recordó a Frei y a muchos de sus colegas que sus verdaderos inicios como democratacristianos fueron en la ANEC, donde, como estudiantes católicos de 1928 a 1934, estudiaron la nueva doctrina social de la Iglesia bajo la guía de sacerdotes. Fueron los esfuerzos conscientes de enseñanza y organización de parte del padre Larson, con el respaldo de sus superiores y progenitores ideológicos, y no alguna iniciativa espontánea de parte de estudiantes recién ingresados a la universidad, los que juntaron a estos futuros democratacristianos y les dieron sus primeras experiencias en el activismo social y en los estudios de política pública. Aparentemente, el padre Larson sugería que el tiempo y la conveniencia política de hacer un llamado más secular habían oscurecido la memoria y el sentido de gratitud de Frei (Larson, 1967).

A pesar de los temores del padre Larson, ni los historiadores ni los colegas lo olvidaron, gracias en parte a la publicación de su apología (Araneda Bravo, 1981; Gazmuri, 1996). La verdad es que los esfuerzos del padre Larson como predicador, practicante y organizador de una joven generación en lo que se refiere a la doctrina social, no fueron los únicos. Un pequeño número de sacerdotes (muchos de ellos jesuitas) en varios países latinoamericanos intentaron divulgar la nueva doctrina social enseñando y organizando a miembros laicos de la Iglesia, en particular jóvenes universitarios, así como poner en práctica la doctrina directamente mediante trabajo social. El padre Manuel Aguirre Elorriaga en Venezuela, el padre Fernando Vives Solar en Chile, el padre Jorge Murcia Riaño en Colombia, el obispo Manuel de Andrea en

Argentina y monseñor Mariano Rossell y Arellano en Guatemala se encuentran entre los más conocidos (*SIC*, 1969; Luque, 1986; Larson, 1967; Araneda Bravo, 1981; Bidegaín de Urán, 1985; Kennedy, 1958; Bendaña Perdomo, 1996; Calder, 1970). Al participar en este proceso de enseñanza y proselitismo, cada una de estas personas y sus colegas pusieron en práctica lo que el padre Aguirre Elorriaga en Venezuela consideró su lema: "Siembra ideas y cosecharás hechos" (*SIC*, 1969).

Sin embargo, muchos académicos de los Estados Unidos, en sus análisis y descripciones de los partidos democratacristianos en Latinoamérica, han cometido el mismo error de concentrarse en los líderes políticos, con exclusión de los individuos que estaban detrás de ellos: los clérigos que dedicaron parte de sus vidas a difundir la doctrina social. Esta omisión no es sólo una inexactitud histórica, sino también una oportunidad perdida para entender cómo nacen los partidos (en particular los ideológicos) y la clase de efecto que pueden tener en la política unos pocos hombres dedicados y con los recursos adecuados. En este capítulo analizaré los orígenes de los partidos democratacristianos en Latinoamérica en un esfuerzo por responder a la pregunta ¿por qué algunos partidos democratacristianos se formaron antes que otros? Al hacerlo así, me ocuparé de lo que considero son las explicaciones comunes de los orígenes de los partidos democratacristianos —la modernización socioeconómica y la fuerza de la Iglesia católica —, explicaciones que tienen el efecto irónico de minimizar el papel desempeñado por los sacerdotes. El análisis comparativo revela que estos factores no tienen por sí solos un efecto importante y predecible sobre la formación de los partidos. Más bien, el factor individual más importante en la formación de los partidos son los esfuerzos selectivos y a veces pequeños de personal oficial de la Iglesia por difundir la doctrina social y organizar a los miembros laicos en torno a ella. Esta respuesta y la teoría de la formación del partido ideológico de la cual se derivó serán de interés para todos los dedicados al estudio de la política de partidos y no sólo para los que quieren entender la democracia cristiana en Latinoamérica.

En este capítulo primero ofrezco el contexto histórico y empírico para la pregunta objeto de investigación que ya mencioné y luego bosquejo una teoría de la formación de los partidos democratacristianos que muestra una estructura más detallada, deductiva y matizada para confrontar las explicaciones que ya existen. Después pongo a prueba esta teoría por medio de una serie de análisis estadísticos. Concluyo con el estudio de los casos de Chile, Venezuela, Uruguay y El Salvador, que ejemplifican y explican los resultados de los análisis estadísticos y destacan el efecto importante que los recursos y el personal de la Iglesia desempeñaron a menudo para alentar la formación de partidos difundiendo la doctrina social.

EL ACERTIJO DE LA FORMACIÓN DE PARTIDOS

La democracia cristiana arribó al Nuevo Mundo a principios del siglo XX. Casi desde sus comienzos el movimiento fue una respuesta a los problemas creados por la

industrialización capitalista. Al igual que sus contrapartes europeas, los democratacristianos en Latinoamérica propusieron reformas socioeconómicas generales basadas en la doctrina social católica, un conjunto de ideas inspirado por dos encíclicas papales, la *Rerum Novarum* (1891) y la *Quadragesimo Anno* (1931), y por los escritos de filósofos católicos franceses como Jacques Maritain. El programa democratacristiano ofrecía una "vía media" entre el comunismo y la economía de libre mercado ortodoxa, proponiendo mejores salarios y condiciones laborales para los trabajadores asalariados, la conservación de la propiedad privada y la necesidad de la democracia liberal para lograr la dignidad y la libertad humanas (Lynch, 1993; Williams, 1967, p. 75).

Los partidos individuales se originaron en los grupos de estudio y de trabajo social que aparecieron por primera vez durante la primera Guerra Mundial, y con frecuencia fueron iniciados por estudiantes católicos progresistas, ya fuera como grupos que se separaron de partidos conservadores o como oposición a gobiernos autoritarios. Estos partidos estaban muy institucionalizados, "mostraban una profunda preocupación por la organización política efectiva" construida en torno a reglas, más que en torno a un líder en particular, y atraían fuertemente a los votantes del centro-izquierda, en particular mujeres y campesinos.[2] Aunque unos cuantos partidos aparecieron antes de la segunda Guerra Mundial, en su mayor parte surgieron después, en la década de 1950 y a principios de los sesenta. Cuando el PDC chileno ganó su primera elección presidencial en 1964, casi todos los países de Latinoamérica tenían un partido democratacristiano. Por ejemplo, las actas del Congreso Internacional de la Democracia Cristiana en 1955 incluyeron listas de delegados de 11 países latinoamericanos, cifra que excluye a los países centroamericanos donde los partidos democratacristianos se organizaron después (Congreso Internacional, 1959, p. 20). En el cuadro IV.1 se presenta una lista de todos los partidos democratacristianos de Latinoamérica, incluyendo las fechas en que se formaron y su primera participación en elecciones.

Como puede observarse en el cuadro IV.1, los partidos democratacristianos fueron formados durante un periodo que abarca casi tres décadas. Como lo señalan Mainwaring y Scully en el capítulo "La diversidad de la democracia cristiana en Latinoamérica", podemos dividir los partidos en dos grupos: los que se formaron antes de 1950 y fueron una especie de reacción clerical, conservadora, a los problemas de la industrialización y de la urbanización, y los formados después de 1950 como respuesta a los ejemplos de triunfantes partidos democratacristianos en Chile, Venezuela y los países de Europa occidental, así como a la nueva amenaza de movimientos comunistas asociados con la Guerra Fría y el triunfo de Castro en Cuba.

¿Cómo podemos explicar estas diferentes fechas de formación? Lamen-tablemente se han publicado pocas teorías explícitas sobre los orígenes de los partidos democratacristianos en Latinoamérica. No obstante, la forma en que acabamos de agrupar a estos partidos sugiere algo sobre sus orígenes: que algunos partidos se formaron antes en algunos países como consecuencia de un nivel especialmente alto de cambio social o de la fuerza de la Iglesia católica, y que en los demás países se formaron a la postre partidos una vez que la región empezó a enfrentar un conjunto común de

desafíos al que respondieron los partidos democratacristianos, y una vez que el éxito de los partidos democratacristianos en otras partes del mundo los hizo más atractivos. En conversaciones que he sostenido con académicos y políticos latinoamericanos sobre este tema, éstas son las explicaciones más comunes que he escuchado, y son explicaciones que atraen mucho intuitivamente. La mayor parte de los estudios de los orígenes históricos de los sistemas de partidos en Europa occidental (Lipset y Rokkan, 1967) y en Latinoamérica (Dix, 1989; Collier y Collier, 1991) se basan en teorías similares, que hacen referencia a un amplio cambio social en el electorado y a su efecto sobre las demandas de los votantes; quizás estas teorías también expliquen el tema más específico de la fecha de formación de los partidos.

CUADRO IV.1. *Partidos democratacristianos en Latinoamérica*

País	*Nombre del partido cuando participó por primera vez en una elección*	*Fecha de formación*	*Fecha de su primera participación*
Argentina	Democracia Cristiana	1955[a]	1958
Bolivia	Partido Social Cristiano	1954[c]	1958
Brasil	Partido Demócrata Cristiano		1945
Chile	Falange Nacional	1938[b]	1941
	Partido Demócrata Cristiano	1957	1958
Colombia	Partido Social Demócrata Cristiano	1964	1966
Costa Rica	Partido Reformista	1923	1923
	Partido Demócrata Cristiano	1960	1970
República Dominicana	Partido Demócrata Cristiano		1966
Ecuador	Partido Demócrata Cristiano	1964[c]	1978[d]
Guatemala	Partido Demócrata Cristiano Guatemalteco	1955	1958
Honduras	Partido Demócrata Cristiano de Honduras	—[e]	1981
México	Partido Acción Nacional	1939[f]	1943
Nicaragua	Partido Social Cristiano	1957[e]	1967
Panamá	Partido Demócrata Cristiano	1960[e]	1964
Paraguay	Democracia Cristiana	1960[e]	1989
Perú	Unión Popular	1931[g]	1931
	Movimiento Popular Democrático	1948	
	Democracia Cristiana	1954	1956
	Partido Popular Cristiano	1966	
El Salvador	Partido Demócrata Cristiano	1960	1961
Uruguay	Partido Demócrata Cristiano	1962	1962
Venezuela	COPEI (Comité de Organización Política Electoral Independiente)	1946	1946

[a] Véase Cerro (1983, p. 16).
[b] Véase Boizard (1963, pp. 244-252), Gumucio (1963, p. 311) y Gazmuri (1996, pp. 34-40).
[c] Véase Hurtado (1980, pp. 226, 348).
[d] Aunque no se le permitió oficialmente presentar candidatos, el partido participó en una coalición presidencial con la Concentración de Fuerzas Populares, presentando al candidato a la vicepresidencia. Véase Hurtado (1980, p. 304).
[e] Véase Political Database of the Americas. Para Honduras, el sitio en la red de la base de datos políticos de las Américas presenta 1980 como la fecha de formación; sin embargo, el partido es mencionado en otras fuentes desde 1959 (Congreso Internacional, 1959, p. 35).
[f] Véase Loaeza (en este libro).
[g] Véase Schmidt (en este libro).
FUENTES: Excepto cuando se indica lo contrario, las fechas de formación de los partidos se tomaron de Williams (1967), y los nombres de los partidos y fechas de su primera participación de Nohlen (1993).

Por su intuitivo atractivo y simplicidad, es importante poner a prueba estas explicaciones —modernización y fuerza de la Iglesia católica— para ver si es posible incorporarlas en la teoría de la formación de partidos que propongo más adelante en este capítulo. Hacerlo así nos ayudará a anticipar las objeciones que harán muchos lectores.

Lamentablemente para la simplicidad, los datos no apoyan estas explicaciones. Considérese primero la idea de que los partidos democratacristianos que se formaron en fechas tempranas fueron simplemente una respuesta a un grado de cambio socioeconómico insólitamente grande. Esta idea tiene poco sentido cuando se compara el momento de formación de los partidos con los niveles reales de cambio socioeconómico. Por ejemplo, Uruguay y Argentina tuvieron, ambos, índices de industrialización y urbanización relativamente altos durante la primera mitad del siglo, pero sus partidos democratacristianos se formaron más tarde; Venezuela y Costa Rica tenían niveles relativamente bajos de industrialización y de urbanización durante la primera mitad del siglo XX, y, no obstante, en ellas los partidos se formaron en fechas tempranas.

La debilidad de esta relación se hace más evidente si consideramos un conjunto más grande de datos empleando útiles estadísticos más complejos. El cuadro IV.2 muestra los resultados de un análisis de duración de la relación entre la formación del partido y la urbanización para nueve países latinoamericanos, en que la urbanización se utiliza como indicador de la modernización socioeconómica. Las propiedades exactas del análisis de duración y de la elección de los casos se explican más adelante en este capítulo. Por ahora, baste con mencionar dos estadísticas clave generadas por el análisis. Primero, la relación entre el nivel de urbanización y la fecha de formación del partido no es estadísticamente significativa, y llega sólo al nivel $p < .55$. Segundo, el coeficiente que describe la relación es muy pequeño; el número .00758 en el cuadro IV.2 significa que un país en que 30% de sus habitantes viven en ciudades de más de 20 000 habitantes[3] probablemente no vería formarse un partido democratacristiano antes de que transcurrieran 53 años —en este caso, casi exactamente el mismo periodo que si no existiera ninguna urbanización (aproximadamente 55 años)—.[4] Considerada en forma aislada, la urbanización simplemente no parece tener un efecto predecible sobre la formación de partidos. Los datos no apoyan la idea de que la formación de un partido sea simplemente una respuesta al cambio socioeconómico.

CUADRO IV.2. *Resultados del análisis de duración de la urbanización y de la formación de un partido*

Variable	*Coeficiente*	*Error estándar*	*p*
Urbana	0.00758	0.0127	.551
Constante	–16.7	5.78	.004***
En *p*	1.42	0.329	.000***
p	4.15		
1/*p*	0.241		

NOTA: Regresión de Weibull, forma aleatoria logarítmica. El número de sujetos es nueve. El número de fallas es nueve. El tiempo en riesgo es 436.7. La probabilidad logarítmica es –1.63. El valor de chi al cuadrado es .36, y $p = .551$. * $p < .10$. ** $p < .05$.*** $p < .01$. Los datos fueron calculados con el programa Stata 6.0; son los mismos que se encuentran en el cuadro IV.4.

FUENTE: Wilkie y Haber (1983).

A continuación, considérese la idea de que la formación de los partidos democratacristianos más antiguos es simplemente el resultado de una presencia institucional más fuerte de la Iglesia católica. No tenemos fácilmente disponibles datos comparativos detallados sobre los recursos de la Iglesia durante la primera parte del siglo XX, pero al menos una fuente (Turner, 1971) proporciona estadísticas acerca del personal de la Iglesia en los países latinoamericanos en 1969. El cuadro IV.3 presenta estos datos en forma de una burda comparación del tamaño de la Iglesia en proporción del número de habitantes por sacerdote, dividiéndose a los países de acuerdo con la media aritmética, y los datos de la formación del partido con los países divididos por la media aritmética (el año 1954) en las categorías de "temprano" y "tardío". Como es evidente al observar el cuadro, el nivel de fuerza de la Iglesia no parece estar relacionado con el momento de la formación del partido. La mayoría de los países que experimentaron una temprana formación del partido estaban en realidad entre los que tenían menores niveles de personal de la Iglesia, y en la mayoría de los países que tenían los mayores niveles de personal de la Iglesia la formación del partido ocurrió tardíamente. No es sorprendente que la correlación *(r)* entre la formación del partido y la fuerza de la Iglesia no sea estadísticamente significativa ($p < .22$), y en realidad señala en el sentido opuesto al que sería el caso si esta idea fuera correcta. Por lo tanto, los datos tampoco apoyan la idea de que la temprana formación de un partido se debe principalmente a una Iglesia católica fuerte.

UNA TEORÍA DE LA FORMACIÓN DE LOS PARTIDOS DEMOCRATACRISTIANOS

Si la fuerza de la Iglesia católica y el nivel de cambio socioeconómico no explican el momento en que se forma un partido, ¿qué lo explica? Los datos anteriores contradicen nuestra intuición y puede incluso parecer que refutan algunos de los hallazgos de los estudios de casos en este libro, estudios que mencionan el papel clave desempeñado por

el clero y la importancia real del cambio social para proporcionar un contexto en que el movimiento democratacristiano adquiera significado y resulte atractivo para el electorado. Éste es un enigma que requiere nuestra atención, no sólo porque un recuento histórico completo de la democracia cristiana debe incluir una explicación de sus orígenes, sino también porque necesitamos dar congruencia a nuestras interpretaciones de la democracia cristiana.

En la siguiente sección se intenta resolver este problema mediante una teoría de la formación de los partidos. Aunque existen teorías de la formación de partidos, en su mayoría han sido creadas por académicos que estudian los partidos de Europa occidental o de los Estados Unidos. Hasta donde yo sé, ninguna de ellas se ha aplicado al estudio de los partidos políticos en Latinoamérica, donde el estudio comparativo de los partidos políticos ha enfocado por lo general los orígenes de los sistemas de partidos (Dix, 1989; Collier y Collier, 1991) o su institucionalización (Dix, 1992; Mainwaring y Scully, 1995). La teoría que aquí se propone abreva en grado considerable en esos estudios previos sobre la formación de partidos, pero también incorpora aspectos de la formación de un partido que son peculiares de países como los latinoamericanos, donde a menudo la herencia democrática es débil y los partidos frecuentemente han obtenido su inspiración inicial de otros partidos de fuera de la región. Empiezo el análisis en un nivel general, clasificando las teorías que existen sobre la formación de partidos y resumiendo y aplicando sus percepciones al caso de la democracia cristiana. Después amplío esta lógica para incluir varios factores que son únicos de Latinoamérica y de la experiencia democratacristiana.

CUADRO IV.3. *Fuerza de la Iglesia y formación del partido*

Formación	*Sacerdotes por habitante en 1969*	
	Por debajo de la media	*Por arriba de la media*
Temprana (antes de 1954)	Costa Rica	Brasil
	Chile	
	Perú	
	Venezuela	
Tardía (después de 1954)	Guatemala	Argentina
	Bolivia	Uruguay
	El Salvador	Colombia
	República Dominicana	Panamá
	Nicaragua	Ecuador
		Paraguay

NOTA: $r = -.32$; $p < .22$.
FUENTE: Turner (1971, p. 16). Calculado con el programa Stata 6.0.

La formación de partidos en general

La siguiente teoría de la formación de partidos empieza en un nivel muy general con la observación de Downs de que es posible considerar la competencia entre partidos en gran medida como una competencia entre empresas en mercados económicos (1957). Vistos desde esta perspectiva, los políticos organizados en partidos hacen una *oferta* de políticas a los votantes que están *demandando* esas políticas. El punto, aquí, no es suponer que los políticos principalmente buscan dinero o poder, o que los electores o los políticos ven sus decisiones en términos comerciales, sino que *1)* hay una especie de intercambio entre los dos lados que se ofrecen el uno al otro bienes de clases muy diferentes; *2)* cada lado elige los medios que maximizan sus fines, y *3)* dados diferentes objetivos y distintas situaciones de los votantes y de los políticos, las condiciones que afectan la oferta de políticas, por un lado, no serán necesariamente las mismas que afectan la demanda de políticas, por el otro.

Por ejemplo, la versión común, simplificada, de la teoría de sistemas de partidos de Lipset y Rokkan es una teoría de la *demanda* de la formación de partidos. Lipset y Rokkan sugieren que los sistemas de partidos tienden a seguir amplias tendencias socioeconómicas generales. Estas tendencias generan divisiones profundas, bien definidas, entre los votantes en cuestión de intereses materiales, estatus y valores religiosos, y esas demandas favorecen la formación de partidos que capitalizan esas demandas. La teoría de Lipset y Rokkan es muy sólida.[5] Scully (1992) la aplica a los partidos políticos de Chile y encuentra que la democracia cristiana en ese país fue una respuesta a una fractura latente entre el Estado y la Iglesia, así como a divisiones muy fuertes entre los patrones y los trabajadores urbanos y rurales. En otras palabras, la

industrialización capitalista en Chile generó clases, y el programa de la democracia cristiana resultaba muy atractivo para esas clases. El énfasis de la democracia cristiana en la necesidad de mejorar las condiciones de trabajo, asegurar un salario justo, proporcionar una red de seguridad social y fortalecer a las familias fue un programa de gran atracción para los profesionales y los oficinistas, los campesinos y las mujeres.

La teoría de la demanda basada en las divisiones funciona bien para explicar el éxito a largo plazo de un partido y la conformación de los sistemas de partidos en el transcurso del tiempo, como lo demuestran algunos de los estudios comparativos ya mencionados de los sistemas de partidos latinoamericanos (Dix, 1989; Collier y Collier, 1991). Puede ayudar a explicar algunos de los éxitos o fracasos de ciertos partidos democratacristianos en Latinoamérica (aunque en la conclusión de este libro Mainwaring presenta una argumentación convincente en la que hace en cambio énfasis en los efectos de la represión autoritaria y la falta de apoyo de la Iglesia a los nuevos partidos democratacristianos).

Sin embargo, este tipo de teoría de la demanda es una explicación pobre del momento en que se formaron los partidos democratacristianos por dos razones. Primera, por supuesto, los datos no la apoyan. El breve análisis de la urbanización y de la formación del partido de la sección anterior fue, en esencia, una prueba de la teoría de la demanda de la formación de partidos, y los resultados de ese análisis fueron negativos. Segunda, carece de una micrológica adecuada. El problema de una teoría de la demanda en la formación de un partido es que pasa por alto los factores singulares que rigen la *oferta*. Aunque los partidos tengan éxito a largo plazo porque un gran número de votantes haya decidido apoyarlos, se forman porque un pequeño número de políticos decidió organizarlos. Éstos son dos procesos diferentes. Los factores que afectan los deseos, recursos y limitaciones de pequeños grupos de políticos pueden ser muy diferentes de los que afectan los deseos, recursos y limitaciones de los votantes. Por ejemplo, el político medio tiene que preocuparse por llevar a cabo campañas y coordinar la actividad legislativa sobre una base diaria, lo que no ocurre al votante medio.

Para ser convincente, una teoría de la oferta de la formación de un partido debe explicar de qué manera personas razonables superarán el problema de la acción colectiva y se unirán en un esfuerzo común para hacer campañas y coordinar la legislación: esto es, para formar un partido. Como lo explica Aldrich (1995) en su análisis de los partidos políticos en los Estados Unidos, todos estos beneficios de la formación y la actividad de los partidos son bienes públicos. En consecuencia, la oferta será insuficiente a menos que prevalezcan ciertas condiciones que reduzcan los costos y aumenten los beneficios selectivos de organizar un partido. Una de estas condiciones es que debe haber un pequeño grupo interesado en proporcionar el bien colectivo: en este caso, un grupo de políticos o empresarios políticos que obtengan un beneficio personal único (como un cargo electoral o la satisfacción de prestar un servicio público) por enfrentar la carga de organizar el partido (Olson, 1965; Frohlich y Oppenheimer, 1978). La evidencia de los partidos democratacristianos (al igual que la de la mayoría de los otros partidos) demuestra que por lo común esto es lo que ocurre, ya que los partidos por lo general casi

siempre son organizados por pequeños grupos de políticos, activistas e ideólogos, y muy pocas veces o ninguna son el resultado espontáneo de movimientos de masas. No obstante, esta observación da lugar a toda una serie de preguntas sobre los factores adicionales que pueden modificar los costos y los beneficios de la formación del partido por estos pequeños grupos de políticos.

Los politólogos ofrecen varias teorías de la formación de partidos que sugieren los factores determinantes de estos costos y beneficios. La teoría de Kitschelt (1988, 1989) es probablemente una de las más generales y recientes. Aunque se basa en los trabajos de estudios previos sobre la formación de partidos (Hauss y Rayside, 1978; Harmel, 1985; Harmel y Robertson, 1985), su teoría también aprovecha las teorías de la movilización de recursos de la acción colectiva, las cuales suponen que los empresarios políticos son actores racionales que enfrentan un problema de acción colectiva (McCarthy y Zald, 1977; Olson, 1965; Elster, 1989). Su teoría supone que el cambio social importante (de la clase que Lipset y Rokkan describieron) modifica las preferencias de los individuos, pero también sugiere que las nuevas preferencias no se traducirán automáticamente en nuevos partidos porque los empresarios políticos se enfrentan a un problema de acción colectiva, incluyendo el de los aprovechados acomodaticios y la coordinación de los esfuerzos individuales en situaciones en que hay poca información. Una gran variedad de limitaciones y oportunidades afecta la capacidad de los políticos para superar estos problemas. Estas condiciones incluyen temas estratégicos (por ejemplo, la capacidad de partidos en competencia para satisfacer nuevas preferencias), instituciones políticas (como leyes electorales que favorezcan a terceros partidos) y el desarrollo previo de redes organizativas e informativas (por ejemplo, mediante participación en movimientos de protesta relacionados o mediante vínculos con organizaciones externas). A través de un análisis de partidos izquierdistas que defienden los principios de la libre voluntad individual, Kitschelt encontró que la mayoría de esas variables tienen una relación estadística significativa para la formación de esos partidos.

Aprovechando el trabajo de esos especialistas, observamos diversas variables que podrían explicar la fecha en que se formaron los partidos democratacristianos en Latinoamérica. La primera es *la urbanización e industrialización como fuente del cambio estructural*. La democracia cristiana intentó originalmente enfrentar los problemas de la modernización, en particular de la urbanización y de la industrialización, por lo que era más probable que los empresarios políticos formaran un partido una vez que estos cambios en su país hubieran llegado a una etapa moderadamente avanzada. Sin la urbanización y la industrialización la democracia cristiana habría tenido poco significado, y los empresarios políticos no habrían podido movilizar a los votantes en torno de estos temas, o podrían no haberlos conocido. La rapidez de la formación de los partidos debió ser determinada por el nivel de modernización.

La segunda variable son las reglas electorales y, más particularmente, la presencia de la *representación proporcional*. Las instituciones políticas ayudan a determinar cuáles son los temas expresados por los partidos. Hay dos instituciones políticas formales que pueden haber influido en la formación de los partidos democratacristianos en

Latinoamérica: el presidencialismo y las reglas electorales basadas en la representación proporcional. En vista de que los partidos democratacristianos a menudo eran terceros partidos, el presidencialismo debió haber reducido sus oportunidades para competir, en tanto que la representación proporcional las debió aumentar. Por supuesto, todos los países latinoamericanos tuvieron gobiernos presidenciales durante el siglo XX, por lo que las instituciones no podrían explicar las variaciones en la formación de los partidos; pero no todos estos países tenían representación proporcional. De hecho, la mayoría de estos países adoptaron alguna forma de representación proporcional sólo durante este siglo. Ese siglo en las reglas electorales puede haber contribuido a propiciar la formación de los partidos democratacristianos.

El tercer conjunto de variables está compuesto por *la competencia y el capital organizativo*. Una variedad de factores externos al gobierno puede reducir significativamente los costos y aumentar los beneficios de la formación de partidos, incluyendo la cooptación de temas por otros partidos y la presencia de redes organizativas que pueden ser usadas por los líderes de las nuevas organizaciones. Con respecto a la primera, los potenciales democratacristianos con frecuencia se enfrentaban a fuerte competencia partidista. Por supuesto, durante la primera mitad del siglo XX no había otros partidos que combinaran un llamado religioso/católico con una plataforma económicamente centrista. Sin embargo, los partidos democratacristianos sí enfrentaron competencia ya fuera en la dimensión económica o en la dimensión religiosa. Varios países tenían partidos que se habían dado a conocer por su defensa de la doctrina católica y de los derechos tradicionales de la Iglesia (como los conservadores en Chile y Colombia), y casi todos los países tenían partidos de centro o de centro-izquierda. Por ejemplo los radicales cívicos y peronistas en Argentina, los radicales en Chile, los liberales en Colombia y los Colorados en Uruguay ofrecían todos propuestas políticas muy completas diseñadas para mejorar la suerte de los trabajadores asalariados durante la primera mitad del siglo. En realidad, durante ese periodo, en casi todo país latinoamericano existía al menos un partido en por lo menos una de estas dimensiones de competencia, y en varios países había partidos en ambas dimensiones (por ejemplo, en Chile, Colombia y Uruguay).[6] Los políticos que esperaran empezar un partido democratacristiano en estos países habrían encontrado que de una gran parte de su plataforma ya se habían apropiado otros, y las perspectivas desfavorables podrían haberlos desalentado en sus deseos de formar un partido.

La idea del capital organizativo proviene directamente de la obra de Kalyvas sobre la democracia cristiana en Europa (1996, 1998). Kalyvas sugiere que los partidos democratacristianos en Europa occidental tuvieron su origen en organizaciones católicas laicas creadas por el clero en el siglo XIX para combatir el anticlericalismo liberal. Según Kalyvas, estas organizaciones laicas fueron de especial importancia porque crearon una nueva identidad política católica entre un gran número de votantes. Aunque Kalyvas se concentra en la identidad política como el mecanismo causal clave, su argumentación puede fácilmente traducirse a una teoría del actor racional. Las organizaciones creadas con un propósito pueden usarse como los bloques de construcción de otras

organizaciones (Coleman, 1990); los canales de comunicación, las habilidades organizativas y los papeles de los participantes establecidos en las organizaciones laicas pueden reducir los costos de organizar un partido político al utilizar a las mismas personas. En el caso de la democracia cristiana latinoamericana, el clero rara vez creó organizaciones laicas para combatir el anticlericalismo, pero sí creó organizaciones para enseñar y convertir en realidad la nueva doctrina social. Estas organizaciones podrían haber facilitado la formación de los partidos democratacristianos.

Ampliando la teoría

La teoría anterior y las categorías de variables representan una acumulación muy útil de ideas y un fundamento teórico muy valioso para entender el ascenso de la democracia cristiana. No obstante, cuando vamos más allá de las teorías desarrolladas en el estudio de los partidos en Europa occidental debemos hacer dos preguntas: ¿de qué manera la experiencia de los países en desarrollo difiere de la experiencia de las democracias industrializadas avanzadas? Y ¿hay algunas características que valga la pena destacar de los partidos democratacristianos que han sido ignoradas en estudios previos? La respuesta a esta pregunta revela dos factores adicionales que pueden afectar la formación del partido: la represión y la diseminación de ideas.

Represión. Una de las diferencias fundamentales entre los países en desarrollo y las democracias industriales avanzadas es el problema de la represión por gobiernos autoritarios. Las democracias industriales avanzadas han tenido su buena dosis de represión en el pasado, pero como los estudios de formación de partidos han enfocado las dos o tres décadas más recientes no han captado este obstáculo potencial a la formación de partidos que con tanta frecuencia está presente en la política latinoamericana del siglo XX.[7] Es indudable que los regímenes autoritarios pueden crear un ambiente distinto para la competencia entre partidos del que existe bajo la democracia. Además de declarar ilegal la actividad de los partidos, los regímenes autoritarios frecuentemente niegan incluso las libertades civiles más básicas (como el derecho de reunión o la libertad de prensa) que presumiblemente son necesarias para formar un partido. Expresado en términos de una teoría del actor racional, esa represión aumenta significativamente los costos de la formación del partido porque impone altas sanciones por la acción colectiva, y aumenta el costo de coordinar la acción colectiva al restringir la corriente de información y encarcelar o exiliar a las personas que tienen habilidades organizativas. La represión puede limitar de manera muy importante la formación de partidos democratacristianos.

Diseminación de ideas. La anterior teoría de la formación de partidos también omite el papel de la ideología.[8] Los académicos que estudian la formación y el éxito de los partidos políticos no siempre han prestado atención al singular problema al que los partidos ideológicos se enfrentan cuando se trata de transmitir ideas. Puede parecer obvio, pero vale la pena repetir que las ideas y la ideología forman una parte esencial de los partidos ideológicos.[9] Sin la doctrina social católica no podría haber democracia

cristiana, tan seguramente como que sin marxismo nunca pudo haber existido el comunismo o la socialdemocracia.

Los registros orales y escritos de los partidos democratacristianos en Latinoamérica confirman esta lógica. Las historias de los partidos democratacristianos y las biografías de sus fundadores con frecuencia mencionan el contacto de esos fundadores con la doctrina social católica como una experiencia formativa crucial. De igual manera, muchos de estos textos empiezan con exposiciones de la doctrina social o las historias de los grupos de estudio en los que se enseñó por primera vez la doctrina en ese país: convención literaria que demuestra lo importante que la ideología fue para esos partidos. Los ejemplos incluyen la historia de Boizard del PDC chileno (1963), la historia del COPEI por Luque (1986) y la historia del PDC salvadoreño por Caldera (1983). En mis propias entrevistas con los dirigentes de los partidos en Uruguay y en Chile encontré afirmaciones similares sobre la importancia de la ideología. Por ejemplo, los líderes del PDC de Uruguay frecuentemente diferenciaban su partido de los dos partidos tradicionales, llamando al suyo *un partido de ideas*, y se enorgullecían de que recientemente su partido se hubiera hecho cargo del comité para la plataforma de su coalición (Lescano, 1997; Rodríguez Meléndez, 1997).

¿Cómo podrían las ideas y la ideología ajustarse a la teoría del actor racional de la formación de los partidos desarrollada en este análisis? El concepto clave es la *diseminación*. Las ideas no se esparcen uniforme e inmediatamente, sino que dependen de los medios de comunicación y de los portadores humanos. Hoy en día las ideas pueden esparcirse en forma barata a públicos masivos a través de los medios electrónicos, pero antes las fronteras nacionales eran menos porosas y el conocimiento de las ideas dependía más de los medios tradicionales, como la palabra hablada, los periódicos, los libros y los viajes internacionales. Cuanto más complicadas son las ideas, más difícil es esparcirlas. A la postre, cualquier idea puede ser propagada por medio de la *difusión*, o como un producto involuntario de otros esfuerzos, pero la circulación rápida requiere de un esfuerzo consciente, o *diseminación*.

Para expresar esto en términos de la teoría del actor racional de la formación de partidos, la diseminación era cara. Cuando la información era asunto de un solo libro, un individuo podía superar la tarea. Sin embargo, la mayoría de las personas carecían de recursos e incentivos para aprender independientemente y esparcir sistemas complejos de pensamiento como toda una religión o todo un campo del conocimiento científico; éstas eran las clases de ideas que subyacían en partidos ideológicos como los democratacristianos. Además, las ideas eran (y siguen siéndolo) un bien público. Los individuos pueden juntarse para pagar los altos costos asociados con la *diseminación*, pero el riesgo de que alguno no pague su parte justa es siempre alto. Sólo actores con beneficios selectivos o con intereses generales querrán o estarán en condición de propagar ideas (Olson, 1965).

Los gobiernos pudieron haber proporcionado este bien como lo hacen hoy en día al subsidiar la educación; pero donde la ideología amenazaba a quienes administraban el gobierno era menos probable que éste difundiera intencionalmente la idea. Esto dejó a las

asociaciones secundarias como los agentes clave de la diseminación. Las asociaciones secundarias podían juntar los recursos de muchas personas y tener así la capacidad para emprender grandes proyectos que estaban más allá de las posibilidades del individuo común. Además, como grupos podían dirigir a su interior los beneficios de proporcionar un bien público a la vez que lograban que sus miembros se hicieran cargo de una parte justa de los costos; conscientes de esto, los miembros y sus líderes estarían más dispuestos a participar en una costosa diseminación de ideas. Las asociaciones secundarias tendrían un interés especial en esparcir ideas si éstas ayudaban a que la asociación adquiriera nuevos miembros.

Diseminación de la doctrina social católica. Como partido ideológico, la democracia cristiana se enfrentaba a todos los problemas antes mencionados de la acción colectiva. La democracia cristiana fue inspirada por la doctrina social católica. Puesto que esta doctrina social se originó en Europa, la formación de los partidos democratacristianos dependió de la diseminación de la doctrina social desde afuera de Latinoamérica a grupos internos de empresarios con intereses políticos. Con el tiempo estas ideas se difundirían por toda la región, pero las ideas se podían propagar con más rapidez si las personas hacían esfuerzos concertados por enseñarlas.

La rápida diseminación de estas ideas fue problemática porque las élites locales tenían la mayor parte de los recursos, pero poco interés en esparcir la doctrina social. Tal como se aplicaba a principios y mediados del siglo XX, la doctrina social católica tendía hacia el Estado benefactor y a unas estructuras económicas gubernamentales mixtas, y organizaba a las clases medias y bajas en torno a una identidad política católica con un liderazgo autónomo (Williams, 1967). Éstas competían con los proyectos económicos y políticos de la izquierda y de la derecha. Algunos pudieron tener el incentivo de estudiar y aprender la doctrina social por cuenta propia, pero la mayoría de las personas carecían de recursos para viajar al exterior o dedicarse a estudios a largo plazo, y mucho menos para enseñar a otros.

La asociación secundaria con el mayor deseo y con los medios para diseminar la doctrina social era la Iglesia católica. La doctrina social era la católica, originada en declaraciones oficiales de la Iglesia. La curia romana tenía un incentivo claro para esparcir la doctrina, al igual que los sacerdotes y miembros laicos que creían en la importancia de la autoridad del papa y apoyaban el cambio social para beneficiar a los pobres. De manera similar, las instalaciones, el personal y el presupuesto de la Iglesia la convirtieron en la más poderosa asociación secundaria en Latinoamérica durante la primera parte del siglo XX. La Iglesia tenía un considerable acceso a las personas por medio de los sermones durante la misa y otros actos litúrgicos, y por lo general disfrutaba de prestigio y autonomía entre los funcionarios del gobierno que quizás en otras circunstancias se habrían resistido a la diseminación de la doctrina social. Como la Iglesia tenía el deber de ayudar a las personas a lograr la salvación, dedicó conscientemente muchos de sus recursos a una extensa red de escuelas y profesores. Con frecuencia se entrenaba a los funcionarios locales en el exterior o recibían clases de clérigos extranjeros que les brindaban la oportunidad de utilizar un sistema de financiamiento y educación

que iba más allá de las fronteras nacionales y que no sólo trajo la doctrina a los empresarios políticos locales, sino que en algunos casos llevó a los empresarios políticos a la fuente de la doctrina en Europa[10] (Huntington, 1973; Vallier, 1971).

De hecho, elementos de la Iglesia intentaron poner en ejecución la doctrina social en respuesta a las primeras encíclicas papales. El clero organizó a los estudiantes, trabajadores y otros miembros laicos en organizaciones como Acción Católica, que enseñaban y aplicaban la doctrina social. Sin embargo, los intereses y recursos de la Iglesia variaban en los diferentes países, y por esto sus esfuerzos por poner en práctica la doctrina no tuvieron un éxito uniforme. Los objetivos trasnacionales de la Iglesia se vieron comprometidos a menudo por obispos o sacerdotes relacionados con las élites locales o que simplemente no estaban informados o se mostraban renuentes a aceptar las directivas papales. En algunos países, el gobierno disfrutaba de privilegios de patronazgo que le daban el derecho de nombrar a los clérigos (Mecham, 1966, p. 220), y en muchos países (como Colombia) los partidos conservadores eran los garantes de generosos tratados papales que le daban a la Iglesia un considerable control sobre la educación y el derecho a recibir apoyo del Estado (Levine, 1981; Vallier, 1971, p. 486; Wilde, 1972). Los clérigos tenían menos incentivo para promover doctrinas sociales políticamente relevantes si el Estado ya estaba del lado de los intereses de la Iglesia. Incluso donde la Iglesia se encontraba menos ligada al Estado, el número de sacerdotes capacitados en el exterior era a veces pequeño por falta de recursos, y transcurrió más tiempo antes de que la doctrina social llegara a sus miembros laicos. Además, en algunos casos, la presencia de clérigos progresistas era simplemente cuestión de suerte, sin ninguna relación aparente con las relaciones políticas o los recursos materiales. Por ejemplo, monseñor Sanabria Martínez, arzobispo costarricense de 1940 a 1958, fue un decidido proponente de la doctrina social y creó una fuerte organización laboral católica. Sin embargo, fue el único entre sus colegas en ese país, y sus esfuerzos fueron olvidados parcialmente o incluso eliminados después de su muerte (Williams, 1989, pp. 114-115, 120-124).

La variación en los intereses y recursos de la Iglesia debe ser un factor poderoso para explicar la fecha en que se formó el partido. Diferentes niveles de personal, financiamiento y relaciones con la curia romana y las diócesis y parroquias locales significaba que las ideas esenciales para la democracia cristiana no se diseminaban rápidamente por todos los países de la región. La doctrina social católica y la democracia cristiana que llegó con ella a la larga se difundieron a casi todos los países de la región, pero la Iglesia tenía la capacidad de acelerar este proceso. Los esfuerzos de la Iglesia católica por diseminar la doctrina social debieron haber catalizado la formación de los partidos democratacristianos.

Hipótesis

Con base en la teoría anterior, sugiero los dos siguientes conjuntos de hipótesis. La primera es la más obvia y combina todas las principales variables antes mencionadas.

1. La formación de los partidos democratacristianos es más probable cuando se

cumplen las siguientes condiciones:

—Los niveles de "modernización" socioeconómica están aumentando.
—Las reglas electorales producen resultados más proporcionales.
—No hay partidos religiosos o de centro/centro-izquierda.
—No hay represión de la actividad de los partidos.
—La Iglesia católica patrocina activamente la diseminación de la doctrina social.

La novedad de esta hipótesis, en contraposición a las que puedan haber sido sugeridas por otras teorías, es el papel que presenta a la Iglesia católica como diseminadora de ideología, y la importancia que atribuye a la represión política.

2. La formación de los partidos democratacristianos es cada vez más probable con el transcurso del tiempo, incluso cuando otros factores no son favorables.

Esta segunda hipótesis tiene gran importancia en la presentación de la teoría en la última sección. La teoría sobre la diseminación de ideas sugiere que éstas acaban por difundirse, o se esparcen más allá de su punto de origen sin la intervención consciente de grupos o individuos. Aunque la difusión de la doctrina social católica fue inicialmente problemática, el ejemplo de los exitosos partidos democratacristianos de Europa occidental y de algunos países latinoamericanos, así como la creciente disponibilidad de medios de comunicación modernos, aseguró que la doctrina se esparciera tarde o temprano sin un esfuerzo consciente y que los empresarios políticos pudieran imitar los esfuerzos de los primeros democratacristianos. Como resultado de esta difusión, gradualmente se debían haber formado partidos democratacristianos en todos los países latinoamericanos, sin importar los esfuerzos conscientes del clero católico. Así, incluso cuando tenemos en cuenta todas las variables antes mencionadas, debemos seguir encontrando una tendencia a que se formen partidos democratacristianos.

PONIENDO A PRUEBA LA TEORÍA

Con el fin de poner a prueba estas hipótesis de la formación de los partidos democratacristianos, esta siguiente parte del capítulo empieza con un análisis cuantitativo. Sin embargo, como es importante rastrear las clases de procesos descritos en esta teoría, al análisis le siguen estudios cualitativos de cuatro de los casos más representativos de los que hay datos detallados: Chile, Venezuela, Uruguay y El Salvador. Este posterior análisis no examina todas las variables posibles sugeridas por las hipótesis previas, sino que se concentra en el papel del clero católico en la diseminación de la doctrina social, la variable que parece tener el mayor efecto en la formación de los partidos democratacristianos en Latinoamérica y que es también la variable con la que están menos familiarizados los lectores. Hay datos disponibles similares para los otros cinco países incluidos en esta sección, pero por limitaciones de espacio no se incluyen aquí.

Datos y selección de casos

El mayor obstáculo para un análisis cuantitativo de la formación de partidos democratacristianos es la falta de información. Sólo se dispone potencialmente de algunos países (a lo más 18) y no hay datos disponibles para algunos de ellos. En varias fuentes se encuentran compilados datos sobre las reglas electorales y la represión, en especial en la *Enciclopedia electoral* de Nohlen y el conjunto de datos de Polity IV, que requieren sólo un complemento mínimo de los otros casos que no son los del estudio. Lo mismo es cierto de los datos sobre la competencia de partidos, que se pueden encontrar en el documento de trabajo de Coppedge sobre las clasificaciones de los partidos en Latinoamérica (1997). Sin embargo, los datos sobre la formación de los partidos son más difíciles de reunir debido a que las bases de datos que ya existen a menudo sólo describen a los partidos actuales o dan fechas inexactas; en donde ha sido posible, he construido mi propia base de datos sobre la formación de partidos usando una amplia variedad de fuentes y he tratado de corroborar los datos sobre la formación con más de una sola fuente. Es muy difícil encontrar series de datos comparables sobre la industrialización porque muchos de estos países no tenían la capacidad para registrar estos datos sino hasta fechas recientes. Por fortuna, Wilkie y Haber (1983) compilaron estimaciones sobre la urbanización, y me he basado en sus datos. Finalmente, nunca se ha intentado hacer un estudio comparativo sobre la diseminación de la doctrina social cristiana. He usado estudios de múltiples casos (incluyendo mayormente textos secundarios, pero también algunas memorias de católicos prominentes) para construir un conjunto de sumarios o historias breves de casos que sirven como base para codificar la variable. Estos sumarios son demasiado largos para incluirlos aquí, pero están disponibles si se solicitan al autor. Los cuatro estudios de casos que siguen a esta sección se tomaron de estos sumarios y le darán al lector una idea de la forma en que se compilaron los datos.

El resultado de este esfuerzo es un conjunto de datos para los primeros partidos democratacristianos formados en nueve países, que se presentan en el cuadro IV.4. Todos los casos han cumplido con tres normas: *1)* son democratacristianos, *2)* son partidos políticos y *3)* son los primeros partidos democratacristianos en el país. Ajustándome a mi primera definición, pero usando un criterio ligeramente diferente del de Mainwaring y Scully (en este libro), incluyo cualquier partido que hizo de la doctrina social católica una parte prominente de su ideología y que no era confesional. Se incluyen partidos organizados antes de 1930 y no se considera la participación en la Internacional Demócrata Cristiana, puesto que la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA), la primera organización de su tipo en el continente, no fue organizada sino hasta 1947. Para evitar juicios muy subjetivos sobre cuáles eran partidos políticos "reales", sólo requiero que los partidos hayan competido en una elección. Además, sólo considero al *primer* partido democratacristiano formado en cada país debido a que el método estadístico que usamos aquí genera los resultados más válidos cuando sólo se usa el caso más temprano de formación del partido. Así, por ejemplo, incluyo al Partido Reformista

en Costa Rica y a la Falange Nacional en Chile, pero no al PDC ni al PUSC en Costa Rica ni al PDC en Chile, aunque pueda argumentarse que estos partidos eran más conocidos gracias a su éxito electoral o a su permanencia. Un caso particularmente prominente, el del PAN en México, no se ha incluido debido a la incertidumbre sobre el momento en que se convirtió en un partido democratacristiano. Como lo describe Loaeza en su trabajo, el PAN era un partido muy confesional hasta principios de los años sesenta, y en realidad evitó afiliarse a la Internacional Demócrata Cristiana hasta los años noventa, a pesar de que siempre tuvo una corriente ideológica basada en la doctrina social.

El número de casos se limita a nueve por la disponibilidad de los datos, pero afortunadamente esto resultó ser un problema menor del que pudo haber sido para el análisis estadístico. Primero, el conjunto de datos incorpora una gama de países que lleva al máximo la varianza en la fecha de la formación de los partidos, evitando así seleccionar en la variable dependiente o generar resultados sesgados (King *et al.*, 1994; Geddes, 1995). En la muestra de datos se han incluido algunos de los más antiguos (Costa Rica, Chile y Venezuela) y algunos de los más tardíos (Uruguay y Colombia). Segundo, el método estadístico que se usa aquí, el análisis de duración, magnifica efectivamente el número de observaciones al considerar todo el rango de años antes de que se formara un partido, en vez de únicamente un punto de datos para cada partido. Esto nos permite generar medidas que tienen significación estadística.

Especificación del modelo

Puesto que la variable dependiente de este estudio es el momento de la formación del partido, el análisis puede aprovechar un método estadístico conocido como análisis de duración. El análisis de duración sirve para determinar el grado en que los acontecimientos —como el nacimiento de un partido— son "acelerados" o "retrasados" por factores externos. En el análisis de duración, la variable dependiente es el tiempo transcurrido antes del suceso. Los detalles del análisis de duración son delineados en el apéndice. Aquí sólo diré que estudiar los hechos con el análisis de duración ofrece varias ventajas sobre la regresión lineal tradicional y que se basa en supuestos que tienen más sentido en vista de la clase de datos que se usan aquí, en particular un conjunto de variables independientes que cambian con el transcurso del tiempo y una variable dependiente que mide el tiempo transcurrido.

La función de duración y la especificación que uso aquí son las siguientes:

$$H(t) = pt^{p-1}\ e^{\beta x}$$

en la que

CUADRO IV.4. *Datos para el análisis de duración*

País	Año de formación del partido	Nivel de urbanización (año)	Año de diseminación	Años de represión	Años de representación proporcional	Ausencia de partidos competitivos
Argentina	1956	24.9 (1900)	1919	1930-1937 1943-cuarto trimestre de 1955	Ninguno	Parcial (.5) todo el periodo
		28.4 (1910)				
		37.0 (1920)				
		38.0 (1930)				
		41.0 (1940)				
		49.9 (1950)				
Chile	1938	19.9 (1900)	1916	Ninguno	Todo el periodo	Ninguno (0) todo el periodo
		24.2 (1910)				
		27.6 (1920)				
		32.0 (1930)				
Colombia	1964	6.2 (1900)	1933	Ninguno	1933-final del periodo	Ninguno (0) todo el periodo
		7.3 (1910)				
		8.9 (1920)				
		10.0 (1930)				
		14.0 (1940)				
		23.0 (1950)				
		36.6 (1960)				
Costa Rica	1923	8.5 (1900)	1920	Ninguno	Todo el periodo	Completo (1) todo el periodo
		7.9 (1910)				
		12.2 (1920)				
El Salvador	1960	6.0 (1900)	1958	1900-1960	Todo el periodo	Completo (1) todo el periodo
		8.8 (1910)				
		9.4 (1920)				
		10.4 (1930)				

		12.4 (1940) 13.0 (1950) 17.7 (1960)				
Guatemala	1955	8.6 (1900) 8.9 (1910) 9.2 (1920) 10.3 (1930) 9.8 (1940) 11.2 (1950)	1939	1900-1921 1931-1944 1954-1955	1946-final del periodo	Completo (1) 1900-1944; parcial (.5) 1944-1954; completo (1) 1954-final del periodo
Perú	1931	6.0 (1900) 5.4 (1910) 5.0 (1920) 9.6 (1930)	1924	1919-1930	Todo el periodo	Completo (1) 1900-1924; parcial (.5) 1924-final del periodo
Uruguay	1962	24.2 (1900) 26.0 (1910) 27.8 (1920) 37.6 (1930) 36.8 (1940) 53.1 (1950) 61.4 (1960)	1955	Ninguno	1919-final del periodo (parcial, .5)	Parcial (.5) 1900-1911; ninguno (0) 1911-final del periodo
Venezuela	1946	8.5 (1900) 9.0 (1910) 11.7 (1920) 19.4 (1930) 28.5 (1940)	1933	1900-1941	Ninguno	Completo (1) 1900-1941; parcial (.5) 1941-final del periodo

NOTA: Al leer los datos, téngase en cuenta que los valores "ninguno" o "todo el periodo" reflejan sólo el periodo entre 1900 y el año en que se formó el partido; los valores pueden haber sido diferentes para periodos anteriores o posteriores.

$$\beta X = \beta_0 + \beta_1 \text{ urban.} + \beta_2 \text{ reglas} + \beta_3 \text{ comp.} + \beta_4 \text{ autorit.} + \beta_5 \text{ ideo.}$$

H(*t*) es conocido como la variable aleatoria y se la puede pensar como la tasa instantánea de formación del partido. La función significa que la tasa instantánea de la formación del partido es un factor del tiempo transcurrido, una función exponencial de varias otras variables independientes, y un parámetro especial (*p*) que refleja la tendencia de la tasa de formación del partido a incrementarse con el transcurso del tiempo, aunque las otras variables permanezcan constantes. La operatividad y la codificación de las otras variables se proporcionan más adelante. Las variables independientes están todas codificadas de tal manera que un cambio positivo en la variable está asociado con un aumento de la tasa esperada de formación del partido.

t. Tiempo transcurrido. Medido como todo el número de años a partir de 1900. En el análisis de duración es importante incluir todos los periodos en que un hecho (en este caso la formación del partido) pudo concebiblemente haber ocurrido (Box-Steffensmeier y Jones, 1997). En las clases de experimentos para los que se desarrolló originalmente el análisis de duración, el principio del periodo medido generalmente era obvio: era el comienzo del experimento. Por ejemplo, si estuviéramos estudiando el tiempo necesario para que una máquina falle bajo tensión, empezaríamos a medir justo después de aplicar la tensión. El "inicio de la tensión" análogo en este análisis sería el primer año en que se

podían haber formado concebiblemente los partidos democratacristianos en Latinoamérica. Como la primera encíclica papal sobre este tema se publicó en 1891, y ya que el propio término *democratacristiano* se originó aproximadamente en esas fechas, 1900 parece un punto aceptable para empezar la medición.

urban. El nivel de urbanización, medido como el porcentaje en número entero de la población que vivía en ciudades de más de 20 000 habitantes. Los datos se obtuvieron de Wilkie y Haber (1983), y los valores pueden variar de 0.0 a 100.0. Se supone que la urbanización medirá el nivel de cambio socioeconómico relevante o la "demanda" de partidos democratacristianos. Esta operatividad está basada en la temprana observación por los teóricos de la modernización de que la urbanización era una parte integral de los cambios económicos y sociales asociados con la modernización (Lerner, 1958; Lipset, 1960). Otras medidas —como el nivel de la actividad manufacturera o la generalización de la alfabetización— habrían sido útiles, pero no estaban disponibles para todo el periodo.

reglas. Una variable oculta *(dummy)* que indica la proporcionalidad de las reglas electorales, en donde 1 = sí, proporcional, y 0 = no. Se ha presentado la hipótesis de que la proporcionalidad favorece la formación de los partidos democratacristianos. Al medir esta variable, considero una combinación de la magnitud del distrito (M) y de la fórmula para asignar la representación (pluralidad, mayoría absoluta, d'Hondt, etc.). Si la magnitud del distrito es mayor que 2, se usa una fórmula PR, y no se emplean otras reglas extrañas que claramente crearán una tendencia hacia un sistema en que el ganador se queda con todo, y la variable se codifica como 1. Todos los datos provienen de Nohlen (1993). Por supuesto, siempre hay matices de diferencia entre la proporcionalidad de diferentes combinaciones, pero para la mayoría de los países el efecto de la combinación de estas reglas es obvio y hace fácil distinguirlas.[11]

comp. Una variable oculta que indica la ausencia de partidos potencialmente en competencia, en donde 1 = ninguna competencia y 0 = competencia completa. Obsérvese que la codificación de la variable es lo inverso de lo que pudiera parecer intuitivamente; esto en última instancia hace más fácil interpretar los coeficientes del modelo. La variable se hace operativa usando el conjunto de datos de Coppedge para la clasificación de partidos (1997). Se considera que un partido democratacristiano no tiene competencia si *1)* no había otros partidos importantes en las categorías centro o centro-izquierda de Coppedge, y *2)* no había otros partidos importantes en la categoría "cristianos" de Coppedge. En muchos países sólo una de estas condiciones se cumplió durante algunos periodos, y a éstos se les codifica como .5. Por lo general, los partidos de centro o centro-izquierda fueron más comunes que los religiosos durante este periodo, aunque la mayoría de los países tenían por lo menos uno de estos últimos, y en todos los países el espacio de competencia se cerró a medida que pasaban los años.

autorit. Una variable oculta que indica la represión de la actividad de los partidos, donde 1 = ninguna represión y 0 = represión. Se plantea la hipótesis de que la represión retarda la formación del partido. Obsérvese que la codificación es la inversa de la que podría parecer intuitivamente; esto se ha hecho para proporcionar un conjunto de

coeficientes más significativos en el modelo estadístico. *Autorit.* se hace operativa usando la variable "competitividad de la participación política" del conjunto de datos Polity IV. Esta variable mide el grado en que se permite la competencia política por partidos que no son los del régimen (Gurr *et al.*, 1990, p. 75). La variable original del conjunto de datos de Polity IV está codificada con una escala ordinal que va de 1 a 5, en la que 1 indica "suprimida" y 5 corresponde a "competitiva". Sin embargo, como la hipótesis que aquí se está poniendo a prueba sólo hace una predicción binaria (presumiblemente sólo debe superarse un umbral de libertad; más allá de éste, la organización de partido es constante), la escala original se redujo a una variable oculta en que los valores 1 y 2 de la variable original se recodificaron como 0, y los valores 3 a 5 se registraron como 1. Este criterio es casi idéntico al usado por Jaggers y Gurr en su análisis del anterior conjunto de datos Polity III (1995, p. 472).

ideo. Una variable oculta que indica si ha ocurrido la diseminación de la doctrina social católica. Se plantea la hipótesis de que la diseminación acelera la formación del partido. La diseminación ocurrió en tiempos muy diferentes en todos los países incluidos en este estudio; en algunos casos puede ponerse en duda que realmente haya ocurrido. Un año se codifica como 1 = sí, en el caso de que para ese año exista algún registro de algún miembro laico que viviera en el país y que hubiera aprendido la doctrina social de un miembro del clero o de alguna otra organización apoyada oficialmente por la Iglesia; si no es así se le codifica como 0 = no. Por lo tanto, si la doctrina era conocida por los clérigos, pero no se la había enseñado a los miembros laicos, el año se codifica como 0, y si los miembros laicos habían aprendido la doctrina pero sólo por medio de fuentes diferentes de los canales oficiales de la Iglesia (por ejemplo, por contacto con miembros de partidos democratacristianos de otros países), también se le codifica como 0. Considero que la diseminación de la doctrina entre los miembros laicos es el momento clave, porque podemos suponer que sólo los miembros laicos pueden participar directamente en política y en la organización del partido. Este supuesto ocasionalmente no ha funcionado en Latinoamérica, pero yo tuve que trazar la línea en algún punto y éste parece ser el más fácil de defender. Ya que esta variable es la única que codifiqué sin ningún antecedente, es también la que está más sujeta a discusión. Para evitar controversias y ser lo más exacto posible, he consultado por lo menos dos fuentes escritas sobre la historia de cada país, excepto Perú, para el que sólo encontré una fuente. Con frecuencia he tenido que basarme en fuentes secundarias (mayormente historias locales de las actividades políticas y sociales de la Iglesia a principios del siglo XX), pero también me he basado en historias de los partidos democratacristianos, y ocasionalmente en biografías o memorias de clérigos que fueron proponentes de la doctrina social. Para tres países (Chile, Uruguay y Venezuela) pude complementar estas fuentes con investigaciones y entrevistas realizadas en esos países. Estas fuentes se incluyen en las referencias del capítulo. En general, encontré que ciertos clérigos eran bien conocidos como los primeros que propusieron la doctrina social y fueron honrados o recordados por historiadores y biógrafos que estudiaron este periodo de la historia de la Iglesia.

Resultados

Los resultados apoyan la explicación presentada antes para la formación de partidos democratacristianos, y sugieren que la formación de estos partidos fue resultado ante todo de esfuerzos de la Iglesia católica por diseminar la doctrina, y secundariamente el producto del cambio socioeconómico, reglas electorales favorables, estar libres de la competencia de otros partidos similares, y un ambiente libre de represión. En especial, el análisis afirma el papel clave que la diseminación de la doctrina social desempeñó en la formación del partido, pues los datos indican que la diseminación no sólo es significativa estadísticamente, sino también considerablemente significativa. El análisis también parece corroborar la tendencia de la doctrina social a difundirse en el transcurso del tiempo.

Empecé considerando la primera de las cinco hipótesis. En general todas las hipótesis se conservaron sin modificaciones. Un vistazo a la significación estadística de los coeficientes nos permite tomar esta decisión. El cuadro IV.5 incluye los resultados de una clase particular de análisis de duración, llamado regresión de Weibull.[12] Como lo indican los resultados, los coeficientes para *ideo.* y *comp.* son estadísticamente muy significativos, con $p < .000$. *Urban., reglas* y *autorit.* también alcanzan niveles muy altos de significación estadística, en $p < .010$, $p < .020$ y $p < .006$, respectivamente.

CUADRO IV.5. *Resultados de la regresión de Weibull*

Variable	*Coeficiente*	*Error estándar robusto*	*p*
Urban.	0.0933	0.0361	.010***
Reglas	2.48	1.07	.020**
Comp.	6.05	1.12	.000***
Autorit.	3.65	1.32	.006***
Ideo.	17.4	0.759	.000***
Constante	−41.3	3.46	.000***
En *p*	1.31	0.230	.000***
p	3.71		
1/*p*	0.269		

NOTA: Regresión de Weibull, forma aleatoria log-rel. El número de sujetos es nueve. El número de fracasos es nueve. El tiempo de riesgo es 436.7. La probabilidad log es 12.5. El valor de chi al cuadrado es 1 239.72, y $p = .0000$. * $p < .10$. ** $p < .5$. *** $p < .01$. Los datos fueron calculados con el programa Stata 6.0.

Así, sabemos con alguna certidumbre que el efecto de estas cinco variables sobre la formación de los partidos democratacristianos es mayor de cero. Pero ¿cuánto más? Afortunadamente, los análisis de duración proporcionan varias estadísticas para medir el grado de significación de las variables independientes. En este análisis, he elegido la que se denomina *tiempo esperado*.[13] Son dos las posibles medidas de tiempo esperado: el coeficiente de tiempo esperado (coeficiente *T*) y el tiempo esperado de fracaso (*T*). El tiempo esperado, *T*, nos indica cuánto tiempo se requiere para que ocurra un hecho cuando establecemos una o más variables en ciertos valores; da una medida absoluta. El coeficiente de tiempo esperado, el coeficiente *T*, nos dice cuánto tiempo menos tomará el hecho con respecto a una línea base cuando se hace un cambio representativo en una variable; es un indicador del cambio relativo y es constante en todos los valores de las otras variables independientes. *T* se genera convirtiendo el coeficiente de aleatoriedad: se divide el coeficiente de aleatoriedad sin exponente por la inversa negativa del factor tiempo, ρ, y luego se toma el logaritmo natural inverso de la siguiente manera:

$$\ln(T) = -\frac{\beta}{p}x$$

o

$$T = e^{-(\beta/p)x}.$$

El coeficiente *T* se genera calculando el tiempo esperado únicamente para la constante (la "línea base") y dividiendo éste por la *T* correspondiente a la variable que interesa:

$$\text{Coeficiente } T = \frac{e^{-(\beta/p)x_0}}{e^{(\beta/p)}x},$$

donde ρ es el factor tiempo, β es la matriz de coeficientes (coeficientes de aleatoriedad no exponenciales), x es la matriz de valores de muestra para las variables independientes, y x_0 es la matriz de valores de muestra en la que todos los valores se establecen en 0.

Los resultados en el cuadro IV.6 indican que *ideo*. tiene por mucho el efecto más fuerte, seguida por *comp., autorit., urban*. y *reglas*. El tiempo esperado de la línea base de la formación es de 66 200 años. Es decir, puede esperarse que un país con una población completamente rural, reglas electorales restrictivas, competencia de partidos, represión y ninguna diseminación de la doctrina social tenga la formación de un partido 66 200 años después de que el concepto de la democracia cristiana surgiera en algún otro lugar. La magnitud de este número puede parecer un poco exagerada, pero representa el poder de predicción acumulado de las variables incluidas en el análisis; se correlacionan tan estrechamente con la variable dependiente que llevan a que el modelo pueda predecir un periodo muy rápido de formación si se las fija en cero. Si admitimos que el país tenga representación proporcional y un nivel de urbanización de 30% (el nivel característico de la urbanización en el momento en que se forma el partido en la mayoría de los países incluidos en el conjunto de datos), el tiempo esperado de formación se reduce a 34 000 años y a 31 200 años, respectivamente —cambios muy grandes, pero siguen siendo números absolutos bastante grandes—. Si, en cambio, eliminamos la competencia potencial para los democratacristianos, el tiempo esperado de formación disminuye de 66 200 años a 13 000, un cambio aún más grande, pero también un número absoluto grande. El mayor decremento esperado de todos se presenta cuando sólo admitimos que ocurra la diseminación: el tiempo esperado de formación del partido se reduce de 66 200 a sólo 620 años. Si aceptamos valores positivos en todas estas variables a la vez —urbanización de 30%, representación proporcional, estar libre de competencia, ninguna represión y la diseminación—, ese país debe presenciar la formación de un partido democratacristiano en sólo 11 años, que es aproximadamente lo que podríamos esperar a la luz de las experiencias de los partidos democratacristianos que se formaron en fechas tempranas.

CUADRO IV.6. *Tiempos esperados y coeficientes de tiempo esperados*

Variable	*T (años)*	*Coeficiente T*
Línea base	66 200	—
Urban.	31 200	.47
Reglas	34 000	.51
Comp.	13 000	.20
Autorit.	24 700	.37
Ideo.	620	.0092
Todas	11	—

Los datos sobre los coeficientes *T* en el cuadro IV.6 proporcionan medidas complementarias que pueden parecer menos exageradas. De conformidad con estas cifras, un país con una consistente diseminación de la doctrina social en toda su historia debería tener la formación del partido en 99.1% menos tiempo (esto es, 100 –.92) de lo que le toma a un país sin diseminación alguna —una reducción muy grande en el tiempo de formación—. Le sigue la ausencia de competencia, que reduce el tiempo de formación en 80%. La falta de represión reduce el tiempo de formación del partido en 63%, la presencia de reglas electorales proporcionales reduce este tiempo en 49%, y un nivel constante de 30% de urbanización lo reduce en 53%. En cualquier caso, los resultados son los mismos.

Todavía falta poner a prueba otra hipótesis: la tendencia de la doctrina social a difundirse. Si esta tendencia existe realmente, entonces debe manifestarse por una tasa aleatoria que aumenta con el transcurso del tiempo incluso cuando los valores de todas las variables independientes son 0. A este menor nivel de la tasa aleatoria se le llama la aleatoriedad de la línea base. Según los resultados previos de la regresión de Weibull (modelo que supone una cambiante aleatoriedad de la línea base), la función de la línea base aleatoria de este conjunto de datos sí aumenta con el transcurso del tiempo. El valor del factor tiempo ρ que se encuentra en el cuadro IV.6 es 3.71, mucho mayor que el valor de ρ = 1 que supondríamos si la tasa de formación del partido fuera constante con respecto al tiempo.

Para poner a prueba la significación estadística de este resultado, necesitamos volver a correr el modelo usando una forma diferente de análisis de duración llamada regresión exponencial. La regresión exponencial supone que la aleatoriedad de la línea de base es constante; la diferencia entre el modelo exponencial y el de Weibull debe reflejar la mejora que se obtiene al permitir que la aleatoriedad de la línea de base cambie con el transcurso del tiempo. Podemos poner a prueba la significación estadística de esta dependencia en el tiempo encontrando la diferencia absoluta entre las probabilidades logarítmicas para cada modelo y ver si esta diferencia cae dentro de una tabla de chi-cuadrada (Allison, 1984; Box Steffensmeier y Jones, 1977).

Los resultados de la regresión exponencial se muestran en el cuadro IV.7.

La diferencia absoluta entre la probabilidad logarítmica de los dos modelos es

$$|\ln L_e - \ln L_w| = | - 9.5 - 12.5 | = 3.0,$$

CUADRO IV.7. *Resultados de la regresión exponencial*

Variable	*Coeficiente*	*Error estándar robusto*	*p*
Urban.	0.118	0.0429	.006***
Reglas	3.17	1.39	.023**
Comp.	4.91	1.32	.000***
Autorit.	2.11	1.31	.106
Ideo.	19.2	0.639	.000***
Constante	−31.0	2.81	.000***

NOTA: Regresión de Weibull, forma aleatoria log-rel. El número de sujetos es nueve. El número de fracasos es nueve. El tiempo en riesgo es 436.7. La probabilidad logarítmica es 9.53. El valor de chi al cuadrado es 1614.19, y $p = .0000$. * $p < .10$. ** $p < .5$. *** $p < .01$. Los datos fueron calculados con el programa Stata 6.0.

en la que los grados de libertad son el número de nuevas variables, o 1, lo que nos da una significación estadística de sólo $p < .10$. Esto apenas satisface los niveles típicos de significación estadística. Por lo tanto, podemos tentativamente rechazar la hipótesis nula de que la doctrina social nunca se difunde.

Estudios de caso

La diseminación de la doctrina social por la Iglesia católica parece ser importante para la formación de los partidos democratacristianos. Su efecto sobre el tiempo esperado de formación del partido es mucho mayor que el de cualquier otra variable sometida a prueba, entre ellas el espacio de competencia, la represión, las reglas electorales y la urbanización. Sin embargo, el análisis estadístico nos da sólo una especie de instantánea numérica que puede no transmitir plenamente esta idea y que podría hacer surgir preguntas sobre la forma en que algo como esto puede incluso ser medido. Para poder comunicar la historia que se encuentra detrás de los datos, este capítulo incluye cuatro breves estudios de caso de los partidos democratacristianos en Chile, Venezuela, Uruguay y El Salvador. Los dos primeros son ejemplos de la temprana diseminación asociada con una pronta formación de los partidos, en tanto que los dos últimos son ejemplos de una tardía diseminación seguida por una formación posterior. Los cuatro proporcionan evidencia interesante de la clase de efecto que la Iglesia católica puede ejercer indirectamente sobre la formación del partido.

Chile

En Chile, el PDC fue fundado en fechas tempranas y su formación resultó de la diseminación de la doctrina social por instituciones y personal de la Iglesia entre los fundadores del partido. Sólo un pequeño grupo de clérigos participó en estos esfuerzos,

pero pudieron utilizar con éxito la organización educativa de la Iglesia para enseñar la doctrina a los estudiantes y organizarlos.

El primer partido democratacristiano en Chile, la Falange Nacional (FN), fue fundado en 1938 y participó por primera vez en elecciones nacionales en 1941 (Nohlen, 1993, p. 242). La FN fue resultado de la separación de un grupo del Partido Conservador procatólico y estaba compuesta principalmente de un ala joven que originalmente se había unido al Partido Conservador a principios de la década de 1930. A finales de los años cincuenta, a la FN se unió el ala socialcristiana del Partido Conservador y se convirtió en el Partido Demócrata Cristiano (PDC), nombre con el que se le conoce actualmente (Williams, 1967, pp. 18-19). Se puede considerar idénticos a los dos partidos. Los fundadores de la FN (incluyendo al futuro presidente Eduardo Frei Montalva) formaron la mayor parte del liderazgo del PDC original, cuya plataforma estaba basada en la ideología de la FN, una ideología basada en la doctrina social cristiana y establecida en los primeros escritos de Frei.[14] A pesar de su identificación con el PDC, la FN se tiene como el primer partido demócrata cristiano en Chile en vista de su antigua dependencia de la doctrina social católica y de su carácter no confesional.

Chile presenció una diseminación muy temprana de la doctrina social hacia 1916. La historia de la forma en que los fundadores del partido llegaron a conocer la doctrina social está bien documentada. Casi todos los fundadores de la Falange Nacional original participaron en la Asociación Nacional de Estudiantes Católicos (ANEC), cuyos miembros se reunían en la Universidad Católica y en la Universidad de Chile en Santiago a finales de los años veinte y principios de los treinta. La mayoría de los fundadores del partido tenían casi la misma edad y asistieron a la universidad juntos. En la ANEC, sacerdotes jesuitas les enseñaron la doctrina social. Óscar Larson no sólo les dio clases a sus estudiantes sino que además los alentó a ponerla en práctica al instarlos a organizar colectas de caridad, sindicatos de trabajadores y capítulos de Acción Católica en otras comunidades chilenas. Los líderes estudiantiles de la ANEC con el tiempo se convirtieron en los líderes de la FN y del PDC; una relación del gabinete del presidente Frei en 1964 parece una lista de presentes de los miembros de la ANEC original.

Chile tendría una fecha muy temprana para la diseminación de la doctrina social cristiana si las experiencias de la ANEC con el padre Larson fueran las primeras fuentes de la doctrina social. No obstante, la diseminación ocurrió en realidad antes, con el profesor del padre Larson, un jesuita llamado Fernando Vives Solar que enseñaba en el Colegio San Ignacio en Santiago. En 1916, cuando Larson era un estudiante universitario que cursaba la carrera de leyes, fue invitado por el padre Vives para que asistiera al Círculo de Estudios Sociales que el sacerdote dirigía en el Colegio San Ignacio. Muchos futuros sacerdotes y miembros laicos asistieron y, a su vez, procuraron aplicar y difundir la doctrina social (Araneda Bravo, 1981, p. 15). Aunque el padre Larson fue probablemente el principal discípulo que surgió de esta experiencia, otros también hicieron lo mismo, y basados en sus estudios y en el apoyo de su líder dieron conferencias, colaboraron con las asociaciones de trabajadores que ya existían y fundaron sindicatos laborales (Larson, 1967, pp. 15-16). Vives permaneció poco tiempo

en Chile; a sus superiores en San Ignacio no les agradaban algunas de sus enseñanzas, y en 1918 lo enviaron a España (p. 17). Sin embargo, Larson le concede prestamente el crédito al padre Vives como el primero que diseminó la doctrina social; en un relato autobiográfico que escribió muchos años después, Larson describió al padre Vives como "hablando con precisión, el que plantó la primera semilla en Chile" (p. 13). De hecho, fue bajo la inspiración del padre Vives que Larson decidió estudiar para sacerdote y, después de ser ordenado, a seguir estudios de posgrado de sociología y doctrina social católica en la Universidad de Lovaina. En 1927 Larson regresó a Chile, donde reanudó sus actividades como jefe o *asesor** de la ANEC en la Universidad Católica e inició la experiencia que finalmente llevó a la formación del partido.[15]

En resumen, los esfuerzos del padre Vives y de Óscar Larson por enseñar la doctrina social en las escuelas católicas y organizar a los estudiantes en torno a esta doctrina fueron tempranas experiencias decisivas que llevaron a la formación del partido. Es difícil imaginar cualquier otro medio de educar y reunir a los fundadores de la FN en el periodo anterior a la segunda Guerra Mundial en medio de la Gran Depresión; ciertamente, no hubo ninguna otra experiencia que educara a estos estudiantes de esa forma.

Venezuela

Al igual que Chile, Venezuela es un caso de diseminación temprana de la doctrina social, seguida de la formación del partido. El primer partido democratacristiano en Venezuela fue el COPEI (acrónimo que originalmente significaba Comité Político Electoral Independiente). Como en Chile, por lo menos otro partido compite por esta distinción. En este caso era Acción Nacional el partido que precedió inmediatamente al COPEI. Acción Nacional estaba compuesto por antiguos miembros y miembros en activo de la Unión Nacional Estudiantil (UNE), la asociación de estudiantes católicos que también proporcionó el núcleo del COPEI. Sin embargo, Acción Nacional no era un partido democratacristiano; una historia del COPEI en esos primeros años afirma que Acción Nacional, al igual que la organización de la que descendía, era conservador y confesional (Rivera Oviedo, 1977, pp. 74-75; Luque, 1986, pp. 172-173, 203-204). En contraste, el COPEI fue formado a partir de la facción más progresista o inclinada a la izquierda de Acción Nacional por Rafael Caldera en enero de 1946. El COPEI parece haber diferido cualitativamente de Acción Nacional. A diferencia de éste, el COPEI se llamaba a sí mismo un partido del "centro" para distinguirse de la hegemonía izquierdista de Acción Democrática (AD) después del golpe de 1945 y de los elementos derechistas del anterior gobierno militar (Luque, 1986, pp. 223-224), y era mucho más explícitamente democrático y no confesional (Rivera Oviedo, 1977, pp. 224-225).

La diseminación ocurrió en la década de 1930 por medio de los varios componentes de Acción Católica que la Iglesia organizaba en Venezuela. Los grupos de estudio y otras ramas de Acción Católica fueron organizados por primera vez en 1931, y en 1933 se fundó una de las organizaciones clave, Juventud Católica. Una historia del COPEI considera a Juventud Católica como uno de los instrumentos más importantes para

enseñar la doctrina social (Luque, 1986, p. 39), aunque otros participantes en estos hechos consideran que los posteriores círculos de estudios universitarios influyeron más (Aguirre Elorriaga, 1968, A-14-b). En cualquier caso, ya en 1933 se habían organizado tres centros de Juventud Católica, incluyendo a los Caballeros de Santiago y el Círculo de León XIII, todos patrocinados por la Iglesia. Las relaciones entre estos grupos y la Iglesia eran muy estrechas y recibían apoyo y orientación continua de la alta jerarquía. En última instancia la dirección de Juventud Católica estaba en manos del nuncio papal y la juventud local integraba su liderazgo. El joven Rafael Caldera, futuro líder del COPEI y presidente de Venezuela en dos ocasiones, fue el primer secretario de la organización, y encontramos numerosos registros de comunicación entre él y los clérigos (Luque, 1986, pp. 39-40). Un hecho clave fue la Asamblea Interamericana de Estudiantes Católicos realizada en Roma en diciembre de 1933. Asistieron tres delegados estudiantiles venezolanos, entre ellos Rafael Caldera, y allí se encontraron con delegados de otros países latinoamericanos (incluyendo a Eduardo Frei y otros de Chile); el objetivo primario fue aprender cómo organizar grupos juveniles de Acción Católica en sus propios países. Se mencionaron la conferencia y la estructura más general de apoyo y orientación proporcionados por la Iglesia como factores que generaron el *esprit-de-corps* entre los futuros dirigentes (Luque, 1986, pp. 41-42).

Uno de los personajes más importantes en la difusión de la doctrina social en Venezuela fue el sacerdote jesuita Manuel Aguirre Elorriaga, un vasco que fue enviado al país a enseñar en la Escuela de San Ignacio, que había sido fundada por los jesuitas en 1922. De 1926 a 1929 Aguirre Elorriaga les dio clases a Caldera y a otros en San Ignacio. Sin embargo, todavía no era sacerdote, y en 1929 viajó a Europa para completar su educación; después de estudiar en Roma (experiencia que amplió considerablemente su conocimiento de la doctrina social y lo familiarizó con los principales europeos que la practicaban) regresó en 1937 y organizó círculos de estudio y grupos de trabajadores y fundó una revista que tuvo mucha influencia y se llamó *SIC*, la cual fungió como un importante foro de discusión de la doctrina social (*SIC*, 1969, p. 150).[16] Se convirtió en mentor de Caldera (al que consideraba brillante y quería ayudar a ser más consciente de los problemas sociales) y organizó grupos de discusión de la doctrina social cristiana en la UNE, la asociación de estudiantes universitarios católicos, poco después de su llegada en 1937; entre los estudiantes que participaron en esos grupos estaban Caldera y otros futuros líderes del COPEI y del movimiento democratacristiano en Venezuela. Es interesante que el padre Aguirre Elorriaga no sólo haya tratado de interesar a sus estudiantes en “la filosofía social y la acción social”, sino que además creía que debían ser políticamente activos: diferencia significativa con respecto a las ideas del padre Larson en Chile (Aguirre Elorriaga, 1968, A-14-b; Herman, 1980, p. 19). Las enseñanzas de Aguirre Elorriaga tuvieron una profunda influencia sobre Caldera y otros jóvenes activistas, y los convenció de la necesidad de poner en práctica la doctrina por medio de la política (Herman, 1980, p. 19).

A la luz de este relato podemos decir que la diseminación en Venezuela ocurrió por lo menos en 1933, con la fundación de Juventud Católica y posiblemente desde 1926,

cuando el padre Aguirre Elorriaga empezó a dar clases en San Ignacio. Como ocurrió en Chile, podemos ver que los esfuerzos de unos cuantos clérigos dedicados a difundir la doctrina social por medio de círculos de estudio, publicaciones y organizaciones laicas tuvo un efecto directo en la temprana organización del partido democratacristiano.

Uruguay

Uruguay es un caso de diseminación tardía, seguida por una tardía formación del partido. El PDC, fundado en 1962, fue el primero y el único partido democratacristiano en Uruguay. El PDC fue el resultado de una importante reorganización de un antiguo partido católico, la Unión Cívica, pero ésta no puede ser considerada un partido democratacristiano. Cuando se fundó, en 1911, fue ante todo un instrumento para proteger a la Iglesia católica contra la drástica secularización de la sociedad que estaba llevando a cabo el Partido Colorado durante la presidencia de José Battle y Ordóñez. La mayoría de los miembros de la Unión Cívica apoyaba un programa socioeconómico conservador, tuvo en sus inicios estrechas relaciones con el clero e intencionalmente excluía a personas con opiniones progresistas (Zubillaga y Cayota, 1982, pp. 263, 265-267); según dos historiadores uruguayos, "la Unión Cívica era, por sus acciones, un partido confesional" (p. 271). La composición del partido cambió gradualmente unas pocas décadas después (por ejemplo, un miembro del partido participó en la primera reunión de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA) en 1947; véase el Acta Final, 1997 [1947]), pero el ala conservadora del partido mantuvo un considerable control hasta que se le reorganizó en 1962. Personas que fueron miembros del partido observaron que la reorganización de 1962 fue un cambio cualitativo en la organización y el programa del partido, que finalmente le permitió al creciente elemento de centro-izquierda del partido ganar el control (Camou, 1997; Cayota, 1997a).

En Uruguay la doctrina social no fue diseminada por la Iglesia católica sino hasta después de la segunda Guerra Mundial, aproximadamente en 1950. Irónicamente, el arzobispo de Montevideo en los inicios del siglo XX, monseñor Mariano Soler, era amigo de León XIII y un proponente de la doctrina social. Monseñor Soler se refirió a la doctrina social en documentos que hizo circular entre el clero y apoyó organizaciones que llevaron a la práctica algunas de sus ideas, como la Unión Demócrata Cristiana (UDC). Sin embargo, murió a una edad relativamente temprana y nunca pudo establecer una institución que enseñara la doctrina social a los miembros laicos. Las organizaciones laicas que creó (como la UDC) parecen haberse dedicado muy poco a la enseñanza, concentrándose más bien en la aplicación de la doctrina por medio de asociaciones de trabajadores y sindicatos laborales. Los líderes de la Iglesia que siguieron a monseñor Soler tuvieron una opinión mucho menos favorable de la doctrina social, e incluso llegaron a excluir a la UDC, con sus trabajadores y artesanos, de la Unión Cívica cuando se la fundó en 1911, prefiriendo en cambio concentrarse en la defensa de los privilegios de la Iglesia y en sus intereses tradicionales morales o espirituales (Cayota, 1990, 1997b; Zubillaga y Cayota, 1982).

La poca difusión de la doctrina social que ocurrió fue principalmente debida a ejemplos del cercano PDC chileno y los varios y sólidos partidos democratacristianos en Europa occidental después de la segunda Guerra Mundial, así como por esfuerzos aislados de miembros laicos individuales, hombres como Eduardo Cayota y Tomás Brena (que participaron en la Unión Cívica y sirvieron en la legislatura uruguaya) o Juan Zorrilla de San Martín, el estadista y hombre de letras uruguayo (Pla Rodríguez, 1997; Cayota, 1997a; Zubillaga y Cayota, 1982). No es muy claro cuándo exactamente supieron estas personas de la doctrina social; uno de los miembros más ancianos del partido, Américo Pla Rodríguez, recordaba que la habían conocido a través de sus propias lecturas (Pla Rodríguez, 1997).

Cuando la Iglesia intervino lo hizo sólo en forma indirecta, poco intensa, no por medio de un esfuerzo institucional en gran escala. A diferencia de Chile y Perú, en un principio no había ninguna universidad católica que reuniera a los estudiantes para estudiar la doctrina social. La influencia de la Iglesia se presentó en otras dos formas. La primera fue en la persona del padre Lebret, un sacerdote dominico y sociólogo francés que visitó Uruguay en los años cincuenta sustentando conferencias sobre su "economía humana", un sistema de propuestas políticas e ideológicas para organizar a los trabajadores y reducir la pobreza, que estaba fundamentado en una mezcla de doctrina social de la Iglesia y método sociológico moderno (Pla Rodríguez, 1997; Terra, 1995). Sus conferencias tuvieron un profundo efecto sobre Juan Pablo Terra, uno de los líderes clave del PDC durante sus primeras tres décadas (Terra, 1995). La segunda influencia se presentó en la década de los sesenta y tomó la forma de la universidad del Estado, donde la parroquia de la Iglesia en la universidad proporcionó un ambiente en el que los estudiantes católicos podían discutir nuevas ideas de la izquierda.

De este modo, en Uruguay la Iglesia no desempeñó un papel activo desde fechas tempranas en la diseminación de la doctrina social; lo poco que se conoció de ella ocurrió en gran medida gracias a esfuerzos laicos individuales. No es sorprendente que encontremos una ausencia conspicua de actividad política laica en torno a la doctrina social hasta bastante después de la segunda Guerra Mundial, e incluso entonces ésta parece asociada con una combinación de efectos de demostración y el trabajo de un sacerdote que venía de fuera de Uruguay. Como en Chile, la Iglesia pudo haber ejercido un poderoso efecto en la formación del partido, pero en este caso el efecto parece haber sido negativo.

El Salvador

El PDC de El Salvador representa otro caso de diseminación/difusión tardía de la doctrina social, seguida por una formación tardía del partido, aunque en este caso la apertura del espacio electoral también se presentó muy tarde, lo que hizo posible al PDC tener mucho más éxito que en Uruguay. Ello confirma la importancia de la diseminación patrocinada por la Iglesia para la formación del partido.

El primer y único partido democratacristiano en El Salvador es el PDC. Se fundó en noviembre de 1960, cuando más de 100 personas se reunieron en el Hotel Internacional en San Salvador para organizarse en un partido formal y redactaron el acta de fundación (Webre, 1979, pp. 32-33; Caldera, 1983, p. 9), El PDC ha disfrutado de existencia continua desde entonces y es el mismo PDC que obtuvo el triunfo electoral bajo la presidencia de José Napoleón Duarte en la década de 1980.

En El Salvador, el PDC se formó por la unión de varios grupos de estudio que recibieron relativamente poca orientación de la Iglesia, lo que refleja la casi total ausencia de algún esfuerzo temprano de parte de la Iglesia para diseminar la doctrina social en El Salvador. De los cuatro grupos que se unieron en las primeras reuniones que precedieron a la formación del partido, sólo uno (la Unión Nacional de Obreros Católicos) tuvo algunos lazos oficiales con la Iglesia.[17] De hecho, uno de estos grupos tuvo que escribir a los líderes de los partidos democratacristianos de Sudamérica para obtener más información sobre el movimiento (Caldera, 1983, pp. 7-9).

El clero salvadoreño no desconoció totalmente la nueva doctrina social cuando fue prouesta a principios de siglo, pero en la siguiente década no la enseñó ni la aplicó entre sus miembros laicos. El clero publicó sus primeras cartas que se ocuparon de la *Rerum Novarum* en 1927, más de 35 años después de que se emitió la encíclica. Éste fue el primer paso en un nuevo esfuerzo de las autoridades eclesiásticas por responder a una creciente preocupación por el comunismo y para familiarizar a los clérigos con la nueva doctrina social; este esfuerzo dio origen a Acción Católica. Sin embargo, por lo menos hasta 1930, no se había llevado a cabo ningún esfuerzo institucional por diseminar la doctrina social entre los miembros laicos, o por organizarlos siguiendo sus lineamientos. En cambio, la Iglesia enfatizó la piedad y los problemas administrativos por encima de las cuestiones socioeconómicas. Por ejemplo, aunque participaba ampliamente en los medios de comunicación, el clero se concentró en la difusión de la doctrina moral y evitó las discusiones políticas; cualquier esfuerzo que se hiciera en este sentido era tajantemente terminado por las autoridades eclesiásticas (Cardenal, 1980, p. 269). La organización de los miembros laicos se centró en las cofradías y en dos organizaciones laicas: el Apostolado de la Oración (fundada en 1890) y los Caballeros Adoradores (fundada en 1921), ambas creadas para aumentar la participación en la misa, reducir los vicios del alcoholismo y las parrandas, y combatir el protestantismo y el comunismo (pp. 257-258, 267-268). En esos años, la Iglesia salvadoreña apoyaba el concepto de esferas separadas para lo temporal y lo espiritual, quedando la Iglesia a cargo de lo espiritual y el Estado a cargo de lo temporal. Los clérigos se mantenían fuera de la política excepto cuando las acciones del Estado afectaban las actividades del culto y la moral o la espiritualidad de la comunidad (pp. 217-218).

La Iglesia sí hizo algunos pequeños esfuerzos por difundir la doctrina social a finales de los años cincuenta. Como ya se dijo, entre los cuatro grupos que se unieron para formar el PDC, uno estaba patrocinado por la Iglesia y aparentemente tenía algún conocimiento de la doctrina social. Estos grupos empezaron sus estudios por lo menos en 1958 (Webre, 1979, p. 32). Esta fecha es corroborada en cierta medida en otra fuente

sobre la historia de la Iglesia en El Salvador, que señala que la Iglesia empezó a experimentar con reformas moderadas a finales de la década de 1950 bajo la orientación del arzobispo Luis Chávez y González. En 1958, Chávez y González fundó el Secretariado Social Diocesano, organización que "coordinaba y promovía programas de ayuda y proyectos de autoayuda en parroquias en la arquidiócesis de San Salvador". Además, alentó la formación de cooperativas agrícolas (Peterson, 1997, p. 49).

En consecuencia, aquí se considera que 1958 es la primera fecha de la diseminación. Esta tardía fecha no sólo tiene una alta correlación con la formación del partido (sólo un par de años después), sino que conserva un mayor significado a la luz de la información sobre los orígenes de otros grupos clave de estudio orientados políticamente y que estaban fuera de la esfera de influencia directa del clero y especialmente en la dependencia de esos grupos en el ejemplo de los democratacristianos en otros países de Latinoamérica y de Europa occidental. La ausencia de un clero deseoso o capaz de diseminar la doctrina social, en particular en sus aspectos políticos potenciales, parece haber retrasado por varias décadas la formación del partido.

CONCLUSIÓN

Los detalles de los orígenes de los partidos democratacristianos en Latinoamérica, junto con los análisis cuantitativos de la formación del partido en nueve países latinoamericanos, apoyan una explicación basada en el actor racional para la formación de los partidos democratacristianos y reafirma fuertemente el papel prominente que la Iglesia católica desempeñó en el proceso de formación del partido mediante la diseminación de la doctrina social. El cambio socioeconómico, la represión política, las reglas electorales y la competencia afectan en conjunto la formación del partido, pero el factor más importante parece ser el papel desempeñado por un escaso personal y pocos recursos de la Iglesia en la diseminación de la doctrina social.

Los resultados de este análisis son impresionantes, y parece que vale la pena concluir con alguna reflexión sobre el significado de estos hallazgos. La Iglesia católica fue probablemente el catalizador más importante para la formación del partido mediante los esfuerzos de sus clérigos por difundir la nueva doctrina social. La formación del partido ocurrió después de que se enseñó la doctrina social a empresarios políticos potenciales, frecuentemente a pesar de un clima de represión hostil o de ambientes institucional y competitivo desfavorables. Aunque la falta de espacio no permite hacer una presentación detallada, datos adicionales de estos y otros estudios de caso demuestran que la enseñanza de la doctrina social antes de la formación del partido progresó frecuentemente ante los ojos de algún dictador y en condiciones económicas difíciles, en particular en los años treinta. Esto debe hacernos considerar la enorme capacidad de las ideas o de una ideología convincente para difundirse y afectar el curso de la política, y la habilidad de los individuos o las instituciones interesados en convertir esto en realidad.

Además, el poder de estas ideas nos debe hacer reconsiderar los esfuerzos por medir

el éxito de la democracia cristiana o de cualquier otro movimiento político en términos meramente electorales. Como lo reiteran otros autores en este libro, las ideas que subyacen en la democracia cristiana han tenido efectos profundos sobre las políticas latinoamericanas. En muchos de estos países, múltiples generaciones de políticos importantes recibieron su primera experiencia política cuando participaban en organizaciones juveniles democratacristianas; el adoctrinamiento que recibieron raramente fue olvidado. Aunque muchos de esos líderes políticos han roto sus nexos con los partidos democratacristianos (como en Uruguay o Perú; véase Schmidt, en este libro), la doctrina social sobrevive en sus programas y plataformas. La experiencia de los partidos democratacristianos en Latinoamérica reivindica la visión de muchos clérigos y miembros laicos que sembraron las ideas con la esperanza de cosechar acciones futuras que podían beneficiar el bienestar material y espiritual de sus comunidades. Aunque los partidos democratacristianos no siempre han alcanzado claramente el éxito electoral que esperaban, indirectamente han logrado muchos de sus objetivos políticos, y a menudo han dejado un legado perdurable de gobierno democrático y bienestar económico.

APÉNDICE
La aplicación del análisis de duración

Cuando otros académicos que están estudiando la formación de partidos han enfrentado problemas en que la N es muy pequeña, se han contentado con estadísticas descriptivas y medidas de asociación sencilla entre dos variables (véanse, por ejemplo, Kitschelt, 1988; Harmel y Robertson, 1985; Rochon, 1985, y Bürklin, 1985). Sin embargo, esas medidas son muy problemáticas porque no controlan simultáneamente todas las variables. Con frecuencia se encuentra que relaciones estadísticamente significativas entre dos variables dejan de serlo una vez que se toman en cuenta todas las variables. De igual importancia es que las medidas de significación estadística no nos dicen nada sobre la significación sustantiva de las variables de que se trata. Para resolver estos problemas, algunos académicos han encontrado suficientes datos para emplear regresiones ordinarias de los mínimos cuadrados o LOGIT/PROBIT (Kitschelt, 1988), cuyos coeficientes proporcionan medidas de significación sustantivas. Sin embargo, por lo común sólo han puesto a prueba datos en el espacio, no en el tiempo, y esto desperdicia valiosa información sobre sus muestras (Box-Steffensmeier y Jones, 1997, p. 1415).

Para superar estos problemas, aproveché una técnica de análisis longitudinal que ha recibido poca atención en los estudios de la formación de partidos: el análisis de duración o la historia de acontecimientos, que en otras partes se conoce como el tiempo de supervivencia o análisis de la tasa de aleatoriedad. La técnica fue creada originalmente para emplearse en medicina e ingeniería, pero se puede aplicar convenientemente a problemas en ciencia política que se refieren a hechos, en especial donde queramos conocer algo sobre la duración del tiempo antes del acontecimiento (Allison, 1984; Box-Steffensmeier y Jones, 1997). Los modelos de duración pueden expresarse de varias maneras. Pero en este caso lo mejor es expresarlos de acuerdo con la tasa de aleatoriedad. La tasa de aleatoriedad no es la probabilidad de que ocurra un hecho, como lo sería la variable dependiente bajo LOGIT o PROBIT, sino la tasa de hechos que ocurren en un determinado momento: en este caso, la tasa instantánea de la formación del partido. Se estima usando la cantidad de tiempo que transcurre antes de cada acontecimiento para cada caso en observación.[18] La forma general de la función de la tasa aleatoria es una variación de la de una función exponencial,

$$H(t) = H_0(t)e^{\beta\chi},$$

donde $H(t)$ es la tasa aleatoria, $\beta\chi$ es un componente lineal de la forma $\beta_0 + \beta_1 \chi_1 + \beta_2 \chi_2 \ldots + \beta_\kappa\chi_\kappa$, en la que incorporamos nuestras variables independientes, y $H_0(t)$ es una función que describe el efecto del tiempo t sobre la variable dependiente cuando todas las variables independientes χ se fijan en 0.

Las dos formas de la función que se usará aquí serán las regresiones exponencial y la

de Weibull. En la regresión exponencial se supone que el tiempo no tiene ningún efecto sobre la tasa de aleatoriedad, y $H_0(t)$ es simplemente una constante. En la regresión de Weibull se supone que la tasa de aleatoriedad aumenta monótonamente con el transcurso del tiempo, incluso aunque todas las otras variables se hayan fijado en cero; esto se representa dejando que

$$H_0(t) = \rho t^{\rho-1},$$

donde ρ es una constante estimada con base en los datos.[19]

Las principales ventajas de un análisis de hechos en tiempo continuo son las mismas que las técnicas de regresión simple: el modelo es multivariado y proporciona medidas de significación sustantiva, además de la más familiar de significación estadística. Como ocurre en todos los análisis de series temporales, también nos permite multiplicar el número de observaciones cuando sólo están disponibles pocos casos (por ejemplo, en el caso de países). Sin embargo, a diferencia de otras técnicas para estudiar las series temporales, evita muchos de los problemas inherentes a la autocorrelación, y nos permite incluir variables ocultas *(dummy)* cuyos valores cambian en el *transcurso del tiempo* (Allison, 1984; Box-Steffensmeier y Jones, 1997). Por ejemplo, con un modelo lineal, si mi variable dependiente fuera el tiempo que ha transcurrido antes de la formación del partido, no podría captar el hecho de que algunas de mis variables independientes, como la represión, cambien en ese lapso. La única solución a este problema (y la que más se usa en los modelos de series temporales lineales) es la de separar los datos según unidades convenientes de tiempo (como la de años-país) y dejar que cada unidad para cada país equivalga a una observación. Aunque se han inventado varios correctivos para este problema, emplear acontecimientos en un tiempo continuo evita del todo estos problemas.

REFERENCIAS

Fuentes impresas

Acta Final de la Reunión de Montevideo, 1997 [1947], fotocopia del texto transcrito.

Aguirre Elorriaga, Manuel, S. J., 1968, transcripción de entrevista con el padre Aguirre Elorriaga, 26 de noviembre; no se especifica el lugar de la entrevista.

Aldrich, John H., 1995, *Why Parties? The Origin and Transformation of Political Parties in Latin America*, Chicago, University of Chicago Press.

Allison, Paul D., 1984, *Event History Analysis: Regression for Longitudinal Event Data*. Quantitative Applications in the Social Sciences Series No. 07-046, Beverly Hills, Sage Publications.

Araneda Bravo, Fidel, 1981, *Oscar Larson: el clero y la política chilena*, Santiago, Imprenta San José.

Bendaña Perdomo, Ricardo, 1996, *La Iglesia en Guatemala: síntesis histórica del catolicismo*, Ciudad de Guatemala, Librerías Artemis-Edinter.

Bidegaín de Urán, Ana María, 1985, *Iglesia, pueblo y política: un estudio de conflictos de intereses, Colombia, 1930-1955*, Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana.

Boizard, Ricardo, 1963, *La democracia cristiana en Chile (un mundo que nace entre dos guerras)*, Santiago, Editorial Orbe.

Box-Steffensmeier, Janet M., y Bradford S. Jones, 1997, "Time is of the Essence: Event History Models in Political Science", *American Journal of Political Science*, 41, núm. 4, octubre, pp. 1414-1461.

Bürklin, Wilhelm P., 1985, "The German Greens: The Post-Industrial Non-Established and the Party System", *International Political Science Review*, 6, núm. 4, pp. 463-482.

Calder, Bruce Johnson, 1970, *Crecimiento y cambio de la Iglesia católica guatemalteca 1944-1966*, Estudios Centroamericanos núm. 6, Guatemala, Seminario de Integración Social Guatemalteca.

Caldera T., Hilda, 1983, *Historia del Partido Demócrata Cristiano de El Salvador*, San Salvador, Instituto Salvadoreño de Estudios Políticos.

Cambell, Angus, Philip E. Converse, Warren E. Miller y Donald E. Stokes, 1960, *The American Voter*, Nueva York, Wiley.

Camou, Juan Enrique, 1997, entrevista por el autor, julio.

Cardenal, Rodolfo, S. J., 1980, *El poder eclesiástico en El Salvador (1871-1931)*, San Salvador, UCA/Editores.

Cayota, Mario, 1990, "Soler y el capitalismo: un pasado que se hace presente", en Mario Cayota (ed.), *Mariano Soler y el discurso modernizador*, pp. 77-92, Montevideo, Instituto San Bernardino de Montevideo.

———, 1997a, entrevista por el autor [Mainwaring], 9 de julio, Montevideo, Uruguay.

———, 1997b, "Mons. Mariano Soler en la encrucijada modernizadora", *Soleriana: Revista del Instituto Teológico de Uruguay Monseñor Mariano Soler*, 22, núm. 8, diciembre, pp. 151-170.

Cerro, Francisco, 1983, *Qué es el Partido Demócrata Cristiano en la Argentina*, Buenos Aires, Editorial Sudamericana.

Coleman, James S., 1990, *Foundations of Social Theory*, Cambridge, Harvard University Press.

Collier, Ruth Berins, y David Collier, 1991, *Shaping the Political Arena: Critical Junctures, the Labor Movement, and Regime Dynamics in Latin America*, Princeton, Princeton University Press.

Congreso Internacional de la Democracia Cristiana, 1959, *Congreso Internacional de la Democracia Cristiana: Anales*, Lima, Editorial Universitaria.

Coppedge, Michael, 1997, "A Classification of Latin American Parties", Kellogg Institute Working Paper no. 244, Notre Dame, Helen Kellogg Institute for International Studies.

Dix, Robert H., 1989, “Cleavage Structures and Party Systems in Latin America”, *Comparative Politics*, octubre, pp. 23-37.

———, 1992, “Democratization and Institutionalization of Latin American Political Parties”, *Comparative Political Studies*, 24, núm. 4, enero, pp. 488-510.

Downs, Anthony, *An Economic Theory of Democracy*, Nueva York, Harper and Row.

Elster, Jon, 1989, *Nuts and Bolts for the Social Sciences*, Nueva York, Cambridge University Press.

Frohlich, Norman, y Joe A. Oppenheimer, 1978, “Political Organizing and Political Entrepreneurs”, cap. 4, *Modern Political Economy*, pp. 66-89, Englewood Cliffs, Nueva Jersey, Prentice-Hall.

Gazmuri, Cristián, 1996, “Semblanza biográfica”, en Cristián Gazmuri, Patricia Arancibia y Álvaro Góngora (eds.), *Eduardo Frei Montalva (1911-1982)*, pp. 13-115, Santiago, Fondo de Cultura Económica.

Geddes, Barbara, 1990, “How the Cases You Choose Affect the Answers You Get: Selection Bias in Comparative Politics”, *Political Analysis*, 2, pp. 131-152.

Goldstein, Judith, y Robert O. Keohane (eds.), 1993, *Ideas and Foreign Policy: Beliefs, Institutions, and Political Change*, Ithaca, Cornell University Press.

Gumucio, Rafael A., 1963, “De la Falange a la democracia cristiana”, apéndice, en Ricardo Boizard (ed.), *La democracia cristiana en Chile (un mundo que nace entre dos guerras)*, pp. 311-336, Santiago, Editorial Orbe.

Gurr, Ted Robert, Keith Jaggers y Will H. Moore, 1990, “The Transformation of the Western State: The Growth of Democracy, Autocracy, and State Power since 1800”, *Studies in Comparative International Development*, 25, núm. 1, primavera, pp. 73-108.

Harmel, Robert, 1985, “On the Study of New Parties”, *International Political Science Review*, 6, núm. 4, pp. 403-418.

———, y John D. Robertson, 1985, “Formation and Success of New Parties: A Cross-National Analysis”, *International Political Science Review*, 6, núm. 4, pp. 501-524.

Hauss, Charles, y David Rayside, 1978, “The Development of New Parties”, en Louis Maisel y Joseph Cooper (eds.), *Political Parties: Development and Decay*, pp. 31-57, Beverly Hills, California, Sage.

Herman, Donald L., 1980, *Christian Democracy in Venezuela*, Chapel Hill, University of North Carolina Press.

Hinich, Melvin J., y Michael C. Munger, 1994, *Ideology and the Theory of Political Choice*, Ann Arbor, University of Michigan Press.

Huntington, Samuel P., 1973, “Transnational Organizations in World Politics”, *World Politics*, 25, núm. 3, abril, pp. 333-368.

Hurtado, Oswaldo, 1980, *Political Power in Ecuador*, Albuquerque, University of New Mexico Press.

Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales, 1978, “Los partidos políticos y el Estado guatemalteco desde el 44 hasta nuestros días”, *Política y Sociedad*, edición especial,

pp. 5-106, San Carlos, Universidad de San Carlos, Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales.

Jaggers, Keith, y Ted Robert Gurr, 1995, “Tracking Democracy’s Third Wave with the Polity III Data”, *Journal of Peace Research*, 32, núm. 4, pp. 469-482.

Kalyvas, Stathis N., 1996, *The Rise of Christian Democracy in Europe*, Ithaca, Cornell University Press.

Kalyvas, Stathis N., 1998, “From Pulpit to Party: Party Formation and the Christian Democratic Phenomenon”, *Comparative Politics*, 30, núm. 3, abril, pp. 293-312.

Kennedy, John J., 1958, *Catholicism, Nationalism, and Democracy in Argentina*, Notre Dame, University of Notre Dame Press.

King, Gary, Robert O. Kehoane y Sydney Verba, 1994, *Designing Social Inquiry: Scientific Inference in Qualitative Research*, Princeton, Princeton University Press.

Kitschelt, Herbert, 1988, “Left-Libertarian Parties: Explaining Innovation in Competitive Party Systems”, *World Politics*, 40, núm. 2, enero, pp. 194-234.

———, 1989, *The Logics of Party Formation: Ecological Politics in Belgium and West Germany*, Ithaca, Cornell University Press.

Klaiber, Jeffrey, S. J., 1992, *The Catholic Church in Peru, 1821-1985: A Social History*, Washington, D. C., Catholic University of America Press.

Larson, Oscar, 1967, *La ANEC y la democracia cristiana*, Santiago, Ediciones Ráfaga.

Lerner, Daniel, 1958, *The Passing of Traditional Society*, capítulos 2 y 3, Glencoe, Ill., The Free Press.

Lescano, Héctor, 1997, entrevista por el autor, julio, Montevideo, Uruguay.

Levine, Daniel H., 1981, *Religion and Politics in Latin America: Church and State in Venezuela and Colombia*, Princeton, Princeton University Press.

Lipset, Seymour M., 1960, *Political Man: The Social Bases of Politics*, Garden City, Nueva York, Anchor Books.

———, y Stein Rokkan, 1967, “Cleavage Structures, Party Systems, and Voter Alignments”, en Seymour Martin Lipset y Stein Rokkan (eds.), *Party Systems and Voter Alignments: Cross-National Perspectives*, pp. 1-64, Glencoe, Ill., The Free Press.

Luque, Guillermo, 1986, *De la Acción Católica al partido COPEI 1933-1946 (El proceso de formación de la democracia cristiana en Venezuela)*, Caracas, Fondo Editorial de Humanidades y Educación, Universidad Central de Venezuela.

Lynch, Edward A., 1993, *Latin America’s Christian Democrat Parties: A Political Economy*, Wetsport, Conn., Praeger.

Mainwaring, Scott, y Timothy R. Scully (eds.), 1995, *Building Democratic Institutions: Party Systems in Latin America*, Stanford, Stanford University Press.

McCarthy, John D., y Mayer N. Zald, 1977, “Resource Mobilization and Social Movements: A Partial Theory”, *American Journal of Sociology*, 82, núm. 6, pp. 1212-1241.

Mecham, J. Lloyd, 1966, *Church and State in Latin America: A History of Politico-*

Ecclesiastical Relations, Chapel Hill, University of North Carolina Press.

Morgenstern, Scott J., 1996, "The Electoral Connection and the Legislative Process in Latin America: Factions, Parties, and Alliances in Theory and Practice", tesis doctoral, University of California, San Diego.

Nohlen, Dieter (ed.), 1993, *Enciclopedia electoral latinoamericana y del Caribe*, San José, Costa Rica, Instituto Interamericano de Derechos Humanos.

Olson, Mancur, 1965, *The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups*, Cambridge, Harvard University Press.

Peterson, Anna L., 1997, *Martyrdom and the Politics of Religion: Progressive Catholicism in El Salvador's Civil War*, Albany, State University of New York Press.

Pla Rodríguez, Américo, 1997, entrevista por el autor, julio, Montevideo, Uruguay.

Rivera Oviedo, J. E., 1977, *Los socialcristianos en Venezuela*, Caracas, Ediciones Centauro.

Rochon, Thomas R., 1985, "Mobilizers and Challengers: Toward a New Theory of Party Success", *International Political Science Review*, 6, núm. 4, pp. 419-440.

Rodríguez Meléndez, Jorge, 1997, entrevista por el autor, julio, Montevideo, Uruguay.

Roux, Rodolfo R. de, 1983, *Una Iglesia en estado de alerta: funciones sociales y funcionamiento del catolicismo colombiano: 1930-1980*, Bogotá, Servicio Colombiano de Comunicación Social.

Salazar Mora, Orlando, y Jorge Mario Salazar Mora, 1991, *Los partidos políticos en Costa Rica*, San José, Costa Rica, Editorial Universidad Estatal a Distancia.

Scully, Timothy R., 1992, *Rethinking the Center: Party Politics in Nineteenth- and Twentieth-Century Chile*, Stanford, Stanford University Press.

SIC, 1969, "Manuel Aguirre: sembrador de ideas y cosechador de hechos", Editorial *SIC*, núm. 314, pp. 150-151.

Terra, Juan Pablo, 1995, "Militancia social, economía y desarrollo humano: el pensamiento vivo de Louis Joseph Lebret", en *Juan Pablo Terra: obras, arquitectura y urbanismo*, 1, pp. 13-25, Montevideo, CLAEH.

Turner, Frederick C., 1971, *Catholicism and Political Development in Latin America*, Chapel Hill, University of North Carolina Press.

Vallier, Ivan, 1971, "The Roman Catholic Church: A Transnational Actor", *International Organization*, 25, núm. 3, verano, pp. 479-502.

Webre, Stephen, 1979, *José Napoleón Duarte and the Christian Democratic Party in Salvadoran Politics, 1960-1972*, Baton Rouge, Louisiana State University Press.

Wilde, Alexander Wiley, 1972, "A Traditional Church and Politics: Colombia", tesis de doctorado, Columbia University.

Wilkie, James W., y Stephen Haber, 1983, *Statistical Abstract of Latin America*, vol. 22, Los Ángeles, Latin American Center, University of California.

Williams, Edward J., 1967, *Latin American Christian Democratic Parties*, Knoxville, University of Tennesse Press.

Williams, Philip J., 1989, *The Catholic Church and Politics in Nicaragua and Costa Rica*, Pittsburgh, University of Pittsburgh Press.

Zubillaga, Carlos, y Mario Cayota, 1982, *Cristianos y cambio social en el Uruguay de la modernización (1896-1919)*, Montevideo, Centro Latinoamericano de Economía Humana / Ediciones de la Banda Oriental.

Fuentes www

Base de datos públicos de América
www.georgetown.edu/pdba/Parties/parties.html

Elecciones en todo el mundo
www.electionworld.org

* Agradezco a varios amigos y colegas sus valiosos comentarios y sugerencias al preparar este análisis. Entre los que ayudaron están Robert Keohane, Herbert Kitschelt, Peter Lange, Scott Mainwaring, Tim Scully, Brad Gómez, Gregory Schmidt, Naudy Suárez y mi querida amiga Eliza Tanner. También agradezco el apoyo institucional proporcionado por el Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica de Santiago, Chile; el Instituto de Ciencia Política de la Universidad del Estado de Montevideo, Uruguay, y el Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA) de Caracas, Venezuela. La investigación original fue posible por generosos donativos de la Escuela de Posgrado de la Duke University y de la Tinker Foundation.

[1] Por ejemplo, en 1928, Frei y sus colegas apenas estaban empezando el bachillerato y no se conocían entre sí; muchos de los fundadores de la Falange Nacional y del PDC no estudiaron en la Escuela de Derecho y algunos ni siquiera estuvieron en la misma universidad; además, el levantamiento contra Ibáñez ocurrió unos cuantos años después (Larson, 1967, pp. 29-30).

[2] Para una descripción más detallada de la organización, programa y miembros de los partidos democratacristianos, véase Williams (1967).

[3] El nivel promedio de urbanización cuando se formaron los partidos democratacristianos de estos nueve países. Para más información, véase el análisis de los datos en la segunda parte de este capítulo.

[4] Más específicamente, cambiar el valor de urbano de 0 a 30 da un coeficiente T de sólo 5.3, o sea una reducción de 5.3% en el tiempo en que se espera que un partido se forme.

[5] En realidad la teoría tiene más matices que esta simplificación. Lipset y Rokkan reconocen que la movilización de las demandas latentes de los votantes en un partido depende de factores institucionales politicoeconómicos adicionales, entre ellos las reglamentaciones electorales (representación proporcional contra pluralidad, legalización de los partidos y ampliación de los registros) (1967, pp. 112-115) y las consideraciones espaciales o estratégicas, como las “oportunidades, las ventajas y los costos de las alianzas” (p. 113). La teoría de la demanda que aquí se describe no debe tomarse como una crítica a Lipset y Rokkan, sino sólo como una simplificación.

[6] Para una catalogación exhaustiva de los partidos políticos en la mayoría de los países latinoamericanos, véase Coppedge (1997).

[7] Dix (1989) considera el papel de los gobiernos autoritarios en el debilitamiento de los sistemas de partido tradicionales en Latinoamérica, pero concentra su análisis en el éxito a largo plazo del partido, más que en su formación.

[8] Hinich y Munger (1994) definen la ideología como “un conjunto de propuestas internamente consistente y explícito que hace demandas tanto restrictivas como afirmativas sobre la conducta humana”, y aquí yo uso esa definición. Añadiría que las ideas que subyacen en la mayoría de los partidos a los que puedo considerar ideológicos también son por lo común explícitas o codificadas.

[9] Para una discusión reciente del papel de las ideas en el estudio de las relaciones internacionales, véase Goldstein y Keohane (1993).

[10] Por ejemplo, muchos de los primeros partidarios de la doctrina social habían recibido educación en la Universidad de Lovaina, en Bélgica, centro de pensamiento y experimentación con la doctrina social.

[11] En realidad, en el libro de Nohlen (1993) la mayoría de los autores de los estudios de países hacen un juicio claro sobre el momento en que las reglas electorales cambiaron hacia la representación proporcional, y así lo dicen. La única posible excepción a esto es el caso de Uruguay, cuyo singular sistema electoral hace muy difícil clasificarlo como proporcional o mayoritario (Morgenstern, 1996). Originalmente clasifiqué las reglas electorales de Uruguay como mayoritarias, pero las pude haber codificado como una especie de caso híbrido en .5. En ambos casos los resultados cambiaban muy poco.

[12] Como se explica en el Apéndice de este capítulo, una regresión de Weibull es un tipo de análisis de duración que supone que la probabilidad de que ocurra un hecho aumenta constantemente con el transcurso del tiempo, cualquiera que sea el valor de las demás variables.

[13] En este análisis, las medidas del coeficiente de tiempo esperado no son un indicador tan adecuado de la significación sustantiva como podríamos esperar, porque suponen que las variables independientes son constantes para cada país. Esto no significa que no es posible calcular las estadísticas del tiempo esperado, pero sí que debe interpretárselas de una forma ligeramente diferente. También significa que las estadísticas de tiempo esperado generadas en este análisis no son estadísticamente significativas. Por lo tanto, sólo se les puede considerar

ilustrativas.

[14] Véanse, por ejemplo, *Chile desconocido* (1937), *El régimen del salario y su posible abolición* (1933) y *Aún es tiempo* (1942).

* En español en el original.

[15] Larson subraya que él "regresó entusiasmado con la Acción Católica y la doctrina social cristiana que estaba siendo desarrollada en Bélgica y que tenía apóstoles tan eminentes como el padre José Cardyjn y el padre Rutten" (1967, p. 14).

[16] Esta revista todavía se publica bajo los auspicios de los jesuitas en Venezuela y es considerada generalmente como una de las publicaciones académicas periódicas de mayor influencia en el país.

[17] Los cuatro grupos eran: un "grupo político" que estaba "estudiando las diferentes alternativas ideológico-políticas que se desarrollaban en el mundo y que pensaba que la democracia cristiana era la mejor solución para El Salvador"; un grupo de estudio que analizaba la doctrina social; un grupo de la rama estudiantil universitaria de Acción Católica, y la Unión Nacional de Obreros Católicos (Caldera, 1983, pp. 7-8).

[18] O, en caso de que no ocurra el hecho, hasta que termine el periodo que se está analizando. A esto se conoce como observación censurada *(censored)*. No hay observaciones así en este conjunto de datos.

[19] Otra posibilidad sería el modelo de aleatoriedad proporcional de Cox, que difiere de estos dos porque *no es paramétrico*, es decir, no hace ningún supuesto sobre el efecto del tiempo, y no lo convierte en un parámetro. El modelo de Cox es más flexible, pero en este caso no resulta adecuado por varias razones: *1)* con muestras pequeñas, frecuentemente no da parámetros exactos; *2)* hay más dificultad para estimar los parámetros cuando hay eventos simultáneos, o *vínculos*, en los datos, y *3)* el hecho de que evita suponer algo sobre la dependencia en el tiempo significa que no se le debe usar si se quiere poner a prueba alguna relación hipotética entre el tiempo y la tasa aleatoria (Box-Steffensmeier y Jones, 1977). En este análisis nos interesan esos tres elementos.

SEGUNDA PARTE
DOS IMPORTANTES PARTIDOS DEMOCRATACRISTIANOS CONTEMPORÁNEOS

V. UN PARTIDO POLÍTICO MUY INSTITUCIONALIZADO: LA DEMOCRACIA CRISTIANA EN CHILE*

CARLOS HUNEEUS

EN ESTE capítulo se analiza el desarrollo del Partido Demócrata Cristiano (PDC), el partido político más grande de Chile desde 1963 hasta las elecciones para el Congreso de 2001. Está dividido en tres partes. La primera bosqueja la evolución histórica del partido, trazando las pautas de institucionalización y de dimensión en su historia que pueden explicar la conducta de sus dirigentes después del retorno de la democracia en 1989. La segunda parte estudia la influencia del presidencialismo en el crecimiento electoral y en el papel del PDC. La tercera y última parte enfoca al PDC durante la transición y consolidación de la democracia, los problemas que la afligen hoy en día y las direcciones posibles para su desarrollo futuro.

El PDC ha sido el protagonista político clave durante la segunda mitad del siglo XX. Tres de seis presidentes elegidos democráticamente, de 1958 a 2000, fueron miembros del PDC: Eduardo Frei Montalva (1964-1970), Patricio Aylwin Azócar (1990-1994) y Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000). Los democratacristianos conservaron su posición de pluralidad en periodos muy difíciles de la política chilena. Se opusieron al gobierno izquierdista de Unidad Popular de Salvador Allende (1970-1973), que trataba de llevar a cabo una revolución por medios legales y que produjo una grave polarización y confrontación en un contexto de crisis económica.[1] El papel de los líderes del PDC como el partido más grande de Chile se confirmó en las elecciones para el Congreso en marzo de 1973, cuando recibió 28% de los votos. En forma parecida, ganó 28.1% en la elección presidencial de 1970 y un poco más —31%— en las elecciones para el Congreso en 1969, demostrando su capacidad de resistir la polarización entre la izquierda y la derecha.[2]

Durante el régimen autoritario (1973-1990) el PDC tuvo un importante papel estratégico en la oposición. Junto con los partidos izquierdistas y el Partido Radical desempeñó un papel clave en la conformación de una alternativa democrática a la dictadura, que condujo a la creación en 1988 de la Concertación de Partidos por la Democracia. Encabezada por el PDC y por Patricio Aylwin, Concertación movilizó con éxito a la mayoría del país para derrotar al general Pinochet en el plebiscito del 5 de octubre de ese mismo año (Ortega Frei, 1992). Este acontecimiento marcó el final del gobierno militar y allanó el camino para la transición democrática y las primeras elecciones presidenciales y legislativas. El candidato de Concertación, Patricio Aylwin, había sido presidente del PDC en el momento del golpe de Estado militar de 1973. Ganó la elección presidencial que se llevó a cabo el 14 de diciembre de 1989 (Aylwin, 1998).

Después de asumir el cargo el 11 de marzo de 1990, el primer presidente de la nueva

democracia fortaleció las instituciones democráticas a pesar del difícil contexto político. Fue obligado por la Constitución a retener al general Pinochet como comandante en jefe del ejército y enfrentó la continua oposición de Pinochet a la política sobre las violaciones de los derechos humanos. Las políticas económicas de Aylwin también tuvieron éxito, haciéndole posible al país el mismo ritmo de crecimiento que había logrado desde 1985, a la vez que reducía la inflación, disminuyendo significativamente la pobreza y logrando la estabilidad fiscal (Huneeus, 1996).

Patricio Aylwin también consiguió algo que no había podido Frei en 1970, y en realidad ningún otro presidente chileno desde 1946:[3] le entregó la banda presidencial a un miembro de su propio partido. Aylwin fue sucedido por Eduardo Frei Ruiz-Tagle, hijo del anterior presidente, ingeniero, hombre de negocios y candidato de Concertación en la elección de 1993.

El PDC no pudo elegir a uno de sus líderes, Andrés Zaldívar,[4] como el tercer presidente de Concertación. En cambio, Ricardo Lagos Escobar, que había sido miembro del Partido Radical en su juventud, después del Partido Socialista (PS) y del Partido por la Democracia (PPD), y ministro en los gobiernos de Aylwin y de Frei Ruiz-Tagle, ganó la primaria de Concertación por un amplio margen en mayo de 1999. La derrota marcó el descenso electoral del PDC. En las elecciones parlamentarias de 1997 perdió 4.1 puntos porcentuales, más que ningún otro partido de Concertación. La derrota también puso en evidencia la capacidad cada vez menor del PDC para desarrollar propuestas programáticas y dirigentes lo suficientemente interesantes para movilizar a los votantes.

En el tercer gobierno presidencial de la nueva democracia, las crecientes limitaciones del PDC se hicieron cada vez más evidentes. Su base de apoyo disminuyó en octubre de 2000, cuando sólo obtuvo 22% del voto en las elecciones municipales. De conformidad con las encuestas realizadas en el segundo semestre de ese mismo año, sólo 15% de los electores tenían intención de votar por el PDC. Esto era la mitad del número que apoyaba al partido a finales de la primera administración democrática. Por primera vez se veía amenazada la posición pluralista de los democratacristianos en el sistema de partidos. Los contendientes más fuertes eran los partidos de izquierda dentro de Concertación y partidos derechistas como la Unión Democrática Independiente (UDI), que había declarado abiertamente su intención de ganar votos desplazando al PDC. En las elecciones parlamentarias de 2001 el PDC recibió sólo 18.9% de los votos y dejó de ser el mayor partido de Chile, posición que pasó a la UDI.

En Latinoamérica es excepcional que un partido haya sobrevivido durante más de medio siglo de graves trastornos políticos y rígida dictadura militar. El régimen militar no sólo trató de eliminar a los partidos que ya tenían mucho tiempo establecidos; también introdujo profundos cambios socioeconómicos que modificaron las bases del sistema económico y facilitaron el despegue económico (Huneeus, 2000). También es insólito que un partido que forma parte de una coalición democratizadora dirija tres gobiernos sucesivos en una nueva democracia. Ninguno de los primeros presidentes de la "tercera ola" democratizadora (Huntington, 1991), con excepción de Havel en la República Checa, pudo mantener la continuidad entregando el poder a un presidente de su partido;

cada uno de ellos fue sucedido por un político de la oposición. Éste fue también el caso de la democratización de la Europa meridional. El partido que condujo la transición de España y gobernó sólo entre 1977 y 1982 —la Unión del Centro Democrático— fracasó en su intento de institucionalización y pasó por una crisis rápida y profunda que finalmente lo llevó a su desaparición (Huneeus, 1985). En todo caso, las tensiones inherentes a la transición del autoritarismo a la democracia usando una estrategia de reforma y medios legales son bien conocidas por los democratacristianos, que han tenido que soportar la mayoría de las críticas por los defectos y errores durante el proceso de democratización.[5] Los problemas del PDC no pueden entenderse sin tener en cuenta la influencia del partido en el proceso chileno de democratización.

Es curioso que, a pesar de su importancia para la política chilena, el PDC no haya sido el tema de gran parte de la investigación sobre los partidos por parte de la comunidad de las ciencias sociales. Los estudios académicos actuales están dominados por el enfoque histórico y descriptivo, y no han analizado la singularidad programática y organizativa del partido, su liderazgo y sus fundamentos sociales (Grayson, 1965; Fleet, 1985; Hofmeister, 1995). El análisis de la política chilena tiende a criticar el desempeño del partido, en particular durante el gobierno de Frei Montalva. A veces han dado interpretaciones basadas en una sola causa e incluso interpretaciones reduccionistas de los sucesos políticos en las que las raíces de los problemas de la democracia desde 1973 pueden atribuirse a las acciones de un partido, el PDC. Los académicos frecuentemente se han mostrado comprensivos ante los errores cometidos por los partidos izquierdistas y le han perdonado a la derecha cualquier responsabilidad por la crisis y caída del orden pluralista. Según el politólogo estadunidense Brian Loveman, "los democratacristianos destruyeron definitivamente la piedra angular de la democracia formal chilena tal como había funcionado desde 1932, sin proporcionar nada a cambio, excepto una noción vagamente concebida de la sociedad 'comunitaria' que la remplazaría" (1988, p. 289).

Esta crítica del desempeño del PDC está basada en un cuestionamiento de su posición centrista, a la que a veces se ha caracterizado como rígida e introspectiva, en contraste con el Partido Radical, del que se considera que favoreció los compromisos y las alianzas. A los radicales se les vio como uno de los pilares estabilizadores de la democracia chilena hasta 1960, pero esta percepción omite el papel divisor que desempeñó en la sociedad chilena en los años cuarenta, cuando declaró ilegal al Partido Comunista. Esta prohibición promovió un anticomunismo societal que penetró incluso en la Iglesia católica y dañó al PDC porque no compartía en ese tiempo una posición anticomunista.[6] Arturo Valenzuela ha sostenido que los democratacristianos, que gobernaron solos de 1964 a 1970, violaron las reglas del desarrollo democrático al rechazar la política de compromiso que había hecho posible un orden pluralista. Para Valenzuela, "el centro había sido tomado por un partido que abiertamente desdeñaba las maniobras políticas de la política clientelista que durante tanto tiempo había mantenido funcionando al sistema" (1978, p. 36). Además, este centro era fuertemente ideológico y "desempeñó un papel importante en el debilitamiento del frágil consenso de un sistema democrático polarizado" (p. 38). Empero, aunque esta afirmación puede contener

elementos de verdad, no ayuda a explicar la evolución de la democracia cristiana, los problemas que enfrentó en la década de 1960 y las dificultades en el sistema de partidos en ese tiempo.

El PDC chileno merece que se le estudie por su carácter único entre los partidos democratacristianos en el mundo. Se le puede comparar con los partidos europeos que triunfaron, pero sus alcances son más amplios porque ha sido un partido genuinamente centrista de dos maneras. Primero, ha ocupado el centro del espectro político. Al clasificar a los partidos de izquierda a derecha según una escala del 1 al 10, una encuesta del Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea (CERC) en julio de 2002, que abarcó a 1200 entrevistados, ubicó al PDC casi exactamente en el centro, con una puntuación promedio de 5.26. Quienes respondieron ubicaron al Partido Socialista en 2.9, al PPD en 4.1, a Renovación Nacional (RN) en 8.5 y a la UDI en 8.7.

Segundo, el PDC ha competido con partidos tanto de la izquierda como de la derecha que reciben porcentajes importantes del voto, entre ellos los conservadores y los liberales hasta 1966, el Partido Nacional de 1966 a 1970, y la UDI y RN desde 1989. Ningún partido democratacristiano de Europa se ha encontrado jamás en tan insólita posición electoral.[7]

En Chile los votantes democratacristianos son claramente centristas y lo siguieron siendo durante los noventa, promediando 5 en una escala de 10 puntos (cuadro V.1). Una pérdida de votos a la UDI sí causó un ligero cambio —de 5.45 en 1991 a 4.84 en 2001—. Tampoco ha cambiado el PDC su posición ideológica; en realidad, las acciones de sus líderes han coincidido con las acciones de sus votantes. Será importante tener en cuenta este hecho más adelante, cuando estudiemos los problemas que ha enfrentado el PDC en cuestiones de liderazgo y de organización. Es menos importante cuando se estudian las disputas internas producidas por preocupaciones ideológicas, como sucedió en 1960.

El PDC es un partido muy institucionalizado, que cumple con casi todas las normas importantes delineadas por Huntington en su estudio clásico, que proporciona una estructura útil para entender al partido (1968, pp. 12-24). Es difícil estimar el efecto de la debilidad institucional sobre un partido porque no existe ningún instrumento analítico o metodológico para medir los grados de institucionalización. El estudio de Mainwaring y de Scully es uno de los pocos esfuerzos realizados en ese sentido (1995, pp. 1-34). Utiliza indicadores construidos a partir de resultados electorales e información de encuestas, pero no tiene en cuenta las dimensiones organizativas y los elementos de liderazgo —una omisión importante—. Por desdicha, los estudios de los partidos no han avanzado en la línea de análisis ofrecida por Robert Michels (1911), uno de los fundadores de este campo, que demostró la importancia de la organización y del liderazgo en el desarrollo de los partidos. A pesar de la rica bibliografía sobre los partidos en las democracias occidentales, carecemos de estructuras interpretativas para hacer operativos los temas de organización. Éstos incluyen no sólo información sobre los miembros del partido (Bartolini, 1983), sino también datos sobre el alcance, la profundidad y la efectividad de la organización, y sobre el efecto de los factores históricos y el contexto político. Este último tema es de especial importancia porque en

las nuevas democracias los sistemas de partidos se han formado en ambientes dinámicos en que muchas demandas pueden amenazar su fortaleza. Además, en Chile y en otras partes la democratización ha ocurrido junto con un intenso proceso de cambio económico que ha transformado los fundamentos económicos y sociales de la política. Diferenciar el efecto de los factores políticos inherentes a la democratización de los que son resultado de la reforma económica es una tarea muy compleja. Finalmente, hoy en día la organización de un partido es muy diferente de la de los años setenta. La política electoral y los intereses políticos de los ciudadanos han cambiado, produciendo una reducción del número de miembros de un partido y el remplazo de los activistas voluntarios por personal pagado.[8] El resultado, como lo han descrito Dalton y Wattenberg (2000), son "partidos sin partidarios".

CUADRO V.1. *Autoubicación de los chilenos en una escala izquierda-derecha, 1991-2001*

Partido	*Mar. 1991*	*Sept. 1995*	*Dic. 1997*	*Sept. 1998*	*Dic. 1998*	*Sept. 1999*	*Dic. 1999*	*May. 2000*	*Jul. 2000*	*Sept. 2000*	*Dic. 2001*
Unión Demócratica Independiente (UDI)	8.03	8.42	7.68	7.26	7.43	7.47	7.87	7.4	7.94	8.01	7.36
Renovación Nacional (RN)	7.81	8.25	7.42	6.91	7.42	7.28	7.36	7.43	7.77	7.26	6.91
Partido Demócrata Cristiano (PDC)	5.45	4.88	5.0	5.18	5.36	5.2	5.29	4.65	5.29	4.75	4.84
Partido por la Democracia (PPD)	4.41	3.95	4.01	3.91	4.28	4.22	4.6	4.31	4.39	4.4	4.27
Partido Socialista (PS)	3.29	2.73	4.08	3.6	3.33	3.6	3.7	3.7	3.14	3.86	3.59
Total	5.79	5.64	5.19	5.09	5.28	5.41	5.61	5.56	5.73	5.64	5.46
Tamaño de la muestra	1500 (63%)	1240 (67%)	1200 (67%)	1200 (67%)	1200 (67%)	1200 (67%)	1200 (67%)	1142 (70%)	1200 (70%)	1200 (70%)	1200 (70%)

NOTA: La pregunta fue: "En política comúnmente hablamos de 'izquierda' y 'derecha'. En una escala de 10 puntos, en la que 1 es 'izquierda' y 10 es 'derecha', ¿dónde se ubicaría usted?" La información es la puntuación promedio, por intención de voto.
FUENTE: Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea (CERC), encuestas.

LA LARGA MARCHA DE LOS DEMOCRATACRISTIANOS HACIA LA INSTITUCIONALIZACIÓN

Hemos sugerido que el PDC está institucionalizado, según la definición de Huntington (1968, p. 20). Primero, la organización del PDC es vasta y compleja, y el partido está firmemente establecido en cada una de las 13 regiones y en la mayoría de las *comunas* (la unidad administrativa política más pequeña de Chile). Incluye cuadros relativamente activos de mujeres, jóvenes y profesionistas que representan los intereses de sus respectivos grupos sociales. En cada nivel organizativo y geográfico (nacional, regional y local) el PDC elige regularmente al liderazgo del partido de conformidad con los criterios formales delineados en los estatutos del partido. Los organismos de toma de decisiones representan varios grupos internos —desde representantes en el Congreso hasta organizaciones geográficas y funcionales— que cooperan para cumplir con sus responsabilidades. El PDC es el único partido en Chile con una estructura organizativa compleja y estable que incluso reconocen quienes no son sus partidarios; sus adversarios, dirigentes y miembros activos, todos se refieren a él como un partido. Gracias al gran número de profesionistas sumamente calificados que hay en sus filas, el PDC ha tenido más secretarios y subsecretarios que ningún otro partido en cada uno de los tres primeros gobiernos de Concertación.

Segundo, el PDC ha disfrutado de una gran autonomía con respecto a los grupos sociales y culturales. No es un partido católico como tal, pero generalmente ha mantenido relaciones estables con la jerarquía eclesiástica sin subordinarse a la Iglesia. Para el PDC, sus propios intereses están primero, por encima de los de otras instituciones y organizaciones sociales y culturales. Su presencia en los movimientos estudiantiles y obreros nunca le ha impedido ser un partido que incluya todas las clases. Las decisiones se toman sin ninguna influencia de las organizaciones en que los miembros del partido ocupan posiciones de liderazgo.

Tercero, los democratacristianos han estado notablemente cohesionados y unidos. El partido superó las divisiones ideológicas de los años sesenta (que en 1969 tuvieron como resultado la creación del Movimiento de Acción Popular Unitario [MAPU] y en 1971 la fundación de la Izquierda Cristiana) y de los ochenta, porque los dirigentes principales sufrieron el efecto negativo de esas divisiones. Los líderes del partido han mostrado una gran disciplina al votar sobre la legislación en el Congreso y han resistido el impulso de presentar proyectos políticos divergentes sobre temas nacionales importantes, lo que también muestra una imagen de coherencia organizativa. El PDC ha sido ubicado y percibido claramente en el centro político, no sólo por sus propios votantes, sino también por los de otros partidos.

Sin embargo, el PDC en la actualidad no parece satisfacer la cuarta norma de Huntington: la de *adaptabilidad-rigidez*. Su adaptabilidad se ha visto gravemente debilitada por los recientes desafíos. El partido no ha sido capaz de encontrar soluciones para su marcado debilitamiento electoral, y en cambio ha mostrado rigidez en sus propuestas programáticas, en la selección de candidatos y en la relación con la sociedad. Puede argumentarse que las otras dimensiones de la institucionalización del PDC han limitado su capacidad de adaptarse y han demostrado que la institucionalización excesiva puede ser un obstáculo para la adaptación. Kesselman (1970) ha desarrollado esta crítica de la tesis de Huntington con base en la experiencia francesa.

La historia del PDC chileno no es diferente de la de sus homólogos europeos (Fogarty, 1958; Kalyvas, 1996) en el sentido de que fue fundado y desarrollado por líderes católicos con apoyo (no siempre explícito) de los sectores progresistas de la Iglesia católica. Los primeros líderes del PDC eran católicos que participaban en organizaciones juveniles católicas, que recibían el apoyo de obispos y sacerdotes influyentes porque proponían una acción política vinculada con la doctrina social de la Iglesia. En la misa por el fallecimiento de Eduardo Frei Montalva en 1982, el cardenal Raúl Silva Henríquez recordó que "la Iglesia chilena le pidió a un grupo de jóvenes de Acción Católica, encabezado por Eduardo Frei, que dejaran detrás las antiguas teorías liberales, que hicieran suya la doctrina social de la Iglesia y que lucharan por aplicarla en nuestro país. Así empezó la lucha prolongada, dolorosa y difícil que hemos vivido muchos de nosotros —una lucha caracterizada por la incomprensión y, en algunas ocasiones, el odio—" (Ortega, 1982, p. 357).[9]

Aunque el PDC fue fundado en 1957 cuando la Falange Nacional se fusionó con otros partidos socialcristianos, la historia del partido se remonta a 1938, con la fundación de la

Falange Nacional. En los años veinte, la Falange se conformó a partir de grupos estudiantiles y de dos organizaciones de jóvenes católicos universitarios, la Asociación Nacional de Estudiantes Católicos (ANEC)[10] y Acción Católica, el organismo oficial de la Iglesia para trabajar con estudiantes católicos universitarios. Encabezada por el padre Óscar Larson, cuya personalidad atraía enormemente a los estudiantes universitarios, la ANEC era la organización más dinámica. Larson se puso al frente de ella en 1928, durante la dictadura de Carlos Ibáñez (1925-1931). Durante ese periodo se convirtió en el principal instrumento para reclutar jóvenes católicos que después participaron activamente en política, y sus principales líderes se convertirían en los fundadores del PDC. Su posición se fortaleció en 1931 con la publicación de la encíclica *Quadragesimo Anno*, que delineaba para la Iglesia la misma posición sobre los temas sociales que el padre Larson le había dado a la ANEC.

Es importante reconocer que los jóvenes católicos que fundaron el PDC —entre ellos Bernardo Leighton, Eduardo Frei Montalva y Manuel Garretón— estaban creando un nuevo movimiento fuera del Partido Conservador, que hasta entonces había sido el partido de los católicos. De hecho, el notable trabajo de los jóvenes católicos llamó la atención de los políticos conservadores.[11] Se les invitó a unirse al Partido Conservador y al Movimiento Nacional de la Juventud Conservadora (MNJC), fundado en octubre de 1935 como organización autónoma que no requería pertenecer al partido.[12] Sin embargo, el partido de la vieja guardia no atraía a los jóvenes, que encontraban retrógradas sus propuestas socioeconómicas y no relacionadas con la nueva orientación de la Iglesia en los asuntos sociales. Unos pocos miembros del Partido Conservador se interesaron en esta nueva orientación, incluyendo al anterior senador Rafael Luis Gumucio, Horacio Walker y Eduardo Cruz-Coke, que apoyaron con pleno convencimiento la posición de la Iglesia.

El MNJC tuvo bastante éxito en sus actividades e incorporó en sus filas a miles de jóvenes de todo el país. El Partido Conservador reconoció su influencia en 1937 al nombrar ministro del Trabajo a Leighton en el gobierno de Arturo Alessandri Palma (Grayson, 1965, p. 140). El MNJC participó activamente en las campañas para la elección del Congreso ese mismo año, eligiendo a Manuel Garretón para el Congreso como diputado por Santiago. Seis de los diputados elegidos por el Partido Conservador eran miembros no oficiales del MNJC, lo que le dio al grupo una presencia pequeña pero creciente en la Cámara de Diputados (Grayson, 1965, p. 142). En 1937, el movimiento también adoptó un nuevo nombre, Falange Nacional, para diferenciarse más claramente en términos políticos e indicar su autonomía del Partido Conservador.

Las relaciones del movimiento con el Partido Conservador se hicieron más tensas durante la elección presidencial de 1938, cuando los jóvenes se negaron a aceptar la nominación del anterior ministro de Hacienda, Gustavo Ross, como candidato del partido. Los miembros de la Falange Nacional se declararon en libertad de apoyar a otros candidatos, y sus líderes no trabajaron activamente en la campaña de Ross. Los dirigentes del Partido Conservador culparon a la posición de la Falange Nacional en la campaña por la apretada derrota de Ross ante Pedro Aguirre Cerda, el candidato del

Partido Radical y del Frente Popular.[13] Los líderes del Partido Conservador, dirigido por Horacio Walker, tomaron acciones disciplinarias contra los jóvenes y exigieron su reorganización. La Falange rechazó esta acción y rompió con el partido a finales de 1938, creando una nueva organización, también llamada Falange Nacional.

La nueva organización tuvo un desarrollo lento y difícil que le permitió construir un liderazgo central muy unificado, para formular propuestas programáticas sólidas y establecer bases organizativas pequeñas, pero muy activas, en diferentes provincias. Durante 15 años la Falange fue un partido pequeño. No pudo ganar más de 4% de los votos y eligió sólo tres diputados en cada una de las elecciones para el Congreso que se llevaron a cabo entre 1941 y 1953. Eduardo Frei Montalva, que se convertiría en su líder más importante, padeció por las limitaciones de su partido. Fue derrotado cada una de las tres veces que se lanzó como candidato a diputado,[14] y sólo fue finalmente elegido al Senado en 1949, como candidato del pequeño distrito de Atacama y Coquimbo.[15]

El prestigio intelectual de la Falange y su liderazgo cohesivo gradualmente le dieron un papel político más significativo y algunos de sus líderes se convirtieron en miembros del gabinete y en altos funcionarios del gobierno durante los regímenes radicales de los cuarenta.[16] La Falange siguió una política pragmática de alianzas con el Partido Radical sin romper sus nexos con personalidades socialcristianas del Partido Conservador. Cuando en 1940 Eduardo Cruz-Coke fue candidato al Senado por Santiago en una elección especial para llenar una vacante contra un candidato del Frente Popular, y posteriormente cuando compitió por la presidencia en 1946, la Falange Nacional lo apoyó. Este apoyo demostraría a la larga ser muy importante para el desarrollo del PDC, porque el candidato conservador promovió un programa cuya orientación socialcristiana coincidía con las propias propuestas de la Falange, lo que hizo que los falangistas se contaran entre sus más decididos partidarios. La campaña presidencial de Cruz-Coke fue importante para difundir el pensamiento socialcristiano en todo el país y le ayudó a ganarse la lealtad de muchos profesionistas, estudiantes, trabajadores y mujeres que ingresaron en la política por medio de la democracia cristiana.

Además, la campaña marcó un momento decisivo en la colaboración entre la Falange y el ala socialcristiana del antiguo Partido Conservador, que tuvo importantes repercusiones sobre el posterior crecimiento del PDC.[17] En 1948, tanto la Falange Nacional como los conservadores socialcristianos se opusieron a la legislación presidencial que proscribió al Partido Comunista a la que se conoció como la Ley en Defensa de la Democracia. Los sectores tradicionales del Partido Conservador consideraron discutible esta alianza, provocando una separación que dividiría permanentemente al partido. En 1949, en las elecciones para el Congreso, el Partido Conservador eligió 32 diputados, de los cuales sólo 11 pertenecían al sector socialcristiano de Walker y Cruz-Coke.[18] El resto era de miembros de la llamada facción tradicionalista, conocida por su apoyo a la Ley en Defensa de la Democracia (Pereira, 1994, pp. 241-242). Los conservadores se dividieron formalmente en 1950, cuando el ala derecha tomó el nombre de Partido Conservador Tradicional. Los conservadores socialcristianos de Walker continuaron cooperando con la Falange durante el gobierno de

González Videla y sirvieron en el llamado gabinete de sensibilidad social (1950-1952). Ambos grupos apoyaron la candidatura del radical Pedro Enrique Alfonso para la presidencia en la elección de 1952, que el general Carlos Ibáñez del Campo ganó por amplio margen.[19] En la elección para el Congreso en 1953, el ala socialcristiana tuvo un mal desempeño, y sólo obtuvo dos diputados, mientras la Falange eligió a tres. Esta última contienda electoral alentó a las dos partes a continuar su colaboración. Ese mismo año fundaron la Federación Social Cristiana, allanando el camino para la fusión de los dos grupos en 1957 y la creación del PDC.

La Falange Nacional pudo establecerse políticamente en los años cincuenta gracias al "terremoto ibañista" producido por el abrumador triunfo del ex dictador Ibáñez en la elección presidencial de 1952. El "terremoto" fue un grave revés para el Partido Radical, y lo sacó del poder por primera vez desde 1938. No obstante, Ibáñez carecía de una base de apoyo organizada. El Partido Agrario Laborista (PAL), que había apoyado a Ibáñez en la elección presidencial y que fue el principal beneficiario de las elecciones para el Congreso en 1953, nunca logró consolidarse. En cambio, favorecidos por la creciente fuerza del liderazgo y de la candidatura presidencial de Frei, los democratacristianos surgieron como una nueva alternativa. En 1957 Frei fue elegido al Senado por Santiago y obtuvo más votos que ningún otro candidato en el país en ese año.

Ésa era la oportunidad por la cual había luchado durante dos décadas el PDC, y el partido triplicó su base de apoyo con respecto a la que tenía cuatro años antes, logrando obtener 17 diputados, es decir, 9.1% de los votos (Nohlen, 1973, cuadro A33). En la elección presidencial de 1958, Frei quedó en tercer lugar, por encima del candidato del Partido Radical. Su base incluyó un amplio apoyo de los trabajadores urbanos y rurales, y de las mujeres y los jóvenes. Significativamente, los democratacristianos también ganaron las elecciones para las más importantes federaciones estudiantiles, lo que les hizo posible reclutar muchos jóvenes para llevar adelante su actividad política.

A finales de los cincuenta y principios de los sesenta el centro político fue bastante amplio, lo que permitió a los partidos definir sus plataformas con gran claridad. Los partidos de la derecha seguían siendo débiles y no eran capaces de ofrecer propuestas novedosas a los nuevos ciudadanos que se incorporaban al sistema político. Fue un tiempo de intensa movilización electoral y los partidos de izquierda eran fuertemente ideológicos, siguiendo orientaciones tanto marxistas como leninistas. Sin embargo, la izquierda no movilizó al campesinado, siguiendo la premisa de que serían los trabajadores urbanos los que llevarían a cabo la revolución. Los jóvenes católicos con sentido social sólo tenían una alternativa: apoyar a los democratacristianos o al Partido Comunista. Generalmente preferían al primero en vista de la importancia de su fe católica.[20] El presidente del PDC en 2000-2001, Ricardo Hormazábal, cuyo padre era un obrero y que había estudiado en escuelas seculares de Santiago, lo expresó sucintamente: "En mi vecindario, uno podía elegir ser comunista o democratacristiano. Elegí al PDC porque fui criado como católico. Cuando era joven viví con mi madre, y ella era una dirigente de las actividades de la Iglesia" (Correa, 2000, p. 2).

Los democratacristianos representaban una promesa de renovación política que

obtuvo el apoyo de profesionistas y académicos reconocidos.[21] Tenían una organización eficiente y cohesiva para llevar a cabo las campañas electorales y un dirigente notable que atraería el apoyo de los independientes. En realidad, Eduardo Frei Montalva se convertiría en uno de los políticos más notables del siglo XX en Latinoamérica.[22] Por otra parte, la derecha carecía de estos tres recursos: no tenía nuevas ideas, sus partidos eran débiles y carecía de una figura comparable a la de Frei. Confiaban en Jorge Alessandri, hombre de negocios independiente e hijo del ex presidente, que en 1968 apenas logró superar al candidato izquierdista, Salvador Allende, en la contienda por la presidencia. En última instancia, el gobierno de Alessandri erosionó a los partidos derechistas porque esencialmente los mantuvo fuera de su administración. En cambio, se basó en personalidades independientes y buscó el apoyo del Partido Radical para aprobar su legislación en el Congreso. Estas condiciones favorecieron el desarrollo del PDC porque ya no tenía que enfrentar a un oponente cohesionado en la derecha. Los democratacristianos ampliaron su base electoral en las elecciones para el Congreso en 1961 y en las elecciones municipales de 1963, cuando el PDC se convirtió en el partido más grande de Chile, ocupando una posición que el Partido Radical había tenido desde 1941.

Es interesante que la victoria de Eduardo Frei Montalva en la elección presidencial de 1964 fuera favorecida por un acontecimiento inesperado. Cuando un candidato socialista por un distrito rural murió y el nuevo candidato socialista, contra todas las predicciones, ganó la elección especial para remplazarlo, los líderes derechistas se aterraron.[23] Inmediatamente abandonaron su alianza electoral con los radicales y dieron su apoyo a Frei para impedir el inminente triunfo de Salvador Allende.

Impulsados por una contienda electoral muy competida y favorecidos por la suerte, los democratacristianos obtuvieron el dominio de la rama ejecutiva en 1964. Al mismo tiempo, no pudieron consolidar la organización del partido porque necesitaban concentrarse en las responsabilidades del gobierno. Hasta ese momento, habían dedicado la mayor parte de sus esfuerzos a desarrollar las estrategias electorales. El PDC había construido una maquinaria electoral efectiva, pero una organización débil. Sólo un puñado de hombres constituía la directiva del partido, y el PDC creció rápidamente, con poco tiempo para establecer bien su organización antes de asumir la responsabilidad de gobernar. Las nuevas responsabilidades del PDC eran grandes, en especial porque había decidido gobernar solo, confiando en el amplio apoyo electoral que había recibido. Dentro de este nuevo ambiente político, el partido carecía de adaptabilidad, y esto debe tenerse en cuenta cuando se analizan los problemas que enfrentó posteriormente el gobierno de Frei Montalva. La institucionalización del PDC no se había completado.

Por lo tanto, según la tipología de Mair (1997, cap. 5), el PDC siguió un curso histórico diferente del de sus contrapartes europeas. Los partidos democratacristianos primero pasaron por la fase del *partido de masas*, durante la cual establecían sólidas bases sociales que les proporcionaban recursos institucionales para obtener un gran número de miembros, una base electoral estable y una organización del partido con líderes que habían tenido largas carreras políticas. En Chile, los democratacristianos no pasaron por

ninguna fase preparatoria antes de convertirse en un partido de masas. En cambio, pronto lograron serlo, después de un prolongado periodo como *partido separado* cuyos organizadores eran sobre todo estudiantes y profesionistas universitarios. Además, en Europa, los democratacristianos se consolidaron como partido después de que el derecho de votar se amplió a la clase obrera urbana, lo que hizo que funcionaran en un ambiente político mucho menos turbulento. En especial en Italia y en Alemania pudieron desarrollar su capacidad de organización para atraer votantes laicos —después de que la secularización debilitó la influencia de la religión en la conducta electoral— y a la postre se convirtieron en partidos de amplia base popular. En Chile, el éxito electoral del PDC los llevó a un crecimiento espectacular, y los democratacristianos les arrebataron votantes al Partido Nacional Popular, a un sector del Partido Agrario Laborista y a los conservadores social-cristianos. El PDC representó una alternativa nueva en un momento de rápida ampliación de la ciudadanía política para las clases obreras urbanas, pero especialmente para las rurales. Esto ocurrió a finales de los años cincuenta y en especial después de 1962, cuando se hizo obligatorio el registro electoral para los votantes.

En las elecciones para el Congreso en 1965 continuó el crecimiento electoral del PDC. En 1961, el partido había ganado 16% del voto; este total subió a 43.6% cuatro años después, cuando el PDC eligió 82 de 142 candidatos a la Cámara de Diputados (cuadro V.2) y a sus 12 candidatos en la elección para el Senado, incluyendo los tres para Santiago.

Antes de 1964, los presidentes chilenos habían sido elegidos por grandes márgenes y lograban conservar su apoyo en una siguiente elección para el Congreso. No obstante, esta base de apoyo nunca fue sólida, porque los alineamientos más permanentes inevitablemente resurgían y el presidente perdía terreno, como fue el caso de Ibáñez en 1952 y 1953.[24] En 1966, los democratacristianos subestimaron la capacidad de la derecha para recuperarse. Ese año la derecha se reagrupó fundando el Partido Nacional, que incorporó al partido de extrema derecha Acción Nacional. Los democratacristianos también subestimaron a la izquierda, que se había visto fortalecida cuando el Partido Radical se inclinó a la izquierda en un esfuerzo por recuperar su antiguo espacio político.

CUADRO V.2. *Resultados de las elecciones para la Cámara de Diputados, 1925-1973*

Partido	1925	1932	1937	1941	1945	1949	1953	1957	1961	1965	1969	1973
Conservadores	19.8	17.0	21.3	17.2	23.6	21.1	10.1	13.7	14.7	5.3	20.4	21.1
Liberales	32.4	18.3	20.7	14.0	17.9	18.0	10.9	15.4	16.6	7.5	—	—
Radicales	21.4	18.1	18.6	20.7	20.0	21.7	13.3	21.5	22.2	13.7	13.6	3.6
Democracia cristiana	—	—	—	3.5	2.6	3.9	2.9	9.4	16.0	43.6	31.0	28.5
Socialistas	—	6.8	11.2	16.8	12.8	9.3	14.2	10.7	11.2	10.6	15.0	18.4
Comunistas	—	1.0	4.2	14.6	10.2	—	—	—	11.8	12.7	16.7	16.2
Otros	26.4	38.8	24.0	13.2	12.9	24.4	41.6	24.4	7.5	6.6	3.3	12.2

NOTA: En 1925 los demócratas obtuvieron 22.3%, pero no los hemos separado a causa de su falta de continuidad histórica en el sistema de partidos. En 1932 los ibañistas obtuvieron 10.1%, los demócratas 6.1% y el Partido Democrático 7.6%. En 1937 los demócratas obtuvieron 4.9% y el Partido Democrático 4.5%. En 1941 el Partido Democrático obtuvo 4.2%. En 1945 el Partido Democrático obtuvo 4.8%. En 1949 el Partido Agrario Laborista obtuvo 8.3%. Entre 1949 y 1957 el Partido Comunista estuvo proscrito y no participó. En 1953 el Partido Agrario Laborista obtuvo 18.9%. En 1957 el Partido Agrario Laborista obtuvo 7.8% y los demócratas 5%. En 1966 los liberales y los conservadores se unieron en el Partido Nacional, que lanzó candidatos en las elecciones para el Congreso en 1969 y 1973.

FUENTE: Nohlen (1973: cuadros A33 y A34), según los resultados de la Oficina del Registro Electoral.

LOS DEMOCRATACRISTIANOS Y SU PAPEL EN EL SISTEMA DE PARTIDOS HASTA 1973

La interpretación predominante sobre el papel de los democratacristianos en el desplome de la democracia en 1973 se concentra en su papel como partido centrista. Varios autores han criticado el desempeño del PDC como partido centrista tildándolo de rígido y exclusivo, como el que rompió la tradición de negociación y compromiso que había dominado la política chilena bajo el liderazgo del Partido Radical. Se cree que la posición del PDC dañó gravemente los fundamentos de la democracia chilena. Inspirados por la opinión crítica de Sartori sobre el centro en su análisis original del pluralismo polarizado,[25] que finalmente modificó para convertirlo en una interpretación más positiva en su libro de 1976, *Parties and Party Systems*, como resultado directo de la experiencia chilena,[26] algunos analistas acusan al PDC de haber causado las tendencias centrífugas que debilitaron gravemente la estabilidad democrática. Scully argumentó constantemente en favor de un punto de vista más positivo del centro de los papeles de los partidos Radical y Demócrata Cristiano, concluyendo que "un estudio de más de 12 décadas de competencia política en Chile indica que podría ser necesario un centro para actuar como intermediario entre los extremos para mantener el sistema de partidos. El centro puede actuar como mediador entre los extremos, absorbiendo los posibles impactos sobre el

sistema que provienen de ambos polos" (1992, p. 9).

La crítica al papel centrista del PDC no considera las diversas fuerzas que estaban operando por entonces, y sólo en parte estudia las causas subyacentes en las tensiones que había en el sistema de partidos en los años sesenta. Daalder ha sostenido que también los partidos izquierdistas pueden generar tendencias centrífugas que, además, pueden quitarle votos al centro. Tanto el Partido Comunista Italiano como los socialistas holandeses han tenido mucho éxito en esto, pues abandonaron su posición anticlerical para captar votos de centristas que habían logrado movilizar primero los democratacristianos (Daalder, 1984, p. 103).

Segundo, esta interpretación sólo ofrece un punto de vista parcial del desarrollo político de Chile y no toma en cuenta las importantes fases de conflicto y represión que caracterizaron a la política chilena en los años en que predominaba el compromiso político. Fue el pragmático y conciliador Partido Radical el que prohibió y persiguió a los comunistas con la Ley en Defensa de la Democracia en 1948, iniciativa a la que se opusieron los democratacristianos. Bajo los radicales, se mantuvo a los comunistas en campos de concentración, como el que se encontraba en Pisagua.[27] Muchos fueron obligados a salir al exilio, entre ellos Pablo Neruda, al que se privó de su curul en el Senado por medio de una indignante campaña. Los derechos políticos sólo se recuperaron en 1958, cuando esa infame ley fue derogada.

Tercero, la política de cooperación políticamente oportunista de las élites del partido tuvo un alto costo para el Partido Radical, y contribuyó en última instancia a su debilitamiento y a la modificación de los fundamentos del sistema de partidos. La determinación que tomaron los radicales de cooperar en el Congreso con el gobierno de Alessandri y participar en su gabinete en 1961 tuvo consecuencias negativas para los líderes del partido y motivó su expulsión por sus contrapartes más jóvenes. La situación empeoró en 1963, cuando el Partido Radical forjó una alianza con los partidos derechistas en la elección presidencial del año siguiente. Cuando esta alianza, a la que se conoció como el Frente Democrático, eligió al senador Julio Durán como su candidato, personalidades importantes abandonaron el partido y dieron su apoyo al candidato izquierdista.[28] El Partido Radical sufrió un grave revés en las elecciones de 1965 para el Congreso, pues recibió sólo 13.6% de los votos: una disminución de 8.6% respecto a sus resultados en la elección de 1961. Los escaños radicales en la Cámara de Diputados disminuyeron de 36 a 20. En este contexto, el Partido Radical no estaba en posición de seguir una política de cooperación con el gobierno de Frei, aun si este último la hubiera buscado.

Cuarto, la política de compromiso que los radicales promovían —incluyendo la creación por el gobierno de Aguirre Cerda (1938-1941) de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo)— tuvo elevados costos para el sistema político. El acuerdo esencialmente ratificó la oposición de los partidos derechistas a las uniones campesinas, lo que postergaría por dos décadas la ampliación de políticas sociales más equitativas a este importante sector social.

Finalmente, es posible criticar las interpretaciones existentes más que nada porque

mezclan más de un nivel de análisis: el del estilo de las élites —que se abren o se cierran al compromiso— y el de las tendencias centrífugas o centrípetas de los partidos. Es reduccionista atribuir las causas de la crisis democrática al estilo de las élites, y no es correcto metodológicamente comparar la conducta de las élites sin tener en cuenta las circunstancias en las cuales actuaron. En particular, se debe examinar cada paso en el proceso que amplió el derecho a votar, y saber si el periodo fue de participación limitada o de política de masas. El Partido Radical podía promover una política de negociación y compromiso durante los años cuarenta porque el entorno político era de participación limitada. En 1941, el número de votantes era muy pequeño —575 625—, es decir, 11.2% de la población. En 1949 el número fue incluso menor —541 994—, esto es, 9.1% de la población. (En Uruguay la situación era muy diferente, porque el derecho a votar se había ampliado varias décadas antes.) En Chile, una vez que se les dio a las mujeres el derecho de votar por primera vez en las elecciones para el Congreso en 1949 y en las presidenciales en 1952, el número de electores creció continuamente y con rapidez. En 1953 había más de un millón de votantes registrados. En 1962, el total llegó a 1 858 980, y en 1965 ya era de casi tres millones —2 920 625—, o sea 34% de la población (Nohlen, 1973, cuadro A31). Hasta la reforma constitucional de 1970, promovida por el gobierno de Frei, los chilenos analfabetos no podían votar, aunque eran un sector considerable de la población. En consecuencia, Dahl consideró que, en esos años —junto con los Estados Unidos y Suiza—, Chile carecía de los requisitos necesarios para una verdadera poliarquía (Dahl, 1971, p. 248).

El gran número de votantes en varias elecciones presidenciales es prueba de este notable crecimiento. En 1952 el número de votos fue de 954 121, y en 1958 ascendió a 1235 752. Seis años después, esa cifra se había duplicado a 2 512 147, y en la elección presidencial de 1970 —la última antes de la caída de la democracia— llegó a 2 923 294.

Visto desde una perspectiva comparativa, Chile ha tenido un proceso muy tardío de democratización electoral, en especial si se le compara con Uruguay y Argentina, que pasaron por el mismo proceso en las primeras décadas del siglo XX. Este hecho habría de tener consecuencias negativas para el desarrollo político del país porque la súbita y acelerada expansión del sufragio ejerció enorme presión sobre el sistema político, introduciendo la política de masas en los años sesenta. Sin duda, los democratacristianos promovieron la ampliación de la ciudadanía porque era una forma en la que ellos ampliarían su base electoral. A la vez, no debe culparse únicamente de este fenómeno a las tendencias electorales centrífugas que fueron prominentes en la década de 1960.

El presidente Alessandri alentó las tendencias centrífugas con discursos en el Congreso contra los partidos y en favor de un jefe de Estado con amplios poderes. Condenó las prácticas parlamentarias que procuraban establecer alianzas, tildándolas de expresión de intereses especiales dañinos para el bien común. El presidente excluyó a los conservadores y liberales de los cargos públicos en su administración, privándolos de los recursos económicos y políticos necesarios para avanzar en las elecciones de 1961 para el Congreso. Como resultado, sólo con gran dificultad conservaron su poder electoral y perdieron escaños en la Cámara de Diputados. Simultáneamente, Alessandri buscó la

cooperación con el Partido Radical, primero en el Congreso y después cuando los invitó a unirse a su gabinete, luego de perder su "tercera parte" del Congreso (conocida como *el tercio parlamentario*) en las elecciones de 1961. Los constantes discursos de Alessandri contra el Congreso y los partidos no eran nada menos que un cuestionamiento de las propias instituciones democráticas. Algunos intelectuales de derecha continuarían criticando a la democracia en años posteriores y acabarían por formar la élite civil del régimen de Pinochet (Huneeus, 2000, cap. 5).

Los partidos de izquierda, en particular el Partido Socialista, también criticaban la democracia. Algunos líderes izquierdistas admiraban la Revolución cubana y se indignaron después de la tercera derrota electoral de Allende en 1964 a manos de los democratacristianos. El Partido Socialista adoptó en los años siguientes una posición cada vez más adversa al sistema, con un discurso ambivalente respecto a la lucha armada. Esto explica por qué los socialistas no condenaron el intento de golpe de Estado o "tacnazo" de finales de 1969, en que el general Roberto Viaux se puso al frente de un regimiento clave del ejército, desencadenando una crisis política. Un senador llegó hasta a expresar su apoyo personal al general Viaux e incluso visitó el regimiento. El Partido Socialista adoptó un discurso revolucionario y su política consistió en rechazar todas las iniciativas del gobierno. Aniceto Rodríguez, secretario general del Partido Socialista, manifestó lo anterior cuando declaró que "negaría al gobierno de Frei la sal y el agua" en respuesta a la "campaña de terror" de la derecha durante la elección presidencial de 1964.

Por lo tanto, las fuerzas centrífugas que predominaron durante los años sesenta y hasta la caída de la democracia en 1973 ya existían *antes* de que Frei llegara al poder. Varios actores ayudaron a liberar esas fuerzas, entre ellos los democratacristianos. Los resultados de este proceso no sólo dañaron al PDC, sino a todo el sistema político.

LOS DEMOCRATACRISTIANOS Y LA INFLUENCIA DEL PRESIDENCIALISMO

A pesar de que las democracias de Latinoamérica tienen regímenes políticos presidenciales, el efecto del presidencialismo sobre los partidos —y sobre los partidos en el gobierno en particular, tanto antes como después del nuevo "autoritarismo"— no ha sido estudiado sistemáticamente. En años recientes el análisis se ha concentrado en las fuerzas y flaquezas del sistema presidencial en comparación con el parlamentarismo, análisis en que Juan Linz ha tenido un importante papel.[29] Los jefes de Estado disfrutan de amplia autoridad y de extensos poderes que les dan un papel decisivo en la conformación del desarrollo de los partidos durante sus gobiernos.

Dada la naturaleza del sistema presidencial, la relación entre el gobierno y el partido o los partidos en el gobierno no es fácil, como lo ejemplifica el caso del PDC de 1964 a 1970. Por el contrario, en los sistemas parlamentarios la relación es más fácil porque el jefe del gobierno y el partido en el gobierno son uno y el mismo. El primer ministro

puede recurrir a los líderes del partido para que trabajen en su administración; es capaz de disciplinar a los miembros del Parlamento y asegurar que el debate dentro de los organismos de deliberación y de toma de decisiones opere de acuerdo con las políticas del gobierno. Como los ministros son también miembros del Parlamento, deben estar activos en la organización del partido.[30] Deben entender los desafíos de la política electoral y ser sensibles al efecto que la política del gobierno pueda tener en el apoyo de los electores, porque ellos mismos dependen de los resultados de la elección para obtener un lugar en la legislatura.

En un sistema presidencial la situación es distinta. El presidente puede ganar una elección con o sin el apoyo de su partido. Puesto que el presidente disfruta de una legitimidad propia, no necesita preocuparse mucho por la condición del partido. Delega la acción de disciplinar a los miembros del Congreso a los integrantes de su gabinete o a los líderes veteranos del Congreso. A los miembros del gabinete se les recluta por su preparación profesional y pueden carecer de antecedentes en el partido; como consecuencia, no conocen las sensibilidades de los líderes del partido ni están familiarizados con las complejidades de la lucha electoral y política. Ven con desconfianza las demandas del Congreso porque éstas corresponden a intereses muy específicos que pueden impedir alcanzar los objetivos de los programas del gobierno. A su vez, los miembros del Congreso se mantienen alejados de los miembros del gabinete, a los que consideran tecnócratas rígidos. Por lo común, apenas comprenden las complejidades que hay en una toma de decisiones que pueden causar que la política se aplique con lentitud.

A pesar de que Eduardo Frei Montalva tenía una larga carrera política en la que participó en la creación de un partido político moderno y poderoso, no se preocupó por la situación del partido en los primeros años de su gobierno. Una vez en el poder, un gran número de profesionistas se unió al gobierno, y personalidades locales de menor fama se agregaron a las listas de candidatos para el Congreso en las elecciones de 1965. La importancia del trabajo del gobierno y el gran número de cargos que había que ocupar hizo que los miembros mejores y más brillantes del partido fueran a la rama ejecutiva. Con unas cuantas excepciones, los líderes de nivel medio y los funcionarios de bajo nivel del partido fueron reclutados para el Congreso, al que le faltaban políticos capaces. Sólo 21 de los 82 democratacristianos elegidos para la Cámara de Diputados en 1965 habían estado antes en el Congreso, por lo que pocos tenían la experiencia necesaria para llevar a cabo con eficiencia el trabajo legislativo. No es sorprendente que la mayor oposición interna al gobierno del presidente Frei haya provenido de la rama legislativa.

Aunque algunos de los ministros de Frei habían participado en la política partidista y después servido en el Congreso —entre ellos Bernardo Leighton y Juan de Dios Carmona, que fueron ministros del Interior y de la Defensa, respectivamente—,[31] los miembros del gabinete característicamente tenían preparación técnica o eran profesionistas independientes. Dos ejemplos incluyen al ex rector de la Universidad de Chile Juan Gómez Millas y al decano de la Escuela de Economía de la universidad, Sergio Molina. Fueron nombrados en un esfuerzo por dar alguna diversidad a la

administración de Frei, aunque la opinión pública todavía consideraba al gobierno como dominio exclusivo de los democratacristianos. En el Congreso sirvieron unos pocos miembros bien conocidos del PDC, entre ellos Renán Fuentealba y Patricio Aylwin.

Frei disfrutó de una gran mayoría en la Cámara de Diputados, pero no pudo obtener una mayoría en el Senado porque, de conformidad con la ley electoral chilena, sólo la mitad de las curules del Senado estaban en juego en la elección de 1965. Esta situación debilitó considerablemente el poder de Frei, porque necesitaba del Senado no sólo para aprobar las leyes sino también para designar embajadores y altos oficiales de las fuerzas armadas. Por lo tanto, Frei dependía mucho de los senadores de su partido. Aunque conocía bien el Senado porque sirvió en él desde 1949, Frei no creó las condiciones necesarias para establecer una base de apoyo sólido en el Senado. En cambio, buscó acuerdos *ad hoc* —a veces con el Partido Radical, cuando nombraba embajadores, y otras veces con la izquierda— sobre la reforma agraria. Estos acuerdos requerían negociaciones largas y complicadas con los miembros de la oposición en el Congreso y obligaron a Frei a hacer concesiones en los programas del gobierno que retrasaban o impedían su puesta en vigor. El Senado se convirtió en el principal escenario institucional de la oposición y, a veces, el PDC era vapuleado por sus contendientes, tanto de la izquierda como de la derecha. Esto llegó a su apogeo en enero de 1967, cuando el Senado le negó al presidente Frei la aprobación constitucional para realizar un viaje a los Estados Unidos (*Ercilla*, 1967).

Frei había considerado al PDC como un partido que tomaría el control del gobierno y le serviría como su principal apoyo, pero, a final de cuentas, simplemente lo consideró una maquinaria electoral. Frei había sido el principal promotor del crecimiento electoral del partido, y sus principales colaboradores compartían esta orientación. Su posición se parecía a la de Adenauer frente a la Unión Democrática Cristiana (UDC) en Alemania, pero la comparación con Adenauer no fue favorable a Frei, pues Adenauer conservó a la UDC como una eficiente maquinaria electoral durante sus 14 años como canciller. De 1964 a 1968 el PDC se desarrolló como una entidad con sus intereses propios. Sus líderes discutían sobre los programas, pero sus facciones estaban tan divididas por diferencias ideológicas que los altos funcionarios del gobierno a menudo se veían obligados a intervenir.[32]

La disidencia dentro del partido empezó a notarse relativamente pronto, y los detractores de Frei intentaron adueñarse de la dirección del partido para obligarlo a cambiar sus políticas. Justificaban su crítica en términos ideológicos, mostrando simpatías al marxismo, lo que desencadenó un nivel de conflicto en el PDC que lo dañaría no sólo internamente, sino también ante la opinión pública. Fue un periodo traumático en la historia del partido, y la experiencia explica la disposición de los democratacristianos a cooperar y comprometerse durante los primeros años de la dictadura y de la posterior democracia. Al senador Alberto Jerez, uno de los primeros líderes de los disidentes conocidos como los “rebeldes”, sólo le faltaron unos cuantos votos para ser elegido presidente del partido en la convención nacional de julio de 1965, que ganó Patricio Aylwin con ayuda de la llamada facción *tercerista*. Los líderes de los “rebeldes” eran en

su mayor parte miembros del Congreso.[33] Encontraron un importante apoyo entre los miembros más jóvenes del partido, que llegaron a dominar la Juventud Demócrata Cristiana (JDC) en 1966.[34] Los disidentes moderados y conciliadores conformaban a los terceristas. La facción más notable de sus miembros incluía al senador Fuentealba, presidente del PDC durante la campaña presidencial de 1964, y a altos funcionarios del gobierno, en especial del Ministerio de Agricultura, que tenía a su cargo aplicar la reforma agraria. Frei contaba con el apoyo constante y decisivo de los "oficialistas", entre los que estaban sus ministros y numerosos miembros del Congreso.

Los "rebeldes" criticaron profundamente el desempeño del gobierno y en mayo de 1969 rompieron con los democratacristianos y crearon el MAPU, que después formó parte de Unidad Popular. En 1971, algunos miembros de la facción tercerista también abandonaron al PDC y crearon la Izquierda Cristiana, junto con los "rebeldes adultos" que renunciaron al MAPU. La Izquierda Cristiana también se unió al gobierno de Unidad Popular. No haber intervenido en el momento oportuno para contener el conflicto entre el PDC y el gobierno fue uno de los errores más graves de Frei.

Como presidente, Patricio Aylwin recordaría más tarde la conflictiva relación entre los democratacristianos y el gobierno de Frei Montalva. Él tuvo especial cuidado de asegurar que el PDC y otros partidos de Concertación participaran plenamente en el cumplimiento de las obligaciones del gobierno. Esto era necesario para que los líderes y militantes del partido se sintieran comprometidos a apoyar los programas del gobierno, ya fuera que éstos tuvieran resultados positivos o negativos. Aylwin tenía conocimiento directo de las idiosincrasias organizativas y personales del partido porque era quien había servido por más tiempo y con más frecuencia como su presidente. Había experimentado directamente las dificultades del partido con el gobierno de Frei Montalva porque fue presidente del PDC de julio de 1965 a julio de 1967. Aylwin defendió la política del gobierno con energía e inteligencia, y pasó a ser el principal vocero de los "oficialistas".

Para ejercer un liderazgo que incluyera a miembros de todos los partidos en la coalición gobernante, como presidente, Aylwin suspendió su participación como miembro en el PDC, pero mantuvo una relación fluida con los líderes y miembros democratacristianos del Congreso. Su vieja amistad con Andrés Zaldívar, que sucedió a Aylwin como presidente del PDC en 1977 y en 1989 y permaneció en el cargo hasta 1992, facilitó esta relación. Los principales ministros de Aylwin eran líderes activos del PDC, en especial durante la dictadura, y entendían la sensibilidad de los miembros del partido. Enrique Krauss, ministro del Interior de Aylwin, había sido el director de campaña de Radomiro Tomic en 1970, así como congresista en 1973 y miembro del consejo nacional del partido durante el régimen militar. Edgardo Boeninger, quien fue secretario general de la Presidencia en el gabinete de Aylwin y ex rector de la Universidad de Chile, se unió al PDC después del golpe militar. Participó activamente en la realización de varios programas y se convirtió en vicepresidente en 1987, cuando Aylwin fue elegido presidente del partido. El ministro de Finanzas, Alejandro Foxley, había estado activo en la democracia cristiana desde sus días de universitario. Foxley era presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica en Valparaíso; desde finales de los sesenta fue

miembro de la comisión técnico-política del PDC y escribió el programa económico y social para la campaña presidencial de Tomic en 1970. Durante la dictadura participó activamente en el partido y fue elegido para el consejo nacional por los miembros del partido. Por lo tanto, Boeninger y Foxley tenían una experiencia política considerablemente mayor que los llamados *tecnopols* (líderes con capacidad técnica y experiencia política) que Domínguez ha analizado en las nuevas democracias (1997, 1998, cap. 4). Entendían las idiosincrasias del partido más grande de la coalición gobernante, así como la negociación y los compromisos que se realizaban entre los diferentes grupos de poder del partido.

El sucesor de Aylwin, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, mostró una actitud diferente hacia los partidos y hacia el PDC. Preparado como ingeniero, siempre había trabajado en el sector privado y era un próspero empresario. En contraste con Aylwin, no provenía de las filas del partido; su experiencia política empezó después de la muerte de su padre en enero de 1982. Había sido presidente de la Fundación Eduardo Frei y participó en el plebiscito de 1988 como miembro de la campaña por una elección libre, que fue dirigida por el ex ministro de Hacienda Sergio Molina, en que participaron personalidades de la derecha y del centro. En las primeras elecciones democráticas para el Congreso, Frei Ruiz-Tagle fue elegido senador por uno de los dos distritos de Santiago por un gran margen. En 1992 lo eligieron presidente del partido, y fue el candidato de los democratacristianos en la elección presidencial de 1993. Apoyado por el considerable prestigio de su padre y por un PDC firme, Frei derrotó fácilmente a Ricardo Lagos en la primaria de Concertación, demostrando habilidades políticas que hasta entonces no le habían reconocido sus competidores políticos del PDC y de los partidos izquierdistas. Lagos, candidato del Partido Socialista y del PPD en la primaria, ganó 39% del voto en comparación con 60% de Frei. Éste ganaría posteriormente la elección presidencial por amplio margen, obteniendo 57.98% de los votos reconocidos oficialmente.

Persona reservada y tranquila, el presidente Frei mantuvo una relación distante con los líderes de los partidos de Concertación, incluyendo a los de su propio partido, y con los miembros del Congreso. Su estilo de gobernar obligó al ministro del Interior, al secretario general de la Presidencia y al secretario general de Gobierno (estos dos últimos cargos a nivel del gabinete en Chile) a ocuparse de las relaciones con el partido. Empero, los ministros de Frei no podían llenar el vacío dejado por el descuido del presidente. En septiembre de 1994 Frei nombró a su segundo ministro del Interior, el democratacristiano Carlos Figueroa. Éste había sido miembro del gabinete en el gobierno de Frei Montalva y asumió importantes responsabilidades en la campaña presidencial de 1989, pero nunca había ocupado posiciones de líder en el partido. Genaro Arriagada, secretario general de la Presidencia, había llegado al PDC desde el Partido Radical. Estuvo activo políticamente en el PDC durante la oposición al régimen de Pinochet, sirvió como secretario ejecutivo del "Comando por el No" en 1988 y fue secretario nacional cuando Eduardo Frei Ruiz-Tagle ocupó la presidencia del PDC en 1992-1993. Arriagada permaneció en ese cargo sólo por breve tiempo. Eduardo Aninat, el ministro de Hacienda de Frei durante seis años, había sido un miembro no activo del PDC y tenía débiles relaciones personales con

los líderes del partido y los congresistas de éste. En resumen, Frei cometió el mismo error que su padre antes que él: no le prestó atención al partido.

Los democratacristianos mantuvieron una relación estrecha y cooperativa con los radicales durante el gobierno de Aylwin, pero no durante el de Frei. Como consecuencia, un subgrupo del Partido Radical pudo cambiar su apoyo a la candidatura de Ricardo Lagos para encabezar Concertación. Esta decisión puede explicarse en parte por el hecho de que Lagos había sido miembro del Partido Radical hasta 1961, y en parte porque los democratacristianos no fortalecieron su relación con este partido centrista clave. De haberlo hecho, habrían podido ampliar su influencia dentro de la coalición gobernante y preparar mejor a un democratacristiano para ser el tercer candidato presidencial de Concertación.

Como presidente de Chile, Ricardo Lagos ha incluido al PDC en su gobierno, designando a siete democratacristianos como ministros. Esto es comparable al número de ministros del Partido Socialista y del PPD e incluye, entre otros, a los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, así como al secretario general de Gobierno.[35] Lagos ha desarrollado relaciones directas con los líderes del PDC, en particular con los diputados y senadores. Simultáneamente, la decisión de Lagos a finales del año 2000 de terminar con la carrera de un joven ministro democratacristiano, Claudio Orrego Larraín, y remplazarlo por Jaime Ravinet fue considerada inoportuna. Ravinet, que fue alcalde de Santiago de 1990 a 2000, también es demo-cratacristiano.

EL PDC EN LA NUEVA DEMOCRACIA

Cuando la democracia retornó a Chile en 1990, el nuevo sistema de partidos representó tanto el cambio como la continuidad.[36] Tres de los principales partidos históricos —los democratacristianos, los radicales y los socialistas— resurgieron. Nuevas agrupaciones también aparecieron en el centro-izquierda, incluyendo al PPD, y en la derecha, entre ellos la UDI y Renovación Nacional (RN). El Partido Comunista Chileno —que era el tercero por su tamaño en el Occidente, después de los partidos italiano y francés— se redujo considerablemente y no eligió un solo candidato al Congreso.[37] Cuando la derecha obtuvo 43.2% de los votos en las primeras elecciones democráticas para el Congreso en 1989 —superando por mucho el 21.1% que el Partido Nacional había obtenido en 1973— demostró lo mucho que se había beneficiado la derecha por la dictadura. Volveremos a tratar el punto más adelante en este capítulo.

La continuidad del sistema político de partidos chileno fue un notable logro, en especial si se considera que el régimen militar había propuesto eliminar a los partidos históricos y establecer los fundamentos de una nueva política que sería distinta de la democracia occidental. La democracia protegida y autoritaria de Pinochet obtendría su apoyo de un nuevo partido que representaría a los diferentes grupos de poder que apoyaban al régimen. Se suponía que este nuevo partido obtendría un amplio apoyo electoral.

El PDC sufrió importantes cambios durante los años del gobierno militar. Primero, los democratacristianos abandonaron la estrategia política que habían seguido desde la fundación del partido en 1957, conocida como el *camino propio*. Dicha estrategia llevó a que el PDC gobernara solo de 1964 a 1970, que enfrentara una oposición cada vez más fuerte y que asumiera toda la responsabilidad por el desempeño del gobierno. Con el paso del tiempo, el PDC abandonó esta estrategia y promovió la cooperación gradual con otros partidos, primero con los radicales y después con los partidos y organizaciones izquierdistas, incluyendo al Partido Socialista. El primer paso importante en esta dirección fue la creación en 1978 del Grupo de Estudios Constitucionales, también conocido como "Grupo de los 24", el cual reunió a personalidades del centro y de la izquierda. En 1983 dio un importante paso adelante, pues unió a partidos políticos —en especial a los partidos Radical y Socialista— y dio origen a la Alianza Democrática, que cuatro años después se convirtió en Concertación.[38] El PDC también realizó cambios en la élite de su dirección, incorporando académicos de las universidades y de los centros independientes de investigación de las ciencias sociales.[39] Sin duda, los democratacristianos pudieron mantener su continuidad de liderazgo porque sufrieron mucho menos represión que los partidos izquierdistas. El exilio de varias personalidades distinguidas, tanto antes como después del plebiscito de 1980 —incluyendo a Bernardo Leighton, Renán Fuentealba y Andrés Zaldívar, que era el presidente del PDC—, no dañó mucho al partido.

Como partido centrista, el PDC se enfrentaba a una competencia bilateral y tenía que competir con partidos tanto de dentro como de fuera de Concertación —incluyendo al Partido Socialista, al PPD y, en menor grado, al debilitado Partido Radical (llamado ahora Partido Radical Socialdemócrata [PRSD])— y de la derecha, entre ellos la UDI y la RN. La competencia se intensificó porque el PDC había pagado directamente los costos de la transición y soportado las mayores críticas al sistema económico, pues los ministros de Hacienda habían sido democratacristianos. El hecho de que el presidente también fuera democratacristiano no le confería ninguna ventaja política o económica especial. Tanto Aylwin como Frei ejercieron un liderazgo que trascendía su afiliación al partido y procuraron mantener un equilibrio de poder entre los partidos de Concertación. Durante el gobierno de Lagos, el Partido Socialista y el PPD se enfrentaron a una situación similar.

De todos los partidos de Concertación, el PPD es el que ha competido más directamente con el PDC, intentando ubicarse como partido izquierdista moderado para obtener votos de los democratacristianos. El PPD tiene un bajo grado de institucionalización y debe su éxito electoral a la labor de sus miembros en el Congreso, que han solido criticar al gobierno, y en particular a sus miembros democratacristianos. No obstante, en vista de que el liderazgo del PPD es heterogéneo, el partido no ha sido capaz de presentar un conjunto atractivo de propuestas que le permita remplazar al PDC como el partido más importante en Concertación.[40]

La competencia de la derecha ha sido más amenazadora para los democratacristianos. Este hecho representa un marcado cambio con la situación que prevalecía a finales de los años cincuenta y principios de los sesenta cuando, como se indicó antes, los partidos

liberal y conservador estaban débilmente organizados. Ofrecían pocas alternativas políticas y sus líderes habían perdido confianza en las posiciones de los partidos. La nueva derecha tenía un liderazgo compuesto por jóvenes cuya participación en el régimen militar les ha dado una considerable experiencia política. La derecha disfruta del apoyo económico del sector privado y, lo que no es menos importante, tiene un líder con prominencia nacional, Joaquín Lavín, que en las elecciones presidenciales de 1999 logró superar a todos los derechistas anteriores y obtuvo casi tantos votos como el candidato de Concertación.

En la segunda mitad de la década de 1990 los democratacristianos han demostrado una incapacidad notoria para enfrentar los nuevos desafíos de la democratización. La prueba más clara de esta debilidad fue la declinación electoral del partido: perdió 4.1 puntos porcentuales en las elecciones para el Congreso en 1997, recibiendo sólo 23% de los votos (cuadro V.3). En esa misma contienda electoral, otros partidos de Concertación mantuvieron su parte del electorado, lo que sugiere que el PDC ha sido castigado por su desempeño como partido gobernante y por relaciones internas conflictivas. La derecha, y en particular la UDI, mejoró su posición, aumentando su participación en los votos 2.2 puntos porcentuales, a 17.2%. En las elecciones de 1989 varios candidatos de las alas derechista e izquierdista compitieron como "independientes" debido a dificultades en la organización del partido, pero éste no fue el caso de los democratacristianos, que pudieron integrar una planilla compuesta por miembros activos del partido.

CUADRO V.3. *Porcentaje de los votos obtenidos por los diputados en 1989, 1993, 1997 y 2001, por partido*

Año	*PDC*	*Partido por la Democracia (PPD)*	*Partido Socialista*[a]	*Partido Radical (PRSD)*	*Renovación Nacional*	*UDI*	*Derecha independiente*[b]	*UCC*[c]	*Verdes*[d]	*Humanistas*	*Partido Comunista*[e]	*Otros*[f]
1989	26.6	11.5	9.1	3.9	19.5	14.5	0.2	—	0.2	0.8	5.3	7.1
1993	27.1	11.8	12.5	3.0	17.5	15.0	0.7	3.2	—	1.0	5.0	1.5
1997	23.0	12.9	11.9	3.1	17.6	17.2	1.1	1.2	—	2.9	6.9	1.6
2001	18.9	12.7	10.0	4.1	13.8	25.1	5.3	—	—	1.1	5.2	3.7

[a] En las elecciones de 1989, el Partido Socialista no participó como tal, pero varios socialistas contendieron como candidatos importantes del Partido por la Democracia (PPD) o como independientes en las listas de Concertación. En sentido estricto, su porcentaje debería añadirse al de los independientes de Concertación, pero aquí se contabiliza en la columna del Partido Socialista porque estos candidatos eran socialistas. En 1993 y 1997, los porcentajes que se atribuyen a los socialistas en este cuadro son un poco mayores que los totales oficiales, porque nuevamente incluyen votos por candidatos independientes y del PPD que eran miembros del Partido Socialista.

[b] Independientes de partidos derechistas.

[c] La Unión del Centro Centro (UCC) fue una alianza que en 1993 concertaron para el Congreso Renovación Nacional y la Unión Demócratica Independiente (UDI), lo que explica la significativa cifra que obtuvo en ese momento, en comparación con otros años de elecciones.

[d] En 1993, los Verdes se fusionaron con el Partido Humanista en la Alianza Humanistas-Verdes.

[e] En 1989 fueron las listas del Partido Amplio de la Izquierda Socialista (PAIS) las que obtuvieron este 5.3%, porque el Partido Comunista como tal no presentó candidatos.

[f] En 1989, éstos incluían al Partido del Sur (0.7%), Avance Nacional (0.85%), Democracia radical (0.42%), D-Lista de Independientes (Alianza del Centro, 1.35%; Partido Liberal, 0.69%; Partido Socialista Chileno, 0.15%); E-Lista de Independientes (Socialistas Liberales Unitarios, 2.18%; Partido Nacional, 0.79%), para un total de 7.1%. En 1993, éstos incluían al Movimiento Ecologista, 0.03%, la Alianza Humanistas-Verdes, 1.01%, la C-Lista de Independientes, 0.39%, y la E-Lista de Independientes, 0.1%. En 1997 hubo dos listas de independientes, I y E, con 0.95% y 0.69%, respectivamente. En 2001, éstos incluían al Partido Liberal (0.05%), la E-Lista de Independientes (2.19%) y los independientes que no estaban en ninguna lista (1.41%).

Las encuestas también revelaron el disminuido apoyo al PDC entre los votantes. Durante la transición, los democratacristianos obtuvieron un nivel de apoyo muy alto en las encuestas previas a las elecciones. Haciendo referencia a los colores emblemáticos del partido, los analistas predijeron un resultado abrumador, una “marea azul” en favor del PDC. La avalancha de votos nunca se materializó, tanto porque el partido no fue capaz de captar el voto potencial como porque otros partidos de Concertación advirtieron que una “marea azul” desequilibraría a la coalición gobernante y limitaría su capacidad de actuar.

El apoyo al PDC entre los votantes empezó a debilitarse durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, y especialmente en 1998, cuando Chile experimentó un crecimiento económico más lento por primera vez desde 1985. El apoyo a los democratacristianos disminuyó a 19% en septiembre de 1998, y continuó declinando hasta llegar a 15% en junio de 1999. En tres de cuatro encuestas realizadas en el 2000 los totales fueron los mismos. Entre los jóvenes, la popularidad de la democracia cristiana es muy baja, y se la midió en 5% en diciembre de 2000 (cuadro V.4), en notorio contraste con su atracción entre este grupo antes de 1973 y durante los ochenta.

La decadencia electoral de los democratacristianos afectó la oportunidad de que el tercer candidato presidencial de Concertación perteneciera al partido. Las primarias abiertas para elegir al candidato de la coalición gobernante se realizaron el 30 de mayo de 1999, enfrentando a Ricardo Lagos del PS-PPD con Andrés Zaldívar del PDC. Ambos candidatos en la primaria hicieron campaña activamente en todo el país, y el interés de los ciudadanos fue elevado y hubo una intensa publicidad en todos los medios

informativos.[41] El PDC no pudo presentar argumentos adecuados para justificar la razón de que otro de sus líderes fuera el tercer candidato presidencial de Concertación. Lagos, por otra parte, arguyó a favor de un "cambio" y "alternancia" en la coalición de gobierno, lo que le permitió quitar votos a los democratacristianos. A principios de abril de 1999, 24% de los votantes del PDC que habían dicho que participarían en las primarias expresaron su intención de votar por Lagos. Según las encuestas, este porcentaje aumentó a 28% el día de la elección. El aumento se explica porque la candidatura de Zaldívar carecía de atractivo; en vez de delinear propuestas programáticas concretas, concentró su campaña en la idea de que los democratacristianos podían ofrecer al país mayor seguridad que el PS-PPD. Al actuar así hizo una sutil referencia al papel de la izquierda en los conflictos del inicio de los años setenta, irritando tanto a los líderes del Partido Socialista como a algunos democratacristianos. Unos delegados del partido pidieron a la derecha que votara por Zaldívar, irritando a ciertos sectores del partido que preferían que el PDC ganara sin ninguna ayuda de la derecha. Lagos terminó ganando la primaria por amplio margen, obteniendo 986 508 votos (es decir, 71.35%) contra 395 821 (28.66%) de Zaldívar.

CUADRO V.4. *Intención del voto democratacristiano, 1990-2001, porcentajes por edad*

	Edad (años)				
Fecha	*18-24*	*25-40*	*41-60*	*61 y más*	*Total*
Abril de 1990	20	44	54	45	44
Marzo de 1991	35	37	48	44	40
Marzo de 1992	26	27	33	30	29
Marzo de 1993	25	34	39	35	33
Octubre de 1993	28	29	33	25	36
Abril de 1995	22	29	33	25	28
Junio de 1995	24	28	33	29	29
Septiembre de 1995	33	27	30	35	30
Diciembre de 1995	23	27	28	33	27
Marzo de 1996	25	20	29	38	26
Junio de 1996	20	25	29	29	25
Septiembre de 1996	17	24	26	33	24
Diciembre de 1996	17	19	21	23	19
Marzo de 1997	19	23	30	29	25
Junio de 1997	18	25	25	26	21
Septiembre de 1997	17	22	30	24	23
Marzo de 1998	17	20	27	32	23
Junio de 1998	16	21	26	23	21
Septiembre de 1998	16	20	18	24	19
Diciembre de 1998	18	17	18	29	19
Marzo de 1999	11	18	24	31	20
Junio de 1999	11	12	18	22	15
Septiembre de 1999	13	14	17	19	15
Diciembre de 1999	11	17	23	24	19
Mayo de 2000	12	14	15	17	15
Julio de 2000	11	16	21	21	18
Septiembre de 2000	9	15	15	21	15
Diciembre de 2000	5	13	17	20	15
Abril de 2001	13	14	14	15	14
Julio de 2001	6	18	18	20	17
Septiembre de 2001	10	10	10	15	11
Diciembre de 2001	6	14	11	12	12

NOTA: La pregunta fue: "Si se celebraran elecciones para el Congreso el próximo domingo, ¿por qué partido votaría usted?"

FUENTE: Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea (CERC).

La campaña presidencial afectó también de otras maneras al PDC. Otros miembros independientes del partido no dieron su apoyo a Ricardo Lagos, sino al candidato de la derecha, el anterior alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín. Éste organizó una muy buena campaña al atraer los votos centristas, quitándoselos a Concertación y controlando la base electoral del PDC. Su estrategia incluyó un cuidadoso esfuerzo por distanciarse del régimen militar y de Pinochet, quien se irritó por estas acciones. Lavín llevó a cabo una campaña electoral moderna y dinámica con el apoyo de un numeroso grupo de activistas pagados, de la prensa impresa y de dos importantes canales de televisión. Las encuestas preelectorales mostraron que 16% de los votantes democratacristianos dijeron que su intención era votar por el candidato derechista, y esta cifra aumentó a 19% en las

encuestas realizadas dos semanas antes de la primera vuelta electoral. En la encuesta hecha después de las elecciones en abril de 2000, 77% de los democratacristianos dijeron que habían apoyado a Lagos, en tanto que 16% dijo que había votado por Lavín.

La capacidad de Lavín para ganar votos del PDC no fue un fenómeno temporal. Más bien tuvo consecuencias a largo plazo, como se pudo ver en las elecciones municipales de octubre de 2000, cuando el anterior candidato presidencial contendió por la alcaldía de Santiago contra la esposa del anterior presidente Frei Ruiz-Tagle, Marta Larrachea. Lavín ganó por un margen sorprendentemente grande, obteniendo 61% del apoyo de los votantes frente a 19.17% que obtuvo Larrachea. Tal fue un fuerte golpe político para Frei, que había esperado empezar a allanar el camino para su reelección en 2005.

Los resultados obtenidos por la derecha merecen analizarse, porque no fue cualquier cosa para los democratacristianos encontrarse compitiendo con partidos de esta orientación. En Alemania, la CDU nunca se enfrentó a este tipo de desafíos. Aunque es cierto que la derecha chilena tiene dos partidos, sólo la UDI ha tratado explícitamente de ganar votos democratacristianos para hacer que este partido desaparezca. Su éxito en las elecciones presidenciales y municipales demuestra que ha logrado importantes avances en esta dirección. La UDI es un poderoso adversario, con una organización sólida que incluye gran número de miembros activos entre la clase obrera urbana. Fue fundada en 1983 por Jaime Guzmán, que en 1966 creó el Movimiento Gremial, o *gremialismo*, en la Universidad Católica.[42] El Movimiento Gremial era la principal organización estudiantil de derecha en el momento del golpe de Estado de 1973. Durante los años del régimen militar sus líderes ocuparon muchos cargos públicos y fueron asesores en los niveles municipal y ministerial, llegando a ser el principal grupo de poder civil dentro del régimen. Guzmán fue uno de los más cercanos consejeros de Pinochet, y tuvo enorme influencia para definir el modelo institucional de una democracia protegida y autoritaria. Los gremialistas eran un grupo muy cohesivo, unidos por una experiencia política común en la universidad, que se oponía al gobierno de Allende y apoyaba al régimen militar y a la persona del general Pinochet. El liderazgo de Guzmán fue distintivo y creó una profunda lealtad entre los líderes y miembros del Movimiento (Huneeus, 2000, caps. 7, 10 y 11). Renovación Nacional, que se ha distanciado más decididamente del régimen militar, también presenta un serio desafío a los democratacristianos.

RIGIDECES ORGANIZACIONALES: LA INFLUENCIA DE LAS FACCIONES

La inflexibilidad de los democratacristianos a la luz de esta nueva situación —o su falta de adaptabilidad, si empleamos la terminología de Huntington— se relaciona con la lentitud con que han tomado decisiones que les podrían haber ayudado a enfrentar el desafío de la declinación electoral. En años recientes, el partido ha sufrido cierto grado de parálisis; no ha tomado decisiones ni ha enfrentado la situación. Como resultado, el poder se ha desplazado a facciones internas que fueron protagonistas activas en el pasado pero

que más recientemente se han ido desvaneciendo y sólo tienen una presencia latente.

La vida de un partido es modificada por el grado de influencia de varias facciones, que también afectan su cohesión y estilo. Las facciones alteran la capacidad del partido para ofrecer soluciones programáticas y para reclutar miembros, activistas y líderes, lo que a su vez determina su fuerza electoral. Cuando los partidos son pequeños, sus relaciones de poder internas se individualizan y no hay espacio para que se formen grupos. Éste fue el caso de la Falange. Sin embargo, con el repentino crecimiento del PDC y su ascenso al poder en 1964, surgieron facciones que impusieron un nuevo estilo de relaciones de poder que incluían elementos ideológicos y que intensificaron los conflictos internos hasta el punto de dos divisiones, en 1969 y 1971.

La suspensión de las libertades civiles y la severa represión de la dictadura militar hicieron que las facciones fueran menos notables, y las relaciones internas del partido se volvieron más personales. La organización del partido se redujo a un mínimo y los militantes fueron incorporados en el ámbito de los vecindarios, donde actuaban clandestinamente. Las dificultades de esos años hicieron posibles unas posiciones comunes, aunque de tiempo en tiempo surgían violentamente las diferencias.[43] Los líderes del partido aprendieron que la existencia de facciones rígidas tenía sus costos y trataron de evitar nuevas rupturas porque éstas debilitarían al partido. Los líderes y los grupos internos preferían claramente cooperar, ayudados por el hecho de que no existían marcadas diferencias ideológicas y políticas que socavaran los acuerdos. Las discrepancias eran más por la importancia que se daba a ciertas políticas, como fue el caso de las alianzas con los partidos izquierdistas para construir una alternativa a la dictadura en los años setenta y mediados de los ochenta, el tema de la legitimidad constitucional y la decisión de participar en el plebiscito de 1988. Gracias a su enorme prestigio nacional e internacional, el anterior presidente, Frei Montalva, desempeñó un papel clave en la integración de los democratacristianos y en el fortalecimiento de su capacidad para tomar decisiones, lo que les permitió actuar con claridad y oportunamente. La inesperada muerte de Frei en enero de 1982 privó al PDC de una figura sobresaliente: se le reconocía como el dirigente indiscutible del partido y como el eventual candidato presidencial cuando los militares regresaran a los cuarteles. Después de su venturoso gobierno, Patricio Aylwin ocupó este vacío, lo que se confirmó al ser elegido presidente del PDC durante la grave crisis que ocurrió en 2001, como se verá más adelante.

Durante la dictadura se reprimió la actividad política, pero no se le pudo eliminar del todo porque el régimen era de naturaleza autoritaria, más que totalitaria.[44] La actividad política importante se podía dar en dos esferas de acción: la defensa de los derechos humanos y la crítica del modelo económico. Los democratacristianos estuvieron activos en estos dos escenarios; los abogados, miembros del Congreso y profesores universitarios participaban en el primero, y los economistas e ingenieros en el segundo. Su trabajo abrió las puertas para que la democracia cristiana incorporara un nuevo grupo de profesionistas dentro de la élite del partido.[45]

Con la repentina expansión del escenario político después de la política de

liberalización de Pinochet ante la crisis económica de 1983, los partidos políticos pudieron actuar con mayor libertad (Huneeus, 1987). Los democratacristianos eran el partido más organizado. Participaron en las elecciones que requería la *apertura* del régimen y obtuvieron importantes victorias en las elecciones de las federaciones estudiantiles y las asociaciones de profesionistas. Con los estudiantes, el PDC siguió una política de alianzas con los partidos del centro y de la izquierda. Los democratacristianos vieron aumentar su número con el ingreso de jóvenes estudiantes universitarios y profesionistas que combatían a la dictadura, lo que auguraba su ascenso al poder. En estas condiciones, reaparecieron las facciones y se convirtieron en actores decisivos en las deliberaciones y la toma de decisiones. La facción más importante fue la de los llamados *guatones* (literalmente, los barrigones), dirigidos por Gútenberg Martínez, quien obtuvo el poder sobre el aparato del partido por medio de una red de líderes en todos el país, a los que no les gustaba compartir el poder. Los guatones eran más conservadores y apoyaban una posición menos opuesta al régimen de Pinochet. Los *chascones* [en Chile, de pelo enmarañado, despeinado; en México se diría los *desgreñados*] eran más antagónicos a la dictadura y, aunque menos organizados, también tenían influencia. Los chascones estaban más interesados que los guatones en atraer nuevo talento y cortejaban a jóvenes y a profesionistas. Un tercer sector del partido empezó a apoyar el liderazgo de Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

El único conflicto real entre estas dos facciones que afectó la unidad de la democracia cristiana se centró en la selección del candidato del partido para las primeras elecciones democráticas. Como presidente del PDC, Patricio Aylwin había desempeñado un papel clave en la derrota de Pinochet en el plebiscito de octubre de 1988. Los líderes izquierdistas veían a Aylwin como el candidato natural de Concertación. No obstante, otras facciones presentaron las candidaturas de Gabriel Valdés y de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. El PDC repentinamente se encontró en medio de una intensa elección primaria que produjo tensiones y disgustos entre sus líderes, así como acusaciones de irregularidades en el proceso de elección, que pusieron en duda la victoria de Aylwin. Se necesitó algún tiempo para cerrar estas heridas, y la unidad y el dinamismo del partido se vieron perjudicados. El liderazgo demo-cratacristiano parecía renuente a llegar a un acuerdo, que en ese momento decisivo de la historia chilena era una necesidad vital.

Durante las primeras dos administraciones democráticas, estas facciones lograron tener representación en el Congreso y en los gobiernos locales elegidos en 1992, aunque parecían menos notorios. El recuerdo de los conflictos que habían caracterizado el final del gobierno de Frei Montalva propició esta tendencia. Aparecieron nuevos grupos integrados por miembros del Congreso y por alcaldes, sin diluir la fuerza de los chascones y los guatones. Estos últimos siguieron teniendo gran influencia en el consejo nacional del PDC, todavía tenían mucho peso en las elecciones internas y estaban relacionados con activistas del partido en todo el país. Los chascones y los guatones también se vieron favorecidos por la introducción de primarias para seleccionar a los candidatos, porque este tipo de contienda electoral requiere un alto grado de organización. Los democratacristianos han tendido a buscar en el interior de su partido a

sus candidatos, y como resultado no han podido revitalizar su propio liderazgo.

Los líderes importantes del PDC mostraron poca capacidad para movilizar a los votantes en las elecciones de 1997 para el Congreso. Enrique Krauss, presidente del partido en ese tiempo, obtuvo su escaño en la Cámara de Diputados por Santiago con un margen muy pequeño, superando apenas a su rival del PS-PPD, Carolina Tohá. Gútenberg Martínez perdió casi 15 puntos porcentuales en comparación con sus resultados de cuatro años antes, recibiendo sólo 23.45%. Pero eso bastó para superar por muy poco a su oponente del PS-PPD, un periodista. Andrés Zaldívar, quien hizo una fuerte campaña preparándose para ser candidato presidencial de Concertación, perdió 3.5 puntos porcentuales en comparación con sus resultados en 1989 y se enfrentó en puntos —una contienda aún más difícil— a Ricardo Lagos. Alejandro Foxley, que había sido presidente del PDC entre 1994 y 1996, fue elegido presidente por el distrito del oriente de Santiago con 24.43%, menos que el porcentaje obtenido por el candidato de la UDI, Carlos Bombal.

La desaparición de las facciones ha cambiado la naturaleza de la toma de decisiones, favoreciendo una personalización de la política en la que figuras clave —particularmente senadores— ejercen influencia individualmente. En estas condiciones, prevalecen intereses individuales que dificultan llegar a acuerdos en temas delicados importantes para el partido, como el cambio programático y de líderes. En esta situación, los miembros del Congreso han aumentado su influencia, actuando como grupo que defiende intereses comunes. En la práctica, las organizaciones locales dependen mucho de sus representantes en el Congreso, de los cuales reciben apoyo financiero a cambio de ayuda organizativa en los tiempos de elección. Este fenómeno constituye un obstáculo adicional para renovar el liderazgo del partido, porque los nuevos candidatos deben ser nombrados por una organización controlada por los que ya están ocupando los cargos. La selección de candidatos para las elecciones al Congreso en 2001 confirmó esta rigidez, porque la mayoría de los que se presentaron como candidatos ya eran miembros del Congreso nacional.

LOS COSTOS DE LA DEMOCRATIZACIÓN

Los problemas del PDC deben analizarse en el contexto de la transición a la democracia y de algunas de sus características específicas. Primero, el aspecto más singular del cambio de régimen en Chile fue que la dictadura no cayó como resultado del fracaso de sus políticas económicas o de sus acciones políticas, como ocurrió en el resto de Latinoamérica y en Europa oriental. Por el contrario, el régimen militar tuvo éxito desde el punto de vista económico. La transformación económica de Chile, durante la cual la mayoría de los políticos derechistas ocuparon cargos públicos, le dio a la UDI y a RN la propiedad del nuevo sistema económico. Aunque después de 1990 la democracia tuvo que ver con el buen desempeño económico del país, los partidos de Concertación no recibieron ningún crédito por esto. En este sentido, los democratacristianos chilenos han

diferido de la UDC alemana, cuya economía social de mercado es identificada con el partido y con Ludwig Erhard, quien fue ministro de economía y posteriormente canciller. No es del todo sorprendente que ni Concertación ni los democratacristianos se hayan beneficiado electoralmente del buen funcionamiento de la economía hasta 1997. En realidad, en las elecciones para el Congreso de 1997 la base electoral de la coalición gobernante se redujo y se castigó particularmente a los democratacristianos. Aunque sería "reduccionista" argumentar que la conducta electoral puede ser explicada por la economía, no es posible hacer caso omiso de los hechos.

Segundo, el autoritarismo *terminó* con la derrota de Pinochet en el plebiscito de 1988, que inició el retorno a la democracia tal como estaba declarada en la Constitución de 1980. El régimen cambió mediante un proceso de reforma, y no por una súbita ruptura. Más aún, el general Pinochet recibió un amplio apoyo en el plebiscito de 1988, y los grupos derechistas, el sector privado y muchos miembros de la población apoyaron al régimen autoritario. El hecho de que la transición ocurriera por medios legales permitió que sobrevivieran algunos *enclaves autoritarios*. Lo más importante fue que Pinochet continuó en el cargo de comandante en jefe del ejército por ocho años, lo que limitó de varias maneras la autonomía en el proceso de decisiones del primer gobierno democrático.[46] La nueva democracia se vio obligada a enfrentar los intentos del antiguo dictador por ejercer presiones para suspender la investigación de las violaciones de los derechos humanos. Esto ha originado una continua crítica del nuevo gobierno y ha servido como base para apoyar el argumento de que Chile no tiene una democracia auténtica (Moulian, 1997; Portales, 2000). Ahora que se ha consolidado la democracia, los críticos de la democratización han olvidado que cuando empezó la transición muchos miembros de la coalición democrática temían que se produjeran incidentes que podrían impedir un cambio de régimen en Chile. Los intentos de golpe de Estado que el presidente Alfonsín superó en Argentina sirvieron como vívido recordatorio del poder de los militares. Los nueve senadores designados por Pinochet constituían otro *enclave autoritario* porque, junto con el partido derechista, impedían que Concertación dominara el Senado.

Aunque el PDC gobernó en coalición con otros partidos, el hecho de que de 1990 a 2000 el presidente fuera un democratacristiano, significaba que el PDC pagaría los principales costos de la transición. El difícil contexto económico e institucional de la transición requirió que Concertación negociara acuerdos, pero los líderes de los partidos de Concertación no siempre reconocieron este hecho. Era difícil para los votantes izquierdistas que habían apoyado a Concertación aceptar la continuación de la influencia de Pinochet. Los votantes se irritaban cuando el general actuaba para defender los intereses del ejército, y esto dañó la imagen que el público tenía de la autoridad del gobierno. Los positivos resultados económicos de Chile fueron asociados con los ministros de finanzas de la democracia cristiana, pero no se tradujeron en apoyo popular para el PDC. Las desigualdades en la distribución de los beneficios económicos eran claras, y los políticos se vieron afectados porque los militares habían construido el sistema económico chileno. El desencanto público con la transición perjudicó a los

democratacristianos, y esto se reflejó en un menor número de votos en las elecciones de 1997. La capacidad del partido para recuperar esos votos era el desafío más importante al que se enfrentaba en las elecciones de 2001 para el Congreso.

LAS ELECCIONES DE 2001 PARA EL CONGRESO

Este capítulo fue escrito antes de las elecciones del 16 de diciembre de 2001, que afectaron profundamente al PDC.[47] Los resultados confirmaron su debilidad electoral. El partido recibió 18.9% del voto (cuatro puntos porcentuales menos que en 1997) y perdió 14 escaños, eligiendo sólo a 24 diputados.[48] El PDC dejó de ser el partido más grande de Chile, posición que había ocupado desde 1963. Ésta le pertenecía ahora a la UDI, que ganó 25.2% del voto y eligió a 31 diputados (en comparación con 17% del voto y 17 diputados en 1997). La UDI logró este resultado por medio de su eficiente trabajo político en los años recientes. Beneficiándose con el liderazgo de Joaquín Lavín, el partido dio un apoyo mucho más activo a sus candidatos que RN a los suyos, seleccionó buenos prospectos y, no menos importante, gastó una increíble cantidad de dinero, mucho más que su aliada, RN, o que los candidatos de Concertación.[49] La oposición aumentó su representación de 46 a 57 diputados, mientras que Concertación obtuvo 63. El resultado de la elección dejó al gobierno con una pequeña minoría en la Cámara Baja, situación que lo obliga a mantener una cuidadosa relación con sus miembros para poder aprobar leyes. Por esta razón, el PDC ha conservado un papel crucial en Concertación y en el sistema político.[50]

Las causas de esta derrota se pueden encontrar en las debilidades analizadas en este capítulo, que se han intensificado recientemente. Primero está el sistema electoral por binomios en que los candidatos del PDC enfrentan una competencia doble: una *interna*, con un candidato del PS, PPD o PRSD en la lista de Concertación, y otra *externa* con los candidatos opositores de la Alianza por Chile, integrada por la UDI y RN. El PPD obtuvo 12.73% del voto. Esto fue similar a lo obtenido cuatro años antes (12.55%) pero luego, por medio de una campaña enérgica y hábiles negociaciones parlamentarias, lograron aumentar su representación con cuatro diputaciones más (hasta 20), surgiendo así como el único partido "triunfador" en Concertación.[51] El PS perdió un punto porcentual en los votos (obtuvo sólo 10%) y perdió un diputado, eligiendo 10. Concertación recibió una pluralidad de votos (47.9%), en tanto que la opositora Alianza por Chile recibió 44.3%.[52] Las encuestas que realizamos en los años 2000 y 2001, comparando la anterior conducta individual en las votaciones y sus intenciones de voto actuales, indican que el PDC perdió votos ante la UDI y el PPD. Las mujeres y los sectores populares desertaron para irse con la UDI, en tanto que los profesionistas y los individuos con alguna educación universitaria se fueron con el PPD. El mayor grupo de quienes abandonaron al PDC no optó por ningún partido o dijo que no votaría (Huneeus, 2002a).

Segundo, los problemas de liderazgo del PDC han producido una parálisis en el proceso de toma de decisiones que ha afectado adversamente al partido desde que aparecieron las

primeras señales de deterioro electoral en 1996 y 1997. A diferencia del PPD y de la UDI, el PDC no ha consolidado un grupo de líderes capaz de dirigir eficazmente al partido, defender sus intereses y necesidades ante el gobierno y ante sus aliados en Concertación, y dotarlo de una maquinaria electoral eficiente.[53]

Los problemas de liderazgo del PDC quedaron demostrados drásticamente cuando, después de la toma de posesión del tercer gobierno democrático, los principales líderes del partido se mostraron renuentes a ocupar la presidencia de éste. En esta difícil situación, Ricardo Hormázabal fue elegido presidente en abril de 2000. Hormázabal fue elegido por votación directa, derrotando claramente al diputado Andrés Palma. El nuevo presidente tenía una larga carrera como líder del partido,[54] pero con ciertas limitaciones que estaban dañando su liderazgo. No era miembro del Congreso y no logró crear una buena relación con la delegación del PDC, la cual, como hemos visto, había obtenido su independencia después de 1990. Tampoco tenía una clara comprensión de las complejidades de gobernar porque nunca ocupó un cargo de ministro o de subsecretario, y en consecuencia no disfrutaba de una buena relación con el gobierno de Lagos. Tampoco ayudó su relación personal con el presidente Lagos, quien no reaccionó bien ante el carácter directo y a menudo irascible de Hormázabal, prefiriendo tratar directamente con los parlamentarios del PDC cuando se trataba de obtener la aprobación de su programa legislativo.

Las debilidades del liderazgo del PDC tuvieron repercusiones en la campaña electoral de 2001. Carecía de autoridad para imponer una buena lista de candidatos. Algunos que ya eran congresistas fueron seleccionados como candidatos a pesar de que muchos de ellos habían recibido evaluaciones negativas y era evidente que no serían reelegidos. Además, otros diputados con un buen historial, que con seguridad podían ser reelegidos, prefirieron en cambio contender por el Senado en condiciones muy difíciles y fueron derrotados.[55] Segundo, en una decisión que tuvo consecuencias muy negativas, se reorganizó al grupo electoral del partido. Personas sin experiencia ocuparon esos cargos y cuando el PDC registró su lista de candidatos, no cumplió con requisitos formales de la ley electoral, eliminando así al partido de las elecciones. En estas circunstancias, el gobierno presentó al Congreso un proyecto de ley, ampliando el periodo de registro para hacerle posible al PDC registrar sus candidatos correctamente; de no hacerlo así, se habría excluido al partido más grande a causa de un error administrativo notorio, dañando la legitimidad de las elecciones. La ley, que fue aprobada en 24 horas por el Congreso nacional, fue apoyada por la UDI, que demostró su pragmatismo; las encuestas habían indicado que la UDI se convertiría en el partido más grande, y el partido no quería que su victoria se viera oscurecida por la falta de candidatos del PDC. Durante muchos días, los medios de comunicación informaron ampliamente sobre este grave error del PDC, dañando su imagen pública y produciendo una crisis que hizo que renunciaran sus directores. Cuando terminó el escándalo, el anterior presidente Patricio Aylwin surgió como presidente del partido y pidió al ex presidente Frei Ruiz-Tagle que se le uniera como vicepresidente. Si no hubiera sido por Aylwin, de 83 años, cuyo activo apoyo a los candidatos del partido demostró su conocimiento político y la energía de sus mejores

años, el PDC hubiera sufrido una derrota más resonante, que habría hecho peligrar la continuación de la existencia del partido. Tal como se presentaron las cosas, un partido con una prolongada existencia logró conservar un electorado leal, a pesar de enfrentarse a una grave confusión interna.

En su convención nacional, realizada a finales de 2002, el senador Adolfo Zaldívar, hermano de Andrés Zaldívar, fue elegido nuevo presidente del PDC. Zaldívar fue uno de los pocos senadores que lograron ser reelegidos en 2001, y para la presidencia del partido recibió 51% de los votos de los delegados. Su victoria mayoritaria se debió a que supo capitalizar el descontento de los militantes del partido después del fracaso electoral, que él atribuyó al apoyo que los candidatos del PS-PPD habían recibido de los ministros y de otros altos funcionarios del gobierno. Zaldívar criticó acerbamente a Ricardo Lagos, la figura dominante del PS-PPD. También mantuvo una actitud de crítica hacia Concertación como alianza estratégica, prefiriendo en cambio lo que él llamó "una pequeña coalición" o una alianza únicamente con el PR. Estas posiciones contribuyeron a formar su imagen como la de alguien de fuera, aunque había sido vicepresidente del PDC entre 1997 y 1999 cuando, como hemos visto, al partido le fue muy mal en las primarias presidenciales de 1999, y Andrés Zaldívar fue rotundamente derrotado por Lagos.

Zaldívar anunció que promovería el cambio y la renovación dentro del PDC, y tenía dos años para cumplir su ambición. Los resultados serían puestos a prueba en las elecciones municipales de 2004, precursoras de las elecciones parlamentarias y presidencial de 2005, que resultarían decisivas para el PDC. La tarea no era fácil, pero el PDC tenía importantes recursos políticos que podía utilizar para recuperar el terreno perdido si lograba rejuvenecer sus ideas y a sus líderes y, a la vez, promover una política que confrontara enérgicamente el desafío bilateral de la UDI y del PPD. El PDC continuaba disfrutando de una importante base de apoyo a partir de la cual podía alcanzar estos objetivos. Puesto que la UDI está claramente a la derecha, ningún otro partido amenazaba su posición centrista. Por lo tanto, esta posición es diferente de la que el PR ha enfrentado desde la década de 1950, cuando el PDC empezó a dominar el espacio centrista que los radicales habían ocupado durante dos décadas.

CONCLUSIÓN

En este capítulo se han estudiado el surgimiento y el desarrollo de la democracia cristiana, así como los problemas que amenazan actualmente su posición. Entre éstos se encuentran su poca capacidad de ofrecer propuestas políticas que atraigan a los electores, en especial a los jóvenes; la limitada renovación de la élite del partido en el Congreso debido a la férrea resistencia de sus congresistas actuales a este proceso; la incapacidad de los dirigentes del partido para emprender acciones que podrían mejorar la situación, y la fuerte disminución de la actividad interna del partido. Los esfuerzos para fortalecerlo utilizando las primarias para la selección de los candidatos en las elecciones de 1997 y 2001 han tenido un efecto negativo, resultando en conflictos y divisiones que han

empeorado la situación. Los conflictos dentro del PDC reciben amplia difusión en los diarios, que están estrechamente relacionados con la derecha (Huneeus, 2002b). En la actualidad, los democristianos carecen de un líder nacional que pueda competir con Joaquín Lavín, y que sea capaz de recuperar los votos que el PDC ha perdido ante la derecha y haga volver a las urnas a los abstencionistas. Finalmente, el PDC se enfrenta a un difícil problema de sucesión. Todavía no ha podido encontrar un líder que ocupe el vacío dejado por Patricio Aylwin, cuyos sobresalientes dones de liderazgo se revelaron cuando ocupó la presidencia del PDC durante su grave crisis de 2001, y que después anunció su retiro de la vida política activa.

Limitaciones de carácter organizativo —incluyendo el impacto de las facciones y los costos de un prolongado y difícil proceso de democratización— explican las causas de estas dificultades, que no se derivan de una mala administración en el gobierno, como ocurrió al COPEI en Venezuela o a los partidos democratacristianos en Guatemala o El Salvador. El PDC todavía cuenta con un importante apoyo entre los electores, que no tienen intención de cambiar su alianza con otros partidos en Concertación, y puede contar con el de parlamentarios, líderes, profesionistas y partidarios en todo el país. Es posible que pueda usar estos recursos para recuperar su posición como el partido más grande de Chile.

Aún está por verse si los democratacristianos pueden revertir la situación actual. El resultado será de extrema importancia para el futuro del tercer gobierno de Concertación, así como para el futuro del sistema de partidos de Chile.

REFERENCIAS

Arriagada, Genaro, 2001, “Resultado de las elecciones 2001 y su proyección estratégica”, *Informe*, 168, 26 de diciembre. Disponible en www.asuntospublicos.org.

———, 2002, “La democracia cristiana y su nuevo presidente”, *Informe*, 179, 4 de febrero. Disponible en www.asuntospublicos.org

Aylwin, Patricio, 1998, *El reencuentro de los demócratas*, Santiago, Ediciones Grupo Zeta.

Bartolini, Stefano, 1983, “The Membership of Mass Parties: The Social Democratic Experience, 1889-1978”, en Hans Daaldar y Peter Mair (eds.), *Western European Party Systems: Continuity and Change*, pp. 139-175, Londres, Sage Publications.

Bascuñán, Carlos, 1990, *La izquierda sin Allende*, Santiago, Planeta.

Beyme, Klaus von, 1982, *Parteien in westlichen Democratien*, Munich, R. Piper, Verlag.

Collier, Simon, y William F. Sater, 1996, *A History of Chile, 1808-1994*, Cambridge, Cambridge University Press.

Correa, Raquel, 2000, “El nuevo estado de la DC”, *El Mercurio, Reportajes*, 10 de septiembre, p. 2.

Daalder, Hans, 1984, “In Search of the Center of European Party Systems”, *American*

Political Science Review, 78, núm. 1, pp. 92-109.
Dahl, Robert A., 1971, *Polyarchy*, New Haven, Yale University Press.
Dalton Russell J., y Martin P. Wattenberg (eds.), 2000, *Parties without Partisans: Political Change in Advanced Industrial Democracies*, Oxford, Oxford University Press.
Domínguez, Jorge I. (ed.), 1997, *Technopols: Freeing Politics and Markets in Latin America in the 1990s*, Pensilvania, Pennsylvania University Press.
Domínguez, Jorge I., 1998, *Democratic Politics in Latin America and the Caribbean*, Baltimore, Johns Hopkins University Press.
Ercilla, 1967, núm. 1651, 25 de enero.
Fleet, Michael, 1985, *The Rise and Fall of Chilean Christian Democracy*, Princeton, Princeton University Press.
Fogarty, Michael, 1958, *Christian Democracy in Western Europe 1820-1953*, Londres, Routledge and Kegan.
Gazmuri, Cristián, Patricia Arancibia y Álvaro Góngora, 2000, *Eduardo Frei Montalva y su época*, 2 vols., Santiago, Aguilar.
Gil, Federico G., Ricardo E. Lagos y Henry Landsberger (eds.), 1979, *Chile at the Turning Point: Lessons of the Socialist Years, 1970-1973*, Filadelfia, Institute for the Study of Human Issues.
González Cruchaga, Carlos (obispo de Talca), 1997, *Historia de una polémica: monseñor Manuel Larraín y los orígenes de la democracia cristiana en Chile*, Santiago, Fundación Eduardo Frei.
Grayson, George, 1965, *El Partido Demócrata Cristiano chileno*, Buenos Aires, Editorial Francisco de Aguirre.
Hofmeister, Wilhelm, 1995, *La opción por la democracia: democracia cristiana y el desarrollo político en Chile, 1964-1994*, Santiago, Konrad Adenauer Stiftung.
Huneeus, Carlos, 1973, *Movimiento estudiantil y generación de élites dirigentes*, Santiago, Corporación de Promoción Universitaria.
———, 1985, *La Unión del Centro Democrático y la transición a la democracia en España*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, Siglo XXI Editores.
———, 1987, "From Diarchy to Polyarchy: Prospects for Democracy in a Latecomer, Chile", en Enrique Baloyra (ed.), *Comparing New Democracies*, pp. 109-152, Boulder, Colorado, Westview Press.
———, 1988, "Aprender del pasado para construir la democracia: el caso del Partido Demócrata Cristiano de Chile", en Dieter Nohlen y Aldo Solari (eds.), *Reforma política y consolidación democrática: Europa y América Latina*, pp. 63-80, Caracas, Editorial Nueva Sociedad.
———, 1996, "En defensa de la transición: el primer gobierno de la democracia en Chile", *Ibero-Amerikanisches Archiv*, 21, núms. 1-2, pp. 21-55.
———, 2000, *El régimen de Pinochet*, Santiago, Editorial Sudamericana.
———, 2001a, "El fin de la transición y los 'consensos'", *Informe*, 165, 20 de

diciembre. Disponible en www.asuntospublicos.org
———, 2001b, "La derecha en el Chile después de Pinochet: el caso de la Unión Demócrata Independiente", Documento de Trabajo, 285, julio, Kellogg Institute, Universidad de Notre Dame.
Huneeus, Carlos, 2001c, "La nueva desigualdad: el dinero en las campañas", *Tercera de la Hora*, 15 de diciembre.
———, 2001d, "Otra lectura de las 'fortalezas' de la UDI: réplica a Cortés Terci", *Informe*, 123, 27 de septiembre. Disponible en www.asuntospublicos.org
———, 2002a, "¿Dónde se fueron los votantes del PDC?", 22 de enero. Disponible en www.asuntospublicos.org
———, 2002b, "La vigencia de la democracia cristiana", febrero. Disponible en www.asuntospublicos.org
———, 2002c, "El PPD, ¿partido moderno o simplemente partido de notables?", octubre. Disponible en www.asuntospublicos.org
Huntington, Samuel P., 1968, *Political Order in Changing Society*, New Haven, Yale University Press.
———, 1991, *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*, Londres, University of Oklahoma Press.
Kalyvas, Stathis N., 1996, *The Rise of Christian Democracy in Europe*, Londres, Cornell University Press.
Kesselman, Mark, 1970, "Overinstitutionalization and Political Constraint", *Comparative Politics*, 3, núm. 1, pp. 21-44.
Lagarrigue, Javier, 1953, "El socialcristianismo y el éxito", *Política y Espíritu*, 90, 15 de abril, pp. 12-19.
Linz, Juan J., 1975, "Totalitarian and Authoritarian Regimes", en F. I. Greenstein y N. W. Polsby (eds.), *Handbook of Political Science*, Reading, Mass., Addison Wesley.
———, 1978, *Crisis, Breakdown and Reequilibration*, Baltimore, Johns Hopkins University Press.
———, 1990a, "The Perils of Presidentialism", *Journal of Democracy*, 1, núm. 2, pp. 51-69.
———, 1990b, "The Virtues of Parliamentarianism", *Journal of Democracy*, 1, núm. 4, pp. 84-91.
———, y Alfred Stepan, 1996, *Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe*, Baltimore, Johns Hopkins University Press.
Loveman, Brian, 1988, *Chile: The Legacy of Hispanic Capitalism*, 2ª ed., Nueva York, Oxford University Press.
Mainwaring, Scott, y Timothy R. Scully, 1996, "Introduction: Party Systems in Latin America", en Scott Mainwaring y Timothy R. Scully (eds.), *Building Democratic Institutions: Party Systems in Latin America*, Stanford, Stanford University Press.

Mainwaring, Scott, y Matthew Soberg Shugart (eds.), 1997, *Presidentialism and Democracy in Latin America*, Cambridge, Cambridge University Press.

Mair, Peter, 1997, *Party System Change*, Oxford, Oxford University Press.

Michels, Robert, 1911, *Political Parties: A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracies*, reimpresión, Nueva York, The Free Press, 1962.

Moulián, Tomás, 1997, *Anatomía de un mito*, Santiago, ARCIS/Flacso.

Nohlen, Dieter, 1973, *Chile: Das Sozialistische Experiment*, Hamburgo, Hoffman and Campe.

———, y Mario Fernández, 1991, *Presidencialismo* versus *parlamentarismo en América Latina*, Caracas, Nueva Sociedad.

Ortega, padre Miguel (ed.), 1982, *El cardenal nos ha dicho, 1961-1982*, Santiago, Editorial Salesiana.

Ortega Frei, Eugenio, 1992, *Historia de una alianza*, Santiago, CED-CESOC.

Pereira, Teresa, 1994, *El Partido Conservador 1930-1965*, Santiago, Fundación Mario Góngora.

Pinochet Ugarte, Augusto, 1990, *Camino recorrido: biografía de un soldado*, vol. 1, Santiago, Instituto Geográfico Militar.

Portales, Felipe, 2000, *La democracia tutelada*, Santiago, Editorial Sudamericana.

Sartori, Giovanni, 1966, "European Political Parties: The Case of Polarized Pluralism", en Joseph La Palombara y Mirón Weiner (eds.), *Political Parties and Political Development*, pp. 164-165, Princeton, Princeton University Press.

———, 1976, *Parties and Party Systems: A Framework for Analysis*, Londres, Cambridge University Press.

Scully, Timothy R., 1992, *Rethinking the Center: Party Politics in Nineteenth and Twentieth Century Chile*, Stanford, Stanford University Press.

———, 1995, "Reconstituting Party Politics in Chile", en Scott Mainwaring y Timothy R. Scully (eds.), *Building Democratic Institutions: Party Systems in Latin America*, pp. 100-137, Stanford, Stanford University Press.

Shugart, Matthew Soberg, y John M. Carey, 1992, *Presidents and Assemblies: Constitutional Design and Electoral Dynamics*, Cambridge, Cambridge University Press.

Silva Solar, Julio, 1951, *A través del marxismo*, Santiago, Editorial del Pacífico.

———, y Jacques Chonchol, 1969, *El desarrollo de la nueva sociedad en América Latina*, Santiago, Editorial Universitaria.

Valencia Avaria, Luis (comp.), 1986, *Anales de la República*, Santiago, Editorial Andrés Bello.

Valenzuela, Arturo, 1978, *The Breakdown of Democratic Regimes: Chile*, Baltimore, Johns Hopkins University Press.

Valenzuela, Samuel J., 1995, "Orígenes y transformaciones del sistema de partidos en

Chile", *Estudios Públicos*, 58, otoño, pp. 5-77.
———, y Timothy R. Scully, 1997, "Electoral Choices and the Party System in Chile: Continuities and Changes at the Recovery of Democracy", *Comparative Politics*, 29, núm. 4, julio, pp. 511-527.
Veen, Hans-Joachim (ed.), 1983, *Christlich-demokratische und konservative Partien in West-Europa*, Paderborn, Schöning Verlag.

* Este estudio fue realizado como parte de un proyecto de investigación financiado por Fondecyt (donación 1980775).

[1] La bibliografía sobre el gobierno de Allende es numerosa. Un libro útil con capítulos por protagonistas y académicos es *Chile at the Turning Point* (Gil *et al.*, 1979). El libro más completo sobre el tema sigue siendo el de Nohlen: *Chile* (1973).

[2] En este capítulo, los términos *democratacristiano, democracia cristiana* y *Partido Demócrata Cristiano* (conocido por sus siglas PDC) serán usados indistintamente para describir al partido en todas las fases de su evolución histórica, incluyendo las dos décadas (1938-1957) de la Falange Nacional.

[3] Como éste es un estudio de los partidos, debo indicar que también el Partido Radical eligió a dos candidatos presidenciales consecutivos, en 1942 y 1946. Sin embargo, en ambas ocasiones no se llevó a cabo la transferencia personal del poder porque Pedro Aguirre Cerda y Juan Antonio Ríos fallecieron prematuramente. Véase el excelente libro de Collier y Sater, *A History of Chile, 1808-1994* (1996, cap. 9).

[4] También fue ministro de Hacienda de Frei Montalva y presidente del partido durante la dictadura, entre 1977 y 1980, fecha en que fue exiliado. Se le nombró presidente del partido de nuevo en 1989, cuando Aylwin se convirtió en el candidato de Concertación para la presidencia de Chile.

[5] Para un análisis de las diferentes estrategias de transición y el caso chileno, véase Linz y Stepan (1996, cap. 13).

[6] La Falange Nacional votó contra la ley que proscribió al Partido Comunista (conocida como la Ley en Defensa de la Democracia). Un sector de la Iglesia rechazó la posición de la FN y la llamó "colaboración" con los comunistas. Esto condujo a tal conflicto con la jerarquía eclesiástica que casi llevó a la autodisolución de la Falange como partido. Los principales documentos de este conflicto han sido publicados por el anterior obispo de Talca (González Cruchaga, 1997). Esta ley también dividió al Partido Conservador, cuya ala socialcristiana votó contra ella.

[7] Para un análisis de los partidos democratacristianos en Europa, véanse Veen (1983) y Von Beyme (1982, pp. 116-139). Para un estudio de los movimientos democratacristianos, véase el estudio clásico de Fogarty (1958) y el excelente libro de Kalyvas (1996).

[8] Peter Mair desarrolla el concepto de "partido cartel" (1997, cap. 5).

[9] El texto completo se reproduce en *El cardenal nos ha dicho* (Ortega, 1982, pp. 356-359).

[10] La ANEC fue fundada en 1915 por dos estudiantes de la Universidad Católica: Eduardo Cruz-Coke y Emilio Tizzoni. Véase Grayson (1965, p. 100).

[11] Acerca de los católicos en la política del siglo XIX, véase Scully (1992, cap. 2). Para una historia del Partido Conservador en el siglo XX, véase Pereira (1994).

[12] Bernardo Leighton era presidente del MNJC.

[13] El candidato del Frente Popular —apoyado por los partidos radicales, los socialistas y los comunistas— ganó por sólo 4 101 votos. Su victoria se puede entender mejor si se considera que el general Carlos Ibáñez del Campo se retiró de la campaña unas pocas semanas antes de la elección, después del asesinato de Seguro Obrero por miembros de la policía militar que actuaron obedeciendo órdenes del gobierno. El suceso hizo que los seguidores de Ibáñez apoyaran a Aguirre Cerda.

[14] También fue candidato del Partido Conservador en las elecciones de 1937 para el Congreso.

[15] Otros fundadores de la Falange Nacional fueron elegidos al Congreso antes que Frei, ocupando escaños en la Cámara Baja: Manuel Garretón (1937), Radomiro Tomic (1941) y Bernardo Leighton (1945). Véase Valencia Avaria (1986).

[16] Eduardo Frei Montalva fue ministro de Obras Públicas en 1945; Bernardo Leighton fue ministro de Educación, e Ignacio Palma Vicuña fue ministro de Tierras y Colonización en lo que se llamó "gabinete de sensibilidad social" (1950-1952). Véase Valencia Avaria (1986).

[17] La convergencia ocurrió en las universidades, lo que condujo a la creación del Frente Social Cristiano en 1949. Véase Grayson (1965, p. 272).

[18] Cruz-Coke fue elegido senador por Santiago.

[19] Los conservadores tradicionales apoyaron la candidatura de Arturo Matte Larraín, yerno del ex presidente Arturo Alessandri.

[20] Los jóvenes laicos tenían una tercera opción: el Partido Radical.

[21] Uno de los miembros de la Falange recuerda lo singular que era el partido: “La Falange Nacional fue concebida, construida y sostenida por las vidas de un pequeño grupo de hombres que estaban extraordinariamente por encima del promedio. Otros reconocen este hecho más que nosotros” (Lagarrigue, 1953, p. 15).

[22] El historiador Cristián Gazmuri, con Patricio Arancibia y Álvaro Góngora, ha escrito una bien documentada biografía (2000).

[23] Al suceso se le llamó “el naranjazo” por Óscar Naranjo, el candidato ganador, hijo del congresista del Partido Socialista cuya muerte había motivado la elección especial.

[24] Esto ocurrió en las elecciones para el Congreso en 1963, cuando los partidos que apoyaban a Carlos Ibáñez del Campo aumentaron considerablemente su representación en el Congreso. El Partido Agrario Laborista eligió 26 diputados, un aumento a partir de los 14 que había elegido en 1949, y los socialistas populares eligieron 20 diputados, mientras que su total anterior era de sólo seis. Las estadísticas se tomaron de Nohlen (1973, cuadro A33).

[25] Sartori sostuvo que una posición centrista es “más una convergencia negativa, una suma de exclusiones, que una agencia positiva de instigación. Por esto es posible que sea una clase de agregación pasiva, inerte y —en resumidas cuentas— inmóvil” (1966, pp. 164-165).

[26] Lo reconoció al estudiar el papel de los democratacristianos durante el gobierno de Allende y llegar a la conclusión de que aun cuando era cierto que “los partidos centristas tienden al inmovilismo, siguen siendo una fuerza equilibrante que desempeña un papel ‘mediador’, y la mediación no es lo mismo que el inmovilismo”. Véase Sartori, 1976, p. 135.

[27] No se ha hecho ningún estudio sobre la represión que desató esta “infausta ley”, a pesar de su importancia y efecto sobre la vida de muchas personas. El general Augusto Pinochet, cuando era capitán, fue asignado durante varios meses al campo de Pisagua, donde estaban detenidos los militantes comunistas bajo el control militar. Pinochet recuerda este episodio en sus memorias (Pinochet Ugarte, 1990, cap. 5).

[28] Jorge Arrate y Armando Arancibia se unieron al Partido Socialista, Ricardo Lagos se declaró independiente y Genaro Arriagada se unió al PDC.

[29] Linz (1978, 1990a, 1990b). El análisis de Linz generó una rica bibliografía, incluyendo Nohlen y Fernández (1991), Shugart y Carey (1992) y Mainwaring y Shugart (1997).

[30] En Alemania se dice que los ministros y secretarios de Estado en el sistema parlamentario ejercen sus funciones de lunes a viernes, pero que los fines de semana trabajan en su distrito parlamentario.

[31] El ministro de Relaciones Exteriores Gabriel Valdés había sido vicepresidente de la Falange Nacional en 1952-1953, pero nunca miembro del Congreso.

[32] El papel del PDC durante el gobierno de Frei Montalva se analiza en Huneeus (1988).

[33] Entre ellos estaban Jerez, el senador Salvador Agustín Gumucio y el diputado Julio Silva Solar. Este último era un intelectual que fue elegido a la Cámara de Diputados en 1965 gracias al abrumador triunfo electoral del PDC. Había desarrollado una filosofía política basada en el “comunitarismo”; es decir, el traslape de ideas del cristianismo y del marxismo. Silva conocía bien el marxismo, tema de su tesis para obtener la licenciatura en ciencias jurídicas y sociales de la Universidad de Chile. Véase Silva Solar (1951), con prólogo de Jaime Castillo Velasco, y Silva Solar y Chonchol (1969).

[34] El líder de los “jóvenes rebeldes”, el sociólogo Rodrigo Ambrosio, lanzó un proyecto político propio para convertir al PDC en un partido izquierdista, aprovechando la debilidad de los partidos socialista y comunista y adoptando no sólo teorías marxistas, sino también leninistas. El desarrollo de los rebeldes es analizado en Huneeus (1973, pp. 37-62).

[35] Los otros ministerios son los de Vivienda y Desarrollo Urbano, Educación, y Planificación y Cooperación.

[36] Scully (1995). Para un análisis histórico de los partidos, véase Valenzuela, 1995. Acerca de la continuidad de las preferencias electorales, véase Valenzuela y Scully, 1997.

[37] La desaparición del Partido Comunista se explica por varios factores, incluyendo la fuerte represión por parte del régimen de Pinochet y la estrategia del PC a finales de los años setenta de usar la violencia en su lucha contra la dictadura. Esta estrategia separó a los comunistas de la oposición democrática, a la que el PC rechazaba y acusaba de estar contribuyendo efectivamente a que Pinochet permaneciera en el poder. El sistema chileno de distritos electorales con dos representantes fue otro factor, porque beneficia a las coaliciones electorales y

perjudica a los partidos que compiten de manera independiente. Véase Bascuñán, 1990.

[38] Un informativo estudio de la oposición democrática que llevó a la creación de la Alianza Democrática y de Concertación es el de Ortega Frei, *Historia de una alianza* (1992).

[39] Entre los más conocidos están Edgardo Boeninger, antiguo rector de la Universidad de Chile, y Alejandro Foxley, fundador de la Corporación de Investigaciones Económicas para Latinoamérica (CIEPLAN), el respetado centro de estudios. Foxley obtuvo reconocimiento por su crítica de los "Chicago Boys" y por su formulación de un programa alternativo al neoliberalismo.

[40] El PPD ha sido analizado en Huneeus (2002c).

[41] La Red Megavisión transmitió un debate, que captó mucho público.

[42] Puede encontrarse un análisis de la UDI en Huneeus, 2001b y 2001d.

[43] La más conocida de éstas es la de las diferentes posiciones que los fundadores del PDC, Frei y Leighton, tomaron después del golpe militar. Un grupo disidente, que incluía a Bernardo Leighton y a Renán Fuentealba, presentó una declaración que condenaba el golpe de Estado, para diferenciarse de la posición oficial del partido, que simplemente explicó las razones del golpe. Aylwin explica la posición del PDC en sus memorias (1998, pp. 30-36).

[44] En esta distinción estoy remitiéndome a Linz, 1975.

[45] Entre este último grupo estaba Alejandro Foxley, que junto con otros economistas democratacristianos, al verse obligados a salir de la Universidad Católica como resultado de presiones políticas, organizó un centro de investigación que se convertiría en la principal fuente de críticas al modelo económico del régimen. La CIEPLAN también formuló propuestas programáticas para la democratización.

[46] Linz y Stepan concluyeron que, "políticamente, la democracia chilena empezó en circunstancias constitucionales más limitadas que en ningún otro caso latinoamericano o que en los países europeos que consideramos en este libro" (1996, p. 211).

[47] Para un perspicaz análisis, véase Arriagada, 2001.

[48] Al partido tampoco le fue bien en las elecciones para el Senado, pues sólo eligió a dos senadores en los ocho distritos en que se realizaron elecciones.

[49] En Huneeus, 2001c, se analizan las consecuencias negativas de esto.

[50] Las consecuencias de esta elección se evalúan en Huneeus, 2001a.

[51] En varios distritos, el PPD dirigió con éxito su campaña hacia el PDC, haciendo que éste perdiera diputados tan buenos como Andrés Palma.

[52] El Partido Comunista obtuvo 5.5%, menos de lo que había logrado en 1997 (6.9%).

[53] Desde 1995, ninguno de los presidentes del PDC ha logrado terminar su periodo. El primero que falló fue el ex ministro de Finanzas Alejandro Foxley (1995-1997), que no pudo neutralizar la influencia de las diversas facciones. Luego, Enrique Krauss (1997-1999) renunció inesperadamente después de las primarias. Varias semanas más tarde, en junio de 1999, Gútenberg Martínez era el presidente del PDC, y en abril del 2000 Ricardo Hormázabal fue elegido para este cargo. Véase Arriagada, 2002.

[54] Después de ser presidente de la JDC entre marzo y octubre de 1973, Hormázabal fue candidato a la presidencia del PDC en 1988, pero fue derrotado por Patricio Aylwin. En 1989 se le eligió senador por Coquimbo (4° Distrito), pero no pudo contender por la reelección en las elecciones de 1997 después de ser derrotado por el diputado Jorge Pizarro, que posteriormente fue elegido senador por un amplio margen. El presidente Ruiz-Tagle nombró a Hormázabal embajador en Alemania, cargo que desempeñó hasta el final del periodo.

[55] Los ejemplos más notables fueron los diputados Roberto León, Aldo Cornejo e Ignacio Walker. Este último hizo una campaña muy buena en el 5° Distrito, pero fue derrotado por el senador Carlos Ominami (PS), que se reeligió y que era la figura más importante de su partido en la Cámara Alta.

VI. EL FUTURO DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA CHILENA*

IGNACIO WALKER

EN ESTE capítulo se argumenta que el futuro de la democracia cristiana chilena (PDC) depende principalmente de su capacidad de enfrentar los desafíos de la "sociedad naciente" y darles una respuesta. La sociedad naciente ha sido resultado de los cambios económicos, sociales y culturales ocurridos en las dos últimas décadas en Chile, con sus ventajas y desventajas, sus omisiones y contradicciones, y en especial sus enormes posibilidades.

A la vez, consideraré la razón de que el partido haya decaído significativamente, como es de esperar en una organización política: una burocracia que tiene más de 60 años, si se toman en cuenta los de la Falange Nacional. La fatiga se ve agravada dentro del partido por la actividad de grupos impulsados por una búsqueda incesante del poder. Prácticamente se aíslan a sí mismos de cualquier consideración por las ideas o por la gente, enfrentándose así al carácter distintivo y a la filosofía política particular del Partido Demócrata Cristiano (PDC), que tradicionalmente fue concebido por sus miembros como una "comunidad de personas", esto es, una organización en que la acción amistosa entre sus miembros era sumamente apreciada e instrumental para el funcionamiento del partido.

LOS ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Predecesora de la democracia cristiana chilena fue la Falange Nacional (1938-1957). Después de separarse del Partido Conservador, la Falange Nacional desplegó las banderas del socialcristianismo, un movimiento dedicado a promover y poner en práctica las enseñanzas sociales de la Iglesia católica, después de la publicación de la encíclica papal *Rerum Novarum* en 1891. El cristianismo social respondía a lo que entonces se llamaba "la cuestión social", el principal motivo de fractura de la política chilena a principios del siglo XX.

Encabezados por unos cuantos jóvenes católicos inspirados en las enseñanzas sociales de la Iglesia y actuando como una "minoría profética" con poca representación electoral, la Falange emprendió un "prolongado cruce del desierto" sin ser comprendida ni siquiera por la propia jerarquía de la Iglesia católica. Pensaban, como lo expresó Eduardo Frei Montalva (1955), que "ha llegado la hora de la verdad". En consecuencia, en algún punto, sin importar cuánto se tardara, podrían transformar la sociedad según esa verdad.

Ya había precursores del socialcristianismo en Chile desde finales del siglo XIX, personas de clara visión progresista como Juan Enrique Concha y el diputado al Congreso Óscar Gajardo (que desde entonces ya hablaba de una "democracia cristiana"),

ambos representantes del Partido Conservador. Este partido adoptó "las enseñanzas de las encíclicas sociales y en su convención general de 1901 las hizo parte de la 'más alta' aspiración del partido para conservar y desarrollar el orden socialcristiano" (Pereira, 1994, p. 26).[1]

En la década de 1930, una nueva generación de jóvenes, formada durante la dictadura del general Ibáñez (1927-1931) e imbuida del pensamiento católico, vio en el Partido Conservador un lugar en el cual podrían poner en práctica las encíclicas sociales de la Iglesia. Estos jóvenes fueron influidos decisivamente por sacerdotes, entre ellos fray Óscar Larson y los jesuitas Fernando Vives y Jorge Fernández Pradel, ya familiarizados con la doctrina social de la Iglesia. La encíclica papal *Quadragesimo Anno* de 1931 llamaba al establecimiento de grupos de acción católica, organizaciones laicas y no partidistas para promover la doctrina y los valores sociales católicos bajo la supervisión de la jerarquía de la Iglesia. La encíclica también llamó la atención sobre la crisis del Estado oligárquico y la explosión de la "cuestión social", que había surgido a principios del siglo. Éste fue el marco en que esos jóvenes ingresaron a la política.

Bernardo Leighton y un pequeño y selecto grupo de estudiantes, principalmente de la Universidad Católica, decidieron ingresar a la organización de la Juventud Conservadora en 1932, tras la caída del dictador Ibáñez (al cual habían combatido). Esta decisión marcó el surgimiento dentro del campo político chileno de una nueva idea progresista inspirada en el socialcristianismo. Bernardo Leighton, Manuel Garretón, Eduardo Frei, Radomiro Tomic, Ignacio Palma y Manuel Francisco Sánchez estaban entre sus principales figuras (Castillo Infante, 1997; Cash, 1986; Boye, 1986; Grayson, 1968; Silva Bascuñan, 1949).

En 1934, Eduardo Frei y Manuel Garretón, los más importantes líderes de la Asociación Nacional de Estudiantes Católicos (ANEC), rama de Acción Católica, asistieron a un Congreso Internacional de Estudiantes Universitarios Católicos en Roma. Visitaron varios países europeos y en París conocieron al renombrado teólogo católico Jacques Maritain.

Frei y Garretón regresaron comprometidos con el desarrollo de grupos de Acción Católica y concentraron su acción política en torno de los problemas sociales. Gradualmente se hicieron más conscientes de sus diferencias con el Partido Conservador. A la postre, estas diferencias, en especial con respecto a las posiciones reaccionarias en el Partido Conservador, demostraron ser irreconciliables.

Por entonces, la proliferación de pequeños partidos con orientación socialcristiana (el Partido Social Cristiano, el Partido Social Sindicalista, el Partido Popular Corporativista y otros), y la independencia que empezaba a afirmar la Juventud Conservadora, hicieron que los obispos chilenos consultaran al Vaticano para saber si era correcto que surgieran partidos de origen cristiano fuera del Partido Conservador. La respuesta del cardenal Eugenio Pacelli (1934), el futuro papa Pío XII, llegó pronto y fue bien recibida por los jóvenes conservadores. Con su clara distinción entre la participación en la política como un "deber de justicia y caridad cristianas", y la política partidista en que diferentes grupos pueden llegar a "diferentes conclusiones", la respuesta puso en claro que un partido

político "no puede pretender para sí mismo la representación de todos los fieles", y que "a los fieles se les debe permitir la libertad que les corresponde como ciudadanos para establecer grupos políticos especiales y participar activamente en ellos" (González Cruchaga, 1997, p. 31).

La Juventud Conservadora realizó un congreso entre el 11 y el 13 de octubre de 1935, que reunió a los jóvenes inspirados por el pensamiento social-cristiano. Ese acontecimiento puede considerarse el origen de la Falange Nacional, el nombre que eligieron en ese congreso. La invitación expresa fue: "Presentaremos ante nuestro país la integridad de nuestros ideales, la vitalidad de nuestra causa, la capacidad y entusiasmo de nuestros jóvenes. ¡Un espíritu joven en un viejo partido!" (Boye, 1986, p. 60).

De este congreso proviene la declaración inicial de principios de la Falange Nacional, con su énfasis en el espíritu cristiano y el significado nacional del nuevo movimiento, en el respeto a la persona humana y en el rechazo a la sociedad capitalista y a las dictaduras fascistas o socialistas. Defendía una concepción corporativista de la sociedad; la defensa de la familia; la finalidad social de la sociedad; el deseo de justicia social "ni individualista ni socialista"; la necesidad de que el trabajo esté al servicio de los seres humanos, incluyendo una "remuneración justa" y un salario "para la familia", además de libertad de educación, entre otras prioridades fundamentales.

Aunque algunas historias sobre el origen del nombre *falange* la relacionan con alguna referencia vaga al pensamiento de José Antonio Primo de Rivera en España y con cierta tendencia hacia la militarización de la juventud en esos años (milicias) en Europa, Latinoamérica y Chile, el nombre en realidad se tomó de las "falanges macedónicas" de Alejandro Magno en sus guerras de conquista del Asia Menor.[2] Ignacio Palma sugirió el nombre del partido y el símbolo de la flecha roja sobre dos barras horizontales, simbolizando a la política definida como una tarea nacional "más allá de la derecha y la izquierda" (trascendiéndolas), a diferencia de las alternativas ya existentes.

El congreso que dio origen a la Falange Nacional fue un gran momento para la difusión de las ideas socialcristianas en el país y constituyó la semilla del nuevo movimiento que tomaría vida propia después de la "reorganización" de la Juventud Conservadora ordenada el 29 de noviembre de 1938 por la Junta Nacional del Partido Conservador. En 1938, los jóvenes falangistas se negaron a dar su apoyo al candidato presidencial del partido, Gustavo Ross, que era la expresión misma del "antiguo régimen", y en cambio declararon la "libertad de acción" en la contienda presidencial. Esta posición pudo haber contribuido al triunfo de Pedro Aguirre Cerda, el candidato del Frente Popular en la elección presidencial de 1938. Para esa fecha la Falange Nacional había logrado suficiente independencia y madurez para formar un partido, cuya declaración de principios ya había sido bosquejada en la Segunda Convención de la Juventud Conservadora en octubre de 1937.

En ella se definió a la Falange Nacional como "una cruzada que intenta establecer un nuevo orden en Chile" basado en una concepción cristiana de la sociedad a la vez que rechazaba "toda confusión entre religión y política". Se definió a sí misma como un movimiento que "trascendía a la izquierda y a la derecha" y condenó la violencia como

método de acción política. Confirmó los enunciados de su anterior declaración de principios, en especial con respecto a su concepción de la persona humana y del Estado, y rechazó al marxismo, al fascismo y al nazismo. Defendió a la familia como el núcleo básico de la sociedad; favoreció el "significado humano de la economía", y reconoció los sindicatos de trabajadores, entre otras posiciones básicas (Grayson, 1968).

Se puede considerar al periodo entre 1938 y 1957 como una larga jornada durante la cual la Falange Nacional siguió estando integrada por un grupo selecto de líderes inspirados por la doctrina social católica. Procuraba llevar sus ideales al difícil y complicado terreno de la política contingente en condiciones de restricciones económicas y toda otra clase de limitaciones. Lo único que les hizo perseverar fue la fuerza de sus ideales. La búsqueda del testimonio en la acción, el seguimiento de los principios cristianos y de la doctrina social de la Iglesia, la condena continua de un orden al que consideraban injusto, y su posición a favor de un nuevo orden socialcristiano transformaron este pequeño pero selecto grupo de dirigentes en una minoría profética, con características de "cruzada" (como dice en su propia declaración de principios) que atraía pocos votos (véase el cuadro v.2). No obstante, estas características no le impidieron convertirse en un actor político cada vez más importante que gradualmente se ganó el respeto de las otras fuerzas políticas, ante todo por la calidad de sus líderes y el poder de sus ideas.

Durante todo el periodo de 1938 a 1952, la Falange Nacional formó varias coaliciones con los radicales y con los conservadores socialcristianos. Dentro de ese proceso de formación de coaliciones se tuvieron largas discusiones sobre los costos y beneficios de participar en alianzas políticas, especialmente en vista de la necesidad de conformar una nueva clase de partido. Estas discusiones y el intenso debate que se dio entre los líderes de la Falange quedaron registrados en la revista *Política y Espíritu* y en la Editorial del Pacífico, establecidas ambas a mediados de la década de 1940 para difundir las ideas de la Falange.

Quizás el más intenso de estos debates fue el que ocurrió entre el 13 y el 14 de abril de 1946, en el Congreso Especial de la Falange (conocido como el "Congreso de los Barberos" porque se llevó a cabo en la sede de esa organización). Se enfrentaron dos posiciones: la de Bernardo Leighton, apoyado por Eduardo Frei, que favorecían la candidatura presidencial de centro-izquierda del político del Partido Radical Gabriel González Videla, y la de Radomiro Tomic, que defendía una posición "independiente" y prefería al candidato del Partido Conservador, Eduardo Cruz-Coke, que tenía raíces socialcristianas. Después de una prolongada e intensa discusión, esta última posición ganó por 43 votos contra 41. Este apoyo anunció la creación de la Federación Social Cristiana, que se formó en 1953 por la fusión de la Falange Nacional y el Partido Conservador Social Cristiano, el principal predecesor de la democracia cristiana (1957).

Durante este periodo ocurrieron repetidos conflictos con la jerarquía católica, aunque los principales líderes del partido claramente se adherían a la doctrina católica. Como ya se dijo, desde 1934 el cardenal Pacelli, que entonces era secretario de Estado del Vaticano, declaró que ningún partido podía pretender ser el único representante de los

intereses de la Iglesia. Reconoció que los fieles tenían la libertad de establecer organizaciones políticas. No obstante, esta declaración sólo pudo mantener la tranquilidad durante unos pocos años.

El conflicto dentro de la Iglesia católica, y entre el Partido Conservador y la Falange Nacional, llegó a su punto crítico en 1947, cuando la Juventud de la Acción Católica de Chile —un grupo estrechamente relacionado con la Falange Nacional— declaró en un manifiesto que "la mayoría de nuestros católicos dedican sus energías a un anticomunismo estéril y dañino y no se preocupan por proporcionar lo que la gente, los que continúan sufriendo una terrible pobreza, pide con todo derecho" (*Política y Espíritu*, 1947). En una carta publicada el 9 de noviembre de 1947, el obispo Augusto Salinas llamó a los miembros de la Falange "enemigos de Cristo". Invocando lo que dice el Evangelio, "el que no está conmigo está contra mí", atacó la política de "manos extendidas" a los comunistas, los que —dijo en clara referencia a la Falange— "están unidos con estos enemigos de la Iglesia sobre la base de que están de acuerdo con ellos en medidas para el bien común", cayendo así en "sórdidos tratos políticos, en los que se vende a Cristo por un vil puñado de monedas que consisten en favores electorales" (*Política y Espíritu*, 1947). Finalmente, el obispo Manuel Larraín de Talca intervino para impedir la autodisolución de la Falange Nacional, tema que se iba a tratar en un congreso extraordinario del partido convocado para diciembre de 1947.

Después del Concilio Vaticano II se dejaron sentir vientos más liberales en la Iglesia católica chilena, ayudando así a que arraigara el PDC y a que tuviera impacto político. Para ese entonces, la Falange Nacional había alcanzado la plena madurez política dentro de la Federación Social Cristiana. La Falange Nacional tenía ya coherencia ideológica, aceptación por parte de la Iglesia, y alguna influencia política y electoral en Chile. La zona norte del país había elegido como senadores a los falangistas Eduardo Frei (1949) y Radomiro Tomic (1950). Ambos se convirtieron en políticos prominentes muy respetados, y Frei fue impulsado a su primera candidatura presidencial en 1958 por su resonante victoria como senador por Santiago en 1957.

Los democratacristianos surgieron en plena crisis de la administración del presidente Carlos Ibáñez (1952-1958), en una situación en que todo el sistema de partidos estaba en crisis. Los primeros indicios de dicha crisis aparecieron al final de las administraciones radicales (1938-1952), y fue acompañada por una depresión económica, que se manifestó principalmente en una elevada inflación y un grave desajuste de la balanza de pagos, con el consiguiente descontento social. A finales de la década de 1950, este partido, arraigado en el testimonio de los principios fundamentales, se convirtió en un verdadero partido de masas (cuadro VI.1)

El 28 de julio de 1957 se creó el Partido Demócrata Cristiano, como fusión de la Falange Nacional, cuyo representante en el Congreso nacional era Eduardo Frei, y el Partido Conservador Social Cristiano, representado por Horacio Walker. Con una declaración de principios actualizada, en 1963 el PDC se convirtió en el mayor partido de Chile y ha seguido siéndolo hasta el día de hoy. Tres democratacristianos obtuvieron victorias abrumadoras en elecciones presidenciales: Eduardo Frei Montalva (1964-1979),

con 55% del voto; Patricio Aylwin (1990-1994), también con 55%, y Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000), con 58%. Los dos últimos fueron apoyados por una coalición de partidos.

La declaración de principios firmada en 1958 manifiesta que el PDC "lucha por el establecimiento de una verdadera cristiandad, cuya posibilidad histórica surge por la crisis de la civilización moderna". Reafirmó el concepto cristiano de la persona humana y del Estado. En los campos económico y social defendió un "sistema en que la economía esté al servicio del hombre, haciendo del trabajo un factor fundamental en la producción y en la distribución de la riqueza". Reiteró su posición contra el capitalismo liberal y el socialismo colectivo, proponiendo un "régimen democrático" por ser el que está más acorde con una concepción basada en el respeto de los derechos humanos y un sistema social basado en un "orden orgánico" que haga posibles la fraternidad y la solidaridad (Grayson, 1968).

CUADRO VI.1. *¿Con qué posición política se identifica más usted? (porcentajes)*

Fecha	*Derecha centro-derecha*	*Centro*	*Izquierda centro-izquierda*	*Independientes + ninguna + no respondió/ no sabe*
Octubre de 1990	15	30	28	27
Diciembre de 1990	13	30	24	33
Marzo de 1991	18	29	21	33
Julio de 1991	13	23	24	39
Octubre de 1991	20	33	23	24
Diciembre de 1991	22	31	23	24
Abril de 1992	19	25	24	32
Agosto de 1992	23	22	31	24
Diciembre de 1992	27	22	37	14
Marzo de 1993	23	25	34	19
Julio de 1993	23	20	36	21
Octubre de 1993	29	19	33	19
Noviembre de 1993	26	20	34	20
Nov.-dic. de 1993	28	18	37	17
Nov.-dic. de 1994	28	17	28	26
Mayo-jun. de 1995	25	16	24	35
Noviembre de 1995	25	16	26	33
Jun.-jul. de 1996	26	16	24	34
Nov.-dic. de 1996	28	11	22	40
Jun.-jul. de 1997	22	10	21	47
Dic. de 1997-enero de 1998	19	5	20	56
Junio de 1998	22	10	25	43

NOTA: En las últimas siete encuestas la información sólo se refiere a la población urbana.
FUENTE: Centro de Estudios Públicos (1990-1998).

¿Cómo explicar el ascenso de la democracia cristiana hasta el punto en que se convirtió en el mayor partido del país? Cinco factores ayudan a explicar este éxito.

1. Su penetración en el campo y su capacidad de competir con la derecha política por el voto católico (Scully, 1992), lo que se facilitó enormemente por el nuevo ambiente que siguió al Vaticano II en la Iglesia católica. El resultado fue una importante pérdida del apoyo electoral para los partidos del ala derecha, que bajó al 12% en las elecciones legislativas de 1965, la menor cifra obtenida en el siglo XX. Frente a su propia declinación y la creciente fuerza de la democracia cristiana, la derecha pidió al pueblo que votara por el candidato presidencial del PDC,

Eduardo Frei, en 1964, considerándolo el "mal menor" en comparación con el candidato izquierdista Salvador Allende.

2. Su penetración en los sectores populares urbanos, en este caso en competencia con la izquierda. Aunque el candidato socialista, nuevamente Salvador Allende, ganó la presidencia en 1970, su proporción de votos disminuyó durante la administración democratacristiana, de prácticamente 40% en 1964 a 36% en 1970. Durante el mismo periodo, la derecha recuperó una parte importante de sus electores. Aunque la elección presidencial de 1964 fue prácticamente una contienda entre dos candidatos (Frei y Allende), en 1970 se trató de una campaña entre tres candidatos: Allende, Alessandri y Tomic.
3. La habilidad de la democracia cristiana para obtener el apoyo de los estratos medios, que habían surgido por la modernización relacionada con el desarrollo del Estado, la extensión de la educación pública secular y el proceso de industrialización, que recibieron un fuerte impulso en los años treinta. En este caso los democratacristianos competían por los votos con el Partido Radical, vinculado históricamente con los estratos medios, pero que ahora perdió parte de sus electores y sufría divisiones internas. Durante el ascenso de los democratacristianos (1957-1965), el porcentaje del Partido Radical en las votaciones disminuyó de 22.1% en 1957 a 13% en 1965. Durante el mismo periodo, el voto democratacristiano aumentó de 9.4 a 42.3%. Remplazó al Partido Radical en el centro político y a la vez consiguió atraer una parte significativa del voto de la derecha.
4. El liderazgo carismático y la visión modernizadora de Eduardo Frei Montalva, que unió en una verdadera síntesis las raíces socialcristianas del PDC con el desafío de la modernización en Chile y Latinoamérica, estrechamente relacionado con las ideas de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), en particular en los últimos años de la década de 1950. La reforma agraria, la asociación de los pequeños agricultores, la promoción del desarrollo fundamentado en las personas, la nacionalización negociada de las grandes empresas mineras del cobre, las reformas en la educación y los impuestos, la integración económica regional, la atracción de inversión extranjera y un nuevo impulso a la industrialización fueron algunos de los programas realizados por la administración democratacristiana.

   Este impulso democratizador resultó más claro para el presidente Frei que para el PDC, que internamente criticó mucho su administración. El énfasis en la reforma y en la modernización en el gobierno de Frei Montalva produjo tensiones en un partido basado principalmente en ideas y no en políticas y circunstancias, lo que dio como resultado fuertes enfrentamientos entre el partido y el gobierno. Estas tensiones continuaron durante todo el periodo 1964-1970, y originaron graves divisiones y la separación del Movimiento de Acción Popular Unitario (MAPU) en 1969 y de la Izquierda Cristiana en 1971.
5. El marco internacional de la Guerra Fría y el efecto de la Revolución cubana en Chile y Latinoamérica. Esto hizo que los Estados Unidos recibieran con

entusiasmo la "Revolución en Libertad" de la administración de Frei, al menos al principio. Los Estados Unidos vieron al gobierno de Frei como un esfuerzo de reforma fuertemente arraigado en el pueblo. Se presentaba como una alternativa a los partidos comunista y socialista de inspiración marxista y era congruente con la Alianza para el Progreso que el presidente John F. Kennedy promovió a principios de los años sesenta.

Estos factores ayudan a explicar el ascenso y desarrollo del PDC en su fase inicial de crecimiento (Moulian, 1986). El éxito de la democracia cristiana quedó de manifiesto en la elección de Eduardo Frei en 1964 con una mayoría absoluta de votos (55.7%), seguida en 1965 por una victoria abrumadora en las elecciones parlamentarias de ese año con el lema "Un parlamento para Frei" (42.3%). Este porcentaje fue el más alto obtenido por cualquier partido en el siglo XX. Dicho aumento de 1964-1965 se debió en parte a que al partido se le unieron sectores diversos, como los antiguos ibañistas,[3] los conservadores (socialcristianos) y los anticomunistas (y antiizquierdistas en general), que representaban un electorado con un importante componente de centro-derecha. Michael Fleet (1985) muestra que la baja de 42.3 a 29.8% en el voto que experimentó el PDC entre 1965 y 1969 se debió básicamente a que este voto de centro-derecha se dirigió entonces al Partido Nacional.

El ascenso de la democracia cristiana debe analizarse como el de un partido atípico en un sistema multipartidista cada vez más polarizado. Las fuerzas políticas estaban divididas en "tres tercios" (izquierda, centro y derecha). Esta división tripartita finalmente resultó en un "estancamiento catastrófico" dentro del sistema de partidos. Un sistema electoral de representación proporcional, combinado con el multipartidismo y una competencia tripartita, favorecía una situación de "presidencialismo minoritario" y una parálisis entre los poderes Ejecutivo y Legislativo. Estos elementos contribuyeron a la crisis de la democracia chilena (Moulian, 1986; Arriagada, 1985).

El PDC no era un partido de tipo pragmático o de centro que pudiera recibir todo tipo de votos y actuara para reunir fuerzas políticas y convertirse así en un elemento estabilizador del sistema de partidos, como fue el caso del Partido Liberal durante el Estado de compromiso oligárquico en los años iniciales del siglo, o el Partido Radical bajo el Estado de compromiso mesocrático en las décadas de 1930 y 1940 (Scully, 1992; Moulian, 1982). En cambio, el PDC chileno, por lo menos hasta los primeros años de los setenta, estuvo basado en ideales con un sentido mesiánico. Buscaba una posición equidistante de la derecha y de la izquierda, implicando una especie de "tercera vía". Algunos se han referido al PDC como un centro "ex-céntrico", en tanto que otros han subrayado los efectos que este tipo de partido tuvo en la polarización del sistema de partidos y en el desplome de la democracia (Garretón y Moulian, 1983; Valenzuela, 1978).

Lo que los escritos sobre el tema no han mostrado adecuadamente es la medida en que en el sistema de partidos existía una predisposición para constituir una política de alianzas, particularmente en vista del proceso de radicalización de la izquierda socialista,

en especial bajo la influencia de la Revolución cubana (Walker, 1990) y la resistencia de la derecha al cambio social, en medio de creciente polarización en Chile y Latinoamérica. El principal precursor del PDC, la Falange Nacional, había mostrado una significativa propensión a formar coaliciones con los radicales y los conservadores socialcristianos (1938-1952). El mismo Eduardo Frei había estado a punto de convertirse en una especie de primer ministro para Carlos Ibáñez (1952-1958) en medio de la crisis económica y política de esa administración.

El PDC fue el mayor partido político durante más de 35 años (1963-2001), y fue el partido aglutinante durante la coalición de gobierno en los noventa (Coalición de Partidos por la Democracia). De hecho, ha sido de importancia central para la política chilena durante las últimas seis décadas, si contamos el periodo que empezó con la formación de la Falange Nacional a finales de la década de 1930.

EL FUTURO DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA CHILENA

En 1985, Michael Fleet publicó un libro con el sugerente título *The Rise and Fall of Chilean Christian Democracy*. Quince años después, puede decirse que "el muerto goza de cabal salud". El PDC desempeñó un papel clave en el restablecimiento de la democracia; dos de sus líderes (Patricio Aylwin y Eduardo Frei Ruiz-Tagle) gobernaron en dos periodos presidenciales consecutivos, y el PDC se encuentra en el núcleo de la Coalición de Partidos por la Democracia, que es la principal fuerza política de Chile.

No obstante, las perspectivas futuras del PDC son más complejas de lo que esta situación aparentemente favorable parece indicar, y nos presenta una serie de preguntas y dilemas que es preciso enfrentar. La derrota del candidato democratacristiano Andrés Zaldívar ante el candidato del PS-PPD Ricardo Lagos en las primarias de la Coalición el 30 de mayo de 1999 es sólo un episodio en la erosión electoral del partido en los años recientes. A esto debe añadirse la pérdida de 200 000 votos en las elecciones municipales entre 1992 y 1996, y la pérdida adicional de 245 000 votos en las elecciones municipales de 1996 a 2000, así como una disminución de 500 000 votos en las elecciones parlamentarias entre 1993 y 1997. Esta reducción de los votos para el PDC es significativa si se considera que el número de votos a nivel nacional ha permanecido estable aproximadamente en los siete millones de votantes. La derrota en las primarias de 1999 está relacionada con la tendencia al debilitamiento del PDC como partido identificable, así como a la tendencia descendente de los resultados electorales que se aceleró en 2001.

Los *Estudios* del Centro de Estudios Públicos muestran claramente el fuerte descenso en la identificación de la democracia cristiana, de 40% del electorado entre 1991 y 1993, a 20% a finales de la década. Esta disminución no ha tenido como resultado una creciente identificación con otros partidos. En cambio, las categorías "ninguno", "no sabe" y "no respondió" aumentaron, de aproximadamente 20 a 40%. El hecho de que éstos sean votantes "flotantes" más que votantes comprometidos con un determinado partido sugiere que los democratacristianos pueden recuperar esta parte del electorado si

realizan los cambios necesarios.

Mi argumentación es que las posibilidades políticas y electorales del PDC dependen principalmente de su capacidad para enfrentar los desafíos de la "sociedad naciente". Esta sociedad está surgiendo debido a los profundos cambios económicos, sociales y culturales que han ocurrido en las últimas dos décadas, tanto bajo la dictadura militar (1973-1990) como durante los gobiernos de Concertación (1990-2002), a pesar de sus profundas diferencias.

Además, al analizar el futuro también necesitamos examinar los problemas que plantea la longevidad del partido en sus 60 años de historia, la conducta burocrática en él y la inercia resultante, así como la presencia de grupos de poder que no dan mucha importancia a las ideas o a las personas. Estos sucesos están relacionados con el hecho de que el partido ha estado en el poder durante más de una década (1990-2002) y ha tenido dos presidentes, con la inevitable erosión que esto acarrea.

Lo que sigue es una exploración especulativa de la reciente pérdida electoral del PDC y de los desafíos, problemas y dilemas que se presentan para el futuro del partido. Ésta es una investigación tentativa y preliminar de lo que está ocurriendo bajo la superficie en la política chilena, identificando las corrientes más profundas relacionadas con los cambios económicos, sociales y culturales ocurridos en Chile en las dos últimas décadas, con sus puntos positivos y negativos, sus brechas y contradicciones, y en especial sus enormes posibilidades.

La evolución de los partidos políticos chilenos ha ocurrido siguiendo ciertas líneas que han caracterizado a la política nacional en diversos momentos de su historia, requiriendo ciertas definiciones o posiciones que determinan la posición relativa e incluso la viabilidad de las varias fuerzas políticas. La capacidad de dirigir de los diferentes partidos políticos está conformada fuertemente por su capacidad para estar en sintonía con la clase de sociedad en la que tienen que competir e intentar interpretarla y representarla adecuadamente. Ahora trataré brevemente algunos de los dilemas de la política chilena en las décadas recientes, en particular con referencia a la democracia cristiana.

"Reforma o revolución"

Desde finales de los cincuenta hasta los setenta —el periodo en que la democracia cristiana iba en ascenso— el principio organizador (o, de acuerdo con algunos, el principio desorganizador) de la política chilena fue el de la estructura económica y en última instancia el de la propiedad. Según Aníbal Pinto, *Chile: un caso de desarrollo frustrado* (1959), y Jorge Ahumada, *En vez de la miseria* (que trataba de la "crisis integral" de Chile, 1958), desde 1950 y hasta los setenta las "reformas estructurales" promovidas por el centro y la izquierda fueron los temas fundamentales de la política chilena. El periodo se caracterizó por el dilema "reforma o revolución", identificado con los profundos cambios que ocurrían en la economía y la estructura de la sociedad en Chile y Latinoamérica. Éste es el contexto necesario para entender los programas de Frei según el lema "Revolución en Libertad" y los de Allende según el lema "La Vía Chilena

al Socialismo". En ese momento había en Chile dos principales enfoques que competían entre sí del dilema "reforma o revolución".

Durante este periodo, la democracia cristiana se convirtió en un partido de masas y subió al poder bajo el liderazgo encabezado por Eduardo Frei Montalva. El gobierno del PDC fue influido por las ideas de la CEPAL y el programa "Revolución en Libertad" —con una buena dosis de ambigüedad, que captó la imaginación de los que defendían la revolución (como lo sugiere el lema) y la reforma (como lo indicaba su práctica)—. El gobierno de Frei Montalva llevó a cabo una reforma agraria, organizó a los campesinos, negoció la nacionalización de las más grandes minas de cobre, reformó la educación y el sistema tributario, y apoyó la integración económica regional, entre otras medidas cuya finalidad eran los cambios estructurales implicados por este dilema de "reforma o revolución".

"Democracia o dictadura"

Después del desplome de la democracia en 1973 y con la llegada del régimen militar, la política de Chile se organizó siguiendo líneas muy diferentes. La política nacional en los setenta y los ochenta giró en torno del tema de los derechos humanos; sin embargo, en última instancia el asunto clave era el sistema político, el dilema "democracia o dictadura". Este cambio, por el cual el enfoque dejó de concentrarse en las reformas electorales y se desplazó a la propia naturaleza del régimen político, ocurrió en toda Latinoamérica.

En esta situación, la democracia cristiana no sólo adoptó una posición clara en lo tocante al tema de los derechos humanos, sino que a principios de los ochenta se convirtió en una fuerza para organizar y unificar a los que postulaban una solución pacífica a la dictadura con miras a consolidar una democracia estable. Esta política encontró su forma de expresión primero en la Alianza Democrática y luego en la Coalición de Partidos por la Democracia.

Los democratacristianos se convirtieron en una alternativa clara para gobernar, y los candidatos del PDC, Patricio Aylwin (1990-1994) y Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000), ganaron la presidencia después del retorno a la democracia en 1990 (Boeninger, 1997; Aylwin, 1998). A ésta se le puede llamar la nueva "fase de ascenso" de la democracia cristiana si consideramos el camino ya recorrido y su experiencia desde la derrota de Radomiro Tomic en la elección presidencial de 1970, la llegada al poder del izquierdista gobierno de Unidad Popular (1970-1973) y finalmente los 17 años de dictadura. Desde 1970 hasta finales de los ochenta, el partido se vio sometido a muy fuertes presiones y se planteó una serie de preguntas sobre su futuro.

Durante esos 20 años (1970-1990), el partido demostró que no sólo podía sobrevivir a una amplia gama de obstáculos en condiciones adversas, sino que también podía retomar un liderazgo que lo confirmara como la principal fuerza política nacional. Después de la polarización producida por los gobiernos de Allende (1970-1973) y de Pinochet (1973-1990), y en vista de la necesidad de restablecer y consolidar una democracia estable, sólo

el PDC parecía ofrecer una guía. Esto abrió la puerta para que dos de sus líderes fueran elegidos presidentes.

LA DÉCADA DE 1990

¿Qué ha pasado con la democracia cristiana durante la década de 1990 y qué puede esperarse si contemplamos el futuro? El dilema "¡reforma o revolución!", que le dio significado a la democracia cristiana cuando estaba en ascenso, y el de "¡democracia o dictadura!", que proporcionó la base para reconstituir al partido después del golpe militar y la llegada al poder de los gobiernos de Aylwin y Frei Ruiz-Tagle, ya no son los impulsores de la política en Chile. Tal es la situación aun cuando existe un debate legítimo sobre las características de la transición chilena, con sus rasgos positivos y negativos, y lo que aún queda por hacer para asentar firmemente la democracia, lo que básicamente significa realizar las reformas constitucionales que tienen como finalidad eliminar los "enclaves autoritarios".

Desde los años noventa, la política tiene que ver cada vez más con un cambio cultural que todavía se está llevando a cabo en la sociedad chilena, asociado estrechamente con los profundos cambios económicos y sociales introducidos durante el gobierno autoritario y durante la primera década de democracia bajo los gobiernos de Concertación. Este cambio cultural se está llevando a cabo con una rapidez y una profundidad sin precedentes en la historia reciente. Todo este proceso presenta una serie de desafíos y problemas para todas las fuerzas políticas. El futuro del PDC dependerá de lo bien que pueda resolver estos dilemas y desafíos.

La sociedad que surgió desde los noventa es radicalmente diferente de la que Chile había conocido desde finales de la década de 1950. La doble influencia de estos cambios (económicos y sociales por una parte y culturales por la otra) crea un ambiente en apariencia inhóspito para los democratacristianos.

Entre los aspectos comunes a ambos lados de esta doble influencia se encuentra la demanda —o al menos un gran aprecio— por parte de la sociedad civil de una mayor autonomía, en particular frente al Estado, aunque se tiene una opinión positiva de este último. Quizás éste es el nuevo dato básico y la clave para entender a la sociedad que surgió en los noventa en una perspectiva clara de modernización y secularización, que no obstante coexiste con creencias, valores e instituciones asociadas con la sociedad tradicional. La capacidad de enfrentar estos cambios económicos, sociales y culturales en un equilibrio difícil pero necesario entre la continuidad y el cambio determinará los principales alineamientos políticos del futuro. La sociedad que está surgiendo de estas transformaciones, caracterizada por una mayor autonomía de las personas y de la sociedad civil, tiene un poderoso efecto sobre los partidos. Esto constituye un reto de particular importancia para el PDC, que ha sido descrito por algunos observadores como "estatista y conservador" (Jorge Schaulson, ex presidente del Partido por la Democracia, en una controvertida y bien conocida entrevista de prensa con *El Mercurio*).

Cambios económicos y sociales

La realidad (y la demanda) de una mayor autonomía para las personas y la sociedad civil, aunada a una menor intervención estatal en los asuntos económicos, pareciera ir al parejo con la aceptación explícita o implícita de una economía de mercado abierta (que no necesariamente implica la aceptación de la ideología neoliberal) en el contexto más amplio de la globalización. La gran mayoría de las fuerzas políticas, tanto en el gobierno como en la oposición (con la única posible excepción de la izquierda extraparlamentaria, principalmente los comunistas), ha aceptado una economía de mercado abierta como una oportunidad más que como algo inevitable. Esto también puede verse en los programas, discursos y políticas de los dos gobiernos de coalición encabezados por Aylwin y Frei.

La sociedad naciente parecería no tener mayores dificultades con la economía de mercado, aunque tiene una clara opinión positiva del Estado y una demanda enérgica y legítima de una mayor y efectiva igualdad de oportunidades y un sistema de seguridad social que es de las demandas que se dejan sentir con más fuerza. Un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) también muestra que existe esta demanda de seguridad, entendida en sentido amplio, y presenta pruebas de las carencias en este respecto. Empero, sectores del PDC parecen no estar muy dispuestos a aceptar el mercado. La crítica tradicional que ha hecho el PDC del capitalismo liberal y su dificultad para diferenciar entre una economía de mercado abierto y el neoliberalismo como una de las posibles aproximaciones a esta nueva realidad son explicaciones posibles de este fenómeno. En particular, los cambios culturales asociados comúnmente con estas transformaciones económicas, como un individualismo acentuado y el consumismo, se enfrentan a una resistencia en los principios tradicionales de la cultura de la democracia cristiana chilena.

Entre las características de esta nueva situación está la reciente presencia activa de un sector empresarial, ahora con mucha confianza en sí mismo, que está exigiendo (y que en muchos casos ya ha logrado) una nueva legitimidad social.[4] Este sector empresarial es diferente de aquel con el que estamos familiarizados en Chile, que dependía del Estado. En comparación, en la actualidad parece ser muy independiente y está comprometido claramente con el impulso modernizador. Todavía hay una brecha entre este sector empresarial modernizante, que está vinculado con el sector exportador y los servicios dentro de una economía de mercado, y las asociaciones empresariales, cuya motivación es más ideológica y tradicional.

Este nuevo sector empresarial es uno de los rasgos característicos de la sociedad que está surgiendo. No se mezcla fácilmente con los principios tradicionales de la cultura democratacristiana. El partido parece tener todavía un estereotipo que identifica todo lo que tiene que ver con los "hombres de empresa" o con el "sector privado" como algo ajeno, y en realidad perverso y pecaminoso. Esta actitud (o prejuicio) está muy alejada de la forma en que estas cuestiones se desarrollaron en la democracia cristiana europea.

Otra característica fundamental de la sociedad que está surgiendo —quizás la más importante de todas— es el ascenso de un nuevo estrato medio, muy diferente del

tradicional en Chile, que estuvo relacionado con el ascenso y desarrollo del Estado. Considera que sus oportunidades de progreso individual y familiar están relacionadas con la educación y la igualdad de oportunidades más que con la acción del gobierno. Este estrato medio es más independiente y más heterogéneo que el del pasado, y tiene un sentido más claro del significado del esfuerzo personal y familiar como la clave para el progreso y el bienestar. (Es interesante que se puede encontrar una característica similar en los sectores populares, como lo muestra un informe de la Comisión Nacional para la Superación de la Pobreza.)

Un estudio de los sectores urbanos medios en los años noventa indica dos cosas importantes: primero, que estos sectores "esperan menos del gobierno para la solución de sus problemas que los estratos más altos o más bajos" y, segundo, que "la opinión de los sectores medios sobre su situación económica y social es más optimista que la de los otros dos estratos, y presenta una mayor confianza en que las condiciones de vida familiares mejorarán a largo plazo" (en comparación con la de sus padres y sus hijos). Según este estudio, estos sectores medios representan 62.2% de la población, dividida en estratos medio superior (23.9%) y medio inferior (37.3%) (Raczinznski y Serrano, 1997).

Ese estudio fue corroborado por varias encuestas de la opinión pública. Con respecto a los principales factores que explicarían el "éxito económico" de las personas, una encuesta realizada en 1996 por el Centro de Estudios Públicos que preguntaba por las dos alternativas más importantes indica el siguiente orden de preferencia: nivel de educación (37.1%), responsabilidad en el trabajo (34.6%), iniciativa personal (26.2%), contar con una familia que lo apoye (20.6%), situación económica de los padres de la persona (19.1%), relaciones (16.2%), fe en Dios (14.7%), ganancias mal habidas (12.4%), buena suerte (7.3%), políticas económicas del gobierno (5.2%) y ayuda económica del Estado (4.1%) (Centro de Estudios Públicos, 1996).[5]

Estas respuestas dejan en claro que las personas asocian el éxito económico más con el esfuerzo personal y familiar que con la acción del gobierno. Los sectores de ingreso medio le asignan un valor superior al promedio del nivel de educación alcanzado (43.1% en comparación con 37.1%) y a la iniciativa personal (32.9% en comparación con 26.2%); además en esas evaluaciones difieren significativamente de los estratos más bajos (43.1% en comparación con 31.5 y 32.9% comparado con 20.2%, respectivamente). Lo anterior es válido a pesar de ciertos rasgos más peculiares de nuestra cultura, como la importancia que se atribuye a las "relaciones o contactos" o al dinero obtenido mediante ganancias mal habidas, lo que nos dice, entre otras cosas, que la sociedad emergente y el sistema del que forma parte todavía están muy lejos de llegar a niveles de transparencia y de reconocimiento del mérito que sirvan para salir adelante. Por lo tanto, la modernización todavía está incompleta y aún tiene contradicciones.

En vista de que los sectores medios son muy heterogéneos, en vez de hablar de una "clase media" como tal, lo que supone una identidad social y cultural mucho más definida, es mejor hablar de estratos medios vinculados con los cambios económicos, sociales y culturales de los años recientes. Una consecuencia será que sus rasgos más

característicos tienen poco que ver con lo que solía ser la "clase media". Entre esta última "y la nueva clase media no hay grandes continuidades. La nueva clase media no es un retoño de la anterior. Más bien es resultado de una generación espontánea asociada con el impulso del desarrollo" (Medel, 1997).[6] Ese informe indica la gran heterogeneidad de los estratos medios, a los que se define principalmente sobre la base de su ingreso y pautas de consumo, con pocos elementos de identidad social y cultural. La privatización de la economía, el desplazamiento desde el sector público al sector privado, la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo hasta el punto de que ahora son aproximadamente una tercera parte de la fuerza de trabajo, el uso generalizado del crédito (préstamos) y la apertura económica al exterior son algunos de los factores que hacen posible la existencia de estos nuevos sectores medios, cuya mayor aspiración es obtener educación superior —de ser posible universitaria— para sus hijos.

Una de las tragedias para estos nuevos estratos medios, según el estudio, es que "no interesan prioritariamente. En un país en que la distribución del ingreso es muy desigual, la gran prioridad nacional es erradicar la pobreza" (Medel, 1997). La comprensible preocupación de los círculos económicos y políticos por concentrarse en el tema de la pobreza y de la extrema pobreza ha significado que se han hecho pocos estudios sobre los sectores medios. La situación se torna más difícil por la rapidez de los cambios que han afectado la estratificación social de Chile. Aun así, esta nueva "clase media" es sin duda un rasgo característico de la sociedad que está surgiendo.

Según el sociólogo Oscar MacClure (1999), una de las razones subyacentes que dieron origen a estos nuevos estratos medios es el significativo incremento de los niveles de educación para la fuerza de trabajo. El número medio de años de educación para la fuerza de trabajo aumentó de 4.3 en 1970 a 10.2 en 1996. Este aumento en los niveles de educación ha ido acompañado de una notoria disminución en el número de trabajadores manuales (de 77.9% de la fuerza de trabajo en 1952 a 59% en 1999) y, correspondientemente, de un aumento de los trabajadores no manuales de 22.1 a 41% de la fuerza de trabajo en el mismo periodo. Todo esto, junto con otros elementos, está conformando una nueva estratificación en la que predomina la clase media. Según MacClure, sobre la base de los datos de Gil (1966) y de Mideplan (1998), la clase media aumentó de 20% de la población en 1949 a 68% en 1998; el estrato superior permaneció constante en 10%, y los pobres disminuyeron de 70 a 22%. Según otro cálculo estimado, los sectores medios constituyen cerca de 61.5% de la población (Raczynznski y Serrano, 1997, al referirse a los estratos urbanos medios).

Al hacer una encuesta sobre la opinión de los sociólogos y de los economistas, el informe de un periódico concluye que "en ningún otro país del mundo han enfrentado los estratos medios tantos cambios en un tiempo tan corto". Tan es así, que es difícil hablar de una evolución de la clase media, porque lo que ha ocurrido en las décadas recientes ha sido una mutación total de su forma de vida (Michelsen, 1999). Cuando Harald Beyer, Rodrigo Vergara y Patricio Rojas, del Centro de Estudios Públicos, estudiaron las tendencias en el ingreso por estratos sociales, tal como se les citó en ese informe periodístico, con base en estadísticas de la Universidad de Chile, encontraron que los

chilenos ahora están recibiendo en promedio 5.5 veces lo que ganaban en 1960. Aunque hace cuatro décadas la clase media empezaba en el tercer quintil (en la medida en que casi 40% de la población vivía en la pobreza), en 1996 era posible encontrar clase media en el quintil inferior. Han ocurrido grandes cambios en la estratificación social, aunque desde 1990 no han ocurrido cambios importantes en la distribución del ingreso.

En 1998, la distribución del ingreso seguía muy concentrada. Aunque el 20% más rico de los hogares recibía 57.3% de los ingresos independientes, el 20% más pobre recibía sólo 3.7%; la participación del 20% más rico era cerca de 15.5 veces la participación del 20% más pobre. Esto es cierto aunque cuando se tienen en cuenta las transferencias de efectivo por el sector público (subsidios y otros), los ingresos de los dos deciles más bajos mejoran significativamente y el coeficiente entre los ingresos monetarios de los quintiles en cada extremo baja de 15.5 a 13.9 veces (Mideplan, 1998).[7]

Estas cifras demuestran la significativa reducción en los niveles de pobreza, que es congruente con el significativo incremento en los estratos medios. Durante la década, la población que vive en la pobreza disminuyó de 38.6% en 1990 (casi cinco millones de personas) a 21.7% en 1998 (3.2 millones de personas). Esto significa que aproximadamente 1.8 millones de personas superaron la línea de pobreza durante este periodo. Además, el número de personas en condiciones extremas de pobreza disminuyó de 12.9% (1.6 millones de personas) a 5.6% (820 000 personas) (Mideplan, 1998; véase también Frei Ruiz-Tagle, 1999b, p. xii).

La tendencia en los niveles de ingreso y la baja de los niveles de pobreza y de extrema pobreza están asociadas con profundos cambios en las pautas de consumo. De acuerdo con los datos de Oscar MacClure, hoy en día 65% de las personas en los estratos medios tienen una tarjeta de crédito de una tienda o de una empresa y 38% tienen una tarjeta bancaria.[8] Más aún: un artículo publicado en la revista *Estudios Públicos* observa el aumento significativo en el consumo de bienes duraderos por los hogares chilenos, entre ellos automóviles (de 9.5% en 1970 a 28.3% en 1996), televisores (de 6.9 a 82.7% durante ese mismo periodo), refrigeradores (de 3.6 a 73.3%), lavadoras (de 2.6 a 75.4%) y teléfonos (de 40.8 a 46%) durante las últimas tres décadas *(Estudios Públicos)*.

Mientras que en 1990 había 864 000 líneas telefónicas, en 1998 su número era de tres millones; Chile pasó de tener 6.5 líneas por cada 100 habitantes, a 20.4 líneas. En teléfonos móviles (celulares), Chile pasó de 35 000 suscriptores en 1991 a un millón en 1998. El número de hogares con televisión por cable aumentó de 156 000 en 1993 a 701 000 en 1998. La cantidad de computadoras se incrementó de 130 000 en 1990 a 653 000 en 1997, mientras que 280 000 personas ya tenían acceso a internet en 1998. El producto interno bruto per cápita aumentó de 2 100 dólares en 1990 a casi 5 000 dólares en 1999 (Frei Ruiz-Tagle, 1999a).

Aunado a estos hechos, y quizás por la misma rapidez de los cambios y la dificultad de ajustarse y reajustarse a los diferentes estratos sociales, la sociedad naciente tiene conciencia de que el desarrollo es desigual y que junto al país de los triunfadores está el país de los perdedores: los estratos medios empobrecidos; jubilados con bajas pensiones; sectores rurales y personas marginadas en la ciudad relacionadas con economías de mera

subsistencia; empleos que con frecuencia son inestables, de baja calidad y con pagas bajas; jóvenes desempleados; mujeres que conducen hogares en condiciones que apenas llegan a la subsistencia, todo lo cual indica la gran complejidad y los enormes contrastes dentro de esta sociedad.

Para la democracia cristiana, enfrentar estos retos de la nueva sociedad significa dirigirse al país de los ganadores y los perdedores, en el contexto de un desarrollo económico y social desigual y contradictorio, en particular porque los perdedores incluyen importantes sectores que han estado representados históricamente por el PDC. Sería un grave error para el PDC dejarse llevar en forma optimista, mecánica y no crítica por ciertas características estadísticas asociadas con esta nueva estratificación económica y social.

La principal característica de la sociedad nueva, y en especial del enorme y heterogéneo estrato medio que está surgiendo dentro de ella, es su mayor independencia dentro de una economía de mercado abierto. Ellos consideran que una mayor conciencia del esfuerzo personal y familiar es la clave del progreso, a pesar de lo cual exigen al Estado igualdad de oportunidades y una red de seguridad social efectiva.

¿Qué tiene todo esto que ver con la democracia cristiana? El PDC tendrá que definir su posición respecto a esta nueva sociedad. No existe ninguna razón doctrinal —ni, en este respecto, de ningún otro tipo— para que el partido se oponga a una economía de mercado abierto en un contexto de globalización. El mercado abierto debe diferenciarse de una ideología neoliberal, que es sólo uno de los enfoques posibles de una economía de mercado —y que sin duda es incompatible con los principios y posiciones fundamentales de la democracia cristiana—.

Además, no hay ninguna razón, excepto una visión prejuzgada y cierto grado de confusión ideológica, para que el PDC continúe desdeñando al sector privado y a la libre iniciativa de las personas. Después de todo, ¿qué es el "sector privado"? Son personas, con su iniciativa y su creatividad, su habilidad y libertad para iniciar empresas, transformar la naturaleza, crear riqueza y progreso, y lo que es más importante, crear empleos. De los empleos generados en la economía chilena, 85% son creados por el sector privado. Aunque hace un cuarto de siglo el Estado generaba 70% de la producción total del país, actualmente 70% es producido por el sector privado. Si la filosofía política de la democracia cristiana está basada en el concepto de la persona humana, no hay razón para excluir a las personas cuyo trabajo y satisfacción se llevan a cabo en la actividad empresarial.

Además, lo que está en juego aquí es la naturaleza de la economía libre. Desde el punto de vista de la doctrina en que tiene sus raíces la democracia cristiana, no hay bases para justificar un concepto de libertad tan divisible, aceptable en algunos aspectos (políticos, sociales y libertad cultural) pero no en otros (libertad económica). Simultáneamente la libertad debe ser considerada como un todo indivisible, esto es, como política, social, cultural y económica, incluyendo a la libre iniciativa económica y a la capacidad de fundar empresas. La democracia cristiana europea ha entendido muchos de estos rasgos durante un largo tiempo.

En pocas palabras, lo que quiero defender es la necesidad de una nueva ética de trabajo y esfuerzo, con la comprensión de que el verdadero progreso humano está basado en el esfuerzo de personas y familias. Esto no significa rebajar el papel del Estado en sus dos dimensiones de subsidiaridad y solidaridad; no obstante, la comprensión inadecuada de estas funciones no debe servir como pretexto para obstaculizar la iniciativa y la creatividad de las personas, que es quizá la dimensión fundamental de la actividad económica, que es ella misma parte intrínseca de la naturaleza humana y principal fuerza impulsora del desarrollo.

Este enunciado es congruente con la doctrina de la democracia cristiana, en especial en lo que se refiere a lo que ha sido llamado la dignidad del trabajo y del trabajador. Para que esa doctrina sea efectiva, sin embargo, la contraparte necesaria y deseable de la libertad económica y la libre iniciativa de las personas es un Estado activo, en vez de pasivo, en especial en la regulación de los mercados y en la corrección de sus distorsiones, entre éstas la excesiva concentración de la propiedad y el ingreso. En este proceso es importante promover la igualdad de oportunidades y crear una red de seguridad social para salvaguardar efectivamente la dignidad del trabajo y del trabajador. Más allá de la discusión sobre el mercado y el Estado, desde la perspectiva de la democracia cristiana, el impulso del Estado debe ser hacia el fortalecimiento de la sociedad como una comunidad de personas que descubren y desarrollan sus enormes potencialidades.

Finalmente, la democracia cristiana debe prestar particular atención al surgimiento de este nuevo estrato medio. Es más heterogéneo y más independiente del Estado, más consciente del factor del esfuerzo personal y familiar como la clave para el desarrollo y el progreso (sin menospreciar su demanda de igualdad de oportunidades real y de una red de seguridad social). Esto es así porque históricamente el PDC ha desempeñado un papel principal en la representación de la clase media chilena, como lo hizo el Partido Radical en su tiempo.

En las elecciones municipales (1996) y para el Congreso (1997), la democracia cristiana perdió terreno entre los sectores medios. Aunque el partido mantuvo su votación más o menos estable entre los distritos de clase baja urbana y en las zonas rurales —sectores en los que es difícil para el partido obtener votos—, la mayor disminución en los 200 000 votos que perdió entre 1992 y 1996 (elecciones municipales) y en los 500 000 votos que perdió entre 1993 y 1997 (elecciones para el Congreso) se presentó en los sectores medios. Se trata de profesionistas, técnicos, personas relacionadas con la economía de exportaciones y servicios, trabajadores especializados, jóvenes con alguna educación superior, hombres de negocios, líderes de opinión, todos los cuales pertenecen a este nuevo estrato medio, que es una de las principales características de esta sociedad emergente.

Un estudio que correlaciona la conducta electoral de los democratacristianos entre las elecciones municipales de 1991 y 1996 (en las que el partido bajó de 29 a 26% del voto) con el índice de desarrollo humano (IDH), elaborado por el PNUD con base en el censo de 1992, muestra que mientras en los 52 distritos con el menor IDH el partido retuvo su voto

de aproximadamente 23%, en los 52 distritos en que el IDH es más alto (compuesto principalmente por los sectores medios) su participación disminuyó significativamente de 41 a 29% del voto (Cañas, 1998). De acuerdo con el mismo estudio, en los distritos rurales el PDC experimentó una pequeña disminución de 25 a 23 por ciento.

Este fenómeno de cambios en la estructura social del país, asociado con cambios culturales igualmente significativos, es de considerable importancia política y electoral. Cuando Felipe González, el ex presidente de España, se encontró con miembros del Congreso durante una reciente visita a Chile, dijo que una de las razones de la derrota del Partido Socialista en España, además de la corrupción, fue que no había estado lo bastante consciente de las características asociadas con el ascenso de un enorme y nuevo estrato medio. Ellos mismos habían contribuido a su ascenso, pero no habían ajustado lo suficiente su discurso político y sus propuestas a la nueva situación que estaba surgiendo en su sociedad.

En Chile, según una encuesta del Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea (CERC) en 1994, sólo 18% de la población se reconoce o define como "pobre" (CERC, 1994),[9] aunque objetivamente 23% de los chilenos quedan por debajo de la línea de pobreza, a diferencia de 45% en 1987. Así, en términos sociológicos (objetiva y subjetivamente), la población de Chile está compuesta abrumadoramente por un gran estrato medio, aunque se trate de uno que es muy distinto del anterior.

Histórica e ideológicamente, la democracia cristiana siempre ha expresado "una opción preferencial por el pobre". Éste es un rasgo constitutivo del partido. Además, en términos electorales, parece ser un voto básico constante para el partido, en especial en el campo. No obstante, la democracia cristiana también arraigó en sectores medios, y esto es de especial importancia en vista de los cambios que hemos mencionado y de las características que les atribuimos.

Por lo tanto, el reto al que se enfrenta la democracia cristiana implica mantener su opción preferencial por los pobres, lo que está justificado tanto sobre bases éticas como doctrinales, y a la vez tener la capacidad de representar a los nuevos estratos medios, cuyo ascenso es una característica principal de la sociedad nueva. Debe hacerlo sin dañar su capacidad de afirmar que es un partido "nacional y popular", y que por lo tanto puede interpretar y representar a los sectores más numerosos de la vida nacional.

Lo anterior nos lleva a comentar los viejos problemas acerca del centro político, que es donde la democracia cristiana se ha situado y ha tenido un importante papel electoral. La propuesta que quiero presentar es que tratar de proporcionar representación política y electoral para estos nuevos sectores medios con las características de autonomía y heterogeneidad que hemos observado dentro de la sociedad emergente, no significa adoptar una estrategia para conquistar el centro político.

La democracia cristiana nunca se ha definido a sí misma como un partido del "centro", aunque los analistas la hayan situado en el centro político en términos electorales. La Falange Nacional comenzó su existencia como un partido que trascendía a la derecha y a la izquierda, lo que de ninguna manera puede traducirse como una definición centrista. El PDC trabajó con los radicales y con los socialcristianos

conservadores —y posteriormente con los socialistas, dentro de la coalición actual— en varias alianzas políticas, algunas más hacia el centro-izquierda y otras más al centro-derecha. Aun así, esto nunca lo ha llevado a tomar una posición centrista.

Desde sus comienzos, la democracia cristiana reforzó la fórmula de la Falange ("trascendiendo a la derecha y a la izquierda"). Lejos de definirse a sí mismo como un partido del centro, el PDC sostuvo que era "un partido nacional y popular". Además de confirmar uno de los aspectos más característicos del partido, esto es, su naturaleza multiclasista, reafirmó de esta manera su deseo de interpretar a los sectores más amplios de la vida nacional, sin afectar lo que en lenguaje de la Iglesia ha sido llamado la "opción preferencial por los pobres", que el PDC ha podido traducir políticamente con éxito considerable. Por lo anterior, definirse a sí mismo como un partido del centro deformaría las sugerentes definiciones tanto de la Falange como de la democracia cristiana mencionadas antes y perdería la riqueza conceptual y retórica de esas expresiones.

Hay una segunda y más importante razón para evitar una autodefinición de partido centrista. Las encuestas de opinión pública muestran que los que se describen como centristas han decaído significativamente durante la década pasada. La proporción de quienes se identifican a sí mismos como centristas bajó de aproximadamente 30% a principios de los noventa a cerca de 10% a finales de la década (cuadro VI.1). Durante el mismo periodo, los que se identificaban con la derecha y el centro-derecha aumentaron, al igual que quienes respondieron "ninguna", "no sabe", o "no respondió". El número de los que se identificaron con la izquierda y el centro-izquierda permaneció más o menos estable durante la década, luego de un aumento en 1992-1993.

¿Por qué ha ocurrido esto? Una hipótesis es que las alternativas de izquierda y derecha ya no tienen el efecto centrífugo que tuvieron en el pasado, cuando la política estaba más polarizada. En consecuencia, ahora que la izquierda y la derecha ya no son "amenazadoras", el centro ya no tiene el efecto centrípeto que tiende a tener en sistemas multipartidistas como el que existe en Chile.[10] Estos desarrollos pueden explicarse en términos de la crisis de las utopías o de las ideologías, y el mayor acuerdo o consenso que se encuentra en la política chilena actualmente, dentro de un sistema que prefiere por mucho la estabilidad política y la recompensa, en un marco postautoritario.

El centro representa mucho menos de lo que representaba a principios de los noventa e incluso menos que a mediados de los ochenta, cuando en los años finales del régimen militar le correspondía aproximadamente 40% de la opinión pública (cuadro VI.2). La proporción de personas que se describen como "centristas" declinó de aproximadamente 40% a mediados de los ochenta a 10% a finales de los noventa.

Si fuera a definirse a sí misma como centrista, la democracia cristiana disminuiría el enorme potencial que el partido tiene en la representación de vastos sectores de la vida nacional. Según una encuesta de diciembre de 1997 a enero de 1998 del Centro de Estudios Públicos, desde el punto de vista de sus propios seguidores el PDC está compuesto de 22% de personas de la derecha y del centro-derecha, de casi 30% de la izquierda y centroizquierda y de 13% del centro (aunque 60% de los que se identifican con el centro en general —y que, debemos recordar, son el número menor— se

identifican con el PDC), 28% incluye a independientes y a quienes respondieron "ninguno de los anteriores", y 8% no sabía o no respondió (cuadro VI.3).

CUADRO VI.2. *Distribución ideológica del electorado chileno (porcentajes)*

Respuesta	*1958*	*1961*	*1964*	*1970*	*1973*	*1986*
Derecha	31.4	23.8	17.4	26.6	21.9	16.6
Centro	17.8	28.2	29.0	24.2	26.8	41.2
Izquierda	24.5	26.5	32.0	26.0	42.9	14.2
No respondió	26.3	21.5	21.6	23.2	8.4	28.0

NOTA: La pregunta fue: "¿Se siente usted más cerca de la derecha, del centro o de la izquierda?"

FUENTE: Carlos Huneeus, 1987, p. 163, citado en Scully, 1992, p. 257. Los datos anteriores a 1973 se tomaron de Eduardo Hamuy. Los datos de 1986 son resultado de una encuesta de opinión dirigida por el CERC en Santiago, que incluían 889 entrevistas en el área metropolitana (el Gran Santiago).

CAMBIOS CULTURALES

Si la democracia cristiana tiene problemas al tratar con una economía basada en un mercado abierto en el contexto más general de la globalización, del surgimiento de un nuevo sector empresarial y de un estrato medio radicalmente distinto del que Chile había tenido en el pasado, también tiene problemas para responder a los nuevos retos que surgen en torno al núcleo de su cultura. Este punto afecta los principios culturales de la democracia cristiana incluso más que los desarrollos económicos y sociales que acabamos de discutir.

La exigencia por parte de las personas y de la sociedad civil de una mayor autonomía frente al Estado y a ser reconocidos como actores tiene consecuencias no sólo en los asuntos económicos y sociales, sino también en el impulso cultural de la sociedad. Los cambios culturales que están ocurriendo en la sociedad chilena son de una magnitud similar a los de su economía y su estructura social. Pueden ser imperceptibles e intangibles, difíciles de cuantificar o de medir, pero eso no les resta importancia. El reto de la política chilena en general y de la democracia cristiana en particular implica saber cómo dar respuesta a estos cambios y a los nuevos desafíos que presentan. De eso trata precisamente la política, de saber cómo obtener respuestas adecuadas a los nuevos procesos y problemas de cada época. De lo contrario, los partidos políticos desaparecen y son remplazados por otros, aunque esto pueda tomar mucho tiempo, como ha sido el caso históricamente en el sistema de partidos chileno.

CUADRO VI.3. *Ubicación política izquierda-derecha de quienes se identifican con cada partido, diciembre de 1997-enero de 1998 (porcentajes)*

Ubicación política	*PDC*	*UDI*	*PCCH*	*RN*	*PS*	*PRSD*	*UCL*	*AHV*	*P. Sur*	*UCCP*	*PPD*	*Ninguno*	*No sabe*	*No respondió*
Derecha	15	44	—	36	4	11	—	—	36	—	7	5	10	8
Centro-derecha	7	15	2	29	1	—	22	11	—	—	4	1	—	—
Centro	13	2	2	3	3	6	—	7	—	—	6	2	2	3
Centro-izquierda	21	1	17	1	31	35	16	—	—	—	28	1	2	—
Izquierda	8	2	68	1	47	29	22	38	—	—	20	2	8	5
Independiente	17	34	8	22	7	12	39	44	27	42	18	15	12	8
Ninguna	11	3	3	4	—	—	—	—	37	34	5	66	15	21
No sabe	7	—	—	4	5	6	—	—	—	24	13	5	47	2
No respondió	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	4	54

FUENTE: Centro de Estudios Públicos, encuesta (diciembre de 1997-enero de 1998).

Los temas que hay que tratar en el ámbito de la cultura incluyen el lugar y el papel de la mujer en la sociedad; la familia y las profundas transformaciones que han ocurrido y que están ocurriendo dentro de ella; cuestiones relacionadas con la vida en la ciudad (donde vive ahora 83% de los chilenos); el desarrollo urbano y la calidad de vida de los habitantes de las ciudades, y el ambiente y la necesidad de conservar recursos naturales renovables y no renovables. La cultura también implica tener en cuenta la demanda legítima, particularmente entre los jóvenes, de ampliar y profundizar el alcance de la libertad en general y de las libertades específicas en una sociedad compuesta de personas que exigen el derecho de pensar y decidir por sí mismas, con menos intervención del Estado, junto con una demanda de crecientes niveles de pluralismo y tolerancia.

¿Está preparada la democracia cristiana para responder a estos nuevos retos de la sociedad que está surgiendo en el ámbito de la cultura? Las respuestas del PDC tienen rasgos positivos y negativos. Cada uno de los temas que hemos mencionado, que son una muestra de los retos culturales que presenta esta nueva sociedad, deja ver varios motivos de tirantez y de problemas para los democratacristianos.

Por ejemplo, el tema de la mujer puede generar un acuerdo muy general en cierto nivel de abstracción. Pero la política significa pasar al nivel en el que los temas han estado incorporados históricamente y en el que el acuerdo puede resultar más difícil. Eso es lo que ocurrió al PDC en las varias posiciones que se adoptaron, en particular en la legislatura, ante el Cuarto Congreso Mundial de las Mujeres, conocido como la Cumbre de Beijing.

Casi todos los senadores democratacristianos acordaron firmar un borrador, si bien los miembros del ala derecha del Congreso tomaron una posición defensiva sobre las

mujeres y la Cumbre de Beijing. Aunque subrayaron la importancia de la cumbre y realzaron el interés de la participación del gobierno chileno, el acuerdo advirtió que era necesario "conservar los valores esenciales de nuestra tradición nacional". Nosotros, los diputados democratacristianos, tomamos una posición diferente y casi unánimemente firmamos un acuerdo de borrador con el resto de Concertación en oposición a la que habían tomado la derecha y la mayoría de los senadores de la democracia cristiana. Hicimos resaltar los aspectos positivos de la reunión —aunque presentamos críticas— y de lo que significa en una nueva conciencia universal el valor de la mujer y de su insustituible papel en la sociedad contemporánea.

La diputada democratacristiana Mariana Aylwin (citada en Walker, 1999, p. 167), al informar de la Cumbre de Beijing en la Cámara de Diputados, subrayó que los acuerdos de Beijing se habían inspirado "en la afirmación de los valores fundamentales" y que "la igualdad entre hombres y mujeres es un asunto de derechos humanos y constituye una condición para lograr la justicia social". Añadió que "la visión que se aceptó en Beijing" es la afirmación de que la mujer es fundamental para el desarrollo y la igualdad en el mundo "y no el espectro del feminismo radical", así como el "fortalecimiento (no el debilitamiento) de la familia", en que se llama a hombres y mujeres a compartir sus papeles. La diputada cree que el Vaticano ha fortalecido el debate y que ha hecho bien en hacer valer su posición, en especial ante una cultura que habla mucho de garantizar los derechos individuales y no dedica la misma energía a fortalecer los nexos comunitarios de la sociedad, cuyo centro es la familia. Sin embargo, añade que

> la participación de la delegación de la Santa Sede también nos muestra el reto que presenta una sociedad pluralista a quienes profesamos una fe religiosa. ¿Vamos a ver a la sociedad pluralista como una amenaza o como una oportunidad? ¿La enfrentaremos con esperanza o con temor? En Beijing, las posiciones de las musulmanas y de las católicas parecían compartir una visión pesimista de los cambios en el mundo moderno, que a veces se ha expresado en posiciones defensivas y de rechazo de lo que ocurrió allí.

Argumentó que esos acuerdos son "buenas noticias para la humanidad", aunque fue "desconcertante que versiones del mismo acontecimiento puedan diferir tanto".

Mi propósito aquí no es defender una u otra actitud, sino más bien entender las dificultades al tratar asuntos tan delicados como el de la mujer y la necesidad de tomar una posición con respecto a los cambios habidos en la cultura y en los valores, y también señalar las diferencias sobre ellos dentro del partido. Dilemas y cuestiones similares surgen cuando se consideran el tema de la familia y las diferentes posiciones que se encuentran dentro del partido sobre esta cuestión igualmente sensible. Aunque algunos acentúan la "crisis de la familia" y los aspectos de la fragmentación que ocurre dentro de las sociedades contemporáneas y toman una posición defensiva, otros han subrayado los rasgos positivos, así como los negativos, de la familia contemporánea dentro de una sociedad en proceso de cambio.

Presentar una simple lista de los temas en el campo de la ley y de la política pública que han sido debatidos durante la última década nos recuerda las dificultades y discusiones que se han generado dentro del PDC. Las leyes para despenalizar el adulterio

y la sodomía; la regulación de la fertilización asistida; el nuevo estatuto sobre el reconocimiento de los padres, que pone fin a la diferencia entre hijos legítimos e ilegítimos; la ley sobre el matrimonio civil, que incluye el tema de la disolución del lazo matrimonial mediante el divorcio, cuyo borrador hicieron en colaboración varios diputados democratacristianos; la ley de culto, que garantiza la libertad religiosa y la igualdad ante la ley para todas las iglesias y religiones; la ley sobre la adopción y la posibilidad de que parejas estables que no están unidas por el matrimonio puedan adoptar, y programas sobre educación sexual y las Jornadas de Conversación sobre Afectividad y Sexualidad (Jocas), entre muchos otros temas, han sido debatidos en la sociedad chilena en su conjunto y entre los democratacristianos en particular.

Todos implican asuntos de valor que son social y culturalmente sensibles dentro de una sociedad que se encuentra en medio de una profunda transformación. Esos temas y controversias nos llevan al meollo del problema. En última instancia lo que está en juego en la posición de la democracia cristiana hacia la nueva cultura política chilena en los noventa es si se confirma la tendencia a los cambios o si un claro espíritu conservador se adueñó del partido.

Éste es un asunto de identidad (no la llamemos una crisis de identidad). Mi preocupación no es, como se ha dicho frecuentemente, que la democracia cristiana se convierta en un nuevo partido radical (esto es, una fuerza política que experimenta una continua pérdida electoral), sino más bien que se pueda convertir en un nuevo partido conservador (y así retornar a su punto de partida). La verdadera preocupación acerca del futuro de la democracia cristiana es que cierto conservadurismo económico, social y cultural puede enfrentarla a la sociedad naciente de los noventa y, por lo tanto, enfrentarla al futuro.

Esto equivaldría a una negación de los principios culturales básicos de la democracia cristiana. Como ya lo dije, este singular partido único surgió de una fusión de la modernidad y la tradición, como señal de contradicción en un diálogo que no siempre fue fácil entre los principios y la realidad, siempre acompañado por una clara afinidad con el cambio. En el debate sobre las cuestiones de valores que rodean al impulso cultural pueden tomarse al menos tres posiciones alternativas: conservadora (que en nuestro medio tiende a estar asociada con el integralismo católico), liberal individualista (ya sea de la derecha o la izquierda) y pluralista. Esta última posición le ofrece a la democracia cristiana, en vista de su conformación ideológica, social y cultural, y de toda su historia, una excelente oportunidad de combinar su adhesión a ciertos principios humanistas y cristianos con una actitud de apertura al mundo y a los cambios que han acompañado a la sociedad naciente.

El pluralismo así entendido permite aceptar la rica diversidad de la sociedad en que estamos viviendo como algo positivo sin sacrificar la búsqueda de un principio de unidad. Es la vieja cuestión del consenso entendido como "la búsqueda común de la verdad y del bien" o, si se prefiere, la búsqueda de un consenso moral mínimo que pueda actuar como principio para organizar a la sociedad.

En este nuevo marco de profundos cambios en la cultura y en los valores, la

democracia cristiana debe enfrentar (y resolver) una de las cuestiones más difíciles, esto es, la de su relación con la Iglesia católica. Este asunto es particularmente delicado cuando se trata en su aspecto cultural; es particularmente sensible para aquellos de nosotros que además de ser democratacristianos somos católicos practicantes.

El ascenso y el desarrollo del PDC estuvieron estrechamente relacionados con su capacidad de competir y ganar el voto católico a la derecha política. Su naturaleza de partido no confesional y no clerical no le ha impedido obtener un lugar firme en los círculos católicos. La influencia de las enseñanzas sociales de la Iglesia católica fue decisiva desde un principio, y la historia del partido ha estado relacionada con la evolución de la Iglesia de muchas maneras.

Sin embargo, en muchas coyunturas críticas en esta historia, hubo serios conflictos entre la Falange Nacional y la jerarquía de la Iglesia. Este conflicto está registrado en el certificado de nacimiento de la Falange, que surgió a la vida pública separándose del Partido Conservador, al que entonces se le consideraba como la única opción en la política para los católicos.

La oposición de la Falange al régimen de Franco, su oposición a la cruzada anticomunista del periodo que siguió a la segunda Guerra Mundial, y su rechazo de la Ley para la Defensa de la Democracia (1948), que proscribió al Partido Comunista, incluso llevó a algunos sectores de la jerarquía eclesiástica a proponer que se excomulgara a los líderes de la Falange, y éstos consideraron seriamente disolver el partido. Algo similar ocurrió con la doctrina de "la finalidad social" de la propiedad para justificar la reforma agraria en la década de 1960, en particular en lo que respecta a los católicos más conservadores, aunque por esos años estaban soplando nuevos vientos dentro de la Iglesia católica, en especial después del Concilio Vaticano II. En cada uno de estos momentos críticos, algunas voces y autoridades dentro de la Iglesia apoyaron a los líderes del incipiente PDC, cuyo motivo subyacente era llevar a la práctica las enseñanzas sociales de la Iglesia. La respuesta a estas nuevas tensiones que surgieron en los noventa puede encontrarse en esta historia de un partido no confesional y no clerical cuya inspiración es a la vez humanista y cristiana, y que defiende la "debida autonomía para los asuntos temporales".

Una de las características de la nueva sociedad chilena consiste en que cada vez es más compleja, pluralista y diversa. Estas características son evidentes en el terreno de la religión y de la Iglesia. Una de las señales distintivas de este proceso es el menor peso del catolicismo con respecto a las iglesias protestantes y evangélicas. Esto también constituye un nuevo reto para el PDC chileno, que puede beneficiarse si estudia los desarrollos de la democracia cristiana europea, que en muchos casos fueron el resultado de acuerdos entre católicos y protestantes (especialmente en Alemania) con un provechoso diálogo entre ambas partes.

Si la democracia cristiana va a continuar siendo fiel a sus principios y a su propia historia, debe afirmar sin reservas su adhesión a ciertos valores y principios que por lo común son calificados de "tradicionales" y a la vez mostrar una apertura genuina que le permita identificar los profundos cambios por los que ha pasado la sociedad chilena como

una oportunidad, más que como una tragedia. Lo que no puede hacer sin correr el riesgo de contradecir su propia historia y sus principios básicos culturales es dar la espalda a los cambios y transformaciones sociales que está experimentando la sociedad chilena y refugiarse en posiciones característicamente conservadoras que ven estos cambios como señales de un colapso.

EL RETO NEOLIBERAL

Una lectura rápida y superficial de lo que se acaba de plantear, en particular en los campos económico y social, puede llevar a la conclusión igualmente fácil y superficial de que la única solución para el futuro de la democracia cristiana al enfrentar los desafíos de la sociedad naciente es simplemente adoptar el liberalismo económico o el neoliberalismo. Por el contrario, si la democracia cristiana chilena desea convertirse en una alternativa para el futuro, debe hacerlo claramente diferenciándose del neoliberalismo en vez de capitular ante él. Puede hacerlo reconociendo a la vez las contribuciones históricas y políticas del liberalismo y aceptando plenamente los profundos cambios de las dos últimas décadas, a la vez que distingue entre los cambios y los diferentes enfoques ideológicos que se están aplicando.

La democracia cristiana apareció originalmente como una alternativa (que provenía de orígenes socialcristianos) al marxismo socialista y al capitalismo liberal. Esta génesis está registrada en los documentos de su creación. Debido al avance del comunismo entre las dos guerras mundiales y el posterior inicio de la Guerra Fría, una buena parte de la energía y del esfuerzo político e intelectual de la democracia cristiana se destinó a establecer una alternativa progresista que se opusiera al socialismo marxista en Chile y en Latinoamérica. Ya desde los años cincuenta, Jaime Castillo Velasco, el principal expositor del pensamiento de la democracia cristiana chilena, escribió *El problema comunista* (1955). Aunque la democracia cristiana no se unió a la cruzada anticomunista que cubrió al mundo en el periodo de la posguerra y de hecho se resistió a ella, sí criticó fuertemente al campo comunista y a su ideología subyacente, el marxismo.

La situación se acercó más a una aguda confrontación dentro de Chile y Latinoamérica después de la Revolución cubana. Quizás el ejemplo más claro fue el gobierno democratacristiano del presidente Eduardo Frei (1964-1970). Su programa, "Revolución en Libertad", era una alternativa socialmente progresista al socialismo marxista. Ésa fue una de las razones por las que logró representar en las urnas a un fuerte componente antiizquierdista que había sido parte de la cultura política chilena durante muchas décadas.

El desplome del "socialismo real", simbolizado por la caída del Muro de Berlín en 1989, y la llegada del neoliberalismo, del cual Chile se convirtió en campo de prueba bajo la dictadura de Pinochet, significó para la democracia cristiana un escenario diferente. La nueva situación presenta un nuevo reto: el desafío neoliberal. En cierto momento el problema para el partido era constituirse en alternativa para la izquierda (socialista y

comunista); actualmente, el problema es diferenciarse del neoliberalismo.

Esto me lleva a analizar algunas características específicas de la democracia cristiana chilena. Estas características han sido poco estudiadas y es difícil captarlas en una perspectiva comparativa, a pesar de las obvias señales de continuidad con otros partidos democratacristianos en Europa y Latinoamérica. Para empezar, los antecedentes de la democracia cristiana se encuentran en el conservadurismo, no en el liberalismo. El PDC tiene sus raíces remotas en el ahora extinto Partido Conservador. Empezó como rama juvenil de ese partido, y aun cuando la Falange Nacional surgió a finales de los treinta separándose del Partido Conservador, no por esto quedó anulado el pasado. Entre las características de ese pasado histórico es importante resaltar las ideas motivadoras centrales como el apego a la ley, el valor de la familia, el sentido de *patria* (a la cual hay numerosas referencias en los primeros documentos de la Falange), una sensación de que el cambio ocurriría gradualmente, y la temprana contribución de los conservadores al surgimiento del Estado y al desarrollo de una república democrática con la que se identificó el Partido Conservador y que ayudó a conformar en el siglo XIX (a diferencia de la actitud antidemocrática de otros partidos conservadores en Latinoamérica durante ese mismo periodo).[11] Estos rasgos son parte de la herencia cultural de la democracia cristiana y corresponden a valores profundamente asentados en la cultura política chilena incluso en el contexto de la "sociedad naciente" de la década de los noventa.

Lo que caracterizó a la Falange Nacional y, después de 1957, a la democracia cristiana no fue la negación de estos valores y de esta historia, sino antes bien una apertura a las "nuevas cosas" (usando la expresión papal de 1891) de los tiempos, a las que tenían que responder, aunque claramente eran afines al cambio dentro de un delicado equilibrio entre la teoría y la práctica, entre la afirmación de los principios y la situación real a la que se debían aplicar, y entre la continuidad y el cambio.

La relación con el liberalismo económico es más compleja. Desde un punto de vista filosófico, las diferencias entre la democracia cristiana y el liberalismo son significativas. Quizás intentando resumir esas diferencias, Jacques Maritain acostumbraba señalar que al procurar ir más allá del concepto de la persona, el liberalismo sólo llegó al concepto del individuo. En consecuencia, tuvo una visión limitada y parcial de la naturaleza humana, que hace a la persona tanto social como individual.

El PDC debe reconocer que el liberalismo ha hecho importantes contribuciones históricas y políticas, básicamente en su concepción de las libertades y los derechos fundamentales, asociada con las revoluciones estadunidense y francesa de finales del siglo XVIII, y en lo que toca a la democracia representativa como forma de gobierno. Nuestra crítica va dirigida más bien a las formas del *laissez-faire* del liberalismo económico, en especial a sus formas más extremas y en particular a los llamados capitalismo y neoliberalismo "salvajes", con su *economicismo*, su notorio individualismo, y el dominio indisputable del mercado en todos los sectores de la economía y de la sociedad. Además, para el PDC chileno el modelo económico neoliberal establecido bajo la dictadura militar (1973-1990) y la influencia de la economía de la Escuela de Chicago, con su énfasis unilateral en el crecimiento económico y su lógica inexorable, es una razón

adicional para resaltar sus diferencias con el liberalismo económico.

En este nivel, el reto para el PDC implica conocer cómo tratar con la sociedad que está surgiendo por el proceso de modernización de las últimas dos décadas sin claudicar ante el neoliberalismo y a la vez demarcar lo que la separa de este último. Un mínimo de realismo y el reconocimiento del desarrollo y experiencia del partido en el transcurso del tiempo debería llevarnos a cambiar la perspectiva de "remplazar al capitalismo", que puede encontrarse en los orígenes de la Falange Nacional (en el momento culminante de la crisis mundial del capitalismo), por la de "transformarlo", lo que implica una visión crítica con el fin de realizar el cambio social dentro de una economía al servicio de la persona humana.

Entonces, ¿qué es lo específico de la democracia cristiana? Que sus orígenes remotos se encuentren en el Partido Conservador (y en el proceso de separación de éste) dentro de una sociedad en que los valores tradicionales siguen vigentes junto a los profundos cambios que hemos mencionado, y el reconocimiento de que el liberalismo económico ha hecho contribuciones históricas positivas a pesar de la distancia que la separa de él, en particular en los temas económicos y sociales, no debe impedirnos reconocer ciertas características constitutivas especiales del PDC. Desde sus inicios, la democracia cristiana chilena ha pedido cambios cuyo objetivo sea acercarnos a un nuevo orden social caracterizado por la libertad, la justicia social y la solidaridad. Lo ha hecho dentro de un decidido apego a la legalidad —y en un sentido más amplio a la ley— y a cierto sentido de gradualismo en los cambios, lo que implica estar consciente de los límites de esos cambios. Además, su propensión a lo "nacional y popular" fue acompañada por un enfoque político que desde muy temprano se concibió "trascendiendo a la derecha y a la izquierda", y en especial una posición de apertura al mundo y a las transformaciones comúnmente asociadas con la modernidad, lo que implica, entre otras cosas, adoptar y defender la autonomía del partido frente a la autoridad eclesiástica o a cualquier otra concepción religiosa.

Estos rasgos característicos del PDC, si se aceptan plenamente, ubican al partido en una buena posición para hacer frente a la nueva situación de Chile en la actualidad. Esta mezcla de continuidad (tradición) y cambio (modernidad) implica aceptar los profundos cambios económicos, sociales y culturales de los años recientes, pero desde un punto de vista crítico. La democracia cristiana necesita reconocer no sólo los elementos de continuidad presentes en toda su historia (doctrina, valores espirituales y éticos, el sentimiento de pertenencia a la comunidad), sino también los límites y deficiencias en estos cambios más recientes. Aceptar estos cambios profundos no significa capitular sin crítica ante ellos. Lo que se requiere es más bien una combinación adecuada de apertura y de crítica para poder tomar sobre sí esta nueva situación con sus enormes posibilidades junto con sus limitaciones y deficiencias, sin traicionar la esencia de la democracia cristiana.

En los inicios del siglo XXI, enfrentado con las realidades de nuestra era —¿por qué no admitirlo?— y la confusión ideológica prevaleciente, el PDC tiene la gran oportunidad —sin negar su pasado y sus ideas, y en realidad reafirmándolas— de ubicarse como un

partido de inspiración cristiana, humanista, con raíces en el pueblo, que intenta construir una sociedad justa y libre, basada en la solidaridad.

VIENDO DENTRO DEL PARTIDO

También es importante hacer ver los principales problemas y retos que el partido está experimentando actualmente. El PDC es una organización política y una burocracia que en cierta medida está perdiendo impulso o está padeciendo de fatiga. Esta fatiga a su vez está relacionada con su longevidad y el curso que ha seguido durante más de 60 años de historia política.

Hoy en día, la democracia cristiana parece un partido pragmático, cansado, abotagado, que ha perdido su vitalidad y aparentemente ya no es capaz de soñar con una mejor sociedad. El hecho de haber estado en el poder durante la última década —lo que no impidió la erosión del apoyo inherente a todo ejercicio del poder— acentuó esos rasgos de un partido que está ahora en plena crisis interna.

Los que Jaime Castillo Velasco llama "los grupos organizados que perduran en el transcurso del tiempo" se han convertido en un grave problema. Estos grupos son motivados principalmente, si no exclusivamente, por la búsqueda del poder, sin consideración a ideas ni personas, las cuales han estado perdiendo terreno ante el predominio de esos grupos de poder.

Lo que intento aquí no es introducir una nota de ingenuidad en la dura realidad de la política, sino reconocer que históricamente ha existido algo que ha caracterizado la vida interna de este partido de *camaradas* que reflejó, por encima y más allá de las pasiones desatadas y los intensos debates de su historia, cierta vida interna compartida. Los principales puntos de acuerdo han prevalecido sobre los conflictos más importantes. Los democratacristianos chilenos siempre han dicho que "la sangre no llega al río".

Los principios básicos culturales de la democracia cristiana, quizás conservando su propia filosofía política, se han reflejado en la noción de "comunidad de personas". Esta noción denota la lealtad y confianza básicas entre sus miembros. Esta vida interna compartida ha llegado ahora a tropezar con la inexorable lógica de los grupos de poder que han prevalecido en la última década. Este factor ha contribuido a la declinación de la fortuna electoral del partido.

Esos grupos no son nuevos en el partido. Siempre han estado allí; son inherentes a cualquier partido político. Lo nuevo es que las alineaciones internas se explican principalmente, si no exclusivamente, por una burda e implacable lógica del poder, en que las luchas entre las facciones y las personalidades han dejado en lugar secundario al partido y los intereses del gobierno.

A finales de los sesenta, las facciones internas de la democracia cristiana reflejaban una lucha ideológica. Los tipos "oficialistas", "rebeldes" y "terceristas" que surgieron durante el gobierno de Frei reflejaban profundas diferencias ideológicas con respecto a la relación entre el cristianismo y el marxismo, así como los modelos de desarrollo

asociados con una u otra línea de pensamiento. Esta situación llegó al punto en que el conflicto ideológico llevó a una división dentro del partido con la creación del MAPU ("rebeldes") en 1969 y de la Izquierda Cristiana ("terceristas") en 1971.

Las diferencias en los últimos años de la década de 1970 y en la de 1980 fueron más de naturaleza política y estratégica y tuvieron que ver con la mejor forma de tratar con la dictadura y restablecer la democracia. Las diferencias entre los progresistas *chascones* y los más conservadores *guatones* eran sobre la intensidad de la oposición a la dictadura, sobre los tipos preferidos de alianzas sociales y políticas y el tipo de organización que permitiría conseguir el doble objetivo de terminar la dictadura y restablecer la democracia.

Una vez alcanzados estos objetivos y con el partido en el poder como núcleo de una nueva coalición de gobierno, los alineamientos internos se convirtieron en "grupos de poder", motivados por una lógica de producir y reproducir el poder. Estas facciones controlaron el partido y el gobierno sin importar la temática, las políticas o la ideología. Por lo general están relacionadas con algunos de los dirigentes del partido, los que a pesar de todo se negaron a reconocer que estos grupos fueran de alguna manera creaciones suyas, sin duda conscientes del enorme daño que han causado a la vida interna del partido. Esta burda lógica del poder que ha llegado a caracterizar los alineamientos internos supera los límites de la debida consideración a las ideas y las personas. Esto es quizás lo más preocupante acerca de esta nueva situación interna.

Actualmente el PDC posee dos importantes cartas de triunfo para aspirar a tener una decisiva presencia política en el futuro. Primero, el partido tiene ideas que están arraigadas en una doctrina y en una filosofía que aún son pertinentes. Estas ideas y esta doctrina necesitan actualizarse en un lenguaje y en un discurso, en un programa y en políticas públicas, que nos permitirán visualizar hoy en día la forma en que estas ideas se aplican en un mundo que tiene poco en común con el de la década de 1930, cuando se creó la Falange Nacional, o con los años sesenta, cuando se desarrolló el PDC y se convirtió en un partido de masas y llegó a gobernar.

Segundo, el PDC tiene dirigentes capaces reconocidos nacionalmente. A pesar de la crisis por la que ha pasado el partido, una encuesta efectuada en abril-mayo de 1998 por el Centro de Estudios Públicos indicó que siete de las 10 figuras políticas más estimadas en Chile son democratacristianos: Soledad Alvear (primer lugar), Gabriel Valdés (tercero), Eduardo Frei (quinto), Patricio Aylwin (sexto), Alejandro Foxley (séptimo), Andrés Zaldívar (octavo) y Jaime Ravinet (décimo).

El problema es que el partido no está prestando la atención necesaria a las ideas y a las personas (los conformadores de la opinión pública). El PDC está enredado en una lucha de poder interna, atascado en la maquinaria del gobierno, como si deseara seguir avanzando por pura inercia, y como si se hubiera asegurado a sí mismo un lugar en la política chilena. Por ejemplo, es casi patético que ninguno de los siete personajes políticos del PDC más estimados por el público ocupe puestos de liderazgo dentro del partido. Todos son funcionarios elegidos o designados del gobierno que relucen en la esfera pública por encima y en forma independiente de la vida y las luchas internas del

partido.

La actual crisis de la democracia cristiana puede convertirse en una oportunidad para que lleve a cabo un proceso de renovación interna y desarrolle un discurso y unas propuestas políticas que hagan que el partido marche una vez más al paso de la sociedad que está surgiendo y desarrollándose, paradójicamente, como resultado de las mismas políticas que ha seguido cuando ha estado en el gobierno, aunque el partido y algunos activistas hayan aplicado estas políticas sólo con renuencia. El PDC tiene el desafío y la capacidad de participar en la nueva sociedad y en la nueva economía. La democracia cristiana tiene mucho que ofrecer al pueblo chileno y mucho que ganar como partido haciendo frente con éxito a este reto, pero el tiempo de hacerlo puede estar agotándose. Para decirlo en forma directa, la alternativa es declarar que ésta es una crisis terminal en un partido que no sólo está perdiendo apoyo electoral sino que además, lo que es más grave, está en decadencia.

REFERENCIAS

Ahumada, Jorge, 1958, *En vez de la miseria*, Santiago, Editorial del Pacífico.

Arriagada, Genaro, 1985, *Chile: el sistema político futuro*, Santiago, Editorial Aconcagua.

Aylwin, Patricio, 1998, *El reencuentro de los demócratas: del golpe al triunfo del no*, Santiago, Grupo Zeta.

Boeninger, Edgardo, 1997, *Democracia en Chile: lecciones para la gobernabilidad*, Santiago, Editorial Andrés Bello.

Boye, Otto, 1986, *Hermano Bernardo*, Santiago, Editorial Aconcagua.

Cañas, Enrique, 1998, "Los partidos políticos", en Christian Toloza y Eugenio Lahera (eds.), *Chile en los noventa*, pp. 53-90, Santiago, Presidencia de la República-Dolmen.

Cash, Jorge, 1986, *Bosquejo de una historia, Falange Nacional (1935-1957)*, Santiago, Copygraph.

Castillo Infante, Fernando, 1997, *La flecha roja*, Santiago, Editorial Francisco de Aguirre.

Castillo Velasco, Jaime, 1955, *El problema comunista*, Santiago, Editorial del Pacífico.

Centro de Estudios Públicos, 1990 a 1999, *Estudio nacional de opinión pública*, Santiago, Centro de Estudios Públicos.

Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea (CERC), 1994, *Barómetro CERC*, marzo.

Estudios Públicos, 1970, núm. 14.

Fleet, Michael, 1985, *The Rise and Fall of Chilean Christian Democracy*, Princeton, Princeton University Press.

Fomento, 1999, revista publicada por Corfo, marzo.

Frei Montalva, Eduardo, 1955, *La verdad tiene su hora*, Santiago, Editorial del Pacífico.
Frei Ruiz-Tagle, Eduardo, 1999a, "Speech of President Eduardo Frei Presenting the UNDP Report on Human Development for 1999", mimeografiado.
———, 1999b, *Mensaje a la nación*, 21 de mayo, Santiago, Secretaría General de Gobierno.
Garretón, Manuel Antonio, y Tomás Moulian, 1983, *La Unidad Popular y el conflicto político en Chile*, Santiago, Editorial La Minga.
Gil, Federico, 1966, *The Political System of Chile*, Boston, Houghton Mifflin.
González Cruchaga, Carlos, 1997, *Historia de una polémica: monseñor Manuel Larraín y los orígenes de la democracia cristiana chilena*, Santiago, Fundación Eduardo Frei.
Grayson, George, 1968, *El Partido Demócrata Cristiano chileno*, Buenos Aires, Editorial Francisco de Aguirre.
Instituto Nacional de Estadísticas (INE), 1999, *V Encuesta de Presupuestos Familiares (1996-1997)*, Santiago, INE, junio.
MacClure, Oscar, 1999, artículo con datos del INE, 1999, y encuesta del CASEN, 1996, *El Mercurio*, 25 de abril.
Medel, Lorena, 1997, "La nueva clase media", *Capital*, octubre.
Michelsen, Alejandra, 1999, "Clase media, ¿mejor o peor que antes?, *El Mercurio*, 25 de abril.
Mideplan (Ministerio de Planificación y Cooperación), 1990 a 1998, *Encuesta CASEN, pobreza y distribución del ingreso en Chile*, Santiago, Mideplan.
Moulian, Tomás, 1982, "Desarrollo político y estado de compromiso", *Colección Estudios Cieplan*, 8, julio, pp. 105-158.
———, 1986, "La DC en su fase ascendente. 1957-1964", Flacso, Documento de Trabajo 288, abril.
Pereira, Teresa, 1994, *El Partido Conservador, 1930-1954: ideas, figuras y actitudes*, Santiago, Editorial Universitaria.
Pinto, Aníbal, 1959, *Chile: un caso de desarrollo frustrado*, Santiago, Editorial Universitaria.
PNUD, 1998, *Desarrollo humano en Chile, 1998: paradojas de la modernización*, Santiago, Editorial Trineo.
Política y Espíritu, 1947, noviembre-diciembre, pp. 27-28.
Raczynznski, Dagmar, y Claudia Serrano, 1997, "Estratos medios urbanos y políticas públicas", Asesorías e Inversiones Corporación Latinoamericana, informe final, mayo, mimeografiado.
Scully, Timothy, 1992, *Los partidos del centro y la evolución política chilena*, Santiago, Cieplan-Notre Dame.
Silva Bascuñán, Alejandro, 1949, *Una experiencia social cristiana*, Santiago, Editorial del Pacífico.

Valenzuela, Arturo, 1978, *The Breakdown of Democratic Regimes: Chile*, Baltimore, Johns Hopkins University Press.

Valenzuela, J. Samuel, 1985, *Democratización vía reforma: la expansión del sufragio en Chile*, Buenos Aires, Ediciones del IDES.

Walker, Ignacio, 1990, *Socialismo y democracia: Chile y Europa en perspectiva comparada*, Santiago, Cieplan-Hachette.

———, 1999, *El futuro de la democracia cristiana*, Santiago, Ediciones B, Grupo Z.

[*] Este capítulo es una versión ampliada de la ponencia que presenté en el seminario "Christian Democracy in Europe and Latin America" en la Universidad de Notre Dame, en abril de 1999. Se publicó una versión de ella como capítulo 3 de mi libro *El futuro de la democracia cristiana* (1999).

[1] El autor añade que, junto con este antecedente que encuentra sus raíces en el socialcristianismo europeo, había otro representado por personas como los historiadores y ensayistas Alberto Edwards, Francisco Antonio Encina y Guillermo Subercaseaux, que estaban procurando resucitar las tendencias autoritarias del monttvarismo. [El autor hace aquí una referencia al presidente chileno Montt (1851-1861) y a su ministro Varas.]

[2] Esto lo confirma Bernardo Leighton en Boye (1986, p. 60): "La Falange española tenía cierto carácter de tipo fascista que nosotros rechazábamos y contra el cual luchamos desde el principio". Aunque Garretón, Palma y Jorge Rogers eran entusiastas campeones de las formas que estas milicias estaban adquiriendo —en particular para enfrentar las amenazas y ataques de las milicias socialistas, nazis y comunistas—, Leighton, Frei y Tomic se les opusieron.

[3] Seguidores del general Carlos Ibáñez del Campo, quien fue presidente de 1952 a 1958. Los seguidores de Ibáñez primero se unieron en el Partido Agrario Laborista. Se trataba de clases medias y populares del campo y la ciudad, que eran independientes y estaban a favor del orden, además de ser firmemente anticomunistas.

[4] Según un reciente estudio en Chile (*Fomento*, 1999), hay 526 920 empresas, compuestas de microempresas (432 431) y pequeñas (78 805), medianas (10 870) y grandes (4 814) empresas. A ellas se deben sumar las microempresas del sector informal, compuestas principalmente por trabajadores autoempleados, cuyo número se estima en 400 000.

[5] Puesto que se podían elegir dos alternativas, el total es superior a 100%. En la misma encuesta, más informantes pensaban que los sectores medios son más propensos a creer que tienen mayores oportunidades de progreso personal que sus padres (71.2%) que el promedio de los encuestados (60%) y los estratos más bajos (50.7%).

[6] Agradezco al historiador Claudio Ortiz Lazo por los comentarios basados en este capítulo y por sus propias observaciones, que me envió en una carta el 26 de noviembre de 1997.

[7] La *V Encuesta de Presupuestos Familiares (1996-1997)* (INE, 1999) registra un resultado más alentador. Indica que el 20% más rico recibió 50.3% del ingreso, mientras que el 20% más pobre recibió 6.3%. A pesar de la diferencia metodológica que podría explicar este resultado diferente, está claro que la distribución del ingreso sigue estando muy concentrada.

[8] Estas cifras son un poco más bajas según el Centro de Estudios Públicos (1998) para el periodo diciembre de 1997-enero de 1998. Señala que 48.1% dicen que tienen una tarjeta de crédito de una tienda o empresa, y 25% dicen que tienen una tarjeta de una institución financiera o bancaria.

[9] La pregunta tiene que ver con la autoclasificación de los entrevistados por clase social, con la siguiente distribución: clase alta (0.1%), media alta (4.4%), clase media (46.2%), media baja (29.9%) y baja (18.3%). Un total de 1.3% no sabían o no respondieron.

[10] Me encontré por primera vez con esta hipótesis en una entrevista personal con Óscar Godoy en la que se trató del primer borrador de este capítulo, y la comparto firmemente. Con respecto al sistema de partidos, tenemos en mente el actual sistema moderado multipartidista y no el sistema polarizado de finales de los sesenta y principios de los setenta.

[11] Este punto ha sido poco estudiado pero fue tratado en forma magistral por J. Samuel Valenzuela (1985). Hace énfasis en la valiosa contribución del Partido Conservador al proceso de la democratización política en la segunda mitad del siglo XIX.

VII. EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL (PAN): DE LOS MÁRGENES DEL SISTEMA POLÍTICO AL CENTRO DEL CAMBIO

SOLEDAD LOAEZA

EL 2 DE JULIO del año 2000, el Partido Acción Nacional (PAN), en alianza con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), ganó la presidencia por medio de su candidato, Vicente Fox. También se convirtió en el partido más numeroso en la Cámara de Diputados, con 224 escaños, mientras que en el Senado por un estrecho margen quedó en segundo lugar con 53 curules, después del Partido Revolucionario Institucional (PRI). La derrota del PRI a nivel presidencial representó la conclusión de una larga jornada hacia un régimen democrático, recorrido que México había empezado dos décadas antes.

Para el PAN, esta victoria fue también la culminación de un proceso largo y difícil, por el que se convirtió en un importante protagonista en la dinámica del cambio después de varias décadas de irrelevancia y marginalización. Desde sus principios, la doctrina del partido estuvo inspirada por las enseñanzas sociales de la Iglesia católica, y muchos de sus líderes y simpatizantes provenían de organizaciones laicas católicas. No obstante, en contraste con otros partidos en Latinoamérica que fueron organizados originalmente con una clara identidad cristiana, Acción Nacional mantuvo, desde su fundación en 1939, una relación ambigua con el componente doctrinal religioso. Por una parte, los líderes del partido se negaban a admitir vínculos obvios con el pensamiento y las organizaciones católicos, pero, por la otra, dependían de ambas clases de recursos para la supervivencia del partido. Esta ambigüedad terminó en 1998, cuando el PAN se convirtió en miembro pleno de la organización democratacristiana internacional. Paradójicamente, el partido dio este paso cuando la influencia de las ideas católicas y de los católicos como tales dentro del partido había sido superada por el influjo de las ideas liberales de finales del siglo XX y por la llegada, desde organizaciones empresariales, de un nuevo tipo de miembros y simpatizantes.

La ambivalencia del PAN hacia sus componentes religiosos puede explicarse por el anticlericalismo del régimen revolucionario que explícitamente prohibía partidos con filiación religiosa. Tradicionalmente, los analistas del PAN han mostrado la tendencia a verlo como una expresión partidista de los conflictos entre la Iglesia católica y el Estado que surgieron durante la Revolución; además, para algunos el PAN no era nada más que el brazo político de las guerrillas de la Cristiada.[1] No obstante, hay muchas razones para evitar identificar al partido con la Iglesia. Primero, después de los conflictos del periodo revolucionario, la jerarquía católica estableció canales de comunicación directos con el Estado, lo que hizo innecesaria la existencia del partido para defender sus intereses. De hecho, una organización semejante podría volver a encender la enemistad del pasado. Segundo, la relación entre la religión y la política era en sí un asunto de desacuerdo

dentro del partido; grupos que tenían una visión más secular de la política se oponían a una corriente más orientada hacia la Iglesia.

La ambivalencia de Acción Nacional hacia sus componentes religiosos no debe llevar a subestimar la importancia de la identidad del partido derivada de las ideas, creencias y valores que proporcionó el catolicismo. Esta identidad le permitió al PAN sobrevivir a la hegemonía del PRI y a la indiferencia de la mayoría de los votantes que hasta principios de los ochenta se abstuvieron característicamente de votar. La identidad "doctrinal" del PAN fue la base de la imagen de independencia que lo diferenciaba de otros partidos de oposición que, en fuerte contraste con Acción Nacional, se presentaban a sí mismos como miembros de la misma tradición política del PRI.

La importancia de entender la identidad doctrinal del PAN se encuentra en que ejemplifica el papel estructural de las ideas en la formación de las instituciones. Durante décadas, una doctrina específica y original dentro del régimen revolucionario era todo lo que el PAN tenía en ausencia de votos, votantes y representantes electos. Sin embargo, la ambivalencia de la identidad del partido fue agravada por el contexto institucional. El desarrollo del PAN estuvo condicionado por un sistema político autoritario que otorgaba una posición ambigua a los partidos en general, y específicamente a los de la oposición. En el caso del PAN esta ambigüedad era más pronunciada: la tolerancia relativa hacia él contrastaba con la intransigencia con que se trataba a los opositores que rechazaban las reglas del juego electoral. Éstos incluían a los sindicatos independientes y al Partido Comunista Mexicano (PCM). Los líderes del PAN tomaban parte, en cierta medida, en la vida pública, especialmente en el campo del periodismo, en el que escribían para publicaciones de circulación nacional. Aun así, el PAN sobrevivió al periodo autoritario porque no presentaba ninguna amenaza ni al PRI ni al Estado. Su patente incapacidad para desafiar al poder —durante años ni siquiera lo intentó— hizo que pareciera que su existencia se debía más a una deferencia del Estado que a su capacidad para expresar una opinión política divergente.

El PAN permaneció en la oposición casi por el mismo número de años en que el PRI mantuvo su hegemonía electoral absoluta. Fundado al calor de la crisis política que se presentó al concluir el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas (1934-1940), el PAN insistió en representar a una minoría inconsecuente mientras el PRI era el gobernante supremo. Durante este periodo no era una oposición relevante y su participación en las elecciones apenas proporcionaba ocasionalmente una pequeña válvula de seguridad para disminuir las tensiones políticas de los grupos de interés minoritarios. No obstante, durante este periodo, y asumiendo este papel limitado, el PAN nunca comprometió su imagen de independencia, desarrollando la credibilidad que se habría de convertir en el pivote del cambio político en los ochenta. Su experiencia contrasta con la de otros partidos de la oposición de las décadas de gobierno autoritario (1946-1983) —el Partido Popular Socialista (PPS, 1948-1997) y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM, 1954-1994)— que, a diferencia del PAN, no sobrevivieron a la transición de la hegemonía del PRI al sistema multipartidista.

La supervivencia de un partido con esos rasgos en un régimen autoritario no es

sorprendente porque no presentaba ninguna amenaza al orden existente. Más difícil de explicar es la forma y la razón por la que logró transformarse en el instrumento político de los sectores más modernos de la sociedad que, en la década de los ochenta, lanzaron una ofensiva contra el autoritarismo en un momento en que el propio Estado pasaba por una crisis financiera, económica y política.

Este capítulo sigue el proceso de institucionalización del PAN, las funciones que llevaba a cabo en un régimen autoritario y el papel que tuvo en el desmantelamiento del autoritarismo en las dos últimas décadas del siglo XX. También busca explicar los factores que contribuyeron a la transformación del partido, que pasó de ser un componente relativamente pasivo del sistema político a un líder muy activo del cambio al convertirse en una alternativa electoral efectiva. En este capítulo se mostrará que la supervivencia y la adaptación fueron posibles gracias a que el PAN adquirió una doble identidad: por una parte, era una organización ideológica construida en torno a una doctrina; por la otra, se convirtió en un partido que atraía los votos de protesta de todo tipo de personas que deseaban expresar oposición y rechazo al partido en el poder.

El capítulo está dividido en seis secciones. La primera analiza la posición del PAN en el sistema autoritario de México. La segunda se concentra en la doctrina del partido, que ayudó a conformarlo y a sostenerlo, y proporcionó la piedra angular para su identidad particular. La tercera y cuarta secciones describen las posiciones adoptadas por el PAN en el periodo autoritario entre 1946 y 1979, además de las funciones que desempeñó, teniendo en cuenta su dependencia en los actores políticos clave: el Estado, la presidencia, el PRI y la Iglesia católica. La quinta trata de la transformación del PAN durante los años ochenta, cuando se convirtió en un agente del cambio político y en un canal para la descentralización, representando a las élites locales en su oposición a la élite nacional. Finalmente, la sexta sección describe y explica el papel del PAN en la construcción de un sistema multipartidista en México.

EL CONTEXTO INSTITUCIONAL

Las características del autoritarismo mexicano, en que el Estado era el actor político fundamental, fueron determinantes en el desarrollo del PAN y de cualquier otro actor político que, en vista de la abrumadora presencia del Estado en el sistema político, tenían una posición subordinada en lo que se refiere a su fuerza, posiciones e iniciativas. En este sentido, al PAN no se le puede separar del Estado, y su conducta fue en gran medida una función de la relación acción/reacción que sostuvo con el Estado, el PRI y otros partidos.

La historia del PAN en el periodo autoritario también estuvo condicionada por la estructura institucional que proporcionaba la Constitución de 1917, en la que se establecía un sistema de sufragio universal y directo (para los hombres de más de 21 años de edad; en 1953 se aprobó el sufragio de las mujeres, y en 1970 se redujo a 18 años la edad para poder votar) como base de la soberanía popular y las elecciones como la ruta legítima para acceder al poder. A partir de 1920, la periodicidad de las elecciones

fue escrupulosamente obedecida y los candidatos de los diferentes partidos competían por los cargos de elección en tanto que los ciudadanos cumplían con su deber de votar. Las disposiciones constitucionales presuponían un sistema multipartidista y fueron cumplidas incluso durante los años de la hegemonía del PRI (1946-1982). Así, el número de partidos políticos reconocido oficialmente —que participaban en las elecciones de los diferentes niveles— en el México del siglo XX variaron de más de 100 en los años veinte a 40 en el periodo 1946-1970, y aproximadamente a 10 en el último cuarto del siglo. Sin embargo, la noción de democracia presentada por la Revolución mexicana no estaba tan asociada con el pluralismo político o la competencia de los partidos como con el intervencionismo estatal en busca de la igualdad social, la prosperidad y la modernización.

Durante la mayor parte del siglo XX, los comprehensivos objetivos de un régimen que insistía en sus compromisos "revolucionarios" requirieron de unanimidad política, lo que implícitamente impedía la clase de fracturas ideológicas que presupone un sistema multipartidista. A la vez, la tarea de la transformación social requería de autonomía en la toma de decisiones, la cual implicaba la centralización de los recursos económicos y políticos. Esa autonomía no permitía que fuerzas diferentes al Estado participaran en la toma de decisiones. En el marco de lo establecido por la experiencia revolucionaria, los partidos políticos y la competencia entre los partidos amenazaban interferir con los objetivos supremos de la transformación social. De manera similar, la existencia de un sistema alternativo fuera del PRI por medio del cual se podían representar intereses particulares —sindicatos, organizaciones empresariales, asociaciones religiosas y otros grupos de presión— hacía que los partidos no fueran necesarios.

Bajo la hegemonía del PRI, la ineficacia del voto desalentaba la participación en las elecciones y la formación de partidos. Sin embargo, la necesidad de realizar elecciones periódicas hacía necesario tener partidos, si bien la combinación de instituciones informales y el recurso al fraude electoral hacían imposible la democracia multipartidista. Por lo tanto, las autoridades del Estado toleraban e incluso alentaban a estas organizaciones, a las que incluso se les asignaba un papel en la representación de las corrientes minoritarias de opinión. No obstante, los partidos continuaron teniendo una institucionalización muy débil. Sin autonomía, eran meros instrumentos; no podían trascender la lógica personal de sus líderes o de los grupos que los apoyaban y que también estaban subordinados al Estado.[2] Tampoco podían aumentar su base electoral, renovar a sus líderes o ampliar su base representativa. Además, sin ninguna posibilidad de lograr acceder al gobierno, no tenían ninguna presión para formular propuestas políticas serias.

Por lo tanto, el desarrollo de los partidos políticos se veía obstaculizado por el abrumador peso del Estado, la naturaleza del presidencialismo y el impulso a la unanimidad que ejercía el partido oficial. Estas características del sistema político dificultaban el desarrollo de organizaciones políticas autónomas. Así, por ejemplo, los partidos realizaban funciones de socialización, agregación de intereses y, a veces, transmisión de demandas. Pero poco hicieron para establecer límites sobre el poder de la

presidencia (en vista de la debilidad de la legislatura) o para ofrecer una alternativa al PRI. En vez de actuar como partidos políticos, trabajaban como grupos de interés limitados, sin la capacidad o el deseo de ampliar sus horizontes. En el peor de los casos, se convirtieron simplemente en un mecanismo por el cual el Estado podía transmitir ciertos mensajes a la sociedad, como la importancia de realizar elecciones para mantener una "aspiración democrática".

El limitado pluralismo del autoritarismo mexicano permitía la representación de los intereses, pero los votantes no podían ejercer efectivamente su derecho a oponerse. El gobierno rara vez respetaba las reglas de la competencia establecidas por la legislación, y había muy poca tolerancia a los oponentes políticos; en el peor de los casos sus demandas eran reprimidas violentamente. El derecho de oposición no podía ser ejercido porque los partidos o no eran "reales" y el propio gobierno los había patrocinado, o aunque reales, es decir, independientes, eran demasiado débiles para ser considerados instrumentos útiles de participación política. Los partidos que se identificaban con la élite, como el PPS y el PARM, eran útiles para canalizar el descontento individual o colectivo y como medios para distribuir recompensas o privilegios.

El PAN realizaba funciones diferentes. Se le percibía como un partido opositor más "real" que los otros por varias razones. Sus líderes no habían sido parte de la coalición original del partido oficial, y fue organizado como un rechazo a ciertos *éxitos clave* de la Revolución (reforma agraria, educación controlada por el Estado, control estatal sobre las actividades y funciones de la Iglesia católica), y mantuvo en forma irreductible y tenaz —en ocasiones desesperada— la denuncia de las prácticas electorales antidemocráticas del gobierno.

Por lo anterior, la posición del PAN resultaba ambivalente: era más "real" porque era independiente. Sin embargo, la cualidad de independiente que se reconocía en la oposición del PAN, aunque legal, no estaba del todo legitimada porque la "reacción" era la única alternativa posible a la "Revolución". Sin importar las creencias y objetivos reales del PAN, en el México del PRI se asociaba a la "regresión política" con una fuerza "reaccionaria" y más generalmente con el papel de los "enemigos del pueblo", esto es, la burguesía y la Iglesia católica.

EL DILEMA DE LA PARTICIPACIÓN

El PAN nació sufriendo de un "dilema de participación" —dilema que todos los partidos de oposición enfrentan al elegir entre el cogobierno y la oposición—. El primero implica contribuir al funcionamiento de los acuerdos institucionales de los que es parte, apoyando de ese modo las funciones del gobierno mediante una "oposición leal"; la segunda implica obstaculizar las funciones del gobierno —a veces incluso las de las instituciones políticas— con miras a obtener el poder.

Hasta finales de los setenta, dentro del PAN surgía el dilema de la participación a medida que se aproximaba la fecha de las elecciones, si bien en términos que variaban según las circunstancias. En 1939 el debate se presentó entre los que veían al partido

como un instrumento para lograr participar en las responsabilidades del gobierno —apoyados por el fundador del PAN, Manuel Gómez Morin— y los que, como Efraín González Luna, su ideólogo principal, descartaban que la participación electoral fuera una prioridad; en cambio, daban importancia a la difusión de la doctrina del partido y a reconocer como una responsabilidad prioritaria la educación política de los militantes y ciudadanos en la doctrina del partido.[3] El debate se convirtió en algo recurrente en los años siguientes. Aun cuando los participacionistas (los que apoyaban la participación electoral) eran más que los abstencionistas (los que promovían el abstencionismo electoral), la persistencia del debate refleja las tensiones producidas por el contexto institucional. Dentro del PAN había importantes voces muy críticas de la indulgencia del partido con el PRI y el Estado, y a veces incluso atacaron al PAN por aceptar algún papel menor en un juego electoral que era secundario en la política mexicana.

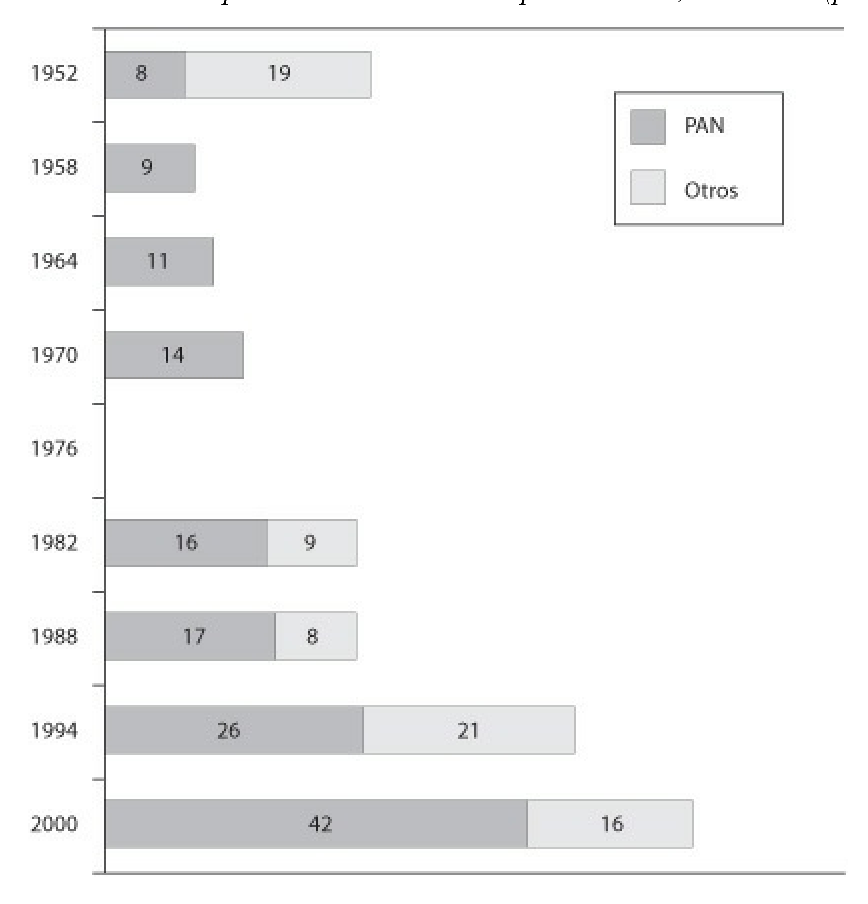
Desde su fundación en 1939, el PAN se comprometió con la política electoral y de partido como método de cambio. De hecho, su defensa de la democracia representativa y su rechazo de la violencia y de la retórica que la acompaña fueron distintivos en un momento en que la violencia todavía estaba presente. El PAN empezó comprometido fuertemente con las instituciones del orden constitucional, desempeñando el papel de "oposición leal" (Linz, 1978) dentro de las instituciones y procedimientos democráticos. El compromiso apuntaló toda candidatura para cargos legislativos o ejecutivos a partir de 1943. Sólo en 1976 se hizo tan agudo el dilema de la participación que una seria división interna le impidió al partido presentar un candidato presidencial. El papel de "oposición leal" aumentó la ambigüedad y proyectó al partido en una luz negativa como un mero cómplice del PRI.

No obstante, la lealtad democrática no fue suficiente para sostener al partido. Su debilidad en este respecto fue compensada parcialmente porque su compromiso con una democracia electoral distinguía al PAN de otras fuerzas políticas y le daba una credibilidad de la que carecían otros partidos. Por lo tanto, el PAN pudo desarrollarse también como un partido de protesta, un partido para todos, que podía capitalizar el descontento de los votantes, independientemente de su doctrina y programas de gobierno. Ese apoyo de los votantes le dio cierta vitalidad, en especial en el nivel local. En las elecciones presidenciales de 1958, 1964 y 1970 el PAN monopolizó el voto contrario al PRI. Mientras tanto, el PPS y el PARM apoyaron al candidato presidencial del PRI. En 1976 ni siquiera hubo un contendiente formal opuesto al PRI; cuando el PAN no presentó candidato, dejó solo al candidato del PRI porque éste también era el candidato del PPS y del PARM (gráfica VII.1).

El hecho de que el PAN haya sido —y siga siendo— un partido que capta el voto de protesta explica las variaciones en su nivel de apoyo. Entre 1952 y 1979, cuando el PRI era el gobernante incontestado, el voto del PAN en las elecciones federales varió sólo ligeramente entre 9 y 11%, a pesar de divisiones y crisis periódicas, aumentando un poco en el periodo 1970-1976. En contraste, cuando después de 1982 el sentimiento contra el PRI se expresó cada vez más abiertamente, su participación en el total de votos aumentó. Su éxito como partido que podía atraer a todo tipo de personas fue completo cuando en

el 2000 su candidato, Vicente Fox, recibió los votos de un número considerable de simpatizantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que desde su fundación en 1989 atrajo a los votantes de la izquierda del espectro ideológico. Sin embargo, como el candidato del PAN logró convertir la elección presidencial en una movilización contra el PRI, el partido se benefició de una reacción negativa, más que de un apoyo positivo a la alternativa del PRI que él representaba (cuadros VII.1 y VII.2).

GRÁFICA VII.1. *Resultados de la oposición en las elecciones presidenciales, 1952-2000 (porcentaje del voto)*



FUENTE: Loaeza, 1999; Instituto Federal Electoral (www.ife.org.mx).

LA DOCTRINA DEL PAN

Un rasgo característico del PAN ha sido su insistencia en poseer una doctrina. La preocupación de los fundadores del partido por adoptar una doctrina clara en 1939 fue una respuesta a las condiciones de esos años, porque la ideología era la principal arma de los socialistas y los comunistas. Manuel Gómez Morin estaba convencido de que una doctrina sería el único medio de asegurar la continuación de su proyecto (Gómez Morin, 1927). Pensaba que una doctrina ayudaría a diferenciar al partido de las varias organizaciones efímeras que surgían al calor de las elecciones, por lo general en torno a candidatos que se promovían a sí mismos.

El proyecto original del PAN se inspiró mucho en algunas propuestas para "una tercera vía" entre el liberalismo y el socialismo y en la educación intelectual de Gómez Morin. Ésta fue inspirada por las ideas filosóficas de Henry Bergson, el corporativismo tradicionalista de Charles Maurras y el pensamiento de la derecha *civilista* española en la que se apoyaba la dictadura modernizadora del general Miguel Primo de Rivera (1923-1930) (Gómez Morin, 1928). En esta experiencia encontró Gómez Morin, al igual que muchos otros profesionistas de Latinoamérica en esos años, un modelo para integrar

técnicos a las tareas de administración y desarrollo de la economía que procuraban modernizar el país y la creación de un "nuevo capitalismo" en que la intervención del Estado controlaría a los banqueros y transformaría el perfil de la distribución de la riqueza. A ojos de Gómez Morin, la naturaleza no democrática de la dictadura de Primo de Rivera estaba justificada hasta cierto punto porque buscaba la justicia social con autoridad. Sin embargo, en el México de los treinta, una propuesta tecnocrática encontró poco eco.

CUADRO VII.1. *Distribución de los votos en la elección de diputados federales, 1943-2000 (porcentajes)*

Año	PRI	PAN	*Oposición otros*	*Oposición total*
1943	92	1	1	2
1946	74	2	24	26
1949	94	6	0	6
1952	74	9	17	26
1955	90	9	1	10
1958	88	10	2	12
1961	90	8	2	10
1965	86	12	2	14
1967	83	12	4	16
1970	80	14	2	16
1973	70	15	5	20
1976	80	9	6	15
1979	70	11	14	25
1982	69	18	13	31
1985	65	16	15	31
1988	51	18	31	49
1991	62	18	21	39
1994	49	25	23	48
1997	39	27	34	61
2000	37	38	23	61

NOTA: No se incluyen los votos invalidados.
FUENTES: Loaeza, 1999; Instituto Federal Electoral (www.ife.org.mx).

CUADRO VII.2. *Distribución de los votos en la elección de senadores, 1964-2000 (porcentajes)*

Año	PRI	Oposición		
		PAN	Otros	Total
1964	88	11	1	12
1970	80	14	1	15
1976	80	8	6	14
1982	65	16	11	27
1988	51	18	31	49
1991	61	18	17	35
1994	49	25	23	48
1997	38	27	35	62
2000	39	38	23	61

NOTA: No se incluyen los votos invalidados.

FUENTES: Silvia Gómez Tagle, *Las estadísticas electorales de la reforma política*, México, El Colegio de México, 1990; Cuadernos del CES, núm. 34; Presidencia de la República, Unidad de la Crónica Presidencial, *Crónica del Gobierno de Carlos Salinas de Gortari 1988-1994*, vol. 8, México, FCE, 1994; Instituto Federal Electoral (www.ife.org.mx).

La búsqueda de una doctrina llevó a Gómez Morin a Efraín González Luna, un católico militante cuyo trabajo determinó la conformación final de la identidad del PAN. La doctrina del PAN evolucionó siguiendo muy de cerca los cambios en la doctrina social de la Iglesia y en el pensamiento católico. La encíclica *Rerum Novarum* del papa León XIII, publicada en 1891, fue una referencia central en los documentos iniciales sobre la doctrina del partido, como lo fueron las ideas de pensadores católicos franceses, entre ellos Jacques Maritain, Paul Claudel, François Mauriac y Charles Péguy. En los sesenta, el documento resultante del Concilio Vaticano II, *Gaudium et Spes, Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el Mundo Actual*, se convirtió en el punto de referencia para actualizar la doctrina del PAN, y se reflejó en la elaboración de un nuevo documento sobre doctrina. Los cambios más recientes a este respecto han implicado la adopción de *solidarismus* como doctrina oficial del partido. Ésta es una propuesta desarrollada a partir del pensamiento de católicos alemanes como Karl Jaspers, Max Scheler y Oswald von Nell Bruening, así como de las encíclicas del papa Juan Pablo II sobre el trabajo y la cultura. La adopción del *solidarismus* llevó directamente al PAN a unirse a la Internacional de la Democracia Cristiana en 1998.

Antiliberalismo

La principal separación ideológica entre el PAN y la tradición revolucionaria es su antiliberalismo. Aunque los revolucionarios se consideraban continuadores de una tradición que es muy rica en ideas, para el PAN el liberalismo había sido la tragedia del México del siglo XIX. Colocando al individuo en el centro del universo, era una propuesta que había destruido las comunidades y sociedades naturales como la familia, la

municipalidad y el gremio. El antiliberalismo es una constante en la doctrina del PAN, al igual que lo es en el pensamiento católico que ha pasado del corporativismo, el antiindividualismo y el integralismo de la primera mitad del siglo XX a la aceptación del pluralismo y la democracia liberal en el tiempo del Concilio Vaticano II.

La hostilidad al liberalismo también se basaba en diferentes conceptos con respecto al ámbito de la autoridad pública y de la sociedad como comunidad natural. El PAN siempre ha sostenido una posición que admite el intervencionismo estatal, pero sólo para regular los antagonismos sociales. Ha defendido la municipalidad, a la que considera como una comunidad natural inviolable; el partido también ha apoyado la descentralización y el Estado pequeño. A diferencia de la élite revolucionaria, los panistas no creían que el Estado representaba a la nación, más bien creían que el Estado es el principal enemigo de la nación. A finales del siglo XX ese pensamiento había evolucionado a una oposición entre el Estado y la sociedad civil. Esto no significa que el partido haya dejado a un lado la crítica del liberalismo. Antes bien, mantiene la visión de la sociedad como una jerarquía armoniosa de cuerpos o corporaciones intermedias que culmina en una autoridad pública paternalista y tutelar que es la nación. En el estado de Guanajuato, el gobernador panista Carlos Medina Plascencia (1991-1994) procuró reconstruir la sociedad local siguiendo esos lineamientos.

El aggiornamento *del PAN*

El Concilio Vaticano II fue la respuesta de la Iglesia católica a los desafíos del socialismo en la segunda mitad del siglo XX. En Latinoamérica este desafío tomó forma después de la Revolución cubana, que había generado tanto temor como admiración. Aparentemente, los países que intentaban superar el subdesarrollo se enfrentaban a una elección entre la reforma y la revolución.

Para el PAN, el Concilio Vaticano II fue una oportunidad de enfrentarse al mundo real después de los años de aislamiento a que lo obligó el autoritarismo, así como su propia estrategia de supervivencia. El documento *Gaudium et Spes* reconcilió a la Iglesia con las instituciones de la democracia liberal como la única forma de organización política que podía garantizar su autonomía, integridad y libertad. Aceptó el pluralismo político y la diversidad natural de las opiniones políticas entre los miembros de la Iglesia.

El entonces presidente del PAN, Adolfo Christlieb Ibarrola (1962-1965), desempeñó un papel importante en la resolución de algunas de las ambigüedades más notorias del partido en relación con la Iglesia católica al promover su secularización sobre la base de los cambios introducidos por el concilio. Aceptó los postulados de la Iglesia con respecto a las instituciones políticas liberales y opiniones divergentes de los cristianos en lo tocante a asuntos temporales. Rechazó la idea de un partido católico como tal e insistió, en cambio, en la necesidad de una organización secular (Christlieb Ibarrola, 1963, 1965, 1969). Christlieb Ibarrola criticó a los católicos que ponían en peligro la universalidad de la Iglesia relacionándola con formas políticas y culturales que, por su naturaleza misma, cambian constantemente. Según Christlieb Ibarrola, "los cristianos deben evitar cobijarse

bajo las enseñanzas teológicas de la Iglesia. Deben estar conscientes de que cuando la Iglesia habla lo hace en el nombre de Dios, para bien de los hombres, pero no puede convertirse en vocero de una determinada fuerza electoral" (1969, p. 22).

En junio de 1965, un nuevo documento doctrinal, *Principios de Doctrina*, fue elaborado con vistas a incorporar en los documentos del partido los cambios que habían sido introducidos en la doctrina social y nociones contenidas en *Gaudium et Spes*. Como resultado del nuevo hincapié en la solidaridad, la primacía de la persona y las virtudes del pluralismo, se llevó a cabo una revisión de las prioridades y de los temas principales. El PAN empezó a considerarse como una oposición constructiva, ansiosa de participar en las responsabilidades del gobierno.

La influencia del Concilio Vaticano II fue aún más lejos bajo el liderazgo intelectual de Efraín González Morfín, que fue presidente del partido en los años 1975-1977. Hizo suyas las propuestas más radicales de la "Iglesia popular", la *Iglesia de los pobres*. El centro de estas enseñanzas era la teología de la liberación, que abandonó la defensa del *statu quo* y se comprometió con la promoción de los derechos humanos. Esta reorientación del partido originó una fuerte batalla interna que amenazó su propia existencia a finales de los setenta y a la postre llevó a una dolorosa escisión. Aun así, la influencia del radicalismo era clara en la plataforma social y política de 1970, que se llamó Reforma Democrática de Estructuras. Ésta proponía la introducción de una legislación y unos mecanismos jurídicos que darían acceso a los derechos de propiedad sobre la producción a los "obreros, campesinos, empleados y otros" y "medidas legales" que promoverían "el desarrollo de un espíritu de toma de decisiones, responsabilidad e iniciativa entre los trabajadores en las empresas y establecerían formas practicables de enseñanza socioeconómica y coadministración" (PAN, 1969).

Solidarismus ***y democracia cristiana***

Con el rápido crecimiento del partido en los años ochenta, hubo un nuevo intento de definir la doctrina, llevado a cabo por el entonces presidente del PAN, Carlos Castillo Peraza (1990-1993). La principal diferencia entre este reajuste de la doctrina y otros realizados en el pasado fue que el PAN ya era un partido en el gobierno. Tenía una quinta parte de todos los escaños en la Cámara de Diputados, en la que el PRI sólo tenía la mitad. También gobernaba en numerosas municipalidades importantes y en el estado de Baja California. En esas circunstancias, los líderes del partido pensaban que la redefinición doctrinal había llegado a tener una considerable importancia práctica, porque en ella veían una referencia necesaria para planear programas y políticas efectivos. También, para Castillo Peraza y los *doctrinarios*, la doctrina del partido sería útil para responder a los retos del crecimiento y a los perturbadores efectos del considerable ingreso de nuevos miembros al partido. Este compromiso terminó con la ambigüedad del PAN hacia sus componentes religiosos y hacia la adopción de propuestas democratacristianas de gobierno.

En materia de ideas y valores, la propuesta católica a finales del siglo XX es el

solidarismus, y su premisa básica es la convicción de que la humanidad es el pilar del orden social y que la solidaridad es inherente a las relaciones humanas. Rechaza el colectivismo porque subordina la persona a la "voluntad colectiva". También repudia la idea liberal de que el logrado desarrollo del individuo y su libertad consiste en lograr la plena independencia de cualquier lazo social y rechaza la indiferencia del liberalismo hacia la espiritualidad humana.[4] Según González Morfín, "estar en solidaridad significa ser interdependiente: personas de personas, personas de la sociedad, la sociedad de las personas y las sociedades de una en otra" (1992, p. 19).

El *solidarismus* tiene claras continuidades con el pensamiento católico anterior a la segunda Guerra Mundial. Prevalece la concepción moralista de que la política no trata de dominio y de conflicto, sino más bien de valores compartidos. También presenta una visión organicista de la sociedad. No obstante, el *solidarismus* se aleja de la ley natural, de modo que su jerarquía de comunidades ya no está vinculada por un orden natural sino más bien por una interdependencia necesaria que mantiene el principio ordenador de una jerarquía de metas y objetivos.

El principal adversario del *solidarismus* es el liberalismo porque considera al individualismo como una consecuencia negativa de la fragmentación social producida por la modernización, la vida urbana, el mundo industrial, el capitalismo desenfrenado y el mercado sin control. Para el *solidarismus* todos estos fenómenos son las bases del totalitarismo. Esto es así debido a que la naturaleza indefensa de la vida social conduce a la invocación de una autoridad absoluta. Esta doctrina ha recibido el apoyo del papa Juan Pablo II,[5] para quien la persona es el origen, la portadora y el objetivo de toda vida social.

El *solidarismus* identificó al PAN muy estrechamente con las posiciones tomadas por el Vaticano. Con esta proximidad a las ideas del papa, la participación del PAN como miembro de la Internacional Demócrata Cristiana fue una consecuencia natural. En 1987 el partido se convirtió en miembro de la Organización Demócrata Cristiana de América. Castillo Peraza justificó este paso con el argumento de que la caída del socialismo había traído consigo la aparente victoria del liberalismo, así como la necesidad de fortalecer "las familias culturales y políticas que no niegan por una parte la necesidad de respetar el mercado y la libertad de iniciativa económica, pero que, por otra parte, subrayan la responsabilidad social entre las personas, los grupos y las empresas, y la necesidad de una orientación ética" (1993, p. 24).

La democracia cristiana trata de ofrecer soluciones diferentes del liberalismo y del socialismo. Reconoce la necesidad de un moderado y limitado intervencionismo estatal en los asuntos culturales, la educación y el mercado. Argumenta que el Estado debe garantizar una visión filosófica (moral) de la educación. Rechaza la idea de una armonía natural en el mercado (Dierickx, 1994; Keinmann, 1993) y considera necesaria la regulación y el ejercicio de la autoridad pública sobre los actores económicos. La idea es crear un Estado regulador con una participación limitada en la actividad productiva y dedicado principalmente a corregir las deformaciones del mercado y asegurar una mejor distribución del ingreso. Sin embargo, en los inicios del siglo XXI, la democracia cristiana

mostró que no había permanecido insensible a las reformas liberales del periodo previo. Los documentos que se discutieron en la asamblea internacional llevada a cabo en México en 2001 muestran que dos pilares del credo liberal han sido adoptados ya como propuestas democratacristianas: el principio de igualdad de oportunidades y el papel de la educación en la liberación del individuo de las desventajas sociales. El Estado prácticamente ha desaparecido de estos programas políticos, pues ha sido sustituido por el concepto de "gobierno" cuyas responsabilidades sociales deben entenderse solamente en su política de salud y de seguridad pública. Así, esta nueva fórmula es más secular que en el pasado y más autónoma de la doctrina social de la Iglesia.

La influencia de la democracia cristiana alemana sobre el PAN fue clara en los noventa, en especial su crítica del Estado excesivamente grande y de la elaboración de las políticas económicas. El partido adoptó la economía social de mercado, el respeto a la propiedad, la iniciativa privada y los derechos de la persona, basando su enfoque en la creencia de que los diferentes sectores de la sociedad son socios en la creación de la riqueza y no rivales o enemigos.[6] Desde 1988, las campañas presidenciales y las plataformas políticas del PAN fueron inspiradas por esas propuestas. Sin embargo, durante la campaña electoral de Fox en el año 2000, esta influencia fue opacada por las demandas pragmáticas de los Amigos de Fox y por el estilo populista del candidato.

La doctrina del PAN cumplió varias funciones diferentes. Primero, sentó las bases para una identidad política más precisa que la de otras corrientes de opinión, cuyo punto de referencia eran las ideas generadas por la Revolución mexicana. De esa herencia, el PAN sólo reconoció las ideas del instigador de la Revolución, Francisco I. Madero, que había combatido contra la dictadura de Porfirio Díaz con el lema "Sufragio efectivo, no reelección". Rechazó la educación laica, el colectivismo y el anticlericalismo, otros principios centrales del credo revolucionario. Segundo, gracias a su identidad doctrinal, el partido pudo mantener una congruencia interna cuando estaba solo en un contexto autoritario. Finalmente, los vínculos con el pensamiento católico establecieron una conexión entre el partido y los desarrollos ideológicos de fuera de México.

No obstante, para sus adversarios ideológicos, la doctrina del PAN era una prueba de que se trataba de un partido contrarrevolucionario, un instrumento de la jerarquía de la Iglesia y del Vaticano. Con el paso del tiempo, su doctrina ciertamente influyó en el partido, ayudándole a subsistir durante los prolongados años de dominio del PRI. Se convirtió en la norma de legitimidad dentro del partido. Tal fue el caso durante los años de rápido crecimiento del partido en los setenta, y su aceptación de la doctrina en 1980 se convirtió en una condición para la autoridad, la legitimidad y la pertenencia al partido. Por implicación, los "doctrinarios" eran los miembros del partido que tenían un fuerte sentido de servicio, en tanto que los "pragmáticos" estaban motivados por la ambición de llegar al poder. La ignorancia de la doctrina fue motivo de reproche. Muchos militantes han visto este énfasis en la doctrina como una camisa de fuerza que limitó la expansión potencial del partido. La división entre los doctrinarios y los pragmáticos seguía presente después de la elección del 2000. Incluso después de la victoria de Vicente Fox continuó siendo causa de tensiones internas y base del distanciamiento que separaba al pragmático

Fox de los miembros más “tradicionales” del PAN en sus primeros meses en el cargo.

LOS AÑOS DEL PARTIDO CONFESIONAL: 1946-1961

El proyecto fallido de una derecha secularizada

En 1939, Manuel Gómez Morin no propuso establecer una organización para defender los derechos de la Iglesia católica. A corto plazo, el PAN fue una respuesta al PRM, la organización corporativista establecida por el presidente Lázaro Cárdenas en 1938 que agrupó a los trabajadores, los campesinos y los militares. Esto hizo surgir preocupación y temor entre quienes pensaron que representaba el avance del socialismo. Más aún, el PAN tenía profundo arraigo entre aquellos sectores excluidos del poder en un momento en que la Revolución había creado una hegemonía cultural, en que el Estado era la referencia básica. El proyecto de Gómez Morin fue parte de un plan más general para establecer una defensa más vasta contra el Estado. Aunque el PAN fue fundado en un momento en que las heridas causadas por la rebelión cristera todavía estaban frescas, Gómez Morin era conocido como un intelectual y abogado distinguido que había sido rector de la Universidad Nacional, más que como un católico militante. No quería que el partido fuera *de* católicos, sino *para* católicos, en la medida en que no estuvieran conformes con un Estado todopoderoso que intervenía en áreas que a sus ojos sólo correspondían a la familia, como la educación y la práctica religiosa. Gómez Morin tenía otros puntos de convergencia con los católicos mexicanos que se oponían al anticlericalismo revolucionario: creía en el orden y en la autoridad. Consideraba que la religión era un componente de la identidad cultural mexicana y pensaba que las normas de la moral pública caían dentro de la jurisdicción de la Iglesia católica. Sin embargo, sostuvo firmemente una visión secular de la política. A pesar de esto, la evolución del PAN lo llevó a convertirse en un partido confesional, conformado por la situación política general, la polarización entre la izquierda y la derecha, y, después de 1945, la reorientación del Estado y del partido oficial.

En sus primeros años, el PAN fue una organización tambaleante. Se le construyó con base en una red de relaciones personales que Gómez Morin había creado durante sus años como funcionario público, rector de la Universidad Nacional (1933-1934) y abogado independiente. Contó con el apoyo de un importante grupo de académicos, de profesionistas destacados y de hombres de negocios. De éstos, sus anteriores colegas y estudiantes en la universidad fueron de importancia decisiva. Esto no sólo se debió a su número, sino porque la mayoría provenía de asociaciones estudiantiles católicas y habían tenido sus primeras experiencias políticas en la lucha contra los radicales revolucionarios. También, además de ser católicos militantes, los seguidores universitarios de Gómez Morin eran una élite bien educada que deseaba participar en la modernización del país. Creían poseer la capacidad técnica necesaria para emprender la transformación propuesta por la Revolución. Esta alianza entre Gómez Morin y los católicos, que inicialmente fue una unión de conveniencia, tuvo una influencia decisiva a largo plazo sobre el destino del

partido.

Los difíciles principios del partido también fueron consecuencia de la inestable situación política de la época. Esto fue resultado de la fragmentación producida por la lucha armada y de que la élite carecía de una idea clara del papel que debían desempeñar los partidos y la oposición en el naciente sistema político. En este ambiente de confusión institucional, los panistas, siempre una minoría concentrada en la ciudad de México, tuvieron un papel muy modesto en las elecciones federales de 1943 y en las presidenciales de 1946. En cada una de esas ocasiones tuvieron la esperanza de abrir el sistema político. Al menos, esto es lo que el gobierno de Ávila Camacho (1940-1946) les hizo creer. En el marco de la segunda Guerra Mundial y con la influencia de los Estados Unidos en ascenso, el gobierno parecía inclinado a promover un sistema de dos partidos. Por ejemplo, procuró el apoyo del PAN cuando México declaró la guerra a las potencias del Eje. En varias ocasiones, la prensa publicó debates entre las autoridades del gobierno y los líderes del PAN sobre la política económica. Posteriormente, la introducción de una nueva ley electoral aumentó la esperanza del PAN de convertirse en una oposición relevante.

Seis meses después de la elección presidencial de 1946, la Cámara de Diputados aprobó una nueva ley electoral, respondiendo en parte a las preocupaciones del PAN, que sólo tenía cuatro representantes en la Cámara. El propósito de la nueva ley era estabilizar la vida política y terminar con la fragmentación del periodo precedente. Por lo tanto, la responsabilidad de organizar y administrar las elecciones quedó centralizada en el gobierno federal. Los municipios ya no fueron responsables de organizar las elecciones; este papel fue transferido a la Comisión Federal de Vigilancia, que dependía del Ejecutivo bajo la Secretaría de Gobernación. La ley tuvo efectos de largo alcance para conformar el sistema de partidos. A partir de ella, cualquier partido que deseara participar en una elección tenía que ser registrado antes por la Secretaría de Gobernación. Para obtener el registro, los partidos debían demostrar presencia nacional comprobando que tenían 30 000 miembros por lo menos en dos tercios de los estados. Esta disposición terminó la multiplicidad de pequeños partidos locales que habían proliferado en las décadas anteriores.

Sin duda, la ley tuvo un efecto modernizador. Entre otras cosas, debilitó considerablemente el poder de los caciques locales. Para el PAN fue una ayuda considerable y contribuyó a convertirlo en una organización nacional. Hasta ese momento el partido había podido movilizar grupos de simpatizantes en Chihuahua, Nuevo León, Yucatán y Michoacán, pero el núcleo de sus partidarios se encontraba en la ciudad de México. Las nuevas reglas le permitieron atraer a grupos de oposición en muchos estados. Éstos se habían organizado antes sobre una base local, pero la nueva ley los condenaba a la extinción, a menos que se convirtieran en parte de una organización nacional más vasta. De esta forma, el PAN se convirtió en una confederación de partidos locales.

El PAN había luchado por una reforma electoral que garantizara la imparcialidad de las autoridades electorales. Una de sus exigencias había sido que las autoridades locales ya

no tomaran parte en la organización de las elecciones. La ley también ayudó a fortalecer a los partidos permanentes, otra propuesta del PAN. Aunque las nuevas autoridades electorales eran parte del gobierno, el PAN recibió con agrado la nueva ley porque satisfacía algunas de las grandes expectativas generadas por las elecciones de 1946.

Las esperanzas del partido de obtener una representación significativa en la Cámara de Diputados fueron frustradas por la determinación del sector obrero dentro del PRI de no compartir el poder con “reaccionarios”. Sólo cuatro de los 64 candidatos que se presentaron tuvieron éxito. No se reconoció ninguna de las otras victorias que proclamó el PAN. La primera experiencia de la intolerancia del PRI a la oposición precipitó al PAN al papel de “oposición leal” dentro de un proyecto a largo plazo para construir la democracia en México.

El ghettopartei

En 1945 los motivos originales del PAN para oponerse al gobierno ya habían desaparecido. El radicalismo del periodo cardenista había terminado. La Iglesia y el Estado habían hecho la paz. Además, tanto Ávila Camacho como su sucesor, Miguel Alemán, reconocieron que el desarrollo nacional requería de la inversión privada y del conocimiento especializado de *técnicos* universitarios, que empezaron a buscar cargos en el gobierno. Esta reorientación de las políticas del gobierno terminó con las alianzas que el PAN había procurado establecer.

Al mismo tiempo, en el periodo que siguió inmediatamente a la guerra, la tolerancia de los Estados Unidos para las “soluciones particulares” en otros países favoreció la consolidación del autoritarismo en México. En esos años de rivalidad entre los Estados Unidos y los soviéticos, el principal criterio para decidir si un país era o no democrático era su actitud hacia los Estados Unidos. Un país amigo podía aspirar a ser clasificado como democrático, aun cuando careciera de instituciones políticas liberales o éstas funcionaran imperfectamente. México se convirtió en un paradigma de la “solución particular” y disfrutó de una generalizada aceptación internacional. El resultado más importante de esto fue el fortalecimiento del papel del PAN como oposición parlamentaria.

El compromiso del PAN con la defensa de la Iglesia católica y su fuerte identidad religiosa estaba asegurado porque la mayoría de sus líderes eran católicos. Todos los presidentes del partido de 1949 a 1972 provenían de organizaciones católicas.[7] No obstante, hubo claramente dos fases distintas. La primera fue el periodo de sólida defensa contra el comunismo, orientación impuesta por el Vaticano. Ésta fue la etapa culminante de la Guerra Fría: cuando la Iglesia católica concentró su atención en la lucha contra el comunismo. La segunda fue el periodo de reformismo católico iniciado por el Concilio Vaticano II.

El primero de estos periodos de hegemonía católica fue un tiempo de extremo confesionalismo dentro del partido, caracterizado por el predominio de la doctrina, la exagerada importancia de la ideología y el aislamiento del partido ante otros actores políticos. En esos años, el *ghettopartei*, el PAN, era intransigente y moralista en su

oposición, rechazaba la negociación y los compromisos y mantenía sólo tenues relaciones con otros participantes en política. "Los diputados del PAN en la Cámara en este periodo mantenían una actitud de abierto rechazo a los diputados del partido oficial porque en opinión del PAN éstos habían ganado sus escaños por medio del fraude electoral" (Álvarez de Vicencio, 1986, p. 11). Es evidente que este enfoque, combinado con el pequeño número de escaños ganados (nunca más de seis), reforzó su aislamiento.

Paradójicamente, a pesar de que el PAN puso a discusión asuntos constitucionales que afectaban a la Iglesia católica (la educación laica obligatoria y la negativa a reconocer la situación jurídica de la Iglesia), y a pesar del predominio de los católicos en el liderazgo durante un cuarto de siglo, las relaciones entre el partido y la jerarquía católica eran distantes. Esto se debió, primero, a que los intereses de la Iglesia así lo requerían. Estaba pasando por un proceso de reconstrucción interna; la Iglesia estaba restableciendo sus relaciones externas y buscando la reconciliación con el Estado (Loaeza, 1988, pp. 154-169). En estas circunstancias, eran más los costos que los beneficios de buscar la identificación con un partido de oposición. Las autoridades de la Iglesia en varias ocasiones se distanciaron de las posiciones tomadas por el PAN. Segundo, la jerarquía de la Iglesia no necesitaba del PAN para representar sus intereses ante el gobierno. Eligió hacerlo por medio de sus propios canales privados. El apoyo de la Iglesia al PAN fue indirecto. No impedía a los fieles que participaran en política; tampoco impidió a organizaciones laicas como Acción Católica y Acción Católica de la Juventud Mexicana —dependientes ambas directamente del episcopado— que se convirtieran en la infraestructura para la organización y reclutamiento de líderes, militantes y simpatizantes.

Incluso con su identidad mezclada con la del catolicismo, el PAN no pudo unificar la oposición al anticlericalismo revolucionario. Esto se debió a que tuvo que disputar este papel con la Unión Nacional Sinarquista (UNS), movimiento predominantemente rural que había tomado la causa de los cristeros de los años veinte. Para el gobierno, la UNS era un movimiento de oposición más temible que el PAN, tanto por el gran apoyo de que disfrutaba entre los campesinos del Bajío como por el nivel de organización que había adquirido en esos años. En 1943 se dijo que tenía más de medio millón de miembros. Logró organizar mítines a los que asistieron entre 20 000 y 40 000 personas, niveles de apoyo inimaginables para el PAN. Asimismo, las relaciones entre los profesionistas de la ciudad de México y los campesinos y artesanos en las partes rurales del México central eran problemáticas. Además de pertenecer a clases diferentes, los sinarquistas veían al PAN como un partido de élite. Para los panistas, por su parte, los sinarquistas eran campesinos ignorantes que debían hacer lo que se les decía. El Partido Fuerza Popular, de existencia intermitente y que era el ala política de la UNS, fue un importante rival para el PAN porque ofrecía una alternativa a los católicos tradicionalistas. Se necesitaron muchos años y muchos acontecimientos —por ejemplo, la desaparición de la UNS en los setenta— para que el estado de Guanajuato, el centro geográfico del apoyo a los sinarquistas, le diera su voto al PAN.

La transformación del PAN en un partido confesional tuvo importantes consecuencias para las relaciones internas del partido. Primero, lo democratizó. El PAN dejó de ser un

partido de *notables* (de élites locales) cuando los títulos universitarios fueron sustituidos por la creencia religiosa como criterio para pertenecer al partido. Aumentó el número de mujeres activas en el partido, tendencia reforzada en 1953 cuando se les concedió el voto a las mujeres, mientras que el número de profesionistas disminuyó. En esos años, el apoyo electoral del PAN reveló una dualidad sociológica. Por una parte, su área de apoyo más importante era la ciudad de México, área emblemática del "milagro mexicano". Por otra, la presencia del partido se concentraba en los 10 estados más pobres, notoriamente Oaxaca, Michoacán y Jalisco. Fue sólo en 1967 cuando los estados más ricos empezaron a votar por el PAN.

La hegemonía católica sobre el partido iba en contra de la organización y así contribuía a que no obtuviera autonomía. Por lo menos hasta mediados de los setenta, el PAN siguió siendo una imprecisa red de relaciones personales, centrada en la ciudad de México y con representantes en algunas regiones en las que esporádicamente se creaban alianzas con otros grupos opuestos al gobierno federal, al PRI o a un político local. Los líderes del partido eran indiferentes a las tareas de organización y proselitismo. Daban por sentada la infraestructura proporcionada por los grupos católicos para llevar a cabo tareas como la difusión doctrinal y la movilización y estructuración del apoyo. Además, como personas religiosas solían creer que el PAN llegaría un día al poder en forma casi espontánea porque la "generosidad y el valor universal de la doctrina" terminaría por prevalecer.

A estos elementos debe añadirse la falta de recursos materiales: la pobreza del partido. Su supervivencia dependía de donativos extraordinarios, cuotas irregulares y contribuciones usualmente anónimas que, aunque considerables, eran esporádicas. Las campañas electorales dependían del tamaño de los bolsillos de los candidatos, la buena voluntad de los simpatizantes y los medios económicos generalmente limitados de sus militantes. En dichas condiciones, esas actividades tenían todas las características de una actividad misionera.

En esos años, la existencia del partido fue precaria e inestable, como puede verse en las variaciones en el número de candidatos que el partido presentó en las elecciones y en las discontinuidades geográficas de su presencia. La actividad estaba concentrada en los años de elecciones. No había un registro nacional de miembros. El proselitismo se llevaba a cabo directamente cara a cara en reuniones en las casas de las personas porque no había dinero para mantener oficinas permanentes a nivel de distrito.

Hasta 1964, la continuidad del partido fue tambaleante, como lo muestran las variaciones en los candidatos para el Congreso. Éstos aumentaron de 21 a 80 entre 1943 y 1946, reduciéndose a 69 en 1949. En 1952 aumentaron de nuevo a 143, cayendo a 88 en 1955, y recuperándose después a 139 en 1958, aunque sin alcanzar la cifra de seis años antes. En 1961 disminuyeron a 95. En 1964 el partido tuvo 172 candidatos, aun cuando ni así cubrió todos los distritos (178). Su participación era irregular en prácticamente todos los estados. Sólo en 10 presentó candidatos en toda elección entre 1943 y 1961: Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Distrito Federal, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro y San Luis Potosí, e incluso esos distritos individuales

no fueron cubiertos continuamente. En algunos estados se seleccionaron candidatos en tres elecciones consecutivas, pero estuvieron ausentes en las siguientes: Chiapas, el Estado de México y Yucatán. En otros estados sólo se presentaban candidatos en las elecciones presidenciales: Campeche, Nayarit y Quintana Roo.

A pesar de esta relativa inestabilidad, el voto nacional del PAN aumentó constantemente, aunque en forma modesta. En 1943 ganó el 1.09% y éste subió hasta 11% en 1964. El contraste entre su frágil organización y la constancia de su apoyo electoral sugiere que la conducta electoral era independiente del partido. Esto a su vez indica que se benefició por el voto de protesta. Los votos que obtuvo el partido en la ciudad de México en tres elecciones consecutivas muestran esto claramente. Si bien en 1949 el PAN obtuvo 33%, su participación bajó a 16% en 1952, cuando el candidato presidencial Miguel Henríquez Guzmán (un disidente del PRI) obtuvo 32%. En 1955 el PAN recuperó 31% del voto y se convirtió en la segunda fuerza política en la capital.

Para el PAN, la exclusión era tanto su debilidad como su fortaleza. No faltaban quienes le reprochaban "hacerle el juego al PRI" contribuyendo a una farsa electoral y ayudándole a legitimar el autoritarismo. No obstante, el hecho de que no formara parte de gobiernos antidemocráticos o participara en decisiones autoritarias le dio autoridad moral. Éste fue el capital político más importante que la primera generación de panistas heredó a sus sucesores en los años ochenta.

EL PAN EN LA ERA DE LAS REFORMAS: 1963-1979

Las décadas de 1960 y 1970 fueron tiempos de agudas confrontaciones políticas e ideológicas en Latinoamérica. La Revolución cubana trajo a la región las tensiones de la Guerra Fría. Empezó una era de guerrillas, golpes militares y dictaduras. Esos hechos tuvieron un profundo efecto sobre las percepciones de las formas del cambio político. Estas formas terminaron limitándose a un debate entre reforma y revolución, el choque entre el capitalismo y el socialismo.

En este contexto, México fue excepcional. Si bien no estuvo libre de protestas extrainstitucionales o de luchas guerrilleras, el sistema pudo enfrentar estos desafíos y absorber el conflicto sin sufrir graves discontinuidades institucionales. Uno de los mecanismos empleados para mantener el equilibrio del sistema fue la reforma. En este periodo, las percepciones de la participación política también pasaron por un cambio importante. El Estado se vio obligado a reconocer que carecía de la capacidad para reprimir y contener las demandas de participación en una sociedad cada vez más urbana y educada como consecuencia del crecimiento económico y de la industrialización de la posguerra.

Fueron dos las formas en que el Estado trató de canalizar las demandas de participación: la reforma electoral y el populismo. La primera se intentó en los últimos años del gobierno de López Mateos y en los primeros años de López Portillo; la segunda durante la presidencia de Luis Echeverría. El populismo implicaba una reactivación de las

prácticas paternalistas y clientelistas implicadas para vincular a sectores populares, urbanos y rurales con la presidencia. Sin embargo, los esfuerzos por promover la participación institucional no significaban dejar de recurrir al fraude. En las elecciones de 1973, por ejemplo, en 52 de un total de 194 distritos (casi una cuarta parte) votaron más ciudadanos que los registrados.

La experiencia de esos años muestra que la reforma electoral y el populismo no eran complementarios; más bien lo contrario, en vista de la forma en que las instituciones de la democracia representativa están reñidas con los mecanismos de acción colectiva y la democracia populista directa. Las tácticas de "acción directa" tienden a tener un efecto más inmediato que el voto. Por lo tanto, recurrir a este tipo de participación obstaculiza el desarrollo de actitudes positivas hacia los procedimientos electorales y las instituciones intermedias, esto es, los partidos políticos y el Congreso. Ambos tipos de participación tuvieron efectos igualmente significativos en la dinámica interna del PAN y en sus relaciones con el sistema político.

La tentación de la democracia cristiana

A finales de los cincuenta, el PAN estaba agotado por su aislamiento y se llevaron a cabo considerables discusiones sobre la necesidad de reformarlo. En 1956, el líder del sector juvenil del PAN, Hugo Gutiérrez Vega, propuso afiliarse a la democracia cristiana. La propuesta era congruente con la estrategia del Vaticano hacia Latinoamérica en esos años, que consistía en promover una alternativa política para impedir el avance del socialismo y del comunismo entre los trabajadores y los pobres. En esos años, la esfera de acción de la Iglesia católica se había ampliado, de la catequesis a la política. En Chile, el Partido Demócrata Cristiano se fundó en 1957. En Venezuela, el Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI), aunque fundado en 1946, pasó por cambios renovadores. Había muchas similitudes, tanto en sus orígenes como en sus perfiles, entre estos dos partidos y el PAN. Los tres fueron establecidos en estrecha relación con las organizaciones católicas de estudiantes universitarios en los años treinta y los tres fueron también influidos por el pensamiento de la derecha civil española y el catolicismo francés. Proponían una tercera vía entre el liberalismo y el estatismo. También, después de 1945, se distanciaron de las clases privilegiadas que resistían el cambio en cualquier forma.

Los líderes del PAN estaban conscientes de que el partido necesitaba renovarse, pero rechazaron la propuesta democratacristiana. La alternativa que ofrecieron fue una estrategia de aproximación y diálogo con el gobierno y la promoción de una nueva imagen por medio de un candidato presidencial que estuviera a favor de los cambios deseados. La persona elegida fue Luis H. Álvarez. A diferencia de Efraín González Luna (candidato del partido en la elección presidencial anterior), Álvarez no era un hombre de doctrina; más bien era un joven político de Chihuahua que representaba a una nueva generación, más dinámica y distinta de la que había surgido del partido confesional. Hizo campaña en mangas de camisa, adoptó un tono moderado y una posición reformista, se refirió a temas como la pobreza, el desempleo, las utilidades compartidas con los

trabajadores y las libertades de los sindicatos, y denunció el cacicazgo político, el "peligroso avance del estatismo" y la "infiltración comunista", que según él era ayudada y permitida por el gobierno.

El PAN también hizo un considerable esfuerzo durante la campaña de 1958 para presentar más candidatos a la Cámara de Diputados. En esa ocasión tuvo 139 candidatos. Sin embargo, una vez más los resultados fueron desalentadores. Al candidato presidencial Álvarez se le concedieron poco más de 700 000 votos en la cuenta oficial, mientras que el candidato del PRI, Adolfo López Mateos, obtuvo 6.8 millones. Este resultado fue tanto más sorprendente porque, como anterior ministro del Trabajo, López Mateos se había hecho muy impopular durante un periodo de descontento laboral.

La primera reacción del PAN ante la escala de esta derrota fue retirar a su representante de la Comisión Federal Electoral (CFE) y anunciar que los seis diputados que habían sido elegidos no ocuparían sus curules. Finalmente, sólo dos obedecieron esta decisión del consejo nacional del partido. Para la juventud democratacristiana esto sólo demostró lo inútil de la estrategia gradualista del partido, que lo presentaba como una organización servidora de los intereses del régimen autoritario. Los conflictos entre los sectores juveniles y los líderes del partido se agravaron. El fundador, Gómez Morin, cuya influencia seguía siendo dominante dentro del partido, sin reservas se opuso a la propuesta democratacristiana y al grupo de Gutiérrez Vega. La candidatura de Luis H. Álvarez fue una de las respuestas a sus demandas de cambio. Años después, Gómez Morin explicó su posición en una entrevista. Arguyó que la corriente democratacristiana había debilitado al partido. También explicó que la democracia cristiana era un movimiento "confesional" y que los países latinoamericanos donde estaba establecida nunca habían tenido las guerras religiosas de México ni su herencia anti-clerical.[8] Sin embargo, no mencionó otras razones que pudieran haber influido en su posición. Por ejemplo, en ese tiempo la democracia cristiana trabajaba muy de cerca con los sindicatos. Ésta era la estrategia de la democracia cristiana de Chile y Venezuela, junto con un intenso proselitismo en los barrios populares. No obstante, esta estrategia presentaba un problema para los panistas, que nunca pudieron conquistar —y que ni siquiera lo intentaron— un territorio que estaba firmemente ocupado por el PRI; además, Gómez Morin nunca superó una profunda desconfianza del sindicalismo al que asociaba con el cardenismo.[9] También es probable que su oposición proviniera del temor a perder el apoyo de los empresarios que nunca compartieron las propuestas reformistas de la doctrina social.

Los jóvenes democratacristianos dejaron el partido en 1963, pero no antes de acusar a los líderes de defender ideas liberales anticuadas, reduciendo la oposición al PRI a un "boxeo de sombra" y evitando el compromiso con la reforma social que implicaba necesariamente el cambio político.

El reformismo electoral

Entre 1962 y 1979, el PAN pasó de ser un partido confesional aislado políticamente a una

oposición relativamente moderna, aunque enfrentó serios problemas de consolidación. Dos tipos distintos de variables tuvieron un efecto sobre este desarrollo. Uno de éstos fue indirecto, e implicaba factores como la urbanización, el crecimiento de la clase media y la transformación de la clase empresarial mexicana y de su relación con el Estado. La segunda tuvo un efecto más directo sobre la organización del partido, e incluía cambios en el pensamiento católico y el surgimiento de nuevas fuerzas políticas y las reformas electorales.

La reforma de 1963

Los cambios a la ley electoral en 1962 introdujeron una fórmula cuyo propósito era asegurar la representación de las minorías para compensar la asfixiante mayoría del PRI. El resultado fue, por una parte, un compromiso entre el fortalecimiento de los partidos minoritarios, aumentando su credibilidad entre los votantes y fortaleciendo su capacidad de atraer la participación política y, por la otra, la negativa del PRI a renunciar a su poder, aunque fuera parcialmente. La reforma conservó el principio de "mayoría simple" en distritos de un solo representante, complementándolo con una "representación de las minorías" yuxtapuesta. Esta reforma fue bien recibida por los líderes del PAN, que por entonces estaban ocupados en la reforma interna del partido motivada por el Concilio Vaticano II. Los cambios podían abrir la posibilidad de que el PAN aumentara el número de sus escaños en la Cámara de Diputados, lo que le daría mayor influencia para restablecer las funciones propias de la legislatura y ser una oposición en el Congreso.

La elección de 1964 presenció un incremento general en los votos, divididos entre el PAN y el PRI. El PAN obtuvo 100 000 votos más que en las elecciones anteriores y 20 escaños en la Cámara. Aprovechó su presencia parlamentaria para trabajar intensamente en la legislación y presentar varias propuestas de reforma. El partido también logró aumentar el espacio que tenía disponible en la prensa. Por primera vez, el PAN no condenó las elecciones como fraudulentas, dando su apoyo al proceso electoral y reconociendo la legitimidad de la elección de Gustavo Díaz Ordaz a la presidencia.

Adolfo Christlieb Ibarrola y el pluralismo político

Motivado por el pensamiento del Concilio Vaticano II, el presidente del PAN, Christlieb Ibarrola, se dedicó de lleno a la reforma interna del partido. Quería convertirlo en una organización secular, inspirada por los valores cristianos pero respetuosa de la autonomía del poder temporal y de los principios de la democracia. Éstos, decía, "están basados fundamentalmente en el respeto a los derechos esenciales del ser humano [e] implican como consecuencia la necesidad de que los diferentes grupos políticos convivan entre sí" (1965, p. 83).

La convicción de Christlieb Ibarrola de la necesidad de respetar la diversidad política en la sociedad fue el punto de partida para que el PAN tuviera una nueva comprensión de

su identidad, sus funciones y el papel que debía desempeñar en el sistema político mexicano. Gracias a este cambio, el partido empezó a verse a sí mismo como una oposición constructiva, dispuesta a participar en las decisiones y responsabilidades del poder. La estrategia derivada de esta noción del papel de un partido de oposición y el deseo de participación implicaban crear relaciones directas con otros partidos y con el gobierno. Christlieb Ibarrola creía que la actividad política creaba condiciones para el "diálogo" y que el contacto entre ciudadanos con diferentes convicciones políticas y el "contacto con los funcionarios públicos permiten entender y resolver con mayor agilidad las demandas nacionales" (1965, p. 83). Así, la reforma electoral de 1962 fue la primera experiencia de negociación política llevada a cabo por un gobierno posrevolucionario y un partido de oposición.

La lucha por el partido

La reforma electoral de 1963 no superó la hostilidad de aquellos grupos del PRI que no estaban dispuestos a ceder el poder bajo ningún pretexto. Esas convicciones antielectorales fueron generadas por la intervención de Luis Echeverría Álvarez, secretario de Gobernación del presidente Gustavo Díaz Ordaz, quien dio marcha atrás en los compromisos que su partido había hecho con el PAN en estos asuntos. En las elecciones federales de 1967 y en las locales de Yucatán un año después los panistas nuevamente fueron objeto de las prácticas tradicionales de manipulación y fraude electoral. Este lamentable final del reformismo desató conflictos dentro del PAN, en el que siempre se habían hecho críticas a esta apertura hacia el gobierno. Esos argumentos volvieron a surgir en formas nuevas y más intransigentes. Por ejemplo, el sistema de listas de partido significaba que cada partido elaboraría listas de candidatos cuyo orden debía haber sido respetado en la distribución de escaños en la Cámara. A pesar de esto, en 1967 la Comisión Federal Electoral —presidida por Echeverría— cambió el orden de la lista del PAN. Esta interferencia generó acerbos reproches dentro del partido, en particular contra Christlieb Ibarrola, cuyos enemigos alegaron que había manipulado el partido a su antojo, aceptando una reforma que obstaculizaba su crecimiento. En el mejor de los casos, los críticos señalaron que había sido culpable de ingenuidad al aceptar el diálogo con el gobierno.

Estas discordias internas se hicieron más graves a partir de 1979, año que marcó el principio de un periodo de inestabilidad, de luchas por el poder, rupturas y divisiones. Existía un conflicto entre los que pensaban que el partido debía abrirse al mundo exterior y canalizar las protestas cualquiera que fuera su fuente y los que pensaban que el futuro del partido implicaba profundizar su identidad doctrinal. Es posible que la muerte de Manuel Gómez Morin en 1972 contribuyera a la inestabilidad organizativa de los años siguientes y a la lucha por el dominio. Los protagonistas en esta disputa fueron José Ángel Conchello y Efraín González Morfín. El conflicto entre los dos llevó a la crisis en la que el partido fue incapaz de elegir un candidato para la presidencia y, dos años después, a una división interna que amenazó la propia existencia del partido.

Al morir Christlieb Ibarrola, González Morfín se convirtió en el líder intelectual del partido y procuró llevarlo a una posición más radical asociada con la "Iglesia popular". Este intento encontró enconada resistencia del ala conservadora del partido, que veía la clave del crecimiento electoral no en la difusión de la doctrina, sino, más bien, en aprovechar el descontento generado por las políticas populistas del presidente Echeverría (1970-1976).

En 1972, José Ángel Conchello fue elegido presidente del partido. Fue el primer líder desde Gómez Morin que no provenía de una organización católica; sus antecedentes estaban en el campo de la publicidad y comercialización en una empresa de la ciudad industrial de Monterrey. Conchello reconoció el capital político que se podía obtener de los temores y la hostilidad antigubernamentales que fueron el legado del gobierno de Díaz Ordaz. Invocando el espíritu del antiestatismo, propuso "devolver el poder a la gente" y, a diferencia de González Morfín, que tendía a ser contrario a la burguesía, previó una lucha contra el Estado. En vez de referirse a la reforma de las estructuras, propuso una reorientación del gasto público a los programas de inversión, al crédito y a la asistencia técnica para los grupos subprivilegiados, dándoles importancia especialmente a los problemas rurales y a la educación. Propuso una política de puertas abiertas para atraer el voto de protesta, cualquiera que fuese su origen. Para esta finalidad, recurrió a un estridente anticomunismo, acusando al gobierno de querer establecer una dictadura marxista-leninista.

La transformación del voto del PAN bajo su presidencia mostró que la intuición de Conchello era correcta. Fue un cambio cualitativo en el apoyo del partido, aunque en lo cuantitativo sus números aumentaron muy poco. Creció significativamente en la ciudad de México, en Jalisco y en el Estado de México y Puebla, donde el PAN recibió el voto urbano y triunfó en algunos municipios rurales. Conchello captó el apoyo de personas que acababan de ingresar a la clase media, cuyo fervor religioso era menos importante que su temor a perder lo que habían logrado acumular. Temían una radicalización de la política del gobierno y se sentían expuestos a la amenaza de un ala izquierda resurgente. González Morfín encontró inaceptable este "pragmatismo oportunista". La división entre ellos se debió a dos concepciones diferentes de política: uno la veía como una oportunidad de llegar al poder, el otro como un instrumento para redimir a la sociedad. González Morfín fue elegido presidente del partido en marzo de 1975, pero el conflicto no se resolvió.

El triunfo del abstencionismo

En la disputa entre González Morfín y Conchello el triunfo del primero significaba que el partido se acercaría a la posición del ala izquierdista católica de ese tiempo, un grupo de votantes diferente de la base tradicional del partido. La victoria del último mantendría las puertas abiertas a un electorado más diverso. La rivalidad fue, por lo tanto, un choque entre quienes deseaban un partido con una identidad ideológica y los que querían mantener las puertas abiertas a un electorado más variado. Este conflicto se tradujo una

vez más en una disputa entre los que favorecían la participación y los que preferían la abstención.

La pugna en el partido se hizo pública en la convención celebrada con el fin de elegir al candidato presidencial para las elecciones de 1976. Hubo tres distintas disputadas rondas de votación en las que ninguno de los precandidatos —Pablo Emilio Madero (por los conchellistas) y Salvador Rosas Magallón (por los efrainistas)— obtuvo el 80% que entonces requerían los estatutos del partido. La convención terminó sin haber llegado a una decisión, y se convocó a otra convención de urgencia en enero de 1976, después de la renuncia de González Morfín como presidente del partido. Se realizó en medio de insultos, enfrentamientos y golpes entre ambos bandos. Después de siete votaciones, el apoyo a Madero aumentó y el de Rosas Magallón disminuyó. No obstante, Madero no pudo alcanzar el porcentaje requerido y quedó siete puntos por debajo del nivel exigido por los estatutos del partido. Finalmente, el PAN no participó en la elección presidencial. Fue como si González Morfín hubiera forzado el triunfo de los abstencionistas.

El partido presentó 129 candidatos para diputados y senadores en 20 estados y recibió 6% menos de votos que en 1973. Perdió votos en casi todos los estados, incluso en la ciudad de México, donde su participación cayó de 32 a 21 por ciento.

La reforma de 1977

Cuando el gobierno de López Portillo (1976-1982) anunció que iniciaría un debate sobre una nueva ley electoral, los panistas respondieron cautelosamente. El partido aún no se había recuperado plenamente de la crisis del año anterior. No obstante, participó en consultas públicas a las que también se invitó a miembros de otros partidos, junto con periodistas y académicos. El PAN pidió primero que los medios informativos se abrieran a los partidos políticos, de modo que pudieran ayudar a crear una ciudadanía madura, bien informada y consciente. También exigía la liberación de los sindicatos y de las asociaciones campesinas de los vínculos que las relacionaban con el PRI, mayor autonomía para los estados y una separación efectiva con equilibrio entre los poderes.

Sus demandas fueron incluidas parcialmente en los cambios constitucionales que afectaron 17 artículos de la Constitución que se refieren a los partidos políticos y a la composición de la Cámara de Diputados. Éstos habrían de ser el fundamento de la Ley Federal de Organizaciones, Partidos y Procesos Electorales (LOPPE, la Ley Electoral de 1977). Las reformas constitucionales consistieron en la reorganización de los partidos políticos como entidades de interés público cuyo propósito era promover la participación democrática y la representación de las minorías políticas en el país. Se introdujo un sistema de representación mixta en la Cámara de Diputados, con 300 curules distribuidas sobre la base de la mayoría simple y 100 adicionales distribuidas por representación proporcional con base en las listas regionales de los partidos. Éstos tenían que presentar candidatos por lo menos en una tercera parte de los distritos uninominales y sólo obtendrían la representación proporcional si el partido no había obtenido más de 60 diputados por el sistema de mayoría simple o si tenía menos de 1.5% del voto en las

diputaciones de representación proporcional.

La LOPPE ayudó al bando participacionista del PAN. Resolvió los dilemas sobre la participación al aumentar los costos de la abstención y los riesgos que implicaba para el partido. Como la solución del conflicto llegó del exterior, no produjo conflictos internos adicionales. Los progresos electorales que consiguió el PAN en los años siguientes y la creciente participación en los diferentes niveles de gobierno también relegaron el viejo dilema a las páginas de la historia. Además, el surgimiento de otros partidos aumentó las opciones disponibles para los electores y les facilitó simplemente votar por otro partido si un partido se abstenía.

La nueva ley también ayudó al partido a terminar con anteriores conflictos. A principios de 1978, Abel Vicencio Tovar, presidente del partido, afirmó que la LOPPE le había dado al partido un sentido de orientación y que ayudaría a reconstruirlo. Su política de reconciliación interna fue apoyada por los seguidores de José Ángel Conchello, en tanto que los doctrinarios prefirieron renunciar. Los costos de la crisis interna no se manifestaron en el desempeño del partido en 1979, las primeras elecciones que se llevaron a cabo bajo las nuevas reglas. El PAN siguió siendo la segunda fuerza en importancia en la política mexicana. Fue el único partido de oposición que obtuvo diputaciones de mayoría en la Cámara (cuatro), complementadas por 39 escaños de representación proporcional. Sus diputados representaban el 10% del total de la Cámara, 25 más que el segundo partido más grande de la oposición. El PAN demostró ser el partido con más credibilidad como oposición independiente.

Esta elección presagiaba las tendencias que predominarían en los ochenta. El apoyo del PAN era urbano; estaba concentrado en los estados más ricos y carecía de un carácter ideológico bien definido. En esos años, el PAN se convirtió en un partido de grupos con un ingreso y estatus elevados. Los resultados también mostraron un desplazamiento del eje principal de apoyo del PAN del centro del país al norte.

PAPEL DEL PAN EN EL CAMBIO POLÍTICO

Hasta finales de los setenta, la evolución del PAN y su conducta daban pocos indicios de la manera en que, en menos de tres años, se convertiría en uno de los principales ejes para movilizar el sentimiento antiautoritario que siguió al decreto de nacionalización bancaria emitido por el presidente José López Portillo en septiembre de 1982. El PAN parecía destinado a convertirse en un instrumento de presión limitada y un vehículo para el cambio gradual y acumulativo en el sistema político. Sin embargo, los cambios en el contexto general alteraron esta inercia institucional.

Los efectos políticos de la expropiación bancaria implicaron su rechazo por las organizaciones empresariales, las autoridades eclesiásticas y los diferentes sectores de la clase media, porque se sintieron amenazados por un poder presidencial incontrolado. Así como tenía que tratar con esas dificultades políticas, el gobierno también debía enfrentar una grave crisis financiera causada por los empréstitos excesivos del Estado y la pérdida

de acceso al crédito del exterior. En estas circunstancias críticas, surgieron numerosas presiones internas e internacionales para producir un vuelco en la política y la economía del país. El efecto político de esta combinación de elementos fue incluso más profundo porque se unió a los cambios a largo plazo en la sociedad y en el campo de las ideas políticas, cuyo verdadero impacto había permanecido latente hasta ese momento.

La movilización electoral y política que se inició a principios de la década de 1980 reveló la existencia de una sociedad plural y diversa que había sido resultado de las precedentes décadas de crecimiento económico. El cambio demográfico, las modificaciones en las relaciones de México con el mundo exterior y el proceso de secularización fueron algunas de las dimensiones que identificaron a la sociedad mexicana moderna. El cambio de actitudes en asuntos como la planificación familiar, las corrientes migratorias, la educación de las mujeres y la pérdida de la influencia de la Iglesia sobre la conducta social eran indicadores de una transformación profunda.

Las percepciones del autoritarismo también cambiaron. Lo que es más importante, en los años que siguieron a 1982 ya no se veía al Estado como un agente de la democratización. En cambio, se convirtió en el principal objeto de críticas de la nueva sociedad movilizada. Con la desaparición de la idea de que el Estado debe proporcionar la piedra angular de la sociedad, el principio del fin para el siglo del PRI estaba a la vista. Una sociedad más diversificada era también más plural en sus preferencias políticas. Éstas ya no podían ser predeterminadas por la élite o por el partido oficial. La consiguiente fluidez política demostró favorecer particularmente al PAN, cuyas funciones cambiaron como resultado de la crisis. Al principio fue visto por estos grupos recién movilizados como un instrumento confiable para producir un cambio limitado, esto es, un vuelco político que dejaría intacto el orden social. Gracias a la densidad institucional que había logrado en los años previos, el PAN logró convertirse en líder del movimiento antiautoritario que encontró en el partido una estructura que lo conformó e introdujo en el sistema político.

Neopanismo

En los ochenta surgió la oportunidad para que el PAN se convirtiera en lo que Giovanni Sartori ha llamado “la oposición relevante”: en otras palabras, una organización cuyas estrategias y funcionamiento tienen efecto sobre el sistema político. El PAN asumió funciones de gobierno, tanto en el Congreso como en el nivel local. Lo que había sido hasta entonces un proceso de modificación gradual se convirtió en un cambio súbito de la pauta de crecimiento del partido. Como ya se indicó, la causa inmediata fue la expropiación bancaria; así, en el periodo que siguió a septiembre de 1982, el PAN desarrolló una capacidad sin precedente para influir en la opinión pública. Esta nueva notoriedad política también fue posible por la crisis del Estado posrevolucionario y, más generalmente, por el desplome del autoritarismo en todas partes y por la tercera ola de democratización.

La respuesta en el partido a estas nuevas condiciones fue el ascenso del neopanismo,

término descriptivo que empezó a emplearse para nombrar un nuevo tipo de candidato y militante, típicamente con antecedentes en el sector empresarial y llegado de estados específicos. La noción de neopanismo evocaba a la vez una falta de conocimiento de la doctrina tradicional del partido y una forma pragmática de hacer política. Tenía poco que ver con los caballerosos métodos del pasado que distinguían a los panistas de sus cínicos adversarios del PRI, que ni eran respetuosos ni conocían las leyes. Los neopanistas desarrollaron una posición política más agresiva y de confrontación hacia el gobierno. También trajeron consigo muchos votos más.

El neopanismo cambió la composición interna del partido, ayudándole a renovar sus cuadros militantes y a poner en marcha una nueva dinámica. La ciudad de México ya no era el centro de gravedad del partido, que pasó a los estados de la frontera norte del país. La estructura tradicional del PAN fue amenazada porque los candidatos neopanistas llevaban consigo sus propios recursos para las campañas electorales, efectuadas con una autonomía que sobrepasaba a los líderes del partido. Como resultado, el equilibrio entre el Comité Ejecutivo Nacional y los comités estatales sufrió un cambio sustancial. Esto trajo consigo serios problemas para la disciplina del partido; no sólo ya no había una doctrina, sino que además los candidatos ya no dependían del partido para su financiamiento. Como consecuencia, había poco compromiso entre el candidato y el partido.

Los acontecimientos que dieron origen a la movilización neopanista ocurrieron en un contexto más amplio de cambio social. En los ochenta, la sociedad era más educada, más urbana y más diversa que antes, y las actitudes hacia la participación electoral eran más positivas que en el pasado. Sin embargo, el cambio más profundo e importante para el PAN a largo plazo fue la creciente regionalización del país.

La fractura entre el centro y la periferia

La pauta de crecimiento desequilibrado de México había generado importantes diferencias entre algunos estados y regiones. Estas diferencias se hicieron más pronunciadas después de 1982 debido a la crisis económica y financiera. En los años ochenta se amplió la brecha entre las ciudades y las zonas rurales, al igual que la existente entre los estados ricos del norte y los estados pobres del centro y del sur, y entre todos ellos y la ciudad de México, que padeció severamente la disminución en la inversión pública; la oferta de trabajo disminuyó allí, mientras que aumentó en estados como Baja California, Jalisco y Chihuahua. La industria turística y las maquiladoras se expandieron junto con la agricultura y la recría de ganado orientadas al mercado de los Estados Unidos; la agricultura tradicional no se vio gravemente afectada y la economía urbana informal se expandió.

El hecho más significativo durante este periodo fue la aparición de nuevas identidades políticas, basadas en fracturas territoriales y culturales e impuestas sobre la estratificación económica. Esto significa que el conflicto político empezó a darse siguiendo las líneas de

las fracturas regionales y no tanto las de ideología y clase. La divergencia política derivada de la desigualdad social y de las diferencias ideológicas se proyectó primero y ante todo dentro del contexto local. Formando parte de esta estructura de intereses delimitada geográficamente, otro conjunto de antagonismos tendió a imponerse entre los estados individuales y la ciudad de México o el gobierno federal. La movilización antiautoritaria adquirió un carácter marcadamente anticentralista, que afectó al gobierno central, al PRI e incluso a los residentes de la ciudad de México, a los que se veía con disgusto y con creciente hostilidad en otras partes del país.

La regionalización fue acelerada aún más por las reformas que llevó a cabo el gobierno del presidente De la Madrid (1982-1988), que procuraba reducir la intervención estatal. En diciembre de 1982 se aprobó una enmienda al artículo 115 de la Constitución, dándoles nuevos poderes a municipios locales, así como nuevas fuentes de ingreso que incrementaron su patrimonio. La enmienda tuvo implicaciones políticas significativas porque al aumentar los recursos asignados a los gobiernos locales éstos se convirtieron en parte de la lucha política. Los esfuerzos del PAN por presentar candidatos a los gobiernos municipales fueron reveladores de esta mayor importancia política. Entre 1966 y 1982 el partido participó en elecciones en menos de 20% de los municipios del país; después de 1982 esto aumentó a entre 31 y 58%. En 1993 presentó candidatos en 88% de los municipios; en 1997, en 96% de ellos.[10]

Así, el PAN se convirtió en el partido de las regiones, tanto por una estrategia de puertas abiertas como por su estructura débil, descentralizada, que le daba flexibilidad. Pudo adaptarse a los cambios producidos por los nuevos estilos de liderazgo y de militancia. Algunos de los temas de la movilización antiautoritaria de las élites locales habían sido recurrentes en la doctrina del partido; por ejemplo, el antiestatismo se había transformado desde hacía mucho tiempo en una crítica a la centralización, y la defensa de la propiedad privada y de la autonomía municipal eran parte de antiguas tradiciones del PAN.

Empresarios y obispos: los aliados del neopanismo

Entre 1982 y 1988 el PAN fue un receptor pasivo de grupos disidentes que habían empezado a participar en política para expresar su disgusto de un sistema político que no había satisfecho sus aspiraciones de cambio y de mayor prosperidad. Estableció una estrecha relación con grupos empresariales, en particular con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y otras asociaciones semipolíticas ultraconservadoras, como Desarrollo Humano Integral, para las que el Estado era el peor enemigo.

El PAN también se convirtió en un reflejo de las diferencias entre los empresarios producidas por la crisis. Una de las características más importantes de la politización de los intereses empresariales en esos años fue que los principales protagonistas provenían de empresas pequeñas y medianas, mientras que no cambió la pauta de las relaciones

entre las empresas del más alto nivel y el Estado. Los primeros recurrieron a la política de partidos precisamente porque estaban inconformes con las estrechas relaciones entre los líderes de las grandes organizaciones industriales, bancarias y comerciales y el Estado. En comparación, el flujo de los intereses empresariales hacia el PAN provino principalmente de organizaciones empresariales como la Coparmex y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco), que eran más descentralizadas. Eran también más heterogéneas, y sus afiliados provenían predominantemente de pequeñas empresas. El número de sus miembros era grande, pero se encontraba disperso por todo el país.

De manera similar a las organizaciones empresariales, las asociaciones católicas también tuvieron un papel central en la movilización de los sentimientos antiautoritarios en el nivel estatal, en especial el Movimiento Familiar Cristiano, al que pertenecían muchos neopanistas. Su contribución fue apoyada por obispos locales que, al sostener la defensa de los intereses locales contra el autoritarismo, abiertamente estuvieron del lado de los candidatos del PAN. La importancia de esos aliados —empresarios y obispos— en las movilizaciones panistas varió de estado a estado: aunque los primeros eran prominentes en Sinaloa y Sonora en 1985, los últimos tuvieron un papel principal en Chihuahua en 1986.

Las batallas del neopanismo

Las elecciones locales que se realizaron a partir de 1983 se llevaron a cabo en un ambiente de tensión y violencia cuando el PAN rechazó los resultados oficiales. Estos conflictos fueron publicados por la prensa nacional y la internacional. La protesta colectiva —marchas y mítines callejeros a favor de la democracia, ocupación de edificios públicos, huelgas de hambre y bloqueo de carreteras— se convirtió en acontecimientos diarios para los panistas. Hubo brotes violentos asociados con los conflictos electorales en Baja California, Coahuila, Chiapas, Jalisco, Puebla y Tlaxcala. La retórica de los candidatos y de los líderes del partido estaba cargada de imágenes de ruptura y confrontación. En el norte del país los candidatos del PAN triunfaron en capitales estatales y municipios urbanos. Éstos fueron síntomas relevantes de que la era de la hegemonía del PRI había terminado.

El PAN se convirtió en tema de noticias, en especial de la prensa extranjera. No obstante, su tono agresivo tuvo un efecto contradictorio. Por una parte, puso al partido en las primeras páginas de todos los periódicos y ganó la atención de la radio y la televisión. También tuvo un fuerte valor propagandístico. Por otra parte, esta radicalización probablemente asustó a algunos votantes. En Sonora en 1985 y en Sinaloa en 1986 la retórica amenazadora de los candidatos del partido hizo que muchos se abstuvieran de votar y contribuyó a la derrota. En las elecciones federales de 1985 para la Cámara de Diputados, el PAN rebosaba optimismo y energía. Este entusiasmo era reflejo de la escasa popularidad del gobierno del presidente De la Madrid, que había puesto en práctica varias políticas de ajuste a la vez que hacía grandes pagos de intereses

por la enorme deuda externa que había heredado de su predecesor. También trataba de controlar una tasa de inflación que aumentaba mes tras mes. Y como las condiciones parecían propicias, el PAN predecía la victoria y el desplome de todo el sistema autoritario.

Gran parte del país había cambiado desde las elecciones pacíficas de 1982, en las que participaron nueve candidatos sin desafiar seriamente la hegemonía del PRI. En tres años el voto se convirtió en una forma de protesta y de lucha política, y el partido de oposición había obtenido considerable poder. No obstante, los resultados de la elección fueron decepcionantes para el PAN. Primero, el nivel de abstención de los votantes fue muy alto —49%—, y segundo, disminuyó el total de votos de la oposición, que se dividió entre ocho partidos. El PAN retuvo su posición como el segundo partido más grande del país, pues ganó 11 escaños por mayoría simple y otros 32 por representación proporcional. Pero su participación en el voto (15.5%) fue un poco menor que tres años antes. El PRI retuvo las siete gubernaturas que estaban en juego y ganó 98% de los consejos municipales y de los diputados locales. En la Cámara ganó 289 escaños. No obstante, a pesar de ser todavía un partido minoritario, el PAN adquirió cada vez más influencia. Esto pudo verse por la forma en que el PRI empezó a reorientar sus políticas y la selección de sus candidatos en respuesta a decisiones tomadas por el PAN. Así, éste empezó a gobernar desde la oposición.

Chihuahua en 1986

Las elecciones para gobernador en este estado fueron el punto en que cristalizaron la ira y la desilusión del neopanismo, que habían surgido el año anterior. El candidato del PAN, Francisco Barrio, tenía el apoyo de la jerarquía eclesiástica y de los empresarios locales. En Chihuahua, el partido aprovechó las ventajas de la frontera con los Estados Unidos y movilizó a los medios de comunicación y a la opinión pública de ese país. El principal apoyo de Barrio provino de los obispos y sacerdotes locales, que estaban de acuerdo con los puntos principales de la campaña del PAN, como la denuncia de la corrupción, la manipulación electoral y la propia existencia del partido oficial. A la vez que hacían esto, presentaron la "teología electoral", defendiendo la legitimidad del liderazgo político de la Iglesia sobre la sociedad.

El día de las elecciones se denunciaron pocas irregularidades políticas; la votación se llevó a cabo pacíficamente. Sin embargo, cuando los resultados oficiales de la Comisión Estatal Electoral le dieron la victoria por un gran margen al PRI, hubo una reacción pública muy fuerte. Al PRI se le dieron 65 de los 67 municipios estatales y 14 escaños por mayoría en la legislatura estatal, en tanto que el PAN sólo ganó dos diputaciones por representación proporcional. El arzobispo Almeida de Chihuahua anunció que el domingo siguiente las iglesias permanecerían cerradas para protestar por la "vergonzosa elección". Ésta era la misma medida que, en 1926, había iniciado el conflicto cristero. Sin embargo, los obispos de Chihuahua tuvieron que dar marcha atrás cuando, por petición del gobierno federal, el nuncio apostólico en México, Girolamo Prigione, siguiendo

instrucciones del Vaticano, obligó al episcopado regional a suspender la protesta. Luis H. Álvarez, que tenía una posición de autoridad moral dentro del partido, inició una huelga de hambre exigiendo la anulación de los resultados electorales oficiales. Los panistas bloquearon los puentes de la frontera entre México y los Estados Unidos y organizaron boicoteos de los principales medios de comunicación. Los militantes ocuparon las carreteras, los ferrocarriles, los puentes y los puntos de cruce de la frontera internacional. Hicieron un llamado al Congreso de los Estados Unidos, donde recibieron el apoyo del congresista Jesse Helms. El PAN denunció los resultados ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, D. C. Estas protestas no encontraron ninguna respuesta de las autoridades federales, que insistieron en mantener los resultados de las elecciones. Poco a poco se calmó la oleada de protestas. Una razón fue que el nuevo gobernador del estado, Fernando Baeza, pudo contar con el apoyo de los empresarios locales, que temían el efecto de la movilización sobre la economía estatal y sobre sus propias relaciones con el gobierno federal.

La experiencia de Chihuahua fue importante, porque la estrategia del PAN amplió sus repercusiones al resto del país. Fue tan escandalosa que un asunto local se convirtió en cuestión nacional. También logró unir a una diversa selección de la población nacional, desde obispos hasta periodistas e intelectuales y académicos en la ciudad de México. A finales de los ochenta, el PAN se había convertido en el abanderado de la democracia en México. Sin embargo, Francisco Barrio tuvo que esperar seis años para ser elegido gobernador de Chihuahua en 1992. Después de terminar su periodo, cuando la maquinaria de la competencia electoral estaba bien instalada, el PRI recuperó la gubernatura, aunque el PAN conservó la mayoría en la legislatura estatal. Así, Chihuahua se convirtió en el primer estado que tuvo alternancia de partidos.

El neopanismo y la campaña presidencial de 1988

La selección de Manuel J. Clouthier como candidato presidencial del PAN fue un símbolo del ascenso del neopanismo. Tenía antecedentes característicos de los empresarios locales que se habían acercado al PAN para participar en política. Clouthier era un exportador agrícola de éxito. También era un hombre decidido, acostumbrado a los cambios y negociaciones con quienes detentaban el poder sin andarse por las ramas. Su experiencia política había sido en organizaciones de productores como la Unión Nacional de Productores de Garbanzos y la Unión Nacional de Productores de Hortalizas. Estas dos organizaciones habían obtenido una influencia significativa en los mismos estados (como Jalisco y Guanajuato) en que el PAN posteriormente obtendría buenos resultados. Su estilo alegre era una expresión de la estrategia política del PAN en ese tiempo. Al igual que otros empresarios que habían ingresado a la política, a Clouthier le gustaba decir que hablaba "sin temores". Tenía ambición de poder y una base política sólida en los estados del norte. Llegado el momento, Clouthier se convertiría en el modelo que le serviría a Vicente Fox para conformar su estilo de liderazgo.

Ayudado por los recursos públicos proporcionados según la ley electoral así como por

donativos privados, en 1987-1988 el PAN llevó a cabo una campaña moderna, bien organizada. También participaron grupos de acción cívica que no pertenecían al partido, pero que realizaban importantes funciones, como la movilización y organización de redes de apoyo, reuniones públicas en gran escala, propaganda y difusión. La campaña progresó rápidamente con base en las tácticas que puso en práctica el neopanismo: desobediencia civil, bloqueos de carreteras y boicoteo a las estaciones de radio y televisión cuya conducta se juzgaba sesgada hacia el PRI. Esos métodos, ayudados por personas que no eran panistas, generaron agudas tensiones entre el grupo de trabajo de Clouthier y los líderes del partido que se veían desplazados por los recién llegados. No obstante, estaban dispuestos a ceder su posición convencidos de que la fórmula neopanista les daría el triunfo. También pensaban que ésta era sólo una situación temporal que sería corregida más adelante. Las diferencias dentro del partido quedaron así subordinadas a la perspectiva del triunfo. En este sentido, esta campaña presagió la de Fox en 1998-2000 en la que las actividades del partido fueron paralelas a las de los Amigos de Fox. Sin embargo, en 1988 el optimismo panista no previó la división dentro del PRI, la formación del Frente Democrático Nacional (FDN), y la fuerza de un candidato como Cuauhtémoc Cárdenas. El ascenso de Cárdenas les quitó la posibilidad de que el PAN se convirtiera en el principal polo de oposición al PRI.

El efecto de Clouthier sobre el partido y el de su campaña electoral fue a más largo plazo, como lo mostraría el triunfo del foxismo 12 años después. Sacudió las tradiciones del PAN, cambió el equilibrio interno de las fuerzas dentro de éste y contribuyó al ambiente de triunfo y lucha que le dio al partido una nueva sensación de confianza.

EL PAN, UN PARTIDO DE REGIONES

El efecto individual más importante del neopanismo fue convertir al PAN en un instrumento de representación de los intereses y demandas regionales. A finales de la década, el partido tenía mayor consistencia gracias a la influencia de las regiones que asegurarían su continuidad, incluso cuando la política de puertas abiertas diluyó en cierta medida su identidad doctrinal. De este periodo turbulento surgió con una estructura federal, flexible aunque frágil. Se había renovado su base de apoyo, y tanto su militancia como su electorado eran más diversos. Uno de los aspectos más interesantes de esto fue que su base de apoyo se había vuelto más joven.

El neopanismo también hizo una importante contribución a la modernización del sistema político al institucionalizar la participación de los empresarios y de la Iglesia. Por primera ocasión, en vez de basarse en contactos personales o la intervención de sus propias organizaciones para influir en las decisiones del gobierno, recurrieron a actividades políticas dentro de la estructura de la institución planeada con ese propósito: un partido político. Este cambio alentó la despolitización de esas organizaciones, que en adelante pudieron dedicarse a sus propias funciones específicas.

El cambio también fue positivo para los intereses de las organizaciones especializadas

representadas. Como ocurrió en Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Nuevo León, cuando el partido fue un instrumento de grupos de interés particulares, el gobierno podía negociar con cada uno de ellos por separado dejando a un lado al PAN. De esta manera el PRI mantuvo el control de las instituciones gubernamentales. La derrota de varios candidatos del PAN en este periodo puede explicarse por la capacidad del gobierno federal para restablecer una relación armoniosa con el sector empresarial después de que la expropiación bancaria puso esto en duda. Así, la estrategia del gobierno fue "divide y vencerás".

No obstante, aunque el gobierno logró resolver la diferencia ideológica, no pudo hacer lo mismo con el poderoso desafío político de los estados generado por la creciente tensión entre el centro y la periferia. El PAN se benefició de la "territorialización" de la política. Sin embargo, esto hizo surgir nuevos desafíos a su propia unidad interna y su capacidad para coordinar sus acciones. El PAN llegó al final del siglo XX como una especie de confederación de notables locales en una situación similar a aquella en que se había encontrado en 1946. En algunos estados, la antigua presencia establecida por el PAN aumentó, mientras que en otros su presencia se consolidó o era relativamente nueva. Las fuentes de apoyo del PAN variaban de un estado al otro, y cada una tenía su propia historia y características.

La fuerza del PAN en Guanajuato y Jalisco tiene sus raíces en una identificación política con los orígenes católicos que surgieron de la herencia del conflicto entre la Iglesia y el Estado. En los estados de la periferia (por ejemplo, Baja California, Chihuahua, Nuevo León y Yucatán) la presencia del PAN es una expresión de la autonomía local y de la resistencia a la centralización. En Sinaloa y Sonora el partido es más un canal para una coalición de exportadores agrícolas y clases medias urbanas que surgió como consecuencia de la expropiación bancaria de 1982. Estos elementos —católicos, anticentralistas y personas con intereses particulares— por supuesto no son mutuamente excluyentes en esos estados. Lo más probable es que estén presentes en todos ellos, pero su importancia relativa varía de uno a otro.

El cuadro VII.3 identifica los tres diferentes grupos de estados. El núcleo duro de apoyo al PAN se encuentra en los estados en que el partido se estableció por primera vez en los cuarenta, donde siempre ha presentado candidatos para diputados, y que han sido o son gobernados actualmente por el PAN; esos estados —Baja California, Chihuahua, Jalisco y Nuevo León— le dieron al partido la mayor proporción de votos.[11] En el segundo grupo de estados, el PAN ha sido una consistente minoría; estaba presente antes de 1982, pero aumentó su fuerza desde entonces en Aguascalientes, el Estado de México, Guanajuato y Yucatán. En el tercer grupo están los principales protagonistas del neopanismo. En éstos el voto del PAN surgió principalmente como protesta contra el presidencialismo de los ochenta. Aquí el voto del PAN creció en forma abrupta casi de cero después de la nacionalización de los bancos. Estos estados demuestran la identidad dual del PAN como un partido de militantes que sostienen la identidad doctrinal y un partido que más que nada observa al electorado y responde a sus demandas de corto plazo.

Durante el prolongado periodo de hegemonía del PRI, la ciudad de México fue el corazón del panismo, y de ella provenía la mayor proporción de votos para el partido en el nivel nacional. En el periodo entre 1988 y 1994 la importancia de la ciudad de México fue sustituida por la de otros estados. De hecho, desapareció de la lista de los cerca de 12 estados con el mayor voto del PAN. Este cambio refleja la expansión de la presencia del PAN en otras zonas importantes del país, la descentralización de la política y la multiplicación de las opciones electorales que afectó primero a la capital. En 1988 el PAN perdió su hegemonía sobre el voto opositor en la ciudad de México. Su desplazamiento fue confirmado finalmente en 1997 cuando Cuauhtémoc Cárdenas, candidato del PRD, se convirtió en el primer jefe de gobierno de la capital a la vez que su partido ganó la mayoría en la Asamblea de Representantes de la ciudad. No obstante, en julio de 2000 el voto se dividió. Aunque Andrés Manuel López Obrador retuvo la jefatura para el PRD, la alianza PAN-PVEM ganó la mayoría en la Asamblea con 38% de los escaños, en comparación con 29% para el PRD. El PRI no pudo ganar un solo escaño de mayoría simple y sólo obtuvo 24% de los escaños de representación proporcional. El restante 9% fue para tres partidos pequeños.

CUADRO VII.3. *Estados con una participación significativa del PAN en las elecciones federales, 1961–2000 (porcentajes)*

	Hegemonía del PRI 1961-1982	*Reformas y movilización electoral 1982-2000*
Promedio nacional	12[a]	23
Estados del núcleo duro del PAN		
Baja California	21[a]	36
Chihuahua	15	35
Jalisco	14	34
Nuevo León	18	34
Distrito Federal	27	29
Estados con una minoría consecuente del PAN		
Yucatán	9[a]	31
Guanajuato	13	33
Aguascalientes	13	29
Estado de México	14	23
Estados neopanistas		
Sonora	11	30
Coahuila	10	22
Baja California Sur	5[a]	22
Durango	8[a]	23
Sinaloa	5	23
Querétaro	8	28

[a] El promedio excluye los años en que el PAN no participó.

FUENTES: Soledad Loaeza, *El Partido Acción Nacional: la larga marcha, 1939-1994*, México, Fondo de Cultura Económica; Instituto Federal Electoral (www.IFE.org.mx).

EL PAN Y LA FORMACIÓN DE UN SISTEMA MULTIPARTIDISTA EN MÉXICO

Durante los años noventa terminó la hegemonía del PRI. La presencia de dos partidos de oposición independientes, el PAN y el PRD, tuvo como resultado una nueva distribución del poder. Aunque el PRI mantuvo su preeminencia, sus decisiones y su conducta fueron determinadas cada vez más por sus relaciones de conflicto o de cooperación con los dos partidos de oposición. En esos años, el PRI pagó un alto precio por su subordinación a la presidencia de la República y permaneció continuamente en la defensiva. En comparación, el PAN logró sostener intercambios regulares con la presidencia y mantener

simultáneamente una ofensiva contra el PRI. Aumentó la presencia de panistas en varios gobiernos estatales y municipios importantes, de modo que el partido se encontró realizando funciones administrativas y gubernamentales.

A comienzos de 1988 los partidos de oposición ganaron terreno en los gobiernos municipales, en la Cámara de Diputados y en el Senado, así como en los gobiernos estatales. Desde antes de las elecciones de 2000, 50% de los mexicanos eran gobernados por otros partidos y no por el PRI. Para el PAN fueron años de cosecha. En 1990 sólo 5% de la población vivía bajo el gobierno del PAN; en 1999 esa cantidad había aumentado a 33%. En sólo un año, entre 1994 y 1995, esa cifra pasó de 12 a 20% (Lujambio, 2001, cuadro II.1). En 1989, el primer gobernador panista del país fue elegido en Baja California. A esta victoria le siguieron otras en Chihuahua en 1992, Guanajuato y Jalisco en 1994, Nuevo León y Querétaro en 1997 y Aguascalientes en 1998. En 2000 el PAN ganó en Morelos y logró la reelección en Guanajuato, y en 2001 el candidato del PAN fue elegido gobernador de Yucatán. El PRD ganó en la ciudad de México en 1997 y de nuevo en 2000, en Tlaxcala y Zacatecas en 1999 y en Michoacán en 2002.

La Cámara de Diputados también perdió su anterior aspecto monocromático. En 1988 el PAN ganó 101 escaños de un total de 500; el PRI tuvo 260, y el resto se dividió entre los cuatro grupos que conformaban el FDN.[12] Desde esa fecha, la pauta de diversidad se hizo más pronunciada. En 1997 el PRI ganó 39% del voto, mientras que el PAN logró 27% y el PRD 26%. En la legislatura elegida en 2000 estaban representados ocho partidos, si bien el PAN, el PRI y el PRD eran las fuerzas dominantes con 38, 37 y 19% del voto, respectivamente.[13]

Este proceso de creciente pluralismo político ocurrió simultáneamente con algunos hechos políticos extraordinarios. Entre éstos estuvieron la borrascosa elección presidencial de 1988; el ascenso del PRD como nueva fuerza política capaz de enfrentar el monopolio del PRI como heredero de la Revolución mexicana y representante de los intereses populares y capaz de mantener un enfrentamiento sostenido contra el gobierno; la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en enero de 1994, y el asesinato en marzo de 1994 del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, y en el siguiente mes de agosto el del secretario general del partido, José Francisco Ruiz Massieu.

Éste fue un periodo de intensa politización de la sociedad, en vista de la cada vez mayor cultura de participación que se expresaba por medio de formas tradicionales de presión colectiva y del voto. Las principales ciudades de México presenciaron varios tipos de acciones políticas "directas": las demostraciones masivas, las marchas y las reuniones públicas se convirtieron en eventos rutinarios, así como la ocupación de edificios públicos y bloqueos de las vías de comunicación. También se emplearon otros tipos de tácticas de "acción directa", como las huelgas de hambre y desnudarse en público. Muchas de estas actividades iban dirigidas a revertir resultados electorales, y se convirtieron en parte de la política diaria en vista de la creciente importancia del voto y de la cada vez mayor participación en las elecciones.

Aunque los datos de la elección de 1988 no son confiables, la mayoría de los autores

y observadores están de acuerdo intuitivamente en que —en términos generales— el número real de votantes fue mayor que seis años antes. La cifra oficial fue de 50%. Tres años después, en la elección legislativa fue de 60%, y aumentó a 77% en 1994. En las elecciones locales la participación osciló en torno a 62%. En términos absolutos, el número de personas que votaban aumentó de 18 millones en 1988 a 37.6 millones en 2000. Esta movilización de los votantes favoreció el desarrollo de los partidos. En 1994 el PRI atrajo ocho millones más de votantes que seis años antes y el PAN cinco millones más. El PRD, que no existía en 1988, atrajo seis millones de votantes. En la elección presidencial de 2000 el candidato del PAN recibió 16 millones, en comparación con nueve millones para su predecesor como candidato en 1994. El aumento en el sufragio intensificó la competencia entre los partidos, y los ciudadanos adquirieron, por medio del voto, un elemento de negociación en sus tratos con el gobierno.

El papel que desempeñó el PAN en este proceso de creciente pluralismo político varió de acuerdo con su fuerza electoral y con las prioridades circunstanciales del electorado. Se convirtió en interlocutor del gobierno y en un partido con importante influencia en el Congreso; fue aliado del PRD, el receptor del voto de protesta, y autor de reformas electorales que impulsaron el desarrollo del sistema de partidos; además, ofreció una alternativa de gobierno en los niveles estatal y local, estimulando así la participación de los electores. Durante este periodo el partido completó su proceso de institucionalización, haciéndose más autónomo. Logró superar sus debilidades pasadas y su identidad ya no dependía de actores externos. Aprendió a actuar según una lógica propia, estructurando estrategias y acciones en torno a un objetivo muy preciso: la conquista del poder.

6 de julio de 1988

La elección en esta fecha —6 de julio de 1988— tuvo un efecto devastador sobre los hábitos y las costumbres electorales que durante décadas habían garantizado la hegemonía del PRI. La división del partido en 1987, que tuvo como resultado la candidatura alternativa de Cuauhtémoc Cárdenas, aunada a la fundación del FDN en 1988 y a la del PRD en 1989, dieron fin al predominio del PRI sobre un electorado propenso a las tradiciones populistas del Estado posrevolucionario. Para muchos, 1988 representa el principio de la transición mexicana porque dio origen a una grave crisis política generada por los cargos de fraude que presentó la oposición contra el gobierno y el PRI. Los verdaderos resultados de las elecciones de 1988 nunca se conocerán.

La elección reveló algunos de los mecanismos tradicionales para controlar la participación y manipular y falsificar el voto. La consecuencia fue que el manto de legitimidad derivado del mero hecho de realizar elecciones dejó de tener algún sentido. En su lugar quedó el efecto deslegitimador del fraude electoral. En la tarde del 6 de julio, cuando las casillas electorales ya se habían cerrado, hubo mucha preocupación entre la oposición cuando el representante del FDN, Jorge Alcocer, anunció que el sistema de cómputo había fallado y que el flujo de información sobre los resultados se había interrumpido.[14] Esto creó la sospecha de que el gobierno estaba modificando los

resultados que no favorecían a su candidato.

El tempestuoso periodo de protesta poselectoral, que duró todo julio y agosto, se centró en la incertidumbre sobre si se llevarían a cabo los procedimientos constitucionales normales que conducirían a la toma de posesión del nuevo presidente en diciembre. El PAN demostró una mayor capacidad que otros actores políticos para responder a esta crisis. Gracias a su experiencia en las elecciones y a su institucionalización, se desempeñó de manera coherente y estableció estrategias y objetivos en circunstancias difíciles. En comparación, ni el gobierno ni el PRI reaccionaron en forma coherente y el FDN se desintegró casi inmediatamente después de las elecciones.

En esos momentos de incertidumbre, el PAN estableció canales institucionales para negociar con el gobierno y el candidato del PRI, en primera instancia por medio de la Cámara de Diputados. Clouthier, el candidato presidencial del PAN, tomó su propia posición, habiéndose inicialmente unido a las protestas de Cárdenas y de Rosario Ibarra de Piedra (candidata del Partido Revolucionario de los Trabajadores [PRT]). Aunque Cárdenas afirmó que le habían robado la victoria, Clouthier sostuvo que la escala de las irregularidades hacía imposible saber quién había ganado. Propuso que se anularan los resultados y se convocara a nuevas elecciones. Como ocurría con Clouthier, Cárdenas no podía contar con las otras agrupaciones que integraban el FDN, y ambos dieron su aprobación a los resultados de las elecciones para diputados y senadores, a la vez que rechazaban los de las elecciones presidenciales. Esta posición debilitó significativamente sus acusaciones de fraude electoral, porque fue difícil argumentar que algunos de los resultados eran aceptables en tanto que otros eran manipulados.

La dirigencia del PAN reconoció que hubo irregularidades pero defendió los avances que había logrado en la Cámara de Diputados. No participó —al menos formalmente— en las varias protestas callejeras que Clouthier organizó. Gracias a su participación en todos los procedimientos del proceso electoral —y a los partidos del FDN que no siguieron el movimiento de protesta organizado por Cárdenas— fue posible inaugurar el nuevo Congreso y cumplir así con los plazos establecidos en la Constitución. De esta manera, el PAN desempeñó un papel decisivo en la estabilización de una situación muy volátil.

El PAN aceptó bajo protesta el resultado oficial, que le reconocía a su candidato 3.2 millones de votos, 17% del total. Este desempeño mediocre, en comparación con el de 1982, contrastaba con los brillantes resultados que el partido obtuvo para el Congreso, en el que consiguió 101 escaños. Esto lo convirtió en una oposición "necesaria", cuya participación era crítica para las reformas constitucionales que proyectaba el nuevo gobierno, las cuales eran un elemento fundamental de su programa.

El PAN no se comprometió plenamente con el resultado electoral. Dos semanas antes de que Carlos Salinas de Gortari tomara posesión como presidente, sus líderes publicaron un documento intitulado "Compromiso Nacional para la Legitimidad y la Democracia", en el que explicaban las razones por las que habían aceptado esos resultados tan dudosos. El documento reiteraba la ilegitimidad del presidente, aunque ofrecía una solución pragmática que consistía en reconocer una "segunda legitimidad" a la

presidencia de Salinas (1988-1994) si, desde el primer día, "se conducía como un gobierno de transición, obedeciendo el mandato popular de democratización, pluralismo, justicia social y soberanía popular" (PAN, 1989). En una situación de emergencia, éste era un lineamiento ambiguo a seguir, pero reflejaba el ascenso del realismo político en la perspectiva del partido.

La estrategia del PAN en esta situación crítica fue dictada por la polarización prevaleciente. Frente al riesgo del desplome institucional y de la confrontación social, reaccionó —como muchos otros partidos democráticos conservadores en circunstancias parecidas a las de México en el verano de 1988— optando por el mal menor representado por el actor político más fuerte.

Esta posición le fue severamente reprochada por el resto de la oposición y por las corrientes más intransigentes dentro del PAN. La dirigencia del partido argumentó que era imposible saber quién había ganado la elección, pero que el nuevo presidente se había comprometido a democratizar el sistema político. Sin embargo, el argumento más fuerte que motivó a la dirigencia a seguir este camino fue "el factor político llamado Cárdenas" (Castillo Peraza, 1990, p. 117). Si bien Cárdenas nunca pudo mostrar cifras fidedignas que apoyaran sus afirmaciones de que él había triunfado, al FDN se le reconoció oficialmente 31% de los votos, lo que era casi el doble del porcentaje obtenido por el PAN. Este último había perdido su hegemonía sobre el voto de protesta. Al ponderar las consecuencias posibles de una nueva elección en una situación tan polarizada entre Cárdenas y el PRI, era previsible que estas dos fuerzas se dividirían el electorado entre ellas y que el PAN quedaría excluido. Por lo tanto, el partido no tuvo ningún interés en promover un proceso que pondría en peligro su posición en la Cámara, mientras que podía beneficiarse con la posibilidad de actuar como interlocutor del presidente de la República.

La oposición leal al presidente

Durante el gobierno de Salinas, el partido adquirió una posición de influencia sin precedentes. No sólo tuvo una fuerza real en la Cámara de Diputados, sino que también la mala voluntad entre el presidente y sus opositores, partidarios de Cuauhtémoc Cárdenas, le dio al PAN una posición privilegiada para actuar como árbitro entre adversarios irreconciliables. Así, asumió las funciones de liderazgo político y creó condiciones para la negociación y el diálogo.

El diálogo y la negociación entre Salinas y el PAN los benefició a ambos. En más de una ocasión fue muy costosa para el PRI, que debió reconocer (probablemente bajo presión presidencial) victorias de candidatos del PAN. Ése fue el caso en Baja California en 1989. Las llamadas *concertacesiones* revelaron la privilegiada relación entre el PAN y el presidente Salinas. Se denominó *concertacesiones* a las negociaciones realizadas entre este último y la dirigencia del PAN cuando, ante conflictos poselectorales, éstos se resolvían a favor del PAN con el sacrificio de los candidatos del PRI, que se veían obligados a reconocer la victoria de sus adversarios simplemente con base en los

argumentos de buena fe de los panistas. Éstas fueron concesiones irregulares, porque no eran consecuencia de una rigurosa aplicación de la ley electoral. Enfrentada con el fraude electoral, ésta habría exigido la anulación de los resultados y la realización de nuevas elecciones. Estos acuerdos eran *ad hoc*, llevados a cabo bajo el manto de un renovado presidencialismo, característico de la administración de Salinas. El caso más notorio fue el de la gubernatura de Guanajuato en 1991. Aunque el candidato del PRI a la gubernatura, Ramón Aguirre, fue declarado ganador oficial por las autoridades, renunció el día en que tomó posesión, bajo la presión ejercida por el propio Salinas sobre él. De esta manera, Salinas buscaba satisfacer las afirmaciones de triunfo del PAN, que organizó una poderosa manifestación para oponerse a que Aguirre tomara posesión como gobernador.

El candidato del PAN, Vicente Fox, fue tan víctima como Aguirre de las negociaciones presidenciales con la dirigencia del PAN. Como nuevo gobernador se nombró a Carlos Medina Plascencia, el alcalde panista de la ciudad de León. Carlos Castillo Peraza, el presidente del PAN, había considerado a Medina un candidato preferible a Vicente Fox, cuyo estilo neopanista no era de su agrado. Esta decisión de la dirigencia del partido puede ser la base de la desconfianza que Fox mostró hacia el PAN incluso como presidente. Además, las *concertacesiones* eran contrarias al compromiso de Salinas en 1988 para procurar una nueva legalidad electoral. Aun así, ni el presidente ni el liderazgo del PAN parecían estar particularmente incómodos con esas negociaciones extralegales. Para el PAN era cuestión de mero realismo político.

El Cofipe: una legislación panista

Entre 1988 y 1994, el PAN fue parte de muchas decisiones gubernamentales. La ambivalencia mostrada durante décadas de marginación se evaporó súbitamente. Su apoyo en la Cámara de Diputados fue definitivo para las enmiendas constitucionales propuestas por Salinas en asuntos clave como el ejido y la relación entre la Iglesia y el Estado. Empero, muchos de los cambios no eran en realidad iniciativas del PAN, sino parte del ambicioso programa de modernización de Salinas. Sin embargo, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) de 1990, que complementaba la transformación al multipartidismo, se desarrolló a partir de lo que originalmente fue una iniciativa del PAN.

Las elecciones de julio de 1988 habían puesto en evidencia las limitaciones del Código Federal Electoral, aprobado en 1986 para remplazar a la LOPPE de 1977. El PAN había criticado fuertemente al CFE porque pensaba que no resolvía el problema central de la parcialidad de las autoridades electorales (PAN, 1987). No obstante, algunas de sus disposiciones favorecieron al partido, en especial las cláusulas relativas al financiamiento de los partidos políticos. La ley hacía al Estado responsable de proporcionar apoyo financiero a los partidos políticos. También les dio por primera vez tiempo en los medios de comunicación como la radio y la televisión. Por lo tanto, ayudó acallar una fuente de tensión dentro del PAN creada por el neopanismo. Éste había aportado nuevos militantes

y candidatos con recursos suficientes para financiarse a sí mismos y sus campañas, recursos que el partido no podía igualar o rechazar. La autonomía financiera de los candidatos, aunada a una identificación baja o inexistente con la doctrina del partido, hizo que el PAN ya no pudiera controlar o disciplinar sus candidatos, que mantenían un nivel indeseable de independencia. También introdujo en el partido una diferenciación entre los ricos y los pobres, echando las bases para múltiples conflictos futuros.

Durante las negociaciones con los líderes del PAN en el difícil periodo poselectoral, uno de los compromisos del presidente Salinas había sido una nueva ley electoral. Hasta entonces, la legislación electoral era uno de los instrumentos más efectivos de que disponían los presidentes para controlar y conformar la participación institucional. Hasta 1988, el gobierno se había mostrado muy renuente a renunciar a esta responsabilidad. En ese año, sin embargo, el gobierno entrante necesitaba el apoyo del PAN. Reconoció que las reglas del juego político ya no podían ser establecidas de manera unilateral y que los actores políticos sólo se podían comprometer con los procedimientos y resultados si participaban en la redacción de las reglas electorales.

El PAN desempeñó un papel central en la redacción del Cofipe, aunque fue el PRI el que terminó presentando la legislación. Lo que el PAN no logró en esta ocasión lo consiguió posteriormente con las reformas introducidas en 1993, 1994 y 1996. Por lo tanto, puede decirse razonablemente que el PAN fue el autor de la legislación electoral que estuvo vigente en 2000. Aún más, la experiencia del PAN en este asunto —durante décadas había sido uno de sus principales intereses, junto con su preocupación casi obsesiva por unas elecciones justas— le aseguró un papel principal en esta tarea.

El Cofipe fue una respuesta a muchas de las demandas electorales del PAN, algunas tan antiguas como el propio partido. Estableció un Tribunal Federal Electoral (Trife), produjo nuevas credenciales de electores con fotografía y efectivamente impidió que fueran utilizados fondos del gobierno para beneficiar a un partido en particular. También terminó con la afiliación colectiva obligatoria de los miembros de los sindicatos a los partidos. La disposición más importante fue la creación de una autoridad electoral autónoma, el Instituto Federal Electoral (IFE), cuyo consejo general remplazó a la Comisión Federal Electoral. Inicialmente, el secretario de Gobernación continuó siendo el presidente de esta CFE, como representante del Poder Ejecutivo. En 1996, sin embargo, una reforma terminó toda participación del gobierno en las autoridades electorales, y esas funciones pasaron a personas designadas por la Cámara de Diputados. Con esto, el Trife se convirtió en la autoridad electoral suprema con responsabilidad para decidir sobre la legalidad de todo el proceso electoral, función que previamente llevaban a cabo diputados elegidos como colegio electoral.

Estas reformas ayudaron a cambiar la percepción que los mexicanos tenían del acto de votar. También explican la credibilidad de las elecciones de 1994, cuando 77% de un electorado de 45.8 millones ejerció su derecho a votar. Está claro que el Cofipe fue de importancia decisiva para hacer de las elecciones de 2000 las más competidas en la historia de México, a la vez libres y justas. Éstas resultaron en la elección del candidato del PAN, Vicente Fox, que con 15.1 millones de votos fue electo presidente de la

República.

El PAN y el sistema de tres partidos en la década de los noventa

El nacimiento del PRD en 1989 cambió el equilibrio político general, modificando la dirección del cambio del partido que, 10 años antes, se había propuesto hacia un sistema bipartidista del PRI y el PAN. En los noventa, el sistema multipartidista de México consistía en tres grandes partidos que se dividían entre sí cerca de 90% de los votos en proporciones desiguales.

En esas condiciones, cambiaron las estrategias del PRI, del PAN y del PRD, así como la naturaleza de la competencia. Entre 1988 y 1994 la cooperación entre el PAN y la presidencia de la República excluyó sistemáticamente al PRD, en tanto que el PRI era un simple testigo de este enfoque. En el periodo 1994-2000 hubo un acercamiento entre el PAN y el PRD, que se tradujo en alianzas circunstanciales contra el PRI. La cooperación entre los dos partidos opositores se hizo cada vez más evidente después de las elecciones de 1997 para el Congreso, en las que el PAN recibió 27% del voto y obtuvo 121 escaños en la Cámara de Diputados, y el PRD el 26%, con 125 escaños. Juntos superaban al PRI, que obtuvo 39% de los votos y 239 escaños.

Otros factores que influyeron en el viraje en la estrategia del PAN fueron los cambios en el liderazgo y una variación en la relación entre la presidencia y el PRI. Hasta 1996, la figura dominante en el PAN fue Castillo Peraza, hombre de partido que trataba de combinar las políticas de convicción (siempre estuvo comprometido con la actividad política doctrinal del partido) con las del realismo político que se presentó después de noviembre de 1988. Esto significaba que hasta donde se llevara el pragmatismo chocaría con limitantes ideológicas. Su relación con el cardenismo y con los antiguos priístas del PRD ofreció un ejemplo de los efectos de esta simbiosis. Su desconfianza y su aversión de las posiciones, métodos y personajes de una organización dirigida por los adversarios históricos del PAN eran tan claras que es probable que esto fuera uno de los factores más importantes que lo convencieron de colaborar con el presidente Salinas. Muchos líderes y partidarios del PRD habían sido incondicionales del PRI durante las épocas sombrías de la historia electoral del PAN.

Las relaciones entre los dos partidos de oposición se hicieron más cooperativas cuando primero Felipe Calderón (1997-1999) y luego Luis Felipe Bravo Mena (1999-2002, 2002-2005) fueron presidentes del PAN. En particular con el segundo, el elemento neopanista en el partido ganó predominio en el liderazgo. Ésta era la corriente a la que pertenecía Fox. Desde entonces, el deseo de expulsar al PRI del poder superó cualquier otra consideración o prioridad, lo que condujo a una mayor disposición a encontrar puntos de convergencia con el PRD en la Cámara de Diputados y a apoyar alianzas electorales. Por primera vez, la acción concertada de los partidos de oposición en la Cámara hizo eficaz el sistema de equilibrios y frenos que fundamenta la separación de poderes. La amplitud del poder presidencial encontró nuevos límites. Asuntos tan urgentes como los presupuestos federales requirieron prolongadas negociaciones entre los

partidos y entre éstos y las autoridades del gobierno. El acercamiento entre el PAN y el PRD fue más claro al tratarse de cuestiones políticas como la reforma electoral de 1996 y los escándalos y denuncias de corrupción que rodeaban al ex presidente Salinas, a su familia, a sus consejeros más cercanos y a los anteriores funcionarios del gobierno. Empero, esos acuerdos no eliminaron del todo las diferencias entre los dos partidos en asuntos de administración económica. Por ejemplo, los perredistas denunciaron las políticas neoliberales que el PAN defendía y en las que apoyaron al presidente Zedillo (1994-2000). Además, los diputados del PAN apoyaron al principio la operación de rescate bancario organizada en respuesta a la crisis financiera de diciembre de 1994 y que se convirtió en uno de los mayores escándalos que afectaron al gobierno de Zedillo. Posteriormente, desempeñaron un papel activo en la planeación del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), que sustituyó al anterior Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa).

Cambios en el partido, cambios en el sistema político

El Estado mexicano experimentó cambios sustanciales que resultaron de las reformas estructurales realizadas por los gobiernos de De la Madrid, Salinas y Zedillo. El principal efecto político fue que se dejó sentir una menor intervención estatal en el sistema de partidos. La disminuida presencia política del Estado mexicano, como lo ejemplifica el gradual desmantelamiento de las prácticas clientelistas del PRI, promovió el desarrollo institucional de los partidos, como si la reducción del Estado favoreciera la expansión de los partidos políticos. Durante los ochenta y los noventa, los partidos —en particular los de oposición— se convirtieron en el pivote del equilibrio político general, tanto por su fuerza electoral y legislativa como por su creciente importancia en los gobiernos estatales.

Los cambios en la dirigencia del PAN en los noventa revelaron más que una simple victoria del ala empresarial del partido. También fueron producto de la descentralización política y de la fuerza adquirida por las regiones frente al centro. Los gobernadores y alcaldes panistas empezaron a exigir una mayor participación en los asuntos del partido; por ejemplo, en la elaboración de las listas electorales. Este ajuste redujo la influencia de la dirigencia, cuya base política seguía estando en la ciudad de México. Tanto el PRI como el PRD sufrieron la misma clase de tensiones entre el centro y la periferia. Quizás el indicio más revelador de la importancia de las regiones fue que los candidatos de los tres partidos principales (PRI, PAN y PRD) a la presidencia en 2000 habían sido o eran gobernadores de algún estado.[15]

Durante el gobierno de Salinas hubo importantes diferencias entre el PAN y el PRD en la cuestión de estrategia. El primero era interlocutor del presidente, y ese apoyo implícito se tradujo en una ampliación de importantes avances electorales, en su mayoría en detrimento del PRI. Entretanto, el PRD optó en su oposición por un estilo de confrontación e intransigencia, censurando al PAN por abandonar su tradición opositora. La relativa facilidad con que se resolvían los problemas poselectorales que afectaban a los candidatos del PAN contrastaba con la rigidez del gobierno hacia demandas similares del

PRD. El presidente Salinas, se decía, practicaba una "democracia selectiva", favoreciendo a sus aliados en el PAN, pero procurando siempre dañar al PRD. Éste mantuvo prácticas de movilización y participación colectiva que iban más allá de los límites de la política electoral, tácticas que el PAN evitaba cada vez más.

Las diferencias estratégicas entre el PAN y el PRD también pueden explicarse por sus distintos niveles de institucionalización. Aun cuando para el PAN la década de 1990 fue un periodo de consolidación en el que pudo sacar ventaja del gradual desmantelamiento del autoritarismo, el PRD luchó por definir su identidad, por establecer un territorio electoral y por producir un discurso convincente. Los orígenes del PRD en el PRI lo obligaban a distanciarse decididamente del partido en el gobierno, y por lo tanto sus críticas eran más radicales y su posición más intransigente.

El contexto institucional que el PAN enfrentó en los años noventa presentaba nuevas características. El poder político del Estado había disminuido considerablemente como consecuencia de las sucesivas crisis económicas y financieras y las políticas seguidas por los últimos tres gobiernos del PRI en el siglo XX. Una menor intervención del Estado significaba una reducción de los recursos que el PRI tenía a su disposición para desempeñar su papel tradicional en la movilización de apoyo para las medidas políticas del gobierno. Esto se tradujo en su declinación electoral.

Al tomar posesión, el presidente Zedillo anunció que mantendría una "distancia saludable" del partido oficial. El significado inmediato de esta declaración fue el fin de la posición privilegiada del PRI, derivada de su relación especial con la presidencia. Carente del apoyo presidencial, el PRI se convirtió en un enemigo mucho menos temido y quedó cada vez más expuesto a los ataques del PAN. En muchas ocasiones, los partidos de oposición encontraron que no necesitaban discutir las posiciones que favorecían con los miembros del PRI en el Congreso; simplemente hablaban con el presidente, que les decía a los miembros del PRI cómo debían votar.

Vicente Fox, el PAN y la victoria del 2000

Vicente Fox lanzó su campaña para asegurar la nominación presidencial de su partido a finales de 1997, siendo gobernador de Guanajuato. Con ayuda de la organización Amigos de Fox, que no estaba dentro del partido, realizó con mucho éxito algunos viajes nacionales e internacionales cuyo propósito era darse a conocer, establecer redes de apoyo y obtener fondos. A finales de 1999, para el momento de la convención en que el partido seleccionaría su candidato, la posición de Fox era inexpugnable. Por primera vez en la historia del partido, la candidatura fue decidida simplemente por aclamación y no hubo votación. Lo mismo hizo el PRD al lanzar el tercer intento de Cárdenas por llegar a la presidencia, con la diferencia de que en el PRD hubo quejas por este procedimiento y como consecuencia ocurrieron divisiones. Es irónico que estos dos partidos de oposición recurrieran a esta clase de método "no democrático" —que tradicionalmente era característico del PRI—, en tanto que el PRI por primera vez usó un sistema de elecciones primarias para nombrar a su candidato.

La campaña electoral de Fox avanzó apoyada tanto por los Amigos de Fox como por el PAN, cada uno trabajando como estructura diferente, paralela y especializada. Mientras que los primeros trabajaban exclusivamente para asegurar una victoria en las elecciones presidenciales, los segundos se concentraron en las contiendas por el Congreso. Si bien repetidas veces se dijo que los Amigos de Fox se integrarían al partido, las relaciones entre ellos estaban llenas de tensión y mutua desconfianza que sólo lograron superarse gracias a la disposición del presidente del partido, Bravo Mena, a fungir como mediador. No obstante, los panistas nunca superaron su preocupación porque veían en la receptividad de Fox a las decisiones de sus "Amigos" una amenaza permanente al partido, en especial cuando comparaban esta actitud positiva con las continuas negativas de Fox a identificarse con el partido y con su doctrina. Peor aún, en más de una ocasión durante la campaña, Fox se quejó de que el partido era "una camisa de fuerza" y expresó su preferencia por ir al pueblo directamente sin la mediación del partido. Su liderazgo populista evocaba más el tipo de voluntarismo presidencialista que había caracterizado a los presidentes del PRI, que el arribo de una era política totalmente nueva.

El estilo de Fox pudo haber atraído a una mayoría de votantes, pero su triunfo también se debió al agotamiento del PRI luego de tantos años en el poder y a los numerosos escándalos que lo habían afectado después de 1994. Así, la campaña del año 2000 fue algo asimétrica. Los dos líderes —Fox y Cárdenas— enfrentaron a la "maquinaria" partidista del PRI, cuyo candidato en comparación tuvo un papel secundario. La competencia fue intensa pero escrupulosamente supervisada por el IFE. Días antes de las elecciones, la diferencia entre Fox y el candidato del PRI, Francisco Labastida, parecía tan pequeña que hubo muchas predicciones de que un resultado muy apretado llevaría a una tormenta política. Sin embargo, los resultados le dieron al candidato del PAN un margen de siete puntos sobre Labastida, lo que hizo indiscutible su victoria.

CONCLUSIONES

Una interpretación ampliamente compartida de la victoria de Vicente Fox en las elecciones presidenciales de 2000 subraya su estilo personal para explicar la derrota del PRI. Esta opinión le resta importancia al papel desempeñado por el PAN y su doctrina y programas de política en la movilización de los votantes. Sin embargo, las cifras de la elección sugieren que aun cuando el candidato hizo una contribución decisiva al triunfo del partido, este último le proporcionó al primero una identidad política cuya carencia habría sido fatal para las aspiraciones personales de Vicente Fox. Las afirmaciones de que todo se debió a un liderazgo carismático no pueden sostenerse para un 43% del voto total; además, los repetidos fracasos de los llamados de Vicente Fox durante la campaña para que se le reconociera como cabeza de una amplia coalición opositora revelan su incapacidad de imponerse como la única encarnación del sentimiento antipriísta.

La conducta del electorado mexicano en los últimos 15 años del siglo XX indica la

preeminencia de actitudes conservadoras y renuentes a asumir riesgos que han favorecido el gradualismo y las organizaciones y personalidades políticas reconocidas por encima de las propuestas revolucionarias de los anticonformistas. La concentración de las preferencias electorales en tres partidos —PAN, PRI, PRD— que son parte de un panorama político conocido, apoya la hipótesis de una profunda desconfianza de los votantes mexicanos a las aventuras políticas. Estas consideraciones llevan a la conclusión de que Fox necesitaba al PAN para ganar la elección tanto como el PAN necesitaba a Fox para triunfar sobre su adversario histórico.

Por lo tanto, la derrota del PRI en la contienda presidencial fue consecuencia de una combinación inestable de política personalizada y factores organizacionales que cristalizaron en la fórmula Fox más el PAN. Puede ser que esa fórmula fuera inevitable en una contienda en que los medios de comunicación desempeñaron un papel importante en la personalización de los mensajes políticos y para imponer una forma moderna de democracia directa. Durante la campaña, la concentración en el candidato dejó en la sombra al partido, situación que fue empeorada por la influencia de los Amigos de Fox. No obstante, Fox se benefició de la identidad del PAN, que era bien reconocida por el electorado. Los principales componentes de esta identidad son la doctrina del partido y su trayectoria en la larga historia del autoritarismo mexicano del siglo XX.

La capacidad del PAN para construir y conservar una identidad política distinta fue la clave de su supervivencia y desarrollo en un sistema político autoritario. Esta identidad está basada en dos factores, uno institucional y el otro ideológico o doctrinal. En lo que se refiere a las instituciones, la historia del partido sugiere que el régimen constitucional —diseñado siguiendo los lineamientos de la democracia liberal y representativa— proporcionó una estructura definitoria para la organización, contribuyendo a su identidad y proporcionándole estímulos electorales periódicos. Durante el periodo autoritario, toda elección —ya fuera local o nacional— fue para el PAN una bocanada de oxígeno. Su compromiso con la política de partidos y la electoral lo vinculó con el proyecto a más largo plazo de la democracia mexicana, y su persistencia como oposición incluso en las condiciones más adversas dio credibilidad a sus afirmaciones de que era independiente. Esta credibilidad era el mayor activo político del PAN.

La supervivencia del partido también debe acreditarse al papel que desempeñó la doctrina en la definición de la identidad del PAN. Su doctrina protegía al PAN —aunque débilmente— de los efectos destructivos del aislamiento a que el autoritarismo lo condenó durante décadas. La doctrina también fue decisiva en el periodo de crecimiento (esto es, en los ochenta) porque le proporcionó un marco de referencia que estructuró el repentino arribo de nuevos líderes y miembros. En los años noventa las relaciones con varios partidos democratacristianos, el Partido Popular Español o el Partido Demócrata Cristiano chileno contribuyeron a la consolidación institucional del PAN, fortaleciendo su identidad política. La fuente de apoyo más importante provino de la fundación alemana Konrad Adenauer Stiftung (KAS), que trabajó estrechamente con el liderazgo del PAN en los fundamentos del partido diseñando y poniendo en práctica nuevos métodos de capacitación y reclutamiento de líderes. La KAS también ayudó a que el partido renovara

las plataformas políticas y las propuestas de gobierno. Esta contribución pudo verse en los programas del PAN y en diversas medidas en los discursos de sus candidatos.

El desarrollo del PAN es ilustrativo de una construcción institucional a largo plazo gradual y acumulativa. Esta dinámica casi inerte en las condiciones externas experimentó un cambio súbito en 1982, y esto aceleró repentinamente su desarrollo. Este cambio de ritmo fue tan grande que modificó la composición y el equilibrio interno del partido, las normas de conducta de sus miembros, las reglas mediante las cuales operaba e incluso sus objetivos más importantes. Estos cambios también llevaron a una solución de las ambigüedades del partido con respecto a su identidad doctrinaria y a su afiliación política. Gracias a esta profunda transformación el PAN se convirtió en el pivote del cambio en México, donde tradicionalmente los partidos políticos habían estado subordinados al Estado. El registro como miembro de la organización internacional de la democracia cristiana puede ser considerado el capítulo final de la consolidación del partido.

El ambicioso partido democratacristiano que llegó a la presidencia de la República en 2000 estaba muy alejado de la poco firme organización establecida en 1939 por un grupo de profesionales que intentaban influir en el ejercicio del poder más que llegar ellos mismos al poder. Sin embargo, las difíciles relaciones del presidente Fox con su propio partido en los primeros meses en su cargo muestran que en un ambiente democrático el PAN se está enfrentando a fuertes tensiones derivadas de la aparente lucha entre su identidad doctrinaria y las responsabilidades de gobernar.

REFERENCIAS

Álvarez, Luis H., 1988, “Gobierno de transición”, *La Nación*, 1, 15 de noviembre, p. 767.

Álvarez de Vicencio, María Elena, 1986, *Alternativa democrática*, México, EPESSA.

Castillo Peraza, Carlos, 1990, *El PAN nuestro*, Mérida, Editorial Dante.

———, 1993, “Entrevista”, *Proceso*, México, pp. 23-25.

Christlieb Ibarrola, Adolfo, 1963, *Temas políticos*, México, Ediciones de Acción Nacional.

———, 1965, *La oposición*, México, Ediciones de Acción Nacional.

———, 1969, *Solidaridad y participación*, México, Ediciones de Acción Nacional.

Dierickx, Guido, 1994, “Christian Democracy and Its Ideological Rivals: An Empirical Comparison in the Low Countries”, en David Hanley (ed.), *Christian Democracy in Europe: A Comparative Perspective*, Londres, Pinter, pp. 15-30.

Fuentes Díaz, Vicente, 1969, *Los partidos políticos en México*, México, Altiplano.

González Morfín, Efraín, 1992, *Introducción a la doctrina social cristiana*, México, Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana.

González Morin, Manuel, 1927, *1915*, México, Editorial Cultura.

———, 1928, *España fiel*, México, Editorial Cultura.

Huntington, Samuel P., 1968, *Political Order in Changing Societies*, New Haven, Yale University Press.

Instituto Federal Electoral (IFE), 2000, “Programa de resultados preliminares”; puede consultarse en www.ife.org.mx

Keinmann, Hans Otto, 1993, *Geschichte der CDU, 1945-1982*, edición de Gunter Buchstab, Stuttgart, Deutsche Verlaganstalt.

Kosters, Wim, 1989, “Economía social de mercado. Antecedentes históricos, desarrollo, principios y elementos fundamentales”, *Contribuciones*, 6, enero-marzo, pp. 7-16.

Linz, Juan J., 1978, *Crisis, Breakdown and Re-equilibration: The Breakdown of Democratic Regimes*, Baltimore, Johns Hopkins University Press.

Loaeza, Soledad, 1988, *Clases medias y política en México: la querella escolar 1959-63*, México, El Colegio de México.

———, 1999, *El Partido Acción Nacional: la larga marcha 1939-1994. Oposición leal y partido de protesta*, México, Fondo de Cultura Económica.

Lujambio, Alonso, 2001, “Democratization Through Federalism? The National Action Party Strategy, 1939-2000”, en Kevin J. Middlebrook (ed.), *Party Politics and the Struggle for Democracy in Mexico: National and State-Level Analysis of the Partido Acción Nacional*, San Diego, Center for U. S.-Mexican Studies, pp. 47-94.

Mabry, Donald, 1973, *Mexico's Acción Nacional: A Catholic Alternative to Revolution*, Siracusa, Syracuse University Press.

Panebianco, Angelo, 1988, *Political Parties: Organization and Power*, trad. del italiano al inglés, Marc Silver, Cambridge, Cambridge University Press.

Partido Acción Nacional (PAN), 1969, “Plataforma política y social del PAN”, *La Nación*, suplemento 1289, 15 de noviembre, pp. xii-xvii.

———, 1987, “No al Código Electoral Antidemocrático”, *La Nación*, 15 de enero, pp. 22-23.

———, Comité Ejecutivo Nacional, 1989, “Compromiso nacional para la legitimidad y la democracia”, *Palabra*, año 2, núm. 7, enero-marzo, pp. 62-70.

Peters, B. Guy, 1999, *International Theory in Political Science: The New Institutionalism*, Londres, Pinter.

Von Nell Breuning, Oswald, S. J., 1946, *La reorganización de la economía social, desarrollo y análisis de la encíclica Quadragesimo Anno*, Buenos Aires, Editorial Poblet.

Von Sauer, Franz A., 1974, *The Alienated “Loyal Opposition”: Mexico's Partido Acción Nacional*, Albuquerque, University of New Mexico Press.

[1] Cuando el gobierno de Calles (1924-1928) aplicó la legislación anticlerical contenida en la Constitución de 1917, se organizó una rebelión campesina en el centro de México para oponerse a dicha legislación con el apoyo de los obispos católicos. La Cristiada fue una guerra cruel y sangrienta (1926-1929). El Estado prevaleció sobre la Iglesia: la legislación siguió vigente. Sin embargo, no se le aplicó rigurosamente. Véase Fuentes Díaz, 1969; Mabry, 1973; Von Sauer, 1974.

[2] Para las varias definiciones de institucionalización, véase Huntington, 1968; Panebianco, 1988; Peters, 1999.

[3] Para una descripción más detallada de este debate, véase Loaeza, 1999.

[4] El *solidarismus* fue creado por el jesuita alemán Heinrich Pesch a mediados del siglo XIX. Pesch era un economista que insistía en que el bienestar es el único objetivo de la economía. Presentó un pensamiento basado en la escolástica y en la filosofía social católica. Sus principales principios fueron desarrollados posteriormente por otro jesuita, Oswald von Nell Bruening, un canónigo de la Universidad de San Jorge en Frankfurt. Von Nell Bruening fue responsable de la difusión en 1931 y 1932 de la encíclica *Quadragesimo Anno* de Pío XI, emitida para celebrar el aniversario de la *Rerum Novarum*. Igual que ésta, rechazaba el liberalismo y el individualismo. Sus principales propuestas giran en torno a la política social y la legislación laboral. Von Nell Bruening es uno de los fundadores de la economía social de mercado, la principal propuesta de la democracia cristiana europea tal como se desarrolló en Alemania después de 1947 (Von Nell Bruening, 1946). Véase también Kosters, 1989.

[5] En los años cincuenta, el papa Juan Pablo II estudió la fenomenología de Max Scheler, para quien la intuición es la base del conocimiento de la realidad y la religión uno de los elementos básicos de la conciencia. En su juventud, Wojtyla criticó a Scheler porque él no consideraba que la persona fuera parte de lo absoluto de Dios.

[6] Los principales preceptos de la economía social de mercado incluyen la descentralización, el concepto de que el empresario (en especial el empresario a escala media o pequeña) es el agente económico clave, la primacía del mecanismo de precios y de la competencia perfecta, la autonomía del banco central, el libre acceso a los mercados, la libertad de contratación y la continuidad en la elaboración de las políticas económicas. Como preceptos reguladores se proponen los siguientes: el control estatal sobre los monopolios, una política de redistribución del ingreso, la regulación de los mercados de trabajo y un salario mínimo.

[7] Juan Gutiérrez Lascuráin (1949-1956), Alfonso Ituarte Servín (1956-1959), José González Torres (1959-1962), Adolfo Christlieb Ibarrola (1962-1968), Ignacio Limón Maurer (1968-1969) y Manuel González Hinojosa (1969-1972).

[8] Citado en Von Sauer, 1974, pp. 123-124.

[9] Tradición política mexicana identificada con una interpretación izquierdista de la Revolución mexicana.

[10] Lujambio (2001, cuadro II.1). Sin embargo, en 1998 y 1999 este porcentaje disminuyó nuevamente, a 59 y a 65%, respectivamente. Vale la pena señalar que el menor número de candidatos del PAN a las municipalidades no afectó el alto porcentaje de personas que vivían bajo gobiernos panistas, ya que estas municipalidades (en las que no lanzaron candidato) representaban menos de 14% del total de votantes.

[11] En proporción de los votos, la ciudad de México debería incluirse en este grupo. Sin embargo, la conducta de los votantes de la capital de la República se deriva más de fuertes sentimientos en contra del PRI que de apoyo al PAN. La fuerza del FDN-PRD en la ciudad es prueba adicional de esta característica.

[12] Las organizaciones que formaban el Frente Democrático Nacional eran las siguientes: Partido Popular Socialista (PPS), Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM), Partido Mexicano Socialista (PMS) y el anterior Partido Socialista de los Trabajadores (PST), que se convirtió en el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional (PFCRN).

[13] IFE, 2000. En las elecciones participaron dos coaliciones principales. La primera era la Alianza para el Cambio, constituida por el PAN y el PVEM. La segunda era la Alianza por México, compuesta por el PRD y el PT, y varias nuevas agrupaciones reconocidas por el Instituto Federal Electoral (IFE) en junio de 1999. Éstas incluían Convergencia por la Democracia (CD), Partido de la Sociedad Nacionalista (PSN), Partido Alianza Social (PAS), así como el Partido del Centro Democrático (PCD), Democracia Social (DS) y el PARM. En consecuencia, hubo cinco candidatos presidenciales: Vicente Fox (Alianza para el Cambio), Francisco Labastida Ochoa (PRI), Cuauhtémoc Cárdenas (Alianza por México), Manuel Camacho (PCD) y Gilberto Rincón Gallardo (DS). Con excepción del PARM, PCD y DS, que no excedieron 2% del voto, los otros ocho obtuvieron representación en la Cámara de Diputados.

[14] La intervención de Alcocer fue el origen de la frase "la caída del sistema" que después se haría famosa. La

expresión ha sido atribuida equivocadamente a Manuel Bartlett, que entonces era secretario de Gobernación y (como tal) presidente de la Comisión Federal Electoral.

[15] Anteriormente, los candidatos del PRI se escogían de entre las filas de los secretarios del gabinete. En 1996 el PRI cambió sus reglas para excluir de la candidatura a la presidencia a quienes no tenían experiencia previa como candidatos del partido en elecciones para un cargo público.

VIII. CAPTANDO TODAS LAS ALMAS: EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y LA POLÍTICA DE LA RELIGIÓN EN MÉXICO

BEATRIZ MAGALONI Y ALEJANDRO MORENO

LA ORGANIZACIÓN que está más cerca de ser un partido de la democracia cristiana en México ha sido el Partido Acción Nacional (PAN). Sin embargo, no se afilió formalmente al movimiento democratacristiano internacional sino en fechas recientes, cuando se unió a la Internacional Demócrata Cristiana a finales de 1998. Este capítulo se concentra en el perfil electoral de los votantes del PAN. Nuestro objetivo es evaluar si algunas de las divisiones comúnmente asociadas con la democracia cristiana se expresan también en el sistema de partidos mexicano.

El PAN tiene una larga trayectoria de oposición al Partido Revolucionario Institucional (PRI) hegemónico, que gobernó México desde principios de la década de 1930 hasta el año 2000. El PAN se creó en 1939 con tres metas primarias: *1)* luchar por la democracia; *2)* oponerse a la expansión del papel del gobierno central, y *3)* defender la libertad religiosa. ¿En qué medida siguen perdurando estas divisiones y llegan a expresarse en el sistema de partidos mexicano contemporáneo?

El capítulo demuestra que estas divisiones por temas no tuvieron un papel muy relevante en el sistema de partidos que prevaleció antes de la derrota del PRI en la elección presidencial de 2000. En el nivel de las masas, el PAN no es un partido coherente ideológicamente: sus partidarios son claramente religiosos y están en favor de la democracia, pero en el aspecto ideológico muestran un panorama muy disperso en términos económicos y culturales. Esto le presenta al partido un importante dilema: aunque sus élites parecen ser ideológicamente coherentes y estar unidas, en el nivel de las masas los partidarios del PAN lo caracterizan como un partido que atrae a todo tipo de personas.

Los hallazgos presentados en este capítulo plantean las dos siguientes preguntas: ¿Por qué se erosionó la antigua división religiosa? ¿Por qué es el PAN una coalición electoral tan heterogénea? Creemos que las respuestas las ofrece la naturaleza de la política de partidos en sistemas de partido hegemónico. La hegemonía de un partido implica, por definición, que las diferencias debidas a los temas quedan acalladas. Por otra parte, durante los años de hegemonía del partido, el PRI recibía apoyo de personas de todo el espectro ideológico, y a pesar de su plataforma anticlerical el electorado del partido gobernante era católico. Por otra parte, aunque existían diferencias ideológicas entre los políticos del PRI, esas divisiones no se manifestaron en el escenario electoral porque los políticos del PRI no competían entre ellos ante el electorado.

Por lo mismo, no hay razón para esperar que el PAN siga siendo un partido ideológicamente homogéneo, porque representaba a un partido de protesta que daba

cabida a toda clase de personas. Hasta 1988 era el único partido de oposición fuerte capaz de ganar elecciones. Por ser la organización opositora más *eficiente*, el partido captó el apoyo de un electorado muy heterogéneo y pragmático, cuyo rasgo básico era el rechazo al PRI y su deseo de una democracia electoral.

Uno de nuestros hallazgos más importantes es la notoria similitud entre los votantes del PAN y del PRI en temas diferentes del de la democracia, lo que nos permite ver el grado en que la división religiosa de los primeros años se debilitó. ¿Implica esto que la religión y otros temas morales no tienen ya relevancia en la política mexicana? Nuestra respuesta es que estos temas adquirirán más importancia a medida que se abandonen las principales dimensiones de la división —el régimen antidemocrático, por una parte, y la dimensión democrática, por la otra— con la alternancia del poder político en el cargo. Aunque la religión y la ideología no diferencian claramente a los votantes del PRI y del PAN, estos temas parecen dividir más entre sí a los electores de la oposición. Por lo tanto, creemos que algunos de estos temas se convertirán en importantes líneas de separación en el futuro cercano.

Este capítulo se basa en la evidencia empírica del World Values Survey (WVS), 1995-1997. Empleamos la muestra mexicana, que es una muestra nacional representativa y consta de 1511 entrevistas. Los datos están disponibles por medio del Inter-University Consortium for Political and Social Research en la Universidad de Michigan. También empleamos información de una encuesta de salida que el periódico *Reforma* realizó durante las elecciones presidenciales del año 2000.

En este capítulo tratamos primero del desempeño electoral histórico del PAN, que ubicó a este partido como una de las tres principales fuerzas políticas en México, antes de su victoria en la contienda presidencial del año 2000. Segundo, evaluamos las características de los votantes de acuerdo con los principios centrales de la ideología de la democracia cristiana. Tercero, desarrollamos un modelo de múltiples variables del apoyo del partido para poner a prueba la importancia de esos principios al elegir el partido y en las bases de las divisiones políticas. Finalmente, tratamos de la dispersión ideológica dentro de cada uno de los tres principales partidos y en qué sentido se puede definir al PAN como un partido que puede captar el voto de protesta de todo tipo. Ya que el capítulo se escribió antes de la victoria del PAN en las elecciones presidenciales de 2000, seguimos el borrador original y añadimos una sección al final, en la que comparamos los resultados de nuestro análisis de la muestra de 1995 con los datos de la contienda electoral presidencial más reciente.

GEOGRAFÍA ELECTORAL DEL PAN

El PAN, que fue fundado en 1939, era el partido de oposición más antiguo en México. Otros partidos fundados en la época de mayor hegemonía del PRI desaparecieron todos. Durante décadas, el PAN se enfrentó a una competencia formidable del PRI en las elecciones municipales, estatales y federales, a pesar de los frecuentes fraudes y de un

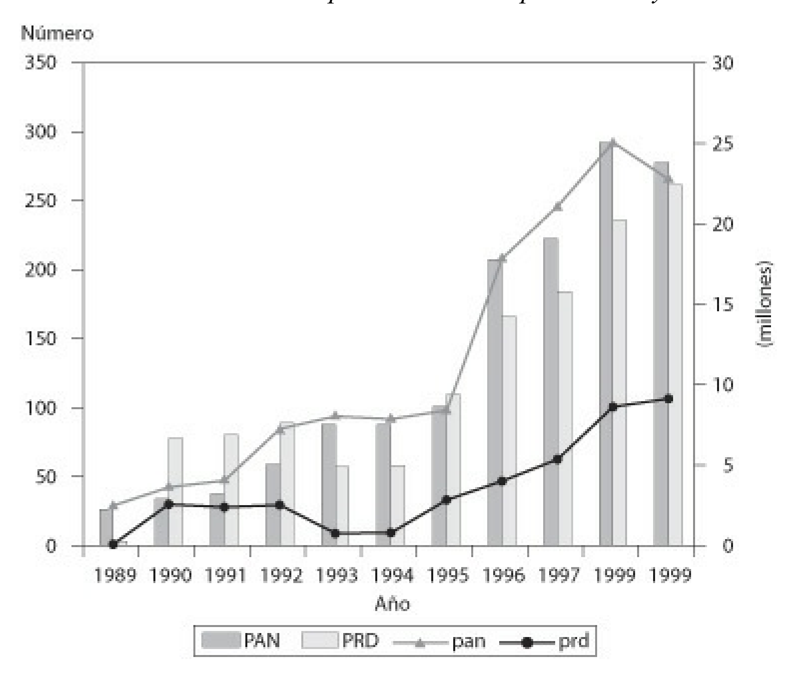
acceso muy desigual a los recursos (financieros, de organización, o acceso al apoyo del gobierno y de los medios de comunicación). No obstante, el PAN consiguió avances continuos en el escenario político mexicano. Desde la obtención de un magro 5% del voto nacional en las primeras elecciones federales de mediados de un periodo presidencial en las que participó en 1942 (Lujambio, 2001), el partido avanzó a 7.6% en 1961; 17.5% en 1982; 26.1% en 1997, y finalmente ganó la contienda presidencial de 2000, en la cual el candidato del PAN obtuvo 43.5% de los votos.

Las primeras cifras probablemente estaban manchadas por el fraude electoral, pero también reflejan el dominio abrumador del PRI. De acuerdo con Lujambio (2001), el PAN no pudo presentar candidatos al Congreso en todos los distritos electorales federales hasta 1979 (aunque en 1967 los presentó casi en todos, pero luego volvió a bajar a las dos terceras partes en 1976). En el ámbito municipal, también según el estudio de Lujambio (1997), el PAN acostumbraba presentar candidatos sólo en cerca de 10% de los municipios hasta los años ochenta, cuando los presentó en aproximadamente 40%, y sólo en fechas muy recientes ha sido capaz de presentar candidatos en virtualmente 90% de las contiendas municipales. Esto implica que el PAN ganó dos municipios en los cuarenta, 10 en los cincuenta, 20 en los sesenta, 33 en los setenta, 91 en los ochenta, y más de 600 en los noventa (Lujambio, 2001; Magaloni, 2000).

En el nivel local, el PAN hizo progresos significativos antes de su victoria en la campaña electoral presidencial de 2000. La gráfica VIII.1 muestra el número de municipios controlados por el PAN y el partido de oposición izquierdista de 1989 a 1999. También informa sobre la población gobernada por cada uno de los partidos. En febrero de 1999 el partido controlaba 287 gobiernos municipales. Entre esos gobiernos estaban incluidas 14 de las ciudades más pobladas y 12 capitales. Como resultado del sesgo urbano en los municipios del PAN, localmente 35.8% de la población vivía bajo gobiernos del PAN en 1999. Antes de 2000, el PAN fue capaz, además, de ganar varias gubernaturas importantes (Chihuahua, Baja California, Guanajuato, More-los, Querétaro, Jalisco, Nuevo León y Yucatán).

Pero quizás la característica más reveladora del apoyo electoral al PAN es la forma en que su popularidad se esparció por todo el país en el transcurso de las décadas, reflejando su transformación de un partido que atraía sólo a algunos votantes descontentos a un partido que atraía todo tipo de voto de protesta. Como lo muestra el mapa VIII.1, el PAN en 1961 sólo tenía una razonable base de apoyo en el Distrito Federal, Baja California y Chihuahua y un apoyo moderado en las regiones cristeras tradicionales[1] (Michoacán, Aguascalientes, Colima y Jalisco) y otros cuantos estados más (Morelos, Campeche y San Luis Potosí).

GRÁFICA VIII.1. *Municipios controlados por el PAN y el PRD*



FUENTE: Magaloni, 2000. Calculado con datos del Centro de Investigación para el Desarrollo y de Jacqueline Martínez.

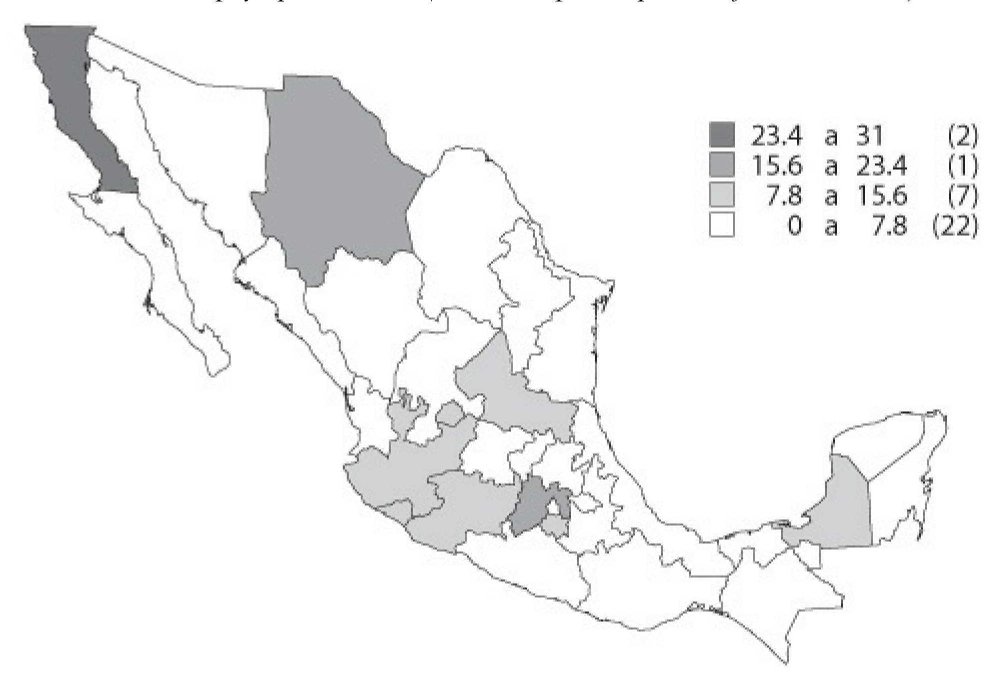
El Distrito Federal y los estados cristeros son precisamente los mismos que Frank Brandenburg (1955) identificó como aquellos donde el PRI encontraba su mayor desafío, en el primer caso por el riesgo de divisiones y en el segundo por la fuerza del movimiento sinarquista, que el PAN parecía canalizar efectivamente. De hecho, fue en la región de los cristeros donde el PAN obtuvo su primer éxito electoral en algunos municipios (León en 1946, apoyando a la Unión Cívica Leonesa; Quiroga en 1946 y 1950; El Grullo en 1948; Tzintzuntzán en 1950, y Teocuitatlán en 1952. Véase Lujambio, 2001, y Gutiérrez Madrigal, 1991). El apoyo en Baja California y Chihuahua puede atribuirse a cambios en los militantes del PRI, descontentos con el gobernador Braulio Maldonado y con el presidente municipal de Ciudad Juárez (Loaeza, 1999, p. 298), además de algunos avances logrados en el nivel municipal. En las elecciones locales anteriores a 1961 tanto en Baja California como en Chihuahua el PAN se benefició de divisiones en el PRI, pero sufrió un masivo fraude electoral. San Luis Potosí reflejó la popularidad de Salvador Nava y de la Alianza Cívica Potosina.

En las elecciones federales de 1970, como lo muestra el mapa VIII.2, el apoyo al PAN había aumentado considerablemente en la mayoría de los estados. Baja California y el Distrito Federal seguían siendo las regiones en que tenía mayor apoyo, seguidas por Guanajuato. El apoyo en ese estado es sorprendente, en vista de que localmente el PAN no estaba presentando candidatos para gobernador o para las presidencias municipales durante esos años, como protesta contra el fraude electoral (Lujambio, 2001).

Los estados de El Bajío siguen mostrando un apoyo importante, pero ahora se les han unido Nuevo León, Yucatán, Puebla, Durango y el Estado de México. Durante esos

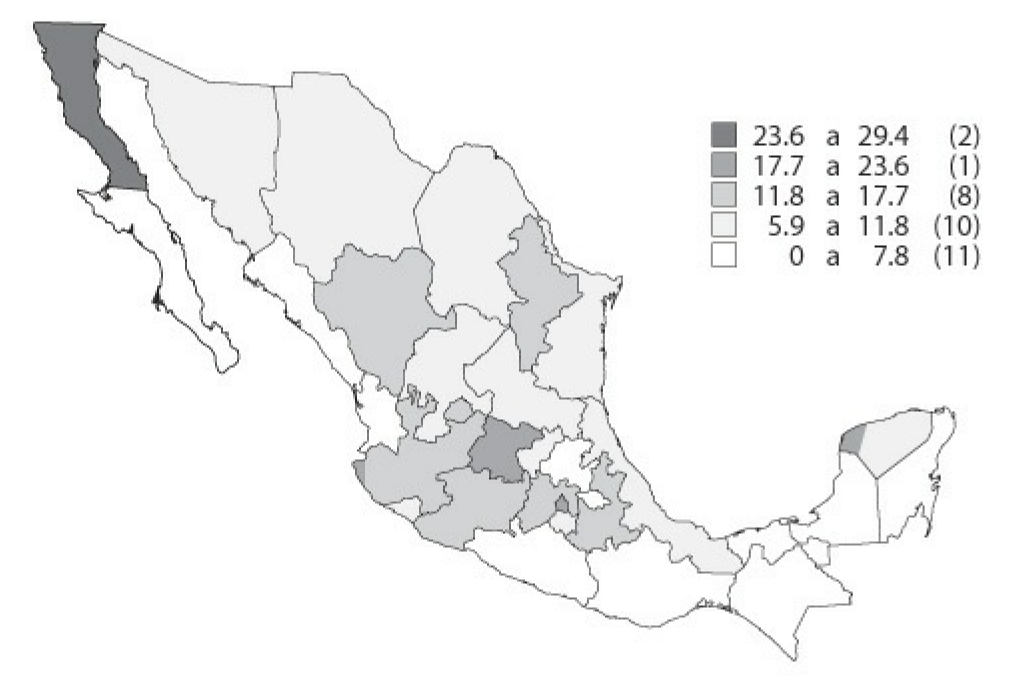
años, el PAN pudo ganar distritos en esos estados, lo que le permitió llegar a la Cámara de Diputados (13 diputados en el Distrito Federal, tres en Jalisco, dos en el Estado de México, uno en Puebla y uno en Guanajuato; véase Gutiérrez Madrigal, 1991, p. 211). Durante los años setenta Yucatán se convirtió en el símbolo de la represión que el PAN enfrentaba al no ser reconocida su probable victoria en la contienda para la gubernatura en 1969, y el ejército tomó las calles de Mérida (Lujambio, 2001).

MAPA VIII.1. *Apoyo para el PAN (elecciones para diputados federales, 1961)*



FUENTE: Díaz Cayeros y Martínez, 1999.

MAPA VIII.2. *Apoyo para el PAN (elecciones para diputados federales, 1970)*

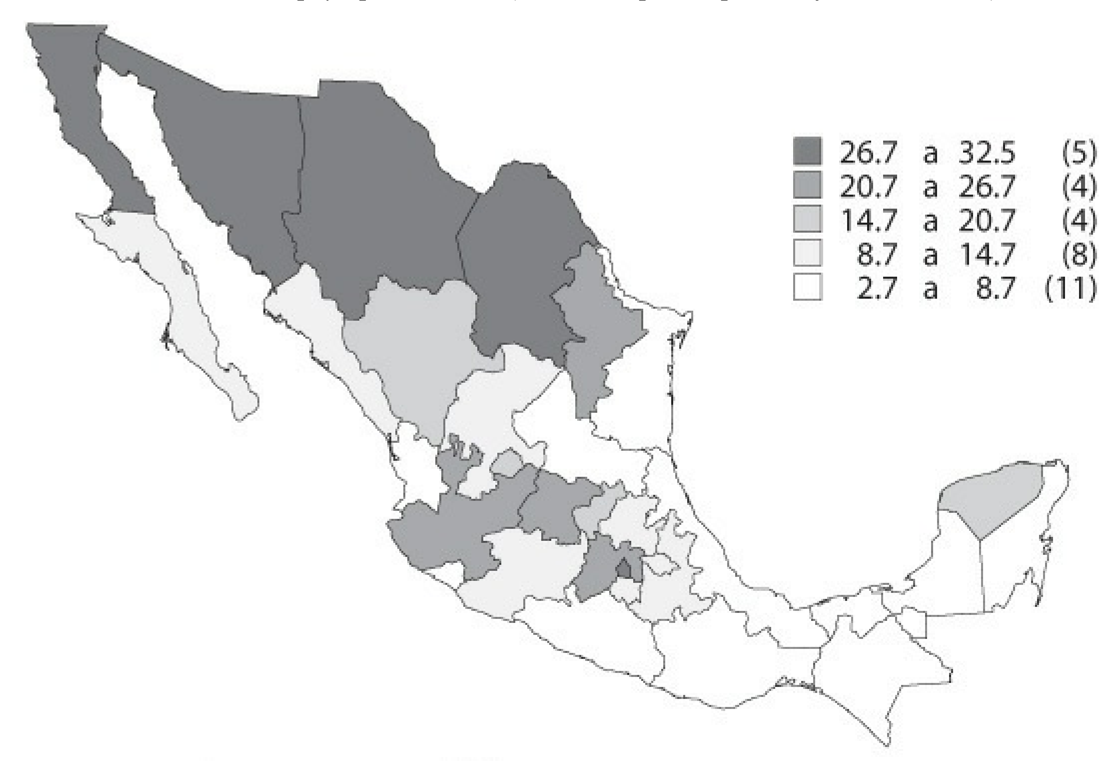


FUENTE: Díaz Cayeros y Martínez, 1999.

La década de 1980 fue un tiempo de recuperación para el partido, después de una profunda crisis en 1976, cuando ningún candidato del PAN participó en la campaña por la presidencia. Como puede verse en el mapa VIII.3, hay cierta regionalización, por la que el PAN se convierte en un partido del norte, con su tradicional reducto de El Bajío y un apoyo muy débil en el Golfo y en el sur. Sin embargo, los ochenta fueron particularmente importantes para el PAN, no por las victorias electorales, sino como consecuencia del enorme fraude que se realizó en Chihuahua en 1986 y el surgimiento de una nueva generación de militantes del PAN, que en su mayor parte provenían del norte y que manifestaban una actitud más pragmática hacia la competencia electoral.

Como se ve en el mapa VIII.4, a finales de los noventa el apoyo del PAN estaba distribuido en forma bastante pareja por todo el país, excepto en los estados del sur, donde el partido frecuentemente obtenía menos de 10% de los votos. Sin embargo, debe observarse que incluso en esos estados del sur el PAN había logrado ganar importantes municipios, entre ellos algunas capitales estatales, como fue el caso en Tuxtla Gutiérrez y en Oaxaca. Esta distribución del apoyo es un legado del éxito de las estrategias seguidas por los llamados neopanistas del norte.

MAPA VIII.3. *Apoyo para el* PAN *(elecciones para diputados federales, 1982)*



FUENTE: Díaz Cayeros y Martínez, 1999.

MAPA VIII.4. *Apoyo para el PAN (elecciones para diputados federales, 1997)*

FUENTE: Díaz Cayeros y Martínez, 1999.

LOS VOTANTES DEL PAN Y LA IDEOLOGÍA DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA

Esta sección intenta determinar si es posible diferenciar a los partidarios del PAN por un conjunto de rasgos que comúnmente se asocian con la ideología de la democracia cristiana. Definimos ésta como un compromiso con la democracia y la iniciativa privada, vinculado con un conjunto de valores morales cristianos que rigen la conducta social y política de una persona más allá de la esfera espiritual privada. Ésta es una definición flexible de la ideología democratacristiana que, creemos, puede abarcar las posiciones programáticas de partidos políticos, tanto en Europa como en América, que se consideran a sí mismos democratacristianos, pero que, no obstante, difieren bastante unos de otros.

De este modo, en nuestra opinión un típico votante democratacristiano debe tener las siguientes características.

Estar comprometido con la democracia y oponerse al autoritarismo

Los partidos democratacristianos en Europa y Latinoamérica se han comprometido todos con el gobierno constitucional democrático. Estos partidos constituyeron en Europa una oposición al comunismo y al fascismo, en tanto que en los países de Latinoamérica

fueron alternativas a los gobiernos militares.

El PAN en México ha tenido una larga trayectoria de oposición al PRI. Este partido no era ni comunista ni fascista, y tampoco era un régimen militar. Sin embargo, sí presentaba rasgos de autoritarismo, que se fueron acentuando a medida que el partido se atrincheraba más en el poder.

En un sistema en que se realizaban frecuentes elecciones, sí existían partidos de oposición. Pero hasta finales de los setenta el PAN era el único partido de oposición independiente, dentro de lo que podemos llamar un sistema de partido hegemónico. El Partido Popular Socialista (PPS) y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM) eran de los llamados partidos políticos satélites, patrocinados y financiados directamente por el hegemónico PRI para crear una pretendida imagen democrática. Aunque obtuvieron algunas victorias electorales en el nivel local que el PRI reconoció, consistentemente apoyarían al candidato presidencial del PRI.

En cambio, los estatutos del PAN lo comprometían al "establecimiento de la democracia como forma de gobierno" (art. 1, IV), lo que reflejaba la creencia de que México no era una democracia en tanto que el PRI no permitiera elecciones limpias. Como el PAN obtuvo el reconocimiento de su primera victoria electoral en 1946 (el municipio de Quiroga, Michoacán), siempre mantuvo una posición firme contra la práctica del fraude electoral que tanto padeció (Lujambio, 1997). Desde que se fundó el PAN, una aguda separación dividió al partido, la cual puede definirse por motivos de estrategia. Compitiendo dentro del marco de un régimen autoritario, los políticos del PAN discutieron sobre participar en elecciones a las que se consideraba casi siempre fraudulentas o si en cambio debían abstenerse de participar para no apoyar lo que era considerado como un sistema democrático de simple escaparate. Una vez teniendo claro que era posible derrotar al PRI, o sea, después de que los votantes empezaron a retirarse del PRI como resultado de la recesión económica de principios de los ochenta, los que estaban en favor de participar en las elecciones ganaron el debate.

Así, en años recientes, el PAN desempeñó un papel decisivo en la democratización de México. La transición a la democracia en México ha sido única al haber ocurrido en el escenario electoral y por medio del sistema de partidos (Magaloni, 1997a). Como el partido opositor con la trayectoria más larga, el PAN se ha convertido por lo tanto en uno de los actores clave en la prolongada democratización de México. Desde principios de los ochenta, el PAN empezó a derrotar al PRI en algunas elecciones locales, particularmente en el norte. Puede decirse con certeza que la democratización de México empezó en el ámbito local, esto es, en las elecciones municipales y estatales, y poco a poco se propagó a todo el país (véase Lujambio, 1997).

El PAN también ha desempeñado un papel decisivo en las reformas a las leyes electorales de México al participar, en coalición con el PRI, en todas las reformas electorales que han ocurrido desde principios de la década de 1990. El PAN dio su apoyo a las reformas económicas del presidente Carlos Salinas (véase más adelante), a cambio, entre otras cosas, de importantes reformas electorales que incluían la creación del Instituto Federal Electoral y de un tribunal electoral independiente del gobierno.

En el nivel de las masas, los votantes del PAN se oponen al *statu quo* político y apoyan la democratización (Magaloni, 1997b; Moreno, 1998 y 1999). Mediante el WVS de 1995, podemos determinar si los partidarios del PAN también están comprometidos con la democracia y dan una mayor consideración a las virtudes de esta forma de gobierno que los partidarios del PRI. El cuadro VIII.1 informa sobre varias preguntas que procuran determinar la evaluación de la democracia por parte de los entrevistados y su relación con sus intenciones de voto. Debe observarse que parece no haber diferencias entre los partidarios del PAN y los del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en sus evaluaciones de la democracia. Los partidarios del PRI, por otra parte, parecen apoyar un poco menos esta forma de gobierno. Sin embargo, las diferencias entre los seguidores del partido gobernante y los de la oposición parecen ser débiles. La última línea del cuadro informa sobre la posición media de los panistas en un "índice de democracia", que se elabora haciendo las cinco preguntas y que varía entre 5 y 20 (alfa = .48). Los partidarios del PAN parecen estar un poco más comprometidos con la democracia. Las diferencias en las medias son significativas estadísticamente en un rango de 95% de confianza.

CUADRO VIII.1. *Opiniones políticas e índice de democracia (porcentajes)*

Preguntas y respuestas	PAN	PRI	PRD	*Todos*	
En una democracia, el sistema económico funciona mal					
De acuerdo	28	33	21	46	
No está de acuerdo	30	31	22	54	
En las democracias hay mucha indecisión y discusiones inútiles					
De acuerdo	28	34	22	53	
No está de acuerdo	32	27	22	47	
Las democracias no son buenas para mantener el orden					
De acuerdo	28	35	22	41	
No está de acuerdo	62	54	59	59	
La democracia puede tener problemas, pero es mejor que cualquier otra forma de gobierno[a]					
De acuerdo	29	30	23	76	
No está de acuerdo	29	34	17	24	
¿Diría usted que tener un sistema político democrático es una forma muy buena, buena, mala, muy mala de gobierno?[a]					
Muy buena y buena	30	30	21	79	
Muy mala y mala	28	34	22	21	
Índice de democracia (rango: 5 a 20, 20 = muy democrático)	13.79	13.28	13.50	14.21	alfa: .48

[a] Orden inverso del puntaje real para hacer que una respuesta más democrática esté más cerca de 4.

NOTA: Todas las preguntas se hicieron sobre la base de una escala de 1 a 4, donde 4 es la respuesta más "democrática".

Se inclina hacia la derecha al apoyar al capitalismo y la propiedad privada en oposición al comunismo y a la economía estatizada

La democracia cristiana europea empezó como reacción católica al anti-clericalismo liberal del siglo XIX (Kalyvas, 1996). Su contraparte latinoamericana, que surgió sólo en el siglo XX, inicialmente fue una respuesta a la amenaza del marxismo. La ideología económica de la democracia cristiana, tanto en Europa como en Latinoamérica, se ha opuesto no sólo al comunismo sino también a la expansión indiscriminada del Estado. No obstante, la democracia cristiana afirma ser una vía "media" entre el comunismo y la economía de mercado libre ortodoxa. Adoptó un programa de reforma socioeconómica basado en la doctrina social católica que surgió de dos encíclicas papales: *Rerum*

Novarum (1891) y *Quadragesimo Anno* (1931).

Por lo tanto, los democratacristianos apoyaron las políticas de bienestar y un papel económico subsidiario para el Estado en la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores, y para asegurarse de que estén todos protegidos contra la indigencia económica. Pero a diferencia de los social-demócratas, ellos creen que la iniciativa privada debe ser el núcleo de todo sistema económico. Es decir, el Estado debe promover la industrialización y el desarrollo económico apoyando a los empresarios privados, no remplazándolos.

El PAN fue fundado en parte como respuesta a las reformas económicas del presidente Lázaro Cárdenas, que incluían la nacionalización de la industria petrolera, una reforma agraria de gran alcance y la expansión del papel del Estado en la regulación de todo aspecto de la actividad económica. Manuel Gómez Morin, fundador del PAN, pertenecía a la generación liberal que creía en la propiedad privada y en un papel claramente limitado para el Estado. Por ello consideró a la política económica de Cárdenas como peligrosamente socialista. Además, como rector de la Universidad Nacional, Gómez Morin se había opuesto al programa del gobierno para una "educación socialista". Lo que el gobierno cardenista llamaba "educación socialista" incluía la responsabilidad por parte del Estado de proporcionar educación gratuita a todo mexicano, así como la responsabilidad del gobierno en la definición de los planes de estudio y en la redacción y distribución de libros de texto que enseñarían y propagarían los valores "socialistas". De conformidad con la Constitución, la educación debía ser secular, y a la Iglesia y a las organizaciones religiosas se les prohibía que impartieran educación.

Los estatutos del PAN claramente expresan que la actividad del Estado debe estar subordinada al "bien común", en oposición a la retórica cardenista que hacía énfasis en el papel del Estado como garante de la "dictadura del proletariado" o del gobierno para las "masas" (Gutiérrez Madrigal, 1991, p. 24).

En el transcurso de las décadas, los legisladores de Acción Nacional presentaron más de 300 iniciativas en la Cámara de Diputados intentando restringir el papel del Estado en la economía. El PAN también se opuso a los respectivos cambios en la Constitución que fortalecieron el papel del Estado y de las empresas públicas en la actividad económica y a la nacionalización bancaria de 1982.

Más recientemente, el PAN se convirtió en un colaborador decisivo para poner en práctica las reformas orientadas al mercado que han transformado tan profundamente el panorama económico de México. En las elecciones presidenciales de 1988, el PRI perdió, por primera vez en su historia, la mayoría calificada en la Cámara de Diputados requerida para reformar la Constitución. Como el presidente Carlos Salinas necesitaba reformar la Constitución para poner en práctica ciertos aspectos clave de su programa económico, buscó la colaboración del PAN en la legislatura para realizar los cambios constitucionales que le permitirían, por ejemplo, privatizar el sistema bancario y restructurar los derechos de propiedad agrícola para hacer posible la privatización de la tenencia comunal de la tierra. Durante esos años, el PAN también formó una coalición en el Congreso con el PRI para modificar el artículo 130 constitucional, que había prohibido

la educación religiosa en México y la participación de la Iglesia en política. Fue incuestionable el apoyo del PAN a las reformas de Carlos Salinas orientadas al mercado, incluyendo la privatización de empresas propiedad del Estado, la liberalización del comercio exterior y la desregulación de la actividad económica.

De hecho, durante esos años, muchos políticos del PAN acostumbraban afirmar que el presidente le había robado la plataforma económica al partido y que estaba llevando a cabo la mayor parte de las políticas y reformas propuestas por el PAN desde hacía mucho tiempo. El papel decisivo del PAN en la elaboración de la política económica se había reforzado desde las elecciones de mediados del periodo en 1997, cuando el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados. Desde esas elecciones, los legisladores del PAN y del PRI formaron dos veces una coalición en el Congreso para aprobar el presupuesto anual. En ambas ocasiones, el PAN obtuvo importantes concesiones del gobierno, en particular las que tenían que ver con la transferencia de más recursos a los estados y los municipios, en el contexto de la descentralización de las finanzas públicas.

En lo que se refiere a las bases del partido, hay un debate sobre si los partidarios del PAN están a la derecha del PRI (Magaloni, 1997a; Estévez y Magaloni, 1998) o si se ubican al centro de la dimensión económica izquierda-derecha (Moreno, 1998 y 1999). En cualquier caso, como demuestra Magaloni (1997a), los partidarios del PAN tienden a reflejar las posiciones de los políticos del PAN: favorecen la privatización de las empresas propiedad del Estado, la liberalización del comercio exterior, la desregulación de la actividad económica, una economía que dependa principalmente de la economía privada, y se oponen a los aumentos de impuestos para aliviar la pobreza y al incremento de los subsidios sociales (véase Estévez y Magaloni, 1998).

El WVS de 1995 no incluyó preguntas que explícitamente trataran del tipo de cuestiones económicas y fiscales incluidas en Magaloni (1997a) y Estévez y Magaloni (1998). No obstante, sí incluyó algunas preguntas que reflejan la ideología económica. La gráfica VIII.2 muestra la posición media de los partidarios del PAN, PRI y PRD con respecto a las cuestiones económicas incluidas en el WVS de 1995. La posición media de los partidarios del PAN siempre está a la derecha de los del PRD. Esto significa que el PAN es la opción para los votantes derechistas de la oposición. A pesar de lo anterior, las respuestas de esta encuesta parecen indicar que los votantes del PAN son más centristas en comparación con los votantes del PRI.

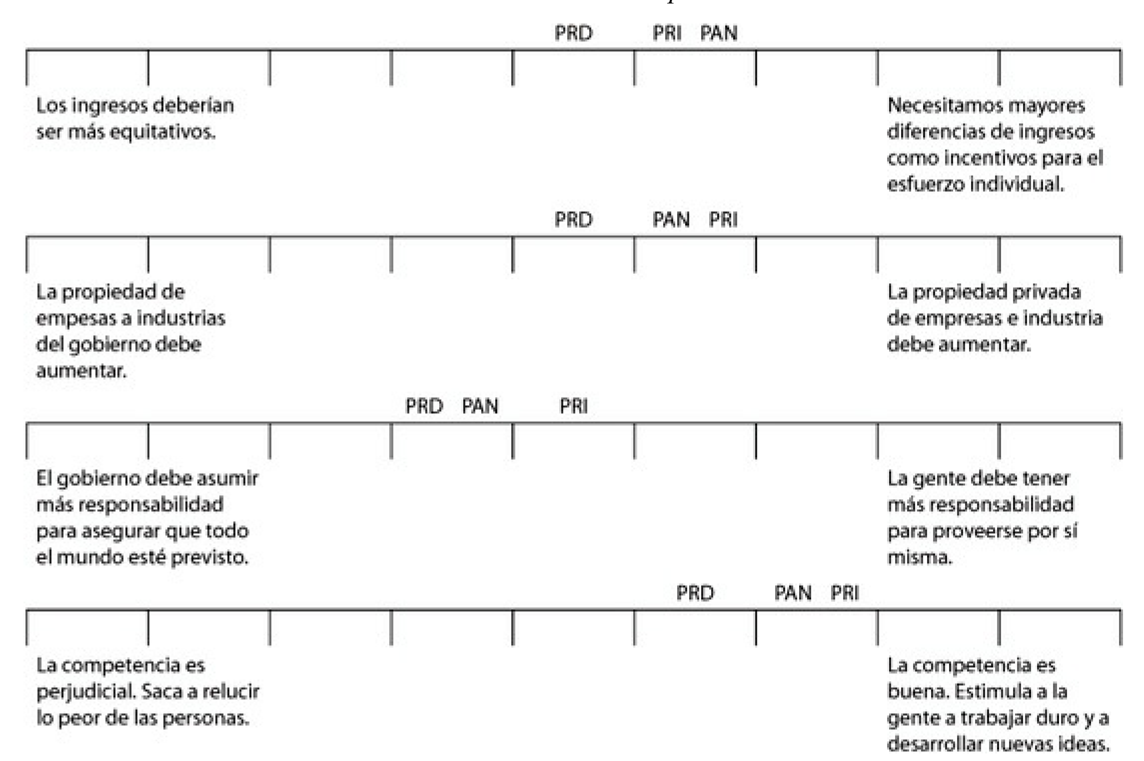
Tendencia a ser personas religiosas

Como se dijo antes, la democracia cristiana empezó en Europa como reacción católica al anticlericalismo liberal del siglo XIX. Como tal obtuvo el apoyo de los católicos practicantes y de organizaciones religiosas que se crearon para resistir la expansión del Estado nacional hacia las localidades, la secularización de la educación y la intrusión del Estado en la familia y en la vida comunal. Como lo han sostenido Lipset y Rokkan,

> la batalla decisiva se dio entre las aspiraciones de movilizar al Estado-nación y las pretensiones corporativas de

las Iglesias […] pero el tema fundamental era el de la moral, el del dominio de las normas de la comunidad. Esto se reflejó en las luchas por asuntos como la solemnidad del matrimonio, el otorgamiento de divorcios, la organización de la caridad […] Sin embargo, la batalla fundamental entre la Iglesia y el Estado se concentró en el ámbito de la educación (1967, p. 15).

GRÁFICA VIII.2. *Posición media de los militantes de los partidos en varias cuestiones económicas*



En México, la batalla fundamental, la del dominio de la educación de que hablan Lipset y Rokkan (1967), se prolongó más allá del siglo XIX, bastante después de la Revolución mexicana, abarcando la década de 1920 y los primeros años treinta. El desarrollo de la educación pública bajo el control secular organizado empezó en la primera parte de la década de 1920. La Constitución le prohibía participar a la Iglesia. Así, las autoridades del Estado nacional obtendrían el control directo de la educación de los niños sin consultar a los padres y excluyendo explícitamente a sus autoridades espirituales. Esto generó una enconada oposición entre los católicos, muchos de los cuales encontraron refugio en el PAN, que surgió en defensa de la libertad de educación religiosa.

Al PAN no le fue fácil definirse a sí mismo como partido democratacristiano debido a las implicaciones de que se le asociara con la Iglesia católica. Gómez Morin fue muy explícito en su rechazo de la democracia cristiana, por considerarla "un movimiento internacional confesional que no es adecuado para la experiencia mexicana de profundo anticlericalismo" (citado en Loaeza, 1999, p. 289). No obstante, desde su fundación, el PAN estuvo relacionado con organizaciones católicas, como la Asociación Católica de la Juventud Mexicana (ACJM), Acción Católica y la Unión Nacional de Padres de Familia, y con estudiantes católicos progresistas. Además, Efraín González Luna, el cofundador del PAN, explícitamente adoptó la doctrina de la democracia cristiana. González Luna se había negado a unirse al movimiento cristero o a las actividades sinarquistas porque rechazaba la violencia y la actividad política clandestina. Sin embargo, presidió la Asociación Católica de la Juventud Mexicana de Jalisco, que estaba dedicada a promover

la doctrina social de la Iglesia. Así, el partido estuvo caracterizado desde sus inicios por una tensión entre un ala liberal más secular y otra católica más dogmática.

En gran medida, la reticencia de Gómez Morin para adoptar la democracia cristiana debe haber estado relacionada con su temor a las críticas de la izquierda. Fue amigo de Rafael Caldera y siguió la evolución de la democracia cristiana en Chile y Venezuela (Loaeza, 1999, p. 289). Pero las estridentes críticas de Vicente Lombardo Toledano, del Partido Popular Socialista (PPS), que atacó al PAN por estar asociado con la reacción más contrarrevolucionaria, relacionada con las fuerzas más conservadoras de la Iglesia, fue probablemente una carga muy grande para el éxito electoral del partido. En un país donde el siglo XIX había presenciado sangrientos conflictos para separar la Iglesia y el Estado, y donde aún estaba fresca la memoria de la guerra cristera de los veinte, no era fácil para el partido definirse a sí mismo como cristiano. De hecho, Lujambio (2001) argumenta que durante la "Era católica" del partido, de 1950 a 1962, cuando estuvo encabezado por hombres con indudables credenciales católicas (Juan Gutiérrez Lascuráin, Alfonso Ituarte Servín y José González Torres) y González Luna fue candidato a la presidencia, el partido se hizo cada vez más ideológico y agresivo en su discurso contra el régimen, el cual se desquitó intensificando el fraude electoral contra el partido (Gutiérrez Madrigal, 1991, proporciona una interpretación similar). Esa estrategia demostró ser un obstáculo para el éxito electoral y por ello un liderazgo más pragmático la cambió en los años siguientes.

Sin embargo, el partido sí mantuvo la libertad religiosa como uno de los elementos básicos de su doctrina. Además se anticipó con una propuesta de ley —que presentó en 1987— a las reformas que llevarían a la normalización de las relaciones con las Iglesias y con el Vaticano en 1991. Finalmente, en forma explícita ha rechazado el aborto y la clonación y en su plataforma política 1994-2000 busca la libertad de educación (religiosa).

¿Obtiene el PAN la mayor parte de su apoyo de los católicos practicantes? Utilizando un análisis de encuestas, Domínguez y McCann (1995) encontraron que el PAN no es un partido confesional. Este hallazgo no es sorprendente si se considera que durante mucho tiempo en realidad sólo existió un partido, el PRI, en un país predominantemente católico. En otras palabras, el propio PRI recibió el apoyo de católicos y tendió a ocultar su anticlericalismo para no enemistarlos. Empero, más adelante mostraremos que hay una fractura religiosa en México, lo cual se manifiesta en la división de la oposición: esto es, los partidarios del PAN son más religiosos que los votantes del PRD, aunque no se les puede distinguir de los votantes del PRI sobre la base de sus creencias religiosas.

Aprovechamos de nuevo el WVS de 1995 para apoyar este hallazgo. Los datos se presentan en el cuadro VIII.2, que muestra la relación entre las varias creencias y prácticas religiosas y las intenciones de voto. La última línea del cuadro presenta las posiciones medias de los partidos con base en un índice de religiosidad que combina todas las preguntas incluidas en el cuadro. El índice va de cero (no religioso) a 10 (muy religioso) (alfa = .86). Debe observarse que aunque la mayoría de los votantes tienden a ser muy religiosos, los votantes del PRI y del PAN tienden a ser más religiosos que los votantes del

PRD. Las diferencias en las medias son estadísticamente significativas en un rango de 95% de confianza (prueba de dos colas).

CUADRO VIII.2. *Actitudes religiosas (porcentajes)*

Pregunta y respuestas	PAN	PRI	PRD	*Total*	
¿Diría usted que:					
es un ateo convencido?	23	20	39	6	
no es una persona religiosa?	29	26	23	29	
es una persona religiosa?	28	34	19	65	
¿Cree usted en (respuestas afirmativas):					
Dios?	29	31	20	94	
la vida después de la muerte?	30	33	18	67	
que las personas tienen un alma?	29	33	18	76	
la existencia del diablo?	30	31	19	58	
el infierno?	30	32	20	58	
el cielo?	29	33	19	74	
el pecado?	28	33	18	79	
¿Obtiene usted bienestar y fortaleza de la religión? (respuestas afirmativas)	29	33	18	82	
Índice de religiosidad rango: 0 a 10, 10 = muy religioso	8.21	8.25	7.45	8.01	alfa=.86

Tiene valores morales conservadores, asociados a menudo con la doctrina cristiana

Los valores morales en la democracia cristiana frecuentemente dan realce a la familia y a la idea de respeto a la persona como requisito primario para lograr el bien común. A esto se unen llamamientos a la doctrina social de la Iglesia para permitir la acción del Estado que procure asegurar el respeto a la persona y a la familia. Este respeto se traduce en valores morales conservadores, en la medida en que éstos están relacionados con la oposición al aborto, la libertad de educación religiosa y un esfuerzo por conservar los valores familiares. Esos valores morales conservadores a menudo encuentran su referencia más inmediata en las posiciones que defiende la Iglesia católica.

Los analistas políticos han considerado al PAN como un partido conservador en temas como el aborto, la libertad sexual y los valores familiares. La historia de las posiciones del PAN en el ámbito local le da alguna credibilidad a esta reputación conservadora. Por ejemplo, el PAN de Baja California modificó la Constitución estatal para prohibir el aborto aunque la vida de la madre esté en peligro. El PAN de Nuevo León también está proponiendo cambios constitucionales similares. A pesar de todo, los temas morales sólo recientemente han empezado a tener importancia en el panorama político de México, y

los partidos han empezado a utilizarlos en las campañas políticas.

¿Son los partidarios del PAN tan conservadores como los políticos de ese partido? ¿Puede diferenciarse a los votantes del PAN sobre la base de los valores morales conservadores que defiende la Iglesia católica? El WVS de 1995 nos permite responder a estas preguntas porque incluyó secciones que tratan de temas de tipo moral, como las actitudes hacia el aborto, la libertad sexual, el divorcio, la prostitución y la homosexualidad.

En el cuadro VIII.3 se presenta la posición media de los partidos sobre estos asuntos morales. Las preguntas se hicieron con base en una escala de 0 a 10, en la cual 1 significa que quien responde pensaba que algo (por ejemplo, el aborto) "nunca estaba justificado" y 10 que "siempre estaba justificado". Así, cuanto más cerca esté la posición media de un partido a 0, más conservador será. El cuadro también presenta un índice liberal-conservador que combina las respuestas a estas cinco preguntas. El índice va de 5 (extremadamente conservador) a 43 (extremadamente liberal) (alfa = .73).

Lo primero que se observa en el cuadro VIII.3 es que los mexicanos tienden a ser más bien conservadores, sin importar su partido. No obstante, los partidarios del PRI, en vez de los del PAN, tienden a ser más conservadores. El partidario promedio del PAN parece ser mucho más liberal que las élites de su partido. Por ejemplo, en una reciente encuesta de los delegados del partido que llevó a cabo el periódico *Reforma*, 70% de los delegados del PAN dijo que "el aborto nunca debería permitirse". Se le hizo una pregunta similar al público nacional y sólo 36% de los seguidores del PAN dio esa misma respuesta.

CUADRO VIII.3. *Posición media de los militantes de un partido sobre varias cuestiones morales e índice liberal-conservador (porcentajes)*

Asunto	PAN	PRI	PRD	*Todos*	
Homosexualidad	1.90	1.63	1.91	1.78	
Prostitución	1.77	1.62	1.87	1.74	
Aborto	1.63	1.48	1.89	1.62	
Divorcio	4.48	3.32	4.40	4.09	
Libertad sexual	2.15	2.13	2.18	2.15	
Índice de valores morales (rango: 5 a 43, 43 = muy liberal)	15.55	13.80	16.49	15.39	alfa = .73

NOTA: Las medias de las líneas 1 a 4 se obtuvieron de las preguntas en una escala de 1 a 10, donde 1 significa que el que contestó pensaba que el asunto mencionado (por ejemplo, prostitución) "nunca era justificable" y 10 que "siempre era justificable". Las medias de la línea 5 provienen de una escala de 1 a 3, donde 1 significa que quien responde tiende a estar en desacuerdo y 3 que tiende a estar de acuerdo con la afirmación "los individuos deben tener la oportunidad de disfrutar de total libertad sexual sin ser restringidos".

UN MODELO DEL APOYO DEL PARTIDO

Para poner a prueba sistemáticamente nuestra hipótesis tal como la hemos presentado hasta ahora, esta sección muestra un análisis multinomial logit de la elección de partido. Intentamos determinar, primero, la medida en que los partidarios del PAN pueden ser diferenciados por los cuatro conjuntos de características que, según argumentamos, definen la ideología de un votante democratacristiano típico. Segundo, determinamos si estas cuatro separaciones por los temas —actitudes hacia la democracia, posiciones económicas, religiosidad y valores morales— se manifiestan en el sistema de partidos mexicano. La variable dependiente es la elección del partido. Las variables independientes son los índices de democracia, religiosidad y valores morales; la cuestión de las posiciones económicas, y las variables socioeconómicas convencionales que usamos como control. Los resultados se presentan en el cuadro VIII.4.

CUADRO VIII.4. *Modelo de ideologías de los partidos (análisis multinomial logit)*

Variable	*Coeficiente* PAN *vs.* PRD *(error estándar)*	*Coeficiente* PRI *vs.* PRD *(error estándar)*
Constante	–2.36 (1.25)	.39 (1.23)
Índice de democracia	–.01 (.05)	–.11** (.05)
Índice de religiosidad	.22*** (.05)	.16** (.05)
Índice de valores morales	–.02* (.01)	–.05*** (.01)
Igualdad de ingreso	.07 (.04)	.08* (.04)
Propiedad del gobierno o privada	.08* (.04)	.06 (.04)
Responsabilidad económica del gobierno *vs.* individual	–.019 (.04)	–.09 ** (.04)
Actitudes hacia la competencia	.08* (.05)	.12*** (.05)
Educación	.07 (.07)	–.13* (.07)
Clase social autoasignada	–.10 (.15)	–.08 (.06)
Ingreso	.029 (.06)	.08 (.06)
Ama de casa	.09 (.40)	.13 (.39)
Estudiante	.15 (.42)	.02 (.44)
Desempleado	–.41 (.43)	–.78* (.44)
Profesionista	–.50 (.42)	–.07 (.44)
Trabajador manual	–.20 (.31)	–.40 (.31)

NOTA: N = 524; probabilidad log = –519.10; chi² (30) = 87.47; prob. chi² >.0000; 76% predicciones correctas; *significativo al nivel de confianza de 90%; **significativo al nivel de confianza de 96%; ***significativo al nivel de confianza de 99%.

Lo primero que hay que observar en estos resultados es que las cuatro separaciones por estas cuestiones sí se manifiestan dentro del sistema de partidos. Es decir, los índices de democracia, religiosidad y liberal-conservador son estadísticamente significativos como lo son la mayoría de las cuestiones económicas, aunque éstas sólo llegan a niveles de confianza menores. Esto confirma lo que se encontró en algunos trabajos anteriores (Magaloni, 1997b; Moreno, 1999). Argüimos que los votantes de México están divididos no sólo siguiendo la dimensión política, sino también sobre bases religiosas, económicas y morales.

Los resultados presentados en el cuadro VIII.4 muestran que los votantes del PAN tienden a ser más religiosos, más conservadores y más derechistas que los partidarios del PRD. Los votantes del PRI también son más religiosos, conservadores y derechistas que los del PRD, pero a diferencia de los votantes del PAN, tienden a estar menos comprometidos con la democracia. Así, dentro del sistema de partidos de México, los partidarios del PAN parecen cumplir con algunos de los rasgos característicos de los militantes de la democracia cristiana pues, a diferencia de los votantes del PRD, se ubican a la derecha en la dimensión económica, tienden a ser más conservadores y religiosos y,

al igual que los del PRD, favorecen la democracia sobre el autoritarismo. Debe observarse que los seguidores del PAN comparten todos estos rasgos, excepto el último, con los partidarios del PRI.

Para tener cierto sentido de la gama de los efectos de estas variables, el cuadro VIII.5 presenta las probabilidades de votar por cada uno de estos partidos en los diferentes niveles de las variables independientes. Realzamos cuatro aspectos de estos resultados. Primero, el efecto del índice democrático es de la misma magnitud y positivo para el PAN y el PRD. Por el contrario, el índice afecta muy fuertemente al voto del PRI en forma negativa, lo que significa que hay una importante fractura política en México en que ambos partidos de la oposición están del mismo lado, apoyando a la democracia, y los votantes del PRI en el otro. Segundo, los votantes del PAN son conservadores, pues a medida que el índice de liberalismo aumenta, el apoyo para este partido es menor. No obstante, la magnitud del efecto no parece ser tan fuerte en comparación con la forma en que los valores morales afectan el apoyo para el PRI y el PRD. Esto significa que respecto a los valores morales el PRI es la opción conservadora, no el PAN, y el PRD es la liberal. Un resultado importante e inesperado es que la religiosidad afecta al PAN positivamente y casi el doble de lo que afecta al PRI. La religiosidad también afecta muy fuertemente el apoyo para el PRD y en sentido opuesto. Esto significa que hay una fractura religiosa en México, que divide fuertemente a los seguidores de los partidos de la oposición entre ellos mismos. Por último, los asuntos económicos parecen no afectar en forma importante al voto del PAN, lo que podría indicar que este partido recibe apoyo de votantes que pertenecen a todo el espectro político, o que sus partidarios se encuentran justo en el centro de dicho espectro. No obstante, los asuntos económicos sí afectan considerablemente al PRI y al PRD y en el sentido opuesto.

CUADRO VIII.5. *Predicción de probabilidades de apoyo partidista*

Variable	PAN	PRI	PRD
Índice de democracia			
Mínimo	0.25	0.59	0.16
Máximo	0.39	0.30	0.31
Diferencia	0.14	0.29	0.15
Índice liberal-conservador			
Mínimo (conservador)	0.35	0.59	0.15
Máximo (liberal)	0.26	0.21	0.44
Diferencia	–0.90	–0.38	0.29
Índice de religiosidad			
Mínimo	0.36	0.17	0.47
Máximo	0.46	0.37	0.17
Diferencia	0.10	0.20	–0.30
Más igualdad de ingreso			
Mínimo (izquierda)	0.30	0.40	0.30
Máximo (derecha)	0.33	0.49	0.18
Diferencia	0.30	0.90	–0.12
Propiedad privada *vs.* propiedad del gobierno			
Mínimo (izquierda)	0.29	0.44	0.27
Máximo (derecha)	0.36	0.46	0.18
Diferencia	0.70	0.60	–0.90
Actitudes hacia la competencia			
Mínimo (izquierda)	0.30	0.34	0.36
Máximo (derecha)	0.31	0.50	0.19
Diferencia	0.10	0.16	–0.17
Responsabilidad del gobierno *vs.* individual por la satisfacción de necesidades económicas			
Mínimo (izquierda)	0.35	0.37	0.28
Máximo (derecha)	0.27	0.55	0.18
Diferencia	–0.80	0.18	–0.10

NOTA: La predicción de probabilidades se obtuvo de la evaluación del modelo multinomial logit del cuadro VIII.4. Todas las variables se fijan en su valor medio, excepto la variable evaluada.

¿UN PARTIDO PARA TODOS?

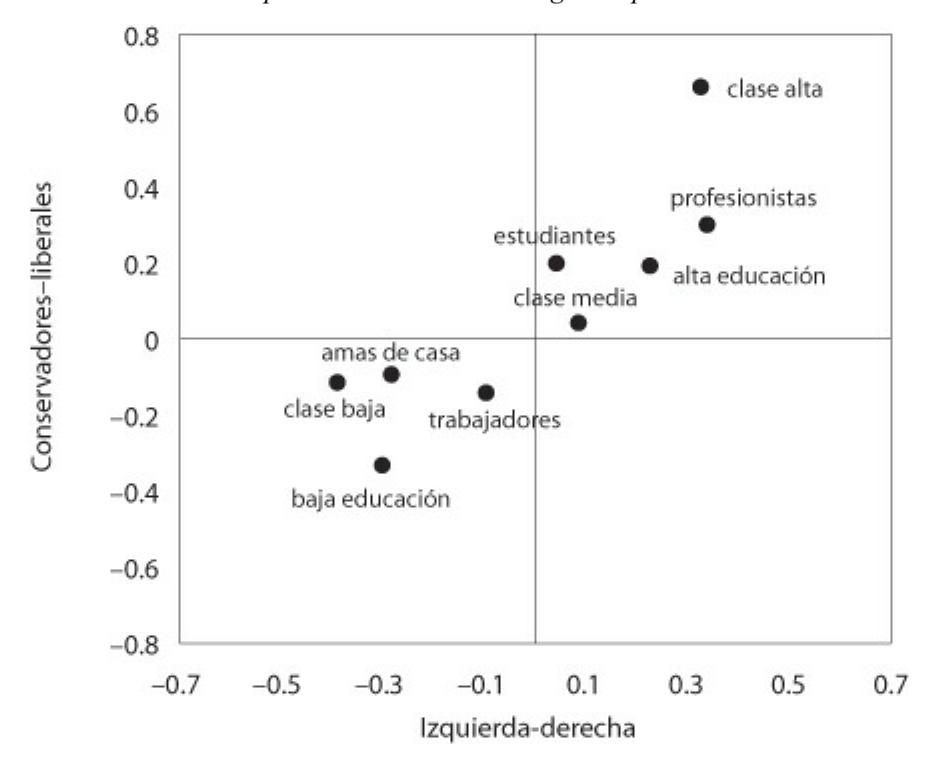
Hemos podido demostrar que varias fracturas dividen a la sociedad mexicana y que se manifiestan en el sistema de partidos. La religiosidad y las actitudes políticas hacia la democracia afectan fuertemente el apoyo del PAN. No obstante, las fracturas en lo que se refiere a la economía y a la moral parecen afectar ante todo al PRI y al PRD y sólo en forma más leve al PAN. Esto podría indicar, como dijimos antes, que el PAN recibe apoyo de votantes ubicados en el centro mismo del espectro político en esas dimensiones, o que es un partido que capta todo tipo de partidarios y recibe el apoyo de votantes que se ubican en todo el espectro político.

Para poner a prueba estas hipótesis, hemos realizado un análisis factorial, incluyendo todos los elementos de que se ha tratado hasta ahora, excepto la religiosidad y la democracia. Como se esperaba, el análisis de factores reveló dos dimensiones: una económica y una moral. Después ubicamos gráficamente la posición media de los seguidores de cada partido en esas dos dimensiones según algunas variables sociodemográficas como los niveles de educación, clase social y profesión. Los resultados se presentan en las gráficas VIII.3, VIII.4 y VIII.5.

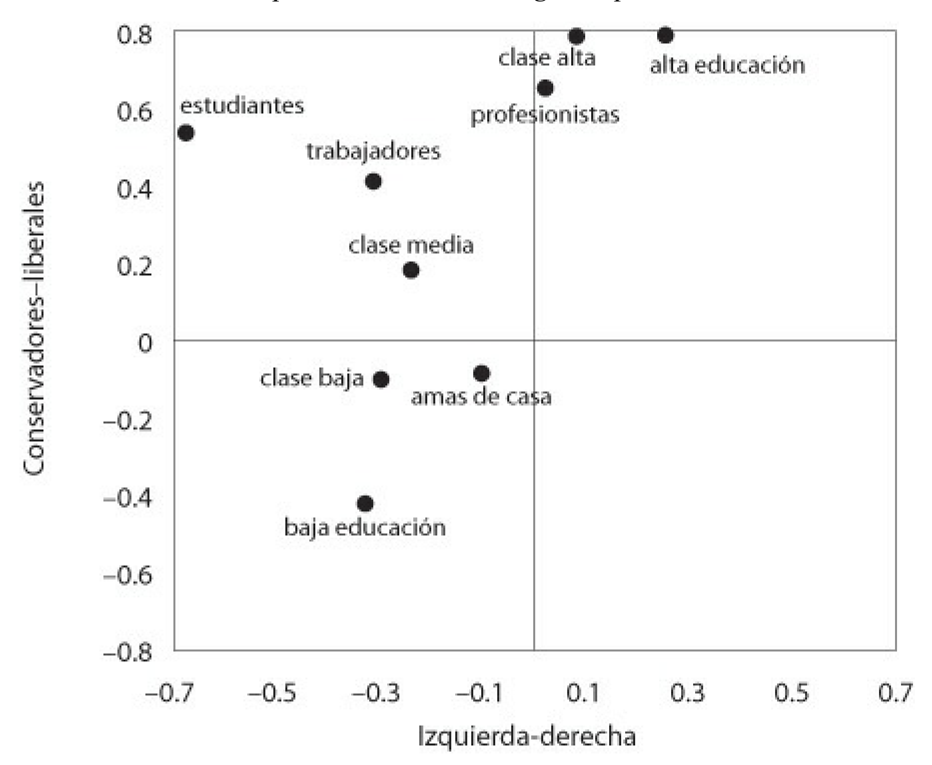
Como puede observarse en la gráfica VIII.3, el PAN parece ser un partido que capta todo tipo de seguidores: recibe apoyo de electores dispersos por todo el espectro político en lo que se refiere a las dimensiones económicas y de valores morales. Cuanto más alto sea su nivel de educación, ingreso y clase social, más liberales y derechistas son los partidarios del PAN. Por el contrario, cuanto más bajas sean la clase social, los niveles de educación y el ingreso, más izquierdistas y conservadores son los votantes del PAN. Las esposas y los trabajadores se encuentran entre los más conservadores. El PRD y el PRI no parecen ser partidos que capten a todo tipo de seguidores. Los votantes del PRD por lo general se encuentran ubicados en el cuadrante superior izquierdo sin importar su clase e ingreso. Por consiguiente, el PRD parece ser un característico partido político izquierdista libertario (Kitschelt, 1988). El PRI es exactamente lo opuesto: la mayoría de sus votantes están ubicados en el cuadrante inferior derecho, cualesquiera que sean sus rasgos sociodemográficos.

En vista de estos resultados, la falta de conexión entre la élite del PAN y sus partidarios parece ser particularmente sorprendente. La élite del PAN está ubicada en el cuadrante inferior derecho (derechista y conservadora), el que en cuestión del apoyo de las masas del partido es un espacio vacío. El dilema que parecen enfrentar los políticos del PAN es que su posición conservadora en temas como el aborto y la libertad sexual tiende a quitarle el apoyo de las clases altas, profesionistas y estudiantes, en tanto que su posición derechista en los temas económicos los enemista con las clases bajas y las amas de casa. Estos resultados parecen explicar la razón por la que los políticos del PAN se han negado constantemente a definir una posición más clara sobre estos asuntos.

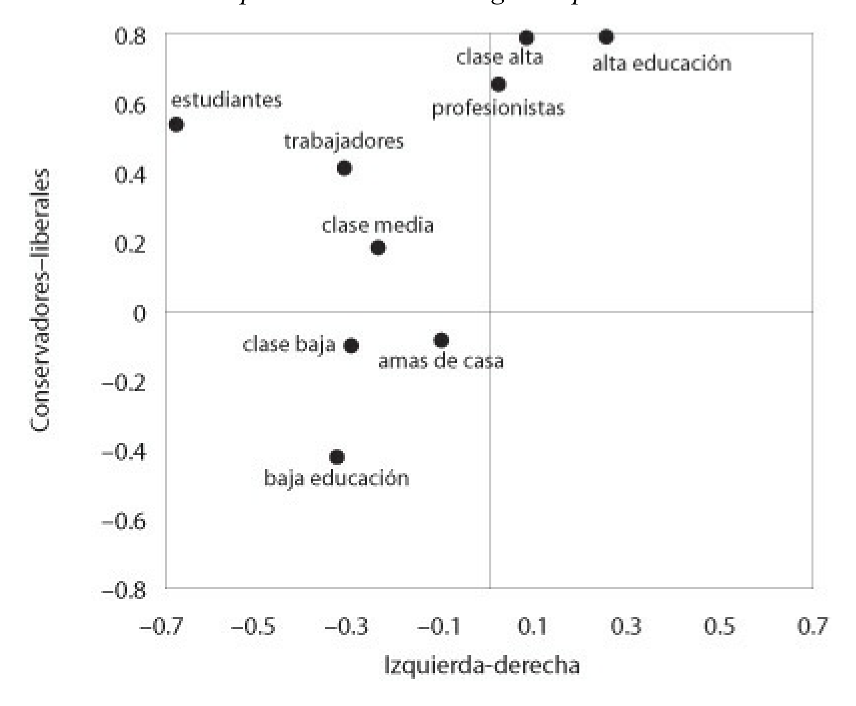
GRÁFICA VIII.3. *Distribución de los partidarios delem PAN según su posición en asuntos económicos y morales*



GRÁFICA VIII.4. *Distribución de los partidarios del PRD según su posición en asuntos económicos y morales*



GRÁFICA VIII.5. *Distribución de los partidarios del PRI según su posición en asuntos económicos y morales*



EPÍLOGO: LA VICTORIA DE VICENTE FOX EN LA CONTIENDA PRESIDENCIAL DE 2000 Y EL PAN

Después de 71 años de dominio de la presidencia por el PRI, fue elegido presidente un candidato panista, Vicente Fox, el 2 de julio de 2000. Fox ganó como candidato de la Alianza para el Cambio, integrada por el PAN y el Partido Verde Ecologista. Fox consiguió el apoyo de varios segmentos de la sociedad mexicana en todas las regiones del país, confirmando varios de los hallazgos expuestos en este capítulo.

Cuando presentamos por primera vez este capítulo, en la Conferencia sobre la Democracia Cristiana celebrada en el Instituto Kellog, 14 meses antes de la elección presidencial de 2000 en México, se nos plantearon varias preguntas centradas en la posibilidad de que el PAN ganara la presidencia. En ese tiempo especulamos con base en la estrategia del PAN de captar todo tipo de persona, lo que describimos en nuestro artículo. Actualmente, podemos evaluar si el candidato del PAN pudo en realidad ganar sobre la base de una vasta coalición electoral de diferentes tipos de votantes.

En este epílogo utilizaremos información de algunas encuestas de salida para mostrar quién votó por Fox y por qué. En esta sección sólo presentamos porcentajes, a diferencia de los análisis estadísticos más rigurosos que mostramos en el desarrollo de este capítulo. Estamos seguros de que muchos de los hallazgos de la encuesta de salida generarán más preguntas y, en consecuencia, más esfuerzos académicos para explicar el comportamiento de los mexicanos el 2 de julio. Esperamos que esta breve descripción del voto arroje más luz sobre los temas de los cuales tratamos en este capítulo.

El cuadro VIII.6 muestra los resultados de una encuesta de salida realizada en todo el

país por el periódico *Reforma*. Los resultados totales se refieren a una muestra de 3 377 votantes en los 31 estados y el Distrito Federal. Según los resultados oficiales proporcionados por el Instituto Federal Electoral, Vicente Fox obtuvo 15.9 millones de votos (43.5%), Francisco Labastida, del PRI, 13.6 millones de votos (36.9%) y Cuauhtémoc Cárdenas, de la Alianza por México, dirigida por el PRD, 6.2 millones de votos (17%). Dos candidatos de menor importancia, Gilberto Rincón Gallardo, del Partido Socialdemócrata, y Manuel Camacho, del Partido del Centro Democrático, obtuvieron 957 455 votos en conjunto (2.6%) y no pudieron conservar el registro legal de sus partidos en vista del umbral de 2% por partido. Votó 64% de los votantes registrados.

Según la información de la encuesta de salida, hubo importantes diferencias en el apoyo a los dos principales candidatos presidenciales. El de Vicente Fox provino ante todo de las ciudades, de los electores más jóvenes y de los votantes con mayor nivel educativo. Las mujeres, que tradicionalmente votaban por el PRI, en esta ocasión dividieron sus preferencias entre Fox y Labastida. Los hombres en su mayoría prefirieron a Fox. Aunque Labastida ganó en varios estados, Fox ganó en toda región definida para la encuesta de salida: en el norte, en el centro-occidente, en el centro, e incluso en el sur, otrora un sólido bastión del PRI.

La religión también desempeñó un papel importante en el voto. Fox pudo obtener más apoyo entre los votantes católicos que entre los protestantes, mientras que Labastida experimentó la situación contraria: su apoyo fue mayor entre los protestantes. Una de las grandes ventajas de Fox, según los resultados de la encuesta de salida, fue que su apoyo provino tanto de votantes religiosos como de no religiosos. Si consideramos la asistencia a la Iglesia como indicio de religiosidad, el voto por Fox fue muy similar entre los que son muy religiosos y los que no son nada religiosos. Labastida mostró fuerza entre los muy religiosos, pero su apoyo se debilita al pasar a los votantes menos religiosos.

CUADRO VIII.6. *Bases del apoyo para los candidatos presidenciales: México 2000*

Variable	*Fox (%)*	*Labastida (%)*	*Cárdenas (%)*	*Porcentaje de la muestra*
Total	44	37	17	100
Residencia				
Urbana	49	32	16	71
Semirrural	35	45	18	9
Rural	30	50	19	20
Región Norte	48	39	12	23
Centro-occidente	46	40	12	17
Central	42	34	20	36
Sur	42	37	20	24
Sexo				
Hombres	46	33	20	52
Mujeres	42	42	14	48
Edad (años)				
18-29	47	34	17	34
30-39	48	36	14	29
40-49	41	37	19	19
50 y más	36	43	20	18
Educación				
Ninguna	28	48	22	8
Primaria	32	49	19	28
Secundaria	46	36	15	23
Preparatoria	51	30	17	18
Universidad	58	24	15	23
Religión				
Católica	45	37	16	86
Protestante	33	40	23	6
Otras	41	38	19	3
Ninguna	35	24	36	4
Asiste a la iglesia				
Más de una vez por semana	41	42	16	13
Una vez por semana	45	38	15	36
Una vez al mes	44	36	18	20
En ocasiones especiales	46	35	16	22
Nunca	40	26	30	8
Principal razón de su voto				
Por el cambio	66	15	18	42

Por el candidato	27	50	19	9
Por obligación	28	60	12	3
Por costumbre	11	84	5	7
Por el menos malo	35	41	21	4
Lealtad	9	79	10	5
Propuestas políticas	36	43	17	23
Otras	33	44	21	7
No sabe	21	52	19	2
Partido con el que se identifica				
Fuertemente PRI	8	91	1	20
Débilmente PRI	11	86	2	13
Fuertemente PAN	96	2	2	14
Débilmente PAN	93	5	2	13
Fuertemente PRD	10	1	87	7
Débilmente PRD	12	6	80	1
Otros	35	13	23	6
Ninguno	54	20	20	23
No sabe	47	32	18	3
Autoubicación izquierda-derecha				
Izquierda	50	17	32	21
Izquierda-centro	54	19	24	11
Centro	51	32	15	23
Centro-derecha	59	34	6	9
Derecha	30	57	12	36
Voto en 1994 (tal como informó)				
PRI/Zedillo	24	67	7	36
PAN/Fernández	88	5	5	18
PRD/Cárdenas	29	6	62	13
Otros	50	22	16	1
No votó	49	32	17	25

NOTA: Los porcentajes horizontales no suman 100 porque no se incluye el apoyo para los otros candidatos.

FUENTE: *Reforma*, encuesta nacional de salida (n = 3 377).

En términos ideológicos, el apoyo a Fox provino de toda categoría de la gama de autoubicación izquierda-derecha, y ganó en la izquierda, en el centro y en el centro-derecha. Labastida ganó entre los votantes derechistas y mostró fuerza entre los del centro y los del centro-derecha. Sin embargo, a diferencia de Cárdenas, fue muy débil entre los votantes izquierdistas. Fox también pudo atraer un número significativo de votantes de todo el espectro ideológico. Esto nos proporciona otra prueba de que su candidatura captó todo tipo de votantes.

En términos partidistas, los datos de la encuesta de salida muestran una fuerte asociación entre el partido con el que se identificaba el votante y la forma en que votó. Sin embargo, el aspecto más interesante es que Fox ganó entre el electorado independiente, obteniendo más votos que Labastida y Cárdenas juntos. El candidato del PAN también ganó entre los que no habían votado en la elección presidencial de 1994 y pudo atraer a una cuarta parte de los que dijeron que habían votado por Zedillo, el candidato del PRI que triunfó en ese año. A pesar de la fuerte personalidad y carisma de

Fox, la encuesta de salida del periódico *Reforma* muestra que su victoria se explica no tanto por su candidatura como por el deseo de cambio del electorado.

En resumen, estos datos señalan un gran número de posibles preguntas para una investigación adicional. Podríamos argumentar que el candidato presidencial del PAN, Vicente Fox, pudo formar una coalición electoral triunfadora fundamentada en una amplia parte del electorado: religiosos y no religiosos, principalmente católicos, jóvenes, urbanos, educados, de la izquierda al centro-derecha y motivados por una actitud general de cambio.

Tanto el PAN como Fox enfrentan una paradoja de identidad. Después de ser capaces de construir una coalición electoral tan amplia, ¿cuál es su personalidad ideológica? Durante la campaña, Fox dijo que sus opiniones representaban al centro-izquierda. El PAN, por otra parte, afirma que representa al centro-derecha. Esperamos que este capítulo ayude a aclarar lo que es el partido gobernante en México y hacia dónde se dirigirá en los próximos años.

CONCLUSIÓN

Hemos demostrado que los partidarios del PAN están claramente en favor de la democracia y tienden a ser religiosos, pero que en realidad sus posiciones son heterogéneas en los asuntos económicos y culturales. El partido tiene un núcleo de seguidores liberales y derechistas entre los profesionales, la clase alta y los votantes con un alto nivel de educación. También obtiene apoyo de un núcleo de seguidores conservadores izquierdistas que tienden a provenir de clases menos educadas, de ingresos bajos y de las amas de casa. Esto presenta un gran dilema para el partido: no puede definirse sobre ciertos temas sin causar la animadversión de un ala de sus seguidores. Aunque las élites del partido parecen ser relativamente homogéneas en términos ideológicos, los seguidores del PAN lo definen como un partido que atrae a todo tipo de personas.

REFERENCIAS

Brandenburg, Frank, 1955, "An Experiment in One-Party Democracy", tesis de doctorado, Universidad de Pensilvania.

Díaz Cayeros, Alberto, y Jacqueline Martínez, 1999, "El PAN como partido regional", *Voz y Voto*, 1° de agosto.

Domínguez, Jorge, y James McCann, 1995, "Shaping Mexico's Electoral Arena: The Construction of Partisan Cleavages in the 1988 and 1991 National Elections", *American Political Science Review*, 89, núm. 1, marzo, pp. 34-48.

Estévez, Federico, y Beatriz Magaloni, 1998/2000, "Legislative Parties and Their Constituencies in the Budget Battle of 1997", Political Science Working Paper núm.

2000-01, ITAM.
Gutiérrez Madrigal, María Concha, 1991, "El Partido Acción Nacional: origen y destino", tesis de licenciatura en ciencias sociales, ITAM, México.
Kalyvas, Stathis N., 1996, *The Rise of Christian Democracy in Europe*, Ithaca, Cornell University.
Kitschelt, Herbert, 1988, "Left-Libertarian Parties: Explaining Innovation in Competitive Party Systems", *World Politics*, 40, núm. 2, pp. 194-234.
Lipset, Seymour Martin, y Stein Rokkan, 1967, *Party Systems and Voter Alignments: Cross National Perspectives*, Nueva York, Free Press.
Loaeza, Soledad, 1999, *El Partido Acción Nacional: la larga marcha, 1939-1994. Oposición leal y partido de protesta*, México, Fondo de Cultura Económica.
Lujambio, Alonso, 1997, *Gobiernos divididos en la Federación Mexicana*, México, Universidad Autónoma Metropolitana-Instituto Federal Electoral-Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública.
———, 2001, "Democratization through Federalism? Mexico's Partido Acción Nacional, 1939-1995: A History of a Difficult Strategy", en Kevin Middlebrook (ed.), *Party Politics and the Struggle for Democracy in Mexico: National and State Level Analysis of the Partido Acción Nacional*, San Diego, Center for U. S.-Mexican Studies, Universidad de California.
Magaloni, Beatriz, 1997a, "The Dynamics of Dominant Party Decline", tesis de doctorado, Duke University.
———, 1997b/2000, "From Hegemony to Multipartism: Issue-Voting and the Emergence of Partisan Cleavages in Mexico", Political Science Working Paper núm. 2000-03, ITAM.
———, 2000, "Multiple Party Systems, Coordination Dilemmas and Federalism: Mexico, 1987-1998", ponencia presentada en la American Political Science Association Meeting, Washington, D. C.
Moreno, Alejandro, 1998, "Party Competition and the Issue of Democracy: Ideological Space in Mexican Elections", en Mónica Serrano (ed.), *Governing Mexico: Political Parties and Elections*, Londres, Macmillan-ILAS Series, Institute of Latin American Studies, Universidad de Londres.
———, 1999, "Ideología y voto: dimensiones de competencia política en México en los noventa", *Política y Gobierno*, 6, núm. 1, pp. 45-81.
Reyna, José Luis, y Richard S. Weinert, 1977, *Authoritarianism in Mexico*, Filadelfia, Institute for the Study of Human Issues.

[1] En esta región se combatió la guerra cristera en los años veinte. Campesinos y agricultores cristianos se rebelaron contra el Estado central del presidente Plutarco Elías Calles, que impuso la educación secular e intentó limitar la libertad religiosa.

TERCERA PARTE
LOS PARTIDOS DEMOCRATACRISTIANOS EN DECADENCIA

IX. EL ASCENSO Y LA DECADENCIA DEL COPEI EN VENEZUELA

BRIAN F. CRISP, DANIEL H. LEVINE
y JOSÉ E. MOLINA

El Partido Demócrata Cristiano de Venezuela recibió su nombre más o menos por accidente. El partido fue fundado en 1946 con el fin de participar en el nuevo sistema electoral democrático recién establecido en el país. Al ser creado, su nombre original era Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI). Las iniciales COPEI se mantuvieron como nombre, y desde entonces el partido ha sido conocido como "Partido Social Cristiano COPEI". Aunque el nombre es accidental, el establecimiento, el liderazgo y la posterior trayectoria del partido no son resultado de la casualidad. Tienen sentido no sólo dentro de la historia de la sociedad y de la política venezolanas, sino también como parte de un esfuerzo continental para crear movimientos políticos que expresaran los principios sociales católicos en un contexto democrático y ofrecieran una alternativa a los partidos políticos izquierdistas, y específicamente a los socialistas.

Los fundadores del COPEI, con Rafael Caldera como líder indiscutible, adquirieron sus principios políticos durante la década de 1930 en movimientos estudiantiles católicos nacionales e internacionales. En Venezuela, en 1936 un grupo de estudiantes católicos que dejaron la Federación de Estudiantes de Venezuela (FEV) como protesta por las tendencias izquierdistas y anticlericales de esa federación, creó la Unión Nacional Estudiantil (UNE). Combellas (1985, p. 57) afirma que la división ocurrió cuando la FEV decidió solicitar que los jesuitas y otras órdenes religiosas fueran expulsadas del país. El establecimiento de la UNE fue un suceso sin precedentes en la historia política de Venezuela, el primer esfuerzo por crear un movimiento conservador moderno inspirado por los principios sociales católicos. Los fundadores de la UNE continuaron su acción creando varios instrumentos específicamente políticos, entre ellos Acción Nacional en 1938 y el propio COPEI en 1946. Desde el principio, Rafael Caldera fue la principal figura, llevando la bandera del partido en tres elecciones presidenciales antes de ganar la de 1968, la primera vez en la historia moderna de la nación en que un partido en el gobierno entregaba el poder pacíficamente a la oposición.

El esfuerzo que dio origen a la UNE y posteriormente al COPEI tiene sus orígenes en los grupos estudiantiles católicos continentales e internacionales como Pax Romana, donde el venezolano Rafael Caldera estuvo en estrecho contacto con otros neófitos políticos como Eduardo Frei de Chile. Los dos jóvenes líderes asistieron a la conferencia de Acción Católica en Roma en 1934. Cada uno de ellos tuvo sus primeras experiencias en los años treinta en los movimientos estudiantiles católicos que se enfrentaban a la izquierda, y cada uno establecería posteriormente movimientos políticos conservadores democráticos y se convertiría en el primer presidente demo-cratacristiano de su país. En Venezuela, como en Chile, la formación de un partido político inspirado por los principios sociales

cristianos fue un esfuerzo por arrebatar la dirección de la acción social católica a los conservadores a ultranza y el control directo de la Iglesia católica. En el curso de su historia como organizaciones y partidos políticos en el poder, tanto el COPEI como el PDC chileno fueron más allá de sus orígenes específicamente católicos (y más allá del objetivo inicial de defender a la Iglesia católica) para ocupar un lugar cada vez menos ideológico, tecnocrático, en medio del espectro político.

Este capítulo examina la experiencia venezolana con la democracia cristiana. Estudiamos las bases del impresionante ascenso del COPEI a una prominente posición de poder nacional en los años sesenta y su desplome igualmente impresionante a medida que el sistema político venezolano basado en partidos se acercó a una irreversible crisis en la década de 1990, hasta su caída definitiva con el ascenso al poder de Hugo Chávez Frías. Estudiamos los orígenes y la orientación ideológica del partido y consideramos cómo se construyó su base social. Se considera en detalle la trayectoria electoral del partido, haciendo énfasis en particular en el desarrollo de una organización y base de apoyo nacional (a diferencia de una regional), en el atractivo del partido para varias clases, y en los temas de liderazgo e ideológicos. La experiencia del COPEI como partido del gobierno indica el continuo debilitamiento de cualquier posición ideológica distintiva; el COPEI en el poder simplemente no distó mucho de la experiencia de cualquier otro gobierno. Por último, estudiamos las divisiones del partido y su drástica declinación al terminar el siglo XX.

ORÍGENES E IDEOLOGÍAS

Cualquier estudio del COPEI debe responder a varias preguntas básicas. ¿Por qué tiene Venezuela un partido democratacristiano? ¿Por qué pudo el partido crecer durante cuatro décadas a partir de un partido católico de amplia base regional hasta convertirse en una alternativa política centrista nacional, basada en varias clases sociales, cuyo atractivo tenía ya poco de católico? ¿Por qué se desplomó el partido tan rápidamente en los años noventa? Las respuestas, como hemos sugerido, se encontrarán en el movimiento general de la democracia cristiana en toda Latinoamérica (y su atractivo para los profesionales jóvenes, en pleno ascenso en sus carreras) y en los aspectos específicos de la sociedad y la política venezolanas durante el periodo de la posguerra.

El estímulo para la formación de los partidos democratacristianos en Latinoamérica tiene sus raíces en la gradual transformación del pensamiento y la acción políticos y sociales del catolicismo europeo, iniciada por personajes como Jacques Maritain, Teilhard de Chardin y Emmanuel Mounier, y por líderes políticos que reaccionaban contra el integrismo y vínculos fascistas que fueron muy comunes en la Europa central y meridional durante el periodo de entreguerras. Juntos, escritores como Maritain, Teilhard y Mounier bosquejaron una lógica y una justificación para la defensa católica de la democracia, el pluralismo y la reforma. Obteniendo su inspiración de una relectura de las ideas básicas tomistas y de las principales encíclicas papales, Maritain argumentó que el

compromiso con la democracia y el pluralismo era a la vez posible y necesario para los cristianos. Buscaba un medio por el que los católicos pudieran trabajar por la justicia social de acuerdo con su fe y su comprensión de la doctrina católica, pero sin imponer sus creencias de modo autoritario. Este corpus de escritos también proporcionó una base intelectual para la participación social insistiendo en que el cambio es normal y bueno y que los cristianos deben participar en él en forma activa, no simplemente resistiendo el cambio en nombre de la defensa de una Iglesia "perfecta". Teilhard hizo énfasis en la importancia de ver el significado religioso en todos los valores, comunidades y desarrollos seculares. Simultáneamente, el énfasis de Mounier en el "personalismo" subrayaba la necesidad de autenticidad, que se encontrará en gran medida convirtiendo las ideas de uno mismo en acción.

Estas ideas, y el compromiso general de desarrollar políticas, organizaciones y acciones fundamentadas en la lectura de los principios sociales católicos, fue muy importante para el COPEI. Desde el comienzo, el COPEI se definió a sí mismo como un partido ideológico y sus líderes subrayaron la importancia de tener una doctrina coherente. Un estudioso del partido, Ricardo Combellas, destaca que "el COPEI nació como un partido ideológico y se proclamó como tal" (1985, p. 57). Una serie de documentos centrales y repetidas conferencias ideológicas mantuvieron este compromiso, como lo hizo la temprana afluencia de líderes del partido que llegaron en números abrumadores desde el sistema de escuelas católicas. Como parte de su estructura organizativa, el partido tenía un Secretariado Nacional de Doctrina y Formación. Tal como se utiliza comúnmente en español, "formación" se refiere ante todo a la capacitación para el liderazgo. El COPEI daba gran importancia a la capacitación para el liderazgo, sobre todo en los primeros años; también proporcionó una sede a organizaciones democratacristianas continentales, como el Instituto de Formación y Educación Demócrata Cristiana (Ifedec).

Las ideas centrales que alimentaron la democracia cristiana en Venezuela, al igual que en Latinoamérica en general, pueden resumirse como una combinación de compromiso con la democracia política; la creencia en la *subsidiaridad* (derivada directamente de la doctrina social católica) y, como consecuencia, en la necesidad de limitar la intervención estatal y respetar la primacía de la sociedad civil; la búsqueda de una elusiva "tercera vía" entre el capitalismo y el socialismo; la defensa de la religión y en particular de la educación religiosa, y, finalmente, un compromiso —que aumentó continuamente con el transcurrir del tiempo— con la experiencia tecnocrática y las soluciones tecnocráticas en la conformación y puesta en práctica de asuntos clave de la política pública. El compromiso con la democracia ha sido fuerte y estable; en los otros puntos, a menudo se han presentado brechas entre la retórica y la realidad.

El compromiso del COPEI con la democracia no puede ponerse en duda. El partido ha sido constante en su apoyo a la democracia política, y en particular a un sistema en que el poder y la autoridad sean legitimados mediante el voto popular en elecciones competitivas en que los partidos políticos desempeñen un papel clave. Persistió el antiizquierdismo tan común en la formación inicial de la democracia cristiana, pero nunca

hizo que los líderes del partido cayeran en la tentación del gobierno autoritario. El COPEI fue un socio leal en las coaliciones políticas que administraron los primeros años de la democracia política durante los regímenes presidenciales de Rómulo Betancourt y Raúl Leoni. El primer gobierno de Rafael Caldera (1968-1973) dio pasos decisivos para terminar la insurrección de la guerrilla en el país, y para reincorporar a la izquierda en la política nacional mediante una amnistía. Cuando el gobierno de Carlos Andrés Pérez fue amenazado por levantamientos militares en 1992, el liderazgo nacional del COPEI estuvo a su lado y pagó un alto precio político. En su segundo periodo como presidente (1993-1998), enfrentando ahora un sistema político que lentamente se desplomaba, Rafael Caldera resistió firmemente los llamados a un *fujimorazo*, acción que emularía la de Alberto Fujimori en Perú, restringiendo al Congreso y a los partidos políticos en nombre de la unidad ante la "crisis". Para esas fechas Caldera había roto con el COPEI y gobernaba en forma independiente, pero su inalterable compromiso con la democracia era compartido por sus antiguos camaradas en el partido que fundó.

El término *subsidiaridad* se refiere a la noción de que las instituciones del Estado, las iniciativas patrocinadas por el Estado y las intervenciones de éste por lo general deben subordinarse a la sociedad civil. Las formaciones básicas de la sociedad, sobre todo la familia y la Iglesia, pero también las organizaciones económicas privadas, tienen primacía. Nunca se les debe marginar para realizar algún programa general del gobierno. Esta posición no elimina la posibilidad de una intervención o regulación legítima del gobierno; simplemente dice que la sociedad es anterior al Estado y debe ser respetada. Como veremos, la intervención estatal es bien recibida en algunas áreas —por ejemplo, para mitigar los efectos sociales de una sociedad de mercado—, pero la posición general consiste en limitar el papel del Estado. En verdad, ésta es una perspectiva clásica conservadora. Toma una aureola específicamente católica, sobre todo con respecto a la educación religiosa (y a la educación privada en general) y en la defensa de las prerrogativas de la familia.

El concepto de una "tercera vía" ha sido central durante mucho tiempo para el pensamiento democratacristiano. Hay un compromiso de buscar y procurar construir un sistema económico más humano, algo que no será ni capitalismo puro ni socialismo estatal puro; más bien se trata de un sistema que estará más o menos en medio del mercado no regulado y del Estado todopoderoso. El compromiso tiene sus raíces en dos elementos básicos de la doctrina social católica: el rechazo de la lucha de clases y la insistencia en la necesidad de regular la economía en nombre de la justicia social. El rechazo de la lucha de clases es fundamental. Los pensadores democratacristianos han buscado medios de conciliación entre las divisiones sociales, algunas veces mediante acuerdos de cooperación entre el trabajo y el patronato, más comúnmente en la construcción de programas sociales y en la búsqueda de una limitada intervención estatal en la economía. Los programas de la "tercera vía" frecuentemente han fracasado por la dificultad de administrar una intervención limitada, y dentro de las limitaciones de una economía mundial competitiva. En el caso específico de Venezuela, todos los gobiernos, de cualquier partido, se han visto limitados por las realidades de la dependencia del país

del mercado mundial del petróleo. La única diferencia discernible que puede identificarse para el COPEI es su insistencia en que sus estrategas y los criterios que asumen son en cierto modo más técnicos y menos estridentemente nacionalistas que los de su rival de siempre, Acción Democrática (AD).

Ya hemos comentado la sólida defensa que hace el partido de la religión y de los derechos y la posición de la Iglesia católica. La base original del partido era muy pequeña, y sus votos estaban concentrados en los estados andinos fuertemente católicos de Táchira y Mérida. Aunque el partido pronto traspasó esta base regional, como lo veremos pronto, en términos programáticos formales la identidad católica del COPEI rara vez fue cuestionada. Las posiciones tomadas en defensa de la religión y de la Iglesia católica están arraigadas en el supuesto de que Venezuela por definición es un país católico y que la cultura, las tradiciones y las creencias de la mayoría de la población son católicas. Esta posición casi no tiene en cuenta las bien conocidas debilidades de la Iglesia católica en Venezuela, por no mencionar la creciente fuerza del protestantismo durante las últimas dos décadas. Tomar una posición específicamente católica en política no necesariamente significa ser conservador. El surgimiento de la teología de la liberación y de los movimientos sociales relacionados es un caso que lo demuestra para Latinoamérica en conjunto. En el caso específico del COPEI, las divisiones de mediados de la década de 1960 tuvieron como resultado el retiro, y en algunos casos la expulsión, de un grupo de miembros más jóvenes y más radicales (Carnevali, 1992). Algunos fueron reincorporados posteriormente en el partido; otros siguieron diferentes líneas de trabajo.

A pesar de la identidad católica del partido, es importante repetir que el COPEI nunca ha sido un partido confesional, con posiciones subordinadas a la Iglesia y a la afiliación religiosa como condición para ser miembro. El núcleo de esta identidad católica se debilitó considerablemente en los años ochenta y en los noventa. La afluencia de estudiantes capacitados en las enseñanzas sociales católicas, sobre todo en las escuelas secundarias católicas, prácticamente ha desaparecido. Las escuelas continúan graduando generaciones de jóvenes de los dos sexos, capaces y ambiciosos, muchos de los cuales se han orientado a la política. Pero la clase de formación que llevó a las anteriores generaciones de graduados a ver la política como un campo para cumplir los principios cristianos y específicamente los católicos, simplemente ya no está presente. No es un elemento central de la enseñanza en las escuelas. Si fuera posible decir que las generaciones de líderes potenciales que ingresaron al escenario político en las últimas décadas comparten una común estructura de análisis, ésta sería una convicción generalizada en las bondades de las soluciones técnicas posideológicas. Esta predisposición tecnocrática caracterizó a los jóvenes líderes de los dos partidos principales. Académicos como Rey (1991) han señalado el declive de la diferenciación y el compromiso ideológicos como un elemento clave en el debilitamiento a largo plazo de los partidos y el sistema de partidos. El liderazgo del COPEI intentó enfrentar esta omisión patrocinando congresos ideológicos y promoviendo vigorosamente esfuerzos para proporcionar principios ideológicos a los líderes más jóvenes. El Congreso Ideológico se

celebró en 1986 y un numeroso conjunto de documentos, entre ellos el Programa Político Básico a Largo Plazo, fue publicado un año después. Todo el esfuerzo quedó en un proyecto de papel. El programa fue publicado justo un año antes de las elecciones de 1988, en las que empezó la rápida declinación del partido. Todo el esfuerzo no tuvo un gran efecto ni siquiera dentro del partido, pues la formación de posiciones ideológicas coherentes había cedido su lugar desde hacía mucho a la prominencia de las razones tecnocráticas y al enfoque técnico en la elaboración de las políticas, la dirección de las campañas y la construcción del llamamiento que hacía el partido.

EL COPEI EN EL SISTEMA DE PARTIDOS DE VENEZUELA

La trayectoria del COPEI debe ser entendida en el contexto más general del carácter del sistema de partidos políticos que dominó en la política venezolana entre 1958 y 1999 (Levine y Kornblith, 1995). A éste ahora se le conoce como la Cuarta República, o el sistema *puntofijista*,* siguiendo el nombre del pacto fundacional del sistema, el Pacto de Punto Fijo, firmado por los representantes de los principales partidos políticos a comienzos de 1958. Nuestro análisis de los sistemas de partido utiliza las dimensiones nucleares que destacó Sartori (1976): primero, el número de partidos importantes y, segundo, la distancia ideológica entre ellos. Para el caso de Latinoamérica, Mainwaring y Scully (1995) han mostrado que también se debe considerar una tercera dimensión del sistema de partidos: el nivel de institucionalización. En sus términos, el nivel de la institucionalización del sistema de partidos está compuesto por cuatro factores: la estabilidad, el arraigo del partido en la sociedad, la fuerza organizativa y la legitimidad (Mainwaring, 1999, p. 26). Analizar al COPEI en estas dimensiones ayudará a conocer la contribución que el partido hizo a la institucionalización de todo el sistema de partidos.

El número de partidos importantes

En las primeras elecciones democráticas en Venezuela, en 1947, un año después de haberse establecido como partido, el COPEI obtuvo 17% del voto en la elección parlamentaria y quedó en un distante segundo lugar después de AD (71%), el dominante partido socialdemócrata. Durante este breve periodo democrático (que duró hasta un golpe militar, a finales de 1948), el COPEI fue la principal oposición en un sistema al que puede caracterizarse como un sistema de partido predominante (Sartori, 1976, p. 192), en el que AD era ese partido predominante. Después de restablecerse la democracia en 1958 y hasta las elecciones de 1968, Venezuela tuvo un sistema de partidos electoral moderadamente pluralista.[1] En ese momento, había por lo menos dos partidos opuestos al sistema que estaban combatiendo en una guerra de guerrillas, y que no fueron incluidos en el sistema electoral de partidos. Después de quedar en tercer lugar en las elecciones de 1958 con 15.3% de los votos (detrás de AD [49.5%] y de la Unión Republicana Democrática [URD], un partido populista que obtuvo 26.8%), el COPEI se estableció como el segundo partido en 1963 (20.8%). En la siguiente elección, en 1968,

el COPEI ganó la presidencia, ayudado en gran medida por una división en AD. Durante los siguientes 20 años es posible caracterizar al sistema de partidos venezolano como un sistema atenuado de dos partidos (Molina y Pérez, 1998), en el que sólo había dos partidos importantes. Existía un tercer partido, más pequeño, el Movimiento al Socialismo (MAS), que desempeñó un importante papel opositor, obteniendo entre 5 y 10% de los votos,[2] pero sus posibilidades de llegar a la presidencia eran nulas en vista del abrumador dominio que ejercían el COPEI y AD. La pronunciada y continua erosión del apoyo popular del COPEI y de AD a partir de 1993 explican en gran medida el cambio a un sistema de varios partidos, con señales claras de una polarización ideológica.[3] Después de disfrutar de una proporción del voto que entre 1973 y 1998 nunca fue menor de 28%, la proporción de los votos del COPEI en las elecciones legislativas disminuyó rápidamente a 23% en 1993, 12% en 1998 y 5% en 2000.[4]

Posición ideológica

El COPEI comenzó en 1946 como un partido relacionado con la división religiosa que se había desarrollado en la política venezolana como resultado de la posición anticlerical del gobierno de AD (Levine, 1973; Middlebrook, 2000, p. 17; Coppedge, 2000). De hecho, como hemos visto, el movimiento estudiantil que precedió al COPEI surgió como reacción a las políticas anticlericales y específicamente a las políticas contra la Iglesia promovidas por los mismos líderes estudiantiles que posteriormente fundaron y llevaron a AD al poder. En sus primeros años, el COPEI representa una respuesta conservadora y en favor del clero ante las tendencias izquierdistas que ciertamente eran fuertes en AD. Después de restaurarse la democracia en 1958 y tras la firma del acuerdo de Punto Fijo con los otros dos partidos importantes (AD y URD), esas diferencias se redujeron, en particular la que se refería a la política del Estado con respecto a la Iglesia.

La significativa polarización ideológica de la década de 1940 dio lugar a una aproximación ideológica progresiva entre los dos partidos más importantes, hacia el centro-derecha del espectro político. En 1973,[5] en una escala de 1 a 3 (izquierda, centro, derecha), el autoposicionamiento ideológico promedio de los simpatizantes del COPEI era de 2.5. Ubicaron al candidato presidencial del COPEI, Luis Herrera Campins, en 2.7 en promedio. La ubicación promedio para Luis Herrera entre el resto de la muestra fue de 2.5. Los simpatizantes de AD se colocaban a sí mismos en 2.3. Esto sugiere que cuando se desarrolló el sistema de dos partidos, los dos más importantes estaban ubicados en el centro-derecha del espectro ideológico, existiendo sólo una pequeña distancia ideológica entre ellos. En 1983,[6] los simpatizantes del COPEI nuevamente se ubicaron a sí mismos en 2.5 y al partido en 2.7, en tanto que el resto de la muestra colocó al COPEI en 2.7 en promedio. Los simpatizantes de AD se ubicaron a sí mismos en 2.2. Cuando el sistema de dos partidos terminó en 1993, tanto los simpatizantes del COPEI como de AD, si usamos una escala similar a la antes mencionada, se ubicaron a sí mismos en 2.5, lo que indicaba que en cualquier caso los dos partidos, todavía los más grandes, se habían acercado ideológicamente hacia el centro-derecha. Sin embargo, para esa fecha el crecimiento de

una izquierda radical había llevado al sistema de partidos a una clara polarización ideológica, así como a la fragmentación. Esto se hizo evidente en 1993 con el triunfo de La Causa R (Radical), que en las elecciones de ese año obtuvo una proporción del voto similar a las de AD y el COPEI. En promedio, los partidarios de La Causa R se ubicaron a sí mismos en el centro-izquierda (1.6). En 1998,[7] cuando su declinación electoral ya estaba muy avanzada, los partidarios del COPEI se ubicaron a sí mismos en promedio en 7.3, si en este caso usamos una escala de 10 puntos que parte de la izquierda (1) a la derecha (10). Los partidarios del COPEI ubicaron al partido en general en 7.5, y el resto de la muestra ubicó al COPEI en 6.5. También en este caso, los datos sugieren las inclinaciones hacia el ala derecha del partido, que para entonces había adoptado una política económica neoliberal. Por su parte, los partidarios de AD se ubicaron en 7.8. El resto de la muestra ubicó a AD en 6.3. Nuevamente, las ubicaciones del COPEI y de AD son similares, pero contrastan con la organización que representa a la izquierda radical: los simpatizantes del Movimiento Quinta República (MVR) se ubicaron a sí mismos en el centro-izquierda (4.8), pero el resto de la muestra consideró que el partido estaba más a la izquierda (3.6).

Estabilidad

Puede argumentarse que el nivel de estabilidad de la competencia electoral entre los partidos es el indicador más importante de la institucionalización del nivel del sistema de partidos. El sistema de partidos venezolano fue muy inestable entre 1958 y 1968, se estabilizó e institucionalizó durante el periodo del sistema de dos partidos atenuado (1973-1988), y ha mostrado un alto nivel de inestabilidad desde 1993. La forma en que el voto del COPEI ha cambiado o permanecido firme ha sido, junto con la proporción de votos de AD, una de las principales razones de esta evolución. El índice de volatilidad de Pedersen es el que se usa generalmente para medir la estabilidad electoral[8] (Pedersen, 1983). El cuadro IX.1 informa sobre la volatilidad general en cada elección y el cambio en la participación del COPEI en el voto. Como lo muestran los datos en el cuadro IX.1, a pesar de alguna variación de una a otra elección, por lo general el voto del partido para la legislatura fue alto y relativamente estable de 1973 a 1988, pero se volvió inestable durante el descenso electoral que sufrió el partido entre las elecciones de 1993 y las de 2000. Durante el sistema de dos partidos atenuado, la proporción del partido en el voto para la legislatura varió de 39.8 a 28.7%. El punto bajo se presentó en 1983, al final del gobierno de Luis Herrera Campins, que es identificado generalmente en las encuestas de opinión como el peor gobierno de la era democrática hasta ahora. El punto culminante ocurrió en 1978, precisamente en la elección que le dio al COPEI y a Luis Herrera la presidencia. Si se tiene en cuenta que entre el COPEI y AD recibieron casi 80% del voto en cada una de estas elecciones, la proporción obtenida por el COPEI debe considerarse como relativamente estable en ese momento, lo que contribuyó a la baja volatilidad del sistema. Otro indicador de estabilidad es que el COPEI, de 1968 a 1988, siempre fue el primero o el segundo partido tanto en las elecciones presidenciales como en las

legislativas.

Raíces en la sociedad

Una característica importante de cualquier partido es la profundidad de sus vínculos con un sector de la sociedad en particular. Un indicador clave de la penetración de un partido en la sociedad es si los vínculos de un partido

CUADRO IX.1. *Desempeño electoral del COPEI en las elecciones nacionales, 1947-2000*

Año electoral	*Voto presidencial*[a] *(%)*	*Lugar del candidato presidencial*	*Voto para legislatura*[b] *(%)*	*Diputaciones*		*Senadurías*		*Cambio en el voto legislativo desde última elección*	*Volatilidad del voto para la legislatura*
				n	*%*	*n*	*%*		
1947	22.4	2	16.9	—	—	—	—	—	—
1958	15.2	3	15.2	19	14.3	6	11.8	—	—
1963	20.2	2	20.8	38	21.3	8	17.0	+5.6 (36.8%)	32
1968	28.7	1	24.0	59	27.6	16	30.8	+3.2 (15.4%)	30
1973	35.3	2	30.2	64	32.0	13	27.7	+6.2 (25.8%)	31
1978	45.3	1	39.8	84	42.2	21	47.7	+9.6 (31.6%)	12
1983	32.7	2	28.7	60	30.0	14	31.8	−11.1 (27.9%)	13
1988	40.1	2	31.1	67	33.3	20	43.5	+2.4 (8.4%)	10
1993	22.1	3	22.6	53	26.1	14	28.0	−8.5 (27.3%)	32
1998	2.2	2[c]	12.0	26	12.6	06	1.1	−10.6 (46.7%)	41
2000	—[d]	—	5.1	08	4.8	n.a.	n.a.	−6.9 (57.5%)	32

n.a. = no aplicable.

[a] Esta columna informa de la proporción obtenida por el COPEI en los votos para presidente; por lo común su candidato presidencial era apoyado también por varios partidos y grupos electorales menores.

[b] Hasta 1988, los votantes sólo tenían un voto para ambas cámaras, de modo que el porcentaje de la votación para el partido era idéntico para la Cámara de Diputados y para el Senado. Entre 1993 y 1998, lo que se muestra es la votación para la Cámara de Diputados. La Constitución de 1999 abolió la segunda cámara.

[c] En 1998, el COPEI apoyó a Enrique Salas Romero, candidato del Proyecto Venezuela. Salas Romero obtuvo 40% de los votos, pero el COPEI sólo contribuyó con 2.2 por ciento.

[d] El COPEI no presentó candidato a la presidencia en la elección de 2000.

FUENTES: Consejo Supremo Electoral, *Los partidos políticos y sus estadísticas electorales 1946-1984,* Caracas, CSE, 1987; Consejo Supremo Electoral, *Elecciones 1988,* Caracas, CSE, 1990; Consejo Supremo Electoral, *Elecciones 1993* (inédito, 1993); Consejo Nacional Electoral, *Venezuela 1998,* CD-ROM, 1999; Consejo Nacional Electoral, *Elecciones Presidenciales Venezuela 1998,* CD-ROM, 1999; Consejo Nacional Electoral-INDRA, *Elecciones 2000,* Caracas, Consejo Nacional Electoral, 2000. Las FUENTES para el número de escaños en el Congreso de 1998 y en la Asamblea Nacional de 2000 son las encuestas parlamentarias publicadas por *El Universal,* 18-22 de enero de 1999; *El Universal,* 14 de agosto de 2000, y las investigaciones realizadas por el autor.

han estado estrechamente relacionados con una determinada división o conjuntos de divisiones (por ejemplo, clase, religión, raza, etnia, urbano/rural), de modo que una gran parte de las personas en un determinado lado de una de esas divisiones tienden a considerar al partido como su representante natural. Por lo general, los latinoamericanos tienden a ser partidos que tratan de captar a todos, en vez de orientarse a un sector (Dix, 1989). Actualmente, el COPEI no es una excepción; sin embargo, en los años cuarenta era considerado claramente como un partido católico. Esto ocurrió durante un tiempo en que la política anticlerical volvió políticamente significativas estas divisiones. Después de 1958, AD abandonó cualquier posición anticlerical y la religión perdió importancia como base de una división. David Myers, trabajando con datos agregados, encontró que en las elecciones de 1958 el voto para el COPEI fue significativamente más alto en los municipios que tenían menor número de habitantes pobres y analfabetos; en aquellos en los que un alto porcentaje de los habitantes vivía fuera de la capital del municipio, y en los que se encontraban en las afueras de Caracas (Myers, 1998, p. 502). Esto sugiere que el COPEI encontró su base entre las clases medias rurales y de las ciudades pequeñas. Myers señala que estas dimensiones pronto perdieron importancia y no parecen significativas en las encuestas realizadas después de 1973. Otros análisis basados en encuestas, incluyendo el nuestro, han mostrado que después de 1973 ninguna división social

estructural ha estado asociada en forma sustancial con el voto en Venezuela (Baloyra y Martz, 1979; Molina y Pérez, 1994; Molina, 2001).

A pesar de no ser "el partido" de ningún sector específico de la población, y dentro de su orientación que procura atraer a todos, el COPEI estableció una red de apoyo relacionada con el partido que llegaba profundamente a casi todo sector de la sociedad venezolana: organizaciones estudiantiles, asociaciones profesionales y movimientos feministas y de barrios. Pudo organizar apoyo para el partido en el movimiento sindicalista (Herman, 1980) por medio del Frente de Trabajadores Copeyanos y colocar a algunos de sus líderes en el consejo ejecutivo de la organización de trabajadores dominante, la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV). Sin embargo, en la CTV, al igual que en la mayoría de las otras organizaciones sociales, el COPEI se encontraba bajo la sombra hegemónica de AD (Álvarez, 2000). Juntos, los dos partidos ejercieron un rígido control de múltiples áreas de la sociedad organizada, a tal grado que los académicos decían que el sistema político era una "partidocracia" (Rey, 1991, p. 82) o "partidarquía" (Coppedge, 1994).

Mainwaring (1999, p. 29) sugiere que la amplitud y fortaleza del partidismo, y por lo tanto el arraigo del apoyo a los partidos en la sociedad, puede evaluarse estudiando la congruencia o la divergencia del voto presidencial y legislativo para un partido cuando las elecciones se celebraban simultáneamente, como era la norma en Venezuela antes de 1993. El cuadro IX.1 muestra el voto presidencial y legislativo para el COPEI en las elecciones nacionales de 1947 al 2000. En el periodo de 1958 a 1993 la diferencia promedio entre el voto legislativo y el presidencial fue de 3.4%. Se puede considerar que esta diferencia es pequeña si tomamos en cuenta que en esos años el voto legislativo en promedio fue de 26.6% y el voto presidencial promedio fue de 30%. También es posible tomar como indicador de congruencia el porcentaje por el que ambos votos coinciden, esto es, el coeficiente de la más pequeña sobre la más grande de ambas votaciones para cada elección, multiplicado por 100. Siguiendo este procedimiento, la congruencia promedio entre el voto legislativo y el presidencial para el COPEI fue de 90% entre 1958 y 1993.[9] Esto, junto con la estabilidad y el tamaño del voto del COPEI y su fuerte presencia casi universal en el tejido social del país, muestra cómo echó profundas raíces en la sociedad. Estas raíces sólo desaparecieron muy lentamente después de la crisis económica y política que empezó a principios de la década de 1980, pero parecen haber desaparecido muy rápidamente después de la división en 1993 y el fiasco del jugueteo del partido con una reina de belleza para la presidencia en 1998.[10]

Fuerza organizativa

En las décadas que siguieron a la restauración de la democracia en 1958, el COPEI construyó una organización permanente (es decir, vigente todo el año, no sólo electoral), presente en todos los niveles de la vida nacional y local, y capaz de integrar muchos intereses y grupos en su vida organizada. Esta pauta organizativa fue iniciada en Venezuela por AD y copiada posteriormente por todos los partidos que tuvieron éxito en

la política nacional desde mediados de los años cuarenta hasta el ascenso al poder de Hugo Chávez. Los partidos que tuvieron éxito electoral fueron sin excepción socialmente heterogéneos y combinaban la representación de grupo con un liderazgo fuertemente centralizado que estaba autorizado para actuar en favor de los "intereses del partido" por encima de los de cualquier sector componente. Este patrón fue algo completamente nuevo en la vida nacional. Antes del ascenso de AD, la política era un asunto limitado, de élite, y los partidos políticos (cuando existían) eran instrumentos temporales para promover los intereses de líderes particulares. Fue nueva la idea de que el propio partido sirviera como instrumento central de la acción política, la representación de las masas y el desarrollo y circulación de élites. En su esfuerzo por competir efectivamente con AD y reducir el abrumador dominio político de ese partido, el COPEI conscientemente fue más allá de sus orígenes como partido católico regional para desarrollar su presencia nacional, su atractivo electoral y su base de votos. Se crearon organizaciones del partido en todo el país y se presentaron candidatos en toda circunscripción electoral. Al mismo tiempo se llevó a cabo un esfuerzo sostenido por competir con AD en organizaciones sectoriales como los sindicatos, los grupos profesionales y los grupos estudiantiles y de profesores en las universidades. El COPEI se fortaleció gracias a decisiones tomadas a principios de los sesenta para institucionalizar la competencia del partido dentro de la confederación nacional de sindicatos, aplicando una clase de sistema de representación proporcional comparable a la que estaba vigente en la política nacional.

La decisión de abandonar sindicatos paralelos en favor de la competencia dentro de una estructura común reflejaba lo que estaba ocurriendo en el escenario político general. Los fundamentos fueron establecidos por el famoso Pacto de Punto Fijo, que comprometía a los partidos más importantes (el COPEI incluido) a respetar los resultados de las elecciones, ganara quien ganara, y a unirse en una defensa común de la democracia contra las amenazas, sin importar de dónde provinieran. Este acuerdo fue la base de un gobierno de coalición (al cual se unió el COPEI) en los dos primeros gobiernos que siguieron al restablecimiento de la política democrática en 1958. La coalición política se completó en el aspecto legislativo y en el administrativo por lo que se conoció como "el pacto institucional", un acuerdo que comprometía a AD y al COPEI a representaciones compartidas en el Congreso y en la asignación de cargos públicos. En todos estos casos, la participación puso a disposición de los líderes del COPEI recursos y cargos (lo habitual del clientelismo), y estos recursos contribuyeron mucho a proporcionar los medios para construir el partido.

La construcción de una organización partidista bien financiada y con el personal de planta adecuado (incluyendo, al paso del tiempo, recursos para encuestas extensivas y campañas de alta tecnología que se hicieron características de la política venezolana desde mediados de los setenta) dio buenos resultados en lo electoral. A principios del decenio de 1980, el partido ganó la presidencia en dos ocasiones, compitió efectivamente con AD en todo el país, y se amplió considerablemente, fortaleciendo su base electoral más allá del núcleo inicial de católicos comprometidos de pequeñas ciudades y de las provincias. A la vez, como se dijo antes, la importancia de la experiencia técnica y de los

expertos había aumentado dentro del partido. Para los ochenta, el COPEI parecía ser una organización política "madura", con una organización profesional sólida y una base de leales seguidores. El partido parecía haberse independizado de los deseos y de la popularidad de sus fundadores, en particular de Rafael Caldera, y aparentemente estaba en condiciones de supervivencia cuando éste saliera del escenario. En retrospectiva, podemos ver cuán prematuro fue ese juicio, pero es justo decir que era ampliamente compartido.

Legitimidad

El concepto de legitimidad, y en particular de la legitimidad de un sistema político, líder, acción o partido, combina dos dimensiones relacionadas: el *reconocimiento* de que una persona o grupo está capacitado para ocupar cargos públicos, realizar acciones, dirigir o representar, y el *compromiso* para la acción en instituciones compartidas con un conjunto de recursos comúnmente aceptado y delimitado. Si pensamos de esta manera en la legitimidad, es evidente que el COPEI era un partido legítimo en ambas dimensiones. El partido era reconocido ampliamente como un actor político legítimo, que presentaba candidatos y articulaba posiciones dentro de un sistema político que tenía un amplio apoyo popular. Es importante especificar que el COPEI era un partido legítimo en un sistema en que los partidos políticos eran actores de importancia central. En lo que hoy se conoce como la Cuarta República, los partidos políticos fueron el medio reconocido para la representación y la movilización del apoyo popular. El papel dominante de los partidos fue incorporado en las leyes electorales y en el orden operativo ordinario de todas las instituciones políticas clave, incluyendo las legislaturas, las burocracias, los gobiernos regionales y locales y, como hemos visto, la vida social organizada. Los líderes de los partidos nacionales controlaron las nominaciones a los puestos políticos, así como las elecciones en sindicatos, grupos estudiantiles y asociaciones de profesionales. Se estableció una rigurosa disciplina del partido dentro de los organismos legislativos y entre los miembros de las "fracciones" de los partidos —ostensiblemente grupos sociales no políticos—. Los votos movilizados por los partidos eran el aspecto principal del sistema político, y se reconocía que sus líderes eran voces legítimas en el escenario nacional.

Mientras duró, este conjunto de acuerdos que se reforzaban entre sí dio un poder y una autonomía extraordinaria a los líderes de los partidos, cuyo dominio de organizaciones internamente diversas pero fuertemente jerárquicas los separaba de la vida ordinaria de los ciudadanos. Los políticos profesionales, sobre todo los que pertenecían a uno de los dos partidos principales, se convirtieron en la nueva "clase" de la política y la sociedad venezolanas. Pero a medida que decaía todo el sistema político y surgía una nueva sociedad civil que se negaba a ser organizada en redes controladas por el partido, todo este arreglo se desmoronó lentamente, y los partidos y sus líderes, junto con el sistema que representaban, perdieron legitimidad.[11]

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN DE CANDIDATOS

En parte, la razón de que la sociedad civil diera la espalda a los partidos tuvo que ver con sus procedimientos internos, que resultaban poco democráticos. Los miembros populares de base y los grupos que representaban intereses importantes sentían que no podían participar en el proceso de toma de decisiones de los partidos. El proceso de nominar a los candidatos es una de las funciones más importantes que realiza un partido político. Las instituciones, las reglas y los procedimientos de un partido para deter-minar el acceso al voto interno revelan mucho sobre la naturaleza del partido y su propio nivel de democracia interna. Más aún, los procesos de selección del candidato pueden ayudar a explicar las características descriptivas (por ejemplo, raza y género) de los candidatos elegidos y las características de las delegaciones del partido una vez que se ocupan los cargos públicos. Los candidatos elegidos y su conducta como legisladores tienen un efecto significativo en la naturaleza de la representación en sí. En términos de Pitkin (1967), las características institucionales pueden influir en que la representación signifique "autorización" o "responsabilidad" (una concepción formalista de la representación), en que la composición de la legislatura refleje los atributos característicos de la población (punto de vista descriptivo), en que los líderes puedan influir sobre los que están representando mediante la manipulación de mensajes o señales (punto de vista simbólico), el grado en que la representación implica responsabilidad y la forma de esa responsabilidad (punto de vista político de la representación).

Durante el sistema de Punto Fijo, a los partidos se les caracterizaba por lo general como organizaciones centralizadas, controladas por élites: por lo común se mencionaba a AD, el partido dominante, como el caso ejemplar. El COPEI se acercó e incluso excedió el nivel de centralización de AD en los procedimientos de selección de los candidatos. En la selección de los candidatos presidenciales, cuando la élite del partido estaba unida, le imponía su voluntad al partido. Cuando estaba dividida, se procedía a seleccionar al candidato en una convención o incluso en una elección primaria (Martz, 1999-2000).[12] La forma en que se llevaba a cabo la selección del candidato por lo general tenía un gran efecto sobre las perspectivas del partido durante la elección general. Rafael Caldera, el fundador del partido y una importante figura pública, fue el candidato del partido para la presidencia en toda elección para las que era elegible desde la fundación del partido hasta que finalmente ganó la elección en 1968. Caldera terminó en tercer lugar en 1958 y fue segundo en 1963, por lo que el apoyo para que volviera a lanzarse como candidato en 1968 iba ya debilitándose, especialmente entre los jóvenes del partido. No obstante, pudo conservar su control del proceso de nominación, y su triunfo en las elecciones de 1968 contribuyó a reforzar su dominio del partido.

Caldera, que fue presidente de 1968 a 1973, constitucionalmente no era elegible para lanzarse en 1973 y 1978. En 1973, el partido se dividió sin ponerse de acuerdo sobre el candidato, y se llegó a una convención para decidir. Caldera apoyó a Lorenzo Fernández, quien derrotó a Luis Herrera Campins en la segunda votación de la convención. Fernández fue derrotado en la elección general por Carlos Andrés Pérez, de AD. Herrera Campins aprovechó el periodo que precedió a la siguiente elección general para asegurar su control sobre la maquinaria del partido, limitando la influencia de Caldera en toda

ocasión y lugar en que le fue posible. Caldera procuró, sin éxito, que la nominación fuera decidida por una convención abierta a personas que no fueran del partido, pero el apoyo a Herrera entre los que ocupaban los cargos oficiales de liderazgo impidió que surgiera una seria división. Herrera ganó posteriormente la presidencia, pero, como se dijo antes, su gobierno fue un desastre. El calamitoso desempeño de Herrera en la presidencia le aseguró a Caldera la nominación en 1983, pero al mismo tiempo hizo casi inevitable que el COPEI fuera derrotado en la elección general.

Después de 1983, el dominio de Caldera en el proceso de selección de candidatos presidenciales empezó a debilitarse significativamente (Martz, 1999-2000). Su renuencia personal a dejar que el control del partido pasara a una nueva generación de los leales al partido contribuyó en gran medida al desplome de este partido y fue causa de un gran descontento entre las nuevas generaciones de líderes en el COPEI. Caldera había colocado a su protegido y partidario Eduardo Fernández en el puesto de secretario general, pero se negó a apoyarlo para candidato en 1988, e insistió en buscar una vez más la nominación para sí. Caldera insistió en una convención abierta para decidir el punto y se disgustó profundamente al perder la nominación ante su joven protegido en una competencia abierta.

Al volverse cada vez más inestable el sistema de Punto Fijo a principios de los años noventa, enfrentado a intentos de golpes de Estado y procesos de censura, Caldera defendió decididamente el gobierno democrático, aunque no a sus colegas fundadores. Habiendo perdido el control de la maquinaria del partido y viendo que era poco probable lograr la nominación, Caldera se declaró candidato independiente a la presidencia en 1993, y triunfó en una elección general muy dividida. La salida de Caldera del partido del que había sido fundador dejó al COPEI fragmentado y muy debilitado en todo nivel. Eduardo Fernández también apoyó al régimen democrático, pero, a diferencia de Caldera, se comprometió personalmente y comprometió al partido a apoyar al gobierno de Andrés Pérez, que estaba siendo objeto de fuertes ataques. Los esfuerzos de Fernández por defender al régimen le hicieron perder mucho apoyo público tanto dentro como fuera del partido. Como resultado, Oswaldo Álvarez Paz, gobernador del importante estado de Zulia, pudo capitalizar el descontento público y ganó la primera primaria presidencial llevada a cabo por el COPEI. Muchos partidarios naturales de Fernández salieron del partido para unirse a la candidatura independiente de Caldera, y Álvarez Paz ganó fácilmente en una primaria en que participaron muchas más personas que las que el COPEI decía tener como miembros. Con el partido debilitado por la salida de Caldera, y con la maquinaria controlada por Fernández poco entusiasmada con la candidatura de Álvarez Paz, el COPEI obtuvo malos resultados en la elección general.

Para cuando se realizaron las elecciones de 1998, el COPEI se había reducido considerablemente. El gobierno de Caldera se había negado a mejorar sus relaciones con el partido, y la alianza entre el COPEI y AD en el Congreso quizá confirma aún más la reputación de ambos partidos como antirreformistas. La organización del partido se vio debilitada por las numerosas defecciones al partido de Caldera, y la opinión pública había empezado a volverse en contra de AD y el COPEI, considerándolos “los partidos del

sistema", responsables de la calamitosa situación en que el país se encontraba. Con todo el sistema sometido al repudio público, y con el desafío populista del antiguo conspirador de golpes de Estado, Hugo Chávez, adquiriendo fuerza, el partido buscó fuera de sus filas y seleccionó a la popular alcalde de Chacao (una zona acomodada del oriente de Caracas) y anterior Señorita Universo, Irene Sáez, como su candidata presidencial. Como alcaldesa de Chacao, Sáez se había ganado una reputación de buen gobierno, liderazgo efectivo e independencia: era popular y bien conocida, y al principio su selección tuvo buena aceptación pública. Pero cuando dejó de ser independiente y pasó a convertirse en la candidata del COPEI, asociándose así con uno de los elementos centrales del desacreditado sistema de partidos, su popularidad cayó a plomo. La situación fue tan desastrosa que en los días finales de la campaña de 1998, frente a un electorado dividido entre Hugo Chávez (que encabezaba al insurgente Polo Patriótico) y el Proyecto Venezuela, la alianza de centro-derecha dirigida por Enrique Salas Romero, gobernador del estado de Carabobo, tanto AD como el COPEI abandonaron a sus propios nominados y apoyaron a Salas Romero en un vano intento desesperado por evitar el triunfo de Chávez. Por supuesto, Chávez ganó por un gran margen y sus principales prioridades fueron la adopción de una nueva constitución y la realización de nuevas elecciones en 2000. En estas elecciones, lo poco que quedaba del COPEI optó por no presentar un candidato presidencial propio o apoyar al candidato de otro partido.

La selección de candidatos que no pertenecían al partido y la posterior decisión de abstenerse de presentar a un candidato propio son elocuente testimonio de la decadencia del partido. A finales de los años noventa, esta organización otrora poderosa y efectiva carecía de procedimientos organizativos viables y de una nueva generación de candidatos potenciales. Los procedimientos no democráticos de selección del candidato presidencial contribuyeron a que no hubiera un relevo de las generaciones. Más específicamente, la insistencia de Caldera en controlar al partido y manipular los procedimientos institucionales para conseguir ese control tuvo como consecuencia que una vez que él salió del partido se conservara muy poca de la estructura institucional de éste. Sin duda, el partido también se habría visto afectado por el desprestigio del sistema de Punto Fijo, independientemente de la conducta de Caldera, pero su incapacidad para consolidar la autonomía de las estructuras del partido y su decisión de lanzar una candidatura independiente en una coyuntura crítica debilitó la capacidad del partido para sobrevivir en un momento crítico de su historia.

El proceso relativamente cerrado para seleccionar los candidatos al Congreso también contribuyó indirectamente a la forma en que los partidos actuaban al llegar al poder y al debilitamiento del sistema. Los procedimientos dominados por la élite tuvieron como resultado altos niveles de disciplina al partido y una conducta conformista por parte de los legisladores. Aunque el dominio de Caldera significó que el COPEI estuviera más centralizado que AD cuando se trataba de seleccionar al candidato presidencial, en el caso de los candidatos para la legislatura los democratacristianos usaban un sistema más participativo que el de AD. Durante los años setenta, los delegados a las convenciones regionales preparaban planillas de candidatos, y éstas eran a su vez modificadas

libremente por los delegados a la convención nacional. A partir de 1982 los estatutos del partido especificaban que dos terceras partes de las planillas de candidatos al Congreso del partido debían ser elegidas por los líderes locales y regionales, y una tercera parte por los líderes nacionales. Ya en 1988 los estatutos dispusieron que el orden de los candidatos en la planilla asegurara que los candidatos de la tercera parte seleccionada por los líderes nacionales se distribuyeran regularmente en toda la planilla: un candidato elegido por los líderes nacionales, por cada dos regionales y locales. Estas reglas siguieron vigentes para la parte de la planilla de listas cerradas de representación proporcional, después de adoptarse el nuevo sistema de miembros mixtos en 1993. En las elecciones de ese año, el partido empleó primarias abiertas a los miembros del partido de cada distrito para seleccionar a un candidato único por distrito del partido, y en 1988 empleó primarias abiertas a todos los electores.

Aunque estos procedimientos incorporan más formalmente la participación que los seguidos para seleccionar al candidato presidencial, aún eran lo suficientemente centralizados para asegurar la disciplina al partido en la delegación a la legislatura nacional. Las votaciones en la legislatura se llevaban a cabo por lo común levantando las manos, y se suponía que la disciplina del partido era universal. Sin embargo, después de anunciada la decisión sobre una propuesta de ley, los legisladores podían intervenir en los debates para explicar la razón de cómo habían votado. Éste era el único mecanismo disponible para que los legisladores violaran la disciplina del partido. Si habían intervenido previamente en el debate, podían comentar su decisión de abstenerse o de votar en contra de sus propios compañeros de partido. Si no habían intervenido en el debate, la única opción que tenían era oponerse al partido. De los 319 legisladores de AD, el COPEI y el MAS que hubo en la legislatura, de 1989 a 1998, sólo 12 rompieron la disciplina del partido. Cuatro de los desertores fueron copeyanos. AD tuvo el menor número de miembros que rompieron la disciplina, lo que es particularmente notable, pues eran el partido más numeroso. Aún más desproporcionadamente, el MAS tuvo el mayor número de escaños que rompieron la disciplina del partido, a pesar de su número relativamente pequeño. Esta pauta se correlaciona con la centralización del proceso de selección del candidato. Donde las élites nacionales del partido tenían el mayor papel en la selección del candidato, la disciplina era mayor. A pesar de su ubicación centrista en términos de disciplina relativa, no debemos perder de vista el hecho de que las delegaciones legislativas de los copeyanos eran muy disciplinadas.

En la siguiente sección, sobre el COPEI en el poder, expondremos con detalle la importancia de la disciplina del partido para gobernar, pero aquí la mencionamos para analizar su significado para la democracia interna del partido y para la naturaleza de la representación. El papel desempeñado por las élites del partido en el proceso de elección de los candidatos legislativos le bastó para garantizar una uniformidad casi férrea en la legislatura. En teoría, esto le hizo posible al partido hacer campaña y actuar con base en valores ideológicos compartidos, pero este resultado potencial perdió su significado a medida que la distancia ideológica entre AD y el COPEI disminuía continuamente con el transcurso del tiempo. Como resultado, la disciplina no condujo a posiciones

programáticas únicas, sino que prohibió el servicio a los intereses de sus partidarios y una relación más individualizada con los votantes. El partido no les dio a los legisladores recursos para que pudieran viajar a sus distritos o para establecer oficinas en ellos. De hecho, los legisladores no tenían oficinas individuales dentro del Congreso o en el propio edificio de oficinas de la legislatura. Como resultado, los ciudadanos se sentían alejados de sus representantes electos, y ni siquiera la adopción de un sistema mixto de representación proporcional con distritos "nominales" cambió la conducta de los legisladores (Kulisheck y Crisp, 2000). Los candidatos elegidos en distritos de un solo representante se comportaban exactamente igual que sus correligionarios "sin cara", que provenían de lugares muy bajos en la lista del partido en una planilla cerrada. Estos procedimientos internos hicieron rígido al sistema y los partidos, el COPEI incluido, respondieron lentamente a las demandas de cambio (Crisp y Rey, 2000). Si se estudia el apoyo electoral del COPEI al correr del tiempo, se observará la forma en que el partido surgió como el principal partido de oposición en los años sesenta, pero falló espectacularmente al no responder a su decreciente popularidad en los noventa.

EVOLUCIÓN ELECTORAL EN EL TRANSCURSO DEL TIEMPO: EL ASCENSO DEL COPEI

La información del cuadro IX.1 nos permite dividir la trayectoria electoral del COPEI en tres etapas: en términos muy generales, su ascenso, su apogeo y su caída. La primera etapa tuvo lugar entre 1958 y 1972, cuando se consolidó gradualmente la situación del sistema de dos partidos y, sin competencia después de 1968, el COPEI se convirtió en la principal y única alternativa creíble a AD, logrando ganar la presidencia por primera vez en ese año. La segunda etapa va de 1973 a 1992, incluyendo las elecciones nacionales de 1973, 1978, 1983 y 1988 y las elecciones locales y regionales de 1979, 1984, 1989 y 1992. Durante este periodo, el COPEI llegó al punto máximo de su fortuna electoral: obtuvo sus votaciones presidenciales y parlamentarias más altas y en 1978 logró llegar a la presidencia por segunda y última vez. También en 1978, el COPEI derrotó a AD en la votación parlamentaria, por primera y única vez. Las cuatro elecciones nacionales de este periodo son también las cuatro en que el COPEI logró su mayor voto electoral y legislativo. Durante toda la era democrática, este periodo representa la única ocasión en que el voto del COPEI permaneció estable en torno al 30% del voto para la presidencia y la legislatura. También en este periodo el COPEI se convirtió en el partido dominante en los niveles local y regional, derrotando en dos ocasiones a AD. La primera victoria del COPEI sobre AD en las elecciones locales ocurrió en 1979, durante el comienzo del periodo de Luis Herrera. La segunda, más importante y muy sorprendente, ocurrió en 1992, en vísperas de la transición inicial del COPEI hacia la decadencia electoral. En ese año, el COPEI obtuvo 37% del voto para las gubernaturas y eligió a nueve gobernadores, mientras que AD logró sólo 31% del voto y siete gubernaturas (para el voto del COPEI en las gubernaturas véase el cuadro IX.2).

CUADRO IX.2. *Desempeño del COPEI en las elecciones para gobernador*

Año de la elección	*Votos (%)*	*Gobernadores*		*Número total de gobernadores electos*
		n	*%*	
1989	32	6	30	20
1992	37	9	41	22
1995	21	4	18	22
1998	15	5	22	23
2000	8	1	4	23

FUENTES: Para 1989: Consejo Supremo Electoral, *Elecciones 1989,* Caracas, Consejo Supremo Electoral, 1990. Para 1992: Consejo Supremo Electoral, Dirección General de Información Electoral, *Resultados de votación: elección de gobernadores y estudio estadístico de la reelección de gobernadores y alcaldes, elecciones 1992,* Consejo Supremo Electoral, 1993. Para 1995: Consejo Supremo Electoral, Dirección General de Estadísticas Electorales, *Resultados de las elecciones de 1995,* Consejo Supremo Electoral, 1996. Para 1998: Consejo Nacional Electoral, *Venezuela, 1998,* CD-ROM, 1999. Para 2000: Consejo Nacional Electoral-INDRA, *Elecciones 2000,* Caracas, Consejo Nacional Electoral, 2000.

El tercer periodo marca la pronunciada y rápida declinación electoral: empieza con la candidatura de Caldera y continúa hasta la actualidad. En la elección presidencial de 1993, que ganó Caldera, el candidato del partido, Oswaldo Álvarez Paz, recibió 22% del voto para la presidencia, terminando en tercer lugar, lo que no ocurría desde 1958. Éste fue el principio de una pronunciada y rápida caída en las fortunas electorales del COPEI. En las elecciones legislativas de 1998 el partido recibió 12% de los votos para la Cámara Baja y en las elecciones de 2000 se convirtió definitivamente en un partido menor, sin presentar candidato para la presidencia y ocupando el quinto lugar en el voto legislativo con sólo 5.1%. Gran parte del voto del COPEI para presidente en esa elección parece haberse dirigido a Francisco Arias Cárdenas, el ex compañero de armas de Chávez y segundo en el mando durante el fallido golpe de Estado de 1992. En el año 2000, alarmado por las posiciones más abiertamente izquierdistas de Chávez, Arias Cárdenas se separó de la coalición de gobierno para lanzar su propia candidatura a la presidencia. Varios candidatos del COPEI a gobernadores apoyaron explícita o implícitamente a Arias. Pero éste no se podía arriesgar a aceptar abiertamente el apoyo del partido en vista de la continuada e intensa hostilidad del electorado a “los partidos del sistema”, a los que se culpaba en general de todos los males pasados. Éste era y sigue siendo uno de los temas más importantes para el actual presidente, Hugo Chávez Frías. El derrumbe final llegó cuando en 2000 el COPEI no sólo se había convertido en una fuerza menor que se enfrentaba a graves dificultades para recuperarse, sino que además se tornó en un aliado que no era bien recibido. Incluso el único candidato del partido que logró ganar una gubernatura creó su propio movimiento, operando con la mayor independencia del COPEI que se le permitió.[13]

Durante la década de los sesenta poco era lo que nos pudiera hacer pensar que el COPEI se convertiría después en el principal contendiente de AD en lo que a la postre se

transformaría en un sistema bipartidista. La distribución bipolar de los votos, las posiciones políticas y el apoyo popular se presentaron por primera vez en las elecciones de 1973 y siguieron vigentes hasta que el partido se disgregó en medio de la “crisis” de principios de los noventa. Antes de que se presentara la división en dos partidos, AD era claramente el partido político dominante, como lo había sido desde los años cuarenta. La competencia se presentaba básicamente entre los otros partidos para convertirse en el principal opositor. Pero el COPEI tenía una significativa ventaja sobre los demás, con su sólida base de partidarios fundadores, conformada durante el periodo 1945-1948, cuando el partido era la voz institucional de la oposición conservadora. Como miembro del gobierno de coalición durante 1958-1963, el COPEI también aprovechó las considerables posibilidades de clientelismo y patrocinio que los cargos públicos proporcionaban. Luego, de 1963 a 1968, después de salir del gobierno y forjarse una imagen como oposición, la división de AD en 1968 le permitió a su candidato, Rafael Caldera, ganar la presidencia con una pluralidad en una contienda entre cuatro candidatos, sin superar por mucho a otros grupos de centro y de centro-derecha. Ocupar el gobierno mientras AD estaba en la oposición fue el factor decisivo. El COPEI se convirtió en un claro adversario y objeto de críticas para AD, lo que dio por resultado una situación de polarización política que dejó a los dos partidos como los auténticos contendientes por el poder durante 20 años.

Durante los años setenta y los ochenta se consolidó un sistema de dos partidos, y la división del poder y de los cargos entre AD y el COPEI dominó el escenario político. Quienes estaban descontentos con el gobierno en el poder buscaban una alternativa en el partido de oposición. El auge petrolero de los setenta también creó enormes posibilidades para las políticas populistas y las prebendas, lo que ayudó a consolidar el control del electorado por el COPEI y AD. Sin embargo, a finales de los setenta, los fracasos de la presidencia de Luis Herrera Campins (1978-1983) dañaron gravemente las perspectivas futuras del partido. Su presidencia marcó el final del auge petrolero y el principio de lo que resultó ser una prolongada y severa crisis económica. El COPEI perdió las dos elecciones siguientes ante los candidatos de AD. Empero, después de los dos intentos de golpe de Estado en 1992, y a pesar de que su secretario general estuvo del lado del desprestigiado gobierno de Pérez, el COPEI logró una de sus pocas victorias contra AD en las elecciones para gobernadores de ese año, y pareció posible que el partido sería la fuerza que canalizara y expresara el descontento popular en las futuras elecciones de 1993.

Sin embargo, esta apariencia de éxito debió mucho a la fuerte posición opositora que fue adoptada por el líder histórico del COPEI, Rafael Caldera. Como ya se dijo, Caldera se distanció de la línea oficial de su partido. Y aunque defendió la democracia, condenó al gobierno de Pérez en términos muy duros, empezando sólo un día después del intento de golpe de Estado el 4 de febrero de 1992. Para entonces, el control de las lealtades populares por los partidos y la identificación con los partidos ya se habían debilitado considerablemente. El mal desempeño del gobierno, la corrupción y la baja continua de la economía, aunados a nuevas instituciones que reforzaban el papel de personajes destacados (como las elecciones directas de gobernadores y alcaldes), habían debilitado

las bases de los partidos más importantes.

Cuando Caldera dejó al COPEI para fundar un nuevo partido (Convergencia) y lanzó su candidatura a la presidencia con el apoyo del MAS y un conjunto heterogéneo de pequeñas organizaciones izquierdistas, le asestó un terrible golpe al partido que había creado casi medio siglo antes. Aunque Caldera claramente contribuyó a la grave declinación del partido, esto no basta para explicar por qué los anteriores partidarios del COPEI no retornaron después de que terminó su periodo en la presidencia. Todo sugiere que en lugar de retornar al redil, prefirieron en cambio abstenerse de votar o apoyar otras opciones. Una explicación es que ya en 1992 la identificación con los partidos había sido tan gravemente erosionada por los factores antes señalados (fracasos del gobierno, declinación económica y corrupción), que recuperar a esos partidarios simplemente no era posible. Cuando Caldera dejó el partido muchos de sus partidarios ya estaban a punto de dejar de votar de acuerdo con la lealtad al partido y hacerlo más bien como respuesta a factores de corto plazo; por ejemplo, la evaluación del desempeño del gobierno, la respuesta a temas específicos, las personalidades de los candidatos y la idea de que probablemente un determinado candidato conduciría a un cambio radical.

Aunque estas consideraciones son igualmente válidas para ambos “partidos del sistema”, es importante observar que la declinación de AD después de 1993 fue mucho menos violenta, lo que le permitió al partido soportar la poderosa ofensiva de Chávez mejor que los democratacristianos. La explicación de esto parece ser la diferente profundidad de las relaciones organizativas de cada partido con los grupos y las organizaciones sociales. El COPEI y AD tienen relaciones y estructuras comparables con los movimientos laborales, profesionales, estudiantiles y vecinales, pero los nexos de AD han sido históricamente mucho más fuertes que los del COPEI. Por lo tanto, las lealtades al primero se han disuelto con mucha más lentitud que las del segundo, aunque parecen estarse encaminando a la misma dirección descendente.

EL COPEI EN EL PODER

En los dos periodos en que el COPEI estuvo en el poder, 1968-1973 y 1978-1983, el presidente democratacristiano no tuvo mayoría en la legislatura. En cada caso, AD era el mayor partido en ambas cámaras. Rafael Caldera ganó la elección en 1968 con una pluralidad de sólo 19% de los votos, y su partido controlaba sólo 28 y 31% de los escaños en la Cámara de Diputados y en el Senado, respectivamente, lo que convertía al COPEI en el segundo partido en importancia en una legislatura muy fragmentada. Herrera Campins recibió 45% del voto popular en 1978, y el COPEI obtuvo una proporción mucho mayor de la legislatura (42 y 48% de los escaños en la Cámara de Diputados y en el Senado, respectivamente), convirtiéndose nuevamente en el segundo partido en importancia, en esta ocasión en una legislatura mucho menos fragmentada. Ambos gobiernos tuvieron dificultades con el Congreso dominado por AD, pero la casi pluralidad que obtuvo Herrera Campins lo fortaleció considerablemente. En las dos

administraciones, la capacidad del COPEI para expresarse como una sola voz y mantener la disciplina desempeñó un papel clave en la determinación de la naturaleza de las relaciones entre los dos poderes.

En Venezuela, la gran mayoría de las leyes son iniciadas por el Poder Ejecutivo; el promedio nacional entre 1959 y 1995 fue de 84%. La experiencia de los gobiernos del COPEI no fue una excepción (Crisp, 2000). Caldera inició 81% de las leyes adoptadas durante su administración, y Herrera Campins inició 89% de las leyes adoptadas durante su periodo. Si somos un poco más específicos y nos concentramos en las "leyes ordinarias" (omitiendo por el momento las leyes orgánicas, las leyes relativas al crédito público y las leyes que aprueban acciones del Ejecutivo), surge una diferencia real. Caldera inició sólo 49% de las leyes ordinarias aprobadas durante su gobierno, mientras que Herrera Campins inició 76% (el promedio nacional era de 59%). Parte de la explicación de esta diferencia se encuentra en el hecho de que a pesar de sus resultados relativamente poco favorables y el bajo número de escaños en el Congreso que tenía el COPEI, Caldera decidió no formar un gobierno de coalición. Esto estaba en notorio contraste con la posición adoptada por sus dos predecesores de AD, Rómulo Betancourt y Raúl Leoni, cada uno de los cuales formó una gran coalición a pesar de su dominio electoral.

En el primer gobierno de Caldera, la falta de una coalición de mayoría hizo casi imposible la apertura del Congreso y la elección de los líderes de la cámara y de los presidentes de los comités. Sin un grupo formal de aliados, al nuevo presidente le fue más difícil durante todo su gobierno obtener la aprobación de las leyes propuestas. Después de una disputa particularmente grave, que él perdió, con respecto al nombramiento de jueces, Caldera se vio obligado a llegar a un acuerdo tácito con AD. Uno de los resultados de esta situación fue dar a los legisladores un papel mucho más importante para que propusieran iniciativas que se convirtieran en leyes. En comparación, Herrera Campins pudo conformar una coalición de gobierno donde su partido casi tenía la mayoría en la legislatura. Esto sólo fue posible porque la delegación del partido era muy disciplinada. Si los miembros del COPEI hubieran desertado, al gobierno le habría sido casi imposible lograr una mayoría.

La frecuencia con que los dos presidentes copeyanos emitieron decretos justificados por una suspensión o restricción de derechos económicos también refleja la posición más segura de Herrera. Los decretos presidenciales de este tipo pueden ser revocados por leyes posteriores, o restableciendo la garantía constitucional de la libertad económica. Por lo tanto, un presidente con minoría en la legislatura debe tener cuidado de no provocar el enojo de ésta abusando de sus prerrogativas en esta área. Los presidentes con mayoría, por otra parte, pueden emitir decretos casi con toda impunidad, y éste fue el caso de los dos presidentes de AD con mayorías legislativas. Carlos Andrés Pérez (en su primer periodo, 1973-1978) y Jaime Lusinchi (1983-1988) emitieron casi tantos decretos como los demás presidentes en conjunto. Caldera sólo emitió nueve de esos decretos, muy por debajo del promedio. Sus decretos se refirieron a tasas de interés, vivienda urbana, servicios para la industria de hidrocarburos e importación de fuegos artificiales, entre

otras cosas. Herrera, por su parte, emitió 27 decretos de esta clase, por encima del promedio, y concentró sus esfuerzos en los tipos de cambio. La frecuencia relativa con que usaron este poder es un indicador del estado de sus relaciones con el Congreso. Aparentemente, Herrera consideró menos probable que fuera revocada la autoridad de sus decretos.

Mantener una fuerte disciplina del partido fue también indispensable para evitar la caída de los miembros del gabinete. La Constitución de 1961 establecía que los votos de censura aprobados por una mayoría de dos terceras partes resultarían en la renuncia del ministro, mientras que los votos aprobados por una mayoría menor de las dos terceras partes sólo tendrían como resultado una declaración pública del descontento de la legislatura con el miembro del gabinete. Durante ambos gobiernos, el COPEI controló menos de la mayoría de los escaños y todo voto de censura fue aprobado (uno bajo Caldera y siete bajo Herrera Campins). Pero en cada caso el partido apoyó lealmente a su Ejecutivo y pudo impedir que la oposición reuniera una mayoría de dos terceras partes para cesar al ministro en cuestión.

Ya hemos comentado la selección de candidatos. El proceso de selección de candidatos del COPEI permitía a las élites del partido mantener el control sobre sus delegaciones legislativas. Los diputados y senadores sabían que si no votaban siguiendo la línea del partido podían verse expulsados de éste, o por lo menos ya no se les volvería a seleccionar como candidatos. La disciplina permitía al partido hacer campaña con base en objetivos programáticos o convicciones ideológicas compartidas. También ayudaba a asegurar que los presidentes democratacristianos elegidos sin una minoría legislativa no fueran abrumados totalmente por legislaturas dominadas por la oposición. A la vez, la fuerte disciplina partidista prevenía que los legisladores (no sólo en el caso de los del COPEI) apoyaran propuestas destinadas a grupos electorales de zonas geográficas específicas (incluyendo los distritos *nominales* después de 1993) y hacía menos probable que prestaran servicios personales a sus electores. Esta forma muy disciplinada de representación a la larga acabó por desgastarse entre los ciudadanos venezolanos. La opinión pública se volvió contra el sistema de Punto Fijo y contra los "partidos del sistema", incluyendo al COPEI, después de los continuos obstáculos y resistencia de los funcionarios elegidos para los movimientos de reforma. La resistencia de los partidos fue efectiva a corto plazo para evitar el cambio acumulativo gracias a los altos niveles de disciplina. Pero, en retrospectiva, está claro que al no facilitar la reforma, llevaron al régimen democrático al borde del desplome, y a la postre se les impuso desde fuera una reforma drástica.

CONCLUSIÓN: LA CAÍDA DEL COPEI

Durante los años setenta y ochenta, cuando el sistema de dos partidos estaba en su apogeo, las personas descontentas con el gobierno buscaban alternativas, no en propuestas para remplazar el sistema, sino más bien apoyando al principal partido

opositor. Durante 20 años después de la victoria del COPEI en 1968, los dos partidos más importantes recibieron una proporción abrumadora de los votos populares y de los escaños legislativos, a la vez que compartían la presidencia (dos periodos para el COPEI y tres para AD). El auge petrolero de los años setenta ofreció amplias posibilidades para el clientelismo y las políticas populistas, que les ayudaron a consolidar su control del poder y del apoyo popular. Sin embargo, al presentarse la crisis económica después del auge de principios de los setenta, y como consecuencia del incompetente y detestado régimen de Luis Herrera Campins, la mayoría de los estudiosos de este tema convienen en que las instituciones del país sufrieron graves perjuicios. En el caso específico del COPEI, el partido quedó tan dañado por el gobierno de Herrera Campins que sus posibilidades de derrotar a AD en las futuras elecciones presidenciales fueron, en el mejor de los casos, insignificantes. No obstante, después de la prolongada crisis de principios de los noventa, que incluyó disturbios populares, dos golpes de Estado fracasados, y el proceso judicial de un presidente en funciones, el COPEI logró una notable recuperación durante las elecciones para gobernadores de 1992. En estas elecciones el partido logró una de sus pocas victorias sobre AD y pareció estar en posición de expresar y canalizar el descontento popular en la siguiente votación presidencial de 1993. No obstante, esto se debió ante todo a la decidida posición opositora de su líder histórico Rafael Caldera, quien, aunque defendió la democracia, prontamente condenó al gobierno de Pérez un día después del intento del golpe de Estado de febrero de 1992, distanciándose de la línea oficial del partido. El control de los partidos y la identificación con ellos era ya mucho más débil que durante los cincuenta. El mal desempeño de los gobiernos, la corrupción y la continua recesión económica, junto con las nuevas instituciones que reforzaban el papel de las personalidades políticas, así como las elecciones directas de gobernadores y alcaldes, habían debilitado las lealtades partidistas. Cuando Caldera dejó el COPEI para formar un nuevo partido (Convergencia) y lanzarse como candidato a la presidencia con el apoyo del MAS y un heterogéneo grupo de organizaciones menores, le quitó su impulso al COPEI. Esto marcó el inicio de su descenso.

La declinación del COPEI después de 1992 puede atribuirse en parte a la división causada por la separación de Caldera. Pero aunque este factor es sin duda importante, por sí solo no basta para explicar por qué los antiguos votantes del partido no retornaron después de su periodo en la presidencia, sino que claramente decidieron abstenerse de votar o apoyaron otras opciones. Una posible explicación es que ya en 1992 la identificación con el partido se había erosionado en forma importante por el fracaso del gobierno de Herrera Campins, el empeoramiento de la situación económica que siguió a ese gobierno y la disminuida legitimidad de los partidos en general debido a su imagen de organizaciones clientelistas y corruptas. Por lo tanto, cuando Caldera dejó el partido muchos de sus partidarios ya estaban decidiendo que no votarían basados en la lealtad al partido, sino más bien teniendo en cuenta factores a corto plazo como la evaluación del desempeño del gobierno, asuntos específicos, personalidades de estos candidatos y la probabilidad de que los candidatos pudieran encabezar el movimiento hacia un cambio radical. No obstante, esto también puede decirse de AD, cuya declinación después de

1993 ha sido menos violenta y parece haber soportado la ofensiva de Chávez mejor que los democratacristianos. La explicación de esto parece encontrarse en la diferente profundidad de las relaciones con los grupos y las organizaciones sociales. Ambos partidos tienen relaciones con los movimientos laborales, de profesionales, estudiantiles y vecinales, pero los lazos de AD han sido históricamente mucho más fuertes que los del COPEI, por lo que las lealtades con la primera se han debilitado más lentamente que las del segundo, aunque parecen marchar en la misma dirección.

REFERENCIAS

Álvarez, Ángel, 2000, "COPEI y el social cristianismo venezolano", inédito.

Baloyra, Enrique, y John Martz, 1979, *Political Attitudes in Venezuela: Societal Cleavages and Political Opinion*, Austin, University of Texas Press.

Carnevali, Dinorah, 1992, *Araguatos, avanzados y astronautas: COPEI: conflicto ideológico y crisis política en los años sesenta*, Caracas, Panapo.

Combellas, Ricardo, 1985, *COPEI: ideología y liderazgo*, Caracas, Ariel.

Coppedge, Michael, 1994, *Strong Parties and Lame Ducks: Presidential Patriarchy and Factionalism in Venezuela*, Stanford, Stanford University Press.

———, 2000, "Venezuelan Parties and the Representation of Elite Interests", en Kevin Middlebrook (ed.), *Conservative Parties, the Right and Democracy in Latin America*, Baltimore, Johns Hopkins University Press, pp. 110-136.

Crisp, Brian F., 2000, *Democratic Institutional Design: The Powers and Incentives of Venezuelan Politicians and Interests Groups*, Stanford, Stanford University Press.

———, y Juan Carlos Rey, 2000, "The Causes of Electoral Reform in Venezuela", en Matthew Soberg Shugart y Martin P. Wattenberg (eds.), *Mixed-Member Electoral Systems: The Best of Both Worlds?*, Nueva York, Oxford University Press, pp. 173-193.

Dix, Robert, 1989, "Cleavage Structures and Party Systems in Latin America", *Comparative Politics*, 22, octubre, pp. 23-37.

Herman, Donald, 1989, *Christian Democracy in Venezuela*, Chapel Hill, University of North Carolina Press.

Kulisheck, Michael, y Brian F. Crisp, 2000, "The Consequences of Electoral Reform in Venezuela", en Matthew Soberg Shugart y Martin P. Wattenberg (eds.), *Mixed-Member Electoral Systems: The Best of Both Worlds?*, Nueva York, Oxford University Press, pp. 404-431.

Laakso, Markku, y Rein Taagepera, 1979, "Effective Number of Parties: A Measure with Application to West Europe", *Comparative Political Studies*, 12, núm. 1, pp. 3-27.

Levine, Daniel, 1973, *Conflict and Political Change in Venezuela*, Princeton, Princeton University Press.

———, 1998, "Beyond the Exhaustion of the Model: Survival and Transformation of Democracy in Venezuela", en Damarys Canache y Michael Kulisheck (eds.), *Reinventing Legitimacy: Democracy and Political Change in Venezuela*, Westport, Conn., Greenwood Press, pp. 187-214.

Levine, Daniel, y Miriam Kornblith, 1995, "Venezuela: The Life and Times of the Party System", en Scott Mainwaring y Timothy Scully (eds.), *Building Democratic Institutions: Parties and Party Systems in Latin America*, Stanford, Stanford University Press, pp. 37-71.

Mainwaring, Scott P., 1999, *Rethinking Party Systems in the Third Wave of Democratization: The Case of Brazil*, Stanford, Stanford University Press.

———, y Timothy Scully, 1995, *Building Democratic Institutions: Party Systems in Latin America*, Stanford, Stanford University Press.

Martz, John D., 1999/2000, "Political Parties and Candidate Selection in Venezuela and Colombia", *Political Science Quarterly*, 114, núm. 4, pp. 639-659.

Middlebrook, Kevin, 2000, "Introduction: Conservative Parties, Elite Representation and Democracy in Latin America", en Kevin Middlebrook (ed.), *Conservative Parties, the Right and Democracy in Latin America*, Baltimore, Johns Hopkins University Press, pp. 1-50.

Molina, José, 2001, "Comportamiento electoral, 1998-2000. Cambio y continuidad", en José Vicente Carrasquero, Thaís Maingón y Friedrich Welsch (eds.), *Venezuela en transición*, Caracas, CDB Publicaciones, pp. 188-213.

———, y Carmen Pérez, 1994, "Venezuela: ¿Un nuevo sistema de partidos? Las elecciones de 1993", *Cuestiones Políticas*, 13, pp. 63-90.

———, 1998, "Evolution of the Party System in Venezuela", *Journal of Interamerican Studies and World Affairs*, 40, núm. 2, pp. 1-26.

Myers, David, 1998, "Venezuela's Political Party Systems: Defining Events, Reactions and the Diluting of Structural Cleavages", *Party Politics*, 4, núm. 4, pp. 495-521.

Pedersen, Mogens, 1983, "Changing Patterns of Electoral Volatility in European Party Systems, 1948-1977: Explorations and Explanations", en H. Daalder y P. Mair (eds.), *Western European Party Systems: Continuity and Change*, Thousand Oaks, California, Sage, pp. 29-66.

Pitkin, Hanna Fenichel, 1967, *The Concept of Representation*, Berkeley, University of California Press.

Rey Juan Carlos, 1991, "El papel de los partidos políticos en la instauración y mantenimiento de la democracia en Venezuela", en G. Murillo y M. Villaveces (eds.), *Conferencia Interamericana sobre Sistemas Electorales*, San José, Costa Rica, International Foundation for Electoral Systems (IFES), pp. 79-114.

Sartori, Giovanni, 1976, *Parties and Party Systems*, Cambridge, Cambridge University Press.

* En español en el original.

[1] Sobre la base de la proporción de votos que obtuvieron los partidos en las elecciones legislativas durante el periodo, el número efectivo de partidos *N* (Laakso y Taagepera, 1979) para cada elección fue el siguiente: 3.1 en 1958, 4.8 en 1963 y 6.1 en 1968.

[2] El número efectivo de partidos, sobre la base de la proporción obtenida por los partidos en la votación, fue el siguiente: 3.4 en 1973, 3.1 en 1978, 3.0 en 1983 y 3.4 en 1988.

[3] Sobre la base de la proporción en la votación para la Cámara Baja en 1993 y 1998, y para la Asamblea Nacional en 2000, el número efectivo de partidos para cada elección fue el siguiente: 5.6 en 1993, 7.6 en 1998 y 4.3 en 2000.

[4] Estas cifras representan los votos para la Cámara Baja del Congreso en 1993 y 1998, y para la Asamblea Nacional en 2000.

[5] Encuesta nacional coordinada por Enrique Baloyra y John Martz (1979), en noviembre de 1973 (N = 1 521).

[6] Una encuesta nacional (Batoba 83) realizada en noviembre de 1993 bajo la dirección de Enrique Baloyra y Arístides Torres (N = 1789). Agradecemos al Banco de Datos Latinoamericano de la Universidad Simón Bolívar, Caracas, Venezuela, por permitirnos el acceso a esta información.

[7] Encuesta nacional, Redpol 98, dirigida por la Red Universitaria de Estudios Políticos, Venezuela, realizada en noviembre de 1998 (N = 1500).

[8] La volatilidad se calcula sumando primero las diferencias en la participación que cada partido recibe en la votación entre una elección y la previa, y luego se divide el resultado entre dos.

[9] Otra forma de observar la congruencia entre estos dos tipos de votos es determinar su nivel de covariación. El coeficiente de correlación de Pearson *(r)* del voto presidencial y del voto legislativo del COPEI para el periodo 1958-1993 es de 0.97, lo que indica una correlación extremadamente alta.

[10] Irene Sáez, que había sido Señorita Universo y era alcalde reelecta de Chacao (un municipio de la zona más acaudalada de Caracas), era la candidata que ocupaba el primer lugar en las preferencias para las elecciones presidenciales de 1998, según las encuestas de opinión realizadas en 1997 y a principios de 1998. Por esa razón, en la convención nacional del partido el COPEI la eligió como candidata para presidente. Sin embargo, en noviembre de 1998 se encontraba ya en un distante tercer lugar en las encuestas. El COPEI le pidió que renunciara a la nominación para que el partido estuviera en libertad de nominar a Enrique Salas Romero, independiente de centro-derecha que en ese momento parecía ser el único candidato con posibilidades de derrotar a Chávez en la elección presidencial de diciembre.

[11] Véase Levine, 1998.

[12] Esta descripción del proceso de selección del candidato presidencial se basa en forma importante en el trabajo del fallecido John D. Martz. Queremos reconocer su contribución a nuestra comprensión de la política venezolana y su amistad como colega.

[13] Enrique Mendoza, el candidato del COPEI que logró ganar la gubernatura del estado central de Miranda, que abarca parte de Caracas, estableció su propio movimiento electoral, "Electores de Miranda", para evitar cualquier consecuencia derivada de la caída de su partido.

X. LOS LÍMITES DEL REFORMISMO: EL ASCENSO Y LA CAÍDA DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA EN EL SALVADOR Y GUATEMALA

PHILIP J. WILLIAMS
y GUILLERMINA SERI

DESPUÉS de la década de 1930, en toda Latinoamérica aparecieron movimientos políticos inspirados en el cristianismo (Lynch, 1993, p. 47). En diferentes países latinoamericanos grupos de estudiantes y profesores universitarios de clase media crearon grupos de estudio inspirados por el pensamiento social católico. Muchos partidos democratacristianos en Latinoamérica remontan sus orígenes a esos grupos. Las encíclicas papales *Rerum Novarum*,[1] *Quadragesimo Anno, Mater et Magistra* y *Pacem in Terris*, así como el pensamiento de intelectuales como Gabriel Marcel, y especialmente de Jacques Maritain, inspiraron esos primeros grupos. Al igual que en todo el mundo, los democratacristianos se presentaron a sí mismos como una "tercera vía" política alternativa, ubicada entre el comunismo y el liberalismo. Se consideraba que la armonía entre las clases, a diferencia de la lucha de clases, era la única forma viable de alcanzar una auténtica justicia social.[2] Inspirados por el pensamiento neotomista, los democratacristianos hicieron hincapié en la necesidad de reforzar las estructuras sociales que mediaban entre los individuos y el Estado. No obstante, en la práctica los democratacristianos apoyaban la intervención del Estado en el campo socioeconómico para llevar a cabo reformas que favorecieran a las clases más débiles. La utopía democratacristiana consistía en la constitución pacífica de una sociedad sin clases, en la que "todos serían burgueses en vez de ser todos proletarios" (Lynch, 1991, p. 75). Esa ambigüedad ideológica generó críticas por parte de los conservadores, que acusaron a los democratacristianos de ser "lobos comunistas disfrazados de ovejas cristianas" (Lynch, 1991, p. 78). Su posición centrista no era tan fácil de sostener en Latinoamérica como lo fue en Europa, en vista de las grandes desigualdades en la distribución de la tierra y de la riqueza. Además, dentro del movimiento democratacristiano, algunos grupos interpretaron el pensamiento social cristiano como una respuesta activa contra la injusticia social, en tanto que otros lo consideraban una forma de contrarrestar la intranquilidad social y la difusión del comunismo.

El movimiento democratacristiano intentó proyectar su influencia política e ideológica en todo el mundo por medio de la Internacional Demócrata Cristiana (IDC).[3] El instrumento regional para apoyar su expansión en Latinoamérica fue la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA), creada en 1947 en Uruguay.[4] Se establecieron formalmente partidos políticos democratacristianos en la región después de los últimos años de la década de 1940. Desde entonces, su desempeño electoral ha variado considerablemente. Aunque los democratacristianos hicieron progresos continuos en

Europa occidental, en Latinoamérica su trayectoria resultaría mucho menos predecible.[5] Después del triunfo electoral de Eduardo Frei en Chile y de Rafael Caldera cuatro años más tarde en Venezuela, los partidos democratacristianos parecieron convertirse en una prometedora fuerza política nueva. No obstante, los únicos países latinoamericanos en los que la democracia cristiana se convirtió en un participante de consideración en la política fueron Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México y Venezuela. Aun así, el papel que desempeñó en cada uno de estos países difirió considerablemente. En tanto que en Chile el Partido Demócrata Cristiano se estableció como una de las principales fuerzas políticas, con una fuerte base de apoyo hasta hoy día, en Centroamérica la democracia cristiana siguió una trayectoria diferente.

Antes de los años ochenta había partidos democratacristianos activos en Honduras, Nicaragua y Panamá; sin embargo, nunca lograron un apoyo electoral considerable, como ocurrió en El Salvador y Guatemala. El único otro partido democratacristiano de Centroamérica que se convirtió en una importante fuerza electoral fue el Partido de Unidad Social Cristiana (PUSC) en Costa Rica. Su líder, Rafael Calderón Fournier, ganó la presidencia en 1990. No obstante, el partido es de origen reciente y no comparte los orígenes ideológicos o la trayectoria histórica de los partidos democratacristianos de otras partes de la región. El PUSC fue fundado en 1983 por una alianza de partidos derechistas (entre ellos el pequeño Partido Demócrata Cristiano) que se oponían al dominio electoral del Partido de Liberación Nacional (PLN).

Durante las décadas de 1960 y 1970, los democratacristianos de El Salvador y Guatemala obtuvieron apoyo popular en oposición a los gobiernos militares. A pesar de los fraudes electorales e incluso de la anulación de elecciones, tanto el Partido Demócrata Cristiano (PDC) de El Salvador como el de Guatemala lograron elegir presidentes a sus líderes a mediados de los años ochenta. Para sus patrocinadores estadunidenses, los gobiernos democratacristianos en El Salvador y Guatemala representaban alternativas prometedoras ante la creciente espiral de la violencia política, de la que se culpaba a la extrema derecha y a la extrema izquierda. No obstante, a pesar de sus impresionantes éxitos electorales en esos años, el cambio total de sus fortunas electorales durante la década de 1990 hizo surgir serias dudas sobre la perdurabilidad de los partidos democratacristianos en la región. De hecho, hoy en día es posible argumentar que la democracia cristiana en El Salvador y Guatemala ya no es una fuerza significativa en la política nacional.

¿Cómo se puede explicar la casi desaparición de la democracia cristiana en El Salvador y Guatemala? Edward Lynch, prominente estudioso de la democracia cristiana en Latinoamérica, atribuye la caída de los partidos democratacristianos en la región a que traicionaron el pensamiento social cristiano. Según Lynch (1993), el pensamiento social católico, aunque crítico del capitalismo irrestricto, en sus bases fundamentales es esencialmente antiestatista. No obstante, cuando los partidos democratacristianos llegaron al gobierno adoptaron políticas populistas estatistas para mantenerse en el poder. Sin embargo, a medida que los electores latinoamericanos empezaban a preocuparse cada vez más por la creciente intervención del Estado durante los años ochenta, estas políticas

se convirtieron en una rémora electoral para los partidos democratacristianos. Sólo en los países en que los democratacristianos redescubrieron el antiestatismo del pensamiento social católico (esto es, donde favorecieron políticas económicas neoliberales) mejoraron sus fortunas electorales.

Rechazamos la explicación de Lynch, por varias razones. Primero, el pensamiento social católico no es una ideología coherente comprehensiva, sino que más bien se presta a interpretaciones y corrientes contradictorias. De hecho, los gobiernos democratacristianos en El Salvador y Guatemala se caracterizaron por la ambigüedad ideológica y por políticas contradictorias, a diferencia de su consistente agenda centralizadora. Segundo, la forma en que se ocupa Lynch de los partidos democratacristianos en Centroamérica descuida los aspectos específicos del desarrollo político de la región que conformaron la trayectoria histórica de los partidos. Finalmente, Lynch omite el impacto de la guerra civil en cada país y el importante papel desempeñado por actores internacionales durante los años ochenta.

A diferencia de los casos de transición democrática sudamericanos, en los casos de Guatemala y El Salvador no se trataba de una *re*-democratización. Antes de la década de 1980 los dos países tuvieron poca experiencia de desarrollo democrático (con excepción del interludio 1944-1954 en Guatemala). Regímenes políticos autoritarios fundamentados en un modelo agroexportador represivo constituían poderosos obstáculos estructurales para el establecimiento de democracias estables (Williams, 1994, p. 170). Además, las élites tradicionales apoyaban a las dictaduras militares, el fraude electoral y la represión, a cambio de políticas económicas que los favorecieran. En un marco político en que el Estado y las fuerzas paramilitares perseguían a la oposición, y donde la ciudadanía no tenía acceso al poder porque las elecciones eran controladas o fraudulentas, algunos ciudadanos empezaron a movilizarse políticamente durantes los años sesenta y setenta. Sin embargo, el surgimiento de movimientos guerrilleros comprometidos con la lucha armada, en combinación con la represión brutal que llevaron a cabo los militares y las organizaciones paramilitares, contribuyeron a un ciclo vicioso de violencia en ambos países.

En las sociedades desgarradas por la violencia y la polarización política, los partidos democratacristianos están ubicados estratégicamente para obtener aceptación nacional e internacional como alternativa centrista. No obstante, este centro político es muy limitado y está sujeto a fuerzas centrífugas. En El Salvador y Guatemala las guerras complicaron considerablemente los esfuerzos de los gobiernos democratacristianos para iniciar procesos de liberalización política, pues enfrentaban exigencias múltiples y contradictorias (de los militares, campesinos, movimientos izquierdistas, élites económicas, líderes religiosos y los Estados Unidos). De especial importancia fue la continuación del papel político de los militares y su negativa a subordinarse al control de los civiles (Jonas, 1991; Williams y Walter, 1997). La preferencia de los gobiernos de Reagan por las soluciones militares en ambos países sólo reforzó estas tendencias. Aunque consideraba a los democratacristianos como un instrumento electoral para crear una alternativa reformista moderada en los dos países, la ayuda económica y militar de los Estados Unidos

contribuyó a reforzar el poder de los militares y de la derecha en los dos países.

Por lo tanto, aunque convenimos en la importancia de no tratar a los partidos como "simples variables dependientes, víctimas impotentes de sus medios económicos o demográficos, sino también como variables independientes que conforman activamente sus propios destinos" (Berman, 1997, p. 102), creemos que las trayectorias políticas de los partidos democratacristianos fueron determinadas por fuerzas internas y externas específicas al contexto centroamericano. A diferencia de muchos otros casos de los cuales se trata en este libro, los partidos en El Salvador y Guatemala no fueron actores políticos significativos antes de los años ochenta. Además, el ascenso de los partidos democratacristianos a la prominencia en la década de 1980 fue más aparente que real, consecuencia de una combinación peculiar de circunstancias políticas del momento. Así, aunque las tradiciones ideológicas, el liderazgo y la política interna de los partidos fueron importantes en la conformación de sus trayectorias políticas, prestamos atención especial a la naturaleza del sistema político en cada país, al contexto de la guerra civil y a la alianza entre los líderes democratacristianos y los actores internos e internacionales.

CONCEPTOS POLÍTICOS Y REALIDADES POLÍTICAS

La ciencia política se enfrenta al doble reto de construir teorías generales que a la vez sean útiles para explicar una diversidad de casos históricos. Éste es un objetivo complejo, y el investigador se ve amenazado por los riesgos de ajustar forzosamente el mundo empírico para que encaje dentro de las teorías o de verse obligado a la extensa descripción de innumerables casos sin ser capaz de identificar las tendencias generales que se encuentran detrás de los hechos. La literatura teórica sobre los partidos políticos y los sistemas de partidos no se libra de este problema. El propio concepto de partido político tomado de sociedades con muy largas tradiciones democráticas puede parecer problemático cuando se le emplea en contextos diferentes. Esta tradición teórica sin duda puede ser provechosa, pero también implica el riesgo de adoptar supuestos que no sean adecuados para los casos particulares que se estén considerando. Así como pautas regulares identificadas al estudiar las viejas democracias de Europa y de América del Norte no pueden aplicarse fácilmente a Latinoamérica, los marcos conceptuales que resultan del estudio de ciertos casos sudamericanos no pueden transferirse fácilmente a sociedades centroamericanas.

Con esta advertencia en mente, la mayoría de los estudiosos de los partidos políticos y de los sistemas de partidos en Latinoamérica asocian a los partidos con la competencia electoral, y a los grupos que no participan en las elecciones por lo general no se les considera partidos políticos reales (McDonald y Ruhl, 1989; Mainwaring y Scully, 1995).[6] No obstante, en casos como El Salvador y Guatemala el concepto mismo de partido es problemático y hace que no se examinen aspectos políticos fundamentales. Antes de los años ochenta ambos países estaban sujetos a "regímenes de excepción" (Loveman, 1999) en los que las reglas de la guerra remplazaban a las reglas de la ley. Los

derechos y las libertades civiles estaban suspendidos o se les ignoraba, y los "enemigos" del régimen eran objetivos legítimos de la "aniquilación", todo en nombre de la "protección de la patria". Bajo estos regímenes de excepción había dos niveles de competencia política: la formal y la real (Córdova Macías, 1992). El nivel formal de competencia consistía en un escenario electoral muy restringido que a veces incluía partidos de oposición centrista y grupos disidentes de la derecha, pero que siempre excluía la participación de la izquierda. Sólo a principios de los años ochenta, cuando los gobiernos militares decidieron transferir formalmente el poder a líderes civiles, lograron las élites económicas crear partidos políticos capaces de competir en las elecciones. Antes de esos años, los partidos creados por los militares dominaron el proceso electoral por medio del fraude y la intimidación, en tanto que un puñado de partidos de oposición participaba en la farsa electoral. En vista de que la opción electoral estaba efectivamente obstruida, los contendientes políticos derechistas e izquierdistas se veían obligados a explorar otros caminos, como los de apoyar a elementos militares disidentes o lanzarse a la lucha armada. Aunque esas estrategias excluían a estos opositores de la participación como partidos en el escenario electoral, fueron no obstante protagonistas importantes en la lucha real por el poder en esos países.[7]

Otro tema relacionado es la existencia de un *sistema de partidos*, al que Mainwaring y Scully (1995, p. 4) definen como "un conjunto de interacciones que se ajustan a ciertas pautas en la competencia entre partidos" con grados variables de institucionalización. Aunque identifican las diferencias en la fuerza institucional de los partidos, algunos estudiosos tienden a suponer la existencia de sistemas de partidos en toda Centroamérica (McDonald y Ruhl, 1989; Goodman, 1992). McDonald y Ruhl parten de este supuesto y proceden a discutir las tipologías de los sistemas de partidos en la región. Goodman (1992, p. 6) también supone la existencia de sistemas de partidos en Centroamérica, aunque su análisis destaca sus "graves imperfecciones, muchas de las cuales son incompatibles con conceptos rigurosos de la democracia", así como su "fragmentación y polarización".

Desde una perspectiva diferente, pero quizás compatible, Michael Coppedge (1998) hace notar que la existencia de una "colección" de partidos es sólo un requisito de un sistema de partidos. En consecuencia, "no todas las democracias latinoamericanas tienen sistemas de partidos; algunas simplemente tienen partidos poco institucionalizados con una base de apoyo tenue y cambiante" (p. 173). Éste es sin duda el caso en El Salvador y Guatemala antes de los años noventa. Desde la década de 1930, en ambos países los militares y las élites económicas dominaron el sistema político, mutilando el espacio disponible para que los partidos políticos organizaran y desarrollaran su apoyo electoral. En El Salvador hubo periodos de reformas políticas limitadas, incluyendo elecciones semicompetitivas, pero éstas se limitaron a las zonas urbanas y nunca significaron una representación efectiva para los grupos de oposición. En Guatemala, el periodo más significativo de reforma sólo duró de 1944 a 1954, después del cual los grupos de oposición se enfrentaron a una severa represión. Dadas estas circunstancias, los partidos que existían en cada país eran actores poco institucionalizados y relativamente

insignificantes en el proceso político. Por lo tanto, estas “colecciones” de partidos difícilmente podían considerarse un *sistema de partidos*.[8]

En resumen, las nociones mismas de partido político y de sistemas de partidos que se derivan de los estudios de democracias estables y desarrolladas parecen inadecuadas para entender la política de Centroamérica durante el periodo que se está considerando. Ésta es la razón de que quienes estudian a Centroamérica necesiten discutir lo que abarcan los conceptos de la “ciencia normal”.[9] Hasta ahora, muchos politólogos han hecho mal su trabajo forzando los casos históricos para que se ajusten a las teorías existentes, en vez de adoptar un enfoque de estudio de casos bien fundamentado teóricamente *desde el cual* se pueda llevar a cabo un análisis comparativo. Teniendo esto en cuenta, pasamos ahora al estudio detallado de los casos salvadoreño y guatemalteco, que podría arrojar alguna luz sobre el problema general de la viabilidad de la democracia cristiana en el mundo.

EL CASO SALVADOREÑO

De acuerdo con Enrique Baloyra (1982), uno de los principales obstáculos para la formación de partidos fuertes y de un sistema de partidos institucionalizado en El Salvador fue la negativa de los militares y de las élites terratenientes a someterse a la incertidumbre de las elecciones competitivas. En cambio, el régimen militar construyó un sistema de dominación política que ocasionalmente permitía elecciones semicompetitivas cuyos resultados nunca estaban en duda. Cuando se veían amenazados por la posibilidad de una victoria de la oposición (como en 1972 y 1977), los militares se apresuraban a recurrir al fraude. En consecuencia, los partidos que surgieron se parecían más a los “instrumentos electorales de los empresarios políticos descritos por Schumpeter, que a conductos fundamentales de la vida política” (Mainwaring y Scully, 1995, p. 3).

El surgimiento y desarrollo de nuevos partidos durante el periodo 1931-1979 estuvo más relacionado con una pauta cíclica de desarrollo económico y político que se veía interrumpida por una serie de crisis que por lo general inducían golpes de Estado dirigidos por jóvenes oficiales reformistas, a los que seguía una reconsolidación del poder militar (Montgomery, 1995). Durante la secuela de cada crisis, los militares creaban un nuevo partido progubernamental que les servía como instrumento útil para movilizar apoyo durante las elecciones. Así, después del golpe de Estado de 1931, el general Maximiliano Hernández Martínez fundó el Partido Pro-Patria; después del golpe de Estado de 1948, el mayor Óscar Osorio estableció el Partido Revolucionario de la Unificación Democrática (PRUD), y después del golpe de 1961, el coronel Julio Rivera fundó el Partido de Conciliación Nacional (PCN).

Simultáneamente, nuevos partidos aparecieron en la oposición, y oficiales militares disidentes y sus aliados civiles crearon en ocasiones pequeños partidos efímeros para desafiar al régimen. Sin embargo, a ninguno de estos partidos se le puede considerar como un partido político efectivo, porque uno de los requisitos básicos de los partidos es

la competencia electoral, y la competencia política estaba severamente restringida. Por el contrario, lo que caracterizaba al país era el fraude electoral y excluir de la ciudadanía a las mayorías. Por lo tanto, no podemos suponer la existencia de un sistema de partidos durante este periodo.

Si seguimos la pauta identificada antes, el PDC salvadoreño surgió durante la crisis política de 1960-1961. Después de un periodo de reforma económica y política limitada bajo el mandato del presidente Osorio (1950-1956), su sucesor, el coronel José María Lemus (1956-1960), empezó a recurrir a medidas cada vez más represivas en respuesta a los crecientes niveles de intranquilidad social en el país. A finales de 1967 la economía salvadoreña entró en un periodo de crisis como resultado de la caída del precio internacional del café.[10] Además, el triunfo de la Revolución cubana (1959) aumentó el temor al comunismo del régimen, lo que reforzó el estilo autoritario del gobierno. Enfrentado a una rápida erosión de su apoyo popular, a presiones cada vez más fuertes de las facciones oligárquicas y a la disidencia interna entre los militares, un grupo de oficiales partidarios de Osorio derrocó a Lemus en octubre de 1960. Una junta militar-civil tomó el gobierno.

La diversidad ideológica de la nueva junta, aunada a su promesa de llevar a cabo elecciones libres, "propició un aumento en la actividad partidista" (Webre, 1979, p. 32). Dentro de este contexto, el PDC fue establecido formalmente en noviembre de 1960 por un grupo de profesionales de clase media y alta que buscaban alternativas a los grupos de oposición tradicionales. Los orígenes del partido se remontan a la Conferencia Pax Romana de 1954 en Roma, que inspiró a los delegados salvadoreños a organizar grupos de estudio cuando regresaron a El Salvador (Lynch, 1993, p. 54). Entre los que organizaron estos grupos se encontraban los jóvenes abogados Abraham Rodríguez y Roberto Lara Velado.[11] Otro miembro fundador, José Napoleón Duarte Fuentes, adquirió cada vez más influencia a medida que el partido evolucionaba.

En su primera convención en mayo de 1961, el PDC eligió a Duarte como su secretario general. Aunque la junta partidaria de Osorio fue remplazada por otra más conservadora en enero de 1961, la junta permitió algún espacio político al PDC y a otros partidos de oposición con el fin de obtener el consenso popular. El año siguiente, el coronel Alberto Rivera, uno de los miembros de la junta, fue elegido presidente como candidato del PCN, un nuevo partido de los militares. Durante su periodo en el cargo (1962-1967), Rivera permitió más oportunidades para la oposición, entre ellas la adopción de un sistema de representación proporcional para elegir la Asamblea Legislativa. En las elecciones de 1964, el PDC se convirtió en la segunda fuerza electoral más importante en el país al ganar 37 de 361 municipios (entre ellos la capital) y 14 de los 52 escaños en la legislatura. La elección de Duarte como alcalde de San Salvador y su reelección subsiguiente en 1966 y 1968 le dio al partido una base política importante y proyección nacional (Webre, 1979).

Después de 1964, el PDC representó la única alternativa electoral real al PCN. Gradualmente aumentó su influencia política en la legislatura y en los gobiernos municipales, llegando a un nivel de 19 escaños en la legislatura y 81 municipalidades en

1968. A pesar de un pobre desempeño en las elecciones presidenciales de 1967 (el candidato del PDC sólo obtuvo 22% de los votos) y de una disminución de su apoyo en las elecciones legislativas de 1970,[12] en las elecciones presidenciales finales de 1972 la alianza opositora encabezada por el PDC presentó un serio desafío al régimen militar.

"El régimen llegó a las elecciones presidenciales de 1982 con un grave problema de imagen" (Williams y Walter, 1997, p. 80). El gobierno del coronel Fidel Sánchez Hernández (1967-1972) no había cumplido su promesa de reforma y de respetar las libertades democráticas. Esto galvanizó a los grupos opositores de la izquierda y de la derecha para formar una alianza electoral, la Unidad Nacional Opositora (UNO), con Duarte como candidato a la presidencia. Además, desde el punto de vista de la derecha, los discursos de Sánchez Hernández sobre la necesidad de la reforma agraria convencieron a los elementos recalcitrantes de la oligarquía terrateniente y a algunos oficiales de la línea dura a lanzar su propio candidato, lo que le quitó votos al PCN. A pesar de las manipulaciones del sistema electoral por parte del régimen durante los meses que precedieron a la elección y de sus ataques a los simpatizantes de la oposición durante la campaña, a medida que se empezaron a conocer los resultados la noche de la elección, se hizo cada vez más evidente que Duarte se encaminaba a la victoria. En vez de reconocer un triunfo de la oposición, el consejo electoral dominado por el gobierno declaró ganador al coronel Armando Arturo Molina del PCN. Durante las elecciones legislativas y municipales un mes después, el consejo electoral se negó a anular las elecciones, a pesar de la exitosa campaña de la UNO para que se rayaran las papeletas de votación y así anularlas. Dos días después de la decisión del consejo electoral, un grupo de jóvenes oficiales reformistas intentó dar un golpe de Estado, que fracasó, para impedir que Molina tomara posesión del cargo. Aunque la participación de Duarte en el intento de golpe de Estado fue marginal, salió al exilio en Venezuela (Webre, 1979; Williams y Walter, 1997).

A pesar del fraude, la coalición de la UNO, encabezada por el PDC, decidió contender en las elecciones legislativas y municipales de 1974 y de nuevo en las elecciones presidenciales de 1977, que se vieron afectadas por un fraude generalizado. Para las elecciones de 1977, el PDC recurrió a un oficial militar retirado, el coronel Claramount Rozeville. Unos pocos días después de la elección, una manifestación de la oposición denunciando el fraude fue reprimida violentamente por las fuerzas de seguridad. Durante el gobierno del general Carlos Humberto Romero (1977-1979), la represión llegó a niveles nunca vistos (Montgomery, 1995). En consecuencia, el PDC se encontró en una encrucijada. Desde su creación en 1960 el partido había logrado convertirse en la única alternativa electoral viable al PCN. No obstante, aunque su control de municipios clave, en especial el de San Salvador, le permitía crear apoyo electoral en zonas urbanas, no ocurría lo mismo en el campo. Además, estaba claro que el PDC había llegado a un tope máximo no establecido formalmente. Aunque el régimen estaba dispuesto a permitir alguna competencia electoral limitada, recurría cada vez más al fraude y a la represión cuando enfrentaba una verdadera amenaza electoral. A esto se añadía que el gobierno del general Romero había abandonado toda pretensión de reforma, optando por la represión

de sus oponentes. Así, con la vía electoral aparentemente agotada, los líderes de la democracia cristiana empezaron a considerar otras alternativas. Por ejemplo, según Webre (1979, p. 188), Duarte, como resultado de su experiencia en las elecciones de 1972, "se había vuelto escéptico sobre la viabilidad de una solución democrática para los problemas sociales y económicos de El Salvador [...] ya en 1973 había llegado a la conclusión de que el futuro de la reforma estaba en el ejército, en particular con los oficiales jóvenes".

Las opiniones de Duarte señalaron la más importante división en la política salvadoreña: los que apoyaban al régimen autoritario y los que se le oponían.[13] Esta división no sólo enfrentaba a los partidos "oficiales" de los militares con los partidos de oposición, sino que también creaba las divisiones dentro de estos últimos. Algunos líderes de la oposición apoyaban la colaboración con el régimen para aumentar su influencia política. Otros, como Duarte, esperaban que los elementos reformistas entre los militares realizaran el cambio, en tanto que otros, como los jóvenes disidentes del PDC que formaron el Ejército Revolucionario Popular (ERP) en 1972, rechazaban cualquier colaboración con los militares.

A finales de la década de 1970, otros actores sustituyeron al PDC al frente del liderazgo de la oposición contra el régimen militar. Para un creciente número de salvadoreños la tibia plataforma reformista del PDC difería en poco de la retórica reformista del propio régimen. Las condiciones cada vez más precarias de los pobres rurales y urbanos durante los años setenta fueron un terreno fértil para unos mensajes políticos más radicales. En las zonas rurales, las organizaciones campesinas, apoyadas por sectores progresistas de la Iglesia católica, aumentaron sus demandas de un programa de reforma agraria de gran alcance. En las zonas urbanas, crecientes números de pobladores de las barriadas más precarias se unieron a las comunidades de base cristianas y a otros movimientos populares establecidos en las urbes. Cuando el régimen intensificó su represión hacia estas organizaciones, muchos activistas consideraron que los movimientos guerrilleros eran la única alternativa (Williams y Walter, 1997, p. 90).

La represión cada vez mayor de los militares contra los opositores produjo una respuesta violenta de los grupos de la izquierda armada. La creciente espiral de violencia y represión también afectó al PDC. Entre 1977 y 1979 varios líderes del PDC fueron asesinados, encarcelados u obligados a exiliarse. La creciente inestabilidad política, aunada a la toma revolucionaria del poder por los sandinistas en la cercana Nicaragua, convenció a un grupo de jóvenes oficiales de dar un golpe de Estado el 15 de octubre de 1979. La junta civil-militar y el gabinete establecidos tras el triunfo del golpe fue el gobierno representativo más amplio que el país hubiera tenido. El nuevo gobierno incluía dirigentes de una alianza de partidos políticos de la oposición, de los sindicatos y de las organizaciones campesinas (Foro Popular), y representantes del sector privado (Williams y Walter, 1997, p. 101). El PDC, aunque no estaba representado en la junta, recibió cinco puestos en el gabinete, entre ellos los de secretario de Relaciones Exteriores y secretario de la Presidencia (Dunkerley, 1988).

Aunque el golpe de Estado de 1979 ofreció una oportunidad histórica para llevar a

cabo reformas de gran alcance y evitar una guerra civil, en unas pocas semanas los jóvenes reformistas fueron desplazados por un grupo de oficiales conservadores, sólo superficialmente comprometidos con el programa de reforma. Debido a la renuencia de los militares a poner alto a la represión contra los grupos de izquierda, los miembros civiles del gobierno renunciaron en masa a principios de 1980. Completamente aislados, los militares se dirigieron al PDC en demanda de apoyo. A cambio de la participación del PDC en la nueva junta y en el gabinete, los militares aceptaron continuar con el programa de reformas sociales y económicas. La segunda junta cayó a principios de marzo de 1980, cuando el miembro de la junta y líder del PDC, Héctor Dada, renunció como protesta por la continuación de la represión militar.[14] Pocas semanas antes, las fuerzas de seguridad habían irrumpido en la casa de Mario Zamora, hermano del líder del PDC, Rubén Zamora, y le habían disparado 11 veces (Montgomery, 1995). La decisión de Duarte de remplazar a Dada en la junta unos días después produjo una división en el partido. Dada, Zamora y cerca de la mitad del comité ejecutivo dejaron el PDC para formar el Movimiento Popular Social Cristiano (MPSC). La decisión de Duarte de permanecer en la junta durante todo 1982 les dio a los militares y a sus patrocinadores estadunidenses la cubierta política que necesitaban para salir de la crisis. A medida que las guerrillas continuaban obteniendo apoyo popular y la guerra se intensificaba, la junta dependió cada vez más de la ayuda de los Estados Unidos. A cambio, la junta se comprometió a realizar un programa de reforma agraria e iniciar un proceso de liberalización política que condujera a la elección de un gobierno encabezado por civiles.

El 6 de marzo de 1980, la nueva junta emitió la Ley Básica de la Reforma Agraria. La fase uno de la reforma sería la expropiación de las propiedades privadas de terrenos de 500 hectáreas o más y la fase dos afectaría las propiedades agrícolas de entre 150 y 500 hectáreas. El 28 de abril se anunció una tercera fase, conocida como "la tierra para el que la cultiva" y por ella se permitiría a quienes cultivaran parcelas alquiladas o mediante acuerdos de aparcería hasta siete hectáreas, la oportunidad de comprar la tierra (Williams y Walter, 1997, p. 105). Aunque la junta actuó rápidamente para ejecutar la fase uno, la oposición de los elementos conservadores entre los militares y la élite cafetalera obligó a la suspensión indefinida de la fase dos. Esta fase habría afectado a la mayor parte de las principales fincas cafetaleras del país, amenazando seriamente la base económica de la oligarquía. No obstante, la decisión de la primera junta, de nacionalizar el comercio de exportación del café del país en diciembre de 1979, tuvo un importante efecto sobre el sector agroexportador. Los cultivadores y los procesadores del café culparon por igual a los militares y al PDC por el desplome de la industria cafetalera (Paige, 1993). No confiando ya en el PCN ni en el PDC para representar sus intereses, la élite agroexportadora, junto con los elementos "duros" militares y las fuerzas de seguridad, fundaron su propio partido en 1981, la Alianza Republicana Nacionalista (Arena).

El progreso hacia la elección de un gobierno civil adquirió impulso durante 1981. En marzo, la junta anunció un calendario para las elecciones de una asamblea constituyente en 1982, la que sería seguida por elecciones presidenciales y legislativas en 1983. A pesar de las condiciones poco favorables, el gobierno de Reagan siguió adelante con su

estrategia electoral. Como escribe Montgomery (1995, p. 156),

> En El Salvador en 1982 no se dio ninguna de estas condiciones [para elecciones libres]. Desde marzo de 1980 estaba vigente el estado de sitio; los medios de comunicación estaban bajo el control del gobierno; a finales de 1980 las organizaciones populares habían sido diezmadas y desbandadas; el terror patrocinado por el Estado era la norma, con el resultado de que más de 30 000 civiles habían sido asesinados y 600 000 eran refugiados desde el golpe de Estado de octubre; los líderes de los partidos legales en la izquierda del espectro político estaban amenazados de muerte si regresaban; al igual que en muchos otros países latinoamericanos, el voto era obligatorio por ley, pero en El Salvador el ministro de la Defensa, García, les informó a los ciudadanos que abstenerse de votar equivalía a traición.

No obstante, las elecciones eran un componente clave en la política del gobierno de Reagan hacia El Salvador. Como lo señala Karl (1988), la elección de un gobierno dirigido por civiles podía mejorar la imagen internacional del régimen, proteger de la presión para un acuerdo negociado y convencer a los congresistas escépticos de que el país estaba progresando hacia la democracia. Además, tenía la esperanza de que las elecciones perjudicarían la credibilidad del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) y crearían tensiones dentro de su liderazgo.

En vista de los niveles de ayuda abierta o encubierta de los Estados Unidos al PDC, los funcionarios del gobierno de Reagan estaban convencidos de que los democratacristianos obtendrían una importante victoria en las elecciones de 1982. Sin embargo, aunque el PDC obtuvo una pluralidad del voto, su 40% no bastó para asegurarle una mayoría que dominara la nueva asamblea (cuadro X.1). Cuando parecía que la Arena y el PCN se aliarían para elegir a Roberto D'Aubuisson como presidente provisional, el PDC decidió boicotear las reuniones. En vista del turbio pasado de D'Aubuisson, los funcionarios de los Estados Unidos se opusieron decididamente a su elección.[15] Como forma de superar el estancamiento, el PDC propuso una nueva junta provisional que incluyera a un representante del PDC, a uno de la oposición y a un tercero de los militares. La propuesta nunca tuvo mucho apoyo, pues el gobierno de Reagan y el ministro de la Defensa, García, cabildearon con éxito por una elección de compromiso: Álvaro Magaña, independiente y durante muchos años amigo de los militares.

El gobierno provisional de Magaña fue en gran medida ineficaz a pesar del Pacto de Unidad Nacional firmado por el PDC, la Arena y el PCN en agosto de 1982. Los desacuerdos entre los partidos sobre la reforma agraria, la política económica y las disposiciones de la nueva constitución paralizaron al gobierno durante casi todo 1983. Al promulgarse la constitución a finales de ese año, la atención de los partidos se desplazó a las futuras elecciones presidenciales programadas para marzo de 1984. De nuevo, el gobierno de Reagan esperó una convincente victoria del PDC, canalizando unos dos millones de dólares a la campaña del PDC (Montgomery, 1995). La campaña en sí misma careció de contenido, pues los principales candidatos intercambiaron insultos y ataques personales: "El PDC llamó fascista a D'Aubuisson, e insistió en que un voto por Arena favorecería a las guerrillas. Además, Arena relacionó a los comunitarios del PDC con los criptocomunistas y con los liberales del Departamento de Estado, acusándolos de haber asesinado a varios miembros de Arena, y pidió a la Asamblea que investigara las

actividades del embajador de los Estados Unidos Thomas Pickering" (Baloyra, 1995, pp. 56-57). El PDC mejoró marginalmente sus resultados en las elecciones de 1982, ganando 43% en la primera vuelta electoral, en tanto que la Arena y el PCN conservaron 29 y 19% del voto, respectivamente (cuadro X.1). Duarte ganó la segunda vuelta electoral por un no muy amplio margen (53.6 contra 46.4%).

Aunque el gobierno de Duarte hizo campaña basado en un programa de paz y recuperación económica, se vio obstaculizado desde el principio. En vísperas de su toma de posesión, Duarte firmó un pacto secreto con el ministro de la Defensa, general Eugenio Vides Casanova, que mantenía la autonomía institucional de los militares y la dirección general del esfuerzo bélico a cambio de su fidelidad al nuevo gobierno. Especial preocupación causó el acuerdo de Duarte de no someter a juicio a los militares implicados en abusos cometidos contra los derechos humanos (véase Williams y Walter, 1997, pp. 127-129). Además de depender de los militares, a medida que la guerrilla intensificaba su esfuerzo bélico y la economía empeoraba, el gobierno también dependió cada vez más de la ayuda de los Estados Unidos. Finalmente, sin una mayoría en la Asamblea, la derecha radical pudo bloquear la mayor parte de las propuestas legislativas del PDC. Así, aunque Duarte se reunió con los guerrilleros en octubre de 1984, las presiones del gobierno de Reagan y de los militares salvadoreños establecieron parámetros rígidos a su libertad para negociar. Después de una segunda reunión en 1985, Duarte anunció que suspendía las pláticas indefinidamente. Además, el impresionante aumento de la ayuda militar enviada por el gobierno de Reagan en 1984 llevó a una importante escalada de la guerra.[16] Lejos de lograr la paz que había prometido, Duarte se vio atrapado por sus acuerdos con los militares y con el gobierno de los Estados Unidos.

El gobierno del PDC tampoco pudo ufanarse de haber logrado muchos progresos en el frente económico. Incluso después de que el PDC ganara una mayoría de las diputaciones en las elecciones legislativas de 1985, la economía continuó deteriorándose como consecuencia del sabotaje económico de las guerrillas, la mala administración y corrupción del gobierno y la continua disminución de la confianza de los inversionistas. Pronto se esfumó el apoyo que Duarte recibió inicialmente de la confederación de sindicatos (se enfrentó a una oleada de huelgas durante 1984-1985 y a la creación de un movimiento sindical más poderoso, la Unión Nacional de Trabajadores Salvadoreños [UNTS]). Finalmente, el mal manejo de la ayuda recibida después del fuerte terremoto que afectó a San Salvador en octubre de 1986 disminuyó aún más su credibilidad. De hecho, el problema de la corrupción fue bien aprovechado contra el PDC durante las elecciones legislativas de 1988. Arena ganó justo un poco menos de la mayoría de las diputaciones (30 de un total de 62), pero, junto con el PCN, ahora ejercía un control efectivo de la legislatura. El PDC ganó sólo 22 curules y 79 alcaldías.

Una lucha interna por la dirigencia dentro del partido se sumó a los problemas del PDC después de las elecciones. La enfermedad terminal de Duarte dejó al garete al gobierno y al partido durante gran parte de lo que restaba de su periodo. El desacuerdo sobre quién sería el candidato presidencial del PDC en 1989 produjo una enconada división en el partido. Julio Rey Prendes, durante muchos años un líder del PDC y ex alcalde de San

Salvador, abandonó el PDC con 12 de los 22 legisladores del PDC para formar el Movimiento Auténtico Cristiano (MAC). Aunque en las elecciones de 1989 el PDC pudo mejorar ligeramente el total de votos obtenido en 1988, la contundente victoria de la Arena en la primera vuelta de las elecciones presidenciales se presentó como un fuerte golpe al partido. En realidad, las elecciones de 1988 y 1989 marcaron un punto de inflexión en la evolución futura del partido. En cada elección subsiguiente, el apoyo del PDC se erosionó más, de modo que, para 1999, el apoyo al partido había caído por debajo de 6% (cuadro X.1 y gráfica X.1).

CUADRO X.1. *Resultado de las elecciones por partido (porcentajes)*

Año	*Tipo*	*FMLN*	*CD*	*PDC*	*Arena*	*PCN*
1982	L	NP	NP	40.1	29.5	19.2
1984	P[a]	NP	NP	43.4[b]	29.8	19.3
1985	L	NP	NP	52.4	29.7	8.4
1988	L	NP	NP	35.1	48.1	8.5
1989	P	NP	3.8	36.0	53.8	4.1
1991	L	NP	12.2	28.0	44.3	9.0
1994	P[a]	25.0[c]		16.3	49.1[d]	5.3
	L	21.4	4.5	17.9	45.0	6.2
1997	L	33.0	3.5	8.4	35.4	8.7
1999	P	29.1	7.5[e]	5.7	52.0	3.8
2000	L	35.2	5.4[e]	7.2	36.0	8.8

NOTA: Los porcentajes no suman siempre 100 porque sólo se incluyó a los partidos más importantes. L = elecciones legislativas; P = elecciones presidenciales; M = elecciones municipales; NP = no participó. Nombres de los partidos: FMLN = Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional; CD = Convergencia Democrática; PDC = Partido Demócrata Cristiano; Arena = Alianza Republicana Nacionalista; PCN = Partido de Conciliación Nacional.

[a] Sólo la primera vuelta electoral.

[b] El PDC logró ganarle a Arena en la segunda vuelta electoral (53.6-46.4).

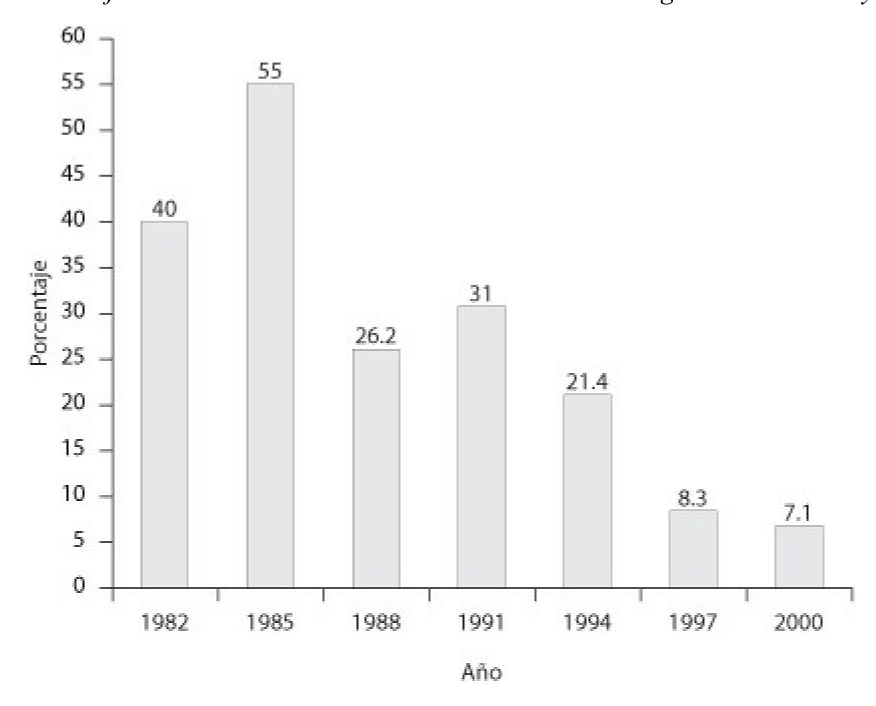
[c] El FMLN, la CD y el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) participaron juntos en una coalición en la boleta electoral.

[d] Arena ganó la segunda vuelta electoral al FMLN (68.3-31.7).

[e] La CD participó en coalición con el Partido Demócrata (PD), el Partido Popular Laborista (PPL) y el Movimiento de Unificación Demócrata Cristiano (MUDC).

FUENTES: Resultados 1982-1999: Bird y Williams (2000, p. 32). Los resultados y cifras totales de los votos para el año 2000 se tomaron de Tribunal Supremo Electoral, "Resultados de los Escrutinios Finales de la Asamblea Legislativa a Nivel República" (www.tse.gob.sv/resultados.nsf).

GRÁFICA X.1. *Porcentaje de escaños totales del PDC en la Asamblea/Legislatura Constituyente, 1982-2000*



Al analizar los resultados electorales salvadoreños en 1999, Lynch (1993, p. 146) atribuye la derrota de los democratacristianos a su persistente estatismo: en resumen, el liberalismo de Cristiani estaba más cerca del pensamiento económico y social de la Iglesia que el creciente estatismo de Chávez. En 1989, el perdedor fue el estatismo de los democratacristianos. En comparación, Baloyra (1995, p. 59) señala que el PDC se alejó de sus raíces populistas después de la elección de 1984: "El [PDC] necesitaba recuperar los votos perdidos ante Arena, pero no procurando superar a la derecha como administrador eficiente de la agenda neoliberal. Puede recuperar parte de su popularidad y de su raigambre campesinas si no reniega de la herencia populista-redistributiva de Duarte y si presenta mejores candidatos presidenciales".

Ambos autores se equivocan al suponer que la declinación del PDC puede revertirse simplemente reformulando su programa político —según Lynch adoptando un programa neoliberal, o según Baloyra, retornando a una posición populista—. Las razones de la declinación del PDC fueron mucho más profundas. Primero, aparte de presentarse como un partido reformista del centro, el PDC nunca logró una verdadera coherencia ideológica. En toda su historia, el PDC realizó alianzas con grupos de todo el espectro político: partidos a su izquierda (el MNR y la UDN en los años setenta), con elementos reformistas de los militares (después del golpe de Estado de 1979) y con elementos conservadores de los militares (después del desplome de la primera junta).

Esos cambios radicales de posición ideológica relativa dificultaron al PDC desarrollar raíces estables en la sociedad.[17] Su base electoral estuvo limitada esencialmente a las zonas urbanas, en especial la capital. Además, su apoyo electoral no era muy profundo. En cambio, como representaba la única alternativa electoral viable para los militares dentro de una esfera restringida de competencia electoral, el PDC se convirtió en una

especie de receptor de los votos de la oposición. De manera parecida a la del PAN en México durante muchos años, un voto por el PDC era la única forma de expresar oposición al régimen militar.

Además, el PDC desperdició su oportunidad de capitalizar su periodo de gobierno para ampliar su influencia más allá de su limitada base electoral. Por ejemplo, en vez de fortalecer el programa de reforma agraria para construir apoyo rural, el gobierno de Duarte permitió que las cooperativas de la reforma agraria se estancaran. También la incapacidad del gobierno para cumplir sus promesas de campaña de negociar la paz y lograr la recuperación económica, así como la corrupción generalizada, le costaron perder su credibilidad entre los votantes.

Otro aspecto que se debe considerar es que el ascenso del PDC al poder a mediados de los ochenta fue resultado que se debió por igual a sus acuerdos con los militares y a la preferencia del gobierno de Reagan por una alternativa política moderada, como a su creciente número de seguidores políticos. La ambición de Duarte de llegar a ser presidente era tan grande que permitió que el partido se convirtiera en un instrumento de la política antiinsurgente del gobierno de los Estados Unidos. No es sorprendente que la Arena hiciera de esto un tema de debate durante su campaña de 1989. Como prueba del apoyo artificial del PDC, una vez que la izquierda empezó a participar en el proceso electoral cayó el apoyo a los democratacristianos. La primera vez que la izquierda contendió en las elecciones fue en 1989, cuando Guillermo Ungo se lanzó como candidato presidencial por parte de Convergencia Democrática (CD).[18] Aunque CD obtuvo sólo 4% de los votos, la elección no fue una medida exacta de su apoyo. Según Bird y Williams (2000, p. 33), el ambiente de temor e intimidación en el país le hacía difícil a CD hacer que su mensaje llegara a los votantes. Además, el uso de urnas transparentes para la votación y el uso de votos translúcidos y numerados en secuencia contribuyó poco a que los electores tuvieran la seguridad de que su voto sería secreto. Aunque esas condiciones persistieron en las elecciones de 1991, CD aumentó su votación a un respetable 12 por ciento.

Al firmarse los tratados de paz en enero de 1992 y transformarse el FMLN en partido político, el futuro del PDC no fue nada halagüeño. En las primeras elecciones plenamente competitivas del país en 1994, el PDC terminó en un distante tercer lugar. El final de la guerra y el principio de la transición democrática de El Salvador mostraron que la división tradicional del país (autoritarismo militar contra democracia) había perdido importancia. Al llegarse a un consenso básico con respecto a “las reglas políticas del juego”, surgieron nuevas divisiones en el terreno económico, enfrentando a los partidarios del neoliberalismo con sus oponentes. Esta nueva división se reflejó en el sistema de partidos que surgió después de las elecciones de 1994. El sistema de partidos parecía estar dirigiéndose hacia una configuración bipolar, en la que el FMLN dominaba a la izquierda y la Arena a la derecha. El PDC encontró que su espacio se limitaba cada vez más a medida que el FMLN y Arena moderaban sus plataformas políticas (Bird y Williams, 2000, p. 37).

En este nuevo contexto, el PDC se volvió cada vez menos importante. Las divisiones

internas dentro del partido contribuyeron aún más a su declinación electoral. En las elecciones legislativas de 1997, los democratacristianos ganaron sólo 8.4% de los votos, lo que los ubicó en el cuarto lugar, detrás de la Arena, el FMLN y el PCN. En 1999, su candidato a la presidencia obtuvo un decepcionante 5.8% de los votos. En las elecciones legislativas y municipales del año 2000, el partido sólo logró ganar 7% de la votación, lo que le dio seis escaños en la Asamblea Legislativa y 18 municipios (cuadro X.1).

EL CASO GUATEMALTECO

Como ocurrió en El Salvador, los partidos políticos no eran los actores más importantes en el desarrollo político contemporáneo de Guatemala. Un escenario electoral restringido, aunado a prolongados periodos de gobierno militar, impidió el surgimiento de un sistema de partidos estable. Los partidos se formaban como instrumentos electorales para distribuir favores entre una y otra elección. Ninguno alcanzó la proyección nacional, la consistencia ideológica o la estructura organizativa que caracterizan a los verdaderos partidos.

Antes de la década de 1930, la principal división política fue el conflicto entre los liberales y los conservadores que caracterizó a gran parte de Latinoamérica. Esta división fue superada por un prolongado periodo de gobierno militar bajo el general Jorge Ubico (1931-1944). Durante el gobierno de Ubico se prohibió incluso la competencia electoral limitada, haciendo que los partidos no tuvieran espacio político para organizarse. El derrocamiento de Ubico en 1944 y el inicio de un periodo de significativas reformas políticas y sociales creó nuevas oportunidades para la formación de partidos. La principal división durante este periodo giró en torno del programa "revolucionario" de los presidentes Juan José Arévalo (1944-1960) y Jacobo Árbenz (1950-1954). Los principales oponentes de las reformas (los terratenientes, la United Fruit Company, el gobierno de los Estados Unidos, la jerarquía católica, los elementos conservadores del ejército) los consideraban comunistas y verdaderas amenazas directas a la propiedad privada y a los valores "cristianos". A pesar de existir un espacio muy amplio para la competencia política, ni los opositores ni los partidarios de la revolución lograron organizar partidos que pudieran canalizar efectivamente el apoyo/oposición a las reformas. Como escribe Dunkerley (1988, p. 137), "la revolución guatemalteca fue notable por su debilidad, divisiones constantes y dependencia del patrocinio estatal de los partidos políticos". Por ejemplo, los esfuerzos de los partidos favorables a Árbenz por construir un partido revolucionario unificado siguiendo el modelo del PRI de México nunca se materializaron. De hecho, debido a "las luchas intestinas que plagaban a los partidos revolucionarios", Árbenz llegó a depender cada vez más del Partido Comunista para aplicar varias de sus políticas, en particular el programa de reforma agraria (Gleijeses, 1991, p. 174).

Después del derrocamiento de Árbenz orquestado por los Estados Unidos en 1954, el gobierno de Castillo Armas llevó a cabo una extensa cacería de brujas contra los

partidarios de Árbenz y los militantes del Partido Comunista. Dentro de este nuevo panorama político, un grupo de profesionales católicos estableció la Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG) en 1955. Durante el periodo de Árbenz surgieron varias organizaciones políticas de filiación católica para defender a la Iglesia de los que parecían ataques del gobierno. Los líderes de estos grupos —incluyendo al Movimiento de Afirmación Católica, Concordia Social y el Movimiento Demócrata Cristiano— estaban entre los fundadores del nuevo partido democratacristiano. A pesar de sus orígenes como partido confesional, anticomunista, gradualmente el partido adoptó un programa más reformista influido por las corrientes progresistas de la doctrina social católica. Este proceso fue facilitado por la participación del partido en la organización de los estudiantes universitarios católicos, el Frente Estudiantil Social Cristiano, y en organizaciones de campesinos y trabajadores (Caldera y Santos, 1986; Silchar Moreno, 1999).

El partido contendió en las primeras elecciones después del golpe de Estado en 1955. Ganó cuatro diputaciones en la legislatura. Durante las elecciones presidenciales de 1957, la DCG apoyó la candidatura de Miguel Asturias Quiñones, un ex rector de la universidad. Al ser anuladas las elecciones debido a un fraude generalizado, el partido se unió a una alianza electoral que apoyaba al candidato ultraderechista del Movimiento Democrático Nacional, Miguel Ortiz Passarelli, en las elecciones de 1958. El general Miguel Idígoras Fuentes, un opositor de Castillo Armas, ganó la elección con 39% del voto. Su decisión en 1963 de permitirle al ex presidente Arévalo participar en la futura elección presidencial motivó un golpe de Estado encabezado por el coronel Peralta Azurdia. La decisión de la DCG de boicotear las elecciones para una asamblea constituyente llevó a su proscripción hasta 1968. En ese año se le permitió al partido volver a registrarse a tiempo para las elecciones municipales. Los democratacristianos ganaron en 20 de 326 municipios (Caldera y Santos, 1986).

Durante la década de los setenta, la DCG aumentó su apoyo electoral pero fue frustrada por la regularidad cada vez mayor del fraude. El partido logró cierto éxito obteniendo apoyo en las zonas rurales, en particular como resultado de su trabajo con el creciente movimiento de cooperativas rurales. Como en el caso de El Salvador, los democratacristianos se convirtieron en la única alternativa electoral viable al régimen militar. Sin embargo, debido al escenario político más restringido en Guatemala, desde el principio los líderes de la DCG siguieron una estrategia de alianzas con elementos disidentes de los militares (Jonas, 1995). Así, durante las elecciones presidenciales de 1970, 1974 y 1978, los democratacristianos apoyaron a candidatos militares. En las elecciones de 1970, el candidato apoyado por los democratacristianos, el coronel Jorge Lucas Caballeros, ganó 20% de los votos para presidente. En las fraudulentas elecciones de 1974, el partido apoyó al general Efraín Ríos Montt, que según se cree ganó las elecciones (Trudeau, 1993). Aunque a los democratacristianos les correspondieron 14 escaños en la legislatura, dentro del partido hubo grandes desacuerdos acerca de si se debía participar en el nuevo Congreso. La decisión de participar que predominó en el partido produjo desilusión entre las bases y convenció a los elementos más radicales de dejar el partido, y algunos de ellos se unieron a los movimientos guerrilleros armados.[19]

En la secuela de las elecciones de 1974, la oposición al régimen se canalizó cada vez más por medio de organizaciones campesinas y de obreros y no a través de partidos.

Las elecciones de 1978 estuvieron caracterizadas por el fraude generalizado y niveles de abstención sin precedente. Reflejando la desconfianza cada vez mayor en el proceso electoral, 69% de los votantes registrados se abstuvo y 20% de los que votaron lo hicieron de tal manera que su voto fuera nulo (Dunkerley, 1988). El régimen declaró triunfador al general Lucas García (aunque se creyó que había quedado en tercer lugar) y al candidato demo-cratacristiano, el general Ricardo Peralta Méndez, se le dio el tercer lugar. El gobierno de Lucas García (1978-1982) presidió uno de los periodos más sangrientos en la historia reciente de Guatemala. El régimen llevó a cabo una brutal campaña de contrainsurgencia dirigida contra las comunidades mayas de las tierras altas. En respuesta a las denuncias de la DCG de abusos contra los derechos humanos y a sus progresos en las elecciones municipales de 1980, especialmente en las comunidades mayas, el régimen empezó a perseguir a los alcaldes y activistas democratacristianos. En breve tiempo desaparecieron o fueron asesinados 300 de ellos durante el periodo de Lucas García (Dunkerley, 1988). Vinicio Cerezo, secretario general del partido, sobrevivió a tres intentos de asesinato durante el mismo periodo.

Según Trudeau (1993, p. 45), "los democratacristianos estaban en una incómoda posición antes de las elecciones de 1982. Por una parte, el partido tenía una agenda reformista, proponía ciertas reformas sociales y atacaba persistentemente el papel del gobierno en la violencia política. Pero por otro lado había mucho riesgo al seguir el camino de la disidencia". Si el partido tenía un buen desempeño en las elecciones, podía esperar una represión continua contra sus activistas; pero si boicoteaba las elecciones se enfrentaba incluso a una represión más intensa por parte del régimen. Como ocurrió en el pasado, los líderes del partido eligieron la participación, y se unieron a la coalición Unidad Nacional Opositora (UNO) que estaba apoyando a Alejandro Maldonado, del Partido Nacional de Renovación (PNR), como su candidato.[20] A pesar de que la DCG dio el principal apoyo electoral para la UNO, los democratacristianos siguieron la pauta de no presentar a uno de sus propios líderes como candidato a la presidencia.[21]

En otra elección fraudulenta, el Tribunal Supremo Electoral declaró triunfador al candidato del régimen, general Aníbal Guevara, con 35% de los votos, seguido por el Movimiento de Liberación Nacional (MLN) con 26% y la UNO con 21%. "Los partidos derrotados protestaron y Guatemala presenció el insólito espectáculo de una conjunta marcha de protesta por partidos tan diferentes como el MLN de extrema derecha y los moderados y progresistas de la DCG" (Trudeau, 1993, p. 47). Pocos días después de las elecciones, un grupo de comandantes descontentos dirigidos por el general Ríos Montt derrocó al gobierno de Lucas García en un golpe de Estado. Los oficiales estaban preocupados por la amenaza cada vez mayor de la guerrilla, el aislamiento internacional del gobierno y la profundización de la crisis económica. Las elecciones fraudulentas fueron la gota que derramó el vaso.

Inicialmente, los democratacristianos, junto con los demás partidos que participaron en las elecciones, recibieron bien el golpe de Estado. Sin embargo, tan pronto como

quedó en claro que Ríos Montt no estaba interesado en corregir la situación de los derechos humanos o en realizar nuevas elecciones, la DCG le retiró su apoyo. Bajo Ríos Montt, los militares intensificaron la represión de las comunidades indígenas en un esfuerzo por aislar a las guerrillas de sus bases de apoyo. Según Jonas (1991, p. 149), "las principales técnicas comprendían el despoblamiento por medio de prácticas de tierra quemada, masacre de la población de aldeas enteras y reubicaciones masivas forzosas".

Además del deterioro de la situación de los derechos humanos, los democratacristianos se disgustaron por las reformas políticas de Ríos Montt. Todos los partidos tenían que registrarse de acuerdo con nuevas reglas; sin embargo, las nuevas reglas, "que reducían el número de firmas necesarias para la legalización final de 50 000 a 4 000" (Trudeau, 1993, p. 61), resultaron en una proliferación de nuevos partidos que amenazaban a los partidos tradicionales, como la DCG. Los democratacristianos se sintieron amenazados cuando los débiles requisitos de registro abrieron oportunidades para que se organizaran partidos de centro-izquierda. Hasta ese tiempo, los democratacristianos sólo tenían que preocuparse por sus contendientes electorales de la derecha.[22] Afortunadamente para la DCG, Ríos Montt no duró mucho en el poder; fue derrocado por un golpe de Estado dirigido por su ministro de la Defensa, el general Humberto Mejía Víctores, en agosto de 1983.

Bajo Mejía Víctores los militares decidieron iniciar una apertura política controlada, como la que se estaba llevando a cabo en El Salvador. "Los dos años y medio entre el golpe de Estado de Mejía y la elección de Cerezo y de la DCG podrían considerarse como un periodo de transición en el cual los militares rectificaron los excesos cometidos por el gobierno de Ríos Montt y se retiraron gradualmente de la administración pública" (Dunkerley, 1988, p. 488). Como en 1984 los militares habían debilitado considerablemente a las guerrillas, podían ahora concentrar sus esfuerzos en mejorar su imagen internacional. En este esfuerzo fue crucial la elección de un gobierno dirigido por civiles. En enero de 1984, el gobierno de Mejía anunció un calendario electoral y nuevas leyes electorales. Se programó para julio de 1984 la elección de una asamblea constituyente que tendría el encargo de elaborar una nueva constitución, y a la que seguirían elecciones presidenciales, legislativas y municipales en diciembre de 1985. Los requisitos para el registro de partidos eran sólo un poco más rigurosos que los establecidos por Ríos Montt; sin embargo, los partidos necesitaban obtener al menos 4% de los votos para evitar que se les cancelara su registro (Trudeau, 1993).

Pese a ganar una pluralidad de la votación en las elecciones de 1984, la DCG quedó en tercer lugar por el número de diputaciones obtenidas: los democratacristianos recibieron 20 curules en comparación con 23 para la alianza encabezada por el MLN y 21 para el nuevo partido "centrista", la Unión del Centro Nacional (UCN). Aunque libres de fraude, las elecciones se caracterizan por un bajo porcentaje de votantes (43% del electorado potencial), lo que probablemente reflejaba la continuación del ambiente de temor y represión en el país (Jonas, 1995). Al año siguiente la DCG logró una importante victoria. El secretario general del partido, Vinicio Cerezo Arévalo, ganó la elección presidencial de noviembre de 1985, obteniendo 36.5% en la primera vuelta y un abrumador 68% de los

votos en la segunda (cuadro X.2). Además, la DCG obtuvo una mayoría en el nuevo Congreso (51 de 100 escaños) y 148 de 328 municipios.

CUADRO X.2. *Guatemala: resultados electorales por partido, 1984-1999 (porcentajes)*

Año	*Tipo*	*DCG*	*UCN*	*MLN*	*CAN*	*PAN*	*PR*	*MAS*	*FRG*	*PLP*	*FDNG*	*URNG/DIA*
1984	AC[a]	16.4	13.7	12.5[b]		NP	7.3	NP	NP	NP	NP	NP
1985	P[c]	38.6[d]	20.3	12.5[e]	6.3	NP	13.8[f]	NP	NP	NP	NP	NP
	L	34.6	20.6	15.3[g]	6.3	NP	13.5	NP	NP	NP	NP	NP
1988	M	36.7	24.0	5.1	0.5	NP	6.9	1.7	NP	NP	NP	NP
1990	P[c]	17.5	25.8	4.8[h]	NP	17.3	2.2	24.1[i]	NP	NP	NP	NP
1995	P[c]	12.9[j]		2.3	NP	36.6[k]	NP	NP	22.1	5.2	7.7	NP
	L	12.8		3.4	NP	34.3	NP	NP	20.0	NP	9.1	NP
1999	P[c]	NP	1.0	NP	NP	30.3	NP	NP	47.3[l]	3.1	1.3	12.3

NOTA: Los porcentajes no siempre suman 100 porque sólo se incluye a los partidos más importantes. AC = elecciones para la asamblea constituyente; P = elecciones presidenciales; L = elecciones legislativas; M = elecciones municipales; NP = no participó. Los nombres de los partidos son: Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG); Unión del Centro Nacional (UCN); Movimiento de Liberación Nacional (MLN); Central Auténtica Nacional (CAN); Partido de Avanzada Nacional (PAN); Partido Revolucionario (PR); Movimiento de Acción Solidaria (MAS); Frente Republicano Guatemalteco (FRG); Partido Libertador Progresista (PLP); Frente Democrático Nueva Guatemala (FDNG); Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG); Desarrollo Integral Auténtico (DIA).

[a] Los resultados de las elecciones para la asamblea constituyente corresponden a los votos nacionales, no a los departamentales.

[b] El MLN y la CAN contendieron juntos en una coalición.

[c] Votos de la primera vuelta solamente.

[d] La DCG derrotó en la segunda vuelta a la UCN (68.4-31.6).

[e] El MLN, el Partido Institucional Democrático (PID) y la Fuerza Demócrata Popular (FDP) participaron en el voto presidencial unidos en una coalición.

[f] El PR y el Partido Democrático de Cooperación Nacional (PDCN) participaron en una coalición en las elecciones para la presidencia y el Congreso.

[g] El MLN y el PID participaron juntos en una coalición en las elecciones para el Congreso.

[h] El MLN y el Frente de Avance Nacional (FAN) participaron en una coalición en las elecciones presidenciales y para el Congreso.

[i] El MAS ganó la segunda vuelta electoral derrotando a la UCN (68.1-31.9).

[j] La DCG participó en una coalición con la UCN y el Partido Socialista Democrático (PSD) en las elecciones presidenciales y para el Congreso.

[k] El PAN derrotó en la segunda vuelta electoral al FRG (51.2-48.8).

[l] El FRG triunfó sobre el PAN en la segunda vuelta electoral (68.3-31.7).

FUENTES: Trudeau (1993); Political Data Base of the Americas, "Guatemala: Election Data" (www.georgetown.edu/pdba/elecdata/Guate/guate.html).

Las elecciones le dieron a la DCG una oportunidad histórica. Después de 30 años en la oposición, el partido tenía ahora la posibilidad de probarse a sí mismo en el gobierno. Además, el margen de la victoria de Cerezo en la segunda vuelta electoral le dio un mandato mucho más fuerte que el obtenido por Duarte para promover una agenda de reformas. Finalmente, el nuevo gobierno podía contar con un fuerte apoyo del gobierno de los Estados Unidos y del gobierno democratacristiano de la Alemania Occidental. No obstante, a pesar de este contexto favorable, como escribe Jonas (1995, p. 30), "Cerezo decidió no utilizar plenamente el espacio que tenía. Su gobierno hizo muy poco por contener al ejército o enfrentar los problemas económicos y sociales subyacentes del país; aceptó la prioridad del ejército, que era derrotar a la guerrilla y circunscribir la

actividad popular, lo cual limitó significativamente la posibilidad de una auténtica política pluralista o de terminar la guerra".

De hecho, durante la campaña, importantes líderes de la comunidad empresarial y oficiales del ejército advirtieron contra cualquier verdadera reforma. Los dirigentes del partido evitaron temas concretos como los abusos contra los derechos humanos o la reforma agraria, y se centraron en cambio en ataques personales contra sus oponentes. A pesar de que los militares y las élites económicas necesitaban un gobierno encabezado por civiles, no estaban dispuestos a entregarle el verdadero poder político real. En el ámbito de los derechos humanos y del combate a la insurgencia, el gobierno de Cerezo no quiso o no pudo contener a los militares. A pesar de que se permitieron mayores espacios políticos a los partidos en la izquierda, a los movimientos de obreros y de campesinos y a las organizaciones de derechos humanos, durante todo el gobierno de Cerezo las estructuras de la contrainsurgencia en el campo permanecieron igual que antes. La represión, aunque más selectiva que en el pasado, no disminuyó. Además, en forma parecida a lo que ocurrió en el gobierno de Duarte, Cerezo no ordenó ninguna investigación seria de las violaciones a los derechos humanos y respetó la amnistía autoproclamada por el ejército.[23] El gobierno de Cerezo también se vio considerablemente limitado en su capacidad de iniciar un diálogo con las guerrillas. Después de las conversaciones iniciales entre el gobierno y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) —la organización que agrupaba a los diferentes movimientos guerrilleros— en octubre de 1987, los militares demostraron su rechazo a negociar un cese el fuego al lanzar una importante ofensiva contra la insurgencia (Jonas, 1991).

En el frente económico, el gobierno democratacristiano no pudo mencionar muchas victorias. Alardeó de haber incrementado los flujos internacionales de ayuda y de unos pocos años de crecimiento económico, pero en general el crecimiento agregado fue bastante menos que notable y la inflación llegó a niveles inquietantes en 1989. Como resultado de los mayores préstamos obtenidos por el gobierno, la deuda externa del país aumentó a una tasa alarmante. En 1990, las obligaciones anuales por el servicio de la deuda de Guatemala equivalían a 42% de sus ingresos por exportaciones (Trudeau, 1993). Además, debido a la oposición de la comunidad empresarial, el gobierno de Cerezo avanzó poco en la aplicación de las reformas tributarias o en otras políticas que podrían haber beneficiado a los sectores más pobres del país.

La profundización de la crisis económica y las persistentes acusaciones de corrupción contra el gobierno de Cerezo fueron el telón de fondo de las elecciones de 1990. Los problemas de Cerezo y el hecho de que el partido eligiera a Alfonso Cabrera como su candidato presidencial contribuyeron a una importante división en la DCG. Cabrera había sido criticado en los medios de comunicación por su participación en los escándalos de corrupción. El fundador de la DCG, René de León-Schlotter, rompió con el partido para formar una alianza con el Partido Socialista Democrático (PSD). La dividida DCG, plagada por escándalos, tenía pocas expectativas de ganar las elecciones en 1990. Cabrera quedó en un decepcionante tercer lugar con 17.5% de los votos y no pudo calificar para la

segunda vuelta electoral (cuadro X.2). Además, la DCG perdió su mayoría en el Congreso (ganó sólo 27 de 116 escaños) y tuvo un pobre desempeño en las contiendas municipales (ganó en 86 municipios).

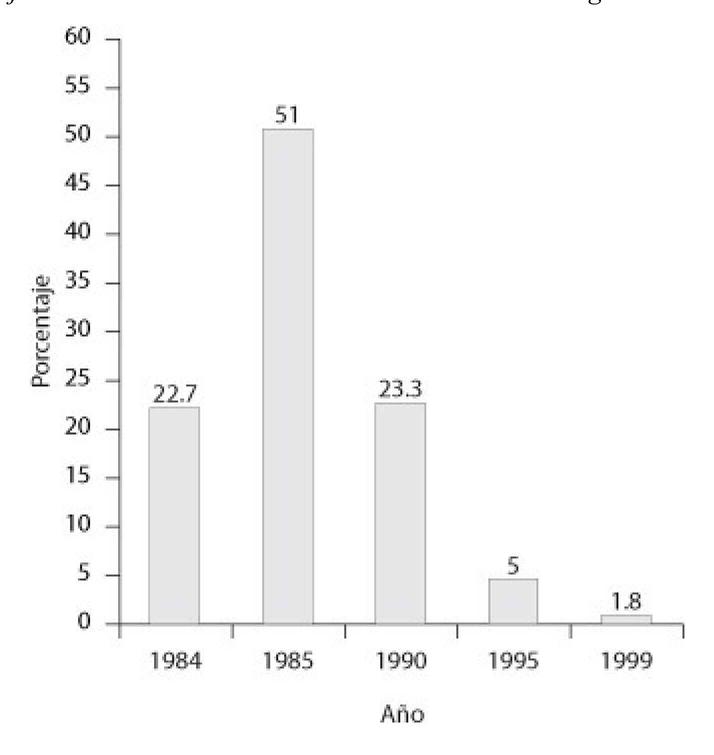
El gran triunfador en las elecciones de 1990 fue José Serrano Elías, del Movimiento de Acción Solidaria (MAS). Serrano se benefició al parecer de su asociación con el general Ríos Montt (que había sido descalificado sobre bases constitucionales) y de su apoyo entre los grupos evangélicos.[24] Aunque ganó un decisivo 68% de los votos en la segunda vuelta electoral, sólo votó 43% de los electores registrados, el más bajo porcentaje de que se tenga noticia (Rosada Granados, 1992).

Lynch (1993, p. 146) atribuye la declinación electoral de la DCG a su divergencia de la doctrina social católica y a que no adoptó el programa económico neoliberal: "Los democratacristianos de Guatemala no sólo dejaron de representar el pensamiento social católico, sino que además permitieron que un partido rival [MAS] se apropiara de sus temas más importantes". Sin embargo, como en el caso salvadoreño, más importante que su adhesión a la versión neoliberal del pensamiento social católico fue la naturaleza coyuntural del éxito electoral de la DCG y sus posiciones políticas ambiguas y a veces contradictorias. Como la única alternativa viable a los militares (y la única aceptable para estos últimos), los democratacristianos se beneficiaron de las dificultades internas y del predicamento internacional del régimen durante los primeros años de la década de 1980. La brutal campaña contra la insurgencia bajo Lucas García y Ríos Montt, aunque efectiva para aterrorizar a la población civil y hacer retroceder el desafío de la guerrilla, generó una creciente oposición interna y el aislamiento internacional. Un gobierno dirigido por civiles bajo un presidente nominalmente reformista les dio una salida a los militares. Además, las alianzas políticas del gobierno de Cerezo con el ala "institucionalista" de los militares y del gobierno de los Estados Unidos limitó considerablemente sus opciones políticas, lo que resultó en medidas contradictorias en toda una variedad de temas (derechos humanos, negociaciones de paz, política económica y política exterior). Finalmente, la omnipresente corrupción en el gobierno de Cerezo debilitó la credibilidad del partido entre los votantes.

La declinación de la DCG continuó durante las elecciones de 1995 (cuadro X.2 y gráfica X.2). Debilitada considerablemente después de que varios de sus legisladores dejaron el partido,[25] los democratacristianos formaron una alianza con el PSD y la UCN, con el fin de apoyar a Fernando Andrade para la presidencia. Andrade, que había servido como ministro de Relaciones Exteriores durante el régimen de Mejía, quedó en un distante tercer lugar con 13% de la votación. Además, la DCG sólo ganó cuatro escaños en el Congreso. Después de 1995, las divisiones dentro del partido socavaron su capacidad de presentar candidatos. A pesar del retorno de Cerezo como secretario general del partido después de esas elecciones, el partido continuó debilitándose (Silchar Moreno, 1999). En 1999, el partido no presentó candidato presidencial y sólo pudo ganar dos escaños en el Congreso. La insignificancia cada vez mayor del partido se agravó cuando aparecieron nuevos contendientes en la izquierda. Los acuerdos de paz firmados en diciembre de 1996 terminaron definitivamente con la guerra y abrieron espacios para que los antiguos

guerrilleros participaran en el proceso político (véase Jonas, 2000). La Alianza Nueva Nación (ANN), establecida en 1999, reunió en una nueva coalición (URNG) a los antiguos movimientos guerrilleros y a varias otras organizaciones izquierdistas.[26] Inmediatamente se convirtió en la tercera fuerza electoral en el país.

GRÁFICA X.2. *Porcentaje de escaños totales de la DCG en la Asamblea/Legislatura Constituyente, 1984-1999*



CONCLUSIÓN

Nuestro análisis de la democracia cristiana en El Salvador y Guatemala subraya algunas de las deficiencias que tienen los estudios recientes sobre el tema. En un nivel teórico, demuestra la dificultad de aplicar conceptos generales de la ciencia política a los casos centroamericanos. En un esfuerzo de buena fe por compartir sus conocimientos académicos con un público más numeroso, algunos politólogos han adoptado los conceptos de partidos políticos y sistema de partidos sin ninguna crítica cuando analizan la realidad centroamericana.[27] En contraste, nosotros ponemos en duda la importancia de estos conceptos en "regímenes de excepción", en los que la lógica de la guerra interna remplaza al dominio de la ley, donde los enemigos políticos se convierten en objetivos de la represión y donde se implanta un terrorismo de Estado en nombre de la "democracia" y de la patria (Loveman, 1999). Como hemos visto en nuestro análisis de El Salvador y Guatemala, antes de los años ochenta, bajo esos regímenes de excepción, los partidos nunca fueron verdaderos contendientes por el poder político y desde luego nunca llegaron a constituir sistemas genuinos de partidos. En cambio, la verdadera lucha por el poder ocurría fuera del escenario formal de la competencia electoral y seguía una lógica "prepolítica". Los contendientes apoyaban golpes de Estado militares o participaban en la lucha armada revolucionaria para cambiar las relaciones de poder existentes. Sólo cuando se firmaron acuerdos de paz en ambos países y cuando el dominio de la ley empezó a predominar, se observó a los partidos políticos surgir como auténticos contendientes por el poder.

El otro peligro del esfuerzo por adaptar estos casos históricos a las teorías existentes es el de sobrestimar la fuerza real de la democracia cristiana en la región (Lynch, 1993; McDonald y Ruhl, 1989). Aunque en El Salvador y Guatemala los partidos democratacristianos parecían cumplir con las expectativas generadas por la victoria de Frei en Chile en 1964, el pronunciado declive en su apoyo electoral después de la década de 1980 resaltó su incapacidad para echar raíces estables en la sociedad. De hecho, la fortaleza de la democracia cristiana en El Salvador y Guatemala fue más aparente que real. Los democratacristianos pudieron aprovechar circunstancias políticas únicas para impulsarse hacia el gobierno. Después de participar a veces en un escenario electoral muy restringido desde finales de los años cincuenta y principios de los sesenta, una combinación de presiones internas y externas abrió un mayor espacio para la competencia política durante los años ochenta. En el marco de un conflicto violento, polarizado, entre la derecha y la izquierda, los democratacristianos estaban en una posición única para atraer tanto la aceptación interna como la internacional. Los regímenes militares de ambos países enfrentaban amenazas cada vez mayores de los movimientos guerrilleros y una creciente oposición de las organizaciones populares. El gobierno de Reagan, incapaz de seguir justificando su apoyo a los gobernantes militares, presionó a los militares guatemaltecos y salvadoreños para que aceptaran gobiernos dirigidos por civiles. Además, el gobierno de Reagan apoyó activamente a la democracia cristiana como una "tercera vía" moderada que podía quitarle apoyo a la izquierda y evitar el extremismo de la derecha.

En vista de que la izquierda seguía excluida de la participación en ambos países y de que la derecha apenas estaba empezando a establecer auténticas organizaciones políticas, los democratacristianos parecían representar la única oposición electoral viable al continuo régimen militar durante la década de 1980. No obstante, dentro del contexto de la guerra civil y de la profunda polarización política, las presiones centrífugas hacían virtualmente imposible que cualquier partido ocupara el centro político. No es sorprendente que, una vez que ascendieron al poder, los democratacristianos se caracterizaran por ambigüedad ideológica, políticas contradictorias y alianzas oportunistas, en vez de una agenda centrista coherente. La conducta cambiante de los gobiernos de Cerezo y Duarte, aunada a su corrupción y a su subordinación a los militares, socavó la credibilidad de los democratacristianos entre los electores.

Es poco probable que se repita la extraordinaria convergencia de factores que facilitó el ascenso de los democratacristianos. Una vez que se negociaron los acuerdos de paz en ambos países, nuevos contendientes políticos ingresaron en el escenario formal de la competencia política. Dentro de este nuevo panorama político, muchos votantes que antes apoyaban a los democratacristianos como la única alternativa al gobierno militar dieron su apoyo a estos nuevos partidos. En consecuencia, en El Salvador, el partido conservador Arena y el antiguo movimiento guerrillero, el FMLN, se convirtieron en las principales fuerzas políticas del país. En Guatemala, el FRG de Ríos Montt y el Partido de Avanzada Nacional lucharon por el voto conservador, en tanto que ANN atrajo el apoyo de la izquierda. Finalmente, las fracturas históricas que conformaron antes los parámetros

de la competencia política formal fueron superadas por las nuevas divisiones en respuesta a la restructuración económica neoliberal.

La incapacidad de los líderes democratacristianos para enfrentarse efectivamente a los nuevos desafíos que surgieron durante los años noventa no era un buen presagio para su futuro. En vez de responder a su declinación electoral con un importante cambio de curso o de romper con el pasado, los dirigentes del partido se vieron envueltos en divisivas luchas internas que debilitaron aún más sus partidos. Mientras que la DCG en Guatemala ni siquiera pudo presentar un candidato en las elecciones presidenciales de 1999, los democratacristianos salvadoreños continuaron su doloroso descenso en las elecciones de 2000. Parece que la era de la democracia cristiana en El Salvador y Guatemala ha llegado a su fin.

REFERENCIAS

Baloyra, Enrique, 1982, *El Salvador en transición*, Chapel Hill, University of North Carolina Press.

———, 1995, "Elections, Civil War, and Transition in El Salvador, 1982-1994: A Preliminary Evaluation", en John Booth y Mitchell Seligson (eds.), *Elections and Democracy in Central America, Revisited*, Chapel Hill, University of North Carolina Press, pp. 45-65.

Berman, Sheri, 1997, "The Life of the Party", *Comparative Politics*, 30, núm. 1, octubre, pp. 101-122.

Bird, Shawn, y Philip J. Williams, 2000, "El Salvador: Revolt and Negotiated Transition", en Ariel Armony y Thomas Walker (eds.), *Repression, Resistance, and Democratic Transition in Central America*, Wilmington, Delaware, Scholarly Resources, pp. 25-45.

Blachman, Morris, y Kenneth Sharpe, 1992, "The Transition to 'Electoral' and Democratic Politics in Central America: Assessing the Role of Political Parties", en Louis Goodman, William LeoGrande y Johanna Mendelson Forman (eds.), *Political Parties and Democracy in Central America*, Boulder, Colorado, Westview Press, pp. 33-52.

Caldera, Hilda, y Benjamín Santos, 1986, *La Democracia Cristiana en Centroamérica*, Ciudad de Guatemala, Guatemala, Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep).

Coppedge, Michael, 1998, "The Evolution of Latin American Party Systems", en Scott Mainwaring y Arturo Valenzuela (eds.), *Politics, Society, and Democracy: Latin America*, Boulder, Colorado, Westview Press, pp. 171-206.

Córdova Macías, Ricardo, 1992, "Procesos electorales y sistema de partidos en El Salvador, 1982-1989", *Foro Internacional*, 32, núm. 4, abril-septiembre, pp. 519-559.

Dix, Robert, 1989, "Cleavage Structures an Party Systems in Latin America",

Comparative Politics, 22, núm. 1, octubre, pp. 23-37.
Dunkerley, James, 1988, *Power in the Isthmus*, Londres, Verso Press.
Garrard-Burnett, Virginia, 1998, *Protestantism in Guatemala*, Austin, University of Texas Press.
Gleijeses, Piero, 1991, *Shattered Hope: The Guatemalan Revolution and the United States, 1944-1954*, Princeton, Princeton University Press.
Goodman, Louis W., 1992, "Political Parties and the Political Systems of Central America", en Louis Goodman, William LeoGrande y Johanna Mendelson Forman (eds.), *Political Parties and Democracy in Central America*, Boulder, Colorado, Westview Press, pp. 3-14.
Jonas, Susanne, 1991, *The Battle for Guatemala*, Boulder, Colorado, Westview Press.
———, 1995, "Electoral Problems and the Democratic Project in Guatemala", en John Booth y Mitchell Seligson (eds.), *Elections and Democracy in Central America, Revisited*, Chapel Hill, University of North Carolina Press, pp. 126-157.
———, 2000, *Of Centaurs and Doves: Guatemala's Peace Process*, Boulder, Colorado, Westview Press.
Karl, Terry, 1988, "Exporting Democracy: The Effects of U. S. Electoral Policy in El Salvador", en Nora Hamilton *et al*. (eds.), *Crisis in Central America*, Boulder, Colorado, Westview Press, pp. 173-191.
Kuhn, Thomas, 1970, *The Structure of Scientific Revolutions*, Chicago, University of Chicago Press.
Loveman, Brian, 1999, *For la Patria: Politics and the Armed Forces in Latin America*, Wilmington, Delaware, Scholarly Resources.
Lynch, Edward A., 1991, *Religion and Politics in Latin America: Liberation Theology and Christian Democracy*, Westport, Conn., Praeger Publishers.
———, 1993, *Latin America's Christian Democratic Parties: A Political Economy*, Westport, Conn., Praeger Publishers.
Mainwaring, Scott, y Timothy Scully, 1995, "Introduction: Party Systems in Latin America", en Scott Mainwaring y Timothy Scully (eds.), *Building Democratic Institutions: Party Systems in Latin America*, Stanford, Stanford University Press, pp. 1-43.
McDonald, Ronald, y J. Mark Ruhl, 1989, *Party Politics and Elections in Latin America*, Boulder, Colorado, Westview Press.
Montgomery, Tommie Sue, 1995, *Revolution in El Salvador*, Boulder, Colorado, Westview Press.
Paige, Jeffrey, 1993, "Coffee and Power in El Salvador", *Latin American Research Review*, 28, núm. 3, pp. 7-40.
Rosada Granados, Héctor, 1992, "Parties, Transitions and the Political System in Guatemala", en Louis Goodman, William LeoGrande y Johanna Mendelson Forman (eds.), *Political Parties and Democracy in Central America*, Boulder, Colorado, Westview Press, pp. 89-109.

Silchar Moreno, Gonzalo, 1999, *Historia de los partidos políticos guatemaltecos*, Guatemala, Editorial Los Altos.

Trudeau, Robert, 1993, *Guatemalan Politics: The Popular Struggle for Democracy*, Boulder, Colorado, Lynne Reinner Publishers.

Webre, Stephen, 1979, *José Napoleón Duarte and the Christian Democratic Party in Salvadoran Politics*, Baton Rouge, Louisiana State University Press.

Williams, Philip J., 1994, "Dual Transition from Authoritarian Rule: Popular and Electoral Democracy in Nicaragua", *Comparative Politics*, 26, núm. 2, enero, pp. 169-186.

———, y Knut Walter, 1997, *Militarization and Demilitarization in El Salvador's Transition to Democracy*, Pittsburgh, University of Pittsburgh Press.

[1] Los fundamentos teóricos del pensamiento social católico pueden rastrearse desde la encíclica *Rerum Novarum* del papa León XIII en 1891, que reconoció el derecho de los trabajadores a organizarse y el papel legítimo que desempeña el Estado para mejorar las condiciones de la clase trabajadora.

[2] La doctrina social católica se presenta a sí misma como una alternativa al materialismo tanto del comunismo como del capitalismo. El núcleo del argumento es que estos dos últimos dan preferencia a los valores materiales sobre los espirituales y humanitarios. Por el contrario, el pensamiento social católico favorece un orden político en que la injusticia y la desigualdad social pueden ser erradicadas, pero que a la vez respeta el derecho a la propiedad privada. "Los democratacristianos parecían ofrecer una sociedad en que los trabajadores y los capitalistas podían coexistir sin luchas y con respeto mutuo. Creían que era posible de manera similar yuxtaponer la propiedad privada y la responsabilidad social" (Lynch, 1993, p. ix).

[3] La Internacional Demócrata Cristiana tenía 76 miembros a finales de 1996. La organización está representada actualmente en las Naciones Unidas. Muchos de sus miembros son partidos políticos de países en los cuales la democracia se ha establecido recientemente.

[4] Fundada en Montevideo, Uruguay, en 1947, la ODCA se expandió durante los años cincuenta. El pensamiento de Jacques Maritain influyó en su fundación. La ODCA creció hasta llegar a contar entre sus miembros a 34 partidos políticos de 26 países diferentes.

[5] "En vista de que aceptan las principales premisas de sus oponentes a la vez que se siguen presentando como 'moderados', los latinoamericanos perciben a los democratacristianos simplemente como sombras menos comprometidas y menos consistentes que sus rivales socialdemócratas. Esto explica en gran medida la desalentadora historia del movimiento desde sus días gloriosos de los años sesenta" (Lynch, 1993, p. 48).

[6] Éste es el caso con el estudio de McDonald y Ruhl sobre los partidos políticos y los sistemas de partidos en Latinoamérica. Los autores identifican una gran diversidad de partidos políticos en la región; sin embargo, explícitamente excluyen de su concepto de partido político a "las organizaciones revolucionarias o movimientos guerrilleros que no han participado en la actividad electoral, incluso aunque se consideren a sí mismos partidos políticos" (McDonald y Ruhl, 1989, p. xi). Mainwaring y Scully (1995, p. 2), siguiendo a Sartori, también consideran que un partido es "un grupo político que *presentaría* candidatos a los cargos públicos, pero que no puede hacerlo así ya sea porque se le ha ilegalizado o porque no se celebran elecciones". Sin embargo, al igual que McDonald y Ruhl, le niegan la condición de partido a "los grupos revolucionarios de vanguardia que no compiten en las elecciones".

[7] Blachman y Sharpe (1992, p. 40) estudiaron el importante papel de los militares en la prohibición de los partidos, a los que consideraban peligrosos por sus posibilidades de movilizar a la gente.

[8] Como lo indican Blachman y Sharpe (1992, p. 4), la política electoral de los años ochenta en la mayoría de los países centroamericanos se debía más al deseo de los militares y de las élites terratenientes de "restablecer el orden y conservar su poder y privilegios" que a una apertura democrática real.

[9] Para Kuhn (1970, p. 24), la ciencia normal consistía de operaciones no críticas de "colocar las cosas en su lugar": "[la ciencia normal] se parece a un esfuerzo por obligar a la naturaleza a ajustarse a la caja preformada y relativamente inflexible que proporciona el paradigma. Ninguna parte del objetivo de la ciencia normal consiste en recurrir a nuevas clases de fenómenos; en realidad, los que no se ajustan a la caja frecuentemente no se ven. Tampoco es el propósito de los científicos inventar nuevas teorías, y con frecuencia son intolerantes de las inventadas por otros".

[10] "Entre 1957 y 1960, El Salvador sufrió una baja de 34% en el valor de su principal exportación. En vista de que las exportaciones de café representaban cerca de 90% de los ingresos totales por exportación, y como el gobierno seguía dependiendo fuertemente en los aranceles, los ingresos del gobierno no aumentaron durante este periodo" (Williams y Walter, 1997, p. 53).

[11] Rodríguez y Lara Velado consultaron con líderes democratacristianos sudamericanos antes de establecer el partido. También fueron alentados por el arzobispo de San Salvador, monseñor Luis Chávez y González (Caldera y Santos, 1986, p. 93).

[12] Durante las elecciones de 1970 los militares aprovecharon la ola de sentimiento nacionalista que siguió a la breve guerra de 1969 con Honduras. El PDC ganó 16 escaños en la legislatura y sólo ocho municipios (Webre, 1979, p. 136).

[13] Aunque Coppedge (1998) pone en duda el concepto que tiene Dix (1989) de los partidos políticos

latinoamericanos como partidos que “aceptan a todos”, toma de ese autor la idea central de que los partidos políticos se constituyen a sí mismos como conjuntos opuestos de respuestas para enfrentar diferentes divisiones históricas dentro de la sociedad. Este concepto es útil para recuperar la especificidad histórica de los casos centroamericanos que hemos mencionado antes, lo que es básico para entender el papel de los partidos democratacristianos en el desarrollo político reciente de Centroamérica. En El Salvador y Guatemala, argumentaríamos que desde la década de 1930 la principal división ha sido entre los partidarios del gobierno autoritario militar y el desarrollo basado en una agricultura que reprime a la mano de obra y los que están comprometidos con un sistema político más abierto y una forma equitativa de desarrollo.

[14] En el transcurso de 1980, 60 alcaldes y otros funcionarios democratacristianos fueron asesinados por escuadrones de la muerte (Montgomery, 1995).

[15] El mayor retirado D’Aubuisson había servido como subdirector del servicio de inteligencia salvadoreño y estaba relacionado con los escuadrones de la muerte.

[16] La ayuda militar a El Salvador aumentó de 83 millones de dólares en 1983 a 197 millones en 1984 (Williams y Walter, 1997).

[17] Mainwaring y Scully (1995) presentan este argumento para los partidos en general.

[18] Los partidos que integraban la CD eran los siguientes: Movimiento Nacionalista Revolucionario, Movimiento Popular Social Cristiano y Partido Social Demócrata.

[19] En realidad, a principios de 1976 la DCG empezó a colaborar con el partido del presidente Laugerud (el Partido Institucional Democrático) en el Congreso.

[20] La coalición UNO incluía a la DCG y al PNR. Este último era una escisión del Movimiento de Liberación Nacional (MLN), de extrema derecha.

[21] De acuerdo con Dunkerley (1988, p. 461), “entre 1957 y 1985 el partido no ofreció al electorado un miembro civil como candidato”.

[22] Según Trudeau (1993, pp. 61-62), “una ‘ley de la ubicación en el espectro político’ había estado ayudando a la DCG antes de este periodo. Como ninguna verdadera organización de izquierda había sobrevivido dentro del sistema político durante el régimen de Lucas García, a la DCG le había sido fácil ser moderada y a la vez cubrirse con un manto progresista”.

[23] Como escribe Jonas (1991, p. 163), “En marcado contraste con lo que hizo Alfonsín en Argentina después de la guerra sucia de ese país, Cerezo había realizado su campaña prometiendo que *no* perseguiría a los oficiales del ejército por crímenes contra los derechos humanos o por las actividades de los escuadrones de la muerte”.

[24] Los protestantes representan cerca de una tercera parte de la población total de Guatemala (Garrard-Burnett, 1998). Como evangelista prominente, Serrano aprovechó sus estrechas relaciones con los líderes de las iglesias para movilizar el apoyo evangélico.

[25] La mayoría de ellos se pasaron al partido de Ríos Montt, el Frente Republicano Guatemalteco (FRG).

[26] La ANN participó como la coalición URNG-DIA en las elecciones de 1999 (cuadro X.2).

[27] Éste es el caso del estudio de McDonald y Ruhl sobre los partidos políticos latinoamericanos. Adoptando un punto de vista universalista de la política, los autores tratan al subcontinente como si fuera lo bastante homogéneo políticamente para que ellos puedan construir tipologías que comprenden a la vez casos centroamericanos y sudamericanos. McDonald y Ruhl (1989, p. 335) escriben: “Es nuestro supuesto que las causas de la conducta política en lo general y de la evolución de los partidos políticos en particular son universales, que no son características exclusivas de un país o de una región, y que estas causas universales sólo se manifiestan cuando cuidadosamente se las identifica, especifica y compara en contextos que abarcan varias culturas. En nuestro análisis de Latinoamérica hemos encontrado patrones generales, o comunes —en particular las cambiantes condiciones que se producen cuando los países han procurado modernizarse— y pautas locales, las experiencias y condiciones idiosincrásicas que han afectado la conducta política y la evolución de los partidos en países específicos”. En contraste, creemos que existen fuertes razones históricas para aplicar análisis distintos en cada área.

XI. LA GRAN MINORÍA: LA DEMOCRACIA CRISTIANA EN PERÚ*

GREGORY D. SCHMIDT

LOS DEMOCRATACRISTIANOS siempre han parecido estar fuera de lugar en Perú, uno de los países más diversos y étnicamente estratificados del hemisferio occidental. En una tierra de caudillos, masas de pobres y demagogia frecuente, los democratacristianos de Perú han sido dirigidos por intelectuales, han recibido la mayor parte de su apoyo de una clase media urbana con buena educación y se han expresado mediante un discurso político complejo. Mientras que Perú ha presenciado varios cambios abruptos en sus sistemas político y económico desde la segunda Guerra Mundial, los democratacristianos del país han estado constantemente comprometidos con la democracia y la justicia social, incluso cuando el conflicto sobre la importancia relativa de estos dos valores condujo a un grave cisma en su movimiento. En contraste con la improvisación y el oportunismo prevalecientes en la política peruana, los democratacristianos han subrayado la organización del partido, han mostrado competencia técnica y con frecuencia han tomado posiciones fundamentadas en principios.

En vista de esta aparente falta de ajuste al medio peruano, no es de sorprender que los democratacristianos nunca hayan accedido a la presidencia del país. Sin embargo, es notable que hayan tenido un impacto sobre las instituciones políticas y la política pública mucho mayor de lo que podría esperarse dado su limitado apoyo electoral. En realidad, Pedro Planas, ya fallecido, un prominente estudioso y activista político peruano, llamó a los democratacristianos "la gran minoría", designación que resume claramente el papel que han desempeñado en Perú durante la segunda mitad del siglo XX.

Durante la mayor parte del periodo 1963-1990, los democratacristianos estuvieron alineados, formal o informalmente, con el gobierno en el poder, desempeñando un papel central no muy diferente del que tenían los demócratas libres en la Alemania de la posguerra. De los partidos democratacristianos han surgido destacados parlamentaristas, notables ministros del gobierno e importantes líderes de los gobiernos locales, en particular de Lima. Además, el liderazgo de las asociaciones civiles y profesionales ha provenido desproporcionadamente de sus filas. Incluso varios destacados líderes de otros partidos políticos con fuerte identidad democrática tienen sus raíces en la democracia cristiana.

Este capítulo estudia los orígenes y la evolución de los partidos democratacristianos en el marco variable y a menudo complejo de la política peruana, destacando la continuidad de sus ideas centrales y sus principales propuestas políticas. Aunque alianzas populares con otros partidos o líderes han limitado por lo general el potencial electoral de los democratacristianos, estos últimos al parecer no estaban dispuestos o no fueron capaces de aprovechar oportunidades clave para ganar el apoyo del electorado notoriamente volátil de Perú durante una serie de transiciones democráticas. Ernesto Alayza Grundy,

uno de los fundadores de los dos partidos democratacristianos principales del Perú, reflexiona: "Para nosotros, la mayor prioridad no es ganar el poder político; el objetivo principal es formar un partido político con una estructura estable, principios sólidos y soluciones para los problemas. Ese partido puede trabajar dentro del gobierno o fuera de él".[1] Incluso cuando un importante cisma y varias deserciones debilitaron sus oportunidades de éxito electoral, los democratacristianos sacrificaron repetidas veces sus intereses partidistas inmediatos para fortalecer las frágiles instituciones democráticas. Además, han perdido oportunidades de subir al poder, como resultado de la inestabilidad política, de errores tácticos o simplemente de mala suerte.

Las secciones iniciales de este capítulo estudian el desarrollo inicial de la democracia cristiana peruana, incluyendo los dos efímeros partidos políticos formados en 1931 y 1948. Las siguientes secciones muestran la evolución de la democracia cristiana como una fuerza permanente en la política peruana desde mediados de los años cincuenta, con referencias a los católicos progresistas en otros partidos. Este panorama histórico concluye con una breve relación de los esfuerzos recientes por reunificar a los católicos progresistas y el sorprendente resurgimiento de la democracia cristiana en la elección de 2001. La última sección del capítulo resume las contribuciones de los democratacristianos en Perú y discute varios factores que han limitado su éxito.

LA UNIÓN POPULAR

En contraste con Chile, Perú no desarrolló un partido conservador de alguna importancia que defendiera constantemente a la Iglesia. En cambio, la Iglesia apoyó a políticos de diferentes partidos que estaban predispuestos a defender sus intereses. La mayoría de los miembros de la Unión Católica y de otros tempranos grupos laicos provenían de la pequeña clase media, en especial en las provincias, y de antiguas familias de clase alta. En general, las organizaciones laicas católicas, así como los partidos democratacristianos que después han surgido, habían tenido más fuerza en el sur de Perú —en particular en Arequipa— que en el norte. Las principales ciudades del sur —Arequipa, Ayacucho y Cuzco— eran las sedes de las arquidiócesis y las universidades más antiguas, pero su desarrollo económico se había quedado atrás desde mediados del siglo XIX. En las provincias, el catolicismo frecuentemente había sido un estandarte para afirmar los valores locales, rechazando las ideas "extranjeras" y resistiendo el dominio cada vez mayor de Lima (Klaiber, 1992, p. 218). Sin embargo, la doctrina social de la Iglesia empezó a llegar a una nueva generación de católicos de clases media y alta al fundarse la Universidad Católica en 1917 y con el crecimiento de nuevas organizaciones laicas durante los años veinte (Planas, 1996, pp. 25-43).

El derrocamiento en 1930 del régimen autoritario de Augusto Leguía produjo una apertura democrática con oportunidades extraordinarias para nuevas fuerzas políticas. Durante la dictadura de Leguía no sólo se había destruido o desacreditado a los partidos políticos, sino que el electorado, compuesto totalmente por hombres, había aumentado

en más de la mitad desde la última elección competitiva en 1919. Entre los muchos grupos políticos incipientes y que se organizaron para competir en las elecciones de octubre de 1931 estuvo la Unión Popular (UP). Uno de los primeros volantes repartidos por la UP proclamaba que se había formado para "defender los intereses sagrados de las clases media y proletaria por medio de un conjunto de reformas sociales introducidas por los partidos católicos de Alemania y de Bélgica y que forman la base de la verdadera democracia a la que justamente se llama DEMOCRACIA CRISTIANA".[2]

Carlos Arenas y Loayza, presidente de la Unión Católica y vicepresidente de la Universidad Católica, fue elegido presidente del nuevo partido. Aunque la mayor parte del liderazgo de la UP estaba integrado por profesionales de clase media y profesores de la universidad, las bases del partido en Lima y El Callao provenían de la clase media baja y por lo común eran miembros de confraternidades populares. Fuera de la capital, la UP tenía una conformación más conservadora (Klaiber, 1992, pp. 215 y 218-220).

La plataforma de la UP fue redactada por los elementos más progresistas del partido, que se inspiraron en la doctrina social de la Iglesia. Proponía una economía mixta con propiedad estatal de los recursos naturales más importantes, un "salario justo" y un fuerte sistema de seguridad para los trabajadores, así como la devolución de las tierras usurpadas a las comunidades indígenas. Otros puntos favorecían el reparto de utilidades y la copropiedad de las compañías por sus empleados, promovía el proteccionismo económico, reconocía el derecho de los obreros a formar sindicatos y a declararse en huelga y defendía una mayor protección para las mujeres y los niños en la fuerza laboral. El programa hacía hincapié en la educación, en especial para la población indígena, a la vez que rechazaba la idea de que sólo el Estado podía dirigir las escuelas. También estaba en favor de proporcionar viviendas baratas, un mayor papel del Estado en el cuidado de la salud, la reforma tributaria, una supervisión independiente del presupuesto y la rehabilitación de los delincuentes. Influida por los escritos de Víctor Andrés Belaúnde —el intelectual progresista católico más distinguido de Perú—, la UP proponía la creación de una democracia social, con representación funcional en el Senado, servicio civil de carrera, gobiernos locales y regionales, autonomía del poder judicial y garantías para el sufragio libre y los derechos individuales y sociales (Klaiber, 1992, pp. 215 y 217; Planas, 1996, pp. 71-74).

Durante la primera mitad de 1931, la UP pareció ser el partido mejor organizado y más popular de Perú (Planas, 1996, pp. 62-63). Sin embargo, en julio los dos políticos más carismáticos del país, Luis Sánchez Cerro y Víctor Raúl Haya de la Torre, regresaron al país para competir en las elecciones. Sánchez Cerro, el héroe militar de ascendencia india y quizás negra, que había derrocado a Leguía, contendió como candidato de un pequeño partido de derecha, con el apoyo financiero de algunos importantes miembros de la oligarquía exportadora. La Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) de Haya de la Torre desarrolló una organización jerárquica y casi militar, así como una compleja ideología populista.

A pesar de marcadas diferencias en el tono y en el énfasis, las plataformas de la UP y de la APRA tenían muchas similitudes. La última, sin embargo, hacía un llamado a la total

separación de la Iglesia y el Estado. Además, aunque muchos católicos practicantes formaban parte de sus filas, la APRA era ampliamente percibida como anticlerical a consecuencia del decisivo papel de Haya de la Torre al evitar la consagración del Perú al Sagrado Corazón de Jesús en 1923, y por el hecho de que el partido fuera fundado en el México posrevolucionario y anticlerical. El liderazgo de la APRA repetidas veces repudió el anticlericalismo durante la campaña de 1931, pero varios incidentes parecieron confirmar los peores temores de los católicos (Klaiber, 1977, pp. 140-142).

A medida que se aproximaba la elección, los votantes se polarizaron detrás de Sánchez Cerro y Haya de la Torre, los dos caudillos carismáticos. Arenas y Loayza argumentó que la UP debía apoyar a Sánchez Cerro como el menor de los dos males, pero la mayoría de los miembros del partido se opusieron a este plan para votar estratégicamente. Después de que Arenas y Loayza renunciara a la presidencia de la UP a finales de septiembre, se alió con otros partidos moderados para apoyar la candidatura de José María de la Jara. La UP también decidió apoyar listas independientes de candidatos para el Congreso, en vez de presentar sus propios candidatos (Planas, 1996, pp. 84-90).

Sánchez Cerro ganó la batalla de los caudillos, y recibió 51% de los votos válidos, frente a 35% que favoreció a Haya de la Torre. La candidatura en el último momento de De la Jara, que estaba en el exterior y no hizo campaña, recibió sólo 7%.[3] La APRA obtuvo la mayor parte de su apoyo de las zonas del norte y centro de Perú, más afectadas por la modernización impulsada por las exportaciones, y de los estratos medios y los obreros organizados en Lima. En contraste, Sánchez Cerro ganó en los departamentos menos influidos por la modernización, así como en Lima y El Callao, gracias al apoyo del lumpenproletariado urbano. El héroe popular ganó 65% de los votos en Arequipa, bastión del catolicismo provincial, desde donde lanzó el golpe de Estado de 1930.

Belaúnde fue el más sobresaliente de los candidatos apoyados por la UP que lograron su elección al Congreso constitucional. Este elocuente representante de Arequipa fue el principal partidario de varias disposiciones de la Constitución de 1933, entre ellas la protección oficial para la Iglesia católica con garantías para la libertad de culto de otras religiones, reparto de utilidades para los empleados y obreros, y un Senado funcional. Sin embargo, estas últimas dos disposiciones fueron letra muerta. También se opuso con éxito al monopolio estatal de la educación (Basadre, 1983, pp. 257, 261-262 y 265; Espinosa Laña, 1999).

Al fallar en su esfuerzo por atraer un apoyo considerable en el centro del espectro político, la UP se desbandó después de la elección de 1931. En la política muy polarizada de los años treinta, la jerarquía de la Iglesia, muchos católicos conservadores e incluso algunos progresistas fueron identificados con la derecha política. No obstante, los progresistas desarrollaron una mayor profundidad intelectual, importantes contactos internacionales por medio de las organizaciones de la juventud católica (Planas, 1996, pp. 95-103) y un movimiento laico más vigoroso: Acción Católica de Perú, fundada en 1935. "Fue en la Acción Católica donde muchos profesionales, profesores universitarios y profesores de escuelas conocieron los elementos básicos del mensaje social de la Iglesia.

Por primera vez cientos de católicos en Perú empezaron a identificar la justicia social con su propia fe cristiana." Acción Católica, sin embargo, era en proporción abrumadora un movimiento de clase urbana media que no llegaba a los campesinos y tenía poca influencia entre los obreros (Klaiber, 1992, p. 243).

Aunque el catolicismo progresista ganó muchos simpatizantes en la pequeña clase media, la APRA continuó conservando la lealtad de muchos de los peruanos más pobres. Durante el prolongado periodo de violencia y represión que siguió a la elección de 1931, la APRA reforzó su atractivo para las masas apropiándose de imágenes y símbolos del catolicismo popular. "Uniendo emociones políticas y religiosas, los apristas crearon un movimiento casi mesiánico que creció en la adversidad y sólo se debilitó al triunfar." La APRA también inició con mucho éxito una campaña para despojarse de su imagen anticlerical. En 1942, la convención nacional clandestina del partido abrogó el artículo en su programa que defendía la separación de la Iglesia y el Estado (Klaiber, 1977, pp. 145-154, 160-163).

BUSTAMANTE Y RIVERO Y EL MOVIMIENTO POPULAR DEMOCRÁTICO

Al llegar a su término la segunda Guerra Mundial, factores internacionales e internos convergieron para producir otra apertura democrática en Perú. En 1944, un grupo de distinguidos arequipeños de tendencias católicas progresistas organizó el Frente Democrático Nacional (FDN) con el fin de ejercer presión para que se celebraran elecciones limpias y presentar un candidato de consenso que restablecería la democracia sin restricciones (Werlich, 1978, p. 229). Su elección para presidente fue José Luis Bustamante y Rivero, un distinguido jurista e importante laico de una antigua familia arequipeña. Bustamante fue miembro durante mucho tiempo de la Unión Católica, y había sido consejero cercano de Sánchez Cerro durante el golpe de Estado de 1930, además de ser uno de los candidatos apoyados por la UP durante la elección de 1931. Sin embargo, se mantenía por encima de la política partidista.

Bustamante aceptó la oferta del FDN, siempre que la APRA fuera legalizada y se le invitara a unirse al movimiento. El presunto candidato también subrayó que esperaba que todos los miembros del FDN confiaran en él para trazar un curso moderado de renovación institucional entre los extremos de la derecha y de la izquierda. Dejó en claro que favorecía apoyar "la consecución de una democracia cristiana" y descartó toda clase de negociación política que limitara su libertad de acción (Bustamante y Rivero, 1949, pp. 347-353). La Junta Nacional de Elecciones (JNE) posteriormente levantó la prohibición que pesaba sobre la APRA, lo que hizo posible que los candidatos apristas al Congreso contendieran en las listas del FDN (Werlich, 1978, p. 230).

Con dos terceras partes de los votos válidos, Bustamante obtuvo una victoria abrumadora sobre el mariscal Eloy Ureta, héroe de la guerra de 1941 con Ecuador, quien fue apoyado por miembros importantes de la oligarquía exportadora. La APRA obtuvo una

mayoría absoluta en el Senado y, gracias al apoyo de otros miembros del FDN, una mayoría operativa en la Cámara de Diputados. Sin embargo, poco duró la euforia por la victoria. El nuevo presidente y la APRA pronto se enfrentaron por la integración del gabinete, que en un principio fue encabezado por Rafael Belaúnde, importante laico católico y hermano de Víctor Andrés.

En el sistema político peruano, los ministros deben disfrutar de la confianza del Congreso y el presidente carece de veto efectivo (Schmidt, 1998). La delegación de congresistas extraordinariamente disciplinados de la APRA pronto obligó a la renuncia de dos miembros clave del gabinete, y Belaúnde sólo permaneció seis meses en el cargo. Se formaron cuatro diferentes gabinetes durante los dos primeros años del periodo de Bustamante. Además, los legisladores apristas metódicamente aprobaron el programa de su partido, para disgusto del presidente moderado y alarma de la oposición conservadora. En julio de 1947, los oponentes de la APRA aprovecharon una oscura disposición de los reglamentos del Senado para cerrar el Congreso, dejando que el legalista Bustamante gobernara por decreto.

Bustamante se dio cuenta tardíamente del valor de un partido político. En un discurso por radio en junio de 1948, el presidente llamó a crear un partido moderado que sirviera como contrapeso a los excesos tanto de la izquierda como de la derecha. Insistió en que ese partido no estaría basado en la lealtad personal a él ni serviría como instrumento del gobierno En cambio, se fundaría para conservar la democracia y asegurar la libertad "y la justicia social como imperativo cristiano y humanista" (Bustamante y Rivero, 1949, pp. 162-165). En julio, el presidente explícitamente se adhirió al socialcristianismo y dijo que el nuevo partido debería estar inspirado en principios cristianos (Planas, 1996, pp. 131-132).

El nuevo partido, el Movimiento Popular Democrático (MPD), fue fundado a finales de agosto por una nueva generación de católicos progresistas. El manifiesto del MPD afirmó su compromiso con "la democracia social, económica y política inspirada por principios sociales cristianos", pero también aseguró explícitamente que el movimiento era independiente de la Iglesia y no se trataba de un partido confesional. El MPD consideraba que el trabajo y la propiedad eran derechos individuales con una función social y proponía un "salario familiar", el reparto de utilidades y una estrecha cooperación entre el capital y el trabajo. La declaración defendía el derecho a formar sindicatos, pero condenaba su manipulación por intereses faccionarios (es decir, apristas). Otros artículos argumentaban que los productos de consumo básico debían tener prioridad sobre los bienes de lujo, hacían un llamado a la descentralización, y aseguraban el interés del movimiento por las clases medias, las comunidades indígenas, las mujeres, la unidad familiar y los militares (Planas, 1996, pp. 134-136).

Después de que los cuadros apristas en la armada intentaran sin éxito un golpe de Estado, Bustamante prescribió la APRA. Así, parecía probable que el MPD ganaría las elecciones de una asamblea constitucional previstas para marzo de 1949. Sin embargo, la represión de la APRA no bastó para la oligarquía, que también se oponía a un partido moderado reformista. El 27 de octubre de 1948, Bustamante fue derrocado por el

general Manuel Odría, que recibió apoyo financiero de Pedro Beltrán, quien publicaba *La Prensa* y era un importante vocero de la oligarquía. Al ser descalificado el único oponente de Odría en la elección de 1950, los miembros del MPD y otros católicos progresistas participaron en una rebelión que se apoderó brevemente de Arequipa (Planas, 1996, pp. 167-174).

EL PARTIDO DEMÓCRATA CRISTIANO Y LA ELECCIÓN DE 1956

Aunque sus políticas de libre mercado beneficiaron inicialmente a la oligarquía, Odría pronto empezó a construir un apoyo político propio, en especial entre los residentes de los *pueblos jóvenes* que habían empezado a rodear a Lima. A medida que el periodo del general se aproximaba a su fin en 1955, Pedro Beltrán —que se opuso al aumento del gasto del gobierno de Odría— organizó una Coalición Nacional (CN) heterogénea, para ejercer presiones con el fin de que las elecciones fueran limpias y se permitiera la participación de la APRA en ellas (Payne, 1968, p. 23). Desde Ginebra, el ex presidente Bustamante hizo un llamado a sus asociados para que organizaran un nuevo partido socialcristiano. Respondiendo a su llamado, los católicos progresistas en Arequipa fundaron un movimiento democratacristiano bajo la dirección de dos de los antiguos consejeros de Bustamante, Mario Polar y Héctor Cornejo Chávez (Planas, 1996, pp. 175-186).

En diciembre de 1955, matones seguidores de Odría y policías atacaron a miembros de la CN de Beltrán en Arequipa. Como protesta, los líderes del naciente movimiento democratacristiano organizaron una huelga general que obligó a Odría a sacar del gobierno a su odiado ministro del Interior, Alejandro Esparza Zañartu, el cual constituía un importante obstáculo para la celebración de elecciones justas (Vargas Llosa, 1995, pp. 295-297). Después de una revuelta de la guarnición del ejército en Iquitos y de la indignación internacional por el subsiguiente encarcelamiento de Beltrán, Odría se vio obligado a abandonar todo plan de reelegirse (Payne, 1968, pp. 23-25).

Mientras tanto, durante varios meses del segundo semestre de 1955, también se organizaron movimientos democratacristianos en El Callao, Chiclayo, Cuzco, Lima y Trujillo. El movimiento en la capital estaba integrado por una antigua generación de asociados y partidarios de Bustamante —incluyendo a cinco anteriores miembros del gabinete— y por una generación más joven que había crecido participando en Acción Católica y otras organizaciones laicas. En enero de 1956, varios movimientos regionales se reunieron en Lima para formar el Partido Demócrata Cristiano (PDC).

Mario Polar, de Arequipa, fue elegido presidente del nuevo partido, y a Luis Bedoya, de Lima —el ex secretario de prensa de Bustamante—, se le eligió secretario general. Los democratacristianos estaban muy orgullosos de que su partido, a diferencia de la mayoría de partidos de Perú, estuviera basado en principios y no en la lealtad personal. De hecho, un rasgo característico del nuevo partido fue la oposición a los caudillos. Alayza Grundy recuerda que Bedoya dijo en cierta ocasión: “Todos queríamos marchar

en hilera y no permitíamos ni nos agradaba que alguien marchara dos pasos adelante y nos dirigiera".[4] Se formó un Movimiento de Unión Cristiana conjuntamente con el PDC, pero nunca atrajo un número importante de seguidores (Klaiber, 1992, p. 252).

El congreso fundador del PDC aprobó un breve documento que delineaba sus principios. El documento declaró que el partido sería una organización permanente dedicada al establecimiento de un orden democrático y social-cristiano; reconocía a la familia como la unidad fundamental de la sociedad e insistía en la importancia de la educación, la sociedad civil, los derechos civiles y políticos, los límites al poder del Estado y la descentralización. Argumentaba que tanto el capital como el trabajo debían tener como fin el bien común; sostenía que la propiedad tiene tanto funciones individuales como sociales, y defendía un salario justo y adecuado para sostener una familia, el reparto de utilidades y la participación de los trabajadores en la administración y la propiedad. El documento también hacía referencia a la necesidad de comenzar la planificación nacional dentro de una estructura política más descentralizada; construir viviendas para personas de bajos ingresos; llevar a cabo la reforma agraria y apoyar la industrialización. Concluía repudiando el individualismo, el capitalismo, el totalitarismo y todos los tipos de dictaduras, así como el marxismo (véase Rey de Castro, 1985, pp. 440-446).

Cuando Bustamante no aceptó la invitación del PDC para ser su candidato presidencial, el partido apoyó a Hernando de Lavalle, un importante miembro de la oligarquía que tenía reputación de integridad personal. Lavalle estuvo de acuerdo en apoyar la descentralización y aceptó a Honorio Delgado del PDC como su candidato para la segunda vicepresidencia. Lavalle tuvo inicialmente una amplia aceptación como candidato de unidad nacional, pero empezaron a circular rumores que lo vinculaban con Odría.

A finales de febrero de 1956, el ex presidente Manuel Prado ingresó en la contienda. Al siguiente mes lo siguió Fernando Belaúnde, un joven arquitecto que era hijo de Rafael y sobrino de Víctor Andrés. Dadas sus raíces familiares en Arequipa, muchos de los familiares y amigos de Belaúnde militaban en el PDC. Se invitó al arquitecto a unirse al nuevo partido, e incluso asistió a algunas de sus primeras reuniones. Sin embargo, como lo recuerda Alayza Grundy (1999a), "no veía ningún futuro político con nosotros […] nosotros éramos, puede decirse, débiles políticamente y fuertemente doctrinarios, y él estaba interesado precisamente en lo opuesto".

Aunque se hizo eco de algunas de las propuestas que la APRA había presentado desde hacía tiempo, Belaúnde desarrolló un estilo político distinto y muy atractivo, mezclando hábilmente diversas aspiraciones y tradiciones ideológicas en una ideología ecléctica y reformista que evocaba el orgullo en el pasado indígena de Perú y la esperanza en su futuro (Bourricaud, 1970, pp. 229-258). En contraste, "los democratacristianos nunca superaron su imagen 'intelectual', en cierta forma elitista, que les impedía captar la imaginación de las clases bajas. Aunque bien intencionados, no entendían que a los católicos de las clases bajas la mayor parte de las veces los confundía o aburría el lenguaje legalista o afectado de las encíclicas papales" (Klaiber, 1977, p. 168). En palabras de Alayza Grundy (1999a), "Nunca hemos aprendido a hablarle al pueblo".

Belaúnde no sólo demostró ser mucho más apto que los democratacristianos para atraer el apoyo popular, sino que además su aceptación era mayor entre los seguidores más fieles de la democracia cristiana: los votantes de clase media que no se identificaban con la APRA. En especial fue una alternativa atrayente para la clase media más tradicional de Arequipa y otras ciudades del sur y para los nuevos sectores medios que habían surgido con la rápida urbanización que siguió a la segunda Guerra Mundial, particularmente en Lima. A medida que la APRA se hizo más conservadora a finales de los cincuenta y principios de los sesenta, el arquitecto obtendría también los votos de algunos ex apristas.

Después de que Lavalle aceptó el apoyo del partido de Odría a principios de mayo, Delgado renunció a la planilla de candidatos, y el PDC cambió su apoyo en favor de Prado (Rey de Castro, 1985, p. 272; Payne, 1968, p. 27). A principios de junio, Delgado, Prado y los líderes de la APRA negociaron una de las extrañas alianzas de conveniencia que periódicamente han cambiado el curso de la política peruana. Odría, en forma no oficial, cambió su apoyo y lo dio a Prado, probablemente a cambio de la seguridad de que no habría investigaciones serias de la corrupción generalizada durante su gobierno. La APRA estuvo de acuerdo en apoyar a Prado y a sus listas de candidatos al Congreso a cambio de garantías de que fuera legalizada. También se les permitió a algunos apristas lanzarse como candidatos independientes en las elecciones para el Congreso con el propósito de debilitar a Belaúnde (Werlich, 1978, p. 257).

En la elección del 17 de junio las mujeres peruanas votaron por vez primera. Aunque Prado ganó la presidencia con 45% de los votos válidos, Belaúnde obtuvo un sorprendente 37%. El movimiento personalista de Prado aseguró una pluralidad de curules en la Cámara de Diputados y una mayoría en el Senado. El "Frente Independiente", cuyas listas incluían apristas, tuvo el segundo grupo más numeroso en ambas cámaras. El PDC lanzó su propia lista sólo en Arequipa, donde obtuvo una pluralidad de los votos para el Congreso. En Lima y varios otros departamentos, los candidatos del PDC aparecieron en una variedad de listas heterogéneas con el propósito de aumentar al máximo sus oportunidades según el sistema de votación de lista abierta (Bedoya, 1999). El PDC ganó 14 curules en la Cámara de Diputados y seis curules en la de Senadores (Flores Nano, 2000, p. 46): un resultado mejor que los del improvisado frente de Belaúnde.

INTRANQUILIDAD SOCIAL Y CONFLICTO INTERNO

El grupo del PDC en el Congreso pronto obtuvo una merecida reputación de inteligencia excepcional, habilidades oratorias, trabajo duro y honradez. Los legisladores del PDC cooperaron con el gobierno, la APRA y otros partidos para restablecer las instituciones democráticas, desempeñando un papel importante en el restablecimiento de la supervisión por parte del Congreso. Criticaron las primeras medidas económicas de Prado y posteriormente votaron en contra de un plan de estabilización elaborado por

Pedro Beltrán, pese a ser primer ministro en agosto de 1959 (Portocarrero Suárez, 1979, pp. 34-35 y 41). El PDC presentaba continuamente asuntos relacionados con la corrupción durante el régimen de Odría, que implicaban directamente al ex presidente y a su familia (Bourricaud, 1970, pp. 291-292). El partido también intentó, sin éxito, que se aprobara legislación para el reparto de utilidades y celebró un contrato para que el dominico francés Louis-Joseph Lebret realizara un estudio de la pobreza.

En marcado contraste con su posición bajo Bustamante, la APRA adoptó una política de convivencia ante Prado e incluso lo apoyó en la mayoría de los temas críticos. Aunque el gobierno de Prado hizo mucho para restaurar el gobierno constitucional y la estabilidad económica, fue poco lo que logró para enfrentar la creciente intranquilidad social, en especial en el campo. A finales del periodo de Prado, las invasiones de tierras y las huelgas de los arrendatarios se generalizaron en Perú.

Este ambiente de intranquilidad social y el éxito de la Revolución cubana hicieron que muchos apristas abandonaran su partido, cada vez más conservador. Estos factores también sirvieron como catalizador para el surgimiento de un ala más radical en el PDC, dirigida por Cornejo Chávez e integrada principalmente por los miembros más jóvenes. Cornejo argumentó que era necesaria una tendencia izquierdista dentro del partido para reclutar a los jóvenes, atraídos cada vez más por el marxismo (Rey de Castro, 1985, p. 171). Influidos por el sector que seguía a Tomic en el Partido Demócrata Cristiano chileno y por los escritos de Emmanuel Mounier, los seguidores de Cornejo desarrollaron una interpretación "comunitaria" de la doctrina social católica y se mostraron dispuestos a dialogar con los grupos marxistas. Esta ala radical insistió en la necesidad de un "cambio estructural" —término lo bastante ambiguo para obtener amplia aceptación— y gradualmente empezó a incorporar términos marxistas en su léxico.

Cornejo y sus seguidores criticaron implacablemente a Prado y especialmente a Beltrán. Cuando Prado invitó a Alayza Grundy a ser su ministro de Justicia en el gabinete de Beltrán, Cornejo movilizó oposición suficiente dentro del PDC para impedir el nombramiento (Alayza Grundy, 1999b). No obstante, varios miembros moderados del PDC, en actitud desafiante, trabajaron en la comisión de reforma agraria y vivienda establecida por Beltrán. Los moderados argumentaban que los radicales estaban presionando por un cambio demasiado rápido y que el partido no sólo debía criticar al capitalismo sino también adoptar una posición firme contra el comunismo (véase Rey de Castro, 1985, pp. 447-453). Los moderados y los radicales expresaban con frecuencia sus diferencias mediante "batallas de comunicados" publicados en la prensa (Bedoya, 1999).

Después de la convención del PDC en 1960 en Trujillo, la facción de Cornejo dominó el partido. Fue elegido presidente del PDC, y después obtuvo la nominación presidencial de 1962 a pesar de las objeciones de los más moderados, que preferían una alianza con la AP (Rey de Castro, 1985, p. 138). Aunque la detallada plataforma política del PDC en 1962 insistía en el cambio estructural, empero era congruente con la interpretación que durante mucho tiempo había prevalecido en el partido sobre la doctrina social cristiana, con su diagnóstico de los problemas del Perú y sus anteriores propuestas legislativas.

Influida por la Quinta Internacional del Congreso Demócrata Cristiano que se realizó en 1959, la plataforma también se valió de un nuevo término, la *empresa comunitaria*, para abarcar las propuestas con respecto a los salarios familiares, la protección del trabajo, el reparto de utilidades y la participación de los trabajadores en la administración y en la propiedad (véase Rey de Castro, 1985, pp. 454-479).

LAS ELECCIONES DE 1962-1963 Y LA ALIANZA

Cornejo era un buen orador y sabía relacionarse bien con los públicos de clase media (Klaiber, 1999), pero también era poco carismático, doctrinario y moralizador. Así, el personaje más visible del PDC era un compendio de la imagen intelectual y remilgada del partido. Además, el PDC todavía contaba con muy poca organización fuera de Lima, Arequipa y otras pocas ciudades importantes. Durante la campaña de 1962, el partido y su nominado lograron pocos progresos para superar estas debilidades.

En cambio, tres caudillos veteranos, cada uno con una base de apoyo heterogénea, surgieron como candidatos importantes. Después de 31 años, se le permitió a Haya de la Torre ser una vez más candidato a la presidencia. A pesar de numerosas deserciones, la APRA retuvo la fidelidad de muchos peruanos de los antiguos sectores medio y popular, a la vez que logró el apoyo de algunos miembros de la oligarquía, notoriamente de Beltrán y de prominentes partidarios de Prado. El segundo candidato era Belaúnde, que había organizado Acción Popular (AP), un partido político permanente. El arquitecto continuaba atrayendo a los nuevos sectores medios y a las clases medias del sur, y también movilizó un considerable apoyo de los campesinos que habían obtenido el registro como votantes desde 1956. Finalmente, Odría estaba apoyado por la más tradicional élite de la sierra, los miembros más conservadores de la oligarquía y un gran número de seguidores de las barriadas pobres que se habían beneficiado con el clientelismo político.

En la elección del 10 de junio, Haya de la Torre obtuvo 32% de los votos válidos, Belaúnde obtuvo 32.21% y Odría consiguió 28.43%. Cornejo logró menos de 50 000 votos, es decir, 2.89% del total, en contraste con aproximadamente 150 000 votos para las listas de candidatos del PDC al Congreso. Tres pequeños partidos izquierdistas obtuvieron 3.5%. Los analistas están de acuerdo en que Belaúnde habría ganado una contienda entre los tres candidatos, porque la mayoría de los seguidores del PDC y los pequeños partidos izquierdistas lo habrían favorecido a él en vez de Odría y Haya de la Torre.

En vista de que ninguno de los candidatos había recibido la tercera parte de los votos válidos que se requería para una elección directa, el Congreso recién elegido —en que la APRA tenía una pluralidad— asumió la responsabilidad de nombrar al siguiente presidente. Entre acusaciones de fraude por Belaúnde y los militares, en intensas negociaciones se analizó la posibilidad de unas coaliciones entre los tres candidatos principales. En el curso de estas discusiones, el ejército dejó en claro que la elección de Haya de la Torre era inaceptable. A continuación, Belaúnde tomó una posición inflexible frente a la APRA y

luego pidió que se anularan las elecciones o se realizara un golpe de Estado militar. Después del ultimátum del arquitecto, los antiguos enemigos, Odría y la APRA, concertaron un sorprendente acuerdo por el que el primero se convertiría en presidente y la segunda dominaría el Congreso.

Diez días antes de terminar el periodo de Prado, una junta militar tomó el poder y prometió realizar nuevas elecciones en junio de 1963. El golpe de Estado fue diferente de las intervenciones militares anteriores, porque las fuerzas armadas actuaron como institución y claramente en favor de Belaúnde, que tenía la imagen más reformista entre los principales candidatos. Estas características reflejaban un cambio importante en la orientación política de los militares durante la década anterior. Las fuerzas armadas habían empezado a dar su apoyo a la reforma agraria, a las políticas económicas nacionalistas y a la planificación económica, porque se consideraba que estas políticas eran esenciales para promover el desarrollo, evitar la revolución y asegurar así su supervivencia institucional.

No fue coincidencia que una nueva ley electoral promulgada por la JNE hiciera más difícil que los partidos pequeños presentaran candidatos a la presidencia, y que en cambio facilitara las alianzas electorales. Después de los malos resultados obtenidos por Cornejo, los moderados recuperaron el dominio del PDC. Aunque los democratacristianos se habían opuesto al golpe de Estado, ellos y Belaúnde compartían similares bases de apoyo y orientaciones políticas. Además, el nuevo presidente del PDC era Javier Correa Elías, padre de la secretaria de Belaúnde, quien después sería su segunda esposa.

Correa y Belaúnde hicieron un trato, creando la alianza AP-PDC. Se eligió a Mario Polar, del PDC, como candidato para la segunda vicepresidencia en la planilla de la alianza, y el partido pequeño obtuvo un número desproporcionado de puestos en la lista común de candidatos al Congreso. También se le prometieron las carteras de Agricultura y de Justicia en el gabinete y el derecho a nominar un candidato común para alcalde de Lima (Payne, 1968, p. 66). Además, Polar redactó una plataforma común, que reflejaba las prioridades del PDC y una mayor coherencia programática (Rey de Castro, 1985, pp. 142, 265, 342 y 483-485).

La elección de 1963 fue una repetición de la contienda de 1962, salvo que Belaúnde tenía el apoyo del PDC y sólo un candidato menor compitió por la presidencia. El arquitecto obtuvo el cargo más importante de Perú con 39% de los votos válidos, 34% para Haya de la Torre y 26% para Odría. Sin embargo, la alianza AP-PDC no ganó la mayoría de ninguna de las dos cámaras del Congreso. En la Cámara de Diputados, la APRA obtuvo 56 curules por 39 de la AP, 26 para la Unión Nacional Odriista (UNO), 10 para el PDC y ocho para otros partidos. En el Senado, la APRA ganó 18 curules, la AP consiguió 15, la UNO siete y el PDC cinco.

Seis meses después, el candidato de la alianza AP-PDC, Luis Bedoya, fue elegido alcalde de Lima en un asombroso triunfo sobre la popular ex primera dama, María Delgado de Odría. También ganó un segundo periodo de tres años en 1966. Apodado *El Tucán* por su nariz prominente, Bedoya es un político pintoresco y un destacado jurista que proviene de la clase media baja. Se consideró en general que sus periodos como

alcalde fueron buenos, en gran parte por la construcción de una vía rápida que une al centro de Lima con los suburbios de clase media y las playas turísticas. Así, *El Tucán* se convirtió en una figura política nacional y en el más popular de los democratacristianos de su generación entre los votantes.

EL ESTANCAMIENTO Y LA FUNDACIÓN DEL PARTIDO POPULAR CRISTIANO

Belaúnde subió a la presidencia con un grado de popularidad que pocos presidentes peruanos habían tenido. Sin embargo, poco después de su investidura como presidente, la APRA y la UNO formaron un grupo opositor con mayoría en ambas cámaras del Congreso con el fin de emplear las armas parlamentarias de la interpelación y la censura. En cinco años y dos meses en el cargo, el arquitecto tuvo siete gabinetes e hizo 61 nombramientos para ocupar las nueve carteras civiles que existían en ese tiempo (García Belaúnde, 1988, pp. 3-5).

En contraste con la rígida disciplina de partido de los apristas, la Alianza AP-PDC carecía de cohesión. Había poca amistad entre los dos partidos tras las enconadas campañas de uno contra el otro en 1962. Aunque el sobresaliente grupo parlamentario de PDC defendió al gobierno más enérgicamente que sus socios de la AP —que carecieron notoriamente de disciplina de partido—, sus propuestas políticas, como el reparto de ganancias y la copropiedad para los trabajadores, fueron casi pasadas por alto (Rey de Castro, 1985, pp. 139, 169-170, 235-256, 275-276 y 343).

El presidente intentó repetidas veces llegar a acuerdos con la APRA y la UNO, abandonando gradualmente en el proceso su programa de reforma. Los ministros del PDC se vieron obligados a administrar una ley de reforma agraria que excluía las lucrativas propiedades costeras y que contenía numerosos obstáculos para su efectiva aplicación (Werlich, 1978, p. 285). El bloque opositor competía con el gobierno para entregar proyectos de obras públicas y beneficios sociales, pero impedía que se establecieran nuevos impuestos. Aunque la economía iba creciendo a paso acelerado, un déficit fiscal en rápido aumento alimentó la inflación y contribuyó a una devaluación políticamente dañina en septiembre de 1967.

El estancamiento político exacerbó los conflictos ideológicos y personales tanto dentro de la AP como del PDC. A medida que Belaúnde se acercaba a la derecha, una facción reformista de la AP obtuvo el control del partido en junio de 1967 y posteriormente nombró a su líder, el primer vicepresidente Edgardo Seoane, como su candidato a la presidencia en la elección de 1969 (Werlich, 1978, p. 288). Los miembros del ala radical del PDC acabaron por llegar a la conclusión de que era inevitable alguna clase de revolución: el punto crítico era si ésta sería dirigida por la izquierda católica o por los marxistas. Además, Cornejo argumentó que la violencia podría ser necesaria para lograr un cambio estructural “radical y rápido” (Cornejo Chávez, 1967). Esta posición también implicaba que el principio del gobierno democrático debía subordinarse, al menos

temporalmente, a la búsqueda de la justicia social. En contraste, los miembros moderados del PDC, que eran cada vez menos entre los activistas del partido, apoyaban un cambio más gradual y atribuían el mayor valor a la conservación de las instituciones democráticas (Bedoya, 1999).

En el congreso de noviembre de 1966 del PDC, Cornejo recuperó la presidencia del partido, frustrando así las ambiciones políticas de Bedoya, que era mucho más popular entre los votantes. Los radicales también expulsaron a Roberto Ramírez del Villar, congresista del PDC y miembro acreditado del partido, director de un periódico propiedad de un magnate pesquero. Esta acción fue la culminación de una serie de ataques contra el estilo de vida "burgués" de personajes importantes del partido (Alayza Grundy, 1999a; Rey de Castro, 1985, pp. 98-99).

En diciembre de 1966, *El Tucán* y la mayoría de los miembros más distinguidos del PDC lo abandonaron para establecer el Partido Popular Cristiano (PPC), que pronto fue oficialmente registrado con un número sin precedente de firmas. La declaración fundadora del nuevo partido reafirmó su compromiso con la doctrina democratacristiana y la alianza con la AP. La declaración de principios subrayaba sus raíces humanitarias y socialcristianas, reafirmaba la familia como la unidad básica de la sociedad, rechazaba el capitalismo liberal e incluso aceptaba la idea de una sociedad comunitaria en el sentido de que el bien común debe ser, en última instancia, la razón del orden político. La declaración argumentaba que la propiedad privada es un derecho natural, pero no ilimitado, y que el "antagonismo estéril" entre el capital y el trabajo debe ser superado mediante reformas en las relaciones industriales y en las empresas, incluyendo la posibilidad del reparto de utilidades, la coadministración y la copropiedad. Incluso utilizó el término *democracia plena* para hacer hincapié en las limitaciones de la "democracia política". La declaración reconocía que el Estado tiene un papel crítico en la coordinación y regulación de la economía, pero argumentaba que "el crecimiento productivo debe ser realizado básicamente por la iniciativa privada dentro de los parámetros de la planificación nacional". El nuevo partido aceptó el término *revolución* "si se refiere a la acción en búsqueda de un rápido cambio estructural", pero lo rechazó explícitamente como sinónimo de violencia o de lucha de clases (véase Rey de Castro, 1985, pp. 486-496). Así, la declaración era congruente con los principios originales del PDC e incluso incorporaba algunas ideas de su ala radical, pero rechazaba la revolución violenta.

A medida que se acercaban las elecciones de 1969, los partidos políticos peruanos iniciaron un proceso de realineación. El PDC dejó la alianza en noviembre de 1967 y parecía probable que apoyara la candidatura presidencial de Seoane, quien había estado activo en Acción Católica y simpatizaba con su ideología (Rey de Castro, 1985, pp. 143-144). En contraste, Bedoya era el probable candidato del PPC y de la facción pro Belaúnde de la AP, que carecía de una alternativa popular. Sin embargo, los militares reformistas habían perdido la paciencia con la democracia peruana.

POSICIONES DIVERGENTES ANTE LA "REVOLUCIÓN PERUANA"

El 3 de octubre de 1968, el golpe de Estado fue dirigido por el general Juan Velasco, quien encabezó el autoproclamado “Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas” hasta 1975. Durante esta “primera fase” de la “Revolución peruana”, el gobierno militar llevó a cabo el programa más extenso de distribución de tierras de Sudamérica, aplicó ambiciosos esquemas de reforma empresarial e intentó controlar la participación popular por medio de asociaciones de interés corporativo. Los generales también ampliaron el sector público, expropiaron la mayoría de las compañías extranjeras, se adueñaron de compañías nacionales que estuvieron en mala situación. Al terminar la presidencia de Velasco en 1975, las empresas estatales controlaban las refinerías petroleras de Perú, los servicios públicos, la industria de harina de pescado, más de la mitad de la producción minera y una quinta parte de la producción industrial. Además, las empresas públicas eran responsables de casi todas las exportaciones, dos terceras partes de los bancos, la mitad de la inversión productiva y cerca de la mitad de las importaciones (FitzGerald, 1979, p. 194). A esto se añadía que el gobierno administraba las cooperativas agrícolas más importantes, vendía alimentos, establecía los precios de los más importantes alimentos y subsidiaba los bienes y servicios producidos por las empresas públicas.

La mayoría de los líderes del gobierno militar habían estado expuestos a la doctrina social de la Iglesia por medio del Centro para Estudios Militares Superiores, y de un nuevo movimiento laico, Cursillos de Cristiandad. El gobierno se “apropió virtualmente” de estas doctrinas para dar una razón ideológica a sus reformas (Klaiber, 1992, p. 283). Además, los principales conceptos de las reformas provinieron de los democratacristianos:

> La “tercera vía” de los democratacristianos, enunciada en la fórmula “ni capitalismo ni comunismo”, fue particularmente atractiva para estos militares reformistas que buscaban una posición intermedia. El lema ideológico clave de los militares, “una democracia social de participación total”, reflejaba muchos de los postulados básicos de la democracia cristiana, así como su concepto de “participación comunitaria”, propiedad social, cooperativismo y propiedad conjunta capital-trabajador de las empresas [Klaiber, 1992, p. 284].

De hecho, después de escuchar el manifiesto revolucionario de los militares en las primeras horas de la mañana del 3 de octubre, los miembros del Comité Ejecutivo Nacional del PDC creyeron que había sido escrito por Cornejo (Rey de Castro, 1985, p. 377).

Después de condenar inicialmente el golpe de Estado como una violación al gobierno constitucional, el PDC pronto concluyó que la suspensión de la democracia quedaba justificada por las reformas de los militares. En 1969, Cornejo se convirtió en director de una comisión preeminente que supervisaría al Poder Judicial. También fue uno de los autores de las *Bases ideológicas de la Revolución*, la declaración oficial más prestigiada de los principios del régimen (Klaiber, 1977, p. 176).

Cornejo y otros miembros del PDC esperaban que los militares instaurarían una nueva clase de democracia corporativa en Perú. En 1969, los delegados a un “congreso ideológico” del PDC acordaron que las ramas ejecutiva y legislativa deberían fusionarse

porque el concepto de separación de poderes no había funcionado en Perú. Además, propusieron que organizaciones representativas de varios sectores de la sociedad —cada una con su propio periódico— supervisaran a un jefe de gobierno elegido (Cornejo Chávez, 1975, pp. 214-215).

El sistema de asociaciones de interés corporativo establecido por el gobierno militar tenía un extraordinario parecido con el esquema propuesto por el PDC. Además, en julio de 1974, el gobierno expropió los principales diarios independientes y asignó cada uno de ellos a uno de los principales sectores sociales, aunque retuvo su control real.[5] Se le pidió a Cornejo que fuera director de *El Comercio*, el diario más prestigiado de Perú, convertido en vocero del sector campesino. Ocupó este puesto durante poco más de un año y después renunció cuando quedó claro que el gobierno no tenía intención de ceder el control. Varios miembros del PDC también participaron activamente en la directiva de Sinamos, la agencia de movilización social del gobierno. Otro frecuente colaborador con el régimen militar fue el Centro para el Estudio y Promoción del Desarrollo (Desco), fundado en 1965 con el apoyo financiero de católicos europeos (Klaiber, 1992, p. 355).

Las propuestas que habían presentado durante mucho tiempo los democratacristianos, como el reparto de utilidades y la participación de los trabajadores en la propiedad y en la administración, influyeron en los esfuerzos de los militares por crear nuevas formas de organización económica (véase Knight, 1975). A partir de 1970 se establecieron "comunidades de trabajo" compuestas por todos los empleados y obreros en las empresas manufactureras, mineras, pesqueras y de telecomunicaciones. En las empresas privadas, las comunidades de trabajo adquirieron proporciones cada vez mayores de acciones, hasta un tope de 50%, utilidades para distribuir periódicamente a los trabajadores, un lugar en la junta de directores y lugares adicionales a medida que aumentaba su participación en la propiedad. A los que trabajaban en empresas propiedad del Estado se les emitieron bonos del gobierno y se les limitó a dos representantes en las juntas respectivas. Al igual que las cooperativas agrícolas establecidas por los militares, las comunidades de trabajo beneficiaron primariamente a los trabajadores en las compañías más productivas. Además, esos beneficiarios tendieron a restringir la admisión de nuevos miembros, obstaculizando la creación de nuevos empleos urgentemente necesarios.

En mayo de 1974, el gobierno enfrentó este problema creando un sector de propiedad social autoadministrada que en dos aspectos críticos difería de los anteriores tipos de empresa reformada. Primero, mientras que los trabajadores de cada cooperativa o comunidad de trabajo agrícola adquirían derechos de propiedad sobre su respectiva unidad, las empresas de propiedad social (EPS) serían, en teoría, propiedad de todos los trabajadores en el sector de la propiedad social. Así, el reparto de utilidades se haría en el sector en conjunto, y no dentro de cada EPS. Segundo, se diseñaron varios mecanismos complejos para generar más empleos. A principios de agosto de 1975 aumentó mucho el potencial de la generación de empleos cuando el presidente Velasco anunció que todas las cooperativas agrícolas, incluyendo las modernas empresas cañeras, serían convertidas en empresas de producción social.

El jefe de la comisión que redactó la Ley de Propiedad Social fue el general Arturo Valdés, que había recibido favorablemente la propuesta de empresas comunitarias presentada por el PDC. Además, miembros del PDC, ex integrantes del partido e intelectuales laicos —en particular de Desco y de la Universidad Católica— desempeñaron papeles importantes redactando la legislación para la propiedad social y en el debate público que siguió. El propio PDC simpatizaba con la nueva ley, aunque con ciertas críticas. El partido expresó su preocupación por el papel potencialmente preponderante del Estado en el nuevo esquema, argumentó que las empresas privadas y las estatales debían incorporarse en el sector de propiedad social y sostuvo que la propiedad debía ser de los trabajadores de cada empresa (Knight, 1975, pp. 376-384). La Iglesia católica —que había pasado por enormes cambios desde el Concilio Vaticano II— por lo general apoyó las reformas de los militares a la propiedad, pero sin apoyar al régimen. Sin embargo, algunos grupos dentro de la Iglesia, en especial los influidos por la teología de la liberación, criticaron más al gobierno militar (Klaiber, 1992, pp. 285-286).

En contraste con el PDC y la jerarquía católica, el PPC pidió tenazmente el retorno al gobierno constitucional después del golpe de Estado de 1968. Además, el PPC fue el único partido político o grupo de interés que hizo constantes críticas a las medidas del gobierno en comunicados públicos (véase PPC, 1990, pp. 112-384). Estos comunicados no necesariamente rechazaban la política del gobierno en su totalidad, pero por lo común exigían justificaciones, aclaraciones y rectificaciones que las cambiarían en forma considerable. Por ejemplo, aunque apoyaban los principios de reparto de utilidades, coadministración y copropiedad, el partido sostuvo que la clase de propiedad colectiva creada por las comunidades de trabajo no correspondía al pensamiento social cristiano, y señaló varias dificultades prácticas en la legislación. Rechazó la ley de propiedad social como una forma disfrazada de propiedad estatal y por ser una receta infalible para producir inflación (PPC, 1990, pp. 191-196 y 251-262).

La abierta oposición del PPC lo convirtió en blanco principal de la maquinaria de propaganda populista de los militares. Los oficiales y la prensa controlada por el gobierno presentaron al PPC como un partido derechista “de empresarios”, imagen que más tarde sería aprovechada por sus oponentes. Sin embargo, en retrospectiva, está claro que la estrecha asociación del PDC con el gobierno militar fue incluso más perjudicial. Por una parte, perdió a casi todos los moderados que no se habían pasado al PPC (véase Rey de Castro, 1985, pp. 378-379). Por la otra, la mayoría de los jóvenes activistas del PDC también dejaron el partido, a pesar de las tendencias más izquierdistas de Cornejo. Muchos fueron influidos por Gustavo Gutiérrez, el conocido teólogo de la liberación peruano (Flores Nano, 2000, p. 54). Además, durante los años setenta, los partidos marxistas atrajeron a la gran mayoría de los jóvenes políticamente activos.

La Ley de Propiedad Social y la expropiación de la prensa señalaron el principio del fin de la primera fase radical de la Revolución peruana. El 29 de agosto de 1975, el presidente Velasco fue sustituido por su primer ministro, el general Francisco Morales Bermúdez, quien siguió un curso más moderado durante la segunda fase de la Revolución (1975-1980). Su gobierno desbandó al Sinamos, debilitó la legislación sobre

las comunidades de trabajo y retiró todo apoyo significativo al naciente sector de la propiedad social. No obstante, siguieron intactas las nuevas normas de tenencia de la tierra, el papel económico dominante del Estado y el control de la prensa por parte del gobierno.

La economía de Perú empezó una prolongada caída bajo el gobierno de Morales Bermúdez. Durante el periodo 1976-1990 el producto interno bruto (PIB) per cápita cayó a una tasa anual promedio de 2.1%, aunque breves periodos de recuperación interrumpieron esta tendencia descendente (Webb y Fernández Baca, 1991, p. 362, y 1999, p. 679). Si bien factores externos, como la caída de los precios del petróleo en octubre de 1973, precipitaron esta disminución, puede atribuirse en gran medida a las pautas de intervención general del gobierno en la economía que se habían conformado durante el gobierno de Velasco y que fueron reforzadas por los gobiernos siguientes. Las erráticas políticas macroeconómicas y una creciente deuda externa agravaron los problemas económicos de Perú.

SACRIFICIOS POR LA DEMOCRACIA

En este marco de agravada crisis económica y de crecientes protestas populares, Perú empezó una transición a la democracia que incluyó la elección de una Asamblea Constitucional (AC) en 1978, una nueva Constitución en 1979 que eliminaba el requisito de saber leer para tener derecho al voto, y una elección general en 1980. Después de una reconciliación extraordinaria con los militares, la APRA ganó 37 de los 100 escaños en la AC. El boicot de las elecciones por la AP de Belaúnde ayudó al PPC a ubicarse en un sólido segundo lugar con 25 representantes. En comparación, el PDC sólo pudo elegir dos delegados. Cuatro partidos izquierdistas se dividieron 28 escaños, seis de los cuales los obtuvo el Partido Socialista Revolucionario (PSR), grupo que atrajo a muchos de los jóvenes activistas que habían abandonado al PDC.

El PPC hizo cuatro contribuciones importantes a la transición democrática. Primero, su participación en la elección de la AC ofreció a los votantes una alternativa creíble a la izquierda y a la APRA. Segundo, el PPC fue el partido que de manera más consistente y enérgica resistió los esfuerzos del gobierno de Morales Bermúdez por limitar la autonomía de la AC en la redacción de la nueva Constitución. Tercero, después de rechazar una propuesta de la izquierda para nombrar presidente de la AC a Bedoya, el PPC incondicionalmente aportó los votos clave para la elección de Haya de la Torre. Después, los dos partidos formaron una alianza que probablemente fue indispensable para la adopción de una Constitución viable (véase Amiel Meza y Madrid Isla, 1990, pp. 73-77, 111-131 y 395-402; PPC, 1991, pp. 112-113).

Cuarto, el PPC fue el principal autor de la Constitución de 1979. La APRA no estaba muy dispuesta a escribir una nueva Constitución, y presentó pocas propuestas concretas. En contraste, el PPC preparó en secreto un borrador completo, escrito en su mayor parte por Roberto Ramírez del Villar. Para no opacar o molestar a la APRA, el borrador fue

fragmentado y sus partes presentadas sin alardes a los respectivos comités de trabajo. Las más de las veces, los informes de los comités se parecían mucho a la propuesta del PPC. Así, más de 70% de la nueva Constitución seguía muy de cerca el borrador del PPC, y preceptos socialcristianos se encuentran por todo el documento (PPC, 1991, pp. 113, 132, 179 y 229; Espinosa Laña, 1999). La influencia del PPC puede notarse particularmente en el preámbulo; en el Título I sobre derechos y responsabilidades personales; en el artículo 67 sobre la coadministración, el reparto de utilidades y la copropiedad; en el Título III, que establecía una "economía social de mercado",[6] y en el Título IV sobre la estructura del Estado. Además, la Constitución de 1979 terminó con la posición del catolicismo como religión oficial del Perú y con el sistema de patrocinio del Estado sobre los nombramientos en la Iglesia (Klainer, 1992, pp. 352-353).

En la elección general de mayo de 1980, el pueblo peruano le dio a Belaúnde un resonante 45% de los votos válidos en una contienda de 15 candidatos. La mayoría de los observadores convinieron en que la negativa del anterior presidente a participar en las elecciones para la AC le valió este abrumador triunfo, manteniendo su imagen como el candidato que más se opuso a los militares y permitiéndole evitar decisiones difíciles que habrían afectado su popularidad. Armando Villanueva, que fue nominado por la APRA después del fallecimiento de Haya de la Torre, quedó en segundo lugar con 27%, y Bedoya en tercero con menos de 10%. Varios candidatos de la dividida izquierda se repartieron el resto de los votos para la presidencia.

La AP obtuvo una mayoría absoluta en la Cámara de Diputados de 180 curules y 26 de las 60 curules del Senado. La APRA tuvo la segunda delegación mayor en el Congreso, en tanto que el PPC obtuvo nueve diputaciones y seis senadurías. El PDC no presentó candidatos después que el súbito retiro de Cornejo de la política lo dejó sumido en la confusión.

Seis meses después, la AP repitió su victoria en las elecciones municipales. Sin embargo, de mayor importancia fue que en segundo lugar quedó la Izquierda Unida (IU), tenue alianza electoral que sufría de diferencias ideológicas y del personalismo tradicional de la política peruana. Aunque la IU era predominantemente marxista, sus filas incluían a muchos ex democratacristianos y a otros católicos progresistas.[7] Así, para finales de 1980, se manifestaba un incipiente sistema de partidos, en que la IU estaba situada en la izquierda del espectro político, la APRA en el centro-izquierda, la AP en el centro-derecha y el PPC en la derecha.

Los pepecistas (los miembros del PPC) habían resentido durante mucho tiempo que se les llamara "el ala derecha", término frecuentemente empleado como sinónimo de "reaccionario". Está claro que ese empleo del término no es justo. La directiva central del partido ha estado formada por importantes profesionales, y no por empresarios o conservadores tradicionales, y nunca ha realizado campañas bien financiadas. Sin embargo, el PPC era claramente el partido que más se oponía al modelo económico centrado en el Estado, heredado del gobierno militar. Esta posición de hecho colocó al PPC a la derecha del espectro político, lo que propició que atrajera el apoyo de los intereses de las empresas y de los peruanos de clase alta que no necesariamente

compartían sus raíces socialcristianas. Aunque las plataformas del partido han continuado basándose en la doctrina social de la Iglesia (Amiel Meza, 1997, pp. xvii-xxv), el plan económico del PPC en 1980 reflejó las prioridades de los intereses exportadores y tomó libremente muchos puntos de un documento de planificación chileno aprobado por el general Pinochet (Schuldt, 1980). En términos geográficos, el PPC ha sido fuerte en Lima, pero el partido consiguió poco apoyo fuera de la capital hasta fechas recientes.

Al subir a la presidencia por segunda ocasión, Belaúnde hizo un llamado a los otros partidos para que participaran en un gobierno de base amplia que consolidaría la naciente democracia de Perú. Sólo el PPC respondió positivamente. Belaúnde y Bedoya llegaron a un acuerdo por el cual el PPC apoyaría al gobierno durante dos años, asegurándole así una mayoría en el Senado. El PPC, a su vez, recibiría las carteras de Justicia e Industria, esta última como un gesto para sus miembros de la comunidad empresarial. El acuerdo se prorrogó por un año más en dos ocasiones (Bedoya, 1999).

A diferencia de la alianza de 1963 entre la AP y el PDC, el acuerdo de 1980 entre la AP y el PPC se realizó después de la elección, no estuvo basado en una plataforma común y no exigió planillas comunes de candidatos en las elecciones municipales. Además, la Constitución de 1979 le permitía a Belaúnde emitir la legislación más importante por decreto. Así, la destacada delegación del PPC en el Congreso se encontró relegada.

La mayor parte de la legislación promovida por el PPC fue propuesta por sus ministros. Felipe Osterling, ministro de Justicia, desempeñó un papel crítico en la devolución de los periódicos expropiados a sus dueños originales, eliminando de los libros de reglamentación los decretos indeseables de los militares, y redactando legislación para poner en vigor la Constitución de 1979. Osterling y sus sucesores del PPC también iniciaron ambiciosos proyectos de modernizar las anticuadas penitenciarías de Perú y sus registros públicos (PPC, 1991, pp. 83 y 232). Aunque los pepecistas que ocuparon la cartera de Industria se vieron frecuentemente frustrados por el Ministerio de Economía, lograron que se aprobara una nueva ley básica para el sector y remplazaron el esquema colectivista de las comunidades de trabajo por otro basado en la participación individual en la propiedad (PPC, 1991, pp. 224-225; Flores Nano, 2000, p. 64).

Por lo general, las relaciones entre la AP y el PPC fueron cordiales, pero también se hicieron evidentes grandes diferencias. Aunque el gobierno de Belaúnde adoptó algunas medidas políticas orientadas al mercado, hizo pocos progresos en la privatización del abotagado y deficitario sector público peruano. Además, el ambicioso programa de obras públicas del gobierno, así como su respuesta al desastre causado por *El Niño* en 1983, aumentaron en forma impresionante el gasto público y la deuda externa. En contraste, el PPC favorecía unas medidas que reducirían el papel del gobierno en la economía y estimularían la inversión privada en actividades productivas (PPC, 1990, pp. 421-451; Flores Nano, 2000, pp. 64-65). Para favorecer a los hombres de negocios que había en sus filas, el partido también protestó por las súbitas bajas de los aranceles y la reducción de los subsidios a la exportación. Además, importantes pepecistas criticaron al gobierno por no actualizar leyes anticuadas o tomar en serio la creciente amenaza del movimiento terrorista Sendero Luminoso (PPC, 1991, pp. 138-139; Flores Nano, 2000, p. 65).

En 1983, Belaúnde con renuencia movilizó al ejército para contener la creciente violencia; en un solo año, el PIB per cápita cayó más de 15%. Aunque la popularidad del presidente se estaba desplomando, el PPC votó en masa en favor de la tesis "El Perú antes que el partido" y renovó su apoyo al gobierno (Flores Nano, 2000, p. 67). Un importante líder del partido recuerda: "Hicimos un sacrificio consciente. No había duda de lo que estábamos haciendo" (PPC, 1991, p. 212). Empero, un acalorado debate interno precedió a la decisión, que generó algunas deserciones.

A medida que se acercaban las elecciones de 1985, la APRA y la IU se agruparon en torno a líderes carismáticos. Tanto Alan García, de la APRA, como Alfonso Barrantes, de la IU, sabían manejar hábilmente los símbolos de la religiosidad popular para su propia ventaja política (Klaiber, 1999). García, de 36 años, se esforzó mucho por renovar la imagen sectaria de la APRA y ampliar los sectores que la apoyaban. Como parte de esta estrategia, la APRA reservó algunos lugares en su lista de candidatos al PDC y su vástago, Solidaridad y Democracia (Sode). Esta alianza informal ayudó a que la APRA demostrara su compromiso con el pluralismo y disipó cualquier duda sobre su pasado anticlerical (Delgado Barreto, 2000).

Por el contrario, la derecha no se pudo unir detrás de un candidato común. Los activistas de la AP rechazaron a *El Tucán*, y el PPC se mostró renuente a apoyar a un candidato independiente, como Vargas Llosa, el célebre novelista peruano que era favorecido por Belaúnde (PPC, 1991, pp. 116 y 143). En todo caso, Vargas Llosa —que cuando joven fue miembro de una célula comunista y que después se unió al PDC, sólo para convertirse más tarde en apóstol del neoliberalismo— no estaba interesado. Las negociaciones entre el PPC y la AP continuaron, hasta que esta última inesperadamente registró a Javier Alva Orlandini, un ex miembro de los círculos interiores del partido, como su candidato. Posteriormente el PPC formó una alianza, la Convergencia Democrática (Code), con Andrés Townsend, líder de los disidentes conservadores de la APRA, persona fuertemente identificada con la doctrina social de la Iglesia (Klaiber, 1999).

García obtuvo un aplastante triunfo con 53% de los votos válidos. Barrantes recibió 25%, Bedoya 12% y el gris Alva Orlandini sólo 7%. La APRA ganó la mayoría en ambas cámaras del Congreso. En las listas apristas fueron elegidos cuatro candidatos del PDC y de Sode, uno de cada partido en cada cámara. La IU obtuvo la segunda representación más numerosa en cada cámara, seguida por la Code y AP. El PPC eligió seis diputados y tres senadores en la lista de la Code.

Al tomar posesión de la presidencia, García anunció que Perú limitaría el pago de su considerable deuda extranjera a 10% de los ingresos de exportación, lo cual pronto convirtió al país en un paria en la comunidad financiera internacional. En 1986 y 1987 la economía se recuperó temporalmente después de que el nuevo gobierno congeló los precios de los productos más importantes y estimuló la demanda del consumidor para emplear la capacidad productiva ociosa. Aunque estas medidas le permitieron al presidente mantener su extraordinaria popularidad, el PPC no vaciló en denunciarlas como miopes y potencialmente desastrosas (PPC, 1988-1990, vols. 1-2; Flores Nano, 2000, p. 68). Una vez más, el partido fue el único actor político importante que se atrevió a

criticar constantemente las políticas dudosas de un gobierno popular. Por su parte, el PDC asumió la responsabilidad de la cartera de Justicia y del Banco Agrario (Delgado Barreto, 2000).

El repunte económico ayudó a que la APRA recibiera un impresionante 48% de los votos en las elecciones municipales de 1986. El decepcionante tercer lugar de Bedoya en la contienda electoral por la alcaldía de Lima terminó con sus aspiraciones presidenciales (Flores Nano, 2000, p. 69). Sin embargo, pronto quedó en claro que las políticas económicas de García eran insostenibles. Toda confianza que todavía tuvieran los empresarios se evaporó en julio de 1987, cuando el presidente decretó la nacionalización de los bancos privados y las compañías de seguros. La economía pronto cayó en la peor crisis jamás experimentada. En 1989, sólo 18.6% de la fuerza de trabajo de Lima tenía empleo de tiempo completo y la tasa anual de inflación había llegado a 2 776% (Webb y Fernández Baca, 1991, pp. 305 y 740).

García tampoco fue capaz de contener a Sendero Luminoso o a otro grupo izquierdista insurgente, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA). Las muertes por la violencia política empezaron a aumentar de nuevo en 1988, cuando los cortes de la energía eléctrica y del agua casi se volvieron rutinarios en Lima y otras ciudades importantes. Además, manifestaron indicios de flagrante corrupción al aproximarse el fin del gobierno de García. El índice de aprobación de García —que en cierto momento llegó a ser de 96%— se derrumbó estrepitosamente y cayó a 6% (*Caretas*, 1990).

La malhadada decisión de García de nacionalizar los bancos y la disminución de su popularidad dieron fuerza a la derecha peruana. El PPC continuó oponiéndose tenazmente a la política del presidente (PPC, 1988-1990, vols. 2-4), pero ya no estaba solo, pues Mario Vargas Llosa y su Movimiento Libertad (ML) empezaron a criticar continuamente al gobierno desde un punto de vista neoliberal. El PPC, el ML y una renuente AP pronto formaron el Frente Democrático (Fredemo). Posteriormente se les unió Sode, que se había separado de García por la nacionalización bancaria.

En mayo de 1989, estos partidos acordaron apoyar a Vargas Llosa como candidato del Fredemo en la elección de 1990, con Eduardo Orrego de la AP y Ernesto Alayza Grundy del PPC como candidatos para la primera y segunda vicepresidencia respectivamente.[8] Sin embargo, si bien *El Tucán* y el PPC le dieron al novelista un temprano e inequívoco apoyo, el arquitecto y la AP vacilaron. Como lo recuerda Vargas Llosa:

> De los dos, Bedoya demostró ser el más flexible y dispuesto a hacer concesiones en favor de la alianza, y el que, una vez que se llegó a un acuerdo, lo cumplió al pie de la letra. Belaúnde siempre actuó —aunque conservando, lo reconozco abiertamente, en todo momento las formalidades correctas— como si el Frente Democrático fuera Acción Popular, y el Partido Popular Democrático y Libertad dos jugadores de poca importancia [1995, p. 83].

La escisión se hizo pública cuando el ex presidente se opuso a las listas comunes del Fredemo en la elección municipal de noviembre de 1989, disputa que hizo que Vargas Llosa renunciara temporalmente a ser candidato del Frente.

Cuando el novelista reingresó a la contienda electoral, su campaña fue dirigida por un

pequeño círculo interior, y pronto se convirtió en una cruzada neoliberal. Vargas Llosa casi desafió a los peruanos a votar por él y por los sacrificios que serían necesarios para estabilizar la economía. A pesar de esto, conservó una abrumadora ventaja en las encuestas porque no se veía ninguna alternativa viable. La APRA estaba totalmente desacreditada por el desastroso desempeño del gobierno de García, y la izquierda se había nuevamente dividido.

Durante las semanas finales de la campaña empezó a crecer el apoyo para Alberto Fujimori, un oscuro ex rector de la universidad, de ascendencia japonesa, que recibía subrepticia ayuda de García. Subrayando su independencia política e identificándose a sí mismo con el centro del espectro político, Fujimori quedó en un segundo lugar cercano a Vargas Llosa en la elección general de abril. Consciente de que había quedado aislado en la derecha, el novelista trató de abandonar la contienda, pero Alayza Grundy, del PPC, y otros lo persuadieron de que participara en la segunda vuelta, por el bien de la democracia peruana (Vargas Llosa, 1995, pp. 468-482).

Las conveniencias políticas hicieron surgir extrañas alianzas durante la campaña de la segunda vuelta electoral. La rica y cerrada comunidad japonesa de Perú (un bastión tradicional del PPC) votó abrumadoramente por el novelista. Además, la mayor parte de la jerarquía eclesiástica, aunque oficialmente neutral, apoyó de manera no muy sutil al agnóstico Vargas Llosa frente a Fujimori, católico reconocido cuyos seguidores protestantes evangélicos habían criticado el continuo apoyo del sector público a la religión principal de Perú.

No obstante, Fujimori ganó la segunda vuelta en forma abrumadora, recibiendo 62% de los votos válidos. Sin embargo, las listas del Fredemo ya habían obtenido una pluralidad (62 diputados y 20 senadores) en el Congreso de conformidad con los resultados de la elección general. Cuando el Frente se disolvió después de la campaña de la segunda vuelta electoral, el PPC conservó sus 25 diputados y cinco senadores.

Aunque fuera posible formar coaliciones de centro-derecha o de centroizquierda en un Congreso fragmentado, todos los partidos tradicionales estaban desacreditados. Fujimori evitó las alianzas y mantuvo la imagen independiente que había atraído a los electores. Continuando con un tema popular de su campaña, ridiculizó agresivamente al Congreso, a los partidos establecidos y al Poder Judicial, desviando así la atención de las duras políticas de estabilización que iban en contra de su principal promesa de campaña. En forma sutil, el presidente empezó a construir una base de poder entre los militares, para lo que dependió en gran medida de Vladimiro Montesinos, un misterioso agente de inteligencia.

En el Congreso, el PPC y otros ex partidos del Fredemo por lo general apoyaron las políticas de estabilización iniciales de Fujimori, así como una serie de reformas neoliberales emitidas por decreto a finales de 1991.[9] En su mayor parte, estos partidos también toleraron los ataques retóricos del presidente a las instituciones políticas de Perú, atribuyéndole una falta de experiencia. No obstante, dos distinguidos legisladores del PPC —Roberto Ramírez del Villar y Felipe Osterling, que en julio de 1991 fueron elegidos presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, respectivamente— encabezaron los

desafíos legislativos a una serie de acciones ejecutivas que no caían claramente dentro de los límites de la Constitución de 1979. El conflicto llegó a su clímax a principios de 1992 cuando el Congreso invalidó un débil veto de Fujimori para rechazar o modificar los decretos presidenciales que amenazaban las libertades civiles y el gobierno democrático.

Sin embargo, Fujimori estaba ganando la batalla de la opinión pública. Según datos de Apoyo, la empresa de investigaciones mediante encuestas de más prestigio en Perú, las tasas de aprobación del presidente aumentaron continuamente durante su lucha con el Congreso de sólo 32% en septiembre de 1991 a 65% en enero de 1992. Además, durante el periodo de confrontación y de la reforma neoliberal ganó el apoyo de muchos votantes ricos y de clase media, que habían sido los fieles seguidores del PPC. En medio de un entusiasta canto de "Fujimori PPC" en la celebración del 25 aniversario del partido en diciembre de 1991, el presidente proclamó que "su corazón pertenecía al PPC" (*Caretas*, 1991; Flores Nano, 2000, pp. 74-75).

Durante el receso del Congreso en el verano, negociaciones no públicas entre el tercer primer ministro de Fujimori, Alfonso de los Heros, y legisladores de los ex partidos del Fredemo parecieron resolver todas las diferencias entre las dos ramas del gobierno. Sin embargo, después de que la primera dama Susana Higuchi presentara alegatos de corrupción contra la familia del presidente el 5 de abril de 1992, Fujimori anunció que disolvía el Congreso y que reorganizaría el Poder Judicial.

DECADENCIA

El *autogolpe* (golpe de Estado presidencial) fue condenado por todos los partidos políticos importantes, excepto una facción de Cambio 90 (C90) de Fujimori, la prensa y la mayor parte de los grupos de intereses especiales. En una reunión secreta, el 10 de abril en el jardín de la congresista Lourdes Flores Nano, del PPC, el Congreso declaró que la presidencia quedaba vacante y tomó juramentó al segundo vicepresidente, Carlos García y García, como jefe de Estado en funciones. En Washington, el primer vicepresidente, Máximo San Román —que casualmente estaba fuera del país en ese momento—, y Antero Flores-Aráoz, del PPC, representaron al Congreso peruano ante una reunión de emergencia del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA). Al regresar a Perú, San Román prestó juramento para el cargo ante los legisladores, pero toda idea de establecer un gobierno paralelo fue pronto abandonada en vista de la intimidación llevada a cabo por los militares y el aplastante apoyo popular a Fujimori.

A pesar de todo, la presión internacional obligó a Fujimori a abandonar sus planes de hacer que una serie de reformas constitucionales fueran aprobadas por plebiscito. En mayo de 1992 en la reunión de ministros de relaciones exteriores de la OEA en las Bahamas —en la que Flores-Aráoz, del PPC, representó nuevamente al Congreso— el presidente anunció elecciones para un denominado Congreso Constitucional Democrático (CCD), que elaboraría una nueva constitución y funcionaría como la legislatura de Perú.

Estos términos eran inaceptables para la AP, la APRA, el ML, y el principal partido de la alianza IU, que boicotearon, todos, la elección. Un considerable sector del PPC dirigido por Ramírez del Villar y Alberto Borea también se opuso a la participación. Aunque el PPC votó en última instancia por lanzar una lista de candidatos, el debate dejó profundas heridas (Flores Nano, 2000, pp. 78-80).

La fortuna de Fujimori mejoró espectacularmente en septiembre de 1992 con la captura de Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso, y de cientos de sus seguidores. El presidente intentó aumentar aún más sus posibilidades de dominar al CCD, realizando simultáneamente un referendo para aprobar la pena de muerte para los terroristas, medida que apoyaba la mayoría de los votantes. Esta medida fracasó cuando el PPC amenazó con retirarse de la elección de noviembre y la OEA expresó sus objeciones al proyecto. A pesar de todo, la lista de candidatos seleccionada por Fujimori entre los miembros de C90 y de la recién formada Nueva Mayoría (NM) ganó 49% de los votos válidos y 44 de los 80 escaños. El PPC quedó en un lejano segundo lugar, con poco menos de 10% de los votos y ocho escaños. Así, el partido protegió su espacio político y surgió como el líder de la oposición, pero no pudo capitalizar la ausencia de sus principales competidores. Entre los partidos pequeños que lograron elegir representantes estaban Sode y el Movimiento Democrático de la Izquierda (MDI), que incluía a los católicos progresistas antes afiliados a la IU.

La Constitución elaborada por el CCD y aprobada en 1993 mediante un controvertido referendo se alejaba de la tradición constitucional peruana, al permitirle al presidente servir durante dos periodos consecutivos y darle la autoridad ejecutiva suprema para decidir los ascensos de los militares de alta graduación, entre otros cambios importantes. Aunque la Constitución de 1993 hace mención a una “economía de mercado” (véase el artículo 58), omite muchas de las garantías sociales establecidas por la Constitución de 1979. No obstante, la oposición encabezada por el PPC tuvo fuerza suficiente para impedir que se considerara un borrador “hiperpresidencialista” que habían hecho circular algunos consejeros de Fujimori para sondear las reacciones a éste. Un boicot que se opusiera al CCD o al referendo habría manchado la imagen de Fujimori a los ojos de los Estados Unidos y de otros actores internacionales clave, que se habían reservado su juicio sobre el proceso de redemocratización.

Durante lo que restaba de su primer periodo, Fujimori —a semejanza de Ronald Reagan— demostró ser un presidente “teflón” cuya popularidad no se vio afectada por los escándalos, incluso serios abusos de los derechos humanos. De hecho, los peruanos prefirieron pasar por alto cualquier falta, porque la violencia política había disminuido en forma impresionante después de la captura de Guzmán y la recuperación económica estaba afianzándose. Además, el gobierno aumentó de manera considerable el gasto en proyectos sociales que estaban estrechamente identificados con el presidente.

A pesar de un resultado respetable en las elecciones de 1992 y de una actuación heroica en el CCD, el PPC se encontró en medio de una crisis de identidad. Mientras que Borea y algunos otros pepecistas continuaban adoptando una actitud dura contra Fujimori, los “pragmáticos”, como Alberto Andrade, fueron influidos por el generalizado

apoyo al presidente por parte de los seguidores tradicionales del partido. Algunos notables pepecistas solicitaron "permisos para ausentarse" a menudo y trabajar para el gobierno. Otros, como Borea y Andrade —que sería elegido alcalde de Lima en 1995 y 1998—, finalmente abandonaron el PPC.

A medida que se acercaban las elecciones de 1995, el ex secretario de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar, surgió como el candidato más fuerte de la oposición democrática. Bedoya no pudo convencer al PPC y a otros partidos de oposición para que apoyaran al ex diplomático aunque presentaran listas separadas de candidatos al Congreso (Flores Nano, 2000, p. 81). Así, se presentó todo un grupo de 15 candidatos a la presidencia, entre los que estaba incluida Lourdes Flores Nano, del PPC. Cuando su candidatura no adquirió impulso, Flores Nano se retiró. Sin embargo, encabezó la lista de candidatos del PPC al Congreso y fue elegida en la primera elección primaria formal realizada por cualquier partido peruano (Flores Nano, 1999).

Aunque la mayoría de los líderes del PPC prefería a Pérez de Cuéllar, gran parte de su base se inclinaba a votar por Fujimori. En consecuencia, el partido no apoyó a ningún candidato presidencial. Su campaña para el Congreso fue planeada para atraer tanto a votantes que estaban contra Fujimori como a los que lo apoyaban pero deseaban controles efectivos sobre el poder del presidente.

En un proceso electoral plagado de irregularidades, Fujimori obtuvo una victoria abrumadora y la mayoría en el Congreso. La elección fue un desastre para el PPC, que sufrió deserciones en favor de Fujimori, la competencia del movimiento *ad hoc* de Pérez de Cuéllar y el retorno de los partidos que habían boicoteado la elección para el CCD. La estrategia destinada a cubrir ambas posiciones de sus partidarios tradicionales fue socavada a finales de la campaña por acontecimientos que polarizaron al electorado. El partido ganó sólo 3% del voto para el Congreso y únicamente tres escaños en la nueva legislatura unicameral de 120 miembros. Este mal desempeño también le costó al PPC su registro legal. Además, un mes después de la elección, el CCD quintuplicó el número de firmas válidas para registrar un partido, de 100 000 a casi 500 000.

La popularidad irreductible de Fujimori empezó a debilitarse durante un decepcionante segundo periodo. Las grandes expectativas económicas generadas por su campaña de 1995 no se cumplieron: los sueldos y salarios siguieron bajos, persistió un alto desempleo y la desigualdad aumentó. Después de que el tribunal constitucional decidió que Fujimori no podía aprovechar una controvertida ley que le permitiera lanzarse de nuevo como candidato en 2000, sus partidarios en el Congreso aprobaron votos de censura contra los magistrados y los cesaron de sus cargos con base en un dudoso tecnicismo de procedimiento; evitaron un referendo popular sobre el tema y le hicieron imposible a la JNE invalidar la candidatura del presidente. Mientras Fujimori estaba sorteando los obstáculos para su segunda reelección, su segundo gobierno se vio sacudido por una serie de escándalos políticamente explosivos que implicaban a los servicios de "inteligencia" y a los militares. Tanto dentro del país como en el exterior, el presidente y sus aliados militares quedaron expuestos a críticas cada vez mayores por frustrar el desarrollo de las instituciones democráticas, subvertir el dominio de la ley, violar las libertades civiles y

amordazar a la prensa.

El PPC se opuso a los planes del presidente de lanzarse nuevamente como candidato en 2000, pero —en marcado contraste con los gobiernos de Velasco, Morales Bermúdez, García y el primer periodo de gobierno de Fujimori— ya no encabezaba a la oposición. El debilitado papel del partido reflejaba el pequeño número de sus representantes en el Congreso, las divisiones acerca de las tácticas y, en algunos casos, desacuerdos con respecto a la política. Muchos pepecistas se opusieron a la colaboración de Flores Nano con otros partidos —incluyendo a la izquierda y a la APRA— en el esfuerzo por obtener firmas en apoyo de un referendo sobre el tema de la reelección. Otros se mostraban renuentes a tomar posiciones impopulares contra ciertas políticas del gobierno, como el retiro de Perú de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así, el PPC, que había perfeccionado el arte de los comunicados políticos durante muchos años de oposición, no se pronunció sobre algunos temas muy importantes. Sin embargo, el liderazgo del partido logró gradualmente distanciarlo de las políticas económicas de Fujimori, que según ellos iban demasiado lejos en dirección al neoliberalismo (Flores Nano, 1999).

El PPC no fue capaz de recuperar su registro legal a tiempo para la malhadada elección de abril de 2000, y se abstuvo de apoyar cualquier candidato presidencial o partido. Fujimori fue reelegido en un proceso plagado de escándalos que fue condenado por todos los más importantes observadores extranjeros. No obstante, a final de cuentas, su victoria fue pírrica.

RESURGIMIENTO

En la secuela del desastre de 2000, Lourdes Flores Nano, la personalidad más popular entre la nueva generación de líderes del PPC, se dedicó a la formación de un nuevo movimiento basado en los principios socialcristianos. En agosto de 2000, Convergencia Social Cristiana (CSC) empezó a invitar a católicos progresistas de diversas procedencias a participar en un diálogo sobre sus principios políticos y el futuro de Perú. La CSC estaba procurando atraer a antiguos y actuales miembros del PPC, PDC —que se dividió en dos facciones durante los años noventa—, la izquierda cristiana, Sode, Nosotros Somos el Perú, de Andrade, y el Frente Nacional de Trabajadores y Campesinos (FNTC),[10] así como católicos progresistas de otros partidos. Sus organizadores esperaban, por lo menos, que los participantes cerraran viejas heridas, obtuvieran una mejor comprensión de las diversas tradiciones dentro del catolicismo progresista y forjaran mutuos lazos de respeto y confianza. También se esperaba que un número crítico de participantes lograra un consenso central en temas de importancia decisiva y empezaran a organizar una nueva fuerza permanente en la política peruana.

Sin embargo, la política práctica pronto oscureció la iniciativa de la CSC. En septiembre de 2000 Fujimori se vio obligado a convocar a nuevas elecciones después de que se dio a conocer una videocinta que mostraba a Vladimiro Montesinos sobornando a

un congresista de la oposición. Después de que Fujimori huyó de Perú a finales de noviembre, el congresista Valentín Paniagua, de la AP —antiguo legislador que había roto sus nexos con Cornejo Chávez por la nacionalización de la prensa—, quedó como presidente interino. Paniagua dirigió una notable transición hacia la democracia, restableciendo las instituciones, enfrentando a los militares y supervisando elecciones ejemplares en abril de 2001.

Una reducción del número de firmas requeridas para el registro de los partidos a cerca de 120 000 posibilitó al PPC reingresar a la política electoral en una alianza apresuradamente acordada con varios partidos pequeños a la que se llamó Unidad Nacional (UN).[11] Aunque los partidos en la alianza compartían una imprecisa afinidad ideológica, la UN no estaba organizada explícitamente en torno a principios socialcristianos y por lo tanto no alcanzaba los objetivos más ambiciosos de la CSC (Flores Nano, 2001). Flores Nano fue la candidata presidencial de la UN por consenso. Sus compañeros candidatos para las dos vicepresidencias de Perú fueron Drago Kisic, reconocido economista partidario del mercado libre, y José Luis Risco, prominente líder obrero izquierdista, de ascendencia afroperuana.

Claramente, el candidato con más posibilidades en la contienda de 2001 por la presidencia era Alejandro Toledo, profesor de administración de empresas educado en los Estados Unidos y de ascendencia indígena, que se lanzó como candidato de un partido personalista que él fundó. Aunque Toledo había conquistado un número importante de seguidores durante la campaña de 2000 y las protestas que la siguieron, también tenía altas tasas negativas en las encuestas. Muchos peruanos estaban atemorizados por escandalosos rumores sobre su vida personal y su conducta a veces impulsiva y errática. Como era poco probable que Toledo obtuviera una mayoría en la primera vuelta electoral, aunque era casi seguro que participaría en la segunda, la verdadera contienda fue por el segundo lugar. A medida que se desarrollaba la campaña, a principios de enero, las encuestas mostraban que Toledo iba a la cabeza, en tanto que se presentaba una contienda entre tres por el segundo lugar entre Flores Nano, el ex presidente García y Fernando Olivera, el vehemente líder del Frente Independiente Moralizador (FIM).

A menudo la campaña fue opacada por la proyección pública de video-cintas grabadas secretamente que mostraban una sucesión de importantes peruanos, entre ellos un congresista del FIM cercano a Olivera, colaborando con el servicio de inteligencia de Fujimori.[12] Aunque el apoyo a Olivera disminuyó, él se negó a retirarse de la contienda. El tropiezo de Olivera y el retiro de dos candidatos de menor importancia del centro-derecha ayudaron a Flores Nano a superar a sus rivales en la lucha por el segundo lugar. No obstante, Olivera —que había sido elegido por primera vez al Congreso en 1985 como independiente en la lista del Code, dominado por el PPC—continuó atrayendo a muchos votantes que de otra manera habrían votado por Flores Nano.

Cuando la retórica de Toledo se hizo más populista, Flores Nano le reprochó hacer promesas que no podría cumplir y se negó a caer en la tentación del oportunismo político. Entre quienes hicieron campaña en su favor estaban los antiguos presidentes de

la democracia cristiana en Chile, Colombia, Ecuador y Guatemala. Sin embargo, el apoyo a Flores Nano dejó de aumentar después de que sus oponentes la acusaron de haber recibido de antiguos fujimoristas apoyo financiero, y que incluso estaban en la lista de candidatos de la UN. A medida que se aproximaba el día de las elecciones, los intercambios cada vez más implacables entre Toledo y Flores Nano adquirieron un tinte racista. Mientras tanto, García usaba su carisma y sus sobresalientes dotes de comunicador para atraer a muchos electores que no pertenecían a su partido, la APRA. Logró especialmente obtener el apoyo de muchos votantes jóvenes —que no recordaban su desastrosa presidencia— y de los peruanos más pobres de las zonas urbanas.

Toledo obtuvo una pluralidad no muy impresionante de 36.5% de los votos válidos, en tanto que García le arrebató a Flores Nano el segundo lugar, 25.8% por 24.3% (JNE, 2001). Si hubiera llegado a la segunda vuelta, Flores Nano quizás habría triunfado sobre Toledo, quien, según se creía, actuaba con duplicidad, pero que atrajo justo suficientes votos contrarios a García para derrotar al ex presidente en la segunda vuelta. De hecho, la candidata de la UN piensa que abstenerse de responder vigorosamente a los cargos que le hicieron sus oponentes le costó la elección (Flores Nano, 2001). Varios analistas políticos han especulado que el discurso abstracto de Flores Nano, la imagen negativa de su séquito, y una lista de candidatos abiertamente conservadora y blanda de la UN le impidieron avanzar. A pesar de esto, Flores Nano casi con toda seguridad habría llegado a la segunda vuelta —independientemente de cualquier error táctico— si Olivera no hubiera desempeñado el papel del convidado indeseable, al ganar 9.8% del voto presidencial, obteniendo sus mejores resultados en los departamentos que le fueron más favorables a ella.

No obstante, el desempeño de la UN fue notable, en especial a la luz del fracaso del PPC, que no pudo siquiera calificar para las elecciones el año anterior. Con un apoyo desproporcionado de los votantes, la participación de Flores Nano en el voto presidencial fue el doble de lo más que pudo conseguir Bedoya. Ella quedó en segundo lugar en Lima —el bastión tradicional del PPC— y ocupó ese mismo sitio en otros nueve departamentos, en su mayor parte localizados en la sierra. En la capital, la candidata de la UN ganó en los distritos de las personas más acomodadas y también obtuvo buenos resultados en las zonas de los obreros y en los asentamientos marginales. Aunque el carisma personal de Nano explica gran parte del éxito de la UN en el nivel presidencial, la alianza también ganó 17 escaños en el Congreso (14.2%), una proporción mucho mayor que las alcanzadas antes por el PDC o el PPC, con excepción de la elección para la AC en 1978. Este éxito es tanto más notable porque el Congreso de 2001 fue electo por departamentos, en marcado contraste con el único distrito nacional dominado por Lima, que se había empleado en 1992, 1995 y 2000. Por lo tanto, los informes del fallecimiento de la democracia cristiana en Perú, al igual que el deceso de Mark Twain, parecen haber sido prematuros.

CONCLUSIONES

Los democratacristianos han sido una anomalía en Perú, donde los partidos políticos característicamente se han basado más en personalidades que en ideas, y los sistemas de partido han sido notoriamente "rudimentarios" y no se han convertido en una base para crear una democracia estable (véase Mainwaring y Scully, 1995). En un país de caudillos, los partidos democratacristianos peruanos se han caracterizado por un liderazgo colegiado y un alto grado de democracia interna. Además, el PDC y el PPC han sido, ambos, partidos "responsables" que presentaron al electorado alternativas coherentes basadas en su interpretación de la doctrina social católica. Aunque fiel a sus principios, cada partido ha tenido la suficiente flexibilidad para trabajar con otras fuerzas políticas por el bien común de Perú, actuando como aliado electoral, socio en una coalición u oposición democrática de manera ejemplar. El PDC y el PPC anteriores a 1968 también apoyaron constantemente el establecimiento y la consolidación de la democracia en Perú. El PDC se alejó con renuencia de esta norma después de 1968 sólo cuando le pareció que era imposible obtener las muy necesarias reformas sociales dentro de un sistema democrático limitado. Aunque la UP y el MPD nunca se convirtieron en partidos electorales plenamente desarrollados, también presentaron algunas de estas características recomendables de sus descendientes ideológicos.

Los partidos democratacristianos han tenido efectos importantes sobre las instituciones y políticas públicas del Perú. Quizás el más notable se dio cuando el PPC escribió la mayor parte de la Constitución de 1979 —a la que los expertos consideran la mejor en la historia del país— y mucha de la legislación para llevarla a la práctica. Las sobresalientes delegaciones legislativas del PDC y del PPC antes de 1968 protegieron celosamente las prerrogativas del Congreso requeridas para que los presidentes de Perú tuvieran que seguir respondiendo ante éste. Los democratacristianos también han influido ampliamente en la rama ejecutiva como socios coaligados en el primer gobierno de Belaúnde (PDC y PPC), en el segundo del arquitecto (PPC) y en el de García (PDC). Además, el régimen militar del general Velasco dependió fuertemente de las ideas y los consejeros de algunos de los sectores más radicales de la democracia cristiana, en especial con respecto a la nacionalización de la prensa y la reforma de las empresas. Más generalmente, aun cuando las propuestas de los democratacristianos se han parecido a las de otros partidos, en la mayoría de los casos eran más específicas, estaban mejor fundamentadas y eran técnicamente mejores.

En vista de las muchas contribuciones de los partidos democratacristianos en Perú y su surgimiento antes de que se lograra finalmente el sufragio universal de los adultos en 1980, es conveniente preguntarse la razón por la que ninguno de ellos llegó a la presidencia. Un factor obvio es la falta de unidad. El importante cisma de 1966 fue seguido por una migración de la juventud del PDC a la izquierda en los años setenta y a la deserción de pepecistas clave en el ambiente de los noventa contrario al partido. Además, los partidos democratacristianos se han enfrentado a una fuerte competencia de partidos o movimientos ya establecidos más firmemente (*cf*. Hawkins, en este libro). Después de que la APRA obtuvo el apoyo constante de muchos peruanos de las clases media y baja, la AP de Belaúnde compitió directamente por el grupo nuclear de seguidores del PDC y del

PPC. Movimientos personalistas, como los de Sánchez Cerro y Fujimori, han limitado también el espacio político de los partidos democratacristianos en momentos determinados.

Sin embargo, la estructura del sistema de partidos sólo explica en parte el limitado crecimiento de los partidos democratacristianos en Perú. La inestabilidad democrática, la fluidez del sistema de partidos y sucesivas oleadas de cambios socioeconómicos han creado periódicamente aperturas para los democratacristianos durante transiciones democráticas. En 1931, la UP de hecho tuvo una temprana ventaja sobre la APRA y Sánchez Cerro. Bustamante y Rivero, cuyos protegidos fundaron el MPD, el PDC y el PPC, ganó la presidencia en 1945. Cuando los nuevos sectores medios estaban buscando alternativas a principios de la campaña de 1956, el PDC estaba mejor organizado que el apresuradamente formado frente que apoyó la aventurada candidatura de Belaúnde. Después de la caída de Fujimori, Flores Nano casi llegó a la segunda vuelta de la elección de 2001, en la que podría haber derrotado a un candidato que iba en primer lugar, pero ya muy afectado durante la campaña. Así, aunque la estructura de la competencia de partidos puede explicar la debilidad relativa de los democratacristianos durante periodos prolongados, no explica su renuencia o incapacidad de aprovechar decisivas oportunidades históricas.

La evidencia presentada en este capítulo sugiere que deben considerarse tres factores adicionales. Primero, obtener la presidencia nunca ha sido la mayor prioridad para los democratacristianos en Perú. Un gran hincapié en la organización del partido y en la coherencia ideológica les dio a los democratacristianos un carácter anticaudillista, los obsesionó por obtener buenos resultados en los debates ante un público bien educado de clase media, y condujo repetidas veces al PPC a tomar posiciones basadas en principios contra gobiernos populares. Aunque estas tendencias ayudaron a que los democratacristianos fueran más “responsables” que otros partidos y resultaron positivas para la democracia peruana, también disminuyeron sus posibilidades de llegar a la presidencia.

Segundo, al apoyar el establecimiento y consolidación de la democracia en Perú, los democratacristianos a menudo desplazaron los propios objetivos de su partido. Los escrúpulos democráticos de Bustamante eran tan fuertes que incluso evitó la apariencia de estar formando un partido desde arriba hasta que su presidencia fue atacada. Aun entonces se negó a verse implicado directamente en el MPD mientras fuera el más alto ejecutivo de Perú. Durante la década de 1960, el PDC continuó su alianza con Belaúnde incluso después de que éste había perdido el control de la AP, y el PPC se mantuvo al lado del acosado presidente hasta el amargo final. Más tarde, el PPC invirtió mucho capital político en la elaboración de la Constitución de 1979 y luego, sin pensar en su conveniencia, apoyó al segundo gobierno de Belaúnde a principios de los años ochenta. Esta conducta heroica sin duda redujo la popularidad electoral de Bedoya. Quizás un curso de acción más personalista le hubiera permitido a *El Tucán* —y no a Vargas Llosa — encabezar la resurgente derecha en la elección de 1990. En comparación con el novelista, este hábil veterano de la política peruana no habría conducido la clase de

campaña polarizante que creó una apertura para Fujimori. Durante los primeros años de la década de 1990, el PPC soportó estoicamente la peligrosa demagogia de Fujimori con el fin de apoyar a la débil democracia. Después del autogolpe la mayor parte del liderazgo del PPC se opuso al proyecto autoritario del presidente a pesar de la popularidad de éste entre las bases del partido.

Tercero, al menos en dos ocasiones, la inestabilidad democrática socavó las oportunidades de crecimiento de los partidos democratacristianos en Perú. El MPD tuvo la posibilidad de ganar las elecciones para la Asamblea Constitucional en 1949 y podría haberse convertido en uno de los principales partidos de Perú si Odría no hubiera intervenido para defender los estrechos intereses de la oligarquía exportadora. En el momento del golpe de Estado de 1968, Bedoya era una estrella política en ascenso que ocupaba la estratégica alcaldía de Lima y tenía mucho mayor popularidad que Manuel Ulloa, el aparente heredero de Belaúnde en la AP. Si no hubiera ocurrido el golpe, *El Tucán* podría haber surgido como el candidato común del PPC y del sector que seguía a Belaúnde en la AP, e incluso haber derrotado a Haya de la Torre en la elección de 1969, en vista del generalizado disgusto causado por el obstruccionismo de la APRA. Aunque no hubiera triunfado en las elecciones de 1969, Bedoya podría haber tenido éxito posteriormente en los años setenta si hubieran continuado las elecciones democráticas. Sin embargo, la historia fue cruel con los pepecistas, a quienes injustamente se les calificó de reaccionarios en los setenta y que luego se vieron aún más afectados por su renovada asociación con el rehabilitado Belaúnde en los años ochenta.

En conclusión, algunas de las mismas características que han distinguido a los democratacristianos de los otros partidos políticos peruanos y facilitado sus principales aportaciones —en particular su rechazo a los caudillos y su énfasis en la coherencia ideológica— han limitado también sus posibilidades de gobernar. Otros factores negativos, como la competencia de rivales más fuertes y la inestabilidad democrática han estado fuera de su control. No obstante, los democratacristianos peruanos podrían haber ganado la presidencia del país en 2001 si hubieran evitado los errores tácticos o hubieran tenido mejor suerte. Sin sus sacrificios conscientes a favor de la democracia, habrían podido incluso obtener antes el Poder Ejecutivo. Su disposición a sacrificarse en aras del mayor bien es otra de las razones por las que los democratacristianos merecen que se les llame "la gran minoría".

REFERENCIAS

Alayza Grundy, Ernesto, 1999a, entrevista por el autor, 2 de junio, Lima.

———, 1999b, entrevista por el autor, 7 de junio, Lima.

Amiel Meza, Ricardo, 1997, *Una sola conducta: una sola línea política*, Lima, inédito.

———, y César Madrid Isla (eds.), 1990, *Bedoya en la Constituyente*, Lima, Estudios Madrid.

Basadre, Jorge, 1983, *Historia de la república del Perú 1922-1933*, 7ª ed., tomo X,

Lima, Editorial Universitaria.
Bedoya, Luis, 1999, entrevista por el autor, 9 de junio, Lima.
Bourricaud, François, 1970, *Power and Society in Contemporary Peru*, Nueva York, Praeger.
Bustamante y Rivero, José Luis, 1949, *Tres años de lucha por la democracia en el Perú*, Buenos Aires, Artes Gráficas Bartolomé U. Chiesino.
Caretas, 1990, "Empujón de salida", *Caretas*, 1119, 30 de julio, pp. 26-29 y 32.
———, 1991, "Fujimori, músculo y pechuga: ¿por qué preocupa? ¿Y por qué gusta?", *Caretas*, 1190, 16 de diciembre, pp. 10-15 y 96.
Cornejo Chávez, Héctor, 1967, *Democracia cristiana y revolución*, Lima, CPNRM.
———, 1975, *Social-cristianismo y revolución peruana*, Lima, Centro Andino de Capacitación y Estudios.
Delgado Barreto, César, 2000, entrevista por el autor, 3 de agosto, Lima.
Espinosa Laña, Antonio, 1999, entrevista por el autor, 8 de junio, Lima.
FitzGerald, E. V. K., 1979, *The Political Economy of Peru 1956-1978: Economic Development and Restructuring of Capital*, Cambridge, Cambridge University Press.
Flores Nano, Lourdes, 1999, entrevista por el autor, 7 de junio, Lima.
———, 2000, *El Evangelio y la tierra*, 2 vols., Lima, J. L. Disegraphics.
———, 2001, entrevista por el autor, 4 de julio, Lima.
García Belaúnde, Víctor Andrés, 1988, *Los ministros de Belaúnde 1963-68, 1980-85*, Lima, Minerva.
Jurado Nacional de Elecciones (JNE), 2001, "Acta general de las elecciones generales realizadas el 8 de abril del año 2001", Lima, JNE.
Klaiber, Jeffrey L., 1977, *Religion and Revolution in Peru, 1824-1976*, Notre Dame, University of Notre Dame Press.
———, 1992, *The Catholic Church in Peru 1821-1895: A Social History*, Washington, Catholic University of America Press.
———, 1999, entrevista por el autor, 28 de mayo, Lima.
Knight, Peter T., 1975, "New Forms of Economic Organization in Peru: Towards a Workers' Self-Management", en Abraham F. Lowenthal (ed.), *The Peruvian Experiment: Continuity and Change under Military Rule*, Princeton, Princeton University Press, pp. 350-401.
Mainwaring, Scott, y Timothy R. Scully (eds.), 1995, *Building Democratic Institutions: Party Systems in Latin America*, Stanford, Stanford University Press.
Partido Popular Cristiano (PPC), 1988-1990, *Testimonio de una línea política*, 6 vols., Lima, PPC.
———, 1990, *Conciencia y palabra del Partido Popular*, 2ª ed., Lima.
———, 1991, *Partido Popular Cristiano: 25 años luchando por el bien común*, Lima, Acción y Pensamiento Democrático.
Payne, Arnold, 1968, *The Peruvian Coup d'Etat of 1962: The Overthrow of Manuel*

Prado, Washington, Institute for the Comparative Study of Political Systems.

Planas, Pedro, 1996, *Biografía del Movimiento Social Cristiano en el Perú (1926-1956): apuntes*, Lima, Konrad Adenauer Stiftung/Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima.

Portocarrero Suárez, Felipe, 1979, "La convivencia Apro-Pradista y el vacío político de la coyuntura electoral de 1962", tesis de licenciatura, Pontificia Universidad Católica del Perú.

Rey de Castro, Jaime (ed.), 1985, *Testimonio de una generación: los social cristianos*, Lima, Centro de Investigación-Universidad del Pacífico.

Schmidt, Gregory D., 1996, "Fujimori's 1990 Upset Victory in Peru: Electoral Rules, Contingencies and Adaptive Strategies", *Comparative Politics*, 28, núm. 3, abril, pp. 321-354.

———, 1998, "Presidential Usurpation or Congressional Preference? The Evolution of Executive Decree Authority in Peru", en John M. Carey y Matthew Soberg Shugart (eds.), *Executive Decree Authority*, Nueva York, Cambridge University Press, pp. 104-141.

Schuldt, Jürgen, 1980, *La derecha creativa en el Perú: PPC y ADEX*, Lima, Centro de Investigación-Universidad del Pacífico.

Tuesta Soldevilla, Fernando, 2001, *Perú político en cifras: 1821-2001*, 3ª ed., revisada y corregida, Lima, Friedrich Ebert Stiftung.

Vargas Llosa, Mario, 1995, *A Fish in the Water*, traducido al inglés por Helen Lane, Nueva York, Penguin Books.

Webb, Richard, y Graciela Fernández Baca, 1991, *Perú en números 1991*, Lima, Cuánto.

———, 1999, *Perú en números 1999*, Lima, Cuánto.

Werlich, David P., 1978, *Peru: A Short History*, Carbondale, Southern Illinois University Press.

* El autor reconoce con agradecimiento el apoyo recibido para el trabajo de campo en Perú del Center for Latino and Latin American Studies de la Northern Illinois University. Jeffrey Klaiber, S. J., y Pedro Planas compartieron conmigo sus abundantes conocimientos de la Iglesia católica y de la democracia cristiana en Perú. Kirk Hawkins contribuyó con comentarios útiles. Este capítulo está dedicado a la memoria de Ernesto Alayza Grundy, Pedro Planas y Roberto Ramírez del Villar.

[1] Citado en Partido Popular Cristiano (PPC), 1991, p. 129, que incluye entrevistas con los principales líderes del partido democratacristiano más conservador de Perú. Limitaciones de espacio impiden que proporcionemos fichas separadas de cada entrevista en la bibliografía.

[2] Citado en Planas, 1996, p. 61. Las mayúsculas aparecen en el documento original.

[3] A menos que se indique de otra manera, las cifras sobre las elecciones y la composición del Congreso están tomadas de Tuesta Soldevilla, 2001.

[4] Citado en Rey de Castro (1985, pp. 23-24), que incluye entrevistas con importantes líderes de la democracia cristiana peruana. Limitaciones de espacio impiden presentar fichas separadas para cada entrevista en la bibliografía.

[5] Antonio Espinosa Laña sostiene que los militares consultaron a Cornejo al elaborar el borrador de este nuevo modelo de organización de la prensa (Rey de Castro, 1985, pp. 237-238).

[6] Sin embargo, el término *economía social de mercado* fue sugerido por un prominente delegado aprista de la AC (Alayza Grundy, 1999b).

[7] Los católicos eran más importantes sobre todo en las filas del PSR y como miembros independientes. Muchos se unieron después del Movimiento de Afirmación Socialista (MAS), organización dentro de la IU fundada en 1989.

[8] Acerca de la elección de 1990, véase Schmidt, 1996.

[9] Para las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo durante el gobierno de Fujimori, véase Schmidt (1998).

[10] El Frente Nacional de Trabajadores y Campesinos, grupo basado en Puno y en el sur, es dirigido por los hermanos Cáceres Velásquez. Se separó del PDC en 1962.

[11] Los otros partidos en la UN eran Renovación, de Rafael Rey, Convergencia Democrática, de José Barba Caballero, y Solidaridad Nacional, de Luis Castañeda Lossio.

[12] Las videocintas también implicaron a Luis Bedoya de Vivanco, del PPC, hijo del fundador del partido y alcalde del distrito de Miraflores de Lima, y a Alex Kouri, un antiguo miembro del PPC y alcalde de El Callao.

XII. TRANSFORMACIÓN Y DECADENCIA DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA EN LATINOAMÉRICA*

SCOTT MAINWARING

EN ESTE capítulo se desarrollan tres argumentos. Primero, sostengo que, en el transcurso del tiempo, los partidos democratacristianos en Latinoamérica han tendido a volverse menos idealistas y programáticos y a convertirse en partidos más pragmáticos que procuran atraer los votos de todo tipo de personas (véanse los capítulos de Paul Sigmund e Ignacio Walker sobre este tema). Esta transformación no fue lineal ni uniforme; ocurrió más pronto en algunos países que en otros, y con mayor intensidad en algunos partidos que en otros, y todos los partidos democratacristianos tuvieron a algunos pragmáticos al principio y tienen a algunos idealistas en el presente. Varias fuerzas llevaron a los partidos democratacristianos a seguir este camino hacia un mayor pragmatismo. Cuando fueron partidos en el gobierno, las exigencias de la negociación con otros partidos promovieron el compromiso y su alejamiento de la ideología. Los políticos democratacristianos en campaña encontraron que un mensaje ideológico no encontraba resonancia en las masas de electores. Para ganar votos, los políticos también necesitaban entregar bienes y/o crear relaciones personales de lealtad. En países como El Salvador y Guatemala, donde los regímenes políticos eran excluyentes y autoritarios, los democratacristianos se vieron en la necesidad de asegurar a los oligarcas en el gobierno que ellos no presentaban amenazas radicales. Sin esa seguridad, los oligarcas habrían continuado gobernando por la fuerza, sin elecciones o mediante elecciones completamente viciadas por el fraude. Los democratacristianos enfrentaban decisiones poco favorables: o se hacían más pragmáticos o se marginaban.

Segundo, analizo las razones de que los democratacristianos lograran sólo un moderado éxito electoral en Latinoamérica. Sería fácil subestimar los éxitos electorales de la democracia cristiana en esta región; la democracia cristiana constituyó un partido importante en siete países latinoamericanos. Pero desde el punto de vista regional, los partidos democratacristianos no tuvieron en Latinoamérica la clase de éxito electoral que alcanzaron en Europa occidental. Argumento que estas deficiencias electorales fueron resultado ante todo de un ambiente político poco propicio, más que de errores estratégicos o políticos.

Tercero, sostengo que la democracia cristiana tiene perspectivas electorales poco favorables en Latinoamérica. En los últimos tres capítulos se analizó la declinación de partidos democratacristianos que fueron importantes en Latinoamérica. Los cuatro partidos analizados en estos tres capítulos han sufrido un colapso, y su resurrección parece poco probable. En vista de que siempre ha sido limitado el número de partidos democratacristianos que han tenido éxito en la región, el colapso de cuatro de los más importantes ha debilitado la presencia de la democracia cristiana. Además, los malos resultados del PDC chileno en la elección para el Congreso en diciembre de 2001 crean

dudas sobre el futuro del que ha sido históricamente el partido democratacristiano de más éxito en Latinoamérica. Algunos partidos democratacristianos individuales pueden continuar teniendo éxito, pero a nivel regional ya pasaron los mejores días (en términos electorales) de la democracia cristiana.

La razón no es que ocupe un espacio programático inviable, o que la secularización haya tornado inviables a los partidos democratacristianos; tampoco se debe principalmente a que estos partidos hayan cometido errores crasos. Más bien, sus malas perspectivas resultan de la confluencia de dos factores. El bajo nivel de institucionalización y el alto nivel de volatilidad que caracterizan a la mayoría de los sistemas de partidos latinoamericanos hacen que los partidos que han tenido éxito puedan caer abruptamente. Este fenómeno es cierto para todo el espectro político, en especial en la derecha y en el centro; no es un fenómeno exclusivo de los partidos de la democracia cristiana. En principio, sería posible sobre una base regional compensar la desaparición de algunos partidos democratacristianos con el nacimiento y florecimiento de otros nuevos. Aquí es donde se presenta el segundo factor: la falta de apoyo de los católicos para la creación de nuevos partidos democratacristianos. Ya pasó el periodo histórico en que los católicos se sintieron motivados a crear partidos democratacristianos. Sin un cambio profundo, y que es poco probable, en el pensamiento católico sobre las relaciones adecuadas entre la fe y la política, hay pocas probabilidades de que surjan nuevos y vibrantes partidos de esta orientación para compensar la desaparición de los antiguos partidos, cuyos votantes los han abandonado.

DEL IDEALISMO AL PRAGMATISMO: TRES DILEMAS

Los partidos democratacristianos se crearon como partidos idealistas e ideológicos. Muchos de los primeros democratacristianos tenían un poder de convicción e incluso de rectitud que provenía de su motivación religiosa al participar en política. Al reflexionar sobre los primeros partidos democratacristianos, Williams (1967, pp. 229-230) menciona “el celo mesiánico de la democracia cristiana latinoamericana y la vitalidad optimista”. Los democratacristianos estaban llenos de un espíritu moralista. Williams (1967, p. 265) captó este espíritu cuando afirmó que “Los partidos son, en conjunto, puros ideológicamente y moralmente limpios… Los democratacristianos ofrecen otra esperanza para la salvación. Todavía no se han visto obligados por las circunstancias políticas a corromper sus programas o comprometer sus objetivos”.

Compendiando esta naturaleza ideológica, los fundadores del Partido Demócrata Cristiano salvadoreño expresaron que “sería de un carácter puramente ideológico” (citado en Webre, 1979, p. 52). Uno de los primeros manifiestos (1964) de los democratacristianos panameños alardeaba de que su partido era “diferente porque no es ni tradicionalista ni personalista. Es auténtico e ideológico” (citado en Williams, 1967, p. 70). Al hacer énfasis en su naturaleza ideológica, los democratacristianos buscaban diferenciarse a sí mismos de los partidos tradicionales personalistas y clientelistas, que

parecían estar dispuestos a sacrificar sus principios para obtener el poder.

En su capítulo, Loaeza observa el desdén que manifestaban algunos líderes prominentes del Partido Acción Nacional (PAN) hacia los políticos pragmáticos, por oportunistas y ambiciosos de poder. Sólo después de obtener victorias electorales en los años ochenta, adoptó el PAN una línea decisivamente más pragmática, concentrada en defender y ganar las elecciones (Chand, 2001, cap. 3). En las primeras décadas, el PAN ocasionalmente debatió si se abstenía o participaba en las elecciones (Loaeza, 1999, pp. 170-180); una fracción temía que la participación en elecciones fraudulentas desfigurara al partido. La posición abstencionista prevaleció en 1976, cuando en medio de un grave conflicto interno el partido no pudo decidirse acerca de su candidato. Uno de los dos principales fundadores, Efraín González Luna, sostenía que el partido debía ser "una institución de principios que defienda sus doctrinas sin verse mezclada en asuntos electorales" (Loaeza, 1999, p. 174). En su capítulo de este libro, Crisp, Levine y Molina también subrayan la naturaleza ideológica del Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI) durante sus primeros años.

Desde la década de 1930 y hasta los sesenta, los líderes cristianos de Latinoamérica escribieron muchos libros expresando su entusiasmo por las posiciones ideológicas de sus partidos (por ejemplo, Caldera, 1986). Este fervor ideológico contrasta con lo que se podía observar en la mayoría de los partidos latinoamericanos, con excepción de los de izquierda. Los democratacristianos se presentaban no como políticos pragmáticos orientados a sus propias carreras, sino como personas comprometidas con la promoción del bien público mediante el alcance de objetivos programáticos e ideológicos. Se enorgullecían de ser diferentes de los partidos personalistas y populistas que tanto abundaban en Latinoamérica.

El compromiso con la acción política basada en principios llevó a los democratacristianos chilenos en la década de 1960 a desconfiar de las alianzas políticas, por considerar que inevitablemente implicaban compromisos que no eran congruentes con los ideales de su partido. Scully (1992) y Valenzuela (1978) han observado que aunque el Partido Demócrata Cristiano (PDC) chileno compitió por votos en el mismo espacio programático que el centrista Partido Radical, el PDC era más ideológico y estaba menos dispuesto a participar en alianzas electorales o de gobierno con otros partidos competidores. Aunque mostraba disposición a participar en negociaciones acompañadas de concesiones recíprocas, las cuales eran un elemento nuclear de la política democrática en Chile, el PDC estaba menos dispuesto a ser parte de negociaciones que comprometieran sus bases programáticas que la mayoría de los partidos que habían ocupado antes el gobierno. De hecho, Scully (1992, p. 11) señaló al PDC chileno como ejemplo sobresaliente de un partido *programático* de centro, caracterizado por arraigados principios programáticos. Contrastó a los partidos *programáticos* del centro con los partidos de *posición* centrista, que son menos ideológicos, más pragmáticos y más dispuestos a entrar en acuerdos.

La abrumadora victoria de Eduardo Frei por un gran margen en Chile en la elección presidencial de 1964 hizo que muchos democratacristianos creyeran que podían gobernar

sin el acuerdo y la negociación que habían caracterizado a la política chilena hasta entonces. Adoptaron la estrategia de seguir *un camino propio*, lo que significaba gobernar sin socios formales en una coalición. Según algunas interpretaciones (Scully, 1992; Valenzuela, 1978), esta estrategia contribuyó a la rigidez y polarización del sistema de partidos y fue un factor en la ruptura de la democracia en 1973. Los democratacristianos estaban, sin embargo, dispuestos a participar en las negociaciones normales de la política democrática cuando necesitaban apoyo para proyectos legislativos, y también continuaron con la práctica chilena de favorecer a los políticos del partido en el poder al asignar los recursos públicos.

Con el paso del tiempo, los partidos democratacristianos que tuvieron éxito electoral se hicieron más pragmáticos y menos ideológicos e idealistas. Esta progresión del idealismo al pragmatismo no fue lineal ni uniforme; los idealistas y los pragmáticos siempre han coexistido y competido dentro de los partidos democratacristianos. No obstante, es clara la tendencia general hacia un mayor pragmatismo, como argumenta en su capítulo Paul Sigmund. Tres distintos dilemas característicamente empujaron a los partidos hacia una dirección más pragmática: el de gobernar, el de ganar votos y, en los sistemas políticos oligárquicos, el de esforzarse por convencer a la derecha para que compitiera. Ninguno de estos dilemas es exclusivo de los partidos democratacristianos. El primero afecta virtualmente a todos los partidos en el gobierno; el segundo afecta a todos los partidos que están profundamente preocupados por ganar las elecciones, en particular en contextos en los que el votante medio no es especialmente programático o ideológico; el tercero afecta a los partidos que actúan en el contexto de poderosas fuerzas autoritarias conservadoras.

En los países en que los democratacristianos llegaron a ser el partido gobernante, el idealismo cedió su lugar a los imperativos a los que los partidos en el gobierno se enfrentan inevitablemente en la política democrática. Al llegar al poder o ajustarse a las exigencias de la política electoral, por lo general se hicieron menos doctrinarios e ideológicos (Lynch, 1991, pp. 109-128). Por ejemplo, a pesar de su creación como un partido decididamente opuesto a la izquierdista Acción Democrática (AD) en el periodo 1946-1948, durante el restablecimiento de la democracia en Venezuela en 1958, el COPEI estableció un pacto con AD (Levine, 1973). En las siguientes décadas, las diferencias programáticas entre AD y el COPEI se hicieron menores (Coppedge, 2000; Crisp *et al.*, en este libro). Y el COPEI se transformó en un ejemplo característico de los partidos cuyo interés supremo era ganar las elecciones. Su deseo de entrar en compromisos y su pragmatismo se hicieron notorios. En un libro de 1985, y por lo tanto mucho antes de la desaparición del partido, Ricardo Combellas, activista del COPEI y académico, observó críticamente el

> exagerado pragmatismo del partido, una consecuencia del objetivo básico del éxito electoral […] la lucha por posiciones e influencia en el partido y el gobierno […] ha prevalecido por encima de los temas ideológicos […] El liderazgo ha reconocido el creciente pragmatismo del partido. Conviene en que superar la “anemia ideológica” es el desafío más difícil que enfrenta hoy en día el partido (Combellas Lares, 1985, pp. 69-70).

Después de la experiencia del gobierno militar (1973-1990), los democratacristianos chilenos se volvieron más flexibles. Cuando los democrata-cristianos condujeron un gobierno de coalición con varios partidos de 1990 a 2000, a pesar de victorias abrumadoras de Patricio Aylwin en 1989 y de Eduardo Frei en 1993, tuvieron un papel clave para lograr un acuerdo en el centro del panorama político. Su cambio de posición fue sintomático de mayores cambios hacia el pragmatismo que ha caracterizado a la democracia cristiana en la región. (En realidad, la tendencia al pragmatismo ha sido una característica de la mayoría de los partidos de centro y de centro izquierda en la era de las políticas económicas más orientadas al mercado.)

Como lo indican Williams y Seri en su capítulo, los intercambios entre la acción política basada en principios y las exigencias del gobernar fueron importantes en El Salvador y Guatemala en los años ochenta. Después de varias décadas de ser excluidos del poder por el fraude electoral y la represión, en los años ochenta los democratacristianos de ambos países aceptaron los compromisos necesarios para acceder al Poder Ejecutivo. Aunque existe la tentación en retrospectiva de criticar esta decisión como motivada por un vil oportunismo, la realidad era más compleja. Por muy moderadas que fueran las propuestas de los democratacristianos en un contexto de "despotismo reaccionario" (Baloyra, 1983), el reformismo moderado atacaba al orden establecido. Los oligarcas reaccionarios y sus aliados militares temían —probablemente con razón— que unas elecciones abiertas facilitaran el camino a cambios profundos. En sus esfuerzos para que se les permitiera competir, los democratacristianos hicieron muchas concesiones.

En ambos países estos compromisos demostraron en última instancia ser indeseables. Los presidentes democratacristianos tuvieron que tolerar situaciones en que las fuerzas armadas y los escuadrones de la muerte continuaron asesinando y torturando a miles de personas, y en las que la fuerza bruta de las armas con frecuencia violaba las decisiones que tomaban los funcionarios elegidos. Para asegurar la lealtad de los militares, el presidente Duarte (1984-1989) de El Salvador firmó un acuerdo secreto que les garantizaba su autonomía institucional, dándole seguridad a las fuerzas armadas de que no quedarían bajo dominio civil. El presidente Cerezo de Guatemala (1985-1990) en una ocasión dijo que cuando subió al cargo los militares sólo le permitieron ejercer 30% de sus poderes constitucionales.

No fueron sólo las exigencias del gobernar las que llevaron al compromiso y al pragmatismo. En el caso de los partidos de la democracia cristiana que daban preferencia al éxito electoral, la política electoral los empujó en esa dirección. Los primeros activistas democratacristianos eran personas de clase media bien educadas; estaban inspiradas por el filósofo y teólogo francés Jacques Maritain (1882-1973) y por la doctrina social de la Iglesia. En sus formulaciones más filosóficas y abstractas, la ideología democrata-cristiana arraigó entre los sectores más populares de Latinoamérica. Los democratacristianos necesitaron adaptar su ideología para atraer votantes en una región en que las masas no estaban interesadas en temas eruditos teológicos y filosóficos. A medida que los partidos de la democracia cristiana buscaban ampliar su base popular, el énfasis

de los primeros años en la doctrina y en la ideología cedió su lugar a un mayor pragmatismo en la mayoría de los países. Se convirtieron en organizaciones que procuraban obtener el voto de todo tipo de personas (Kirchheimer, 1966).

Aunque en sus primeros días desdeñaron el populismo y el clientelismo, los partidos democratacristianos a veces no pudieron atraer a las masas en la misma medida que hacían los partidos populistas y/o clientelistas. En su capítulo en este libro, Schmidt en forma reveladora cita una entrevista de 1999 con un democratacristiano peruano, Ernesto Alayza Grundy, quien reconoció que "nunca hemos sabido hablarle al pueblo". En una región en que la pobreza es generalizada, es imposible ser un partido que triunfó en las elecciones sin saber cómo "hablarle al pueblo". En la mayoría de los países, los democratacristianos acabaron por darle prioridad a la obtención de votos por encima de la defensa de los principios abstractos basados en la doctrina católica, que tenían poca resonancia popular. Ganar las simpatías populares en una región con muchos votantes pobres no educados requería prestar atención a los estilos de la campaña. La mayoría de los votantes latinoamericanos no son particularmente programáticos o ideológicos (Silveira, 1988).[1] El estilo personal del candidato y la presencia de los medios de comunicación eran importantes cuando se trataba de puestos ejecutivos. En este contexto, hacer campaña sobre la base de complejos llamamientos programáticos o ideológicos no siempre produce necesariamente votos. La lógica de triunfar en las elecciones puede entrar en conflicto con la lógica de presentar un mensaje programático. De esto depende el éxito en algunos países de los políticos populistas, que hacen campaña sobre bases más personales que programáticas.

Los partidos democratacristianos que han tenido éxito electoral en Latinoamérica finalmente le dieron prioridad a la obtención de votos por encima de la claridad y congruencia ideológica y programática. A principios de los años noventa, los partidos guatemalteco, salvadoreño y venezolano se ganaron una reputación de pragmáticos, cuando no de maquinarias electorales abiertamente oportunistas. La misma suerte tuvieron los democrata-cristianos chilenos a principios del nuevo siglo. Las únicas excepciones a esta generalización fueron los partidos relativamente más pequeños. El PAN mexicano a veces dio prioridad a un mensaje programático por encima del pragmatismo en las décadas entre 1939 y los ochenta, pero en parte esto se debió a que estaba claro que no se le permitiría ganar elecciones. Cuando el éxito electoral se presentó a finales de la década de 1980, el PAN tendió a hacerse más pragmático y menos programático (Chand, 2001; Palma, 2003). Según Schmidt (en este libro), los democratacristianos peruanos también continuaron rechazando el populismo y el clientelismo, posiblemente a costa de una mayor presencia electoral. Los pequeños partidos democratacristianos izquierdistas de Argentina, Perú y Uruguay a finales de los años sesenta y de los setenta aparentemente también valoraban las posiciones ideológicas y programáticas, incluso a costa de limitar su popularidad electoral.

En los países con arraigadas tradiciones autoritarias, el esfuerzo por asegurar elecciones relativamente libres y justas presentó un tercer tipo de tratos, entre concesiones programáticas a regímenes indeseables o la marginación y persecución

políticas. En El Salvador y Guatemala sintieron la necesidad de asegurar al establecimiento oligárquico/militar gobernante que ellos no llevarían a cabo cambios radicales si ganaban las elecciones. Sin esa seguridad, los regímenes despóticos reaccionarios, como los llamó Baloyra (1983), no habrían permitido unas elecciones libres y justas. Sin elecciones, los democratacristianos no tenían ninguna posibilidad de llegar al poder y ninguna posibilidad de efectuar cambios sociales y políticos. La mayoría aceptó la amarga realidad de que parecía necesario hacer algunas concesiones para tranquilizar a la élite reaccionaria. Permitieron que se postergaran los principios con el fin de fortalecer la oportunidad de que se realizaran elecciones y se respetaran sus resultados. Ese compromiso con el orden establecido implicaba un creciente pragmatismo.

Otro ejemplo de las tensiones entre el idealismo y el pragmatismo en un ambiente autoritario se presentó en México. El PAN pudo parcialmente evitar la necesidad de comprometer sus principios porque acceder al poder del Estado nunca fue una posibilidad en la plena hegemonía del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Incluso en este contexto, que era más favorable al mantenimiento de la "pureza" ideológica que los casos en que los democratacristianos aspiraban a gobernar o en realidad llegaron al gobierno, el partido se enfrentó continuamente a un dilema. ¿Debía participar en las elecciones, arriesgándose así a fortalecer la legitimidad del PRI al proporcionarle una fuente de legitimidad electoral? ¿O debía boicotear las elecciones para así quizás resaltar más efectivamente la naturaleza autoritaria del régimen político, aunque de este modo a la vez estaría cerrando cualquier posibilidad de avances electorales? En la década de 1980 triunfó una facción pragmática, orientada a las elecciones (Chand, 2001; Loaeza, en este libro).

En resumen, las exigencias de gobernar, de competir en elecciones en una región en que los electores no son particularmente programáticos o ideológicos, y (en El Salvador y Guatemala) de esforzarse por obtener el derecho de competir en elecciones limpias, llevó a los partidos democrata-cristianos a posiciones menos ideológicas y más pragmáticas. Habiendo surgido con un espíritu de principios ideológicos, los partidos democrata-cristianos de Venezuela, El Salvador y Guatemala se hicieron notorios por su corrupción. En Venezuela, el COPEI fue un pilar del sistema de partidos que se desplomó en los noventa. Una persona ajena al sistema político, Hugo Chávez (1998-), caracterizó a los democratacristianos como parte de una masa no diferenciada y sin principios de integrantes de círculos políticos internos y cerrados. La opinión popular compartió la impresión de que los democratacristianos no ofrecían respuestas para el futuro. En un significativo caso de pragmatismo, si no es que de abierto oportunismo político, el Partido Démocrata Cristão (PDC) brasileño se disolvió al unirse a un partido conservador más grande en 1993. En Chile, a finales de los noventa, el PDC, que en los sesenta a veces se basó rígidamente en principios, adquirió notoriedad por su indiferencia hacia ellos.

Estas observaciones no pretenden ser una jeremiada por la caída moral de la democracia cristiana en Latinoamérica. Algunas concesiones al pragmatismo eran

inevitables si se quería que la democracia cristiana ayudara a conformar el futuro de Latinoamérica. A menos que un partido obtenga una mayoría decisiva, gobernar implica negociar y comprometerse. Para los partidos que aspiran a ganar elecciones, la política de partidos no es por lo común un ámbito de principios rígidos. Pero como se indica agudamente en el capítulo de Ignacio Walker en este libro, la transformación de partidos sólidamente basados en principios y a veces rígidos en partidos pragmáticos no carece de riesgos ni de costos. Si en la década de 1960 los partidos democratacristianos enfrentaron los riesgos asociados con la rigidez, en las décadas recientes se enfrentaron a otro problema: ¿Qué es lo distintivo de la democracia cristiana en una época de mayor pragmatismo? ¿Se ha convertido el partido en uno de tantos entre los muchos que compiten por los votos? En gran parte de la región, la democracia cristiana apenas puede reconocerse si se buscan las aspiraciones idealistas, a menudo ingenuas, que se expresaron en el momento de la formación del partido (véase también el capítulo de Sigmund, en este libro).

Junto con un creciente pragmatismo llegó un creciente secularismo. Al participar en la política de partidos, católicos que tenían convicciones religiosas muy profundas enfrentaron los mismos dilemas y la misma necesidad de comprometerse que personas de otras convicciones políticas. Crear y mantener una organización, dirigir y tratar de ganar campañas electorales, gobernar y legislar tienen una dinámica específica en el mundo político. Los partidos democratacristianos necesitaban atraer a todos los votantes que compartían su mensaje político, no sólo a la minoría que regularmente iba a misa y compartía la base religiosa para la acción política. A medida que los partidos democratacristianos enfrentaban estos dilemas, hicieron concesiones a la realidad política. Se convirtieron en partidos más seculares, en forma muy parecida a lo que había ocurrido con los partidos democratacristianos de la Europa occidental (Kalyvas, 1996).

EXPLICANDO EL MODESTO ÉXITO ELECTORAL DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA EN LATINOAMÉRICA

Aunque los partidos democratacristianos se han atribuido algunos éxitos electorales importantes en Latinoamérica, con la única excepción del PDC chileno, han tenido menos éxito que sus contrapartes en Austria, Bélgica, Italia (hasta 1993), Holanda y la Alemania Occidental. En su excelente análisis de la democracia cristiana en Europa occidental, Kalyvas (1996, p. 2) hizo el siguiente análisis: “La democracia cristiana es considerada justamente el movimiento político de mayor éxito en la Europa occidental desde 1945”. No es posible decir lo mismo para la democracia cristiana en Latinoamérica a menos que inmediatamente se haga la advertencia de que ningún movimiento internacional de algún partido ha logrado un gran éxito en la región. La democracia cristiana ha obtenido importantes triunfos electorales en Latinoamérica; pero sólo en Chile, Costa Rica y Venezuela ha sido capaz el partido de obtener la presidencia durante más de una década.

¿Qué explica el modesto éxito de la democracia cristiana en Latinoamérica? En

principio, hay dos categorías de respuestas a esta pregunta: una puede centrarse en las estrategias, prácticas y políticas internas de los partidos (una explicación "interna") y otra en las condiciones ambientales que enfrentaron (una explicación ambiental o externa). Lynch (1993) afirma que el creciente pragmatismo fue la causa de la declinación electoral de la democracia cristiana. Ésta es la explicación interna esencial, en última instancia, del fracaso de los partidos. En principio, las causas internas pueden ayudar a explicar el éxito o el fracaso de un partido, pero su explicación particular no basta, porque los partidos en el gobierno en todas las democracias enfrentan la necesidad de compromiso y de pragmatismo. Esta necesidad es mayor si el partido no tiene una mayoría o si las fuerzas armadas no están claramente bajo el control civil.

La explicación primaria del limitado éxito de los partidos democrata-cristianos en Latinoamérica en general, en comparación con el gran éxito que han tenido en la Europa occidental en conjunto, ha sido externa. La mayoría de los países latinoamericanos tuvieron regímenes autoritarios la mayor parte del tiempo hasta la década de 1980, cuando había disminuido el entusiasmo por crear nuevos partidos democratacristianos. En Latinoamérica, las décadas del entusiasmo por crear partidos democratacristianos fueron las que van de 1930 a los años sesenta. Todos los países de la región, con muy pocas excepciones, pasaron por periodos de duro autoritarismo durante esas décadas. Los partidos democratacristianos establecidos antes de la instauración de gobiernos autoritarios pudieron, como ocurrió en Chile, sobrevivir a las dictaduras. Pero los partidos democratacristianos, y la mayoría de los otros, que se crearon durante las dictaduras, rara vez establecieron organizaciones fuertes y raíces profundas en la sociedad. Sin esta antigüedad, eran más proclives a la desaparición electoral.

Tres clases de testimonios apoyan la opinión de que esas limitaciones externas son las principales responsables del modesto éxito electoral de la democracia cristiana en Latinoamérica. Primero, en sistemas políticos más abiertos y menos represivos los partidos tuvieron más capacidad de establecerse y más posibilidades de florecer electoralmente. En el periodo entre 1945 y 1978, cinco países latinoamericanos —Chile, Colombia, Costa Rica, Uruguay y Venezuela— tuvieron prolongados periodos de gobiernos democráticos.[2] Los partidos democratacristianos prosperaron en dos —Chile y Venezuela— de estos cinco países, y en los años ochenta lo mismo sucedió en Costa Rica. Hasta 1990, éstos eran los partidos democratacristianos de más éxito en la región. Donde el ambiente político era menos hostil, le fue mejor a la democracia cristiana. Un factor ambiental —que los países pasaran por prolongados periodos de gobierno democrático durante las décadas de entusiasmo por crear partidos democratacristianos— fue el buen elemento donde florecieron. El PAN prosperó electoralmente sólo cuando el escenario político se volvió más competitivo y el régimen político se tornó más liberal.

Segundo, un estudio de los partidos democratacristianos que funcionaban bajo regímenes represivos resalta lo difícil que les fue establecerse en esas condiciones. Si los democratacristianos criticaban agresivamente a los líderes autoritarios, o se movilizaban contra el régimen, se arriesgaban a ser encarcelados, enviados al exilio o incluso a ser asesinados. La dificultad de crear partidos sólidos bajo un gobierno autoritario no sólo

afectaba a la democracia cristiana; también era algo común para los partidos de toda clase de ideologías.

Los partidos democratacristianos de El Salvador y Guatemala son un ejemplo patético de esta situación. Durante los años sesenta estos dos partidos lucharon por establecerse. Cuando se fortalecieron lo suficiente para amenazar al orden oligárquico que prevalecía en ambos países, los militares y los oligarcas respondieron con la represión. Elecciones fraudulentas, intimidación contra los líderes democratacristianos y el miedo prevaleciente entre la población civil constituyeron un terrible ambiente para el crecimiento de estos nuevos partidos. En los ochenta, los democratacristianos se encontraron en medio de un violento conflicto entre los movimientos revolucionarios y la oligarquía recalcitrante. Si hacían demasiadas concesiones a la oligarquía y a las fuerzas armadas, perdían credibilidad como fuerza reformista. Cuando trataron de seguir su propio curso y llevar a cabo algunas reformas, los militares y los escuadrones de la muerte socavaron sus políticas. En estas circunstancias, los partidos democratacristianos estaban virtualmente condenados al fracaso. Los factores ambientales les presentaban enormes dificultades.

Tercero, la democracia cristiana no fue la única que no pudo captar la lealtad de una gran parte de los votantes en muchos países. Partidos que se declaraban socialdemócratas, socialistas y comunistas tuvieron incluso menos éxito electoral. Excepto por partidos que estaban al servicio de los autócratas, por lo general era difícil para los partidos políticos establecerse en ambientes políticos autoritarios.

Por supuesto, los errores también contribuyeron al derrumbe de los partidos democratacristianos. En Chile en los noventa, y en El Salvador, Guatemala y Venezuela en los ochenta y noventa, algunos sectores de los partidos democratacristianos procuraron vorazmente el mecenazgo del Estado. Pero el factor principal responsable del limitado éxito electoral de la democracia cristiana desde la década de 1940 hasta los primeros años de los ochenta fue la dificultad de establecer partidos en ambientes políticos autoritarios. Las décadas del entusiasmo por crear partidos democratacristianos fueron oscuras para la democracia en la mayor parte de Latinoamérica. Los partidos democratacristianos despertaron el entusiasmo por su oposición a los órdenes autoritarios establecidos, pero rara vez florecieron en estos espacios de autoritarismo. Posteriormente, en los años ochenta y noventa, cuando el escenario político en la mayoría de los países de Latinoamérica se tornó más liberal y competitivo, el entusiasmo por crear nuevos partidos democratacristianos ya había decaído por las razones que se analizan en la siguiente sección.

¿LA DECADENCIA DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA EN LATINOAMÉRICA?

La mayoría de los partidos democratacristianos en Latinoamérica se iniciaron con mucho optimismo con respecto a la posibilidad de aprovechar los principios católicos para transformar la vida política y las perspectivas electorales de la democracia cristiana.[3] El

tiempo ha disipado esas grandes esperanzas, y partidos que fueron importantes en El Salvador, Guatemala, Perú y Venezuela se han colapsado. La democracia cristiana ha sufrido catastróficas caídas electorales en tres de los siete países en los que en alguna ocasión fue el partido gobernante: El Salvador, Guatemala y Venezuela. El PDC salvadoreño ganó sólo 5.7% del voto para la presidencia en 1999, cayendo desde un máximo de 43.4% en 1984, y obtuvo sólo 7.2% del voto para la legislatura en el año 2000: una importante disminución desde el máximo de 52.4% en 1985. Los votos que ha logrado obtener para la legislatura y la presidencia han disminuido en cada elección desde sus mejores resultados en 1984 y 1985. El candidato presidencial de la democracia cristiana guatemalteca ganó sólo 12.9% en 1995 y el partido ni siquiera presentó un candidato en 1999. Apenas obtuvo 3.6% de los votos legislativos en 1999. El COPEI no presentó candidato a la presidencia ni en 1998 ni en 2000, y ganó sólo 12.1% del voto para el Senado y 12.3% de los votos para la Cámara de Diputados en 1998. A la democracia cristiana de Perú no le ha ido mejor; un partido importante desde 1978 hasta 1990 casi se ha extinguido, aunque algunos individuos con antecedentes democratacristianos continúan como figuras importantes en la política peruana. Después de la renuncia forzada del presidente Mahuad en 2000 y de la renuncia del líder más importante del partido, Osvaldo Hurtado, en septiembre de 2001, el futuro de la Democracia Popular (DP) ecuatoriana es inestable. La DP ganó sólo cuatro de 100 escaños en el Congreso en el año 2002.

Después de obtener importantes triunfos electorales en varias de las primeras elecciones después de la dictadura de Pinochet, incluyendo victorias abrumadoras en las elecciones presidenciales de 1989 y 1993, la democracia cristiana sufrió reveses en las elecciones municipales de 1996, en las elecciones primarias de 1997 y en la general de 1999, y especialmente en las elecciones legislativas de 2001 en Chile. En sus capítulos sobre Chile en este libro, tanto Huneeus como Walker destacan la erosión electoral de años recientes. Para finales de los noventa, México y Costa Rica eran los únicos casos con curvas electorales en ascenso. El PAN registró un importante triunfo al ganar la elección de 2000 (véase el capítulo de Magaloni y Moreno). Por primera vez, el PUSC ganó elecciones presidenciales sucesivas en 1998 y 2002.

A pesar de las excepciones de México y Costa Rica, la tendencia es clara. Hoy en día, los partidos democratacristianos son contendientes principales en menos países que en la década de los ochenta. A finales de esa década, la democracia cristiana era un partido importante en El Salvador, Chile, Costa Rica, Guatemala, México, Perú y Venezuela. Actualmente, sólo se puede afirmar que tiene esa posición en Costa Rica, México y quizás Chile. En vista de que más países latinoamericanos que en el pasado tienen actualmente elecciones competitivas y razonablemente justas para la presidencia, han aumentado las oportunidades para ganar tales elecciones. Sobre una base regional, aunque no en todo país, la competitividad electoral de la democracia cristiana ha disminuido.

Estas observaciones sugieren dos preguntas. Primera: ¿por qué cayeron varios de los partidos democratacristianos importantes en Latinoamérica? Segunda, ¿cuáles son las

perspectivas futuras de la democracia cristiana en la región?

La historia país por país de la caída de la democracia cristiana es muy variada; no hay nada que se parezca a una pauta modal. Se analiza con más detalle del que es posible aquí en los capítulos de Crisp *et al*., Williams y Seri, y Schmidt. Las pautas del desplome fueron especialmente distintas si se compara a El Salvador y Guatemala, por una parte, y a Perú y Venezuela, por la otra.

En El Salvador y Guatemala, los democratacristianos se vieron afectados y atacados al encontrarse entre la izquierda revolucionaria y una derecha autoritaria. Ni siquiera cuando gobernaron El Salvador y Guatemala los presidentes democratacristianos estuvieron en condiciones de controlar la agenda; los militares y los escuadrones de la muerte de la derecha controlaron los principales espacios de la política. Los democratacristianos prometieron paz, pero no cumplieron, quizás no tanto por sus propias fallas sino porque ni la derecha ni la izquierda aceptarían la paz en los términos propuestos por el centro. Este espacio centrista estaba pletórico de trampas electorales, en el marco de violentas guerras civiles. A los democratacristianos se les castigó en las elecciones por no haber cumplido su promesa de paz, así como por presidir unas economías en descenso y por la corrupción. En última instancia, en el contexto de estas confrontaciones muy polarizadas, el centro fue víctima de las fuerzas centrífugas de la izquierda y la derecha.[4] La crisis de la DP en el Ecuador también se debió en parte a un mal gobierno de la DP (1998-2000). Al igual que en el caso de El Salvador y Guatemala, en Chile la caída electoral del PDC chileno empezó cuando era el partido en el gobierno.

Si bien en El Salvador y Guatemala y quizás en Ecuador la caída electoral de los partidos democratacristianos puede atribuirse a sus fallas en el gobierno, la misma explicación es menos creíble para los partidos chileno, venezolano y peruano. En marcado contraste con la situación en El Salvador y Guatemala, la administración de Eduardo Frei (1994-2000) del PDC consiguió tasas de crecimiento razonablemente altas (en especial en vista de las difíciles circunstancias mundiales) y estabilidad económica. La desintegración electoral del COPEI empezó en 1993 y fue ocasionada principalmente por un grave conflicto interno que llevó a que el fundador del partido, Rafael Caldera, decidiera abandonar éste y se lanzara para presidente bajo otro membrete, y por el creciente descontento con el régimen que siguió a 1958. El COPEI no había gobernado desde 1979-1984, y aunque su desempeño social y económico durante esos cinco años estuvo lejos de ser estelar, obtuvo resultados razonablemente buenos en las elecciones de 1983, y en 1988 disfrutó de la elección más exitosa jamás tenida (como porcentaje del voto) para la presidencia, el Senado y la Cámara de Diputados. De manera similar, la caída electoral del Partido Popular Cristiano (PPC) de Perú tuvo poco que ver con su desempeño en el gobierno, a pesar de que le dio su apoyo al ineficaz gobierno de Fernando Belaúnde (1980-1985). De hecho, al PPC le fue ligeramente mejor en las elecciones de 1985 que en las de 1980.

En Venezuela y Perú, los partidos democratacristianos se derrumbaron cuando todos los partidos tradicionales se vieron bajo presión por no poder revertir un prolongado proceso de caída económica y descontento político. La crisis del COPEI y del PPC fue

parte de una crisis más general de los regímenes políticos y de los sistemas de partido. Tanto el COPEI como Acción Democrática (AD), el otro partido tradicional que junto con el COPEI dominó el sistema de partidos desde 1968 hasta 1988, perdieron rápidamente su apoyo electoral en los años noventa (véase Crisp *et al.*, en este libro). La política partidista tradicional se atrofió. La caída del PPC peruano ocurrió en forma semejante a la del COPEI en el sentido de que todo el anterior sistema de partidos se desplomó (Lynch, 1999; Tanaka, 1998).

A pesar de estas importantes diferencias en el desplome de los partidos de países en que presidentes democratacristianos presidieron gobiernos que defraudaron las expectativas (El Salvador y Guatemala, y quizás Ecuador) y los casos en que sus fracasos en el gobierno tuvieron poco que ver con la declinación del partido (Perú y Venezuela), en todos estos casos hubo una importante semejanza (excepto en Chile, si el PDC chileno no logra recuperar su anterior fuerza electoral). En todos estos casos, el colapso de la democracia cristiana estuvo asociado no sólo con problemas de competencia electoral, sino también con fracasos en el gobierno. Si hacemos referencia al léxico utilizado en el capítulo I, resulta esencial analizar los juegos de régimen para entender la caída de la democracia cristiana.

Aunque los sociólogos por lo general son lo bastante precavidos para evitar predicciones sobre las futuras fortunas electorales de los partidos, es dudoso que la democracia cristiana experimente una resurgencia en gran escala en Latinoamérica (y probablemente en otras partes). El limitado futuro electoral de la democracia cristiana en Latinoamérica se debe a una combinación de dos procesos que en su mayor parte no están relacionados: *1)* el desplome de varios antiguos partidos democratacristianos y *2)* el hecho de que no se están creando nuevos partidos con esa filiación. La mortalidad de algunos partidos, aunada a la ausencia de nuevos nacimientos, genera una población cada vez menor de organizaciones democrata-cristianas.

Antes de desarrollar con más detalle este argumento, vale la pena observar que implica subordinar por lo menos tres posibles explicaciones de la declinación de la democracia cristiana. Primero, esta declinación no es producto de que la democracia cristiana ocupe un espacio programático no viable o de los efectos intrínsecos del movimiento. La mayoría de los partidos democratacristianos en Latinoamérica ocuparon una posición de centro o de centro-derecha. Esas posiciones siguen siendo tan sustentables hoy en día como lo fueron en los sesenta y en los setenta, cuando gran parte de la región estaba dividida por una profunda polarización ideológica. Los partidos del centro o del centro-derecha están prosperando en muchos países.

La declinación de la democracia cristiana tampoco es fundamentalmente producto de la secularización. Tanto si las sociedades latinoamericanas se están volviendo más seculares como si no, los partidos democratacristianos pudieron adaptarse a la secularización. Atenuaron su celo misionero inicial y siguieron la lógica del mercado electoral, tal como lo hicieron otros partidos (Lynch, 1993).

Tercero, tampoco ocurrió, contrariamente a lo que argumenta Lynch, que la democracia cristiana declinara porque no fue fiel a su misión inicial. Lynch (1993, p. X)

escribió: "La democracia cristiana ha fallado en el intento de desarrollar su potencial porque ha olvidado sus raíces ideológicas. Esto ha hecho que los partidos democratacristianos se orienten impredeciblemente a la izquierda o a la derecha, intenten imitar a sus rivales, y no presenten una alternativa coherente a ellos". Una falla de este argumento es que da prioridad a la esencia: supone que hay una verdadera interpretación de la ideología democratacristiana; de otra manera no sería posible postular que se ha desviado de sus raíces ideológicas. Más importante es que el argumento descuida el hecho de que algunos partidos democratacristianos muy pragmáticos han tenido éxito electoral durante largos periodos: la democracia cristiana italiana de los años cuarenta hasta 1993 es el ejemplo por excelencia.

La dificultad central a la que se enfrenta la democracia cristiana en esta base regional es más bien la poca probabilidad de que surjan nuevos partidos dinámicos de esta inspiración y que en una región en que la mayoría de los países se caracterizan por una considerable volubilidad electoral, algunos partidos antiguos, incluyendo ciertas organizaciones democratacristianas, son relegados al basurero de la historia electoral. Otros partidos democratacristianos se esfuman, al igual que partidos de distintas convicciones, y no aparecen nuevos y vibrantes partidos democratacristianos en el horizonte.

Casi no se ha creado ningún partido democratacristiano en Latinoamérica desde los años sesenta. La única excepción es el Partido de Unidad Social Cristiana de Costa Rica (PUSC), creado en 1983. Pero el PUSC es una excepción muy parcial. Tiene una identidad muy débil como partido democratacristiano, y fue creado por la fusión de otros partidos anteriores, uno de los cuales (el PDC) era democratacristiano. Además, el PUSC representó la continuación de una coalición anterior, la Coalición Unidad. Así, el PUSC no era del todo un partido nuevo ni uno profundamente democratacristiano. Su éxito electoral tiene más que ver con su papel de sucesor de la Coalición Unidad que con su afiliación a la democracia cristiana.

La falta de nuevos partidos democratacristianos en Latinoamérica no tiene como causa un mercado electoral saturado que dificulte el ingreso de nuevos partidos al mercado. La Iglesia y los líderes laicos católicos perdieron su entusiasmo por patrocinar nuevos partidos democratacristianos. Esta pérdida de entusiasmo se debió a cambios ocurridos en la Iglesia católica. Durante varias décadas, muchos líderes e intelectuales de la Iglesia consideraron que la democracia cristiana era el camino a seguir para la participación de los cristianos en la política de partidos. A finales de los años sesenta, la confianza de la Iglesia en cualquier opción partidista exclusiva se estaba derrumbando.

En la década de 1960, un acontecimiento sacudió a la Iglesia latinoamericana. Reunidos en Medellín, Colombia, en 1968, los obispos latinoamericanos denunciaron las injustas estructuras sociales y pidieron unas reformas profundas. Dos años después, Gustavo Gutiérrez publicó su obra seminal, *Una teología de la liberación*, iniciando lo que se conoció como Teología de la Liberación. Ésta captó la imaginación de los jóvenes radicales que seguían dentro de la Iglesia. En toda la región, una minoría activista de católicos llegó a creer que su fe exigía un cambio social y económico radical (Bruneau,

1974; Gill, 1998; Levine, 1981, 1992; Mainwaring, 1986; Main-waring y Wilde, 1989; Smith, 1982). Para la mayoría de estos individuos, la democracia cristiana ofrecía no una "tercera vía" reformista sino más bien un compromiso inaceptable con el orden injusto que ya existía.[5] Para la mayoría de los católicos radicales, la democracia cristiana era un partido burgués excesivamente relacionado con el orden establecido. Como observa Schmidt en su capítulo, las divisiones entre los católicos radicalizados y los que siguieron fieles a la "tercera vía" produjeron un cisma que ha perdurado en la democracia cristiana en Perú. En 1967, cuando los católicos radicalizados obtuvieron el control del PDC, muchos líderes del partido se salieron para formar el Partido Popular Cristiano, cuyo linaje también procedía de la democracia cristiana.

La creciente diversidad de los puntos de vista teológicos y políticos dentro del catolicismo latinoamericano también presentó nuevos desafíos a la democracia cristiana. Se hizo cada vez más difícil invocarla como la vía cristiana para participar en política. Al reconocer la necesidad de proteger la universalidad de la Iglesia en un periodo de polarización política, el Vaticano y los obispos latinoamericanos no quisieron alentar la creación de nuevos partidos democratacristianos. ¿Cómo podía la Iglesia reconciliar su pretensión y aspiración de ser universal si sólo sancionaba una vía para participar en la política de partidos? La Iglesia ha reconocido que no puede aspirar a un monopolio partidista en la participación política. El papa Juan Pablo II hizo énfasis en que la Iglesia no debe ser identificada con ningún instrumento político partidista. Con esa posición oficial de la Iglesia, los laicos no se ven motivados a crear nuevos partidos democratacristianos. Su *raison d'etre* fue que los católicos debían participar en la política partidista de cierto carácter, pero la creciente polarización de las posiciones políticas y teológicas dentro de la Iglesia latinoamericana hizo difícil sostener este punto. En vez de disfrutar del apoyo de la Iglesia, hoy en día los esfuerzos por crear nuevos partidos democratacristianos se encontrarían con el escepticismo eclesiástico.

Durante el papado de Juan Pablo II también logró afianzarse un enérgico desafío conservador a la idea de que los católicos deberían apoyar a la democracia cristiana. Los católicos conservadores la han atacado, no por estar demasiado asociada con el orden establecido (como hicieron los católicos radicales), sino más bien —en los países donde la democracia cristiana ha sido el núcleo del centro del espectro político— por ser demasiado estatista y estar excesivamente dispuesta a dialogar con la izquierda.

Estos cambios en la posición de la Iglesia con respecto a lo deseable de apoyar a los partidos democratacristianos han tenido consecuencias más profundas para la creación de nuevos partidos que para la supervivencia de los ya existentes. El entusiasmo por crear nuevos partidos democratacristianos basados en los principios católicos pertenece al pasado. Recuérdese, tal como se expone en el capítulo II y en el de Kirk Hawkins (entre otros), que la inspiración católica fue para la democracia cristiana un ingrediente esencial en la formación de partidos. Al faltar esta inspiración, la probabilidad de que surjan nuevos partidos democratacristianos importantes es muy escasa. Además, es muy poco probable que el Vaticano dé marcha atrás en esta posición y apoye tácitamente de nuevo a la democracia cristiana o a cualquier otra expresión partidista específica de la fe

religiosa. Una Iglesia que aspira a ser universal tiene mucho que perder apoyando una opción entre muchas. La disminución del entusiasmo por crear nuevos partidos democratacristianos no afectó directamente a los que ya existían, pero redujo sus posibilidades de expansión futura.

Otro cambio ambiental que también contribuyó secundariamente a que sea poco probable la creación de nuevos partidos democratacristianos fue el final de la Guerra Fría. En los años cincuenta y principios de los sesenta, muchos democratacristianos vieron a sus partidos como antídotos a los males gemelos del socialismo revolucionario y del capitalismo reaccionario. Parte de la inspiración para apoyar a la democracia cristiana fue el deseo de efectuar un cambio pacífico y democrático en el contexto polarizado de la Guerra Fría. Al terminar ésta, desapareció el ímpetu para crear y mantener a la democracia cristiana.

En resumen, la creación de los partidos democratacristianos (pero no su supervivencia) fue producto de cierto momento en la historia. El problema para el futuro de la democracia cristiana en Latinoamérica es que ésta es una región cuyo electorado por lo general es muy voluble (Mainwaring, 1999, pp. 27-29). Éstos no son sistemas de partidos "congelados", en que los partidos ganan y retienen la lealtad de la mayoría de los votantes durante largos periodos. El mercado electoral siempre está cambiando; algunos de los antiguos partidos sufren una grave erosión electoral, lo que hace posible que nuevos contendientes importantes aparezcan en escena. Con excepción de Uruguay y la excepción parcial de Colombia, donde candidatos independientes han desempeñado un papel electoral cada vez más importante desde cerca de 1990, han surgido nuevos partidos importantes incluso en países en que los niveles de volubilidad electoral son bajos. Por ejemplo, en los noventa, el Frepaso surgió como importante nuevo partido en Argentina, y se crearon el Partido por la Democracia (PPD) y la Unión Democrática Independiente (UDI) en Chile a finales de los ochenta.

Algunos partidos que fueron importantes sufren humillantes derrotas y desaparecen del escenario político, mientras que recién llegados surgen de pronto en el escenario y captan los votos, si no los corazones, de muchos ciudadanos. La atracción de los políticos independientes ha aumentado mucho en la región, y ha hecho que no sean necesarios los membretes de los partidos y que en casos extremos incluso se hayan convertido en un lastre (Conaghan, 2000).

El descontento de los ciudadanos con los partidos se ha incrementado en la mayoría de los países latinoamericanos, y la identificación con algún partido es baja, en muchos de ellos, lo que les dificulta a los partidos retener su porcentaje de la lealtad del electorado. Los países de volatilidad electoral muy alta —Perú desde 1978, Venezuela después de 1988, Ecuador desde 1979, Bolivia desde 1982 y Brasil entre 1982 y 1994— presentan enormes desafíos para los partidos. Incluso los partidos grandes son vulnerables a pérdidas electorales cuantiosas.

En este panorama electoral, los partidos democratacristianos no son los únicos que sufren derrotas desastrosas y enfrentan la posibilidad de desaparecer. De los dos partidos tradicionales de Venezuela, el COPEI, los democratacristianos, sufrió la erosión electoral

más severa en los años noventa, pero a Acción Democrática no le fue mucho mejor. Las tres fuerzas electorales importantes de Perú a principios de los años ochenta, Acción Popular (AP), APRA e Izquierda Unida, prácticamente desaparecieron en los noventa (Lynch, 1999; Tanaka, 1998). La APRA tuvo un sorprendente regreso en 2001, pero AP e Izquierda Unida probablemente han desaparecido para siempre. En un contexto en que dos de los tres partidos más importantes se han ido, no es sorprendente que le ocurriera lo mismo al PPC.

Así, junto con la falta de entusiasmo por crear nuevos partidos democratacristianos está el hecho de que los antiguos pueden enfrentar su desaparición electoral. Si hubiera entusiasmo por crear nuevos partidos democratacristianos, los nuevos partidos podrían compensar la desaparición de los partidos que han sido castigados en las urnas. Pero en el mundo que ha seguido al Concilio Vaticano II prácticamente no existe la oferta de nuevos partidos democratacristianos. La probabilidad de nuevos partidos democratacristianos dinámicos es mucho menor que la posibilidad de su desaparición… o por lo menos de su descarte electoral. Dicho de otra manera, en los países con alta volatilidad electoral la mortalidad entre los partidos es elevada y, para la democracia cristiana, no hay nuevos partidos que remplacen a los que desaparecen. Por lo tanto, el futuro de la democracia cristiana en Latinoamérica depende de la suerte de los pocos partidos establecidos que continúan teniendo una base electoral.

Esto significa que el futuro de la democracia cristiana en la región depende de la continuación del éxito de los partidos que ya existen, en particular los de Chile, Costa Rica y México. Es poco probable que partidos que antes fueron importantes en El Salvador, Guatemala, Perú o Venezuela logren retornar de manera importante; estos partidos virtualmente han desaparecido del panorama electoral. En Ecuador y Panamá, los democratacristianos no parecen estar muy seguros. En vista de la volatilidad electoral que caracteriza a esos dos países, no sería sorprendente que desapareciera la democracia cristiana.

CONCLUSIÓN

Si la democracia cristiana está declinando, ¿por qué hemos dedicado nuestro tiempo y esfuerzo a este libro sobre ella? Hay dos razones. Primera, como lo ha demostrado cada capítulo de este libro, la democracia cristiana ha dejado una profunda huella en la política latinoamericana. Actualmente es imposible entender a Latinoamérica sin prestar atención a la democracia cristiana. Por ejemplo, la democracia cristiana está pasando por su más grave crisis en Chile, pero el PDC ha sido uno de los actores políticos más importantes del país desde principios de los sesenta. La democracia cristiana fue uno de los principales actores en la construcción de la democracia en Chile, El Salvador, Guatemala, México y Venezuela, y también ha sido una de las principales fuerzas en Costa Rica.

Puesto que los partidos democratacristianos han sido actores importantes en media docena de países en Latinoamérica, su estudio aclara ciertos puntos clave sobre los

sistemas políticos de esos países. Por ejemplo, la historia de la democracia cristiana en El Salvador y Guatemala proporciona una visión de las horribles realidades de los regímenes políticos en esos dos países hasta mediados de los ochenta y las subsiguientes transformaciones. El análisis del COPEI revela mucho sobre el desplome del sistema de partidos y la erosión de la democracia en Venezuela.

Aunque ha sido un movimiento político importante, la democracia cristiana es, a pesar de todo, poco entendida en Latinoamérica. Hemos mostrado que los partidos democratacristianos en la región son mucho más diversos de lo que se entendía antes. También hemos demostrado que estos partidos no se prestan a generalizaciones estereotipadas y fáciles.

Segundo, este libro ha tenido un propósito teórico igualmente significativo: ofrecer un análisis teórico de los objetivos y las estrategias de los partidos en contextos en que no sólo juegan la partida conocida de intentar ganar votos y escaños, sino también un juego de régimen. En estas circunstancias, los analistas no pueden entender muchas decisiones de los partidos si suponen que los objetivos son obtener el máximo de votos o de escaños. Más que ningún libro anterior, hemos llamado la atención sobre lo importante que es la combinación de los juegos electorales y los de régimen en el análisis de los objetivos y la conducta del partido. La democracia cristiana en Latinoamérica está en declive, pero los temas teóricos analizados en este libro seguirán siendo importantes. En realidad, el mundo académico apenas está empezando a prestar atención a la interacción entre los juegos electorales y los de régimen para entender los objetivos y las estrategias de los partidos.

REFERENCIAS

Baloyra Enrique, 1983, "Reactionary Despotism in El Salvador: An Impediment to Democratic Transition", en Martin Diskin (ed.), *Trouble in our Backyard: Central America and the United States in the Eighties*, Nueva York, Pantheon, pp. 101-123.

Bruneau, Thomas, 1974, *The Political Transformation of the Brazilian Catholic Church*, Cambridge, Cambridge University Press.

Caldera, Rafael, 1986, *Especificidad de la Democracia Cristiana*, San José, Costa Rica, Libro Libre.

Chand, Vikram K., 2001, *Shaping Institutions: Mexico's Political Awakening*, Notre Dame, University of Notre Dame Press.

Combellas Lares, Ricardo, 1985, *COPEI: ideología y liderazgo*, Caracas, Ariel.

Conaghan, Catherine M., "The Irrelevant Right: Alberto Fujimori and the New Politics of Pragmatic Peru", en Kevin J. Middlebrook (ed.), *Conservative Parties, the Right, and Democracy in Latin America*, Baltimore, Johns Hopkins University Press, pp. 255-284.

Coppedge, Michael, 2000, "Venezuelan Parties and the Representation of Elite Interests", en Kevin J. Middlebrook (ed.), *Conservative Parties, the Right, and*

Democracy in Latin America, Baltimore, Johns Hopkins University Press, pp. 110-136.
Downs, Anthony, 1957, *An Economic Theory of Democracy*, Nueva York, Harper and Row.
Fleet, Michael, 1985, *The Rise and Fall of Chilean Christian Democracy*, Princeton, Princeton University Press.
Gill, Anthony, 1998, *Rendering unto Cesar: The Catholic Church and the State in Latin America*, Chicago, University of Chicago Press.
Kalyvas, Stathis N., 1996, *The Rise of Christian Democracy in Europe*, Ithaca, Cornell University Press.
Kirchheimer, Otto, 1966, "The Transformation of Western European Party System", en Joseph LaPalombara y Myron Weiner (eds.), *Political Parties and Political Development*, Princeton, Princeton University Press, pp. 177-200.
Levine, Daniel H., 1973, *Conflict and Political Change in Venezuela*, Princeton, Princeton University Press.
———, 1981, *Religion and Politics in Latin America: The Catholic Church in Venezuela and Colombia*, Princeton, Princeton University Press.
———, 1992, *Popular Voices in Latin American Catholicism*, Princeton, Princeton University Press.
Loaeza, Soledad, 1999, *El Partido Acción Nacional: la larga marcha*, México, Fondo de Cultura Económica.
Lynch, Edward A., 1991, *Religion and Politics in Latin America: Liberation Theology and Christian Democracy*, Nueva York, Praeger.
———, 1993, *Latin American Christian Democratic Parties: A Political Economy*, Westport, Praeger.
Lynch, Nicolás, 1999, *Una tragedia sin héroes: la derrota de los partidos y el origen de los independientes, Perú, 1980-1992*, Lima, Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Mainwaring, Scott, 1986, *The Catholic Church and Politics in Brazil*, Stanford, Stanford University Press.
———, 1999, *Rethinking Party Systems in the Third Wave of Democratization: The Case of Brazil*, Stanford, Stanford University Press.
———, y Alexander Wilde, eds., 1989, *The Progressive Church in Latin America*, Notre Dame, University of Notre Dame Press.
Palma, Esperanza, 2003, *Partidos de oposición y democratización en México: un estudio del PAN y el PRD*, México, Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco.
Sartori, Giovanni, 1976, *Parties and Party Systems: A Framework for Analysis*, Cambridge, Cambridge University Press.
Scully, Timothy R., 1992, *Rethinking the Center: Party Politics in Nineteenth and Twentieth Century Chile*, Stanford, Stanford University Press.

Silveira, Flávio Eduardo, 1998, *A Decisão do Voto no Brasil*, Porto Alegre, EDIPUCRS.
Smith, Brian H., 1992, *The Church and Politics in Chile: Challenges to Modern Catholicism*, Princeton, Princeton University Press.
Tanaka, Martín, 1998, *Los espejismos de la democracia: el colapso del sistema de partidos en el Perú*, Lima, Instituto de Estudios Peruanos.
Valenzuela, Arturo, 1978, *The Breakdown of Democratic Regimes: Chile*, en Juan J. Linz y Alfred Stepan (eds.), *The Breakdown of Democratic Regimes*, vol. 5, Baltimore, Johns Hopkins University Press.
Webre, Stephen, 1979, *José Napoleón Duarte and the Christian Democratic Party in Salvadoran Politics, 1960-1972*, Baton Rouge, Louisiana State University.
Williams, Edward J., 1967, *Latin American Christian Democracy Parties*, Knoxville, University of Tennessee Press.

* Agradezco a Frances Hagopian, Kirk Hawkins, Robert Knight, Fabrice Lehoucq, Andrés Mejía, Ken Roberts, Timothy Scully y Philip Williams sus valiosos comentarios.

[1] Este hecho se refleja en los cuadros II.2, II.4 y II.7, en el capítulo II. Esos cuadros muestran que votantes de partidos con posiciones programáticas muy divergentes en el nivel de la élite tenían sin embargo muy pocas diferencias programáticas en el nivel popular.

[2] El caso colombiano es dudoso, en vista de las restricciones a la competencia entre 1948 y 1974 y de la violencia creciente después de los primeros años de la década de 1980. Si excluyo a Colombia de los casos de una democracia prolongada, la argumentación se fortalecería.

[3] Según Fleet (1985, p. 80), "Las expectativas eran muy altas cuando Frei subió al poder. Su 'Revolución en Libertad' parecía ser una prometedora alternativa a la revolución marxista y al *statu quo* conservador. Se proclamó que había empezado una nueva era de progreso y estabilidad en Chile y se elogió a la democracia cristiana como la impulsora del futuro de Latinoamérica". Webre (1979, p. 51) escribe que "Muchos observadores saludaron la victoria de Frei (1964) como el inicio de una nueva era en Latinoamérica, una era en que la injusticia social caería bajo el ataque del gobierno humanitario y cristiano que funcionaría en una abierta atmósfera de democracia y libertad". Lynch (1993, p. IX) escribe que las victorias de Frei en 1964 y de Rafael Caldera en Venezuela ese mismo año "parecían presagiar un importante cambio en la política latinoamericana. Dominada durante décadas por violentos enfrentamientos entre las fuerzas polarizadas de la derecha y de la izquierda, la política del continente parecía haber encontrado finalmente su centro". Como ocurre en muchos casos, no es posible generalizar el optimismo sobre las perspectivas electorales de todos los partidos democratacristianos en Latinoamérica. El PAN, que no era formalmente un partido democratacristiano en ese tiempo, se hacía pocas ilusiones sobre sus perspectivas electorales a corto plazo en las primeras décadas de su existencia.

[4] La caída de la democracia cristiana en El Salvador y Guatemala concuerda con el argumento de Sartori (1976) de que los casos de pluralismo polarizado tenderán a debilitar el centro.

[5] En Argentina, Perú y Uruguay muchos católicos radicales siguieron fieles a sus orígenes democratacristianos.

ÍNDICE ANALÍTICO

Este libro viene a llenar la ausencia de estudios que con la debida profundidad se dediquen a analizar el papel y el impacto que la democracia cristiana y los partidos democratacristianos han tenido en la configuración de la vida política de Latinoamérica. Es importante señalar que estos estudios, compilados por Scott Mainwaring y Timothy R. Scully, rehúyen las odiosas generalizaciones que este sector político de América Latina ha cargado como motes durante mucho tiempo. También nos muestran cómo la democracia cristiana en estas latitudes no se ha comportado como una masa homogénea, sino más bien ha irrumpido en el campo de la pluralidad, en ocasiones acercándose al socialismo y a la izquierda, y en otras mostrándose defensora e impulsora de la iniciativa privada. Asimismo, dichos estudios han logrado introducir la realidad de estos partidos en un escenario más allá del catolicismo, es decir, como verdaderos grupos políticos que han luchado por instaurar la democracia en sus países, contextualizando la situación de los mismos en una época en que toda Latinoamérica era objeto de regímenes opresores, algunos incluso dictaduras militares.

Índice

ÍNDICE ANALÍTICO 489